

JAVIERA ERRÁZURIZ TAGLE

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN EL TRÁNSITO DE DICTADURA A DEMOCRACIA.  
MADRID (1969-1980) Y SANTIAGO DE CHILE (1986-1997) EN PERSPECTIVA COMPARADA.

TESIS DOCTORAL

DIRECTORES

Manuel Pérez Ledesma / Alfredo Riquelme Segovia

2013



## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>MARCO TEÓRICO</b>	7
I. Transiciones a la democracia: las diferencias del caso español y chileno	7
II. Los movimientos sociales: estructura de oportunidades políticas, estrategias de acción colectiva y marcos de referencia.	12
<b>ESTADO DE LA CUESTIÓN: ESPAÑA Y CHILE EN PERSPECTIVA COMPARADA</b>	23
I. El caso español: del cambio económico a la muerte de Franco	24
II. Transición a la democracia en España	36
III. El caso chileno: neoliberalismo y movilización social	48
IV. Transición a la democracia en Chile	57
<b>ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES</b>	64
I. Movimiento Estudiantil en España	64
II. Movimiento Estudiantil en Chile	78
<b>CAP. 1 LA TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA BAJO EL FRANQUISMO</b>	85
I. La Universidad intervenida y depurada: los años 40	85
II. La década de los 50: comienza la contestación en la Universidad	91
III. Los revueltos años 60: masificación y movilización	95
IV. El Sindicato Democrático de Estudiantes: un hito de la década de los 60	100
V. La Ley General de Educación: nuevo marco legal para una Universidad movilizadora	106
VI. La Universidad en democracia	109
<b>CAP. 2 1968-1969 AÑOS DE REPRESIÓN Y RADICALIZACIÓN</b>	113
I. 1968-1969: El Estado de Excepción	113
II. Los efectos del Estado de Excepción en el ME: represión y agotamiento	124
III. Radicalización y fragmentación del ME	127
IV. La disolución del SDEUM	130
V. Las reivindicaciones del movimiento estudiantil: lucha contra la LGE, por la amnistía y las libertades	136
<b>CAP. 3 1969-1971: FLUJO Y REFLUJO TRAS EL ESTADO DE EXCEPCIÓN</b>	142
I. Curso 1969-1970: La lucha contra la Ley General de Educación	142
II. Los problemas de organización: reformismo y revolución	146

III. Curso 1970-1971: El Proceso de Burgos y la reactivación del Movimiento Estudiantil	148
IV. Las semanas álgidas del Proceso de Burgos	153
V. Las luchas del segundo cuatrimestre: Medicina, profesores encargados	158
VI. Balance de unos años dispares	168
 <b>CAP. 4 1971-1972: EL CONFLICTO EN MEDICINA. LOS ESTUDIANTES DESPIERTAN DEL LETARGO</b>	 171
I. Para entender la Ley General de Educación	172
II. La movilización comienza en Medicina	173
III. Solidaridad con Medicina: se levanta el ME	178
IV. Jornadas de lucha y nuevos intentos de organización	185
V. La lucha en contra de la LGE: de académica a social	195
VI. ¿Un asunto de lenguaje?	200
VII. Consecuencias de las movilizaciones en el Curso 72-73	202
 <b>CAP. 5 1973-1975: EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. ENTRE LA RADICALIZACIÓN Y LA MUERTE DE FRANCO</b>	 208
I. Curso 1973-1974: planteamiento de nuevos marcos de significado	208
II. El asesinato de Puig Antich, la Ley de Selectividad y el relanzamiento del Movimiento Estudiantil	215
III. Curso 74-75: Participación estudiantil y organización, un debate inacabado. El decreto provisional de participación estudiantil en la Universidad	227
IV. El Cierre de Valladolid y el aumento de la conflictividad estudiantil	235
V. La huelga de PNN: un nuevo frente en el conflicto universitario	244
 <b>CAP. 6 1975-1976: EL ME EN UN AÑO CLAVE. LOS ESTUDIANTES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA</b>	 253
I. Los últimos fusilados del franquismo y la muerte del “Caudillo”	255
II. El lenguaje de la ruptura: amnistía y libertades políticas	259
III. Las estructuras de movilización: el ME de la ruptura.	263
IV. Invierno de 1976: el comienzo de un año clave	267
V. La lucha contra el decreto de permanencia	275
VI. La recuperación del Sindicato Democrático de Estudiantes: una iniciativa fallida	279
VII. El final de un curso intenso	285
 <b>CAP. 7 1976-1977: DESGASTE Y DESMOVILIZACIÓN. EL ME PIERDE SU LUGAR EN LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA</b>	 288
I. Estructuras de Movilización: SDEU sí, pero...	291
II. Una Universidad Democrática, Científica y al servicio del Pueblo	296
III. Estatutos de Autonomía para la Universidad	302

IV. El conflicto de los PNN	306
V. Interpretaciones del desgaste del ME en el curso 76-77	311
<b>CAP. 8 1978-1980: DEL “PASOTISMO” A LA LUCHA CONTRA LA LAU. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL NUEVAMENTE EN PIE DE GUERRA</b>	315
I. Curso 77-78: “Militar en la Universidad, peor que escuchar ocho horas las palabras de Monseñor Balaguer”	315
II. Curso 78-79: Comienza la discusión en torno a la Ley de Autonomía Universitaria (LAU)	320
III. Curso 79-80: El ME se levanta en contra del Proyecto de Ley de Autonomía Universitaria	324
IV. Un fin de año difícil: ronda el fantasma de la represión	327
V. Las Coordinadoras al frente de la movilización: Enero de 1980	332
VI. La movilización decae: Febrero de 1980	340
<b>CAP. 9 MEMORIAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL ESPAÑOL: REGISTRO DE EXPERIENCIAS</b>	345
I. Cuándo y donde: cada Facultad es un mundo	349
II. Las organizaciones políticas y la masa estudiantil	352
III. Formas de participación: delegados, asambleas y RGU	355
IV. Las reivindicaciones: por qué se movilizan los estudiantes	362
V. Valoraciones del ME: experiencia e interpretación	367
<b>CAP. 10 1973-1984: LOS AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL CHILENO BAJO LA DICTADURA</b>	371
I. 1977 – 1983: la rearticulación de los estudiantes: la ACU y la FECECH	374
II. 1984: el renacer de la FECH y la relación con los partidos políticos	383
<b>CAP. 11 1985-1986: LA LUCHA CONTRA LA INTERVENCIÓN Y EL AÑO DECISIVO</b>	394
I. 1985: Construyendo marcos de significado amplios, contra la intervención y por la autonomía	394
II. El ME y el Acuerdo Nacional	402
III. 1986: El Paro Nacional Estudiantil Prolongado de Abril	405
IV. La Asamblea de la Civilidad, las jornadas de julio y el ME	413
<b>CAP. 12 1987: LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN PIE DE GUERRA CONTRA LA INTERVENCIÓN. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CONTRA FEDERICI</b>	422
I. La llegada de Federici y el Plan de Racionalización de la Universidad de Chile	424
II. Dos meses intensos	433
III. Proyección política del conflicto en la Universidad de Chile	443
IV. Lecciones para el movimiento estudiantil chileno	447

<b>CAP. 13 EL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL CHILENO EN LOS AÑOS 90: POR UNA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE UNIVERSIDAD Y DE SOCIEDAD</b>	457
I. Plebiscito 1988 y primeros años 90: la Universidad “amarrada” y la crisis del ME	457
II. La FECH, ¿para qué? Debate en torno a las estructuras de movilización	461
III. 1997: “ <i>Empresarios, magnates, banqueros / Cruje entera la Universidad</i> ”	466
IV. ¿Victoria o derrota?: balance del ciclo de movilizaciones de 1997	476
 <b>CONCLUSIONES</b>	 486
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	505



## INTRODUCCIÓN

Pese al avance de la democracia, el siglo XX estuvo jalonado por dictaduras de diversa naturaleza que se consideraron a sí mismas como una respuesta alternativa a la democrática para enfrentar los desafíos de las sociedades contemporáneas. En este sucinto contexto histórico podemos encontrar a dos regímenes autoritarios, separados por el tiempo y el espacio, pero que ofrecen interesantes elementos de análisis para hacer una comparación. Nos referimos a la dictadura del general Franco en España (1939-1975) y a la del general Pinochet en Chile (1973-1990).

Ambas dictaduras compartieron una serie de aspectos, entre ellos, el ideológico. Tanto Franco como Pinochet se declararon enemigos acérrimos del marxismo y de toda ideología extranjera que intentara perturbar el orden impuesto como nacional. También se declararon enemigos de todos aquellos que, desde dentro del país, intentaran luchar contra el régimen, llamándolos “enemigos internos”. Además, ambos generales recurrieron a un personalismo extremo, encarnando en sí mismos el poder derivado de una supuesta legitimidad de origen. Franco buscó esta legitimidad en la victoria de la guerra civil, y de ahí los títulos de “Caudillo” o “Generalísimo”, ya que, según sus seguidores, había salvado a España de caer en manos del comunismo soviético. Pinochet buscó la legitimidad de origen en una supuesta guerra civil, que nunca existió, pero que le permitió argumentar que había salvado a Chile de ser una segunda Cuba. Asimismo, desenterró el apelativo colonial de “Capitán General”, reservado a los gobernadores de las zonas de guerra del Imperio Español, dentro de las cuales se encontraba Chile.

Aparte de compartir la ideología antimarxista y de crear regímenes fuertemente personalistas, ambos generales crearon aparatos represivos sin precedentes en la historia de España y Chile. De esta manera, una vez ganada la guerra civil, la dictadura franquista persiguió a todos aquellos que hubieran tenido algún papel, por pequeño que hubiese sido, en la Segunda República, y también a quienes eran considerados marxistas, anarquistas o masones, o habían militado en los partidos de izquierdas. Las detenciones eran seguidas por juicios sumarios realizados por tribunales militares, con las consecuentes condenas de muerte o años de cárcel. En Chile también se persiguió a los miembros del gobierno de la Unidad Popular que había presidido Salvador Allende, y a todos los sindicatos como comunistas, socialistas, miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y de

cualquier partido o agrupación considerada filomarxista. Incluso se llegó a perseguir a los dirigentes demócrata cristianos, que si bien habían apoyado el golpe en un comienzo, después se transformaron en opositores al régimen.

La brutalidad de la represión, tanto en España como en Chile, logró desarticular a dos sociedades que se encontraban fuertemente movilizadas. Una vez instaladas en el poder, ambas dictaduras comenzaron a desmontar la movilización social y política, proscribiendo los partidos políticos, los sindicatos de clase y cualquier otra forma de participación en la esfera pública, cooptando todos los espacios para el nuevo régimen y obligando, por tanto, a la ciudadanía a desmovilizarse y a vivir en el silencio. Frente a la ferocidad y la violencia con la que se impusieron estas dictaduras, la resistencia se hizo muy difícil. La sociedad civil se encontraba aplastada por el peso de las restricciones impuestas por los respectivos regímenes, tales como la represión, la conculcación de libertades esenciales como el derecho de asociación y los derechos políticos, y la censura en los medios de comunicación social, entre otras. Sin embargo persistieron ciertas organizaciones desde las cuales surgirán los primeros intentos de organización y movilización en contra de dichos regímenes.

Con el paso de los años, se van a producir períodos de mayor “apertura” dentro de las dictaduras mencionadas, que permitirán una incipiente reorganización de la sociedad civil y el intento de recuperar el espacio público. Debido a que los límites de lo permitido eran puestos por los regímenes autoritarios, los espacios ganados por los movimientos de oposición pasarán por diversas fases de organización y movilización, dependiendo de las oportunidades políticas del momento. De esta manera, habrá períodos de mayor confrontación entre el régimen y los movimientos de oposición, y otros en donde estos últimos serán silenciados por la represión.

Con todo, los intentos de recuperar el espacio público por parte de los movimientos sociales nunca serán tan exitosos como para derribar al régimen contra el que luchan; pero tampoco serán acciones en el vacío. Las primeras movilizaciones sociales en ambas dictaduras sentarán precedentes importantes para las nuevas oleadas de protesta, abrirán el camino a nuevos movimientos sociales que, a su vez, presionarán al régimen hasta que éste decida reprimir, reimponer estados de excepción o de sitio y prohibir cualquier tipo de manifestación. De esta manera, las oleadas de protestas resurgirán bajo las dictaduras, con diferentes movimientos y bajo distintas formas, pero nunca quedarán silenciadas del todo.



En este contexto el objetivo de este trabajo es analizar la recuperación del espacio público en el tardofranquismo y en los últimos años de la dictadura de Pinochet, estudiar la evolución de los movimientos estudiantiles (ME) de ambos países y establecer relaciones entre esta recuperación y la posterior rearticulación de la sociedad civil durante la transición a la democracia.

Hemos escogido como objeto de estudio al movimiento estudiantil, ya que consideramos que es uno de los movimientos sociales más activos en la lucha por la democracia, en ambos países. De este modo, nos interesa analizar el recorrido que hace el movimiento estudiantil en el tránsito de una dictadura a un sistema democrático, cuáles son sus permanencias y sus cambios, cuáles sus nuevas reivindicaciones, ideologías, formas de acción. En este contexto, el movimiento estudiantil, tanto en España como en Chile, es considerado uno de los pilares de la movilización social de oposición a las respectivas dictaduras. Ambos fueron vistos como la vanguardia de la acción colectiva, innovaron en cuanto a los repertorios de acción, impulsaron la movilización social, y ya en democracia, continuaron ejerciendo su capacidad crítica con respecto a los sistemas políticos construidos durante los períodos de transición.

Somos conscientes de que los movimientos estudiantiles son cíclicos, lo que dificulta registrar su recorrido de manera lineal. Aunque casi todos los movimientos sociales comparten esta característica cíclica, ésta se acentúa aún más en los ME, ya que sus miembros integran el movimiento por algunos años (en general, los que dura la estadía en la universidad) y luego se integran a la vida laboral. De esta forma, el movimiento estudiantil vive en permanente recambio y renovación, lo que suele atentar en contra de la continuidad de sus luchas y de sus reivindicaciones. Hay autores que señalan que los movimientos estudiantiles no tienen memoria. Sin embargo, creemos que esto no es así. Hay elementos esenciales que permanecen dentro del ME, y que se transmiten de generación en generación, aunque cambie el contexto político y social y los contenidos de las demandas de cada generación en particular.

En este sentido, nuestra hipótesis es que los ME español y chileno, independientemente de su existencia cíclica, se sitúan como voces críticas dentro de la sociedad civil, tanto en la lucha contra la dictadura como ya en democracia. Y eso ocurre porque los ME logran combinar, a veces con dificultad pero también con éxito, las reivindicaciones académicas con las demandas políticas. Es decir, el movimiento estudiantil no se encierra en reivindicaciones sectoriales, sino que tiene una vocación esencialmente política, lo que le permite proyectarse hacia la sociedad civil, y muchas

veces liderar el proceso de lucha por la transformación del sistema político y/o económico.

A lo largo de nuestra investigación desarrollaremos esta hipótesis e intentaremos demostrar cómo los ME de cada país estudiado fueron contribuyendo a la rearticulación de la sociedad civil luego de los largos años de dictadura, y lo hicieron a través de la experiencia política que suponía participar en el movimiento, a través de la construcción de un discurso democrático, que permitió la socialización de estas ideas entre la juventud, y a través de la recuperación del espacio público, secuestrado por la dictadura y reclamado para la sociedad civil.

Hemos elegido como delimitación cronológica, los siguientes períodos: 1969 – 1980 para España, ya que en el año 69 se vuelve a imponer el Estado de Excepción debido a las movilizaciones estudiantiles y obreras, y en 1980 se producen las mayores movilizaciones estudiantiles del período transicional. Para Chile hemos escogido el período 1986 – 1997, debido a que en el año 86 se reimpone el Estado de Sitio tras el atentado contra el general Pinochet, y en 1997 se producen las movilizaciones estudiantiles más importantes de la transición a la democracia.

Si bien sabemos que las delimitaciones cronológicas tienen siempre algo de arbitrarias, creemos imprescindible acotar el período de estudio a fin de hacer posible la investigación y suscribirla a un marco específico que consideramos coherente para ambos países. En este sentido, ponemos como punto de inicio del estudio un momento en que los regímenes autoritarios regresan a formas severas de represión debido a la movilización social precedente, y como punto de llegada, dos momentos en que el movimiento estudiantil alza la voz durante la transición a la democracia. Ahora bien, para el caso español dedicaremos casi la misma cantidad de tiempo al tardofranquismo y a la transición; sin embargo para el caso chileno no lo hemos hecho igual ya que consideramos que la transición a la democracia ha sido más compleja y más larga.

Somos conscientes de que estamos comparando dos movimientos sociales que se desarrollan en distintos espacios y tiempos, y a lo largo de la investigación, daremos cuenta de las diferencias que esto implica. Sin embargo, creemos que más allá de estas diferencias, la comparación no sólo es posible sino necesaria, toda vez que nos permite observar la trayectoria de dos movimientos sociales que registran similares particularidades en países que han tenido también trayectorias políticas parecidas, al menos en su historia reciente. Con todo, no nos interesa dar cuenta solo de las

similitudes entre un caso de estudio y otro, sino también de las diferencias, que son bastantes, entre el ME español y el ME chileno.

Finalmente, la metodología que se utilizará en esta investigación será aquella propia de la disciplina histórica, que podemos describir sumariamente como la interrogación de las fuentes desde las hipótesis y los objetivos planteados anteriormente. Para el marco teórico utilizaremos a especialistas en movimientos sociales. Para el estado de la cuestión existe abundante bibliografía sobre la dictadura de Franco y de Pinochet, combinando textos históricos generales con textos específicos sobre movimientos sociales, su constitución, sus estrategias, y formas de acción. De todas formas, es importante señalar que existe poca bibliografía secundaria sobre movimientos sociales en Chile durante la transición. En este sentido, esta parte de nuestro trabajo tendrá que construirse a partir de las fuentes primarias y de la bibliografía general. Respecto de las fuentes primarias, hemos utilizado fuentes documentales, provenientes de diversos archivos, con fuentes orales y prensa de la época. Creemos que, debido a la proximidad del tiempo estudiado, las fuentes orales pueden ser un gran aporte a la investigación, siempre que se las someta al análisis crítico y se las contraste con fuentes de otro tipo.

Al ser un estudio de historia comparada, la primera parte de esta investigación ha sido llevada a cabo en España, dirigida por el catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Manuel Pérez Ledesma. La recopilación de fuentes incluye el trabajo en el Archivo General de la Administración, Archivo Central del Ministerio de Educación, Archivo de la Universidad Complutense de Madrid, Archivo de la Universidad Autónoma de Madrid, Archivo del Partido Comunista de España, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Archivo Fundación 1º de Mayo (Comisiones Obreras), revisión de diversas revistas y periódicos en la Biblioteca Nacional de España, y la realización de diez entrevistas con estudiantes de la época.

La segunda parte de esta investigación se ha llevado a cabo en Chile, para lo cual contamos con un convenio de cotutela con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nuestro co-director es el profesor asociado del Instituto de Historia de esta universidad, Alfredo Riquelme Segovia. Los archivos consultados para la investigación del ME chileno incluyen al Archivo Central de la Administración, Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Archivo Central Andrés Bello de

la Universidad de Chile, Fondo Documental Eugenio Ruiz-Tagle de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), periódicos y revistas de la Biblioteca Nacional. También contamos con un libro de recopilación de entrevistas a dirigentes estudiantiles de la época.

Aprovechamos la ocasión de agradecer a todos los funcionarios de archivos que nos ayudaron durante esta investigación, en particular a los funcionarios y funcionarias del Archivo del PCE, de la Fundación Pablo Iglesias y del Archivo de la FECH, que nos facilitaron mucho la recopilación de fuentes primarias.

Antes de entrar en el marco teórico sobre movimientos sociales queremos delimitar el uso de algunos conceptos clave para este trabajo. Entendemos como espacio público el espacio en el cual se actualiza el intercambio de opiniones, y en donde se resuelven los conflictos sobre la base de la argumentación<sup>1</sup>. Según Jürgen Habermas, el espacio público es aquel en donde se desarrolla la opinión pública, a veces incluso contrapuesta a los poderes públicos<sup>2</sup> pero también debe comprenderse como “la esfera en la que las personas privadas se reúnen en calidad de público”.<sup>3</sup>

Entendemos como sociedad civil a aquel conjunto de organizaciones cívicas voluntarias, ajenas al Estado, que forman una sociedad activa, con opinión y capacidad de incidir en lo político. Según la Enciclopedia del Pensamiento Político dirigida por David Miller, la sociedad civil serían “las instituciones éticas, sociales y económicas de la moderna sociedad industrial capitalista occidental que se sitúan al margen del Estado”.<sup>4</sup> En este sentido, espacio público y sociedad civil son términos complementarios porque es en el espacio público en donde se desarrolla la sociedad civil. Es en ese espacio donde se socializan ciertos valores, ideas, luchas que después se harán públicos y cristalizarán en organizaciones civiles. Es claro que bajo regímenes autoritarios que secuestran el espacio público para sí mismos, la sociedad civil no tiene margen de acción más que el de la resistencia, la clandestinidad o el silencio. Una vez en democracia, esta sociedad resurgirá pero no lo hará indemne sino determinada por los años vividos bajo dictadura.

---

<sup>1</sup> Roger CHARTIER: *Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII*, Gedisa editorial, Barcelona, 1995, p. 33.

<sup>2</sup> Jürgen HABERMAS: *Historia y crítica de la opinión pública*, Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 45.

<sup>3</sup> Ibid., p. 65.

<sup>4</sup> David MILLER (director), *Enciclopedia del pensamiento político*, Alianza, 1987, p. 612

## MARCO TEÓRICO

### I. Transiciones a la democracia: las diferencias del caso español y chileno

En el presente trabajo utilizaremos la definición de transición que emplean O'Donnell, Schmitter y Whitehead en su obra "Transiciones desde un gobierno autoritario". Ésta aparece como el intervalo que se extiende de un régimen político a otro. En este sentido, transición es aquel proceso por el cual un Estado cambia de régimen político, normalmente de uno autoritario a uno democrático. De todas formas, compartimos la idea de los autores antes mencionados respecto de que las transiciones están limitadas por el proceso de disolución del régimen autoritario y por el establecimiento de alguna forma democrática.<sup>5</sup>

Ahora bien, el interés por incluir un breve capítulo sobre transiciones a la democracia obedece a la idea de que éstas representan un punto de inflexión para los movimientos sociales, ya que consideramos que su reacomodación en el régimen democrático dependerá, en parte, de su papel en el proceso de transición.

Juan Linz señala que hay tantos regímenes democráticos como gobiernos democráticos en la sociedad, con evidentes diferencias de desarrollo económico y social, y podríamos agregar que también existen diferencias importantes respecto de los ideales democráticos planteados por cada gobierno.<sup>6</sup> Sin duda alguna, para comprender los procesos de transición es necesario también comprender el tipo de régimen autoritario que los precede, ya que dependiendo de su estabilidad y legitimidad, el proceso de transición será más o menos complejo.

De esta forma, podemos estudiar la estabilidad de un régimen autoritario desde la perspectiva de su origen, de los cambios económicos y sociales que han tenido lugar bajo ellos, de los cambios en el liderazgo, etc. Esto, explica Linz, significa estudiarlos como sistemas dinámicos.<sup>7</sup> Así, las diferencias que presentan los regímenes español y chileno, tanto desde el origen como desde la duración son elementos esenciales para comprender el posterior proceso de transición a la democracia.

---

<sup>5</sup> Guillermo O'DONNELL Y Philippe SCHMITTER: *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. IV, Ediciones Paidós, España, 1988, p. 19.

<sup>6</sup> Juan José LINZ: "Transiciones a la democracia", *Revista de Investigaciones Sociológicas* n° 51, año 90, p. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 14.

Respecto del nacimiento de ambos regímenes, la dictadura franquista tuvo su origen en una guerra civil, que enfrentó a republicanos y nacionales por casi tres años, con el consiguiente derramamiento de sangre y división de la sociedad. Por su parte, la dictadura de Pinochet se originó por un golpe de estado que fue capaz de neutralizar cualquier intento de resistencia opositora, que involucró a todo el ejército y que impuso una durísima represión contra aquellos que habían participado del gobierno socialista de Salvador Allende y contra todo aquel que militara o tuviera relación con partidos de izquierda. De cierta forma, la no existencia de una guerra civil hizo que el proceso de transición en Chile fuera más complejo, porque, a diferencia del caso español, no hubo un aprendizaje político a partir de la memoria de una guerra. El “Nunca Más” en Chile ha sido un proceso de aprendizaje en democracia, que todavía se está construyendo.

La duración de cada dictadura también es un elemento esencial que las diferencia; si el régimen de Franco duró casi 40 años (contando desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936), el de Pinochet duró 17. Este dato no es menor, ya que 40 años significan el paso de una generación y algo más, por lo que al momento de realizar la transición, muy pocos líderes del gobierno y de la oposición habían participado en la guerra civil. En Chile, en cambio, los dirigentes que habían sobrevivido al régimen en el exilio, la clandestinidad o la semilegalidad, a partir de 1988 volvieron a tomar posiciones de poder. El ejemplo más claro es el de Patricio Aylwin, quién era presidente del Partido Demócrata Cristiano en 1973 y fue elegido como el primer Presidente de la transición en 1990. En este contexto, en Chile no se completó la renovación de la clase política, lo que tiene algunas ventajas, como la persistencia de la memoria de aquellos que fueron reprimidos, detenidos, torturados y exiliados; pero que también tiene ciertos vicios, como la constante comparación entre la situación actual y la vivida en 1973.

Ahora bien, Alfred Stepan describe 10 vías para transitar desde el autoritarismo hacia la democracia política. Para efectos de este trabajo nos interesan fundamentalmente aquellos tipos de transición en los que los poderes autoritarios dan el paso hacia la democracia, que, según el autor mencionado, son tres:

- La transformación dirigida desde dentro del régimen autoritario
- La transición iniciada por los militares como gobierno
- La retirada del poder de los militares como institución.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., p. 16.

Según Linz, la transición española sería un ejemplo de transformación dirigida desde dentro del régimen, ya que la clase política fue la que tomó la iniciativa para realizar el cambio de sistema, aunque señala también que para el éxito del proceso fue importante la cooperación de la oposición democrática. Si bien coincidimos con Linz en esta apreciación, creemos que hay factores importantes que no aparecen reflejados en esta tipología, como son el papel protagónico de la oposición al régimen (si ésta se presenta unida o no, si es fuerte o no) y el de los movimientos sociales. Nos referiremos con más detalle a este asunto en el capítulo dedicado a la Transición en España.

Pese a que Linz no se refiere al proceso de transición a la democracia en Chile, creemos que éste también se inscribe en la categoría de una transformación dirigida desde dentro del régimen autoritario. Sin embargo, a diferencia de la transición española, la chilena se originó más bien en una estrategia errónea por parte de la dictadura que en una voluntad consciente de producir el cambio político.

En España podemos observar esta voluntad consciente de reformar el sistema político en las acciones del Rey Juan Carlos y del Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez. La aprobación de la Ley para la Reforma Política y la legalización de los partidos políticos, especialmente del PCE fueron dos puntos de no retorno en la transición española. Las elecciones de 1977 y la posterior redacción de la Constitución de 1978 fueron el producto de la vía reformista asumida por el régimen e impulsada, a su vez, por la oposición. El régimen de Pinochet en cambio, optó por seguir el derrotero fijado en la Constitución de 1980, en donde se establecía la celebración de un plebiscito nacional vinculante, en el cual se decidiría si el general seguiría por ocho años más en el poder o si se convocaría a elecciones presidenciales y parlamentarias al año siguiente. Seguro de su triunfo, Pinochet no modificó en nada el itinerario dispuesto en la Constitución, y sólo una vez derrotado, optó por la negociación con los partidos opositores. En este sentido, compartimos con Linz la idea de que las transiciones tienen lugar una vez que los líderes del régimen autoritario deciden realizar una apertura, pero creemos importante distinguir cuando dicha apertura se hace de forma consciente y cuando corresponde a un error de cálculo.

Otro elemento fundamental para comprender los procesos de transición a la democracia es lo que Juan Linz llama “ el compromiso con unas elecciones libres y limpias” <sup>9</sup> ya que éstas aceleran y legitiman el proceso, otorgan cierto grado de

---

<sup>9</sup> Ibid., p. 20.

legitimidad al gobierno y obligan a la oposición a decidirse por la vía institucional o por otra alternativa. En este sentido, parte de la legitimidad del proceso de transición a la democracia viene dada por la racionalidad con que actúen los actores políticos y por el mantenimiento del orden público; sin embargo, dicho proceso siempre viene acompañado de fuertes cuotas de incertidumbre. En la medida en que ésta se pueda ir eliminando, la transición cobrará más fuerza y el peligro del involucionismo será menor. Respecto de la legitimidad y la incertidumbre podemos ver una diferencia considerable entre la transición española y la chilena. En primer lugar, la presencia del dictador es un elemento clave que dice relación con la incertidumbre del proceso. Franco murió en 1975, siendo aún el Jefe de Gobierno. Mantenía cuotas de poder más bien simbólicas, ya que el gobierno era presidido por Carlos Arias Navarro en conjunto con el Consejo de Ministros y las Cortes orgánicas. Además, parte importante del poder simbólico de Franco se traspasó al Rey Juan Carlos cuando asumió como Jefe de Estado, quién impulsó una política de apertura que terminaría en el nuevo régimen democrático.

Por el contrario, Pinochet, sabiendo que contaba con un alto respaldo dentro de la población<sup>10</sup>, dejó la presidencia en manos del demócratacristiano Patricio Aylwin en 1990, pero continuó como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998. En términos concretos, el ex dictador siguió teniendo altas cuotas de poder y se erigió como una suerte de poder tutelar o paralelo, que dificultó reformas importantes para mejorar la calidad de la democracia chilena y prácticamente paralizó los avances en la búsqueda de justicia por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su gobierno. Además, en 1998, una vez que dejó el Ejército, se integró al Congreso como senador vitalicio. En este contexto, solamente cuando Pinochet desaparece como actor político relevante tras su detención en Londres a solicitud de la justicia española y su posterior procesamiento en Chile que lo conduce a declararse enfermo mental para evitar ser juzgado, podemos considerar que el peligro de involucionismo ha desaparecido y que la transición chilena ha culminado.

Otra diferencia fundamental tiene que ver con la legalidad y la legitimidad de la democracia hacia la que se transita. En el caso español, dos años después de la muerte de Franco se convoca a elecciones y al año siguiente se redacta una nueva Constitución, que fue aprobada por un amplio margen en referéndum nacional. Es decir, se creó una legalidad nueva para la naciente democracia española. En el caso chileno, los gobiernos

---

<sup>10</sup> Pese a que perdió el plebiscito, la opción SI a Pinochet obtuvo el 44% de los votos.



democráticamente elegidos han tenido que operar con la Constitución de 1980, redactada por un grupo de adeptos al régimen, y creada pensando en el gobierno del general Pinochet. Linz señala que la redacción de una constitución es parte vital del proceso de transición, ya que el grado de consenso que se logre será fundamental para la estabilidad del futuro régimen.<sup>11</sup>

Ciertamente, la imposición de una constitución no es el ideal de transición a la democracia. Sin embargo, desde el momento en que la Concertación de Partidos por la Democracia decide actuar bajo las reglas de la dictadura, acepta sus normas transitorias y derrota al régimen en su propio “juego”, podemos decir que está legitimando la Constitución. Y profundiza esta legitimación cuando negocia las reformas de 1989 con el régimen saliente, como un claro indicador de que la Carta de 1980 no será derogada sino reformada para hacerla más democrática. El símbolo más evidente de la legitimidad que tiene la Constitución, es el reemplazo de la firma de Pinochet por la del ex Presidente Ricardo Lagos, en el marco de un conjunto de reformas constitucionales promulgadas el año 2005. De esta manera, pese a que no se redactó una constitución para la nueva democracia, si se reformó la que existía en busca de legitimidad para el nuevo régimen.

Ahora bien, Linz también hace mención al pacto que se produce entre las fuerzas reformistas (del régimen) con las rupturistas (de la oposición), y señala que el modelo de transición por transacción, es decir, el modelo de reforma pactada, centra los acuerdos entre las elites, los líderes del régimen y la oposición, y reduce el papel de la ciudadanía.<sup>12</sup> Y si bien existen autores como Charles Powell que consideran a la transición española como una de tipo transaccional<sup>13</sup>, creemos que este enfoque resta protagonismo a los movimientos sociales, que para el caso español fueron elementos clave para impulsar la reforma. Consideramos, de acuerdo con José María Maravall, que el proceso de transición estuvo fuertemente marcado por el movimiento obrero. Las huelgas de 1976, con el resultado de casi 150 millones de horas de trabajo perdidas, y las de 1977, con 110 millones de horas, son un claro ejemplo de la fuerte presión que “desde abajo” ejercía el movimiento obrero. Según Maravall, esta presión fue “parte esencial para entender el desarrollo de las disposiciones negociadoras desde arriba (...) Huelgas y manifestaciones daban todavía una imagen de movilización popular

---

<sup>11</sup> Ibid., p. 28.

<sup>12</sup> Ibid., p. 21.

<sup>13</sup> Charles POWELL: *España en democracia, 1975-2000*, Plaza y Janés, España, 2001, p. 130.

combativa. La dinámica de presión/negociación siguió por tanto caracterizando la fase entre el otoño de 1976 y julio de 1977”.<sup>14</sup>

Esta situación no se dio con tanta claridad en el proceso chileno. Para dicha transición sí creemos que se puede utilizar el modelo transaccional porque los pactos se llevaron a cabo entre elites políticas, tanto del gobierno como de la oposición, sin que los movimientos sociales tuvieran el protagonismo alcanzado en España. Incluso, los mismos líderes de la oposición pidieron moderación a los movimientos sociales, en vista de las altas cuotas de incertidumbre que se vivían hacia 1988. En ese sentido, creemos muy acertada la distinción que hace Guillermo O’Donnell con respecto a las transiciones latinoamericanas. En ellas, señala el autor, los pactos se producen entre las elites, dejando de lado a la sociedad civil, especialmente cuando ésta está débilmente organizada en comparación con el sistema de partidos políticos.<sup>15</sup>

En el caso chileno, la negociación se produjo después de la derrota a Pinochet y, pese al apoyo ciudadano que tuvo la oposición, éste no se tradujo en una sociedad civil fuerte que pudiera exigir ser tomada en cuenta en la negociación política. Es probable que el pacto elitista sea una de las causas del largo camino que ha debido recorrer la transición chilena (1988-2000), sobre todo si consideramos que el dictador siguió manteniendo altas cuotas de poder, que no se redactó una constitución para la nueva democracia, y que la institucionalidad democrática dejaba (y aún deja) muy poco espacio para la movilización social y sus demandas.

## **II. Los movimientos sociales: estructura de oportunidades políticas, estrategias de acción colectiva y marcos de referencia.**

Para hablar de movimientos sociales comenzaremos por definirlos, siguiendo para ello al sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón. Según este autor, los movimientos sociales son una acción colectiva con alguna estabilidad en el tiempo y algún grado de organización, orientados hacia el cambio o la conservación de la sociedad o alguna de sus esferas.<sup>16</sup> La definición de Garretón es amplia y por lo tanto

---

<sup>14</sup> José María MARAVALL: *La política de la transición, 1975-1980*, Taurus, España, 1982, p. 27.

<sup>15</sup> G. O’ DONNEL, *Transiciones desde una gobierno autoritario*, p. 28.

<sup>16</sup> Manuel Antonio GARRETÓN: “Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico”. Revista *Excerpta* n° 2, abril 1996, p. 1.

muy útil para una primera aproximación a los movimientos sociales y a la acción colectiva.

Para el análisis de los movimientos sociales podemos utilizar tres perspectivas relacionadas entre sí y que suponen una visión más completa de dichos movimientos. Nos referimos a las oportunidades políticas, a las estructuras de movilización y a los procesos enmarcadores. Al estudiar estas tres perspectivas podremos encontrar contrapuntos interesantes en la comparación entre movimientos sociales en España y Chile. Ahora bien, para comprender el surgimiento de los movimientos sociales bajo gobiernos autoritarios, desafiando a un régimen que tiene el monopolio de la fuerza, podemos utilizar el concepto de oportunidad política, que corresponde a dimensiones del entorno político que ofrecen ciertos incentivos para que las personas participen en acciones colectivas.<sup>17</sup> Si bien la teoría de la estructura de las oportunidades políticas ha sido desarrollada fundamentalmente para explicar movimientos sociales bajo democracias, también es útil para explicar las oleadas de protesta que surgen bajo regímenes dictatoriales. En este sentido, seguiremos aquí las propuestas de teóricos de los movimientos sociales, pero insistiendo en aquellos aspectos que nos parecen más relevantes a la hora de tratar movimientos que surgen bajo condiciones de represión y autoritarismo.

Según diversos autores, hay consenso en que las dimensiones de la oportunidad política comprenden los siguientes puntos:

- 1.- El grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado, es decir el grado de aceptación o rechazo de las demandas de los movimientos sociales.
- 2.- La estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre elites
- 3.- La presencia o ausencia de aliados entre las elites.
- 4.- La capacidad del estado y su propensión a la represión.<sup>18</sup>

Estos cuatro puntos son clave para entender la fortaleza o debilidad de un estado frente a una oleada de acción colectiva o a demandas de movimientos sociales. En el caso de regímenes autoritarios como los que estudiamos en este trabajo, el grado de apertura es menor, aunque varía con el tiempo; la estabilidad de las alineaciones entre elites va a depender del caso y del momento, pero por lo general están en sintonía con el

---

<sup>17</sup> Sidney TARROW: *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid, 2004, p. 116.

<sup>18</sup> Doug MC ADAM, John MC CARTHY, Mayer ZALD: *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Istmo, Madrid, 1999, p. 54 – 55.

régimen, lo cual dificulta que, como se explica en el punto número 3, los movimientos tengan aliados entre ellas. Finalmente, la capacidad represora es propia de un estado dictatorial.

Por estas razones, los movimientos sociales que surjan dentro de un régimen autoritario tendrán características específicas que iremos observando en el análisis coyuntural de cada caso, y sin duda, tendrán más restricciones para la acción política, aunque la condición de dictadura del estado en el que éstos se desencadenan y la consecuente radicalización del conflicto se convertirán también en oportunidades políticas.

Es importante recalcar que los movimientos sociales son, en primer lugar, una invención de la modernidad y surgen junto al Estado moderno. Esta relación fundamental entre movimiento social y Estado se aprecia de forma muy clara en la teoría de las oportunidades políticas. Todo movimiento o acción colectiva surge cuando se dan las condiciones políticas para que agentes, que normalmente carecen de ellas, intervengan en el espacio público.<sup>19</sup> Con todo, la estructura de oportunidades políticas también contempla las restricciones políticas, es decir, aquellas acciones o condiciones que desincentivan la acción colectiva.

En el contexto de un gobierno autoritario, las oportunidades políticas son escasas y las restricciones múltiples, por lo que la posibilidad de fracaso es alta en la medida en que el régimen puede reprimir cualquier acción colectiva aún utilizando métodos que están fuera de la legalidad. Según Charles Tilly “la represión es cualquier acción por parte de un grupo que eleva el coste de la acción colectiva del contendiente. Una acción que reduce el coste de la acción colectiva es una forma de facilitación”.<sup>20</sup>

Sin embargo, la otra cara de la moneda está dada por la legitimidad. Los regímenes dictatoriales carecen de legitimidad, es decir, de aquello que explica que los ciudadanos obedezcan la autoridad del Estado. En palabras de Max Weber, “aparte de por el miedo, el hábito, la apatía y la comodidad o el interés, la obediencia se explica asimismo por una especie de aquiescencia interna, una fuente propia de justificación: la creencia o convicción de que la autoridad actúa de forma moralmente correcta”.<sup>21</sup> Es por esto que la carencia de legitimidad de un régimen es una clara oportunidad para los disidentes.

---

<sup>19</sup> S. TARROW, *El poder en movimiento*, p. 22.

<sup>20</sup> Ibid., p. 21.

<sup>21</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 149.

Ahora bien, según Sidney Tarrow, lo que define a todos los movimientos sociales e incluso a las revoluciones es una acción colectiva contenciosa, y es contenciosa por que es utilizada por personas ajenas al sistema institucional y porque exige nuevas reivindicaciones, que pueden constituir una amenaza para el régimen. Este es el caso de los movimientos sociales que surgieron en España en la década de los sesenta, y en Chile en la de los ochenta, cuando grupos como los trabajadores y los estudiantes exigieron mayores cuotas de apertura para sus áreas, es decir, sindicatos elegidos de forma democrática, y mayor integración de los estudiantes en los problemas de la universidad.

Si bien estos movimientos fueron, en su gran mayoría, reprimidos por la fuerza sin lograr sus reivindicaciones, como dijimos anteriormente, hasta su fracaso produjo efectos secundarios importantes, ya que abrieron las puertas a otros movimientos, lograron desarrollar sentido de solidaridad entre ellos y otros movimientos y, finalmente, pusieron en marcha cambios en la esfera internacional.<sup>22</sup> Por ejemplo, en 1978 el régimen militar chileno promulgó varios decretos que afectaban directamente a los trabajadores. Gracias a la acción de un grupo de políticos y líderes sindicales chilenos, esta situación llegó a oídos de la AFL-CIO, central norteamericana de sindicatos, que propuso declarar un boicot portuario contra Chile. A ella se unieron los sindicatos europeos de la CIOSL y la CINT. Aunque finalmente no se llevó a cabo, el régimen de Pinochet tuvo que comprometerse a cambiar la política laboral al cabo de un año.

De esta forma, aunque los trabajadores no consiguieron revocar la normativa en cuestión, la presión internacional logró un compromiso, aunque parcial, de parte del régimen con respecto a las políticas laborales. En este sentido, si bien podemos considerar un fracaso las acciones de los trabajadores contra las políticas del régimen, las implicaciones internacionales fueron de gran ayuda.

Otro punto indispensable en el desarrollo de los movimientos sociales es el planteamiento de un desafío colectivo. En este contexto, para que tengan éxito, los movimientos sociales deben plantear exigencias comunes a los gobernantes. De esta manera también logran mantener al movimiento unido frente a las dificultades que se les presenten. Si bien en una sociedad democrática las exigencias pueden ser múltiples,

---

<sup>22</sup> S. TARROW, *El poder en movimiento*, p. 22.

en un régimen autoritario éstas disminuyen, y en su mayoría, tienen que ver con peticiones de apertura o democratización del sistema de gobierno.

Ahora bien, el planteamiento de un desafío a las autoridades va a asumir diferentes formas, relacionadas directamente con el tipo de sistema político en el que actúen los movimientos sociales.<sup>23</sup> En este sentido, las estructuras de movilización, es decir, la organización del grupo o movimiento y sus repertorios de acción, van a estar muy influenciados por la época en la que se desarrollan y por el sistema político. La diferencia entre movimientos bajo democracia y movimientos bajo dictadura será crucial para comprender las estructuras de movilización. Este concepto es imprescindible para comprender la trayectoria de los movimientos sociales, su grado de institucionalización, los ciclos en los que actúan, sus líderes y redes formales e informales, etc. La organización del grupo y sus formas de acción están directamente relacionadas con la capacidad para obtener recursos económicos y lograr movilizar a los descontentos, ya que de esta forma logran adquirir legitimidad ante la sociedad civil.

Dentro de las investigaciones sobre las estructuras de movilización, la más importante es la formulada por Mc Carthy y Zald, respecto de la movilización de recursos, que tiene relación con las formas de llevar a cabo las acciones colectivas, los llamados repertorios tácticos, y las formas organizativas de movimientos sociales.<sup>24</sup> Todo movimiento social cuenta con un bagaje de elementos estructurales de movilización, que son fundamentalmente, los mecanismos y formas que movimientos sociales anteriores utilizaron para organizarse. Sin embargo, cada nuevo movimiento o incluso antiguos movimientos, incorporan nuevos repertorios de acción colectiva, que están a su vez determinados por la tecnología de la época y por los fines que tenga cada movimiento en cuestión.

En este sentido, no es lo mismo formar un movimiento opositor en la clandestinidad, sin poder contar con los recursos de propaganda, publicidad, medios de comunicación etc., que formar uno bajo un régimen democrático. Al mismo tiempo, la tecnología es una herramienta fundamental para la organización de los movimientos: Internet y la telefonía móvil, por poner un ejemplo, son capaces de difundir un llamado a la acción colectiva en cosa de segundos. Además, el primero ofrece una plataforma de bajo coste y de fácil acceso para establecer redes entre los miembros del movimiento y entre diversos movimientos, partidos políticos o grupos de interés. Es por esto que las

---

<sup>23</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 24.

<sup>24</sup> Ibid., p. 206.

estructuras de movilización responden a una época y un repertorio determinado que debe ser elegido por los activistas, con miras a conseguir sus objetivos. Según McCarthy, “al optar por una estructura de movilización concreta los activistas deben ser capaces de utilizarla de modo que resulte de utilidad para realizar los cambios sociales que se pretenden implementar”.<sup>25</sup>

Ahora bien, las estructuras de movilización para la acción colectiva no son creadas sólo por los organizadores del movimiento, sino que se inscriben culturalmente y se comunican socialmente. Esto quiere decir que hay ciertos repertorios de acción colectiva que son, por decirlo de alguna forma, históricos. Los grupos tienen una memoria propia de la acción colectiva, por lo que muchas veces se logra construir un prototipo de protesta.

Según Donatella de la Porta, al estudiar los tipos de represión policial, se pueden establecer relaciones entre ésta y las formas de protesta utilizadas por los movimientos sociales. En este contexto, un estilo policial blando favorece la difusión de la protesta, mientras que uno menos tolerante puede hacer disminuir la protesta pero también radicalizar a los grupos más pequeños. Finalmente, las técnicas represivas duras, difusas y “sucias” alejan a los sectores más moderados del Estado, impidiendo así el diálogo.<sup>26</sup> Este es el contexto en el que se producen las acciones colectivas en la España de Franco y Chile de Pinochet. Por lo tanto es imprescindible tener en cuenta que las formas de actuación, tanto de la policía como de los manifestantes, van a evolucionar de forma recíproca.

Bajo un régimen autoritario en donde sólo tienen voz los miembros de dicho régimen y la prensa está bajo censura, la violencia se transforma en una llamada a la acción por parte de los movimientos sociales, ya que con ella consiguen cobertura mediática y hacen llegar su desafío a otros grupos que puedan estar organizándose o que tengan reivindicaciones similares al que ya ha entrado en acción.

En 1982, Chile atravesaba por una de sus mayores crisis económicas, derivada de la crisis petrolera mundial de 1979 y del sobrecalentamiento de una economía abierta, que vivía de créditos externos y de una enorme deuda exterior. Cuando el sistema económico colapsó, las quiebras de empresas y fábricas se sucedieron con asombrosa rapidez y el paro llegó a niveles superiores al 20%, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) descendía en un 14%. Además, en febrero de 1982 había sido

---

<sup>25</sup> Ibid., p. 216.

<sup>26</sup> Ibid., p. 142.

asesinado por organismos del Estado el líder sindical Tucapel Jiménez, lo que contribuyó a elevar el descontento.

En este contexto de crisis, se produce la primera manifestación masiva contra el gobierno. El llamado va a ser impulsado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que era la más poderosa del país, para el día 11 de mayo de 1983. El régimen, previendo lo que iba a suceder, declaró Estado de Sitio en distintas zonas del país y tomó medidas para evitar el paro. Por su parte, los partidos políticos en la clandestinidad sentían temor de las amenazas del régimen, pero también temían que el paro fracasara, ya que veían en él una forma de “despertar” a una sociedad que había estado, por años, acallada por la dictadura. Por esto, decidieron pedirle a la Confederación de Trabajadores del Cobre que cambiara el paro por una protesta. Con esto se introduce en Chile una nueva forma de desobediencia civil, ya que las protestas implicaban no comprar, no mandar a los niños al colegio, golpear cacerolas a las 8 de la noche, etc. Este llamado tuvo un éxito inesperado, y después de diez años en silencio, la sociedad manifestó su descontento. Las protestas tuvieron especial fuerza en los barrios populares y de clase media.

En vista del éxito obtenido, se decidió que las protestas se sucedieran una vez al mes, y de esta manera cambió la extensión de la oposición y también variaron los escenarios de la acción colectiva, que pasó de la clandestinidad a la calle. Para el régimen, las protestas fueron un hecho intolerable. Con estos precedentes, las protestas que siguieron a la de mayo de 1983 aumentaron también en violencia. El régimen sacó a soldados y tanques a las calles para ayudar a la represión policial. Además, se reimpuso el toque de queda para todos los días de protesta. En junio y en los meses posteriores, la represión e intentos de disuasión fueron cada vez más fuertes. También aumentaron las formas violentas de protesta en los barrios populares: barricadas, fuego, saqueos, a las que el régimen respondía con represión masiva. Esto hizo aumentar dramáticamente el número de víctimas en cada protesta. Sólo en la de julio de 1986, murieron 26 personas y hubo más de 600 detenidos.

Para el caso español, la conflictividad laboral fue creciendo progresivamente, desde mediados de los años 60. Así, entre 1969 y 1974 murieron 17 personas como consecuencia de enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y los trabajadores.<sup>27</sup> Según señala Javier Tusell, el elevado número de muertos se debió a la magnitud de las

---

<sup>27</sup> Javier TUSELL: *Historia de España en el siglo XX*, Vol. III, Taurus, España, 2007, p. 506.



manifestaciones y a la radicalización del conflicto entre los activistas y la policía. Sin embargo también explica que la policía y las fuerzas del orden no fueron capaces de enfrentar una manifestación pacífica.

Si bien las protestas chilenas que se extendieron entre 1983 y 1986 no consiguieron su objetivo porque la crisis económica siguió su curso y el régimen no cayó en ese momento, sí consiguieron articular de forma concreta el descontento generalizado en contra del régimen de Pinochet. Las acciones colectivas iniciadas en 1983 no son las primeras, pero sí las más importantes y generalizadas contra el gobierno. Tal como señala Tarrow, “al ir ampliándose las oportunidades e irse difundiendo la información acerca de la susceptibilidad a los desafíos de un sistema político, no sólo los activistas, sino también la gente de a pie, ponen a prueba los límites del control social”.<sup>28</sup> Sin embargo, la diferencia en las estructuras de movilización entre el movimiento de oposición chileno y el español son importantes. En el primero, la violencia fue un recurso que se utilizó de forma constante y consciente, y no sólo como el resultado de enfrentamientos con la policía. Las barricadas en los barrios periféricos de Santiago y los grupos de “encapuchados” lanzando piedras y cócteles molotov a los carros policiales fueron acciones concertadas y promovidas por parte del movimiento de oposición. En España en cambio, las movilizaciones y protestas pudieron terminar de forma violenta, en enfrentamientos con la policía, sin embargo fueron pensadas y llevadas a cabo como manifestaciones pacíficas.

En el caso chileno, además de la estructura de movilización, se aprovechó una oportunidad política y se logró una importante cobertura, que fue ampliando el grupo de manifestantes mes a mes, hasta que la represión fue tan brutal que las restricciones de la acción política colectiva, es decir, el coste de participar en las protestas, fue demasiado alto. Y si bien, aparentemente la sociedad se desmovilizó, la época de las protestas logró crear grupos organizados, fundamentalmente adscritos a barrios o poblaciones, que después serían claves para derrotar a Pinochet. Para el caso español, el descontento ya estaba instalado y demasiado extendido en la sociedad, y, pese a la brutalidad de la represión, ésta no tuvo poder de disuasión, ya que la misma sociedad exigía comportamientos más tolerantes.

Ahora bien, ¿qué motivó a los ciudadanos a involucrarse en acciones colectivas con el riesgo de que fueran reprimidas de forma brutal? Antes de implicarse en esta

---

<sup>28</sup> S. TARROW, *El poder en movimiento*, p. 51.

acción, los manifestantes tuvieron que definir su situación como injusta. En palabras de Barrington Moore: “Todo movimiento contra la opresión tiene que desarrollar un nuevo diagnóstico y un tratamiento para las formas de sufrimiento existentes, un diagnóstico y un tratamiento a través de los cuales se condene moralmente ese sufrimiento”.<sup>29</sup> La relación entre oportunidades políticas y estructuras de movilización otorga a los movimientos un potencial para la acción, pero éste no está completo sin un elemento que medie entre las oportunidades y las estructuras, que son los significados compartidos, los conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación.<sup>30</sup>

Esto es lo que Tarrow denomina marcos para la acción colectiva o procesos enmarcadores, es decir, un conjunto de significados y emociones que hacen a un grupo reaccionar ante una situación que consideran injusta. Estos marcos mezclan el aspecto simbólico con los principios orientados a la acción, creando así una suerte de mapa que permite convertir la pasividad en acción, y generar un sentimiento de identificación con aquellas personas a las que se quiere movilizar. La importancia de la cultura es vital para poder explicar un movimiento social o una revolución.

En suma, resulta claro que un movimiento social puede surgir cuando se den ciertas oportunidades políticas que lo catalicen. Pero para que efectivamente surja, tiene que tener una organización, es decir, una estructura de movilización compuesta por líderes, repertorios de acción, y seguidores dispuestos a manifestarse por una causa. Pero dicha causa tiene también que estar planteada de una forma que, a nivel de las ideas, símbolos culturales, etc., resulte legítima para los seguidores de los movimientos.

En regímenes dictatoriales, las oportunidades políticas son escasas y las estructuras de movilización muy variables, dependiendo del grado de represión, de la aceptación de dichas estructuras por parte de los seguidores del movimiento, de las redes clandestinas formales e informales que se generen entre los dirigentes y las bases, o entre grupos distintos. Sin embargo, los procesos enmarcadores van a ofrecer un conjunto de símbolos y significados políticos y culturales muy amplios, que tienen relación con la lucha contra la dictadura y la legitimidad del cambio de sistema político.

Estos marcos para la acción colectiva serán fundamentales a la hora de articular un movimiento general de oposición a los regímenes autoritarios, sin embargo, una vez alcanzada la democracia, cada movimiento social tendrá que reformular sus marcos de

---

<sup>29</sup> Ibid., p. 161.

<sup>30</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 26.

significados y rearticular sus estructuras de movilización ante el nuevo escenario político. Por ejemplo, se suele relacionar al movimiento obrero con reivindicaciones materiales y con una identidad de clase. Sin embargo, dentro del movimiento obrero también es posible encontrar otro tipo de identidades colectivas, de las que surgirán nuevos movimientos. Y también es posible observar que muchos de estos movimientos que no tienen reivindicaciones económicas sino que se vinculan a través de ideas, valores y símbolos inmateriales, logran alcanzar mayor cohesión y mayor intensidad.<sup>31</sup> Es lo que sucede con los movimientos de oposición al autoritarismo, ya que pese a la infinidad de diferencias que los separan, sean de tipo económico o no, hay un valor que une a las identidades colectivas y es la defensa de la democracia.

En este sentido, los movimientos sociales se crean después de establecer estos marcos para la acción, de generar identificación y de construir redes con otras organizaciones sociales. Si bien las protestas del 1983 en Chile fueron un estallido de acción colectiva, posteriormente dieron paso a un movimiento social de descontento que terminará por derribar al régimen de Pinochet, ya que cumplieron las tres funciones esenciales que, según Charles Tilly, componen un ciclo de protesta: demostraron la vulnerabilidad del régimen, cuestionaron los intereses de otros grupos, en este caso de los partidarios de Pinochet, y construyeron convergencias entre los descontentos, a través de la articulación de marcos de referencia comunes.<sup>32</sup> El grito de “y va a caer” se transformó en consigna obligada de toda protesta, huelga o acción colectiva durante la dictadura. Estos marcos de referencia van a sufrir cambios drásticos con el proceso de transición a la democracia ya que el “enemigo común” ha desaparecido, los movimientos sociales van a sufrir un proceso de atomización y de individualización, dejando ya la lucha contra la dictadura, para pasar a la lucha propia de cada grupo.

En el caso español, la oposición al régimen estaba mucho más extendida, producto de la larga duración de éste<sup>33</sup>, A partir de 1962 se produjo lo que Tusell ha llamado “protesta social”, es decir, estallidos de acciones colectivas organizadas por pequeños grupos, que aparentemente se dirigían contra aspectos propios de la vida española bajo el franquismo y no directamente contra él. Sin embargo, la oposición justificó la protesta e hizo impensable que el régimen pudiera consolidarse existiendo

---

<sup>31</sup> Manuel PÉREZ LEDESMA: “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, en *La Transición, treinta años después*, Carme Molinero (editora), Península, Barcelona, 2006, p. 121.

<sup>32</sup> S. TARROW, *El poder en movimiento*, p. 205.

<sup>33</sup> Aunque nunca se produjo una articulación de movimientos sociales abiertamente contra el régimen, con la capacidad para movilizar a miles de personas, como sí ocurrió en Chile entre 1963 y 1986.

estos grupos que, si bien estaban en los márgenes, ponían a prueba persistentemente los límites de tolerancia del franquismo. Estos movimientos que iniciaron la protesta social, los universitarios, los sindicatos clandestinos, los grupos de católicos disidentes, etc. formarán parte, en la segunda mitad de la década de los sesenta, de la importante oleada de protestas, aportando sus marcos de referencia y sus repertorios de acción colectiva a un amplio movimiento de cuestionamiento del sistema político imperante en España.

Tal como afirma Doug Mc Adam, en la teoría de los movimientos sociales es de especial importancia el sistema político en el cual se producen éstos, para hablar de oportunidades para la acción colectiva.<sup>34</sup> Como hemos señalado antes, un régimen dictatorial ofrece muchas más restricciones que oportunidades políticas, y esto configurará de determinada forma a los movimientos sociales que surjan bajo él. Por el contrario, en una democracia en donde la libertad de expresión y de asociación están garantizadas, los movimientos sociales serán de distinto tipo que los surgidos bajo una dictadura, aunque sean dirigidos por los mismos organizadores.

Manuel Antonio Garretón ofrece una suerte de recorrido de la identidad de los movimientos sociales bajo regímenes dictatoriales. En primer lugar, los movimientos sociales empiezan por reconstruir el tejido social destruido por el régimen. Además, cambian sus vínculos con la política y sus identidades se vuelven más autónomas y simbólicas. En este ámbito se inscribe la particular importancia de la autodefensa y sobrevivencia frente a la represión del régimen. Y finalmente, cuando el régimen comienza a descomponerse, los movimientos sociales tienden a orientarse hacia la política, involucrándose en las formas institucionales de transición.<sup>35</sup>

Sin duda, el tránsito de un sistema autoritario a uno democrático afecta profundamente a los movimientos sociales en varios sentidos. Para aquellos movimientos que lucharon contra el régimen dictatorial, el período de transición es un período de inestabilidad, al igual que para el mundo político. Cuando se ha alcanzado un mayor grado de estabilidad, los movimientos sociales deben replantear sus marcos de referencia. Como hemos señalado anteriormente, ante la desaparición del “enemigo común”, es necesario buscar nuevos signos de identidad, nuevas consignas, nuevas causas. Este es uno de los desafíos más importantes de los movimientos sociales en democracia: mantenerse vivos (no necesariamente activos) pese al cambio de sistema

---

<sup>34</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 23.

<sup>35</sup> M.A. GARRETÓN, “Movimientos sociales y procesos de democratización...”, op. cit., p. 5 – 6.

político, para contribuir a reconfigurar el nuevo panorama de la sociedad civil post dictadura.

## **ESTADO DE LA CUESTIÓN: ESPAÑA Y CHILE EN PERSPECTIVA COMPARADA**

Los períodos que nos hemos propuesto estudiar en esta investigación tienen un contexto histórico específico y determinante, sin el cual las acciones colectivas y los movimientos sociales no se comprenden en toda su complejidad. Ambos países vivían bajo dictaduras militares, con líderes personalistas que tenían el monopolio de la fuerza. Ambas dictaduras eran apoyadas por sectores importantes de las elites dirigentes, y habían llevado a cabo persecuciones y represiones sistemáticas contra sus opositores. Además, ambos regímenes llevaron a cabo sendos procesos de modernización económica, que, como efecto no deseado, provocaron cambios de mentalidad en la población que comenzó a exigir mayor apertura política.

Queremos hacer hincapié en la transformación económica vivida por ambos países bajo regímenes autoritarios ya que consideramos que estos cambios generaron un punto de inflexión que permite explicar, en parte, el surgimiento de movimientos sociales de oposición con sus consiguientes oleadas de protesta. Tal como explica José María Maravall, las contradicciones en un sistema capitalista bajo un régimen autoritario pueden generar oportunidades políticas para los movimientos sociales.<sup>36</sup> Sin embargo, las transformaciones económicas no son el único motivo por el que surgen los movimientos sociales. Incluso antes de que una crisis económica se convierta en una oportunidad política, es imprescindible que exista un grupo de personas que se consideren, de alguna forma, agraviadas por la situación y planteen un desafío colectivo. Y para que dicho desafío tenga éxito o al menos consiga algún grado de acción, es necesario contar con una estructura de movilización: es decir, con un grupo organizado, en el que haya dirigentes y redes formales e informales que, de acuerdo a marcos de significado, decidan actuar. En este contexto, si bien hemos iniciado nuestro análisis con el cambio económico en ambos países, creemos que es indispensable enfatizar en la idea de que los movimientos sociales surgen cuando se producen múltiples factores, y la economía es uno más de ellos.

---

<sup>36</sup> José María MARAVALL: *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*, Alfaguara, Madrid, 1978, p. 31.

Al analizar los movimientos sociales bajo regímenes dictatoriales nos encontraremos con que las reivindicaciones sectoriales se irán tornando secundarias con respecto a las reivindicaciones políticas. Como hemos apuntado antes y siguiendo a Garretón, los movimientos sociales generan identidades más o menos autónomas cuando necesitan defenderse de la represión del régimen; sin embargo, se vuelven más políticas cuando el régimen comienza a desbaratarse. Este proceso lo podremos observar para el caso español y para el chileno, con ciertos matices, pero grosso modo, las grandes oleadas de protestas que se dan bajo ambas dictaduras se producen cuando se logra formar una plataforma social amplia, que supera las reivindicaciones individuales y plantea una demanda de apertura política.

Ahora bien, volviendo al cambio económico, nos encontramos con una gran diferencia entre el régimen español y el chileno, ya que el primero realizó su transformación en los años 60, cuando la dictadura ya llevaba más de veinte años en el poder, en cambio en Chile la transformación económica comenzó en 1975, con la dictadura recién implantada. También es necesario recalcar que la profundidad de los cambios económicos fue distinta en cada caso. Si España transitó de un capitalismo autárquico a uno abierto, pero con una importante implicación estatal en la economía, Chile pasó de un sistema estatista a uno neoliberal de mercado, en donde el Estado sólo intervendría en algunas áreas económicas: aquellas que no fueran rentables para los privados y aquellas que fueran consideradas estratégicas, como el cobre. Muchas áreas que hasta ese momento eran monopolio del Estado pasaron a manos privadas y a ser reguladas por el mercado. Tal fue el caso de la salud y la educación.

## **I. El caso español: del cambio económico a la muerte de Franco**

A partir del Plan de Estabilización de 1959, la economía española comenzó a crecer de forma rápida, alcanzando niveles de productividad y renta muy elevados. El abandono de la política autárquica que el régimen franquista había asumido en un principio y la adopción de criterios técnicos y de libre mercado, consiguieron un importante crecimiento económico.

Hacia fines de la década de los años 50 España se encontraba en una difícil situación económica, con la balanza comercial en negativo y una cuantiosa deuda externa. Es por esto que el Plan de 1959 tuvo como objetivo conseguir un desarrollo económico más estable que significara también la integración de España en el sistema

económico internacional. Aunque en un principio el Plan de Estabilización significó una reducción del gasto público, devaluación de la peseta y liberalización de las inversiones extranjeras, con su consecuente aumento del desempleo y encarecimiento de la vida, a medio plazo logró sentar las bases para la economía española, que creció a una media anual de 6,7% entre 1961 y 1975. Según Powell y Tusell, este crecimiento económico no habría sido posible sin los ingresos del turismo, la demanda exterior de mano de obra y la inversión extranjera. Esta última pasó de 40 millones de dólares, en 1960 a 322 millones en 1965 y a 697 millones en 1970. Pese a que en un principio la mayor parte de esta inversión provenía de Estados Unidos, en la década de los sesenta fue aumentando la inversión de países europeos como Francia y Alemania. Por su parte, la demanda de mano de obra exterior fue un alivio para los niveles de desempleo que existían en España. Entre 1960 y 1973, se calcula que emigraron 2,3 millones de españoles, especialmente a Francia, Alemania, Suiza y Bélgica. Las remesas que éstos mandaban también fueron un aporte fundamental para la economía española, pasando de los 50 millones de dólares en 1960 a los 562 millones en 1969, y alcanzando los 1.543 millones en 1973. En términos porcentuales, entre 1959 y 1975, las remesas de los emigrantes financiaron el 50% del déficit comercial que tenía la economía española.

Por último, el turismo también fue un pilar del crecimiento económico, al aportar ingresos de 297 millones de dólares en 1960, de 1.157 en 1965 y de 3.404 en 1975. Además de su contribución a financiar el déficit comercial, el turismo aumentó el empleo y tuvo un impacto positivo en áreas como la construcción y el transporte, que a su vez, crecieron y aumentaron su productividad. El turismo también generó un proceso de “terciarización” de la sociedad, en donde el sector servicios cobró mucha importancia, ya que no sólo tuvo consecuencias económicas positivas para el país, sino también importantes consecuencias sociales relativas a la estructura ocupacional.

Ahora bien, además de las condiciones nacionales e internacionales que favorecieron el crecimiento económico, Encarna Nicolás apunta al crecimiento demográfico como un factor fundamental de dicho proceso, ya que repercutió inevitablemente en el empleo y el consumo. Así, si en 1950 España tenía 28 millones de habitantes, en 1960 llegaba a los 30 millones y a los 33 en 1970.<sup>37</sup> Este crecimiento demográfico aportó dinamismo a la economía española, aumentando los niveles de consumo y variando la composición de éste. Las nuevas formas de vida hicieron que en

---

<sup>37</sup> Encarna NICOLÁS: *La libertad encadenada*, Alianza, Madrid, 2005, p. 270.

la década de los 60 los españoles pudieran optar a productos y comodidades impensables en 1940.

Bajo esta nueva estructura de crecimiento económico se esconden cambios importantes en la economía tradicional española que resultarán indispensables para comprender, a su vez, los cambios en la sociedad. Una de las consecuencias más importantes del crecimiento económico español fue el notable descenso de la importancia del sector agrícola en el PIB. Si éste era de 24% en 1960, en 1976 apenas llegaba al 9%. Como contrapartida, la industria, que fue el motor del crecimiento aumentó su aportación al PIB del 35 al 39% entre 1960 y 1976, y finalmente, el sector terciario o de servicios, tuvo una espectacular expansión que llegó al 51% del PIB en 1976. Con esta nueva estructura de crecimiento, España claramente dejó de ser un país agrícola, para convertirse en uno industrial, y después en uno donde predominaba el sector terciario. Esta bonanza económica se vio fuertemente frenada por la crisis internacional del petróleo de 1974, y afectó especialmente a España por la dependencia energética que tenía. La crisis se tradujo en un descenso en todas las áreas de la economía, incluso en las inversiones extranjeras, y en un aumento de la inflación y del desempleo.

Es importante señalar que la transformación económica tuvo como consecuencia una transformación social significativa, al reducirse drásticamente la población dedicada a la agricultura mientras aumentaba la población empleada en el sector industrial. Si en 1950, los empleados en el sector primario eran más del 50% de la población, en 1975 apenas el 23% seguía ligado a éste.<sup>38</sup> Desde 1960, un tercio de la población española vivía en las capitales de provincia. El porcentaje de población rural era de 34,6% en 1960, cayendo al 20% en 1980.<sup>39</sup> La emigración masiva de jornaleros a las ciudades o al extranjero produjo esta disminución de empleos agrícolas, pero además, ayudó a constituir una nueva clase obrera urbana, que durante la década de los sesenta se diversificó y cualificó, desarrollando así una nueva cultura obrera, que será un elemento clave para el movimiento obrero.

A partir de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, dicho movimiento comienza a revitalizarse. El nuevo sistema de convenios tenía como objetivo aumentar la productividad en las industrias, pero además, intentaba crear nuevos espacios para la negociación entre patronos y obreros. Según Encarna Nicolás lo más importante de esta

---

<sup>38</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 29.

<sup>39</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 284.



ley fue que reconoció, aunque tibiamente, la negociación de las reivindicaciones laborales por parte de los obreros, y logró “la representatividad conjunta de obreros y patronos frente al texto del convenio”.<sup>40</sup>

Este sistema de negociación pretendía, como señala Maravall, vincular las reivindicaciones salariales con el aumento de la productividad. Para lograrlo era imprescindible el acuerdo entre patronos y obreros respecto de la relación que se establece entre salario y rentabilidad de la empresa.<sup>41</sup> En caso de que no se llegara a un acuerdo entre la patronal y los obreros, terciaba el Ministerio del Trabajo, determinando por ley las condiciones salariales de cada empresa. Sin embargo, el porcentaje de empresas en las que tuvo que intervenir el Ministerio del Trabajo fue mucho menor que el de aquellas que alcanzaban el acuerdo por la vía de los convenios colectivos. De esta forma, los obreros vieron en la Ley de Convenios Colectivos una oportunidad política a través de la cual podrían negociar sus demandas.

Por otra parte, el reconocimiento de la capacidad negociadora de la clase obrera dio un nuevo aliento a los sindicatos oficiales, al otorgarles de forma exclusiva la representatividad en la negociación colectiva. Según Charles Powell, a partir de la Ley de Convenios Colectivos y de la creación de nuevos canales para la negociación, la clase obrera optó por utilizar los resquicios que le ofrecía la sindicalización obligatoria impuesta por el régimen, mientras, de forma paralela, fomentaba la creación de organizaciones sindicales al margen del régimen.<sup>42</sup> En este sentido, la Ley de Convenios Colectivos también va a significar una revitalización para el movimiento obrero en la medida en que se debatirá la estructura de movilización del movimiento, o de determinados grupos del movimiento. Mientras algunos optan por estructuras institucionales que les brindaban los sindicatos legales, para utilizarlos como plataformas de organización, otros grupos preferían situarse fuera del sistema legal y crear sindicatos clandestinos.

Respecto de los repertorios de acción colectiva, la huelga fue el recurso más usado por la clase obrera, para presionar por mejoras salariales y laborales. Como hemos señalado antes, hay repertorios de acción que son históricos, y la huelga es uno de ellos. Los obreros la venían practicando desde hacía décadas, por lo tanto será la forma de acción más efectiva para el movimiento. Ahora bien, es importante destacar el

---

<sup>40</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 226 – 227.

<sup>41</sup> J.M. MARAVALL, *Dictadura y disenso*..., p. 55.

<sup>42</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 32.

cambio que se produce respecto de los marcos de significado, ya que el movimiento surgido en la década de los sesenta desarrolló una cultura política tendiente a la democracia y a la negociación. Ya no se veía al sindicato como un agente de revolución social, sino como una forma de obtener mejores condiciones de trabajo, y más tarde, como una plataforma para exigir la democratización del país. Maravall afirma que el sistema de negociación de convenios colectivos fue crucial para la reorganización del movimiento obrero, ya que proporcionó una base para la representación obrera, tanto legal como ilegal. Algunos empresarios preferían negociar directamente con los trabajadores, incluso con representantes no legales, para resolver los problemas laborales sin la intervención del gobierno.<sup>43</sup>

Este nuevo movimiento obrero significó todo un reto para el régimen, ya que la las organizaciones sindicales clandestinas comenzaron a combinar métodos de acción legales e ilegales. En 1960 se creó USO (Unión Sindical Obrera), que reunía a católicos y socialistas independientes; en 1962 se formaron las primeras comisiones supraempresariales en distintos puntos del país, y 1967 se celebró la primera asamblea nacional de Comisiones Obreras (CC.OO). Esta agrupación funcionaba en base a comités obreros y asambleas de fábrica, que se unificaron bajo el título de CC.OO, y tenía un fuerte vínculo con el PCE. Si bien las primeras reivindicaciones de este movimiento eran relativas a las condiciones de trabajo, el derecho a huelga y la sindicación libre, a partir del año 67 se fueron politizando, es decir, sus marcos de significado se ampliaron en sintonía con un movimiento de oposición general, que pedía la democratización del sistema político. Si entre 1963 y 1967 las huelgas de carácter político habían sido el 4% del total, entre 1968 y 1974 éstas llegaron a ser el 45%. Como explica Maravall, la respuesta del régimen frente al movimiento obrero fue la integración y la represión. La represión se ejerció a través de la policía, mientras que la integración “consistió en reformas parciales en la organización de los sindicatos verticales y en la legislación sobre relaciones de trabajo. Esta estrategia de integración incluyó la legalización de las huelgas “económicas”, en 1962, la reforma del Código Penal en 1965, la Ley Orgánica del Estado en 1966 y la nueva Ley sindical de 1971”.<sup>44</sup>

A principios de la década de los sesenta apareció el fenómeno de las huelgas locales o provinciales, como las ocurridas en Vizcaya, Vigo, Granada, Pamplona y otros lugares, que supusieron otro desafío al régimen franquista. Como era de esperar, éste

---

<sup>43</sup> J.M. MARAVALL, *Dictadura y disenso...*, p. 56 – 58.

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 70.

respondió con represión, que fue haciéndose más fuerte hacia el final de la década conforme crecían las huelgas. Si en 1969 hubo 500 huelgas, en 1975 se elevaron a 3.156.<sup>45</sup> Entre estos años murieron 11 trabajadores en los distintos enfrentamientos con la policía. De esta manera, el movimiento obrero a partir de los años 60 no sólo logró mayor organización y cohesión interna, sino también a contribuyó a deslegitimar al régimen, en la medida en que la nueva situación económica de apertura laboral se contradecía con la situación política rígida y autoritaria. Esta contradicción en el sistema fue aprovechada como una oportunidad política por el movimiento obrero para manifestar sus demandas a nivel sectorial y nacional. Por su parte, el régimen intentó tomar algunas medidas legales de apariencia aperturista, como la nueva Ley sindical de 1971 y el Decreto de 30 de abril de 1971, sobre derecho de reunión sindical, que fueron maquillajes de la antigua legislación.<sup>46</sup>

La clase media también sufrió una transformación importante, debido al crecimiento de la economía. Aumentó en número y se diversificó, integrándose en su mayoría al sistema capitalista que parecía traerles muchos beneficios. En este sentido, la renta per cápita española se duplicó entre 1960 y 1977, y los ingresos medios aumentaron de 290 dólares en 1955 a 2.486 en 1975.<sup>47</sup> Sin embargo, pese al crecimiento y a la movilidad social, la concentración de la riqueza seguía siendo enormemente desigual en España. Para las clases medias bajas y bajas, la década de los 50 fue una etapa de movilidad. Ya hemos comentado cómo, a partir del crecimiento económico, España pasó a ser una sociedad urbana. Sin embargo, muchas personas llegaban a las grandes ciudades en busca de mejores trabajos y mejores condiciones de vida y terminaban viviendo en poblaciones periféricas, sin los servicios necesarios de agua potable, alcantarillado, etc. Una forma de movilización que surgió de estas clases pero que involucró a muchos más sectores de la sociedad fueron las vinculadas a las asociaciones de vecinos y de consumo. Como señala Manuel Pérez Ledesma, estas asociaciones surgieron a mediados de la década de los 60, con la Ley de Asociaciones promulgada en 1964, pero su crecimiento más importante se produjo en la década de los 70. Este movimiento ciudadano va a crecer como una forma de reacción ante la represión del régimen, pero tuvo diversos objetivos, algunos relacionados con la vivienda, los servicios básicos y las condiciones de vida, y otros más bien políticos, de

---

<sup>45</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 55.

<sup>46</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 309.

<sup>47</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 37.

oposición al régimen. Debido a que las asociaciones de vecinos estaban legalizadas, muchos militantes de partidos opositores fundaron este tipo de agrupaciones para canalizar a través de ellas el descontento ciudadano. Así, entre 1964 y 1978, en Madrid se crearon más de 250 asociaciones.<sup>48</sup> El surgimiento de este tipo de asociaciones respondió a oportunidades políticas específicas, como la Ley de 1964, pero a la vez dichas asociaciones fueron oportunidades políticas en sí mismas, ya que funcionaron como plataformas para la organización de movimientos que estaban fuera de la legalidad. La combinación de objetivos sectoriales con objetivos políticos será una variable fundamental en los marcos de significado de este movimiento ciudadano, y la estructura de movilización de las asociaciones de vecinos o consumidores será utilizada también con fines políticos: una vez creadas las redes sociales entre asociaciones fue mucho más fácil organizar y movilizar a un grupo de ciudadanos descontentos.

Por su parte, el Estado no dejó de involucrarse en la economía nacional. El gasto público aumentó de 15% del PIB en 1960 a 24% en 1975, comenzando a generar un incipiente Estado de bienestar. El gasto público fue, inicialmente, destinado a la seguridad social, logrando que en 1973 el 84% de la población estuviera cubierta por la sanidad pública. Pero tampoco descuidaron la educación, aumentando el gasto en esta área de 9,6% del presupuesto en 1963 a 17,8% en 1975. Pese a esto, la inversión pública española en educación era muy baja con respecto a los países de Europa Occidental y la tasa de analfabetismo llegaba al 7%.

El gasto en educación fue especialmente importante para el ámbito universitario, que tuvo su correlato en un aumento explosivo de la población estudiantil, de alrededor de un 500% entre 1970 y 1975. El crecimiento de los estudiantes universitarios vino acompañado de una creciente radicalización política de los mismos, convirtiendo a la universidad en un lugar privilegiado para la lucha contra el régimen. Las oportunidades políticas del movimiento estudiantil fueron igualmente escasas que las del movimiento obrero, sin embargo, la misma estructura universitaria, la convivencia en los patios y las redes sociales que allí se establecen coadyuvaban para la organización de los estudiantes.

El movimiento estudiantil desarrolló una estrategia eficaz para evitar las detenciones y represión ocurridas a mediados de la década de los 50. Para ello se organizaron movilizaciones en torno a temas universitarios, como la falta de salidas

---

<sup>48</sup> M. PÉREZ LEDESMA: “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, p. 133.

laborales para algunas carreras. Los estudiantes también recurrieron a la huelga, pero fueron más innovadores en sus repertorios de acción colectiva, incorporando las sentadas, la ocupación de las aulas, las asambleas, etc. Con esto fueron consiguiendo la solidaridad de otros estudiantes no involucrados que comenzaron a preocuparse por el conflicto, aumentando así el espiral de movilizaciones.<sup>49</sup> El Sindicato de Estudiantes Universitario (SEU) era el organismo creado para la representación estudiantil, y pese a que era dirigido por falangistas, sirvió de plataforma para aquellos estudiantes disidentes que querían organizarse en torno a temas universitarios. De esta manera, entre los estudiantes opositores al régimen se producirá un debate sobre la participación en el SEU. Esta misma discusión se producirá a mediados de los años 60 con la creación de las Asociaciones Profesionales de Estudiantes.

En este sentido, la discusión sobre las estrategias de movilización fue clave dentro del movimiento estudiantil, ya que algunos dirigentes proponían utilizar la institucionalidad proporcionada por el SEU mientras otros preferían crear instancias de representación paralelas. Es necesario recordar que las Cámaras de Facultad fueron organismos importantes de representatividad, como señala Maravall: “las Cámaras de Facultad fueron obteniendo apoyo creciente por parte de los estudiantes: eran vistas como la verdadera representación a la que se había elegido y a la que se había dado un mandato, y a la que por tanto, había que apoyar frente al SEU y frente al gobierno. La capacidad movilizadora de las Cámaras de Facultad llegó a ser muy grande”.<sup>50</sup>

Diversas organizaciones de estudiantes se formaron al margen del SEU y de forma clandestina, como el FLP (Frente de Liberación Popular, 1958) y la ASU (Agrupación Socialista Universitaria, 1956). De esta forma, el cambio en el movimiento estudiantil en los sesenta consistió fundamentalmente en un creciente apoyo por parte de la población de estudiantes, y por cierto, un importante apoyo de parte de profesores disidentes. En este contexto, la creación de la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española, 1961), un sindicato democrático clandestino, fue fundamental para la movilización estudiantil ya que en torno a ella se organizaron diversos grupos de estudiantes disidentes.<sup>51</sup>

Estas organizaciones propiciaron la movilización y el conflicto con las autoridades, de manera que en 1965, a raíz de una Asamblea Libre de Estudiantes que

---

<sup>49</sup> J.M. MARAVALL, *Dictadura y disenso...*, p. 167.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 167.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 171.

rechazaba el SEU, éste fue disuelto por el régimen, no sin antes reprimir la asamblea y expulsar a profesores de prestigio que habían apoyado a los estudiantes. En 1966, en Barcelona, una reunión entre estudiantes, profesores e intelectuales en el convento de los Capuchinos, terminó con una feroz represión policial. A los pocos meses se formó el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB), y en abril de 1967 se creó el de la Universidad de Madrid. Durante los años 60, “el PCE [Partido Comunista de España] controló la política de oposición en la Universidad madrileña, sobre todo por su prestigio histórico, por su prestigio de ser para el régimen el enemigo oficial y por el prestigio de ser el único partido universitario con presencia en el movimiento obrero”.<sup>52</sup>

Además, es importante resaltar que los marcos de significado del movimiento estudiantil fueron muy amplios y variados: desde los que tenían que ver con problemas propios de los estudiantes y profesores, hasta los que reivindicaban cambios políticos. La influencia internacional también tuvo un papel muy importante en los marcos de significado del movimiento estudiantil, de esta forma en las universidades se desarrolló una subcultura a través de seminarios, discusiones públicas, debates, manifestaciones contra la guerra de Vietnam, etc., lo que permitió que las actividades se hicieran cada vez más públicas. Como consecuencia lógica, disminuyó la clandestinidad y las organizaciones estudiantiles eran más abiertas en su actuar y en su proselitismo y reclutamiento de militantes. Incluso, señala Maravall, se establecieron contactos con grupos de estudiantes de enseñanza secundaria y la información política empezó a circular dentro de los colegios.<sup>53</sup>

A partir de la llamada “caputxinada”, la dinámica de acción – represión entre los universitarios y la policía se hizo habitual, y la presencia de ésta en la universidad también. El punto álgido del conflicto se produjo en 1969, con protestas en las universidades de Madrid y de Barcelona. En la primera, la policía mató a un dirigente estudiantil del FLP, Enrique Ruano, lo que provocó una oleada de protestas en Madrid. En Barcelona, los estudiantes asaltaron el rectorado. La crisis de 1969 terminó con la reimposición del Estado de Excepción y la represión brutal contra los estudiantes. Tras esta movilización quedó claro que era imposible mantener un sindicato democrático de estudiantes, lo que produjo un debilitamiento del movimiento estudiantil, cuyos

---

<sup>52</sup> José ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970)*, Siglo XXI, Madrid, 2004, p. 185.

<sup>53</sup> J.M. MARAVALL, *Dictadura y disenso...*, p. 175 – 176.

dirigentes abandonaron las reivindicaciones relacionadas con la universidad para dedicarse a la oposición al régimen.

Pese a la fuerza con la que actuó, el movimiento estudiantil, no supuso, según Charles Powell, una amenaza seria para el régimen, ya que nunca logró coordinar sus acciones con las de otros movimientos sociales, como el obrero. A partir de 1969 la universidad se convirtió en una especie de reducto en donde predominaba el antifranquismo y se difundían las ideas democráticas.

Sin embargo, José María Maravall señala que sí hubo una coordinación entre obreros y estudiantes, especialmente después de la “caputxinada”. Como reacción a ésta se organizó en Madrid el Día Nacional contra la Represión, y entre marzo y mayo de 1966 se sucedieron manifestaciones y protestas. La importancia de dichas manifestaciones fue que el movimiento estudiantil consiguió acercarse al movimiento obrero y realizar algunas acciones comunes.<sup>54</sup> En este sentido, Maravall señala que la vinculación de los estudiantes con el mundo obrero era fundamental, pero que fue decayendo a partir de 1968, ya que el movimiento estudiantil comenzó a verse a sí mismo como la vanguardia de la oposición, reprochando al movimiento obrero por tener reivindicaciones limitadas. Así, según Maravall, “empezó a circular una teoría de sustitución política, según la cual los estudiantes debían proseguir la lucha en una situación de retraimiento proletario”.<sup>55</sup> Por su parte, Encarna Nicolás señala que si bien ambos movimientos fueron factores constantes de conflicto, los intereses de uno y otro eran diferentes y sus acciones en conjunto se suscribieron al marco de la solidaridad.<sup>56</sup>

La oposición al franquismo también se vio afectada por los cambios socioeconómicos de la década de los sesenta. Cada vez se hicieron más patentes las diferencias entre el gobierno de la República española en el exilio y la disidencia en el interior. En 1962 se celebró una reunión en Munich para estudiar la situación española. La reunión congregó a diversos dirigentes e intelectuales españoles en el exilio y a varios del interior. Pese a las diferencias, se llegó a una resolución común en dicha reunión, en la cual se expresaba que las instituciones europeas exigían un gobierno democrático, garantías de los derechos humanos, libertades sindicales y reconocimiento

---

<sup>54</sup> Ibid., p. 172-173.

<sup>55</sup> Ibid., p. 175-176.

<sup>56</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 365.

de los partidos políticos. El régimen no tardó en llamarlo el contubernio de Munich y no cedió un ápice en sus políticas autoritarias.<sup>57</sup>

Por su parte, la disidencia en el interior de España no enfrentaba menos dificultades que la del exilio. La oposición moderada, que se situaba al centro del espectro político, mantuvo una relación ambigua con el régimen. Estaba compuesta por miembros de la burguesía media y alta, ligada al mundo de la administración y de la cultura. Algunos participaron en el gobierno pero salieron desencantados de él, y muchos se dedicaron a apoyar a la disidencia, ejercieron como abogados defensores de estudiantes y obreros detenidos, y manifestaban su rechazo al régimen desde foros, medios de comunicación y asociaciones profesionales. Según Encarna Nicolás, las organizaciones más representativas de esta oposición moderada fueron Acción Democrática, liderada por Dionisio Ridruejo; Unión Española, con un tinte monárquico, encabezada por Joaquín Satrústegui; Democracia Social Cristiana, con José María Gil Robles a la cabeza; y Unión Democrática Cristiana, de tendencia más izquierdista, que pasaría a llamarse Izquierda Democrática bajo el liderazgo de Joaquín Ruiz - Giménez.<sup>58</sup>

Después de que a partir de 1948 el Partido Comunista abandonara la lucha armada, se convirtió en el mejor organizado y con mayor penetración social de toda la oposición. Hacia finales de los años 50, Santiago Carrillo impulsó un proyecto que consistía en combinar la movilización de masas, a través de la Huelga Nacional Pacífica, con el pluralismo político en la oposición al régimen. La política de reconciliación nacional impulsada por Santiago Carrillo tenía por objeto acabar con el aislamiento al que estaba sometido el PCE y generar una plataforma amplia de oposición. Su política de acercamiento a los movimientos obrero y estudiantil fue un éxito, por lo que el PCE era, hacia 1975, el partido que iba a la vanguardia de la lucha opositora.<sup>59</sup> En 1974 el PCE presentó la Junta Democrática, en donde participaban grupos de tendencia socialcristiana, el Partido Socialista Popular y algunos elementos carlistas. Como explica Tusell, la importancia de la Junta Democrática es que al ingresar a ella se estaba tomando posición ante el futuro inmediato.<sup>60</sup>

Por su parte, el PSOE había trabajado por construir nuevos núcleos de militantes en el interior de España mientras su directiva estaba en el exilio. En 1970, en el XXIV

---

<sup>57</sup> Ibid., 334.

<sup>58</sup> Ibid., p. 337.

<sup>59</sup> Ibid., p. 341.

<sup>60</sup> J. TUSELL, *Historia de España en el siglo XX*, p. 554.



Congreso del PSOE en Toulouse, se eligió por primera vez una directiva con más peso en el interior que en el exilio, lo cual originó un enfrentamiento importante entre las facciones de renovadores y los seguidores de la directiva en el exilio, presidida por Rodolfo Llopi. Finalmente, la contienda se resolvió a favor de los renovadores, que en 1974 eligieron a Felipe González como secretario general. Contrariamente a lo realizado por el Partido Comunista, el PSOE comenzó a radicalizar su discurso a partir de 1972 y rechazó la política de reconciliación nacional por considerarla una claudicación.<sup>61</sup> Defendió la vía de la ruptura para llegar a la democracia pero sus miembros sabían que no podían derrocar al régimen a través de los movimientos de masas. El PSOE nunca adhirió a la estrategia de la Huelga Nacional Pacífica impulsada por el PCE e incluso se negó a ingresar a la Junta Democrática. La política de alianzas era otra de las grandes diferencias entre los principales partidos de oposición. Por esta razón, en 1975 crearon la Plataforma de Convergencia Democrática, a la que lograron sumar importantes sectores de la oposición moderada. A ella se integraron Izquierda Democrática y la Unión Social Demócrata; sin embargo, el PSOE nunca planteó a la Plataforma como una alternativa de poder, sino más bien como un lugar de encuentro entre los opositores.<sup>62</sup>

Ante esta reorganización de la oposición, el régimen actuó con cierta cautela, llegando incluso a favorecer el desarrollo del PSOE para limitar la influencia del PCE. De esta forma, los partidos vivieron en un estado de semitolerancia, especialmente el PSOE que tenía el apoyo de gobiernos amigos como el de la República Federal Alemana. En este contexto, la oposición al franquismo ofrecía un amplio arco ideológico, pero no tenía la fuerza suficiente para derribar al régimen. Lo positivo era que fueran tolerados, aunque con ciertas cuotas de represión, ya que con ellos comenzó a recomponerse el espectro político y un incipiente sistema de partidos que será fundamental a la hora de la transición.

Además de la oposición política formalizada en partidos y movimientos, el régimen se vio enfrentado a grupos terroristas de reivindicaciones nacionalistas, cuyo máximo exponente es ETA. Creada a fines de 1959, ETA se decantó por la acción terrorista en 1967, con el fin de conseguir la autodeterminación del País Vasco. En 1968 se produjo el primer asesinato de un agente de la Guardia Civil a manos de ETA, el agente Pardines. De ahí en adelante, la espiral de violencia y muerte fue ascendiendo

---

<sup>61</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 62.

<sup>62</sup> Ibid., p. 63.

hasta que, en diciembre de 1973, asesinaron al Presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en un atentado con coche bomba. El punto de inflexión lo marcó el llamado proceso de Burgos en 1970. En él se sentenció a un grupo de etarras a penas de muerte y a más de quinientos años de prisión. Este proceso, celebrado bajo el Estado de Excepción, generó una fuerte movilización interna e internacional, llegando incluso hasta la intervención del Vaticano a favor de los condenados a muerte. Según Encarna Nicolás, el apoyo social a ETA aumentó tras el proceso de Burgos <sup>63</sup> pero el estado de tensión política tuvo consecuencias en la represión general de todos los movimientos de oposición al régimen. Los problemas causados por el terrorismo de ETA no sólo fueron contra el régimen, sino que persistieron durante la transición y lo hacen aún hoy.

El proceso de Burgos fue otra oportunidad política para los movimientos sociales, ya que provocó oleadas de protestas tan importante que el régimen decidió poner fin a la subversión. Según Pere Ysàs, dicho proceso fue un éxito para la oposición al franquismo ya que contribuyó a la extensión del disenso y reveló al gobierno que poner fin a la subversión era imposible.<sup>64</sup>

## **II. Transición a la democracia en España**

Es importante destacar que los procesos políticos como las transiciones a la democracia no se pueden reducir a una variante y que son producto de coyunturas políticas específicas en las cuales confluyen diversos factores que contribuirán al resultado final. Para el caso español, los estudios sobre la transición a la democracia son numerosos; sin embargo existen posturas muy diversas respecto de a quién corresponde el protagonismo de dicho proceso. José Casanova afirma que el primer momento de la transición se debió a un pacto negociado entre las fuerzas franquistas, como una reforma legal-constitucional desde arriba. Ésta habría sido la Ley para la Reforma Política aprobada en diciembre de 1976. Sin embargo, también distingue una segunda fase en el proceso de transición, en donde la presión desde abajo habría agilizado el proceso que se inició desde arriba, y durante el cual la oposición democrática no habría tenido

---

<sup>63</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 361.

<sup>64</sup> Pere YSÀS: “La crisis de la dictadura franquista” en Carme MOLINERO (ed), *La transición 30 años después*, p. 34.

opciones de negociar una ruptura.<sup>65</sup> En este sentido, Casanova distingue dos etapas en la transición española, en donde el protagonismo iría cambiando: la reforma se inicia “desde arriba” pero se acelera por la presión “desde abajo”. Con todo Casanova destaca que, para realizar una transición legal desde arriba, se requieren ciertas condiciones, como un régimen autoritario con algún grado de institucionalidad. En este contexto, según Casanova, mientras más institucionalizado esté el régimen, más importante será el papel de los gobernantes para dismantelarlo. “En España, como en los demás lugares, el proceso [de transición] sufría contingencias e incertidumbres, pero la meta final, la democracia, era el resultado deseado, intencionado y promovido de una decisión tomada por los gobernantes, una decisión que contaba con el apoyo y aprobación del pueblo y que igualaba el proyecto democrático de la oposición, de manera que se llegó a la democracia a través de un proceso de negociación consensuada”.<sup>66</sup>

Por su parte, Manuel Redero señala que todo proceso de transición suele venir precedido por una crisis del régimen anterior. También afirma que hay múltiples vías de transitar hacia la democracia, y ningún caso es idéntico a otro. Diversos autores han hecho clasificaciones de los distintos tipos de transición; la de Donald Share y Scott Mainwaring es, según Redero, la más operativa porque se basa en “el grado de control ejercido por las elites autoritarias, es decir, contempla el problema de la localización del poder en el transcurso de la transición”. En este contexto, el papel de la clase dirigente sigue siendo protagónico ya que es la que controla el poder y evita que éste se desplace hacia los extremos.<sup>67</sup> Los autores citados por Redero proponen la “transición vía transacción”, en la cual la dictadura todavía mantiene altas cuotas de poder y van a ser sus fuerzas las que dirijan la transición, al menos al comienzo de ésta. Este tipo de transición está controlada por los antiguos poderes dictatoriales, que a partir de cierto momento necesitan la colaboración y el pacto con la oposición, que también tiene un papel importante en la transición, aunque no protagónico.

Santos Juliá tiene una visión crítica de la idea de “transición por transacción”, ya que considera que esta modalidad ha convertido al pacto entre gobierno y oposición en una especie de “deus ex machina” que baja del cielo a solucionar los problemas que se

---

<sup>65</sup> José CASANOVA: “Las enseñanzas de la transición democrática en España”, *Revista Ayer*, nº 15, 1994, p. 33.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p. 38.

<sup>67</sup> Manuel REDERO: *Transición a la democracia y poder político en la España postfranquista (1975-1978)*, Librería Cervantes – Salamanca, España, 1993, p. 17-18.

van generando en el proceso de transición.<sup>68</sup> Desde esta perspectiva, Juliá señala que un pacto no puede explicar un proceso sin que él mismo sea antes explicado. No podemos comprender el proceso de transición si no dilucidamos antes cómo la clase dirigente y la oposición, desde sus respectivas posiciones y con sus enormes diferencias, lograron hacer un pacto. Juliá insiste lúcidamente en la idea de que no se puede pensar en el acuerdo entre gobierno y oposición como algo dado, sino que hay que estudiarlo “para construir una interpretación que tenga en cuenta los sujetos, la toma de decisiones, los diferentes tiempos del proceso”.<sup>69</sup> En este contexto, Juliá le otorga un protagonismo fundamental a la oposición al régimen, al señalar que mientras los proyectos reformistas dentro del gobierno fueron incapaces de conseguir acuerdos, los partidos de oposición buscaron socios y aliados desde el primer momento. Además, Juliá pone el acento en las movilizaciones obreras y ciudadanas que contribuyeron a que la oposición buscara una política unitaria. Problematicando la teoría de la “transición por transacción” Juliá señala que todos los sucesos de 1976 y parte de 1977, como la primera amnistía, la legalización de los partidos políticos y la convocatoria a elecciones no fueron fruto del pacto sino del fracaso del proyecto continuista. Juliá habla de pacto sólo cuando se producen las primeras elecciones y ninguno de los partidos políticos logra la mayoría absoluta.<sup>70</sup>

Por su parte, Javier Tusell concede un grado importante de protagonismo a las autoridades del gobierno, en especial al Rey Juan Carlos, ya que en él residían la legitimidad tradicional de la monarquía y la legitimidad del régimen de Franco, que después se cambiará por la legitimidad democrática. Sin embargo, Tusell también le otorga un papel fundamental a la oposición al régimen. A diferencia de Casanova y Redero, que ponían el acento en el papel de las clases dirigentes, Tusell señala que sin la existencia de una oposición organizada y fuerte, no se puede explicar el resultado final del proceso.<sup>71</sup> Señala Tusell que “el poder y la oposición se complementaron manteniendo una relación dialéctica y no poco complicada cuyo resultado fue, sin embargo, positivo. Quizás el resultado final estuvo más de acuerdo con lo que quería la

---

<sup>68</sup> Santos JULIÁ: “En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados”, en Carme MOLINERO, *La transición 30 años después*, p. 60.

<sup>69</sup> Ibid., p. 62.

<sup>70</sup> Ibid., p. 72.

<sup>71</sup> Javier TUSELL: “La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia política”, en *Revista Ayer* nº 15, 1994, p. 67.

segunda, pero el primero de ninguna manera perdió en ningún momento el control de los acontecimientos y protagonizó, en lo esencial, todo el proceso”.<sup>72</sup>

Finalmente, Manuel Pérez Ledesma ha incluido nuevas variantes respecto de los protagonismos en el proceso de transición, fundamentalmente las movilizaciones sociales. En este sentido, los historiadores sociales le han otorgado mucha importancia a la llamada “presión desde abajo”, ya sea desde el movimiento obrero, como señala Maravall, o desde las movilizaciones sociales en general, como señalan Carme Molinero y Pere Ysàs. Esta interpretación nos parece fundamental para nuestro trabajo, ya que, sin dejar de lado la importancia de los actores políticos, se le concede un papel impulsor a la sociedad civil. Además, según una encuesta realizada en 1985 por el Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que se preguntaba por las razones que llevaron a Suárez a impulsar la democracia, un 55% de los encuestados afirmó que había sido la presión de la calle, frente a un 13% que señaló que lo hizo por sí mismo.<sup>73</sup>

En este contexto, la ciudadanía se siente partícipe del proceso de transición desde sus inicios, y no sólo a partir de las elecciones de 1977. A través de las manifestaciones y del voto, la sociedad civil fue exigiendo sus demandas. Esta actividad se debe, en gran medida, a las oleadas de acciones colectivas y protestas que se habían sucedido a partir de los años 60, y que si bien no fueron capaces de derribar al régimen, sí crearon una determinada cultura política orientada hacia la participación y la democratización del sistema político.

El proceso de transición a la democracia para el caso español tiene límites cronológicos bastante claros. En este caso seguimos a Javier Tusell, quien fija como inicio 1975, el año de la muerte de Franco, y como fin, 1982, el año de la llegada del PSOE al poder. Si bien toda limitación cronológica es arbitraria, nos parece que la fijada por Tusell corresponde a un criterio compartido por diversos autores, ya que hacia 1982 el proceso político de transición parecía terminado, dando paso a la estabilidad democrática representada en el importante cambio de signo político del gobierno.

Ahora bien, como todo proceso de transición, la española estuvo rodeada de incertidumbres y temores. No había un itinerario a seguir, sino solamente el deseo de la sociedad civil y las intuiciones de la clase política que, por lo demás, no estaba unida en torno a una idea común. Muchos de los políticos cercanos a Franco no querían la apertura del sistema ya que lo consideraban como una traición al legado del “Caudillo”,

---

<sup>72</sup> Ibid., p. 68.

<sup>73</sup> M. PÉREZ LEDESMA, “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, p. 126.

después de su muerte. Los sectores más blandos del gobierno sabían que era necesario un cambio de rumbo, sin embargo, no tenían muchas nociones de cómo hacerlo. Se presentaron así proyectos divergentes. Uno pseudo reformista por parte de los sectores continuistas, otro reformista, por parte de los sectores más blandos del gobierno y otro rupturista, por parte de la oposición. Este último proyecto fue acompañado de una importante movilización social, huelgas y manifestaciones que provocaron incertidumbre y temor entre la población. Además, a principios de la década de los 70 surgieron algunos grupos de extrema izquierda, como GRAPO (1973), y que pese a contar con muy poco respaldo utilizaron la lucha armada, con nulo éxito, para intentar derribar al régimen. Después de 40 años de dictadura, la sociedad española volvía a enfrentarse al juego político con diferentes facciones. Cuarenta años no pasan en vano y para las generaciones que se educaron bajo Franco, la desacostumbrada situación que se dio en 1976 podía parecerse a la de 1936. Como señala Paloma Aguilar, “aunque exagerada, la similitud entre la situación española de los años treinta y la de los setenta a la muerte de Franco existía, siendo precisamente este símil el que produjo el miedo a la repetición. No era tan importante que las cosas hubieran cambiado realmente o no respecto de la II República, sino que la percepción subjetiva de la gente, la fuerza con que el presente evocaba aquel pasado”.<sup>74</sup>

En este contexto, en 1976 Adolfo Suárez es nombrado Presidente de Gobierno por el Rey Juan Carlos, y puso en marcha un proyecto político reformista, que hablaba de democracia y evitaba toda idea de continuación del pasado. El primer paso en este proyecto fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que en pocas palabras significaba la disolución de las Cortes franquistas y la convocatoria a elecciones de un Congreso bicameral con 350 diputados y 204 senadores, de los cuales una quinta parte sería elegida por el rey. Tras numerosas dificultades dentro del gobierno y de las Cortes, Suárez logró que se aprobara la Ley para la Reforma Política con 425 votos a favor y 59 en contra. Después, la reforma fue aprobada por amplia mayoría (94,1%) en el referéndum nacional celebrado el 15 de diciembre de 1976. Según explica Santos Juliá, la Ley para la Reforma Política fue esencial para el desmantelamiento de la institucionalidad franquista, al incorporar al proyecto reformista un elemento esencial del proyecto rupturista, la convocatoria a elecciones generales.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Paloma AGUILAR: *Memoria y olvido de la Guerra civil española*, Alianza, 1996, p. 36.

<sup>75</sup> S. JULIÁ, “En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados”, p. 76.

Con las Cortes franquistas disueltas, el gobierno se avocó a la difícil tarea de reorganizar la institucionalidad y crear las condiciones necesarias para que se celebraran las primeras elecciones democráticas en casi 40 años. Por su parte, la oposición presionaba por una vía rupturista para llegar a la democracia; pero debido a la poca acogida de esa propuesta, que se puede observar en la poca aceptación que tuvo el llamamiento a la abstención en el referéndum de diciembre de 1976, los partidos de izquierda decidieron involucrarse en la vía reformista. En este contexto es necesario destacar el cambio de estrategia del PCE, que se fue moderando tras la muerte de Franco, para conseguir su legalización. El ejemplo más emblemático es la aceptación de la monarquía como sistema de gobierno y el abandono de la ruptura democrática por la ruptura pactada. Sin duda, la legalización del PCE fue un problema para el gobierno, ya que si no lo hacía se podía cuestionar la transparencia de las futuras elecciones, pero si lo llevaba a cabo, la reacción de los sectores más fieles a Franco y especialmente del Ejército podría ser desestabilizadora. Como señala Álvaro Soto, la legalización del PCE fue una decisión del propio Suárez, “y, aunque tuvo un indudable costo, supuso dotar al proceso político de credibilidad democrática”.<sup>76</sup>

De esta manera se llegó al 15 de junio de 1977, el día de las elecciones generales, a través de las cuales se configuró un nuevo sistema de partidos. En ellas, el partido articulado por Adolfo Suárez, UCD, triunfó con el 34% de los votos, seguido del PSOE, con el 29%. El PCE quedó bastante atrás con apenas el 9,3%. La principal tarea del parlamento recién escogido fue la de redactar una constitución que garantizara la nueva institucionalidad democrática para España. La tarea no fue fácil ya que en ella se reencontraron los antiguos enemigos en la guerra civil, sin embargo, primó el espíritu del consenso, y se construyó sobre los puntos que tenían en común, dejando las diferencias para más adelante. La Constitución se sometió a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978, y fue aprobada por el 87% de la ciudadanía. Esto supuso la disolución de las primeras Cortes democráticas tras la dictadura franquista, y la convocatoria a elecciones para el 1º de marzo de 1979.

Pese a los importantes niveles de participación obtenidos en las elecciones y referendos realizados desde la muerte de Franco, las elecciones de 1979 mostraron el desencanto de la población, que se tradujo en una abstención que llegó al 32%. UCD volvió a obtener mayoría, con un 35% de los votos, seguido nuevamente por el Partido

---

<sup>76</sup> Álvaro SOTO: *Transición y cambio en España, 1975-1996*, Alianza, Madrid, 2006, p. 83.

Socialista, con un 30,5%.<sup>77</sup> Durante la segunda legislatura de UCD se realizaron diversas elecciones municipales que acortaron la brecha entre el partido gobernante y el PSOE, en las que se fue haciendo patente el hundimiento de UCD. Como señala Powell, las distintas facciones del partido comenzaron a producir fisuras que la figura de Adolfo Suárez no logró unir.<sup>78</sup> A esto se sumaron las discusiones en torno a los Estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña que generaron debates más acalorados que la propia Constitución. Las derrotas de UCD en el parlamento y las diferencias importantes surgidas en el seno del partido hicieron que Suárez renunciara a la jefatura de gobierno el 26 de enero de 1981, proponiendo en su lugar a Leopoldo Calvo Sotelo.

El día de la investidura del nuevo jefe de gobierno se vivió uno de los más complejos momentos de la transición, cuando el coronel Antonio Tejero entró en el hemiciclo con un grupo de guardias civiles armados, dispuesto a dar un golpe de estado que acabara con el sistema democrático e impusiera un gobierno de “salvación nacional”. El 23 de febrero de 1981 quedó en la memoria de los españoles como el día en que pudo revertirse el largo y difícil proceso que hasta entonces se había llevado a cabo. Sin el apoyo del Rey ni de la mayoría de los generales (aunque algunos no manifestaron su rechazo con claridad hasta que lo hiciera el Rey), el golpe fue un fracaso y sólo consiguió atemorizar a gran parte de la población que no dudó en ponerse del lado de la democracia. La gran paradoja de este oscuro episodio fue que contribuyó a la consolidación del sistema democrático, lo que quedó demostrado el 27 de febrero, cuando millones de españoles salieron a las calles, en las distintas ciudades del país, gritando consignas como “El pueblo unido jamás será vencido”, “Democracia y libertad”, “Democracia sí, dictadura no”.<sup>79</sup>

En 1982 se convocaron nuevas elecciones en las que el fracaso de UCD fue definitivo. Estas elecciones lograron movilizar al electorado desencantado y la participación alcanzó el 79,8%, según Álvaro Soto, la más alta hasta la fecha, lo que tuvo como consecuencia un efecto relegitimador del sistema político.<sup>80</sup> En estos comicios, el PSOE obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, con el 48,4% de los votos, lo que le permitía gobernar en solitario. En segundo lugar quedó Alianza Popular con el 26,5%, mientras que UCD se convertía en la cuarta fuerza política incluso detrás de los

---

<sup>77</sup> A. SOTO, *Transición y cambio en España*, p. 138.

<sup>78</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 280.

<sup>79</sup> *EL PAÍS*, sábado 28 de febrero de 1981, p. 11.

<sup>80</sup> A. SOTO, *Transición y cambio en España*, p. 180.



nacionalistas catalanes. De esta manera, el líder del PSOE, Felipe González, accedió a la jefatura de gobierno, y con él, una generación política reformista, completamente desligada de la dictadura y que había militado en la oposición democrática.<sup>81</sup>

Sobre este telón de fondo político, lleno de incertidumbre, los movimientos sociales no dejaron de estar presentes y manifestarse cada vez que la situación lo requería o sus intereses estaban en juego. El movimiento sindical fue el primero en movilizarse debido a diversos factores. En primer lugar, a la nueva situación política que se estaba gestando, la cual fue vista por algunos sectores como una oportunidad para fortalecer al sindicalismo español, para manifestar sus reivindicaciones sectoriales y sus demandas de democratización. No debemos olvidar que durante la dictadura, la clase obrera urbana fue adquiriendo una cultura política tendiente a la democratización más que a la revolución social, como había sido anteriormente. En segundo lugar, la crisis económica que atravesaba España a mediados de los años 70 provocó una nueva oleada de movilización de los obreros en defensa de sus trabajos, salarios y condiciones de vida. En 1975 se produjo el momento de mayor crecimiento de las movilizaciones, y en 1976 se superaron las 8 mil huelgas.<sup>82</sup> Los principales sectores de conflicto fueron el metalúrgico y el de la construcción, pero también se llevaron a cabo paros laborales en empresas públicas estratégicas, como Telefónica, Renfe y Correos. Algunos de los factores más interesantes de analizar en este tipo de manifestaciones son los objetivos de las huelgas. Si bien muchas de ellas tenían por objeto reivindicaciones económicas, también se sumaban las peticiones de amnistía y libertades políticas y civiles. Las huelgas tenían un fuerte componente político que sumaban (y a veces incluso eclipsaban) a sus peticiones económicas.

Los sindicatos recién legalizados presionaron al gobierno de Suárez, que quería imponer un plan económico de urgencia destinado a controlar la inflación para lo cual se devaluaría la peseta. CC.OO tuvo un papel más conciliador, dispuesto al pacto social, mientras que UGT y el PSOE no aceptaron la propuesta. Así, el gobierno se decidió a negociar directamente con los partidos. De aquí surgieron los llamados Pactos de la Moncloa, en los cuales todos los partidos se mostraron partidarios del control de la inflación y el saneamiento de la economía. Como destaca Charles Powell: “La originalidad de los acuerdos de la Moncloa radica en que, a cambio de aceptar las medidas de saneamiento propuestas por el gobierno, la oposición exigió la

---

<sup>81</sup> A. SOTO, *Transición y cambio en España*, p. 191.

<sup>82</sup> Nicolás SARTORIUS y Alberto SABIO: *El final de la dictadura*, Temas de Hoy, Madrid, 2007, p. 79.

incorporación de un importante paquete de reformas que pretendían el desmantelamiento de las instituciones corporativas del régimen anterior, introduciendo en algunos casos a los agentes sociales en el proceso de toma de decisiones”.<sup>83</sup>

Manuel Pérez Ledesma señala que en 1977 las movilizaciones continuaron y lograron algunos éxitos importantes como el reconocimiento del derecho de huelga, la libertad de asociación y la desaparición de algunas instituciones franquistas como el Tribunal de Orden Público, la Organización Sindical y el Movimiento Nacional.<sup>84</sup> Y aunque fue el año de las primeras elecciones, la movilización obrera y sindical no cedió hasta alcanzar su punto culminante en 1979 con casi 6 millones de huelguistas. Ya en 1978, las protestas obreras estaban relacionadas directamente con objetivos económicos, en el sentido de superar las políticas y acuerdos recogidos en los Pactos de la Moncloa. De esta forma, podemos observar que en este brevísimo recorrido por el movimiento obrero, el proceso de transición a la democracia marcará un punto de inflexión en diversos sentidos. Por un lado, los sindicatos ya no actuaban en la clandestinidad lo que les permitía expandirse con mayor facilidad. Además, la fuerza que habían demostrado durante el tardofranquismo y los primeros años de la transición hizo que el gobierno se diera cuenta de que no podía articular el cambio de sistema político de espaldas a los movimientos sociales. Y por último, una vez que el movimiento obrero consiguió avances, tanto en materia económica como de libertades individuales, volvió a movilizarse para defenderlas cuando lo creyó necesario.

Como hemos señalado anteriormente, en la década de los 60 las asociaciones de vecinos proliferaron en los distintos barrios con demandas acotadas, relacionadas con el problema de la vivienda y los servicios básicos, cuyas formas de acción se mantenían dentro de la legalidad. Sin embargo, durante la transición el movimiento ciudadano salió a la calle a manifestar su descontento por la situación económica. Protestaban por el alza del precio de la vida, pedían la construcción de viviendas dignas y reivindicaban el derecho de legalización para asociaciones con fines políticos. De esta manera, al igual que el movimiento obrero, el ciudadano manifestó una diversidad de identidades colectivas en su interior y combinó reivindicaciones económicas con valores democráticos. El movimiento vecinal se radicalizó debido a la extensión de las protestas de los otros movimientos sociales, y cooperó con las luchas obreras de los distintos barrios, recolectando ayudas económicas. Según Encarna Nicolás, esta relación que se

---

<sup>83</sup> Ch. POWELL, *España en democracia*, p. 206.

<sup>84</sup> M. PÉREZ LEDESMA, “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, p.130.

produjo entre el movimiento vecinal y el obrero provocó un cambio en las demandas del primero, que inicialmente eran urbanas y pasaron a ser políticas.<sup>85</sup>

En Madrid, en 1976, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (no legalizada hasta noviembre de 1977) convocó a una de las manifestaciones más concurridas de ese año. El 22 de junio se reunieron más de sesenta mil personas en el centro de Madrid, manifestándose a favor de la amnistía y de la legalización de las asociaciones, y en contra del alza de precios de los productos básicos.<sup>86</sup> Este tipo de manifestaciones se reprodujeron en Barcelona y Bilbao, combinando objetivos específicos del movimiento ciudadano con otros relacionados con la situación política.

El movimiento vecinal fue clave, ya que como señalan Sartorius y Sabio, las asociaciones de vecinos se habían convertido en una plataforma cívica que lograba traspasar las inquietudes e iniciativas ciudadanas a la esfera pública.<sup>87</sup> Es importante destacar que el movimiento vecinal estuvo relacionado con algunos partidos de oposición, fundamentalmente el PCE y el PSOE; sin embargo, logró mantener cierta independencia durante los años de la transición.<sup>88</sup> En estos años, la confluencia de identidades y de reivindicaciones harán que el movimiento vecinal tome el nombre de ciudadano porque, una vez que alcanza fuerza suficiente, ya no será la identidad obrera, de consumidor o de vecino la que primará sino que será la identidad de ciudadano como un sujeto de derechos y deberes, que no solo puede sino que debe involucrarse en el gobierno. Es por esto que una de las principales reivindicaciones de este movimiento fue la elección libre y democrática de los alcaldes y concejales.<sup>89</sup> Sin embargo, una vez que en 1979 se celebren elecciones de este tipo, el movimiento ciudadano terminará fragmentándose y perdiendo fuerza.

Otro movimiento transversal que unió a distintas identidades colectivas en torno a un valor simbólico fue el movimiento a favor de la amnistía. Si bien movimientos contra la represión del franquismo habían existido desde antes de la transición (basta recordar las movilizaciones ocurridas a raíz del proceso de Burgos), fue durante ésta que la reivindicación de la amnistía se convirtió en un elemento aglutinador del antifranquismo.

---

<sup>85</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 385.

<sup>86</sup> SARTORIUS y SABIO, *El final de la dictadura*, p. 201.

<sup>87</sup> Ibid., p. 198.

<sup>88</sup> Ibid., p. 203.

<sup>89</sup> M. PÉREZ LEDESMA, “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, p. 136.

En enero de 1977 decenas de miles de españoles asistieron al homenaje que se hizo a los abogados de Atocha, asesinados por un grupo de extrema derecha. Las primeras manifestaciones fueron convocadas por el PCE pero después cada grupo organizó las suyas en reclamo de los que habían defendido las reivindicaciones del sector. El momento crucial de las manifestaciones a favor de la amnistía llegó en la “Semana pro Amnistía”, realizada del 7 al 12 de julio de 1977, convocada por la Coordinación Democrática. A ella se sumaron numerosas organizaciones de origen sindical, vecinal, estudiantil, etc. Este movimiento masivo logró que el 30 de julio el gobierno dictara una Ley de Amnistía; sin embargo, las movilizaciones no pararon y se realizaron protestas en el País Vasco, Navarra y Madrid, que terminarían por presionar al gobierno a aprobar un indulto a los presos en marzo de 1977 y otro más amplio en octubre de ese mismo año.<sup>90</sup> Pese a que el movimiento por la amnistía tuvo su momento crucial durante la transición, las manifestaciones y protestas no fueron incruentas. En mayo de 1977, la semana pro amnistía organizada en el País Vasco se saldó con cinco muertos.

Otro movimiento que contribuyó de forma importante a la agitación social en el tardofranquismo y durante la transición fue el movimiento estudiantil. Ya hemos visto un sintético panorama de su actuación durante los últimos años de la dictadura, aunque es importante puntualizar que tras el proceso de Burgos y de las manifestaciones que generó, el movimiento estudiantil perdió su fuerza y reivindicaciones específicas y sus líderes optaron por involucrarse en la lucha política extra universitaria a favor de la democracia, dejando al movimiento en un proceso de repliegue. En 1979 se volverán a producir nuevas oleadas de movilizaciones en contra de la Ley de Autonomía Universitaria.

Ahora bien, podríamos pensar que durante la transición, el temor al conflicto morigeró el actuar de los movimientos sociales; sin embargo sucedió lo contrario. El vacío de poder generado tras la muerte de Franco y las vacilaciones del gobierno de Arias Navarro respecto del camino a seguir fueron vistas como oportunidades políticas por los movimientos que ya existían para ampliar su campo de acción, y con ello arrastraron a grupos más pequeños o nuevos que se sumaron a las oleadas de protesta de los años 1975 – 1977. En este sentido, y siguiendo a Pérez Ledesma, los movimientos sociales crearon ciertos marcos de referencia, identidades colectivas que les permitieran

---

<sup>90</sup> Ibid., p. 138-139.

unirse a favor de la democracia. Así, fue necesario que compartieran una cultura política, “entendida como un conjunto de actitudes, valores y símbolos que legitimen la acción y determinen sus objetivos”.<sup>91</sup>

De esta manera, vemos que el papel de los movimientos sociales en el tardofranquismo y en la transición es fundamental para impulsar el cambio de sistema político. Con esto no queremos decir que fueran ellos los únicos impulsores ni restarle importancia a la clase política, pero creemos que no se puede dar una explicación coherente y completa de la transición a la democracia española sin tener en cuenta el papel que en ella jugaron los movimientos sociales y sus reivindicaciones. Pese a vivir durante casi 40 años bajo un régimen autoritario, importantes sectores de la sociedad española habían logrado imbuirse de una cultura política democrática.

Según Santos Juliá, la cultura política democrática que fue adquiriendo la sociedad española corresponde a un nuevo lenguaje que fue lentamente incorporado y asumido por los ciudadanos. En este sentido, la cultura política democrática no fue una herencia del lenguaje de la revolución social de los años 30, sino un lenguaje completamente nuevo que explica por qué las opciones rupturistas y continuistas de la transición no tuvieron éxito. Si bien los ciudadanos querían democracia, también querían paz y orden.<sup>92</sup> En este sentido, el recuerdo de la guerra civil todavía estaba presente y ayudó, como señala Paloma Aguilar, a moderar las demandas de todos los grupos políticos y a legitimar nuevas formas de realizar las transformaciones políticas.<sup>93</sup>

Es por esto que para los movimientos sociales la adhesión a la democracia fue siempre de la mano con el sentido de moderación, que logró subordinar los objetivos de la movilización al fin fundamental que significaba el cambio de sistema político. Por esta razón intentaron evitar, aunque no siempre lo lograron, los enfrentamientos con la policía. Y por último, una vez conseguida la democracia y las reivindicaciones más importantes, se puso fin al ciclo de protesta, lo que nos indica que una vez obtenidos sus objetivos, los movimientos sociales se desmovilizaron y dejaron que el nuevo sistema comenzara a funcionar con normalidad.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid., p. 147-148.

<sup>92</sup> S. JULIÁ, “En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados”, p. 179-180.

<sup>93</sup> P. AGUILAR, *Memoria y olvido de la guerra civil ...*, p. 211.

<sup>94</sup> M. PÉREZ LEDESMA, “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, p. 151.

### III. El caso chileno: neoliberalismo y movilización social

La situación chilena difiere bastante de la española si tenemos en cuenta la duración del régimen de Pinochet y la diferencia fundamental en las políticas económicas implantadas. Como señalamos anteriormente, si en España se pasó del capitalismo autárquico a un capitalismo abierto, pero siempre con una importante participación del Estado, en Chile sucedió lo contrario.

Los economistas neoliberales, auspiciados por el régimen militar, pudieron revertir por completo el intervencionismo estatal que había caracterizado a la economía chilena, para dar paso a un sistema neoliberal. Los Chicago Boys, como eran llamados los economistas neoliberales, culpaban al estatismo del bajo crecimiento económico y de la inflación. Una de sus primeras medidas fue abrir la economía, aprovechando las ventajas comparativas del país en los mercados de exportación. Para imponer estos objetivos era necesario establecer un sistema de mercado que reemplazara a la habitual dependencia estatal. En este nuevo sistema, el Estado sería el regulador, pero ya no el motor de la economía. Para comenzar con las reformas económicas, el régimen tuvo que imponer una política de shock; el gasto fiscal bajó en más de un 25%, el volumen de circulante fue controlado firmemente y las tasas de interés se triplicaron.

Los efectos de esta política fueron devastadores para la sociedad: el desempleo subió un 29% y los salarios reales bajaron hasta un 60% respecto de su monto en 1970. A fines de 1975 el PIB había disminuido en un 15% y la producción industrial en un 25%. Las dificultades económicas que esto causó a la población hicieron que el gobierno creara el Programa de Empleo Mínimo (PEM), con salarios muy bajos. En 1976, el PEM financiaba a 200.000 hombres que trabajaban en la pavimentación de carreteras y otras labores similares. Pese a la recesión, el programa neoliberal siguió adelante; se privatizaron 400 compañías estatales y se dejó un grupo de empresas consideradas estratégicas dentro del sector público. Las privatizaciones, que se sucedieron durante todo el período de la dictadura, fueron excelentes oportunidades para los grupos económicos y algunos de ellos lograron construir grandes imperios empresariales. La economía chilena empezó a salir de la recesión hacia 1977, con un alza del PIB del 7% anual y con una inflación de dos dígitos y finalmente uno, 9,5% en 1981.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Sofía CORREA et al.: *Historia del siglo XX chileno*, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001, p. 293.

A fines de los años 70 también se van a comenzar a aplicar reformas importantes para la sociedad, como el Código del Trabajo y el Plan Laboral, que reestructuraban las relaciones entre trabajadores y empresarios. También se reorganizan los sindicatos, aunque su papel va a estar limitado por la ley para acotar su poder. La sindicalización sufrió una paralización importante: si en 1973 llegaba a los 933.000 afiliados, en 1979 había descendido a los 395.951 miembros en sindicatos reconocidos legalmente. La Central Única de Trabajadores (CUT), principal organización del movimiento sindical chileno, había sido ilegalizada y muchos de sus líderes encarcelados y exiliados. También se llevaron a cabo despidos masivos, y las organizaciones sindicales que lograron mantenerse fueron sometidas a reglas muy estrictas: no se podían realizar reuniones sin previa autorización y sin la presencia de la policía, y las elecciones sindicales y la negociación colectiva estaban prohibidas.<sup>96</sup>

En este contexto, la Junta Militar intentó desarrollar nuevos sindicatos de tipo vertical, para lo cual creó la Central Nacional de Trabajadores (CNT), pero no tuvo mayores logros. Los líderes sindicales que permanecían en Chile como Tucapel Jiménez y Manuel Bustos de la Democracia Cristiana, se reunieron y formaron lo que se conoció como “el grupo de los diez”. Esta fue la primera forma de oposición al régimen que, si bien no era poderosa, contaba con el apoyo internacional de AFL-CIO. Los conflictos entre “el grupo de los 10” y el gobierno serán especialmente importantes tras la promulgación del nuevo Código del Trabajo, en 1978. En dicho código se ampliaban las causas de despido, se extendía hasta los 21 años de la edad de aprendizaje (con una remuneración equivalente al 60% del salario mínimo), se ampliaba también la duración legal de la jornada de trabajo de 8 a 12 horas. Esto implicó el empeoramiento de las condiciones laborales, por lo que no resulta extraño que la AFL-CIO haya amenazado al gobierno chileno con el boicot internacional.<sup>97</sup>

En 1980 se aprobó el nuevo Plan Laboral que reconocía un estatuto sindical pero muy reducido, apuntando así a favorecer la multiplicación y por tanto, la difusión del poder sindical. El Plan reconocía el derecho de organización sindical pero sólo dentro de la empresa; además defendía la afiliación voluntaria y el pluralismo sindical. Las reformas laborales apuntaban a revitalizar los pilares de la economía de mercado, la libertad de precios, la apertura a mercados internacionales, reforzar los derechos de

---

<sup>96</sup> Patrick GUILLAUDAT y Pierre MOUTERDE, *Los movimientos sociales en Chile 1973-1993*, LOM, Santiago, 1998, p. 107.

<sup>97</sup> Ibid., p. 108.

propiedad, etc. Sin embargo, se prohibía la negociación colectiva, los sindicatos por ramas productivas e interempresas.

La negociación colectiva fue el principal escollo del nuevo Plan. En el artículo 12 se estipulaba que estaban excluidas de su campo de competencia aquellas materias que “limitan la facultad del empleador para organizar, dirigir y administrar su empresa”. Además precisaba que solamente serían negociables los salarios y las condiciones de trabajo, excluyendo a priori de la discusión todo aquello que se relacionaba con el ritmo de la producción, el sistema de promociones o el manejo de la maquinaria.<sup>98</sup> El derecho de huelga también estaba regulado de forma que se reconocía pero bajo condiciones muy estrictas. La huelga no podía durar más de 60 días, la decisión de paralizar el trabajo podía ser abandonada si el 10% de los empleados lo exigía y el empresario siempre podría contratar trabajadores de reemplazo. Además, ciertas actividades llamadas de utilidad pública - como la salud, la seguridad nacional, el aprovisionamiento - no podían recurrir a la huelga.

Según Patrick Guillaudat, este plan transformó por completo el sindicalismo chileno, ya que hizo proliferar los sindicatos pequeños, circunscritos a una empresa determinada, cuyo promedio de afiliados era de 71. La drástica baja en la sindicalización se vio profundizada por los efectos de la crisis de 1981 – 1983, ya que el número de afiliados a los sindicatos oficialmente reconocidos bajó de 395.951 en 1979 a 320.903 en 1983. En total, los obreros afiliados no representaban más que el 8,7% de la fuerza de trabajo y el 10,2% de los trabajadores ocupados.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos del régimen por constreñir su actividad, el movimiento sindical fue el que causó mayores problemas al gobierno. Su despertar fue lento, y en un principio, muy apegado a la legalidad vigente, pero en 1977 se produjo un cambio importante. El 7 de enero de ese año se creó, al margen de la ley, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) que logró reagrupar a una serie de sindicatos ilegalizados, cercanos a la antigua CUT, con un discurso combativo y disidente en el que coincidirían comunistas y demócrata-cristianos como el ya mencionado Bustos. Así, se llevaron a cabo huelgas y manifestaciones de protesta en sectores estratégicos de la economía chilena, como el cobre y la siderurgia. Las huelgas en las minas de cobre El Teniente y Chuquicamata, y después la siderúrgica Huachipato, fueron los puntos clave de la rearticulación del movimiento sindical. En este sentido, el movimiento obrero

---

<sup>98</sup> Ibid., p. 109.



supo encontrar una oportunidad política en la institucionalidad y legalidad que aportaba el Plan Laboral.

Como señala Guillaudat, las huelgas y manifestaciones tuvieron un importante valor simbólico para el movimiento obrero. “Poco a poco y a pesar del arsenal jurídico a través del cual el régimen intentaba hacerlas inofensivas, se multiplicaron las huelgas”.<sup>99</sup> Sin embargo hasta 1983, este innegable relanzamiento de las oposiciones y de los movimientos sociales seguiría siendo parcial y disperso, sin lograr un carácter masivo. Lo que pesaba era fundamentalmente la falta de un proyecto político unitario.

En 1982 se desató en Chile una fuerte crisis económica que generó una recesión peor que la de 1974 – 1975. Primero se produjo un fuerte aumento en el precio del petróleo (producto de la segunda crisis del petróleo, de 1979), y después la economía mundial se hundió, cayó la demanda de exportaciones chilenas y las tasas de interés internacionales se elevaron. Todo esto reventó a la economía chilena, ya que al caer la demanda de exportaciones los grupos económicos ganaron menos dinero, y al subir las tasas de interés internacionales, los montos de los créditos subieron dramáticamente. En 1982 el paro llegó a 20% y el PIB cayó en 14%. Ese mismo año se produjeron 800 bancarrotas en Chile, se devaluó la moneda y en 1983 el gobierno tuvo que crear el programa de emergencia llamado POJH (Programa Ocupacional para Jefes de Hogar). A comienzos de 1983 el sistema bancario colapsó, el Estado intervino 10 bancos, liquidó tres y el Banco Central tuvo que asumir sus deudas.

La crisis afectó en primer lugar a los trabajadores asalariados, por el aumento del paro y la disminución del poder adquisitivo. También afectó seriamente a las clases medias, que bajo el nuevo sistema neoliberal habían quedado desprotegidas, y al empresariado. Pero sin duda, la principal consecuencia de la crisis fue de carácter político. En 1983 la sociedad chilena pasó de ser una sociedad disciplinada a una más activa. La disminución de las formas de represión y una cierta apertura del régimen fue una oportunidad política para que la oposición, que antes se limitaba a la acción de unos pocos militantes de partidos políticos, se transformara en miles de personas que manifestaron su descontento.

Si bien la crisis económica fue el detonante, la oleada de movilizaciones que se produce a partir del 11 de mayo de 1983 no se entiende sin el resurgimiento de los movimientos sociales, en especial el obrero y el estudiantil. También tienen una labor

---

<sup>99</sup> Ibid., p. 122-223.

fundamental los partidos políticos en la clandestinidad, que a través de sus redes y organizaciones de base logran extender el llamado a la movilización. En este contexto, encontramos una estructura de movilización más o menos institucionalizada, que ve en la crisis económica una oportunidad política para manifestarse, no solamente contra la crisis, sino especialmente contra el régimen. Los procesos enmarcadores de este período van a transitar desde las reivindicaciones económicas a las políticas, produciendo tal manifestación de descontento que el régimen acusó el golpe, imponiendo toque de queda y sacando los tanques a las calles.

La época de las protestas (1983-1986) contribuyó de forma especial a la reorganización del movimiento obrero. El 20 de mayo de 1983, después de la primera protesta, se creó el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), que agrupaba a la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), la Confederación de empleados particulares de Chile (CEPCH), la Unión Democrática de Trabajadores (UDT) y el Frente Unitario e Trabajadores (FUT). De todas estas asociaciones, la única reconocida legalmente era la CTC por tanto, era la que tenía mayor poder y fue la que hizo el primer llamado a una huelga general. Como hemos comentado anteriormente, dicha huelga se transformó en una protesta, con repertorios de acción que se convirtieron en clásicos de la sociedad chilena: los cacerolazos (golpes de cacerolas), apagones de luz y el grito de “Y va a caer”. La fuerza con la que la sociedad respondió al llamado de protesta en mayo de 1983 sorprendió a los miembros de la oposición y también al régimen. En las poblaciones periféricas de Santiago se formaron barricadas y la primera protesta terminó con 500 detenidos y dos muertos. En vista del éxito conseguido, la CTC y los miembros de la oposición decidieron hacer un nuevo llamado para el mes siguiente.

El llamado para la protesta de junio fue más amplio que el de mayo, las movilizaciones fueron mayores y más violentas con resultado de tres muertos y numerosos heridos. Al día siguiente de esta segunda protesta fueron detenidos algunos dirigentes sindicales como Rodolfo Seguel, presidente de la CTC. El movimiento sindical decidió llamar a una huelga general, encabezada por la Confederación de Dueños de Camiones. Sin embargo, no todos los sectores sindicales se plegaron y el gobierno logró evitar la huelga concediendo a los camioneros algunas reivindicaciones sectoriales. Esto demostró que el movimiento sindical era multidimensional, y sobre todo, no todos los actores implicados tenían los mismos objetivos. Además, el movimiento sindical todavía era muy frágil frente a la represión del Estado. Las

transformaciones socio económicas así como las políticas dictatoriales dictadas en su resguardo, lo habían debilitado haciéndolo incapaz de asumir todo el peso de la movilización popular.<sup>100</sup>

Por su parte, el movimiento estudiantil había comenzado a rearmarse en 1976, apenas tres años después de la implantación de la dictadura. La represión a la que habían sido sometidas las universidades fue brutal y la intervención del régimen impidió cualquier tipo de disidencia. Se nombraron rectores militares y se expulsó a gran cantidad de alumnos y profesores que militaban en partidos de izquierda o que eran sospechosos de “simpatizar” con el gobierno de Allende. Un caso paradigmático fue el ocurrido el 12 de septiembre de 1973, cuando los militares abrieron fuego contra la fachada de la Universidad Técnica del Estado, mientras en ella se encontraba todavía el rector, profesores, estudiantes y funcionarios. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) fue prohibida, la delación, las listas negras y la presencia de militares en los recintos universitarios se convirtieron en algo habitual.<sup>101</sup> Las carreras que propiciaban “pensamientos de izquierda” fueron cerradas y muchos libros se quemaron para evitar su lectura. Una gran parte de los mejores profesores universitarios tuvieron que exiliarse, y algunos académicos exonerados se refugiaron en instancias como FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) o la Academia de Humanismo Cristiano, creada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez. Desde allí se comenzaron a producir estudios disidentes que fueron de enorme ayuda para la revitalización de la izquierda.

En 1976 comenzaron a restablecerse las redes entre estudiantes opositores, siempre de forma clandestina, y lo hicieron realizando labores culturales, de ayuda social (trabajos de verano) y con otras iniciativas que, aparentemente inofensivas, contribuyeron al resurgimiento de un movimiento clásico en Chile y que había alcanzado su máxima polarización bajo el gobierno de Allende. El apoliticismo predicado por el régimen militar para la universidad comenzó a ser contestado desde varios grupos dentro de la Universidad de Chile. Los estudiantes estaban representados ante la autoridad universitaria a través del Consejo Superior Estudiantil, en el cual participaban estudiantes designados por la Vicerrectoría. Sin embargo, los estudiantes disidentes comenzaron a consolidar espacios de expresión cada vez más permanentes y ya en 1977, el modelo de representatividad sin participación experimentó

---

<sup>100</sup> Ibid., p. 155-157.

<sup>101</sup> Sofía CORREA et al., *Historia del siglo XX chileno*, op. cit., p. 301.

transformaciones importantes.<sup>102</sup> Los grupos de jóvenes comunistas, demócrata cristianos, MAPU y otros, realizaron actividades opositoras públicas especialmente a partir del 11 de septiembre de 1977, e intentaron crear plataformas que les permitieran ir rearticulando el movimiento, reclutando a más militantes para desafiar a la institucionalidad vigente.

Pese a este reagrupamiento, en 1981 el régimen dio un fuerte golpe contra el movimiento estudiantil al aprobar la Ley de Educación y de Universidades Privadas. Dicha ley establecía que las escuelas estatales pasaran a manos de los municipios, cuyos alcaldes eran nombrados directamente por el régimen. Además, se impuso la exigencia de autofinanciamiento a las universidades públicas y se incorporó el cobro de aranceles a los estudiantes por la docencia recibida. Las reacciones no se hicieron esperar y desde grupos de académicos y de estudiantes se alzaron voces de descontento. La institución universitaria seguía el camino del neoliberalismo, introduciendo elementos de libre mercado. A juicio de la “Asociación de académicos Andrés Bello”, era injusto e ineficaz entregar las universidades y sus títulos a las transacciones del mercado que se supone libre pero que está sujeto a formas veladas de control.<sup>103</sup> La reforma universitaria supuso la fragmentación de la Universidad de Chile, ya que sus sedes regionales y algunas de sus facultades se constituyeron como instituciones autónomas. El impacto que esto tuvo en el universo estudiantil fue enorme, ya que muchos alumnos que se habían inscrito en la Universidad de Chile, al comenzar las clases se encontraron con que aparecían matriculados en otras academias. Este fuerte golpe contra la Universidad de Chile resintió al movimiento estudiantil, cuya base fundamental se encontraba en esa casa de estudios.

Con todo, el movimiento estudiantil supo reponerse rápido del golpe que significó la Ley de Universidades, y fue un actor fundamental en la época de las protestas. A través de formas culturales como el “Canto Nuevo” (canciones de protesta) o directas como las huelgas de hambre, los estudiantes manifestaron su descontento. En 1983, los estudiantes se tomaron las calles y fueron los protagonistas de las manifestaciones de protesta, alternando las formas de acción pacíficas (marchas) y violentas (barricadas, enfrentamientos con la policía). Muchos estudiantes, incluso de educación secundaria, fueron golpeados, expulsados o encarcelados; sin embargo el

---

<sup>102</sup> Diego GARCÍA, José ISLA y Pablo TORO: *Los muchachos de antes. Historias de la Fech 1973-1988*, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006, p. 67.

<sup>103</sup> *Ibid.*, p. 122.

movimiento ya era lo suficientemente fuerte como para rearmar a la antigua FECH y exigir elecciones directas en las universidades. De esta manera, una vez que el movimiento estudiantil recuperó su identidad propia, se incorporó al movimiento de oposición general contra el régimen, combinando de esta forma, reivindicaciones universitarias con demandas políticas. Ahora bien, el movimiento estudiantil fue uno de los pilares de la movilización social porque había logrado reconstruirse y reorganizarse pese a las condiciones adversas en que se desarrollaba la vida universitaria. Además, fue la vanguardia en los repertorios de acción colectiva, introduciendo nuevas formas de protesta que no excluían la violencia.

Por su parte, los partidos políticos continuaban siendo ilegales, pero una vez terminada la época de mayor represión, a finales de la década de los 70, comenzaron a desarrollar diversas acciones en la clandestinidad y desde el exilio. Al interior de la oposición se planteó un debate sobre las formas para combatir al régimen. En 1980, el PC, junto al ala radical del Partido Socialista, legitimó toda forma de lucha, especialmente la violenta, en contra del régimen, mientras la Democracia Cristiana y los socialistas renovados rechazaban la lucha armada. Ésta era una discusión más bien teórica ya que los comunistas ayudaban a grupos radicales pequeños que realizaban, más que nada, ataques a torres de alta tensión, organismos represivos e instituciones financieras asaltos a bancos y otro tipo de desórdenes públicos. Sin embargo, con las protestas y su consecuente represión los grupos subversivos aumentaron su acción, lo que produjo un recrudecimiento de la violencia. El más importante de estos grupos subversivos fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, (FPMR), que contaba con el apoyo del PC y tenía mayor capacidad de acción que cualquier otro grupo.

Entre mayo y agosto de 1983 el escenario político impuesto por el régimen se transformó porque aparecieron sectores importantes de la sociedad apoyando a la oposición, entre ellos, parte del movimiento obrero y el estudiantil. En agosto de 1983, Sergio Onofre Jarpa asumió el cargo de Ministro del Interior y a partir de su inclusión el régimen comenzó a combinar la represión y el llamado a dialogar con parte de la oposición menos radical. Al hacer esto, el gobierno legitimó la existencia de los partidos políticos, que legalmente estaban proscritos, y de esta forma comenzó a recomponerse el sistema de partidos en Chile.

Ese mismo año se creó la Alianza Democrática, que reunía a la Democracia Cristiana (DC) con los socialistas renovados. También se formó el Movimiento Democrático Popular (MDP), liderado por el PC y que incluía al MIR y al PS –

Almeyda. Tras el golpe de estado, el Partido Socialista había sufrido una división en dos bloques que seguirán evoluciones distintas: el PS – Altamirano siguió el camino de los socialismos europeos, y el PS – Almeyda<sup>104</sup> se mantuvo más cercano al Partido Comunista. De esta forma, la oposición se dividió en dos grupos, uno liderado por la DC y otro por el PC. La diferencia radicaba en que el MDP aceptaba el uso de la violencia, mientras que la Alianza no lo admitía. Los dos bloques de la oposición también se dividieron por su postura frente al modelo económico y a la radicalidad respecto de las transformaciones sociales. Sin embargo era más fuerte lo que los unía, especialmente en la época de las protestas, ya que se sentían en una posición de fuerza porque el régimen parecía no tener respaldo popular. Además se vivía un contexto internacional de retroceso de las dictaduras militares en América Latina y el mundo. En suma, desde mayo del 83 a noviembre del 84, se produjo la emergencia de una amplia protesta social y una repolitización de la sociedad, con un nuevo sistema de partidos cuya actividad fue tolerada por el régimen. Esta actividad política fue desarrollada primero por la oposición y después por los partidos pro régimen, MUN (Movimiento de Unidad Nacional) y UDI (Unión Demócrata Independiente).

Ante la perseverancia de la oposición respecto de sus peticiones y al éxito de las protestas, el gobierno decidió acabar con la movilización. En noviembre de 1984 declaró nuevamente el Estado de Sitio; las libertades que había tolerado experimentaron un fuerte retroceso. El período que va entre noviembre de año 84 y septiembre del año 86 se caracterizó por el intento de Pinochet y su gobierno de redefinir la relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición, recurriendo a las medidas de coacción que tenía como régimen autoritario. El gobierno temía a la movilización social y los acontecimientos a partir de 1983 demostraron que la oposición tenía fuerza para desordenar la situación pero no para derribar al régimen.<sup>105</sup>

Entre 1984 y 1986 la oposición continuó con su política de movilización. El régimen no fue capaz de detener la acción opositora pese a la represión. Dentro de este contexto se produjo, en marzo de 1985, el secuestro y degollamiento de tres profesores comunistas, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Este caso causó conmoción social y dio más argumentos a la oposición en su lucha por derribar a Pinochet; sin embargo, también profundizó la división que existía entre los partidos opositores con respecto a cómo terminar con la dictadura. El PC radicalizó el uso de la

---

<sup>104</sup> Después de 1989, el PS – Almeyda va a iniciar su camino hacia el socialismo europeo.

<sup>105</sup> S. CORREA et al, *Historia del siglo XX chileno*, p. 300 y ss.

violencia, ayudando al FPMR a prepararse para actuar a mayor escala, mientras la DC y grupos del PS plantearon la idea de buscar formas institucionales para poder transitar a la democracia. A tres años del plebiscito que preveía la Constitución de 1980, en el cual la ciudadanía podría manifestarse a favor o en contra del régimen, la Alianza Democrática optó por seguir la vía institucional e intentar derrotar al régimen en su propio juego.

Ahora bien, las diferencias ideológicas dentro de la oposición no fueron un obstáculo para actuar unidos. Se produjo así un empate de fuerzas: los movimientos sociales y políticos de oposición podían desestabilizar al régimen pero no tenía la fuerza suficiente para imponer sus objetivos; por su parte, el gobierno sí tenía la fuerza para mantenerse en el poder pero no para acabar con la movilización social. El atentado contra Pinochet, el 7 de septiembre de 1986, marcará el fin de este período porque falla. La respuesta del régimen fue nuevamente el Estado de Sitio y la represión. Pese a que el general salió prácticamente ileso del atentado, se inició una verdadera cacería en contra de quienes habían participado en el ataque. Al día siguiente, la Central Nacional de Inteligencia (CNI) ya había asesinado a cuatro militantes del PC y del MIR, y al año siguiente, doce miembros del FPMR fueron abatidos a tiros en la llamada Operación Albania, en represalia por el atentado.

Entre septiembre del 86 y marzo del 87, la oposición, que se había visto muy afectada por la represión tras el atentado, sufrió una transformación importante. La unión entre la Alianza Democrática y el MDP se terminó y gradualmente el conjunto de sectores opositores va a ir asumiendo la tarea de iniciar la transición a partir de la institucionalidad vigente. La fecha del plebiscito se acercaba, y además, todos los intentos opositores contra el régimen habían fallado. El año 86, llamado “año decisivo” por el Partido Comunista, fue decisivo en el sentido que, al no poder derrocar a la dictadura, el proceso político chileno tendió a trasladarse desde la movilización social a un escenario institucional.

#### **IV. Transición a la democracia en Chile**

El debate sobre los protagonismos en el proceso de transición que hemos recogido para el caso español no se da con tanta fuerza para el caso chileno. Posiblemente, porque había una hoja de ruta establecida en la Constitución de 1980: a ocho años de la aprobación de la Constitución, en 1988, se realizaría un plebiscito en

donde la ciudadanía se manifestaría a favor o en contra del gobierno del general Pinochet. Si ganaba la opción SÍ, el mandatario continuaría durante ocho años más en el poder. Si ganaba la opción NO se convocaría a elecciones parlamentarias y presidenciales al año siguiente. En este sentido, la oposición tenía suficiente claridad respecto del camino a seguir, si bien no la tenía respecto de la legalidad y limpieza del plebiscito y de las elecciones. El plebiscito se fijó para el día 5 de octubre de 1988.

En este caso estaríamos claramente ante una “transición por transacción” en donde la reforma se lleva a cabo desde arriba. José Casanova señala que la transición a la democracia chilena es la más paradójica de todas las transiciones negociadas y legales, ya que Pinochet se vio obligado a presidir una transición a la democracia tras haber sido derrotado por la oposición en las urnas. La transición chilena sería un ejemplo de la dinámica de racionalización legal formal, ya que el dictador aceptó de buena voluntad los resultados del referéndum, dejó la presidencia y aceptó el tránsito hacia la democracia una vez derrotado.<sup>106</sup> Efectivamente, la transición a la democracia fue el resultado de un error estratégico del régimen pero la aceptación de la derrota de Pinochet se debió más bien a la presión de sectores reformistas del propio régimen, a la presión ciudadana con la oposición a la cabeza y a la presión internacional. Además, una vez derrotado, Pinochet no le facilitó el camino a la oposición sino todo lo contrario, a través de las leyes de amarre que veremos más adelante.

La delimitación cronológica de la transición chilena es más problemática que la española. Hay autores como Rafael Otano que sitúan su inicio en 1984, con la reunión de miembros de la oposición en el Hotel Tupahue y su término en 2005, con las reformas a la Constitución realizadas por el presidente Ricardo Lagos.<sup>107</sup> Sin embargo, para efectos de este trabajo, seguiremos a los historiadores Alfredo Jocelyn-Holt, Sofía Correa y Claudio Rolle, quienes toman como punto de inicio de la transición el plebiscito del 5 de octubre de 1988. El fin de dicho proceso lo situamos en el año 2000, cuando el socialista Ricardo Lagos llega al poder.

Como mencionábamos más arriba, la transición chilena se realizó dentro del itinerario definido por el régimen, pese a las fuertes movilizaciones sociales que se habían producido a partir de 1983. Esto, debido a que cuando la oposición chilena se dio cuenta de que no podría derribar al régimen por la fuerza ni a través de la movilización social, optó por la vía institucional. El régimen, convencido de que ganaría el plebiscito

---

<sup>106</sup> José CASANOVA, “Las enseñanzas de la transición democrática en España”, p. 37.

<sup>107</sup> Rafael OTANO: *Nueva crónica de la transición*, LOM, Santiago, 2006, p. 496.



y presionado por los partidos de la derecha, se ocupó de legitimar el acto electoral a través de diversas formas, entre ellas, la legalización de los partidos políticos, la formación de nuevos registros electorales (que habían sido quemados tras el golpe de estado de 1973), y la creación del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), entre otras. En este contexto, la oposición agrupada en la Concertación de Partidos por el NO supo aprovechar hábilmente el espacio que le dio el régimen de Pinochet y ganarle en su propio juego.

La oposición fundamentaba su mayor esperanza de ganar el plebiscito en la existencia de registros electorales y la creación del TRICEL. Apostaron por desarrollar una amplia movilización de electores para que se inscribieran (en Chile el voto es obligatorio, pero la inscripción voluntaria) y además construyeron una red computacional para generar un cómputo de votos paralelo al del gobierno, como respaldo ante cualquier intento de fraude. La oposición también se apoyaba en la vigilancia internacional, ya que había muchos medios de comunicación de diversos países cubriendo el plebiscito, lo que presionaba al régimen para que la elección se desarrollara de manera correcta. La oposición fue ocupando todos los espacios que la ley electoral le daba, y así se organizó la campaña del NO, con marchas, concentraciones en lugares públicos y publicidad en radio y televisión.

El día del plebiscito el gobierno iba, poco a poco, entregando los cómputos que lo daban como ganador, mientras, en el comando de la oposición los resultados daban como ganador a la opción NO. Se produjo una situación muy delicada e incluso se llegó a pensar que Pinochet desconocería el resultado del plebiscito. Los cómputos finales no se dieron hasta muy avanzada la noche del 5 de octubre, y en ellos ya estaba claro que había triunfado la opción NO; sin embargo todavía no había claridad sobre lo que haría Pinochet. La duda la despejó el Comandante en Jefe de la FACH, Fernando Matthei, quién dijo a los periodistas que a él le parecía ya claro que había triunfado el NO y que se debía respetar la Constitución. Finalmente, los resultados del plebiscito de 1988 fueron: NO: 54,7% - SI: 44%.

Con todo, el triunfo del NO no se entiende sin los tres años de movilización política y la apertura generalizada, pese a los intentos de represión del régimen. El NO estuvo permanentemente apoyado por Radio Cooperativa, cuatro semanarios de oposición y el diario La Época. Asimismo, en las semanas previas al plebiscito, los representantes del NO lograron acceder a la televisión diariamente con una franja de quince minutos. El triunfo del NO generó un nuevo escenario político porque replanteó

la relación de fuerzas entre el bloque de Pinochet y el bloque de oposición. La diferencia de más de 10 puntos hacía prácticamente seguro que las elecciones de 1989 las ganaría la oposición.

El voto NO era contra Pinochet pero también contra la institucionalidad existente. Pese a que el gobierno creía que su posición era legítima, en el momento de la derrota se vio obligado a buscar un acuerdo con la oposición, quién, por su parte, también lo necesitaba. La derecha y el gobierno necesitaban el acuerdo para reformar la Constitución porque después del plebiscito ya estaba claro que Pinochet no seguiría en el poder, por lo tanto era necesario introducir limitaciones del poder del Presidente. Las principales aprensiones que tenía el general Pinochet eran que el gobierno de transición respetara el modelo de democracia protegida y que los militares no fueran sometidos a procesos por violaciones a los derechos humanos.<sup>108</sup>

A la Concertación le convenían las reformas porque implicaban restarle a la Carta Fundamental algunos componentes autoritarios que hacían prácticamente imposible su reforma posterior ya que para ello se requería la aprobación de dos congresos sucesivos y mayoría en las dos cámaras (diputados y senadores), cosa que era impracticable por la incorporación de los senadores designados e institucionales, favorables a la derecha. Según el sociólogo chileno Carlos Huneeus, la Concertación de Partidos por la Democracia era tan conciente de la necesidad de reformar la Constitución, que concedió que el primer gobierno democrático fuera de 4 años en vez de 8, como se expresaba en la Carta Fundamental.<sup>109</sup> Las reformas constitucionales aprobadas por mayoría en plebiscito nacional, lograron disminuir en parte, el poder del Presidente y los enclaves autoritarios.

Pese al acuerdo entre régimen militar y oposición, la acción de esta última fue más limitada. El régimen saliente logró, en sus últimos meses en el poder, establecer “leyes de amarre” o nuevos enclaves autoritarios que dificultarían el ejercicio del poder democrático. Por ejemplo, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (con rango constitucional), establecía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros eran inamovibles, y también que los retiros y nombramientos de los altos mandos debían ser aprobados por el Comandante en Jefe. Con esta ley se limitó de manera drástica el poder del Presidente sobre las instituciones militares, creándose con esto una sensación de doble poder, el político y el militar.

---

<sup>108</sup> Carlos HUNEEUS: *El Régimen de Pinochet*, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000, p. 600-603.

<sup>109</sup> Ibid., p. 605.

Otra de las leyes de amarre tuvo que ver con el Senado. En el Capítulo V, la Constitución de 1980 estableció la figura de los “senadores designados”, que no eran elegidos por votación popular sino por sus cargos previos. Los más importantes eran los ex Presidentes de la República, ya que podían ser senadores vitalicios si habían ocupado el cargo seis años seguidos. Según esta ley, el general Pinochet podría optar a un escaño como senador vitalicio, después de dejar la Comandancia en Jefe del Ejército. El 11 de marzo de 1998, Pinochet llegó al Senado desatando una de las oleadas más importantes de protesta política durante la democracia.

En este contexto, ciertamente lo que se inaugura después de la transición es un régimen democrático incompleto con enclaves autoritarios. Como señala Manuel Antonio Garretón, este fenómeno puede explicarse a partir del hecho de que los regímenes militares han sido extremadamente represivos y reactivos con respecto a la sociedad anterior y también porque han intentado establecer un nuevo orden social. Así, aunque hayan fracasado en ello, han desarticulado relaciones previas entre la economía, el Estado y la sociedad.<sup>110</sup>

Ahora bien, los movimientos sociales en Chile en la etapa 1990-2000 no han sido estudiados en profundidad, y parte fundamental de este trabajo será dedicado a esto. Sin embargo, a modo general creemos que desde su llegada al poder, la Concertación de Partidos por la Democracia no ha hecho mayores esfuerzos por promover la movilización ciudadana sino todo lo contrario. Las concentraciones públicas masivas han tendido a desaparecer y las reivindicaciones sectoriales han reemplazado a las grandes plataformas de reivindicaciones generales. Con todo, y visto someramente el caso español, esto es un comportamiento normal dentro de la teoría de la acción colectiva. Según Garretón, “las negociaciones y concertaciones en el nivel de las cúpulas y de las elites tienden a reemplazar las movilizaciones sociales durante la transición democrática y los procesos de consolidación”. Por esto, los movimientos sociales dejan la lógica política orientada a la recuperación de la democracia (cosa lograda) y la reemplazan por la lógica particular de cada movimiento, orientada a conseguir beneficios concretos.<sup>111</sup>

Este fue el caso de los mineros del cobre, que una vez en democracia, concedieron un año de “gracia” al gobierno de Patricio Aylwin, para después demostrar su disconformidad con las políticas asumidas por el nuevo gobierno. Ya en 1991 los

---

<sup>110</sup> M.A. GARRETÓN, “Movimientos sociales y procesos de democratización...”, p. 9.

<sup>111</sup> Ibid., p. 6-7.

sindicatos mineros comenzarían a luchar por sus reivindicaciones laborales. En julio de ese año, en Chuquicamata, se declaró una huelga a la que se sumaron 7.500 trabajadores del cobre, que exigían aumentos en los salarios y mejoras en las formas de participación. La huelga duró dos semanas y finalmente se llegó a un acuerdo, pero no sin tensar las relaciones con el gobierno. En todo caso, fue el primer conflicto en el sector público de una nueva generación de luchas, en las cuales los partidos políticos poco podían hacer por intervenir o controlar y que demostró la autonomía de los movimientos sociales.

En términos generales, los movimientos sociales tuvieron un papel importante en la recuperación de la democracia, articulando una plataforma social de oposición al régimen. El movimiento obrero y el estudiantil, unidos a diversos movimientos sociales populares como los movimientos poblacionales, los de asociaciones de víctimas de la represión, los de mujeres, etc., movilizaron a cientos de miles de personas en momentos en que los partidos políticos no tenían la capacidad para hacerlo. Una vez que éstos reaparecen en el juego político y más tarde son legalizados, asumen el protagonismo de la oposición al régimen.

En este contexto, cuando se reconstruye el sistema democrático, también se reconstruye la relación entre el Estado y la sociedad, pero la desarticulación sufrida hace que esta reconstrucción sea distinta de la tradicional. Además, como señala Garretón, “el contexto político de la transición está caracterizado por dos objetivos: evitar el riesgo de regresión autoritaria y mantener un determinado modelo de equilibrios económicos, evitando el desborde de demandas sociales.”<sup>112</sup> Por lo tanto, los movimientos sociales tienden a silenciarse y, muchas veces, a desmovilizarse y a perder de vista un proyecto general, por lo que las demandas se articulan en torno a proyectos particulares.

Ahora bien, cuando las reivindicaciones contra la dictadura dejan de tener sentido, aparecen nuevas demandas sociales como las relativas a la verdad y justicia en los casos de violación a los derechos humanos, las demandas por mayor igualdad de oportunidades, por reformas al sistema económico, por justicia social, etc. Pero paradójicamente, pese a que las oportunidades políticas se han ampliado ningún movimiento ha sido capaz de reproducir una plataforma amplia de crítica social como la que existió en contra de la dictadura. En este sentido, la sociedad civil que surge tras la

---

<sup>112</sup> Ibid., p. 10.

dictadura es una sociedad civil débil e individualista, y por lo tanto desvinculada del Estado y de la política.

Si bien en el caso español tras el retorno a la democracia los movimientos tendieron a desmovilizarse, siguen teniendo un papel importante dentro de la sociedad civil, y son parte del diálogo permanente entre el Estado, los partidos y la sociedad. Por el contrario, en Chile, los movimientos sociales no tienen vías de expresión institucionales con las cuales relacionarse con el mundo político. Es por esto que cuando las frustraciones y la crítica al sistema económico no pueden expresarse por la vía del diálogo político, porque se las bloquea para no desestabilizar el consenso, estas frustraciones y críticas buscan canales alternativos, muchas veces violentos, para manifestarse.

### I. Movimiento Estudiantil en España

Durante sus casi cuarenta años de duración, el régimen de Franco (1939-1975) hizo notables esfuerzos por desmontar la movilización social y política, proscribiendo los partidos políticos, los sindicatos de clase y cualquier otra forma de participación en la esfera pública, cooptando todos los espacios para el nuevo régimen y obligando, por tanto, a la ciudadanía a vivir en el silencio. Frente a la ferocidad de la represión, la resistencia se hizo muy difícil. La sociedad civil se encontraba aplastada por el peso de las restricciones impuestas por los respectivos regímenes, tales como la conculcación de libertades esenciales como el derecho de asociación y los derechos políticos, y la censura en los medios de comunicación social, entre otras.

Con el paso de los años, se van a producir períodos de mayor “apertura” dentro del régimen, que permitirán una incipiente reorganización de la sociedad civil y el intento de recuperar el espacio público. Debido a que los límites de lo permitido eran puestos por el propio régimen, los espacios ganados por los movimientos de oposición pasarán por diversas fases de organización y movilización, dependiendo de las oportunidades políticas del momento. Las primeras movilizaciones sociales sentarán precedentes importantes para las nuevas oleadas de protesta, abrirán el camino a nuevos movimientos sociales que, a su vez, presionarán al régimen hasta que éste decida reprimir, reimponer estados de excepción o de sitio y prohibir cualquier tipo de manifestación. De esta manera, las oleadas de protestas resurgirán bajo la dictadura, con diferentes movimientos y bajo distintas formas, pero nunca quedarán silenciadas del todo.

En este contexto, nos interesa analizar el recorrido que hacen los movimientos sociales en el tránsito de una dictadura a un sistema democrático, cuáles son sus permanencias y sus cambios, cuáles sus nuevas reivindicaciones, ideologías, formas de acción. Creemos que el paso de un sistema político a otro afecta profundamente a los movimientos sociales y por ende, a la sociedad civil que se configura en democracia. El objeto de estudio de este trabajo es el movimiento estudiantil en España, entre los años 1969 y 1982, es decir, durante los últimos años del régimen de Franco y especialmente, durante la transición a la democracia. Estos años son, con toda seguridad, los menos estudiados del ME, por eso nos interesa indagar en ellos, ya que creemos que su estudio

es indispensable para comprender el comportamiento del movimiento estudiantil durante la transición a la democracia en España.

A la hora de nombrar y analizar a los grupos opositores al franquismo, la gran mayoría de los autores menciona a los estudiantes, señalándolos como uno de los grupos más importantes en la lucha contra el régimen de Franco. Junto a los obreros, el movimiento estudiantil destaca como un movimiento de vanguardia en la oposición al franquismo, un movimiento fuertemente influido por los partidos políticos pero a la vez, con identidad propia vinculada a la universidad y a los problemas particulares que existen en ésta. Todos los autores coinciden en que la contestación universitaria fue fundamental, no sólo para debilitar al régimen, sino también para extender un ambiente de cultura más libre, en el cuál muchos estudiantes (militantes o no) pudieron hacer un aprendizaje político que luego podrá ser puesto en práctica durante la transición a la democracia.

En este sentido, el ME tuvo una enorme importancia en la lucha contra la dictadura. Todos los autores destacan su labor como “escuela cívica que, en los estrechos márgenes de la dictadura, les enseñó a ser algo más libres, y con el tiempo, ha hacerse ciudadanos, si no líderes, de un sistema político – la democracia – que ellos mismos contribuyeron sustancialmente a alumbrar. Con sus asambleas y sentadas, con sus carteles, pintadas y murales, con sus manifestaciones, sus encierros o sus recitales, y también con sus pedradas a los grises, sus carreras ante los caballos y el riesgo de detención y tortura (e incluso de muerte, apenas fortuita) mantuvieron una tensión constante contra la dictadura, una tensión a la que no podía mantenerse alejada a la sociedad”<sup>113</sup>.

Creemos que es importante destacar la abundante bibliografía que existe en España sobre el movimiento estudiantil, desde antes de la guerra civil hasta mediados de la década de los 70. Ahora bien, por lo general, estas investigaciones tienden a concentrarse en el período 1956-1968, con lo que los últimos años del régimen y los primeros de la transición han quedado menos estudiados. Dentro de esta bibliografía podemos destacar cuatro líneas de investigación. En primer lugar, investigaciones generales sobre oposición al franquismo que dedican algún capítulo al ME. En segundo lugar, los textos generales sobre el ME, que abarcan, tanto desde una perspectiva teórica

---

<sup>113</sup> Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, Miguel Ángel RUIZ CARNICER, Marc BALDÓ LACOMBA: *Estudiantes contra Franco (1939-1975) Oposición política y movilización juvenil*. Madrid, La esfera de los libros, 2007, p. 16.

como desde el relato, la actividad de los estudiantes de oposición en toda España. En tercer lugar, encontramos investigaciones locales que se refieren al desarrollo del ME en una ciudad en particular (Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia, por ejemplo). Y en cuarto lugar, encontramos textos que se refieren a aspectos más específicos – tanto temática como cronológicamente – del movimiento estudiantil. En esta cuarta línea de investigación, encontramos bibliografía que trata la historia de una organización política universitaria en particular (el FLP, por ejemplo) y otra que se refiere a períodos más específicos o a aspectos más puntuales del M.E.

I. En relación con la bibliografía general sobre la oposición al franquismo, que dedica algún espacio al movimiento estudiantil, hemos consultado los libros de Valentina Fernández Vargas, Encarna Nicolás, Pere Ysàs. En *La resistencia interior en la España de Franco* (1981), Valentina Fernández Vargas hace un recorrido por los distintos tipos de oposición que fueron surgiendo a lo largo de los cuarenta años de dictadura franquista, desde la guerrilla hasta el movimiento feminista. Respecto de los estudiantes, la autora señala que los sucesos de febrero de 1956 fueron un punto de inflexión en la oposición al franquismo ya que posibilitaron que diversos grupos, la mayoría vinculados a la universidad, demostraran públicamente su disidencia con respecto al régimen.

Por su parte, Encarna Nicolás, en su libro *La libertad encadenada* (2005), también manifiesta la importancia del ME en las luchas contra el franquismo, y a la vez, considera las movilizaciones de 1956 como el punto de inflexión en la organización del Movimiento Estudiantil. “Desde febrero de 1956 hasta 1965 la protesta estudiantil exigirá reivindicaciones cada vez más radicales tanto en lo que respecta a la vida académica como al derecho a un sindicato democrático alternativo al SEU”.<sup>114</sup> Nicolás también señala que a partir de 1965 el ME se transforma en un factor constante de conflictividad. Si bien no se puede negar la relevancia de la contestación universitaria antes de 1965, ese año es clave ya que la movilización de los estudiantes logró acabar con el Sindicato Español Universitario, incapaz de canalizar el descontento estudiantil ni de legitimar su representación ante la autoridad académica.

Por último, Pere Ysàs, dedica el primer capítulo de su libro *Disidencia y Subversión* (2004) al movimiento estudiantil, desde 1956 en adelante. Ysàs parte de la

---

<sup>114</sup> E. NICOLÁS, *La libertad encadenada*, p. 364.



tesis de que a partir de la década de los 60, la conflictividad estudiantil aumentó y el régimen tuvo que lidiar con lo que denominó “problema estudiantil”, dando cuenta del fracaso del SEU y de la estrategia de socialización de la juventud que el franquismo había implementado desde 1939 en adelante. La diferencia del libro de Ysàs con los anteriores, es que el análisis no está centrado en los estudiantes sino en cómo el régimen intenta lidiar con el problema estudiantil, que podía significar la pérdida de la juventud universitaria. Para ello, el autor hace un recorrido por las diversas políticas – tanto represivas, como de orden público y académicas – tomadas por el franquismo, con el fin de frenar esta amenaza. Sin embargo, “todas las actuaciones habían acabado en fracaso; por sus propias limitaciones y contradicciones y, en última instancia, porque la “pérdida” de la juventud universitaria se había convertido en muy difícilmente evitable para un régimen como el franquista que, a pesar de los intentos aperturistas, continuaba apelando a la guerra civil como fuente última de legitimidad. Y ello en un contexto europeo e internacional cada vez más presente en la sociedad española y con la incontenible extensión entre los jóvenes de unos valores y una cultura política incompatible con el régimen dictatorial”.<sup>115</sup>

II. En cuanto a la bibliografía general sobre el ME, cada autor plantea diversas interpretaciones y enfoques, pero la gran mayoría de ellos coincide en otorgar a los estudiantes un papel preponderante. Así lo hace José María Maravall en *Dictadura y disenso político*. Obreros y estudiantes bajo el franquismo (1978), cuando señala que obreros y estudiantes constituyeron los dos principales movimientos políticos contra la dictadura. Maravall destaca la importancia de la relación entre obreros y estudiantes, considerando que los hitos de ambos movimientos coinciden en el tiempo. Si bien no todas las acciones eran coordinadas y muchas de sus reivindicaciones eran sectoriales, tanto obreros como estudiantes se apoyaban mutuamente en la lucha contra la dictadura. En este sentido, argumenta que bajo regímenes autoritarios o dictatoriales, las relaciones entre movimientos sociales son más frecuentes y más profundas, ya que se dirigen a atacar el propio régimen.

Maravall logra distinguir cuatro etapas en el desarrollo del ME:

1.- La primera etapa, entre 1955 y 1959, tuvo su punto culminante con las manifestaciones de 1956. En esta fase, la principal reivindicación de los estudiantes era

---

<sup>115</sup> Pere YSÀS: *Disidencia y subversión*, Barcelona, Crítica, 2004, p. 46.

la democratización del Sindicato de Estudiantes Universitario (SEU) y estuvo muy influida, por la reorganización del PCE en la clandestinidad y porque ciertos grupos de liberales y republicanos se volvieron más activos. Además, dentro de las universidades comenzaron a surgir cine-clubs, grupos teatrales, revistas culturales y estudiantiles como Aldebarán, Cuadernos de Arte y Pensamiento, Libra, Aristala, etc. que sirvieron de lugar de encuentro para los estudiantes disidentes.

2.- La segunda etapa, entre 1960 y 1964, comenzó de forma más cautelosa debido a la fuerte represión sufrida por los estudiantes luego de las grandes manifestaciones de 1956. En esta etapa, las movilizaciones estudiantiles se dirigieron contra la introducción de reformas tecnocráticas en la universidad, contra problemas relacionados con la falta de empleos para los licenciados y, fundamentalmente, contra la falta de representatividad de los estudiantes en el gobierno de la universidad.

3.- La tercera etapa, entre 1965 y 1968, estuvo caracterizada por un cambio de orientación en las reivindicaciones: ya no sólo se pedía la democratización de la universidad sino también del sistema político en general. Esta tercera fase logró extender la contestación estudiantil a diversas universidades españolas y vio nacer uno de los mayores éxitos del ME: la eliminación del SEU y la creación de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes. José María Maravall señala que la principal característica de este período “fue que el movimiento estudiantil en su conjunto y las organizaciones clandestinas en particular consiguieron una simbiosis grande con una población estudiantil altamente movilizada. Las organizaciones tenían ahora una imagen pública definida y sus líderes y militantes tenían un alto grado de visibilidad pública, lo que resultó finalmente en un mundo político transparente. Las universidades gradualmente se convirtieron en un ghetto subcultural dentro de la sociedad española, y en estos enclaves las reivindicaciones eran abiertamente políticas y eventualmente abiertamente subversivas”.<sup>116</sup> Como contrapartida, la mayor visibilidad de los militantes generó una represión muy intensa, que se dirigió fundamentalmente contra los líderes estudiantiles y contra los participantes en manifestaciones. El cierre de los centros fue una herramienta recurrente del gobierno para frenar el conflicto en la universidad, la mayor parte de las veces, infructuosa. Sin embargo, la principal consecuencia del aumento de la represión es que produjo una importante radicalización en el ME, que quebró la unidad conseguida con la creación del SDE y, rápidamente, éste perdió importancia.

---

<sup>116</sup> J. M. MARAVALL, *Dictadura y disenso político...*, p. 179.

Elena Hernández Sandoica, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Marc Baldó Lacomba, en su libro conjunto *Estudiantes contra Franco* (2007), analizan el recorrido del movimiento estudiantil español desde 1900, poniendo especial atención a los acontecimientos desde la década del 50 en adelante. Estos autores consideran que los años 50 fueron fundamentales para la creación del ME. Destacan la inclusión en la universidad de miembros de la clase media que antes no accedían a la educación superior, y un cierto espacio de crítica propiciado por el ministro de Educación Joaquín Ruiz-Giménez y el rector Pedro Laín Entralgo en la Universidad Complutense de Madrid. Además, los estudiantes que participaron de los sucesos de 1956 ya no consideraban la Guerra Civil como el principio de una nueva etapa, por lo que querían tener sus propias opiniones. A esto, había que sumarle el creciente distanciamiento del SEU de la propia masa de estudiantes, en donde la desafección primero y la crítica después, harían importante mella en esta organización.

Los autores de *Estudiantes contra Franco* proponen una periodización más completa que Maravall, ya que su estudio avanza hasta el final del franquismo. De esta manera, distinguen una etapa que va entre 1939 y 1951, caracterizada por la intervención de la dictadura en la universidad y por los años de la posguerra. Destacan de esta etapa las luchas entre los grupos que componían el franquismo y que tenían especial interés en controlar la Universidad, fundamentalmente la derecha católica y los falangistas. Resalta también la reorganización de la Federación Universitaria Escolar (FUE) en 1946, como un primer intento de organización de los estudiantes de oposición al régimen.

La década de los 50 puede considerarse una segunda etapa de este proceso, caracterizada por el inicio de la movilización de los estudiantes. Así, los autores destacan la participación estudiantil en la Huelga de Tranvías de Barcelona, en 1951 y, por supuesto, las movilizaciones de 1956, que demostraron que “la situación no podía seguir siendo igual ni para el sindicato único ni para la propia vida cotidiana de los estudiantes, especialmente en lo relativo a temas sindicales y de representación”.<sup>117</sup>

La tercera etapa, entre 1960 y 1965, es la de consolidación de la oposición al franquismo en la universidad, en la que se distingue la organización de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) en 1961 y de la Confederación Universitaria Democrática Española (CUDE) en 1963, que buscaba coordinar a los

---

<sup>117</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 139.

representantes de las distintas universidades españolas en torno a un programa común: transformación democrática de la universidad, libertades de reunión, expresión y asociación, amnistía y respeto a las libertades identitarias de los pueblos de España.<sup>118</sup> En este período, el SEU hizo un intento por aparecer más moderado, para tratar de integrar a los universitarios más inquietos, sin embargo, no logró su cometido, y como ya hemos señalado más arriba, en 1965 desapareció. La cuarta etapa, entre 1965 y 1969, se caracteriza por la radicalización del movimiento estudiantil y, particularmente, por la conformación de los Sindicatos Democráticos. Esta fase estuvo marcada por la intensidad de la represión, “el período que se abre en 1965 fue represivo en un altísimo y sostenido índice, tanto en la fábrica como en la Universidad”.<sup>119</sup> De hecho, esta etapa termina con las manifestaciones que suceden a la muerte del estudiante Enrique Ruano, quien se encontraba en la Dirección General de Seguridad, y que obligaron al gobierno a reimponer el Estado de Excepción.

La quinta etapa, entre 1970 y 1973 se caracteriza por la pluralidad y fragmentación del movimiento estudiantil. Proliferan las organizaciones de izquierda influidas por el Mayo francés, que ya no promueven una apertura democrática del sistema político, sino la revolución socialista. Los discursos se radicalizan y las formas de organización del Movimiento Estudiantil tienden a diluirse, las reivindicaciones sectoriales dejan paso a las generales, lo que perjudicará a la identidad del movimiento. “El movimiento estudiantil había entrado, como se ve, en un ciclo de retroceso del que no saldrá hasta cuatro años después, en la fecha clave de 1973, cuando se generalizará la demanda de “ruptura democrática” y mientras incrementa su actividad la extrema izquierda universitaria”.<sup>120</sup> La última etapa consignada por los autores, entre 1974 y 1975, se caracteriza por la fuerte imbricación entre la lucha de la oposición política nacional y la lucha en la universidad. Nuevamente, las reivindicaciones de los estudiantes se combinan con las peticiones de democratización del sistema político; las manifestaciones contra la selectividad y para la expulsión de la policía de la universidad marcaron esta etapa.

Gregorio Valdevira, en su libro *La oposición estudiantil al franquismo* (2006), propone una periodización en la que distingue cuatro etapas, a partir de 1962, que dicen relación con las estrategias usadas por el ME. La primera entre 1962 y 1965, que

---

<sup>118</sup> Ibid., p. 200.

<sup>119</sup> Ibid., p. 217.

<sup>120</sup> Ibid., p. 280.

termina con la caída del SEU, se caracterizó por la utilización de estrategias legales e ilegales. En el primer caso, destacan la participación en las elecciones del SEU y en las cámaras de facultad. Paralelamente, la creación de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) y la militancia en los partidos políticos, fueron parte de las estrategias ilegales. Como señala Valdelvira, esta combinación de estrategias, “permitió la consolidación del movimiento y el desarrollo de grandes movilizaciones que derrocaron al SEU”.<sup>121</sup>

La segunda etapa, entre 1966 a 1968, se caracteriza por la creación de los sindicatos democráticos y por el abandono de las estrategias legales de acción. Con la desaparición del SEU y el posterior rechazo de las formas de participación propuestas por el régimen, los estudiantes canalizaron todas sus actividades a través de los sindicatos democráticos, y de los grupos políticos que actuaban en la universidad. Paradójicamente, pese a que en esta etapa adquiere más fuerza la estrategia ilegal de los SDEU, disminuyó la clandestinidad, lo que permitió una mejora notable en la organización de los estudiantes, sin embargo, facilitó también la represión.

La tercera etapa, entre 1968 a 1973, se caracterizó por la radicalización y fragmentación del movimiento estudiantil, provocada por la fuerte represión con la que acabó la etapa anterior. Los estudiantes abandonaron todas las formas de actuación legal e incluso cuestionaron las formas ilegales de sindicalización, como la FUDE y el SDEU, desapareciendo éste último. Esta fase de radicalización trajo dificultades importantes para la organización del ME, y muchas rivalidades entre los grupos políticos que actuaban en la universidad. “Los niveles de coordinación disminuyeron, ya que las coordinadoras de comités de curso, cuya área de actuación era sólo el distrito, tuvieron una trayectoria breve, y las rivalidades y disputas condujeron a la reunión general de Universidades (RGU), que sólo celebró un encuentro durante ese período, en una etapa de acusada inoperancia.”<sup>122</sup>

Finalmente, la cuarta etapa, entre 1973 a 1976, es un período de relanzamiento del movimiento estudiantil y se caracteriza por una vuelta a la estrategia legal, como las elecciones de delegados universitarios, y por actuaciones más abiertas de los estudiantes. Los grupos radicales de izquierda pierden influencia en la universidad y las organizaciones de estudiantes vuelven a asumir el protagonismo de la coordinación del

---

<sup>121</sup> Gregorio VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*. Madrid, Síntesis, 2006, p. 238.

<sup>122</sup> *Ibid.*, p. 239.

ME. Esta etapa se caracteriza también por la fuerte influencia que ejercen los partidos políticos y sus estrategias de ruptura democrática dentro del movimiento estudiantil.

Como señala Gregorio Valdelvira, en el desarrollo del ME cambian las estrategias y también los objetivos (y con ello, los discursos) de los estudiantes. Si en las primeras etapas las reivindicaciones tenían que ver fundamentalmente con la solución de problemas propios de la universidad (representación de los estudiantes, críticas al SEU, etc.), en las etapas de radicalización, se mezclarán las reivindicaciones sectoriales con las generales, como peticiones de democratización del sistema político. Incluso, en la etapa más radical, entre 1968 y 1973, el ME dejará de lado el discurso democrático y asumirá un discurso de revolución socialista, pues se asumía como un “movimiento revolucionario, que quería cambiar las estructuras socioeconómicas, con los mismos objetivos que el movimiento obrero, y que, en ciertos momentos, pretendió convertirse en vanguardia y acicate del proletariado”.<sup>123</sup>

Si bien existen algunas diferencias en las periodizaciones que proponen los diferentes autores, todos señalan un cambio importante dentro del ME a partir de la década de los 60. Aunque las luchas de los años anteriores fueron enormemente importantes (basta recordar las movilizaciones del año 1956, que motivaron la reimposición del Estado de Excepción), creemos que a partir de los años 60 el ME alcanzó su mayor poder de contestación. 1965 es una fecha clave y que supuso una victoria importante para el Movimiento, ya que ese año desapareció el SEU. Para efectos de esta investigación, los cambios ocurridos en el movimiento estudiantil durante los años 60 son fundamentales para comprender la posterior evolución del ME, sus períodos de flujo y reflujo, y su comportamiento durante la transición a la democracia. Nos interesa especialmente lo que ocurre dentro del movimiento estudiantil hacia el final de la década, ya que será determinante en la organización de los estudiantes, y especialmente, en los cambios en los objetivos del movimiento, así como en los repertorios de acción colectiva y en los discursos.

Hernández S., Ruiz Carnicer y Baldó consideran que, a partir de la década de los años 60, la contestación universitaria se convierte en estructural, en un elemento consustancial de la vida universitaria. Para intentar atajar la contestación, el régimen aumentó la represión contra los estudiantes, lo que generó una radicalización dentro del ME que transitó desde discursos de defensa del sistema democrático a otros más

---

<sup>123</sup> Ibid., p. 240.

radicales, a favor de la revolución socialista. “A pesar de que el sentimiento negativo frente al franquismo arranca de un parámetro político de comparación como es ése – la democracia, con tintes socialistas y comunistas no muy diferenciados –, el rechazo más visible adoptaría a finales de los años sesenta referentes directos del socialismo y la revolución, entendidos ahora de modo radical”.<sup>124</sup>

III. Junto a las investigaciones del ME español en general, también podemos encontrar estudios regionales, como el de Joseph María Colomer, sobre el movimiento estudiantil en Barcelona; el de José Álvarez Cobelas, referido a Madrid; el de Alberto Carrillo Linares, sobre Sevilla; y el de Sergio Rodríguez Tejada, sobre Valencia. En estos textos se intenta reconstruir la dinámica del movimiento estudiantil, las formas de acción, las vicisitudes que vivieron sus integrantes, y los momentos de flujo y reflujo. Salvando las particularidades de cada ciudad, en general, todos estos textos coinciden en una interpretación sobre el M.E. como una zona de libertad, un espacio de socialización en donde una parte de la juventud española tomó contacto con la política y se transformó en oposición al régimen.

Por ser el estudio más completo sobre el ME madrileño, el libro de José Álvarez Cobelas, *Envenenados de cuerpo y alma* (2004), es esencial para nuestro trabajo. En él, el autor hace un amplio recorrido por el movimiento universitario madrileño entre 1939 y 1970, relatando la conformación del ME en este período, sus momentos de flujo y reflujo, las transformaciones en la organización y en la identidad del movimiento. Álvarez Cobelas plantea una hipótesis muy interesante respecto del movimiento estudiantil en Madrid durante los años sesenta. Según el autor, el ME de los años sesenta no luchaba por una democracia de tipo occidental sino por la llegada de un régimen socialista, “de caracteres difusos y contradictorios, en consonancia con los movimientos estudiantiles de distintos países por los que estuvo influenciado, combinado con prácticas políticas de signo democrático occidental”.<sup>125</sup> Álvarez Cobelas considera que a partir de los años 60 el ME se radicaliza y comienza a construir un discurso más ideologizado que formaba parte de una contracultura que se fue gestando en la universidad cuando los estudiantes comenzaron a verse como grupo antagónico al resto de la sociedad franquista. “Esta subcultura radical que se había ido gestando desde comienzos de los años sesenta se extendió cuando los estudiantes vieron amenazada su

<sup>124</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 18.

<sup>125</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. xvi.

identidad por las transformaciones que se pretendían sobre el modelo de Universidad y que afectaban a su futuro y a su percepción de sí mismos”.<sup>126</sup>

A la luz de esta hipótesis, el autor ofrece una periodización particular para el ME madrileño: una primera etapa, que el autor llama de renacer del movimiento estudiantil, comenzaría en 1956, con el asalto a la Universidad de San Bernardo por parte de la guardia de Franco y terminaría en 1965. En febrero de 1965 se produjeron nuevas movilizaciones que terminaron con la caída del SEU. Todo este período sirvió para consolidar la identidad del ME, que por aquellos años se definía como democrático. Con todo, ese mismo año la movilización decayó, producto de las diferencias que existían dentro de la FUDE, el rechazo a las formas de participación estudiantil que proponía el gobierno y la represión.

La segunda etapa se inicia en 1966 y termina en 1970, y se caracteriza por la revitalización del ME. El tema de la representatividad fue crucial ya que en 1967 se logró crear el Sindicato Democrático en Madrid, sin embargo, la identidad democrática del ME fue profundamente cuestionada por grupos más radicales. La influencia del Mayo francés de 1968 fue fundamental para la transformación del movimiento estudiantil español; se introdujeron nuevos repertorios de acción colectiva, nuevos marcos de significado y nuevas identidades “Mayo del 68 fue un revulsivo en la medida en que aportó las tácticas y una nueva visión sobre la finalidad del estudiante en la sociedad. Dicha visión fue aceptada de forma generalizada porque el proceso de pérdida de identidad estudiantil se estaba produciendo, en distintos grados de identidad, entre todos los universitarios del mundo”.<sup>127</sup> La radicalización del ME supuso el tránsito de un discurso centrado en los valores democráticos, a otro que propiciaba la revolución socialista. Esta radicalización no sólo tuvo consecuencias en la organización del ME, sino también en la unidad de las organizaciones que lo componían.<sup>128</sup>

En este sentido, el ME sufrió una transformación importante a lo largo de los años. Transformación que estuvo influida por la situación internacional de auge de los ME en el mundo, por la situación particular de España, y por los cambios en las formas de lucha contra el régimen de Franco. A finales de la década de 1960, el movimiento estudiantil español sufrió un proceso de radicalización y fragmentación que significó un

---

<sup>126</sup> Ibid., p. 357.

<sup>127</sup> Ibid., p. 339.

<sup>128</sup> Ibid., p. 232 y ss.



cambio profundo en la forma de organización del movimiento, en los discursos en su interior y en su comportamiento dentro del conjunto de la oposición a la dictadura.

El libro de Joseph M. Colomer, *Els estudiants de Barcelona sota el franquisme* (1978), no propone una periodización particular para el ME barcelonés, pero hace un recorrido muy interesante por la articulación del movimiento estudiantil de esa ciudad, que incluye la coordinación con estudiantes de otras ciudades. Es importante recordar que tanto Madrid como Barcelona contaron con los movimientos estudiantiles más fuertes, activos y coordinados del país. Por esto, Colomer concluye que el protagonismo del ME en la lucha contra el franquismo se debe fundamentalmente a que: “El mayor grado de libertad de hecho que los estudiantes habían conquistado, el mismo carácter inquieto, sensible e inestable del estamento estudiantil, la agudización de la misma problemática propiamente universitaria, etc. le convirtieron en un punto de referencia social constante, reflejado en muchos aspectos de otros movimientos más o menos ocultos que no disfrutaban de una presencia tan pública y permanente en la escena política”.<sup>129</sup>

Por su parte, Alberto Carrillo Linares, en su libro *Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977)*, publicado en 2008, ofrece una periodización especial para el ME de esa ciudad, y propone un análisis centrado en los conceptos de ciclo de protesta y clima cultural. En este sentido, el texto de Carrillo Linares ofrece una interpretación muy abundante respecto de las redes sociales y culturales que componían el movimiento estudiantil sevillano, para lo cual utiliza una gran variedad de fuentes, desde periódicos oficiales, pasando por documentos de los partidos políticos y de las organizaciones estudiantiles, hasta fuentes orales, que dan cuenta de la importancia del ME en la lucha contra el régimen. “Perdido el miedo y asumida una cultura política reivindicativa y de confrontación, la universidad se transformó en el más importante foco de agitación contra el franquismo, lo que fue posible gracias a las peculiaridades del ME, improbables en otros movimientos (posibilidad – sin riesgos económicos – del mantenimiento de las huelgas durante meses, masificación, extensión del fenómeno a nivel estatal, alto nivel de formación teórica, complejas redes de sociabilidad, impulso y exaltación juveniles, disponibilidad personal, etc.). En ningún otro movimiento concurrían todos estos factores simultáneamente (obrero, amas de casa, campesino, barrios, feminista, etc.). Esta circunstancia fue decisiva para comprender la aportación

---

<sup>129</sup> Joseph M. COLOMER I CALSINA: *Els estudiants de Barcelona sota el franquisme*, Vol. II. Barcelona, Curial, 1978, p. 62.

del movimiento universitario durante el franquismo y de cara a la transición política a la democracia. Con el panorama de una universidad absolutamente politizada y trémula, Franco moría en su cama”.<sup>130</sup> De este modo, para Carrillo Linares, el gran aporte del ME español, y sevillano en particular, fue que contribuyó sobremanera a la extensión de la cultura democrática en España.

En su libro *Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1939-1975)*, publicado en Valencia en 2009, Sergio Rodríguez Tejada realiza una extensa reconstrucción del ME valenciano, intentando derribar dos mitos: el que señala que el movimiento estudiantil tuvo un papel subordinado al del movimiento obrero; y el de la excepcionalidad española en el ciclo de protestas de 1968. El libro de Rodríguez Tejada hace permanentes referencias a los movimientos estudiantiles internacionales, estableciendo redes y formas de influencia cultural comunes entre ellos y el ME español, y establece una interesante relación entre lo que considera cultura oficial o hegemónica y cultura alternativa o contracultura, que sería la propia del movimiento estudiantil. Finalmente, el autor concluye, que la universidad se transformó en una zona de libertad, en donde se produjo un proceso de enculturación en el cual “lo alternativo devino completamente predominante, amparando cambios sustanciales en las formas de pensar y de comportarse de los involucrados”.<sup>131</sup>

IV. Finalmente, la cuarta línea de investigación en la bibliografía sobre el ME es aquella más específica, ya sea temática o cronológicamente. En este contexto, un libro que sirve de antecedente para nuestra investigación es el de Miguel Ángel Ruiz Carnicer, *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1933-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo* (1996). En esta investigación, Ruiz Carnicer da cuenta de la historia del SEU y de los intentos del régimen por influir y dominar la mentalidad juvenil y estudiantil, a través de los estudios universitarios y de la organización estudiantil sindical. Lo más interesante, para efectos de nuestro trabajo, es comprender por qué el régimen no logra su cometido y cómo la juventud de los años 50 va buscando sus propios referentes, cansada ya del recuerdo constante de la guerra civil,

---

<sup>130</sup> Alberto CARRILLO-LINARES: *Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977)*, Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2008, p. 25.

<sup>131</sup> Sergio RODRÍGUEZ TEJADA: *Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1939-1975)*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009, p. 428.

tan lejana para ellos. El trabajo de Ruiz Carnicer termina con la disolución del SEU, que justamente se produce a mediados de los 60, en el momento en que el ME comenzaba a vivir una etapa de radicalización y fragmentación.

Otro libro particularmente interesante para nuestro trabajo es el de Julio García Alcalá, *Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria* (2001). En él el autor hace un recorrido por la historia del FLP, que tuvo fuerte presencia en la universidad y que ciertamente contribuyó a la formación de una nueva cultura estudiantil, con un discurso más radical que el del PCE, y aportando también nuevos repertorios de acción y nuevas formas de organización. El FLP, que estuvo activo entre 1958 y 1969, aproximadamente, participó de instancias tan importantes como el Sindicato Democrático de Estudiantes de Madrid, y aunque competía con el PCE, mantenía relaciones con sus militantes universitarios, llevando a cabo diversas acciones tendientes a movilizar a las masas estudiantiles. Desde mediados de la década de los 60 el Felipe vivió un proceso de radicalización, que en la universidad tomó la forma de juicios críticos a profesores, asaltos a decanatos y facultades, etc. que terminaría con su desaparición a comienzos de la década de los 70.

El libro *La agonía de la Universidad franquista* (1976) escrito por el Equipo Límite, ofrece una visión particular pero muy interesante respecto del movimiento de los PNN, que ayuda a comprender el desarrollo del ME, toda vez que muchos de sus dirigentes luego fueron profesores no numerarios y adscribieron a este movimiento que contribuyó a gestar una comunidad universitaria que anhelaba, no sólo acabar con el régimen sino también transformar la universidad que el franquismo había creado. La aparición del movimiento de los PNN, si bien no es el tema central de nuestra investigación, sí es un hito para el movimiento estudiantil y para la oposición al franquismo, ya que supuso un nuevo frente en el ya complejo conflicto universitario, y permitió que, en algunas ocasiones, estudiantes y PNN coordinaran sus luchas, fortaleciéndose mutuamente.

Dentro de las investigaciones acotadas en términos cronológicos, los artículos publicados en la Revista Materiales números 1 y 2, aparecidas en Barcelona en 1977, también han sido de bastante utilidad para esta investigación, especialmente el texto de Francisco Fernández Buey, “Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo” y el de Rafael Argullol, “Reflexión sobre los años radicales (movimiento estudiantil 1968-1971)”. En el primer artículo, Fernández Buey hace una interesante reflexión en torno a los problemas de identidad del ME, y a algunas características

comunes de los ME, que explican su desarrollo cíclico y discontinuo. Desde una perspectiva más bien teórica, el autor señala que a los movimientos estudiantiles en general les falta memoria. “Esa debilidad de la memoria, por comparación con el movimiento obrero clásico, se debe substancialmente al hecho de que la permanencia de los estudiantes no suele rebasar los cinco o seis años, con lo que en ese escaso lapsus se pierden experiencias preciosas para las sucesivas generaciones políticamente activas en el seno de la enseñanza superior.”<sup>132</sup> Sin embargo, el mismo autor señala que lo que en un primer momento aparece como una debilidad, puede ser visto también como una fortaleza, ya que el permanente cambio en las formas de organización y en los repertorios de acción colectiva que afectan al ME impiden que éste se anquilose.

Por su parte, Rafael Argullol hace un interesante repaso de la etapa 1968-1971, en la cual se evidencia la radicalización que afecta al ME español, en consonancia con lo que ocurría a nivel internacional. De las conclusiones de Argullol se desprende que los años radicales del ME español buscaban provocar agitación y cambio dentro de la sociedad burguesa, por lo que ésta se transforma en el enemigo número uno, y el franquismo se entiende como aquel sistema que permite y privilegia el desarrollo de este tipo de sociedad. El problema, según Argullol, es que los estudiantes estaban muy alejados de las relaciones de producción, por lo que este discurso radical producía una suerte de “aislamiento esquizofrénico. Esta situación provocó la evolución del movimiento estudiantil hacia posiciones, primero utopistas, basadas fundamentalmente en la espontaneidad, y luego místico-apocalípticas, cuando la vanguardia estudiantil se escindió en múltiples sectas dogmáticas”.<sup>133</sup> Con todo, los años radicales del ME dejaron en evidencia la decadencia de la universidad tradicional y la urgente necesidad de transformarla y modernizarla.

## **II. Movimiento Estudiantil en Chile**

Para el estudio del movimiento estudiantil chileno la bibliografía está lejos de ser tan abundante como la que existe para el caso español. De hecho, el único libro sobre el ME que abarca todo el período del régimen de Pinochet es el de Diego García,

---

<sup>132</sup> Francisco FERNANDEZ BUEY: “Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo”, Revista *Materiales*, 1 extraordinaria (1977), p. 1.

<sup>133</sup> Rafael ARGULLOL, “Reflexión” sobre los años radicales (movimiento estudiantil 1968-1971), Revista *Materiales*, 2 (marzo-abril 1977), p. 89-90.

José Isla y Pablo Toro, *Los muchachos de antes. Historias de la FECH, 1973-1988* (2006). Ya en la introducción, los autores dejan claro que no pretenden escribir una historia oficial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), sino más bien una recopilación de historias de los actores que participaron en la FECH entre 1973 – 1988. De esta manera, el libro se construye a partir de muchas voces, que se intercalan con las reflexiones de los autores, en un esfuerzo por dar profundidad y amplitud al tema de estudio.

El principal objeto de estudio son los estudiantes de oposición al régimen militar en la Universidad de Chile, sus intentos de reorganización del movimiento estudiantil, los desafíos a los que se enfrentan en el nuevo panorama político del país y la evolución del propio movimiento de estudiantes en relación con la evolución del conflicto social y político en Chile. Los autores distinguen dos grandes períodos en el movimiento estudiantil, 1973-1980 y 1981-1988, dentro de los cuales se producen momentos de mayor efervescencia y otros de repliegue.

El período 1973-1980 constituye, según los autores, una etapa de intervención e incipiente rearticulación del movimiento estudiantil. Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, los militares intervinieron la Universidad de Chile, disolvieron el Consejo Universitario y designaron a un nuevo Rector, en lugar del demócrata-cristiano Edgardo Boeninger. El Decreto Ley 111 disolvió automáticamente los Claustros Universitarios y todos los cuerpos colegiados que componían el gobierno de la Universidad de Chile. En virtud de este Decreto, la FECH fue disuelta e ilegalizada y toda actividad reivindicativa fue calificada de peligrosa y subversiva. En suma, durante el primer año del régimen militar, la Universidad de Chile perdió al 25% de su personal docente, al 10% del personal no académico y al 18% de sus estudiantes,<sup>134</sup> lo que fue un golpe devastador para el movimiento estudiantil.

A partir de 1976, los autores dan cuenta de una incipiente reorganización del movimiento estudiantil, fundamentalmente en torno a actividades culturales que eran más discretas y, por lo tanto, más difíciles de reprimir. Comenzaron así a realizar trabajos de verano, planes de acción social, bolsas de trabajo, etc.

En octubre de 1978 nació la Federación de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile (FECECH), que combinaba la designación de los delegados por las autoridades académicas con la votación de los estudiantes. A partir de la creación de

---

<sup>134</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 23.

la FECECH, la reorganización del movimiento estudiantil comenzó a hacerse más sólida y visible, con actividades de repudio contra el régimen, participación de los propios estudiantes en manifestaciones generales, e instancias de diálogo con los estudiantes oficialistas sobre los problemas propios de la universidad, como el alza de aranceles a los estudiantes. Así, entre 1979 y 1980 el movimiento estudiantil fue incrementando su agitación, sin embargo, en 1981 recibió un golpe inesperado: la Ley General de Universidades, con la que se inició un nuevo período para el movimiento estudiantil, que duró hasta 1988, y que estuvo caracterizado por la reorganización de la FECH y la fuerte movilización social en contra del régimen militar.

Los autores postulan que esta Ley significó un punto de inflexión para el movimiento estudiantil, por lo inesperado del golpe y por las transformaciones que introdujo en el sistema de universidades. El Decreto con Fuerza de Ley núm. 4, dictado a continuación de la LGU, modificó radicalmente el sistema de financiamiento de las universidades, y significó la disminución de aportes del Estado: si antes de 1973 era de un 80%, después del DFL 4 llegó al 50%. Además, se incorporó el cobro de aranceles a los estudiantes por la docencia recibida y ya no por la situación económica del alumno. La institución más afectada por esta normativa fue, a juicio de los autores, la Universidad de Chile, ya que fue privada de todas sus sedes regionales, de sus carreras pedagógicas y tecnológicas.<sup>135</sup>

Pese al desconcierto inicial, los estudiantes se recuperaron rápidamente de este golpe, y ya en 1983, durante las jornadas de protesta, aparecen en primera fila, alentando la movilización social y participando con bastante contundencia en las protestas. En este contexto, los autores señalan que las protestas fueron fundamentales para la reorganización del movimiento estudiantil, ya que en ellas evidenciaron que la contestación al régimen militar era masiva, y que estaba dispuesta a ocupar el espacio público.<sup>136</sup> La oleada de protestas favoreció la extensión de un movimiento de estudiantes, que exigía la reorganización de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Según los autores, el renacimiento de la FECH era extremadamente importante, y marcó hito dentro del movimiento estudiantil. La reorganización de la federación era vista por los estudiantes como una forma de derrota del régimen, ya que significaba romper la intervención directa en las universidades e introducir un elemento democrático en un país que carecía por completo de ello. De esta

---

<sup>135</sup> Ibid., p. 119.

<sup>136</sup> Ibid., p. 152.

manera, el renacimiento de la FECH se transformó en la bandera de lucha del movimiento estudiantil, otorgándole cohesión y unidad a un colectivo de intereses muy diversos.

Después de varios intentos y arduas discusiones, los estatutos de la FECH fueron aprobados en octubre de 1984, en un plebiscito con una amplia mayoría. Una vez constituida la FECH era necesario elegir su directiva: las organizaciones políticas de oposición más visibles entre los estudiantes eran la Democracia Cristiana (DC o DC Universitaria) y el Partido Comunista. Obviamente, ambos partidos intentaron aprovechar al máximo la instancia que suponía la reconstrucción de la FECH, por lo que se alinearon en concordancia con sus posturas políticas extra universitarias, introduciendo así un elemento de lucha entre los mismos estudiantes.<sup>137</sup>

Durante lo que quedaba del año 84 y gran parte de 1985 y 1986, la FECH se involucró con otros movimientos sociales, en un intento por crear una gran coalición contra la dictadura. Para ello recurrieron a las movilizaciones, paros, huelgas, produciéndose una espiral de protesta y represión. Sin embargo, las diferencias que aparecían entre los partidos de oposición, especialmente entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista en torno a la lucha armada, fueron perjudiciales para el ME, que se vio en medio de un conflicto entre partidos, lo que le restó unidad y capacidad de acción. Como señalan los autores del libro, “la crisis del “año decisivo” [1986] venía a poner fin a la pretensión sostenida por muchos – sobre todo en la primera directiva de la FECH – de construir un referente generacional de amplitud política inédita en nuestra historia reciente, que señalara rumbos nuevos para la sociedad chilena al margen de los traumas del pasado de los políticos adultos”.<sup>138</sup>

El último capítulo del libro, ¿Ganamos o perdimos? Cambios de paradigma, relata lo ocurrido en las elecciones de la FECH de 1986, luego de la ruptura entre los estudiantes de la DC y del PC. Triunfó la lista “La fuerza del Cambio”, compuesta por DC y socialistas, sin embargo, el movimiento estudiantil estaba agotado por las divisiones internas, la movilización social y la aparente disolución de la identidad del movimiento en la política general del país. Los nuevos dirigentes se ocuparon de reorientar su labor hacia los temas que preocupaban a los universitarios, el costo de los aranceles, los problemas de los alumnos expulsados por participar en movilizaciones,

---

<sup>137</sup> Ibid., p. 178 y ss.

<sup>138</sup> Ibid., p. 295.

etc.<sup>139</sup> La nueva tarea del movimiento era proteger lo que tanto tiempo les había costado conseguir, las federaciones democráticas de estudiantes. Para ello, fue necesario proponerse objetivos reales al interior de las universidades y dejar el protagonismo de la lucha contra el régimen en manos de los partidos políticos.

En este contexto, el movimiento estudiantil vuelve a surgir con enorme fuerza en 1987, a raíz de la designación de José Luis Federici como Rector delegado de la Universidad de Chile, que pretendía imponer un plan de racionalización de recursos que afectaba directamente a la universidad. La oposición al nuevo Rector fue inmediata y produjo uno de los mayores trances que ha visto la comunidad universitaria, que utilizó la estrategia de la ingobernabilidad llevada hasta el extremo, pero siempre en el contexto del conflicto universitario. Con el conflicto de Federici en la Universidad de Chile, termina el relato de *Los muchachos de antes*. Historias de la FECH 1973-1988, que, como hemos señalado, es la investigación más completa de que disponemos para estudiar al ME chileno.

El estudio de García, Isla y Toro se ha completado con bibliografía más específica, que trata algún aspecto o período particular del ME chileno. Un libro que nos ha servido de antecedente para nuestro estudio es *ACU. Rescatando el asombro* (2006), de Víctor Muñoz Tamayo. En este estudio, el autor investiga la historia de la Asociación Cultural Universitaria, surgida en 1977, que fue la primera organización estudiantil de contestación al régimen militar. La ACU, a través de actividades culturales como festivales de música y danza, talleres de teatro o literatura, operó como un espacio de encuentro de los estudiantes y como instancia de reestructuración de un movimiento estudiantil que había sido enormemente golpeado por el régimen. Así, desde un ámbito cultural, los universitarios de la ACU lograron subvertir o, al menos desafiar, la pesada loza impuesta por la dictadura y recuperar el espíritu inquieto y crítico que caracterizaba a la vida universitaria. Según su autor, “la ACU reunió personas para compartir arte y debate durante un régimen que en nombre de la “unidad nacional” censuraba el arte, prohibía el debate y no toleraba la reunión. En un Santiago de días vigilados y noches clausuradas, la ACU hizo teatro del absurdo, rompió con música el “apagón cultural” y difundió poemas que salvaron vidas y curaron locuras”.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Ibid., p. 311.

<sup>140</sup> Víctor MUÑOZ TAMAYO: *ACU. Rescatando el asombro*, Santiago, Libros La Calabaza del Diablo, 2006, p. 7.



Las tesis de Licenciatura de Jorge Pizarro, *La Movilización Social en la Lucha Democrática: El Caso de La Asamblea de la Civilidad en el Año Decisivo* (2003) y Carolina Espinoza, *De las aulas a la calle: la lucha por el fin de la intervención en la Universidad de Chile: crisis universitaria, proyección nacional y politización del conflicto en 1987* (2005) han sido particularmente útiles para comprender momentos específicos, no sólo del ME sino de la oposición al régimen de Pinochet en los años 80. La tesis de Pizarro, aunque no trata directamente sobre los estudiantes, da cuenta de un momento crucial en la lucha contra la dictadura, con la conformación de la Asamblea de la Civilidad (AC), de la cual sí participó la FECH y otras federaciones estudiantiles. En este sentido, la investigación de Jorge Pizarro no sólo explica el origen y la estrategia detrás de la AC sino también sus divisiones internas y posterior disolución, ofreciendo así una interpretación sobre las diversas estrategias llevadas a cabo por los partidos de oposición.

Por su parte, la tesis de Carolina Espinoza es uno de los pocos estudios que existen sobre el conflicto contra el Rector delegado José Luis Federici, en 1987, un momento en que no sólo los estudiantes sino la comunidad académica completa se levantó contra la intervención del régimen en las universidades. Además de contar con una valiosa colección de fuentes, la investigación de Espinoza ofrece una interesante interpretación respecto de la proyección política del conflicto contra Federici y de cómo la coordinación de la comunidad académica en pos de un objetivo común sirvió de inspiración para la lucha contra el régimen por la vía institucional.

Por último, para estudiar al ME chileno de los años 90 contamos con dos artículos: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)” (2006) de Fabio Moraga y “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, (2005) de Rodrigo Roco.

El artículo de Moraga abarca toda la década de los 90, y pone especial atención al desarrollo del ME chileno durante la transición a la democracia. Según el autor, fueron justamente los estudiantes los primeros que aparecieron criticando un proceso que se había llevado a cabo de espaldas a los ciudadanos. Así, Moraga hace referencia a la crisis de las federaciones democráticas durante 1993 y 1994; a los conflictos entre las bases estudiantiles y los dirigentes tradicionales, estos últimos muy apegados a las directivas de sus partidos políticos, que en ese momento estaban en el poder; y al surgimiento de grupos de izquierda extraparlamentaria, que fueron los encargados de recomponer al ME chileno y de levantar la voz contra lo poco y nada que se había

hecho en las universidades públicas luego de la derrota del régimen militar. El texto de Moraga tiene la particularidad de ofrecer una visión panorámica de la década de los 90, un período que ha sido muy poco estudiado por la historiografía nacional.

Por su parte, el artículo de Rodrigo Roco, “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente” (2005), tiene el doble valor de ofrecer una interpretación del conflicto estudiantil de 1997 y de relatar de primera fuente las vicisitudes del ME durante ese año. Es importante destacar que Roco fue presidente de la FECH durante 1996 y 1997, un período fundamental para el ME, ya que en esos años no sólo logra recomponerse luego de la crisis del 93-94, sino que además, consigue articular una movilización a nivel nacional, nunca antes vista en los años de transición a la democracia. Aunque el tema principal del artículo es justamente el conflicto de 1997, con el cual cerramos nuestra investigación, el autor hace una interpretación más general del ME, que nos parece particularmente interesante, y que dice relación con la idea de ciudadanía y comunidad. El ME chileno, desde sus orígenes a comienzos del s. XX, había apelado a esta idea de comunidad, en el entendido de que la universidad no es un espacio cerrado al resto de la sociedad civil. Dicha idea se habría puesto en duda con la intervención a la que fue sometida la universidad pública durante los años de régimen militar, y con la incorporación de criterios de libre mercado al sistema de educación superior. Sin embargo, es justamente el ME de los 80 y los 90 el que lucha por recuperar la noción de comunidad. “Así, un hilo conductor de rupturas y continuidades parece hacerse presente en las épocas, a sabiendas de que, de la misma manera que las ideas de democracia o de ciudadanía no existen sólo por estar inscritas en leyes o reglamentos, la existencia de la comunidad está fundamentalmente constituida de actitudes, de espacios, de valores y percepciones que cobran vida y forma en el cotidiano”.<sup>141</sup> Y fueron justamente estos valores los que defendieron los estudiantes chilenos cuando salieron a las calles a manifestarse contra el régimen y posteriormente, a exigir democratización en la universidad.

---

<sup>141</sup> Rodrigo Roco FOSSA: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente” en *Anales de la Universidad de Chile*, Sexta serie, 17 (2005), p. 80-81.

## CAPÍTULO 3

### LA TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA BAJO EL FRANQUISMO

Todo movimiento estudiantil surge como respuesta a la realidad institucional y social en la cual se desarrolla, y el caso español bajo el franquismo no fue la excepción. Desde sus inicios en 1950 y hasta la transición a la democracia, el movimiento estudiantil español está estrechamente vinculado con la universidad franquista, creada a partir de los principios ideológicos del régimen, como un intento de controlar el pensamiento y difundir los ideales del bando vencedor en la guerra civil.

Producto de la larga duración del régimen y de su transformación política, ideológica y económica, la universidad española también irá cambiando entre la década de los 40 y la de los 70. Es por eso que creemos necesario explicar, aunque sea brevemente, los cambios y permanencias que vive la universidad franquista, desde el final de la guerra hasta la transición a la democracia, para comprender mejor el contexto en el cual se desarrolla el movimiento estudiantil español.

#### **I. La universidad intervenida y depurada: los años 40.**

La universidad no quedó ajena al conflicto entre republicanos y nacionales, a partir de 1936. Sin ir más lejos, la Universidad de Madrid quedó completamente trastocada, al transformarse la Ciudad Universitaria en línea de frente. Las otras universidades españolas fueron afectadas de diversas formas, según quedaran en zona republicana o nacional.<sup>142</sup>

Una vez terminada la guerra, el recién inaugurado régimen franquista se dedicó con mucho ahínco a intervenir la universidad. Para eso, el 29 de julio de 1943 aprobó la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), que en su extenso preámbulo dejaba bastante claro el espíritu que la inspiraba:

“Al recuperar España su substancia histórica con el sacrificio y la sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvadora de la civilización de Occidente, y al proclamar con la victoria el principio de la revolución espiritual, se hace indispensable encarnar esa mutación honda de los espíritus en una transformación del orden universitario que, a la par que anude con la gloriosa tradición hispánica, se adapte a las normas y al estilo de un nuevo Estado,

---

<sup>142</sup> Jaume CLARET MIRANDA: “Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo”. *Hispania Nova*, Revista de Historia Contemporánea, 6, 2006, <http://hispanianova.rediris.es>.

antítesis del liberalismo y ejecutor implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a España su unidad, su grandeza y su libertad”.<sup>143</sup>

En términos generales, la LOU ponía el funcionamiento de la universidad bajo el control del régimen, eliminando cualquier atisbo de autonomía universitaria que pudiera quedar de las normativas republicanas.<sup>144</sup> Esta ley hacía del Rector, la cabeza visible de la universidad, aunque este dependía directamente del Ministro de Educación, tanto para su nombramiento como para su cese. A su vez, el Rector presentaba al ministerio a tres candidatos para el cargo de Vicerrector, y los decanos eran elegidos por el Rector de entre una terna presentada por la Facultad.<sup>145</sup> De esta manera, la representatividad de los académicos era prácticamente nula, y los nombramientos dependían, en última instancia, del régimen de Franco.

Según los autores de *Estudiantes contra Franco*, el contenido de la LOU era retrógrado, ya que se limitaba a conservar la estructura de funcionamiento de la universidad decimonónica, “pasada ahora por el doble tamiz católico integrista y falangista, y además reforzada por el hecho de extremar el control e imponer a la universidad el concepto arbitrario del uso del poder que tienen las dictaduras”.<sup>146</sup> En este sentido, el Rector debía pertenecer a Falange, para asegurar la adhesión al régimen y mantener lo que se consideraba “pureza ideológica” en la universidad. En términos de organización, la LOU no modificó la estructura de la universidad española, que siguió dividiéndose en Facultades y Cátedras, manteniendo así el poder del catedrático sobre las otras categorías de profesores y sobre el estudiantado.

La LOU también estableció un complejo sistema de vigilancia sobre los contenidos de la enseñanza y sobre el estudiantado. De esta manera, los programas debían ser presentados para su aprobación un mes antes del comienzo de las clases, con el objetivo de que su contenido estuviera de acuerdo con “las normas inspiradoras del Estado”.<sup>147</sup> Y además, creó un régimen de disciplina sobre profesores, estudiantes y

---

<sup>143</sup> Preámbulo de la LOU, <http://www.filosofia.org/mfa/fae943a.htm>

<sup>144</sup> Jorge MARTÍNEZ: “Las reformas en el gobierno de las universidades públicas españolas. Autonomía y rendición de cuentas”. *La Cuestión Universitaria*, Boletín electrónico de la cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, Universidad Politécnica de Madrid, [http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/articulo.php?id\\_articulo=22](http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/articulo.php?id_articulo=22), p. 1.

<sup>145</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 7.

<sup>146</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 70.

<sup>147</sup> *Ibid.*, p. 72.

personal no docente, que establecía las faltas (graves o leves) y las sanciones a aplicar en caso de cometerse alguna.<sup>148</sup>

Con todo, probablemente el elemento más destacado de la LOU tiene que ver con la sindicalización obligatoria y con la ideologización de los estudiantes. Respecto de lo primero, la LOU encuadró a todos los matriculados en el Sindicato Español Universitario (SEU), controlado por Falange. El SEU se había creado el 21 de noviembre de 1933 (apenas un mes después de la constitución de Falange Española), con el objetivo de alcanzar “el dominio pleno de la Universidad”<sup>149</sup> y transformarse en una herramienta de propaganda y penetración de Falange en la universidad. Su inspiración fueron las milicias fascistas y los grupos nazis que habían surgido años antes en Italia y Alemania, y su principal enemigo, la Federación Universitaria Escolar (FUE), creada en 1930, y que durante la II República había sido la agrupación de estudiantes más poderosa de la universidad española.<sup>150</sup>

Durante la guerra civil, el SEU pasó a ser el único organismo estudiantil permitido por el bando nacional, y a través de la LOU, en 1943 consiguió el objetivo de la sindicalización obligatoria. Para el Estado franquista, el SEU debía transformarse en un instrumento eficaz para el control y la disciplina de los universitarios de manera que progresivamente, el Sindicato fue generando una serie de mecanismos y políticas tendientes a ejercer efectivamente ese control.<sup>151</sup> La idea era que toda la actividad estudiantil, incluida la extra académica y la asistencial, quedara vigilada por el SEU. De esta manera, como señala Miguel Ángel Ruiz Carnicer, el Sindicato Español Universitario fue convirtiéndose progresivamente en una organización asistencial y burocrática, dependiente completamente del Estado, con lo que cualquier proyecto autónomo que viniera de las secciones juveniles de Falange quedaba encausado en la misión que el régimen había dado al SEU.<sup>152</sup>

Respecto de la ideologización, la Ley de Ordenación Universitaria obligaba a los estudiantes a cursar materias de formación religiosa, política y educación física, las

---

<sup>148</sup> Ibid.

<sup>149</sup> *Breve Historia informativa del Sindicato Español Universitario, 1933-1941*, Madrid, Rivadeneyra, s.a., p. 10, citado por Miguel Ángel RUIZ CARNICER: *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1933-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*. Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 51.

<sup>150</sup> RUIZ CARNICER: *El Sindicato Español Universitario*, p. 51.

<sup>151</sup> Ibid., p. 166.

<sup>152</sup> Ibid.

llamadas “tres Marías”<sup>153</sup>, pero además, todos los contenidos y materias que se dictaban debían estar de acuerdo con los ideales del nacionalcatolicismo<sup>154</sup>. Según el preámbulo:

“La Ley, además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica. Todas sus actividades habrán de tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana y lo establecido por los sagrados cánones respecto de la enseñanza. Por primera vez, después de muchos años de laicismo en las aulas, será preceptiva la cultura superior religiosa”.<sup>155</sup>

Con respecto a la formación política, la preeminencia de los ideales y valores falangistas quedaba muy bien establecida en la normativa.

“Por otra parte, la Ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Falange, inspiradores del Estado, y vibra al compás del imperativo y del estilo de las generaciones heroicas que supieron morir por una Patria mejor. Este fervor encarna en instituciones de profesores y alumnos, al par que en cursos de formación política y de exaltación de los valores hispánicos, con el fin de mantener siempre vivo y tenso en el alma de la Universidad el aliento de la auténtica España”.<sup>156</sup>

De esta manera, a través de la Ley de Ordenación Universitaria, la educación superior española pasó a estar directamente controlada por el régimen, tanto es sus aspectos administrativos como en los académicos y de contenidos.

Sin embargo, esta no fue la única intervención del régimen franquista en la universidad. Una vez terminada la guerra civil comenzó la depuración de estudiantes y profesores en las universidades españolas, lo que trajo como consecuencia sanciones, expulsiones, cárcel, exilio y muerte para muchos de ellos. Según Jaume Claret, pese a que la represión franquista tuvo como objetivos principales a campesinos, obreros sindicalistas y militantes de partidos de izquierda, nacionalistas periféricos y republicanos, la violencia que se ejerció sobre el estamento de catedráticos fue innegable. Este autor señala que tiene evidencia documental de más de 160 sanciones a catedráticos, las cuales podían ir desde la jubilación forzosa a la expulsión, pasando por la inhabilitación para ejercer cargos o el traslado de centro. Y además, nombra a 16

---

<sup>153</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 73.

<sup>154</sup> Se entiende por nacionalcatolicismo aquella particular doctrina ideológica propia del franquismo, que se caracteriza por la estrecha vinculación entre los preceptos de la Iglesia Católica y las políticas del Estado.

<sup>155</sup> Preámbulo de la LOU, <http://www.filosofia.org/mfa/fae943a.htm>.

<sup>156</sup> Ibid.

profesores, entre catedráticos y auxiliares, de diversas universidades españolas, quienes fueron asesinados por la represión franquista.<sup>157</sup>

Los autores de *Estudiantes contra Franco* señalan que, de los 600 catedráticos que había en España antes de la guerra civil, la depuración afectó al 37%, es decir, en 1940 quedaban solamente 380, en su mayoría, conservadores y mauristas, pertenecientes a la derecha católica y algunos falangistas.<sup>158</sup>

Por su parte, Enrique Otero Carvajal, en su libro *La destrucción de la Ciencia en España: la depuración de la Universidad franquista*, señala que solo en la Universidad de Madrid, el 44,35% de los catedráticos fue depurado (en términos absolutos, de los 128 catedráticos que había en 1936, en 1939 habían fallecido cuatro y 55 habían sido apartados de sus funciones). Otero Carvajal desglosa la depuración por facultades, y establece que Medicina fue, por lejos, la más afectada, con el 60,71% de sus catedráticos depurados; le siguen Ciencias (50%), Derecho (43,11%), Farmacia (40%) y Filosofía y Letras (28,57%). Además de los catedráticos, la depuración también afectó a los profesores auxiliares y ayudantes, de los cuales el 43,62% sufrió algún tipo de represión.<sup>159</sup>

Ahora bien, además del drama personal que supuso para cada profesor depurado la sanción aplicada (recordemos que esta podía ir desde el traslado hasta la expulsión, e incluso llegar a la prisión, el exilio y la muerte), la fuerte represión que se abatió sobre la universidad española significó un enorme perjuicio para el conocimiento y la investigación, y un indudable retroceso con respecto a la actividad universitaria que se había llevado a cabo durante los años republicanos. Según Otero Carvajal, “el coste fue abrumador en pérdidas de vidas humanas y de un valioso capital humano del que España no estaba sobrada en aquellos años. Las consecuencias fueron evidentes: un retraso de decenios que sólo comenzó a acortarse con el restablecimiento de la democracia tras la muerte del dictador”.<sup>160</sup>

Por su parte, Jaume Claret considera que el yermo franquista, es decir, la precaria situación de la universidad española luego de la depuración, no sólo tuvo que ver con los docentes que fueron expulsados, sino también, y de manera más directa, con los que se quedaron. “Olvidamos que el yermo real y duradero lo crearon sobre todo

---

<sup>157</sup> J. CLARET: “Cuando las cátedras eran trincheras...”, <http://hispanianova.rediris.es>.

<sup>158</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 73-75.

<sup>159</sup> Enrique OTERO CARVAJAL: *La destrucción de la Ciencia en España: la depuración de la Universidad franquista*, Madrid, Editorial Complutense, 2006, p. 82.

<sup>160</sup> Ibid.

aquellos profesores que permanecieron en España y ocuparon las vacantes [de los depurados]. No porque todos ellos fuesen malos, sino porque la ideología pasaba por delante de la ciencia y tuvieron cuarenta años para perpetuarse”.<sup>161</sup>

Ahora bien, la depuración en la universidad no terminó en la década de los 40. En distintos momentos, la dictadura recurrirá a la expulsión de catedráticos y profesores auxiliares, ayudantes y no numerarios, cuando considere que éstos tienen actitudes que no están en consonancia con sus principios. Así, en febrero de 1965, cinco catedráticos fueron expulsados por apoyar la IV Asamblea Libre de Estudiantes; y durante la década de los 70, a decenas de Profesores No Numerarios no se les renovó contrato (era la forma más expedita para expulsarlos de la universidad) por su participación en un movimiento en favor de mejores condiciones laborales, y por su apoyo al movimiento estudiantil.<sup>162</sup>

Por cierto, la represión también afectó a los estudiantes, ya que muchos de los que sobrevivieron a la contienda y lucharon en el bando republicano, no pudieron continuar con sus estudios, o aquellos cuyos padres habían sido depurados, exiliados o asesinados, tampoco pudieron acceder a la universidad, ya fuera por sanción o porque debían trabajar para contribuir al ingreso familiar. “En definitiva, les esperaba el estigma de *vencido*, de *rojo*, o de *enemigo de España*, con todos los inconvenientes que ello acarrearía, incluyendo abandonar los estudios de una carrera iniciada, o, sencillamente, no poder empezar la que habían previsto”.<sup>163</sup> Debido a esto, el conjunto del estudiantado de la España de posguerra estaba compuesto mayoritariamente por vencedores: ex combatientes del bando nacional o sus hijos; los jóvenes falangistas del SEU o grupos de la derecha católica.<sup>164</sup>

Pese al nulo espacio que había en la universidad para los estudiantes de oposición, en 1946 renació la antigua Federación Universitaria Escolar (FUE), con el apoyo de estudiantes en el exilio. Detrás de la reconstrucción de la FUE estaba el Partido Comunista de España y las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Sin duda, la reconstrucción de la antigua federación universitaria tenía como objetivo la reorganización del movimiento estudiantil en torno a una institución histórica como lo era la FUE. Sin embargo, la represión a la que fue sometida y la intervención en la

---

<sup>161</sup> J. CLARET: “Cuando las cátedras eran trincheras...”, <http://hispanianova.rediris.es>.

<sup>162</sup> Esto lo veremos con más detalle en los capítulos dedicados al Movimiento Estudiantil en la década de los 70.

<sup>163</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 79.

<sup>164</sup> Ibid.



universidad hicieron muy difícil la reorganización del movimiento estudiantil. Será necesaria la llegada de una nueva generación de alumnos, que no habían vivido la guerra, para que el movimiento comenzara a recomponerse.

## **II. La década de los 50: comienza la contestación en la universidad.**

En la década de los 50, el régimen no realizó mayores innovaciones legislativas en materia de educación superior, por lo que se mantuvo vigente la Ley de Ordenación Universitaria. Sin embargo, en 1951 el régimen nombró a Joaquín Ruiz-Giménez como Ministro de Educación, un hombre adepto a Franco pero de talante más aperturista. Esto se manifestó en los nombramientos que hizo Ruiz-Giménez, ya que escogió a sus colaboradores por su apertura intelectual más que por su filiación política. Así, nombró a Pedro Laín Entralgo como Rector de la Universidad de Madrid, y a Antonio Tovar en el mismo cargo en Salamanca. Según explica José Álvarez Cobelas, ambos eran falangistas, pero se destacaban por su espíritu crítico, y por ser discípulos de Dionisio Ridruejo, quien a esa altura ya era un detractor del régimen.<sup>165</sup>

Aunque la universidad de los 50 no vio grandes cambios en materia legislativa, sí se produjeron transformaciones en el ambiente universitario, ya que en esta década ingresaron nuevas generaciones de estudiantes, más alejados del conflicto civil y que ya no necesariamente operaban en la lógica de vencedores y vencidos. Como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, “ya no están presentes en ellas los estudiantes vestidos con uniformes militares o con los correaes falangistas, que habían combatido en los frentes, o que, al menos, habían vivido de forma directa y plenamente conscientes la guerra. Ahora tienen el protagonismo sus hermanos menores e incluso los que nacieron durante la guerra o eran niños pequeños en su desarrollo”.<sup>166</sup>

En este sentido, aunque aún marcados por la guerra, estos estudiantes no la habían experimentado, y eso les permitía observar con una cierta distancia ideológica el conflicto y sus consecuencias. Las nuevas actitudes de los estudiantes de los 50 quedan reflejadas en dos estudios realizados durante esta década, y recogidos por José Álvarez Cobelas en su libro *Envenenados de cuerpo y alma*. El primero, publicado en octubre de 1955 por José Luis Pinillos, concluía que el 60% de los estudiantes de los años 50 se sentía disconforme con el estado de la sociedad española, y el 90% se consideraba como

---

<sup>165</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 50-51.

<sup>166</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 99.

liberal.<sup>167</sup> A partir de este estudio, el rector Laín realizó un análisis sobre la juventud universitaria, de la cual concluyó que existía una mayoría que estaba preocupada por terminar su carrera y desarrollarse profesionalmente, y una minoría que se mostraba interesada en la situación social, política y económica del país, y que se identificaba con un amplio espectro ideológico, que iba desde el falangismo a posturas democrático-radicales.<sup>168</sup>

Con todo, lo más interesante del análisis del rector Laín decía relación con “el rechazo generacional de la juventud universitaria a los vencedores en la Guerra y la valoración que hacían los alumnos sobre su capacidad para transformar la sociedad. Las causas las asociaba a la tradicional simbiosis juventud-rebeldía, el desconocimiento práctico de la Guerra Civil, las escasas salidas profesionales, los contactos con el extranjero, la curiosidad por lo prohibido, el desprestigio de parte del profesorado, que además no inculcaba valores del sistema, el paternalismo y la contradicción entre una juventud que se había mitificado como generación en consonancia con la ideología fascista y que, por otra parte, se consideraba continuadora y heredera, no creadora”.<sup>169</sup>

En este mismo sentido, los autores de *Estudiantes contra Franco* señalan que los temas fundamentales de la universidad en los años 50 ya no tenían que ver con la dicotomía vencedores y vencidos, sino con los problemas que afectaban a los universitarios: las posibles salidas profesionales, los problemas sociales de la vida práctica, la realidad obrera, que comienza a interesar a los estudiantes, la relación con Europa y el resto del mundo, etc.<sup>170</sup> Además, los discursos de posguerra ya se estaban desgastando ante los estudiantes, el nacionalcatolicismo era visto como algo folclórico y la revolución nacionalsindicalista se consideraba irreal. “Los muchachos, que en su más tierna infancia habían oído esas cantinelas mil y una veces, en los fuegos de campamento de los albergues juveniles, o que las vivían en la escuela y casi por doquier, esperaban cuando crecía que las consignas recibidas fueran más allá de su pura enunciación. Esperaba que la consigna principal – tan modernista y tan fascista – con la que les habían alimentado, la primacía de la “juventud” fuese de verdad un hecho entregándoles mayores porciones de poder y de influencia pública”.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 62.

<sup>168</sup> Ibid.

<sup>169</sup> Ibid., p. 62-63.

<sup>170</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 101.

<sup>171</sup> Ibid., p. 101-102.

Las transformaciones producidas en el estudiantado de la década de los 50 supusieron también una nueva inyección de energía al SEU, que en la dura etapa de postguerra había languidecido y se había transformado en una institución puramente asistencial, con permanentes problemas de presupuesto y sin mayor apoyo del régimen. La llegada de Ruiz-Giménez al Ministerio de Educación fue crucial ya que siempre se mostró dispuesto a ayudar al Sindicato en términos políticos y económicos. Esto permitió la renovación de los dirigentes seuistas (que había comenzado a fines de la década de los 40, pero se profundizó en los primeros años de la década de los 50) y el relanzamiento de la actividad sindical, la oferta cultural y la vida política del SEU.<sup>172</sup> Como señala Miguel Ángel Ruiz Carnicer, “el SEU aparecerá, al menos hasta 1954, como aliado de los afanes liberalizadores de Ruiz-Giménez, al igual que la Secretaría General del Movimiento, ahora con Fernández Cuesta como Ministro Secretario de forma exclusiva”.<sup>173</sup>

El problema fue que esta renovación del Sindicato llegó tarde, porque al mismo tiempo aumentaba la diversificación social y política de la gran masa de estudiantes, quienes, como hemos señalado antes, no operaban ya en la lógica de vencedores y vencidos, y buscaban espacios autónomos para sus actividades. De hecho, a partir de la década de los 50, la sindicalización obligatoria comenzó a ser fuertemente cuestionada por los propios estudiantes. De esta manera, el SEU de la década de los 50 perdió el control de la mayoría del estudiantado y sólo logró mantener a su lado a las minorías falangistas.<sup>174</sup>

La diversificación política del estudiantado quedó de manifiesto en 1953, durante la celebración de la primera Asamblea de las Universidades Españolas. Esta instancia fue vista como una oportunidad para los estudiantes disidentes, que no dejaron pasar la ocasión de criticar la sindicalización obligatoria y la intervención en la universidad; también reclamaron libertad de expresión para los estudiantes. En 1954 se produjo otro ataque al SEU y a las autoridades académicas, en el contexto de las movilizaciones por Gibraltar. Durante el entierro de José Ortega y Gasset, en octubre del año 55, se produjeron nuevos altercados entre estudiantes disidentes y falangistas, demostrando que los primeros ya comenzaban a reorganizarse.

---

<sup>172</sup> M. A. RUIZ CARNICER: *El Sindicato Español Universitario*, 245.

<sup>173</sup> Ibid.

<sup>174</sup> Ibid., p. 246.

A principios de 1956, los universitarios disidentes organizaron un congreso de estudiantes cuyo objetivo era proponer la democratización de las organizaciones estudiantiles, particularmente del SEU. El 8 de febrero de 1956 se produjo un asalto a la Universidad de Madrid por parte de elementos falangistas que apalearon a estudiantes disidentes y destruyeron parte de la infraestructura universitaria. En respuesta, el 9 de febrero los estudiantes disidentes salieron en manifestación por la calle San Bernardo, en donde se produjeron choques entre los estudiantes falangistas y los manifestantes. La violencia producida durante esta jornada terminó con un hombre herido de bala y sesenta detenidos.<sup>175</sup> Obviamente, esto rebasó todos los límites de tolerancia del régimen, por lo que se declaró el Estado de Excepción.

Los sucesos de 1956 culminaron con la salida de Ruiz-Giménez del Ministerio de Educación, y de Laín Entralgo de la Universidad de Madrid. La corriente aperturista que se había iniciado con ellos tuvo un abrupto final, y de hecho, ambos intelectuales fueron transitando, a lo largo de los años, hacia posturas democráticas. Además, estos acontecimientos tendrán un efecto devastador para el SEU, ya que vinieron a constatar el fracaso en el proyecto de socialización de los estudiantes universitarios, y por lo tanto, el Sindicato comenzó un proceso de degradación hasta su disolución en 1965. A partir de 1956, la brecha entre la masa de estudiantes universitarios y el SEU se fue ampliando progresivamente, pese a los fallidos intentos del Sindicato por acortarla. Finalmente, éste se transformó “en una cáscara hueca, desasistido del gobierno y del cuerpo estudiantil”.<sup>176</sup>

Por otra parte, la constatación por parte del régimen de que existía una disidencia – aunque no muy amplia, disidencia al fin – en la universidad, le llevó a imponer ciertas prácticas represivas, como la infiltración de la policía en los campus y Facultades, que se mantendrán hasta la muerte del dictador y que serán fundamentales para el devenir del movimiento estudiantil.

A partir de los sucesos de 1956, la disidencia dentro de la universidad aumentó y se tornó más variada. Si hasta 1956 el PCE había creado las estrategias políticas de oposición, ese mismo año van a surgir nuevas organizaciones, Nueva Izquierda Universitaria (que luego se transformará en el Frente de Liberación Popular, FLP) y la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). De esta forma, el movimiento estudiantil logró crear sus propias organizaciones, algunas influidas por partidos políticos y otras

---

<sup>175</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 38-39.

<sup>176</sup> M. A. RUIZ CARNICER: *El Sindicato Español Universitario*, p. 318.

independientes, que provocarán oleadas de movilización social, y que si bien en un principio colaborarán en la reorganización del movimiento, pronto tendrán serias diferencias respecto de las estrategias de movilización.

### **III. Los revueltos años 60: masificación y movilización.**

La primera gran diferencia de la universidad española en los años 60 con respecto a las décadas anteriores es la masificación, que a su vez conllevó a la diversificación social y de género de los estudiantes. Según datos aportados por los autores de *Estudiantes contra Franco*, en el período 1955-1960 los alumnos matriculados en la universidad llegaban a 70 mil, mientras que en el período 1970-1975 ya eran 400 mil.<sup>177</sup> Este crecimiento explosivo de estudiantes tuvo diversas consecuencias, tanto académicas como políticas, ya que la universidad española no estaba preparada para recibir y educar a tal cantidad de jóvenes, por lo que fue necesaria una modernización que vendría de la mano de la Ley General de Educación (1970). Además, la diversificación social del alumnado se tradujo en un enriquecimiento para el movimiento estudiantil, lo que contribuyó a aumentar la contestación al régimen. Como señala Gregorio Valdelvira, “en el ascenso de la confrontación con el Régimen pesó decisivamente el aumento considerable del número de estudiantes universitarios, con respecto a los dos decenios anteriores. El crecimiento aun se aceleró más durante los años siguientes, dada la importancia que en un país con escasas oportunidades de movilidad social, debido a su estructura y nivel de desarrollo económico, se daba a la educación como medio de promoción social”.<sup>178</sup>

El crecimiento económico que se produjo en España en la década de los 60 permitió también que muchas familias de clase media mandaran por primera vez a sus hijos a la universidad, no tanto por el costo de la matrícula (que siempre fue bastante bajo) sino porque podían prescindir del trabajo de sus hijos durante esos años. Además, los estudios se entendían como una forma de promoción social. Como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, “a las aulas llegó gente nueva, y el prototipo de estudiante empezó a transformarse a gran velocidad: al hijo del profesional que se

---

<sup>177</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p.158. Esta última cifra incluye el aumento de matrícula en facultades, escuelas técnicas y los títulos de grado medio, que hasta 1970 no tenían rango universitario.

<sup>178</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 16.

preparaba para ingresar en respetables escalafones o poder montar su clínica o su bufete, se añadió aquel otro – destinado a la administración, a la docencia o a competir con aquellos otros en las profesiones liberales, la medicina en especial – que rendía cuentas (y se beneficiaba a la vez) de los frutos del crecimiento económico”.<sup>179</sup>

Para hacer frente al aumento de estudiantes, la universidad comenzó a contratar a profesores jóvenes, generalmente recién licenciados, que conformaron, a lo largo de la década del 60 y sobre todo, durante los años 70, un grupo muy importante dentro de la universidad: los profesores no numerarios (PNN).<sup>180</sup> Estos nuevos profesores, hasta hace poco estudiantes y muchas veces líderes del movimiento, contribuyeron a la transformación de la universidad y apoyaron las reivindicaciones de los estudiantes, a la vez que manifestaban las suyas propias. Los PNN, “con contratos anuales mal pagados activaron un movimiento de reivindicación laboral y protesta política de larga duración, ambas conjuntas aunque no mezcladas – demandaban mejoras laborales y una Universidad democrática en su funcionamiento, pero también querían la abolición de la dictadura en el país –, que fue de gran ayuda para el movimiento estudiantil”.<sup>181</sup>

Ahora bien, además del crecimiento del número de estudiantes (y de profesores no numerarios) y su diversificación social, la universidad de los años 60 se caracteriza también por un cambio importante en las actitudes y en la cultura política de los estudiantes. Respecto de las actitudes, “cuestionar los papeles y funciones de la familia tradicional, asumir y practicar la liberalización de las relaciones sexuales, denunciar el “consumismo burgués”, reivindicar la igualdad de la mujer, eran aspectos que se abrían paso paulatinamente”.<sup>182</sup> Además, los estudiantes fueron capaces de desarrollar una importante cultura política que es fundamental para comprender las orientaciones del movimiento.

Como señala José María Maravall, “una subcultura política notablemente compleja se fue desarrollando dentro de las Facultades: las actividades que incluían seminarios sobre Lautreamont, surrealismo y Trotsky, discusiones públicas sobre la nacionalización de la Banca, la organización de comités antiimperialistas pro-Vietnam, etc. A medida que esta subcultura se fue desarrollando, las actividades fueron saliendo a

---

<sup>179</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 162.

<sup>180</sup> En 1959-1969, en la Universidad española había 2.882 catedráticos y 3.431 PNN. En 1972-1973, el número de catedráticos era de 3.595 y el de PNN llegaba a los 14.669. Datos obtenidos de E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 163.

<sup>181</sup> *Ibid.*, p. 156.

<sup>182</sup> *Ibid.*, p. 176.

la luz pública: disminuyó la clandestinidad, las identidades políticas individuales se fueron haciendo más visibles”.<sup>183</sup>

En este contexto de cambio y transformación, no sólo los códigos de los padres eran considerados obsoletos, sino también el régimen que había surgido de una guerra que ellos no habían vivido. Es por esto que según los autores de *Estudiantes contra Franco*, el movimiento estudiantil español de los sesenta se distingue por un persistente y combativo antifranquismo. “Si hasta 1968 la protesta universitaria no destacó por la escenografía contracultural, sí lo hizo en cambio por la denuncia de la dictadura, como ha sucedido también en otros países con regímenes autoritarios. Los estudiantes articularon y socializaron la discrepancia y la rebeldía política contra un régimen que resultaba rancio y rechazable para su expectativa vital de veinteañeros, independientemente de la clase social”.<sup>184</sup>

Otro elemento importante para comprender la disidencia en la universidad es el que apunta José Álvarez Cobelas, referente a la socialización de los estudiantes. Este autor señala que, en general, los estudiantes permanecían una media de 7 años en la universidad, por lo que los dirigentes del movimiento estudiantil alcanzaban a transmitir sus experiencias y a recibir las de sus antecesores. Además, el lugar de residencia de los estudiantes también ayudaba a la socialización. Según datos de José Álvarez Cobelas, el 69% de los alumnos residían con sus familias, el 18,5% en pensiones y residencias, y el 10,9% en Colegios Mayores.<sup>185</sup> “Socialmente, la diferencia más notable consistía en que estos dirigentes eran de clase alta, como en anteriores promociones, pero, también, por primera vez, de clase media baja, en muchos casos de provincias, que vivían en pensiones y, excepcionalmente, en pisos compartidos, por su menor coste. Al no estar mediatizados por la influencia familiar fueron más fácilmente politizados como antifranquistas por redes informales, sobre todo, de amigos”.<sup>186</sup>

La socialización de los estudiantes se hizo a través de diversas formas, pero los autores de *Estudiantes contra Franco* mencionan tres como las más importantes. En primer lugar, las actividades culturales y políticas que se llevaban a cabo en la universidad (aulas y patios). En segundo lugar, la necesidad de organizarse de forma independiente del SEU. “Para construir un mundo nuevo tenían que librarse del

---

<sup>183</sup> MARAVALL: *Dictadura y disenso político...*, p. 176.

<sup>184</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 182.

<sup>185</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 139.

<sup>186</sup> *Ibid.*, p. 140.

existente y, cuando a principios de los sesenta se presentaban a las elecciones y se infiltraban en el SEU, lo que buscaban sobre todo era organizar por sí mismos (y para sí) ese mundo”.<sup>187</sup> En tercer lugar, la represión utilizada por el régimen, que golpeaba constantemente al movimiento, también sirvió para la organización de los estudiantes y, especialmente, para crear identidad.

En este sentido y siguiendo a José María Maravall, a partir de 1960 podemos observar un segundo período en el movimiento estudiantil, el cual habría comenzado de manera cautelosa, debido a la represión y a los efectos del Estado de Excepción.<sup>188</sup> Según Maravall, “las organizaciones clandestinas en las universidades intentaron orientar sus estrategias hacia actividades sindicales y problemas profesionales de los estudiantes”.<sup>189</sup> Para sortear las dificultades de la represión y de la intervención en la universidad, los disidentes recurrieron al activismo cultural, a través de revistas y periódicos, pero luego de un par de cursos tranquilos, la movilización resurgió. En 1960 se había creado, en la clandestinidad, la FUDE, Federación Universitaria Democrática Española, que significó un gran avance para el movimiento estudiantil, ya que articuló un lugar de encuentro para las distintas organizaciones disidentes.<sup>190</sup> A partir de la creación de la FUDE, las asociaciones estudiantiles disidentes comenzarán a reforzarse y, a partir de 1964, promoverán acciones de protesta que se mantendrán vigentes, con más o menos intensidad, hasta la muerte de Franco. La creación de la FUDE, aunque clandestina, permitió crear como explica Maravall, “una organización de masas, es decir, una alternativa democrática frente a la organización corporativa del SEU, que atrajese a tantos militantes de partidos como a demócratas independientes”.<sup>191</sup>

En este contexto, las primeras movilizaciones importantes que se dan luego de la reimposición del Estado de Excepción fueron a mediados de 1961, cuando los alumnos de Económicas de la Universidad de Madrid se manifestaron contra la reestructuración de la carrera de Comercio. En solidaridad, el 18 de mayo de 1961 cerca de dos mil estudiantes marcharon hacia el ministerio de Educación. En 1962, las manifestaciones se sucedieron en distintas ciudades de España. Madrid, Barcelona y Bilbao fueron las más conflictivas, y como era de esperar, el aumento de la contestación estudiantil fue seguido por un aumento en la represión. Como señala José Álvarez Cobelas, a

---

<sup>187</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 184.

<sup>188</sup> MARAVALL: *Dictadura y disenso*, p. 166.

<sup>189</sup> Ibid.

<sup>190</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 118.

<sup>191</sup> MARAVALL: *Dictadura y disenso*, p. 167.



comienzos de 1964 “fueron detenidos 11 estudiantes acusados de pertenecer a la FUDE y haber escrito consignas contra el SEU en la Facultad de Ciencias. Pasaron al nuevo Tribunal de Orden Público, creado tras la reunión del Gabinete de 31 de mayo de 1963 por lo que se pasaba a juzgar los delitos políticos en tribunales civiles y no militares”.<sup>192</sup> En respuesta a estas detenciones, se produjeron nuevas movilizaciones y nuevas detenciones, creándose así un espiral de represión en torno al movimiento de estudiantes. El 13 de marzo de 1964, el Rector de la Universidad de Madrid prohibió una conferencia de Enrique Tierno Galván, y en protesta unos 300 estudiantes se concentraron en la Facultad de Económicas donde se constituyeron en la III Asamblea Libre de Estudiantes, la cual exigía libertad de sindicación universitaria y autonomía de la universidad. A las cinco de la mañana, la policía asaltó el edificio y los estudiantes que no lograron escapar fueron detenidos. La Facultad fue cerrada y a los pocos días, el resto de la universidad.

Como consecuencia de los sucesos de marzo de 1964, la Facultad de Económicas de la Universidad de Madrid se separó de la estructura del SEU. Otras facultades la siguieron: Económicas en Bilbao, Comercio en Oviedo, Medicina, Ciencias, Filosofía y Letras, Ingenieros Industriales, Arquitectura y Agronomía en Barcelona. En respuesta a los desórdenes causados por los estudiantes de Económicas en Madrid, las autoridades aplicaron 79 pérdidas de matrícula, 10 anulaciones de curso e incluso, prohibición de estudiar durante los dos cursos siguientes.<sup>193</sup>

En febrero de 1965 alumnos de Universidad de Madrid conformaron la IV Asamblea Libre de Estudiantes, que convocó a una marcha pacífica hacia el Rectorado, acompañada de académicos, con la intención de exponer sus demandas en torno a la libre sindicación, a la representatividad y autonomía de ésta, a la amnistía para los estudiantes detenidos o castigados y a la consagración de la libertad de expresión y asociación. Como relata Encarna Nicolás, la policía reprimió violentamente la manifestación, y las autoridades universitarias abrieron expedientes a estudiantes y catedráticos, y expulsaron a cinco de éstos: José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván, Agustín García Calvo, Santiago Montero Díaz y Mariano Aguilar Navarro, por participar en la marcha.<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 131.

<sup>193</sup> *Ibid.*, p. 132.

<sup>194</sup> E. NICOLÁS: *La libertad encadenada*, p. 366.

En marzo de este mismo año, otras facultades expresaron su solidaridad con la IV Asamblea, organizando manifestaciones y actos contra el SEU. Los persistentes problemas de orden público dentro de la universidad y la clara inoperancia del Sindicato para socializar a los estudiantes en la ideología política del régimen, provocaron su disolución en abril de 1965. Como hemos señalado anteriormente, desde la imposición de la sindicalización obligatoria en 1943, el SEU se había transformado en la institución de representación y control del estudiantado universitario. En la década de los 40, esta tarea se llevó adelante con bastante éxito, pero ya en los 50 y los 60, la diversidad social y política de los universitarios fue produciendo un divorcio entre la masa estudiantil y el Sindicato. El SEU – y por tanto el régimen – fracasó en la socialización de los estudiantes, pero a la vez les proporcionó la experiencia, aunque limitada y controlada, de representación y participación. Como señala Ruiz Carnicer, “la existencia misma del SEU como grupo mismo con una configuración propia y que dirá asumir – aunque ello distará mucho de la realidad – la defensa y representación de los intereses de los estudiantes, ayudó a que se mantuviera la conciencia entre los estudiantes de que ellos formaban un grupo definido dentro de la sociedad”.<sup>195</sup> Esto será fundamental para el posterior desarrollo del movimiento estudiantil.

#### **IV. El Sindicato Democrático de Estudiantes: un hito de la década de los 60.**

El vacío dejado por el SEU fue percibido como una oportunidad política para la creación de un nuevo sindicato democrático, objetivo que impulsó el movimiento a partir de entonces. Sin embargo, el régimen intentó impedir la creación de un sindicato democrático a través de las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APES). Estas asociaciones estaban conformadas por un delegado y un subdelegado, los cuales eran votados por los estudiantes. El voto era obligatorio, pero sólo se reconocería la elección si la abstención no superaba al 20%.<sup>196</sup> Pese a la introducción de un elemento representativo, el voto, las APES habían sido creadas para controlar al estudiantado, por lo que se otorgaba la facultad a decanos y directores de disolver las asociaciones completas o cesar en sus cargos a algún alumno en particular, si consideraban que se

---

<sup>195</sup> M. A. RUIZ CARNICER: *El Sindicato Español Universitario*, p. 505.

<sup>196</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 165 y ss.

habían excedido en sus atribuciones. El elemento representativo se contrarrestaba así con la discrecionalidad para disolver asociaciones y expulsar a estudiantes.

En este contexto, los estudiantes disidentes radicalizaron sus posturas, se manifestaron contra las APES y lograron superar el 20% de abstención en la mayoría de las facultades de la Universidad de Madrid. Al mismo tiempo, convocaron a elecciones libres, pero fueron impedidas por las autoridades universitarias, que no dudaron en abrir expedientes a los alumnos participantes en ellas.<sup>197</sup> El primer gran golpe a las autoridades vino desde Barcelona, cuando un grupo de estudiantes exigió al Rector la creación de un sindicato autónomo y, en vista de la respuesta negativa, al año siguiente decidieron aprovecharse de las elecciones de las APES para elegir a delegados antifranquistas, que en tanto miembros de las asociaciones, podían realizar actividades sindicales.

El 9 de marzo de 1966, más de 500 estudiantes, entre los que se encontraban la mayoría de delegados de la Universidad de Barcelona, se reunieron en el Convento de los Capuchinos de Sarriá, para discutir, junto con numerosos intelectuales y profesores, la creación de un sindicato democrático. Dicha reunión, que ha pasado a la historia como la “caputxinada”, se convirtió en un encierro de más de 40 horas, cercada por agentes de policía que aguardaron la orden de Franco de desalojar el convento. Demás está decir que muchos de los allí presentes fueron detenidos, a otros se les requisó el carné y se impusieron multas de hasta 200.000 pesetas. Lo ocurrido en el Convento de los Capuchinos generó una cadena de solidaridad que alteró aún más el funcionamiento de las universidades en toda España. Sin embargo, en términos concretos, sólo en la Universidad de Barcelona se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEUB), mientras en Madrid se seguía luchando contra las APES.

El movimiento estudiantil madrileño se enfrentaba a un problema que sería constante, las discusiones en torno a las estructuras de movilización: mientras algunos querían seguir el ejemplo de Barcelona y elegir en las APES a delegados opositores, otros consideraban que votar era una traición. Esta fisura se vivió con especial fuerza dentro del PCE, principal fuerza que articulaba al movimiento estudiantil ya que contaba con los mejores aparatos de propaganda y los militantes más disciplinados. El problema que se planteaba al PCE tenía que ver con la organización y, más importante aún, con la postura de la universidad en el camino de la revolución.

---

<sup>197</sup> Ibid., p. 169.

El asunto de la organización se resolvió de forma medianamente sencilla, ya que el PCE prefirió apoyar la creación de un sindicato democrático, organizando Comisiones de Estudiantes que se dedicaron a trabajar sobre los problemas profesionales, y en este contexto, la FUDE fue dejada de lado. El segundo problema tenía una solución más difícil, en tanto era necesario vincular teóricamente al movimiento estudiantil con la revolución. Esto se hizo partiendo de una definición de universidad como: “una institución que utilizan las clases dominantes para imponer su hegemonía ideológica y para establecer un sistema de formación de los cuadros sociales, capaces de poner en marcha los mecanismos de un sistema social que responde a los intereses y orientaciones de las minorías oligárquicas determinadoras del poder”.<sup>198</sup> Desde esta perspectiva, la universidad no se podía considerar como un sector de vanguardia revolucionaria pero sí democrática, que aliado con el movimiento obrero, podía crear un gran movimiento de masas que influyese sobre la clase media. En este sentido, la lucha del movimiento estudiantil no era coyuntural ni se circunscribía a los problemas universitarios, sino que tenía una tarea dentro del movimiento de oposición general.

Entre 1967 y 1970 se produjeron divisiones importantes dentro del Partido Comunista: “los disidentes se apartan del PCE por considerarlo pactista, revisionista y colaboracionista con los partidos burgueses – con el régimen de Franco, hablando más propiamente, y con las alternativas conservadoras que se les ofrecen desde dentro-”.<sup>199</sup> Entre los disidentes se encontraban grupos trotskistas y maoístas, que tendrán una postura muy distinta respecto de las estrategias de movilización.

Por su parte, el otro gran grupo dentro del movimiento universitario era el FLP, que al ser más heterogéneo en términos políticos y con un discurso más cercano a la revolución, era más atractivo para algunos estudiantes. Con todo, como señala Álvarez Cobelas, durante el período 1965 – 1967 “el PCE controló la política de oposición en la Universidad madrileña, sobre todo por su prestigio histórico, por su prestigio de ser para el régimen el enemigo oficial y por el prestigio de ser el único partido universitario con presencia en el movimiento obrero”.<sup>200</sup>

Ahora bien, la creación del Sindicato Democrático en Madrid también fue motivo de discusión, especialmente entre el PCE y el FLP, ya que el primero impulsaba

---

<sup>198</sup> Ibid., p. 184.

<sup>199</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 280.

<sup>200</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 185.

la creación del sindicato mientras que el Frente consideraba que era una nueva forma de control por parte de la burguesía. La revista *Acción Estudiantil*, órgano del FLP da un ejemplo de la visión que este grupo tenía respecto del Sindicato Democrático:

“El Sindicato Democrático es creado para incorporar a los estudiantes a una lucha democrático-burguesa; organizado para poder controlar desde arriba a la Base Estudiantil fácilmente controlable, por tanto desde más “arriba”. Un corsé para una lucha estudiantil revolucionaria. Un estimulante para las fuerzas de la cultura. A pesar de los intentos, válidos aunque limitados, frena una lucha socialista de base en la Universidad”.<sup>201</sup>

Finalmente, la Universidad de Madrid constituyó el Sindicato Democrático el 23 de abril de 1967, y a lo largo del curso 1967-1968 se extendió al resto de las universidades españolas. La policía intentó reprimir todas las actividades del SDEUM, radicalizando, de esta forma, la actuación de los estudiantes. Los espirales de acción – represión se fueron haciendo cada vez más constantes, aunque los repertorios de acción de los estudiantes también fueron innovadores y en su mayor parte, pacíficos: la interrupción de cátedras, las sentadas, las panfletadas, etc. Es importante tener en cuenta que los estudiantes españoles estaban muy influidos por las experiencias internacionales. Los movimientos contra la guerra de Vietnam y el Mayo francés de 1968 fueron motivos de inspiración para el movimiento estudiantil y de ellos imitaron algunos de sus repertorios de acción colectiva, como las sentadas.

En 1968 y producto de las constantes movilizaciones propiciadas por el movimiento estudiantil, el ministro de Educación Manuel Lora Tamayo fue reemplazado por el tecnócrata José Luis Villar Palasí, que al tiempo que proyectaba una nueva Ley General de Educación, se ocupó de crear servicios de información y contrainformación al interior de las universidades, para controlar la disidencia.

La nueva legislación universitaria intentaba responder a la masificación de la universidad española, ya que desde principios de los años 60, la educación superior española experimentó un importante crecimiento respecto del número de alumnos que recibía. A nivel regional, en el curso 1964-1965, los matriculados eran 85.148, de los cuales el 37,64% lo hacía en Madrid. En el curso 1968 – 1969 los porcentajes se mantienen: del total de matriculados (134.945), el 31,19% estaba en Madrid. Y este porcentaje aumentaba en el caso de las Escuelas Técnicas de Grado Superior. Finalmente, en el curso 1970 – 1971, el número de alumnos pasó a ser de 162.879, de

---

<sup>201</sup> *Acción Estudiantil*, noviembre de 1968, p. 3 en J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 295-296.

los cuales el 28,43% se repartían entre la Universidad Complutense y la recién creada Universidad Autónoma de Madrid.<sup>202</sup>

El aumento en el número de matriculados llevó al régimen a tomar medidas para contener al movimiento estudiantil. De ahí que el ministro Villar Palasí creara las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona, según Álvarez Cobelas, como una forma de mantener el espíritu elitista de la institución universitaria, evitando la masificación en un solo centro, pero también fue una estrategia para dividir al alumnado en las ciudades donde el movimiento estudiantil era más fuerte.

Respecto de la contrainformación, en 1968 se creó un grupo llamado Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) que pronto creó una red de colaboradores, entre bedeles, auxiliares, estudiantes y quizás, profesores. Ese mismo año se creó también la Policía de Orden Universitario, POU, en teoría un cuerpo al servicio de los Decanos y de los Rectores, lo que les permitía salir y entrar a las Facultades sin permiso previo. La creación del POU agravó el problema al interior de los centros, ya que parte del profesorado lo veía como una merma de su autoridad, mientras otra parte y la mayoría del alumnado lo consideraron un agravio.

Sobre las asociaciones de estudiantes, el Ministro declaró la materia como “clasificada” y finalmente se aprobó el Decreto Regulador de las Asociaciones de Estudiantes<sup>203</sup> que “en síntesis creaba un sistema electoral en el que cada curso elegía por sufragio directo, igual y secreto a un delegado, a un subdelegado y a siete consejeros que integrarían el Consejo de Facultad o Escuela. Cada cargo debería ser votado al menos por el 25% de los alumnos oficiales”.<sup>204</sup>

Las nuevas normativas respecto de la universidad no sirvieron para calmar los ánimos entre los estudiantes. De esta manera, comenzaron las sentadas y las interrupciones de las clases, produciéndose una difícil situación, en la que nuevamente, las estrategias de movilización dividirán al movimiento. Mientras el Sindicato Democrático pretendía llegar a acuerdos con parte de los catedráticos, e incluso con las autoridades académicas, para evitar los enfrentamientos violentos y mostrar su rechazo a la ocupación policial, una minoría de estudiantes, fundamentalmente ácratas, pretendía hacerlo mediante el uso de la fuerza.

---

<sup>202</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 214-215.

<sup>203</sup> Apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de septiembre de 1968.

<sup>204</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 221.

El curso 1968-1969 fue especialmente conflictivo, con choques con la policía, huelgas, y manifestaciones de todo tipo. Otra forma de acción recurrida durante ese curso fue la de los “juicios críticos”, lo que provocó importantes roces con los académicos. Estos juicios eran una crítica a los métodos pedagógicos y a los conocimientos de la materia impartida por los docentes, pero al final resultaban juicios contra la ideología política del profesor.<sup>205</sup> De esta manera, las estructuras de movilización y las formas de acción dividirán al movimiento estudiantil, y en algunos momentos opacarán la discusión sobre los objetivos y las reivindicaciones.

Según Charles Powell, el conflicto universitario alcanzó su punto máximo en enero de 1969, cuando estudiantes de la Universidad de Barcelona asaltaron el Rectorado, y en Madrid la policía informó de la muerte de Enrique Ruano, dirigente del FLP, que estaba detenido bajo su custodia. Esta noticia provocó fuertes disturbios y finalmente, el régimen reimpuso el Estado de Excepción. Para Powell, la represión profundizó el proceso de radicalización que ya vivía el movimiento, y fue la causa por la que muchos dirigentes estudiantiles dejaron de lado el marco universitario para dedicarse a la actividad política general. Así, el FLP comenzó a desintegrarse, porque sus dirigentes estaban detenidos u ocultos, y el PCE perdió parte de la influencia que tenía dentro del movimiento, lo que llevó a la disolución del Sindicato Democrático.<sup>206</sup> La lucha que los estudiantes realizaron a partir de los años 60 fue fundamental a la hora de crear una cultura de contestación al régimen. Los estudiantes se movilaron para defender a la institución universitaria, que era, finalmente, el espacio que otorgaba identidad y cohesión al movimiento. Si bien es cierto que el movimiento estudiantil pasó por momentos de flujo y reflujo, tuvo divisiones y fracturas internas, su lucha sí produjo “heridas” al régimen con la desarticulación del SEU, y generó, además, un ambiente de cultura política más abierta y democrática en el cual se llevó a cabo la socialización de una parte importante de la juventud española.

De esta manera, el movimiento estudiantil español de los años 60 se proyectará a la siguiente década con todo el aprendizaje político realizado previamente, con una fuerte identidad y un objetivo claro: el destino hacia el cual debía transitar España y la universidad era la democracia, y los estudiantes debían situarse a la vanguardia de la lucha por la democratización, tanto de la institución universitaria como de la sociedad. Por cierto, este camino no fue fácil, estuvo lleno de desafíos, algunos impuestos por el

---

<sup>205</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 239.

<sup>206</sup> Ch. POWELL: *España en democracia*, p. 49-50.

mismo régimen franquista y otros por los propios estudiantes. Esto es lo que queremos analizar en los capítulos siguientes.

## **V. La Ley General de Educación: nuevo marco legal para una universidad movilizada.**

Como dijimos anteriormente, la masificación, la diversificación social y los profundos cambios que había sufrido la sociedad y la economía española desde 1940 en adelante, hacían urgente una reforma en la educación. De esta manera, y aprovechando la llegada del tecnócrata José Luis Villar Palasí al Ministerio de Educación, en 1968, se comenzó a elaborar una nueva ley de educación, que tuvo como finalidad reformar completamente la enseñanza española.

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, publicada el 4 de agosto de 1970, era básicamente un esfuerzo por modernizar la universidad española y ponerla a tono con la educación superior europea, aunque no se logró del todo. El mismo Ministerio de Educación reconocía las carencias en materia universitaria, al señalar que:

“El marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera muy distinta en aquella época y reflejaban un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada, de democratizar la enseñanza. Se trataba de atender las necesidades de una sociedad diferente de la actual (...). Era un sistema educativo para una sociedad estática, con una Universidad cuya estructura y organización respondía a modelos de allende las fronteras”<sup>207</sup>.

De esta manera, los objetivos de la Ley General de Educación (LGE) eran incluir a toda la población en el sistema educativo,

“basando su orientación en las más genuinas y tradicionales virtudes patrias; completar la educación general con una preparación profesional que capacite para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo; ofrecer a todos la igualdad de oportunidades educativas, sin más limitaciones que la de la capacidad para el estudio; establecer un sistema educativo que se caracterice por su unidad, flexibilidad e interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia gama de posibilidades de educación permanente y una estrecha

---

<sup>207</sup> Ley General de Educación 4/1970, BOE núm. 187, 6 de Agosto de 1970. [www.boe.es](http://www.boe.es), p. 12525-12526.



relación con las necesidades que plantea la dinámica de la evolución económica y social del país”.<sup>208</sup>

Así, ya en el mismo preámbulo de la ley se establecían sus objetivos y principios, muy distintos de los de la LOU de 1943. Se comenzaba a dejado de lado el intento de ideologización de los estudiantes, para dar paso a una educación de corte tecnocrática, más acorde con las necesidades de la vida social y económica del país. No se habla ya de los principios del catolicismo ni de Falange, sino de “la conservación y enriquecimiento de la cultura nacional, el progreso científico y técnico, la necesidad de capacitar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas situaciones que le deparará el ritmo acelerado del mundo contemporáneo”.<sup>209</sup>

Para lograr los objetivos propuestos, la LGE reformó toda la enseñanza, desde la básica a la superior. En lo que se refiere a la educación universitaria, esta se organizó en tres ciclos, diplomado, licenciado y doctor. En paralelo se fomentó la Formación Profesional, como una salida para aquellos estudiantes que, habiendo completado el ciclo básico, no querían o no podían asistir a la universidad y requerían una especialización.

Pese a los aires modernizadores, el régimen seguía interviniendo directamente en la universidad a través de los nombramientos y de los planes de estudios. De esta manera, las principales autoridades académicas – Rector, Vicerrector y Decanos – y la nueva autoridad administrativa – Gerente – seguían siendo nombradas directamente por el Ministerio de Educación y Ciencia, aunque los candidatos eran propuestos por el Claustro. A partir de la LGE, esta institución irá adquiriendo mayor importancia. De hecho, en el artículo 84 de la ley se establece que el Claustro es el órgano corporativo supremo de la universidad, y que “Los Estatutos establecerán su composición, organización y normas de funcionamiento. Se garantizará la adecuada participación de Profesores y alumnos de forma que se asegure la máxima representatividad”.<sup>210</sup>

En este sentido, la ley hacía referencia a una cierta autonomía universitaria, a través de la facultad del Claustro para redactar los Estatutos propios de cada centro, y de la participación del estamento estudiantil en esta instancia. Sin embargo, dicha autonomía no se hizo efectiva completamente, los estudiantes no fueron recibidos en los Claustros hasta mediados de la década de los 70 y de hecho, en algunos momentos de

---

<sup>208</sup> Ibid., p. 12526.

<sup>209</sup> Ibid., p. 12525.

<sup>210</sup> Ibid., p. 12535.

mucha conflictividad estudiantil, el Ministerio llegó a suspender los Estatutos algunos centros (en 1972 suspendió temporalmente los Estatutos de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid debido a la larga huelga en Medicina).

En cuanto a los contenidos de la enseñanza, también se apreciaba un cambio con respecto a la LOU, porque éstos serían redactados por las universidades, aunque seguían siendo controlados por el Ministerio:

“Los planes de estudios de los Centros universitarios, que comprenderán un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas, serán elaborados por las propias universidades, de acuerdo con las directrices marcadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, que refrendará dichos planes previo el dictamen de la Junta Nacional de Universidades”.<sup>211</sup>

En suma, si bien la LGE consagraba una cierta autonomía universitaria, especialmente en cuanto a docencia e investigación, ésta nunca llegó a ser efectiva, porque la Ley permitía que el régimen mantuviera importantes controles en materia de educación superior.

Ahora bien, LGE fue tremendamente resistida por varios sectores, pero especialmente por los estudiantes. Los grupos políticos de oposición consideraban que esta ley establecía una educación tecnocrática que solamente se interesaba producir trabajadores según los requerimientos del sistema capitalista, y que, por lo tanto, no tenía verdadero interés en fomentar el conocimiento y la investigación. Además, la LGE nació con un déficit de presupuesto, por lo cual su implementación fue compleja y hubo de hacerse de manera paulatina. Esto será fundamental pues proporcionará, desde 1970 en adelante, numerosas oportunidades políticas al movimiento estudiantil, cuando los distintos puntos de la ley se vayan poniendo en práctica (es el caso, por ejemplo, de la lucha contra la selectividad, elemento contemplado en la LGE, que se intentó aplicar a partir de 1974, pero que, producto de las movilizaciones estudiantiles, se tuvo que aplazar).

Finalmente, y pese a las dificultades, la LGE se aplicó en toda su extensión, pero dicha aplicación coincidió con la disolución del régimen franquista. Además, por mucho que la LGE tuviera algunos elementos interesantes para la educación universitaria (la organización de las Facultades en Departamentos, la creciente importancia que se le asigna al Claustro universitario, la elaboración de Estatutos propios para cada centro), en la década de los 70 el movimiento estudiantil estaba por rechazar cualquier medida

---

<sup>211</sup> Ibid., p. 12531.

que proviniera del régimen, que durante más de 30 años había mantenido una política de intervención y represión en la universidad.

## **VI. La universidad en democracia.**

Salvo algunas normas específicas, como las órdenes de participación estudiantil (de 1974 y 1975) y el decreto de permanencia y cuatro convocatorias (de 1975), la LGE rigió en la universidad española desde 1970 hasta 1983, cuando fue reformada por la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Esto no quiere decir que entre esos años no hubiera intentos de modificar la LGE. De hecho, en 1979 el primer gobierno de UCD redactó la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), la cual se debatió intensamente en el Congreso, pero no se llegó a aprobar. La oposición a la ley fue transversal, desde los propios estudiantes y académicos de la universidad, hasta los diputados de los partidos políticos de oposición, tanto de izquierdas como nacionalistas.

Las críticas más duras contra el proyecto de LAU decían relación con el aumento de las tasas académicas, ya que el proyecto de ley pretendía que los estudiantes financiaran, si no íntegramente, al menos una parte importante de su educación; esto amenazaba con convertir nuevamente a la universidad en una institución clasista. Además, el proyecto se había redactado sin contar con la comunidad académica, lo cual provocó un amplio rechazo de parte de ésta. Y por último, la LAU se discutió en medio de una situación política compleja: la transición a la democracia había comenzado hacía pocos años, por lo que los niveles de incertidumbre respecto del éxito del proceso todavía eran altos. Además, el partido de gobierno pasaba por una crisis interna que le restó capacidad de liderazgo, y también la oposición, especialmente el PSOE, iban haciéndose fuertes en el panorama político español. Todo ello influyó para que la discusión sobre el proyecto de LAU (y no solo ese, sino varios otros proyectos de UCD corrieron la misma suerte) fuera tremendamente acalorado. Finalmente, y ante el rechazo suscitado, la LAU fue retirada del Congreso en 1982, poco antes de la derrota de UCD en las elecciones de ese mismo año.

Apenas un año después, el gobierno socialista de Felipe González logró la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), publicada en el BOE del 1 de septiembre de 1983, y en la cual quedaba consagrada la autonomía universitaria, tan anhelada por estudiantes y académicos:

“Artículo segundo:

1. La actividad de la Universidad así como su autonomía, se fundamentan en el principio de la libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
2. La autonomía universitaria exige y hace posible que docentes, investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas responsabilidades, en orden a la satisfacción de las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad”.<sup>212</sup>

Los objetivos centrales de la LRU eran dotar a la universidad española de una legislación y un marco jurídico similar al que imperaba en los países de la Comunidad Económica Europea. De alguna manera, la LRU intentaba remediar las trabas que las leyes del franquismo habían impuesto a la universidad, por ejemplo, las intromisiones políticas en el gobierno universitario y en la conformación de planes y programas. En el preámbulo de la Ley quedaba claramente establecido este objetivo democratizador:

“La democratización de los estudios universitarios, ya muy avanzada, es, además, la última etapa de un secular proceso de democratización de la educación y la cultura que ha demostrado ser, al tiempo, la más sólida base para la sociedad estable tolerante, libre y responsable, pues la ciencia y la cultura son la mejor herencia que las generaciones adultas pueden ofrecer a las jóvenes y la mayor riqueza que una nación puede generar, sin duda, la única riqueza que vale la pena acumular”.<sup>213</sup>

Además, la LRU se hacía cargo de los cambios vividos en España desde el regreso de la democracia. Así, estipulaba la cesión de algunas competencias en materia de educación universitaria, entre la autoridad central y las Comunidades Autónomas, reforzando la autonomía universitaria y los vínculos entre los centros y sus realidades locales. En este sentido, en el preámbulo se ponía mucho énfasis en la importancia del paso que se estaba dando, al aprobar la LRU:

“Ésta [reforma] es también imprescindible para que la Universidad pueda rendir a la sociedad lo que tiene derecho a exigir de aquélla, a saber: calidad docente e investigadora; algo que, sin embargo, sólo podrá ofrecer si le garantizan condiciones de libertad y de autonomía, pues sólo en una Universidad libre podrá germinar el pensamiento investigador, que es el elemento dinamizador de la racionalidad moderna y de una sociedad libre”.<sup>214</sup>

En cuanto a la educación superior, ésta se consideraba como un servicio público, que debía desarrollar la ciencia, la técnica y la cultura. Así la universidad debía para

---

<sup>212</sup> Ley de Reforma Universitaria, BOE núm. 209, 1 de septiembre de 1983. [www.boe.es](http://www.boe.es), p. 24035.

<sup>213</sup> Ibid.

<sup>214</sup> Ibid.

ponerse al servicio de la sociedad, tanto a nivel nacional como de Comunidades Autónomas.<sup>215</sup> Con respecto a las autoridades, en su artículo 15, la LRU establecía que el Rector sería elegido por el Claustro, por el tiempo que los estatutos de cada centro determinasen. Esto implicaba que toda la comunidad universitaria, estudiantes incluidos, participaría en la elección de la máxima autoridad académica.<sup>216</sup> Además, la LRU establecía que cada universidad podía elaborar y aprobar sus planes de estudio, distinguiendo las materias obligatorias y las optativas, que fueran necesarias para la obtención del título. Luego dichos planes pasarían a ser revisados y homologados por el Consejo de Universidades.<sup>217</sup>

Sin duda, la Ley de Reforma Universitaria supuso un cambio fundamental para la educación superior española, no solamente por las reformas concretas que se desarrollan en su articulado, sino fundamentalmente por el espíritu que la inspiró: “Esta Ley está vertebrada por la idea de que la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas Comunidades Autónomas”.<sup>218</sup>

En este sentido, la LRU respondía a los deseos y necesidades de una sociedad democrática, que se había visto profundamente transformada desde los años 40 en adelante. Posteriormente, la LRU será reemplazada por la Ley Orgánica de Universidades, del año 2001, que establece la elección del Rector por votación directa y sufragio universal, que a su vez será modificada en 2007.<sup>219</sup>

Pese a que en nuestra investigación no alcanzamos a estudiar los efectos de la LRU en el movimiento estudiantil español, sí consideramos que en ella estaban contenidas varias de las reivindicaciones más importantes de los estudiantes, a saber, la autonomía universitaria, la elección democrática de las autoridades y la concepción de la universidad como un servicio público. Con todo, es necesario destacar que esta ley se debate y se aprueba en un momento en que las movilizaciones estudiantiles han descendido considerablemente. Ya no existe ese movimiento estudiantil que comenzó a articularse en la década de los 50, que hizo eclosión en los años 60 y que maduró en los

---

<sup>215</sup> Ibid.

<sup>216</sup> Ibid., p. 24036.

<sup>217</sup> Ibid., p. 24037.

<sup>218</sup> Ibid., p. 24035.

<sup>219</sup> Jorge MARTÍNEZ: “Las reformas en el gobierno de las universidades públicas españolas”, p. 4.

70, con un objetivo claro y definido: la democratización de la sociedad española y el fin del régimen franquista.

Es lógico que, una vez conseguida la democracia, la movilización estudiantil tienda a descender, especialmente cuando junto con el cambio de sistema político, se produce también un cambio en la universidad. Ahora bien, esto no quiere decir que el movimiento estudiantil haya desaparecido del escenario. Como señala Eduardo González Calleja, entre los años 80 y la primera década del siglo XXI van a resurgir, aunque esporádicamente, movilizaciones estudiantiles por asuntos puntuales, como la selectividad, el alza de tasas académicas o el Espacio Europeo de Educación Superior.<sup>220</sup> Pero claramente, ya no es el movimiento estudiantil antifranquista que analizamos en esta investigación, porque se ha transformado junto con la realidad política, económica y social del país. Una característica propia de los movimientos estudiantiles, como dijimos al inicio de este capítulo, es que están profundamente vinculados con la realidad universitaria en la que se desenvuelven. Y dicha realidad sufrió cambios profundos durante los 40 años de dictadura franquista y posteriormente, con la llegada de la democracia. Una universidad democrática para una sociedad democrática era lo que pedía el movimiento estudiantil de la década de los 70, y eso fue lo que se consiguió, aunque no sin realizar un enorme esfuerzo.

---

<sup>220</sup> Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España Contemporánea. 1865-2008*, Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 375.

## CAPÍTULO 4

### 1968-1969 AÑOS DE REPRESIÓN Y RADICALIZACIÓN

Los cursos 1967-68 y 1968-69 fueron una época convulsa y agitada para la universidad madrileña (y española en general), tanto por el crecimiento de la movilización estudiantil como por el aumento de la represión. La dinámica que se generó entre los estudiantes y el Gobierno tomó la forma de espirales de acción – reacción, hasta que el Gobierno decidió reimponer el Estado de Excepción en enero de 1969, profundizando aún más la represión sobre los estudiantes. En este sentido, y siguiendo a Donatella della Porta, pese a que la represión policial de la protesta no es la única manera de reaccionar que tiene el Estado, sí tiene un efecto relevante sobre los movimientos sociales, especialmente, sobre la forma de actuar de los mismos.<sup>221</sup>

Es por esto que el movimiento estudiantil (ME) que emergió del estado de excepción fue profundamente transformado por éste (especialmente por la represión que implicó), las oportunidades políticas de este período fueron casi nulas, las estructuras de movilización se hicieron más inestables, clandestinas y fragmentadas, y los marcos de significado sufrieron una importante radicalización.

Las luchas más importantes de este período fueron contra la presencia de la policía en los campus, contra el imperialismo “yanqui” y el capitalismo tecnocrático que inspiraba la nueva reforma de la educación, contra la represión en todas sus formas y, finalmente, contra el Régimen de Franco. Los estudiantes postulaban la importancia de la unión entre el movimiento obrero y estudiantil para derribar al régimen, sin embargo, no fueron capaces de generar unidad dentro del movimiento estudiantil. La radicalización y fragmentación caracterizan al ME de esta etapa, y explican, en parte, la fase de reflujo en la que entraron los estudiantes luego de las amplias manifestaciones de 1968 – 1969.

#### I. 1968-1969: El Estado de Excepción.

Desde los primeros meses del año 1968, las protestas estudiantiles fueron en aumento. Como una forma de tener estas movilizaciones, el Ministro de Educación, Manuel Lora Tamayo, propuso la creación de una policía especial, que teóricamente

---

<sup>221</sup> Donatella DELLA PORTA. “Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta”, en D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 103.

estaría bajo la supervisión de la autoridad académica (Rector y decanos). En el Consejo de Ministros del 26 de enero de 1968, se creó la Policía de Orden Universitario (POU) y se suprimió el fuero universitario, con lo que se permitía que la policía entrara en las facultades siempre que lo estimara conveniente para mantener el orden.<sup>222</sup> Como apoyo a estas medidas, las fuerzas antidisturbios se situaron delante de las facultades más conflictivas.

Sin embargo, esta disposición fue contraproducente, porque los enfrentamientos entre estudiantes y policías se hicieron cada vez más frecuentes. Diversas manifestaciones se sucedieron en las distintas facultades de la Universidad de Madrid, exigiendo la retirada de la policía de los centros, a las que ésta respondía con un aumento de la represión. Además, se creó una red de informantes, entre personas que trabajaban en la universidad (bedeles, administrativos e incluso algún profesor), lo que facilitaba la labor de identificación de los dirigentes estudiantiles por parte de la policía. Así, la represión sistemática sobre los estudiantes llevó, inevitablemente, a un proceso de radicalización del movimiento estudiantil, que se vio obligado a seguir sus actividades en la clandestinidad.

La policía fue especialmente violenta con los delegados del Sindicato Democrático, ya que sus actividades dentro de la universidad permitieron su identificación. Como señala Elena Hernández Sandoica, “en 1968 la situación de crisis iba a reflejarse espectacularmente en la casi constante ocupación de los campus universitarios por la policía y en la necesidad de incrementar la represión para hacerles volver al orden. En mayo de aquel mismo año hubo incidentes en Madrid entre la policía y unos 5.000 manifestantes universitarios, extendiéndose el descontento a otros distritos y llegando los ecos, inopinadamente, hasta la flamante Universidad de Navarra, donde el Opus Dei preparaba a las elites del futuro”.<sup>223</sup> Pese a la represión, el movimiento estudiantil continuó realizando manifestaciones, asambleas y marchas, pero cuando la autoridad universitaria consideraba que se estaban rebasando los límites, cerraba los centros universitarios.

Así ocurrió durante el curso 1967-1968, cuando las autoridades académicas decidieron cerrar varias facultades de la Universidad de Madrid a raíz de los permanentes conflictos entre estudiantes y policía. Sin embargo, una vez decretada la reapertura, en enero de 1968, varios centros declararon la huelga. Los incidentes en

---

<sup>222</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 121.

<sup>223</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 226.



Madrid no estuvieron exentos de violencia, con asambleas permanentes, enfrentamientos con la policía, destrucción de infraestructura, etc., y terminaron con seis estudiantes inhabilitados para seguir sus estudios en cualquier centro español por tres años, y decenas de estudiantes con pérdida de matrícula; además de los expedientes policiales que se abrieron a los detenidos y de otras medidas como la retirada del pasaporte (que impedía a los estudiantes salir de España) y la prohibición de presentarse a los exámenes de febrero (que suponía la suspensión de algunas asignaturas).

El 17 de abril de 1968 el Ministro Lora Tamayo fue reemplazado por José Luis Villar Palasí, un tecnócrata cercano al Opus Dei, quien impulsó una importante reforma en la legislación sobre Educación. Las líneas programáticas de esta legislación se encontraban en el llamado *Libro Blanco*, (*La Educación en España. Bases para una política educativa*), el 12 de febrero de 1969, en el cual se acusaba la masificación de la educación universitaria en España y proponía formas de abordarla (que se desarrollarán en la posterior Ley General de Educación de 1970, que veremos más adelante).

Con todo, el cambio de Ministro y el anuncio de una reforma en la enseñanza no lograron rebajar la tensión en la universidad. Más bien aportaron nuevas causas a la lucha de los estudiantes. De esta manera, el curso 1968-1969 fue especialmente conflictivo, con sentadas, choques con la policía, huelgas, acciones de comandos<sup>224</sup> y manifestaciones de todo tipo. La inauguración del año académico se realizó el 14 de octubre, y durante los primeros 15 días de clase se realizaron más de 25 asambleas, solamente en Madrid. A finales de octubre y debido a las movilizaciones, el Gobierno decidió cerrar las Facultades de Derecho y Filosofía, hasta los primeros días de noviembre. Durante el mes de noviembre, la Universidad de Madrid vivió momentos de bastante tensión, producidos por los “juicios críticos” y “diálogos críticos”, en los que los estudiantes juzgaban la metodología y los conocimientos de la materia impartida por los profesores, aunque, como señala José Álvarez Cobelas, normalmente terminaban siendo una crítica a la ideología del profesor. Esta situación logró crispar aún más la relación entre los estudiantes y los catedráticos<sup>225</sup>.

El día 20 de noviembre se reunió por primera vez una comisión nombrada por Carrero Blanco, para estudiar el problema en que se había convertido la universidad. En

---

<sup>224</sup> En los actos convocados para el 1º de mayo de 1968, habían surgido los llamados "comandos", grupos de pocas personas que actuaban con violencia. Al parecer, la idea de formar comandos se dio entre los grupos de ácratas, denominación de moda en aquellos momentos para referirse a los anarquistas.

<sup>225</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 239.

dicha comisión participaban los ministros de Educación, Hacienda, Gobernación, el subsecretario del Ejército y el Secretario General del Movimiento. Paralelamente, la agitación crecía en la universidad producto de huelgas por asuntos académicos o en solidaridad con estudiantes detenidos, expedientados, encarcelados, etc.

Luego de las vacaciones de Navidad, las clases se reanudaron en Madrid el día 9 de enero de 1969, y aunque la asistencia fue escasa en los primeros días, ABC señalaba que éstas habían comenzado con absoluta normalidad. Los estudiantes fueron recibidos por un cartel que apelaba a la tranquilidad: “Estudiantes, como podéis comprobar, este año se inicia sin la presencia de las fuerzas de orden en el “campus” universitario. Espero de todos vosotros que sabréis corresponder a este gesto de confianza en el alumnado, manteniendo el orden en vuestras Facultades y haciendo innecesaria la presencia de la fuerza pública. El Rector”.<sup>226</sup>

Tranquilidad que no existió, ya que desde el primer día, se sucedieron asambleas y manifestaciones, y la policía volvió rápidamente a ocupar los centros y sus alrededores. Las primeras asambleas se llevaron a cabo en las Facultades de Políticas y Económicas, para protestar por las sanciones (multas, inhabilitaciones, e incluso prohibiciones de entrar en los centros) impuestas a los estudiantes que participaron en las movilizaciones de 1968. También se organizaron asambleas en la Facultad de Ciencias, y luego en la Facultad de Filosofía y Letras. Incluso, el día 16 de enero, un grupo de estudiantes expulsó del aula donde iba a dictar una clase, a un profesor de la Facultad de Políticas.

La radicalización de las movilizaciones de 1969 vino desde Barcelona, cuando un grupo de estudiantes asaltó el rectorado de la Universidad de esa ciudad. Según el relato de ABC, el día 17 de enero un número importante de alumnos participaban de una asamblea en el paraninfo de la Universidad, cuando un pequeño grupo decidió entrar al edificio del Rectorado. Los estudiantes gritaban consignas a favor de la libertad y de la violencia, según ABC. Al llegar al Rectorado, derribaron la puerta y destrozaron el mobiliario. “Derribaron también la puerta del despacho del rector, se abalanzaron sobre éste, mientras un grupo de ellos abría la ventana que daba a la calle, y tras pisotear la bandera nacional, la arrojaron a la calle como a un busto del Jefe de Estado. Seguidamente pretendieron también lanzar por el balcón al rector, doctor don Manuel

---

<sup>226</sup> ABC, 9 de enero de 1969. BNE.

Albaladejo, el cual tuvo que ser defendido por bedeles y personal de administración”.<sup>227</sup> La policía disolvió violentamente la concentración de estudiantes.

En Madrid, las distintas facultades realizaron asambleas para discutir los acontecimientos de Barcelona. En un ambiente de creciente crispación, la prensa informó de la muerte del estudiante Enrique Ruano, mientras se encontraba detenido en la Dirección General de Seguridad. Ruano y tres compañeros más, todos miembros del FLP, habían sido detenido cuatro días antes. Al comprobar que todos tenían antecedentes policiales y que además, Enrique Ruano tenía unas llaves que no pertenecían a su domicilio, los policías lo llevaron a registrar esta vivienda ubicada en la calle General Mola, nº 60. Según la versión dada por la policía, a los pocos minutos de llegar, Ruano se lanzó por la ventana, suicidándose. Para apoyar esta versión, el periódico ABC publicó extractos del diario de Enrique Ruano, en los que el estudiante contaba que se sentía deprimido y que había pensado en el suicidio. Sin embargo, como relata Julio Antonio García Alcalá en su libro *Historia del Felipe*, desde un comienzo el suceso tuvo indicios de homicidio. “En la rueda de interrogatorios los policías posiblemente se dieron cuenta del frágil estado psicológico en el que se encontraba Enrique Ruano, pues llevaba varias semanas muy deprimido y estaba siendo tratado por un conocido psiquiatra. Además, su relación sentimental con su compañera Lola atravesaba una mala racha (...) La depresión de *Evaristo* (chapa de Ruano) posiblemente influyera en que fuera él quien acompañara a los tres policías al registro de la calle General Mola”.<sup>228</sup>

Después de que se conociera la muerte del estudiante, las autoridades impidieron la reconstrucción de los hechos e incluso, la autopsia. La muerte de Enrique Ruano fue un revulsivo importantísimo para la Universidad de Madrid, que se paralizó para protestar por el asesinato del estudiante. Como señala *Informaciones*:

“Numerosos carteles relacionados todos ellos con la muerte de dicho estudiante se colocaron ayer en los centros, en los que asimismo se lanzaron numerosos panfletos sobre idéntico tema. Crespones negros fueron colocados por universitarios en los mástiles de las dos Facultades – Filosofía y Letras y Derecho –, así como en el interior de otros centros. Desde el quinto piso de Políticas y Económicas se exhibió una bandera republicana, así como un trapo rojo”.<sup>229</sup>

---

<sup>227</sup> ABC 18 de enero de 1969. BNE.

<sup>228</sup> Julio Antonio GARCÍA ALCALÁ: *Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001p. 248.

<sup>229</sup> *Informaciones*, 22 de enero de 1969. BNE.

Las asambleas se sucedieron en todas las Facultades de la Universidad de Madrid, pese a que había amanecido prácticamente tomada por la policía. Según *Informaciones*: “un gran despliegue de fuerzas de orden público se realizó durante la mañana en el “campus” de la Ciudad Universitaria, en donde fueron vistos, alrededor de cuarenta “jeeps”, así como dos coches-manguera, varios vehículos de la Brigada Político Social y una sección de agentes del orden a caballo”.<sup>230</sup>

En Moncloa, unos dos mil estudiantes se manifestaron con gritos, piedras y detención de tráfico. Desde la calle Princesa hasta Ventura Rodríguez se registraron incidentes durante todo el día 22, los que motivaron la intervención de la policía, que llegó a disparar tres tiros para disolver la manifestación (tiros que no causaron más heridos). La policía dispuso efectivos en distintos puntos de Madrid (Antón Martín, Atocha, Ministerio de Educación y Secretaría General del Movimiento), para impedir las manifestaciones de estudiantes.

En los días siguientes, la asistencia a clases bajó notablemente, a la vez que aumentaban las asambleas a nivel de distrito en varios centros, y las manifestaciones en distintos puntos de Madrid; más de mil alumnos se reunieron en la Facultad de Filosofía y Letras, y mil quinientos en Políticas y Económicas, en señal del duelo. En vista de la agitación en la universidad, el 24 de enero la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense suspendió temporalmente las clases:

“Ante la situación de creciente desorden e indisciplina que se observa en la Universidad de Madrid, haciendo imposible el desenvolvimiento de la labor académica, la Junta de Gobierno en su sesión del día de hoy, ha acordado la suspensión temporal de las clases y demás actividades académicas en las distintas Facultades, así como proponer a la superioridad que adopte todas las medidas oportunas para garantizar en los centros docentes el orden que haga posible la continuación de las actividades encaminadas al cumplimiento de los fines universitarios”.<sup>231</sup>

Ese mismo día, horas más tarde, el Gobierno declaró el Estado de Excepción en toda España, con una duración de tres meses y cerró las universidades madrileñas, justificando esta medida en función del orden público. Así lo explicaba un informe del Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo titulado *El Problema Universitario en España a Partir del Estado de Excepción*:

“Desde el comienzo del segundo trimestre del curso académico 1968-69, la agitación subversiva en la universidad se llevó a cabo con características muy

---

<sup>230</sup> *Informaciones*, 22 de enero de 1969. BNE.

<sup>231</sup> *ABC*, 24 de enero de 1969. BNE.

similares a las del final del trimestre anterior, desarrollándose con especial intensidad en los distritos de Barcelona y Madrid, donde la acción revolucionaria concentró sus fuerzas con el propósito de lograr la suspensión total de las actividades académicas a través de la perturbación del orden académico y del orden público”.<sup>232</sup>

El mismo informe señalaba que el propósito de la medida de excepción era desarrollar un plan general “contra la subversión en la Universidad española”, basándose fundamentalmente en la “identificación y desarticulación de la subversión, mediante la destrucción de sus redes (detenciones, interrogatorios, investigación, etc.) y la neutralización definitiva de sus fuentes de medios de vida. Y esto, por lo que se refiere tanto a catedráticos y profesores auxiliares como a alumnos”.<sup>233</sup> De esta forma, el estado de excepción afectó profundamente a la movilización estudiantil, ya que la represión aumentó de forma considerable, por lo que las organizaciones estudiantiles tuvieron que continuar sus actividades en la más severa clandestinidad.

Esta investigación se inicia con la declaración del estado de excepción de 1969, ya que consideramos que es un punto de inflexión para el movimiento estudiantil. A partir de éste, la mayor parte de los grupos que actuaban en la universidad entraron en crisis y el movimiento estudiantil vivió un proceso de fragmentación y radicalización que afectaría de forma profunda a las estructuras de organización y, especialmente, a los marcos de significado. La policía se instaló en los campus y no salió de ellos pese al levantamiento del estado de excepción.

Como señala Gregorio Valdelvira, “A partir del estado de excepción, los conflictos más importantes estuvieron motivados por la represión y la presencia de la policía en la universidad. La lucha contra la ocupación de la universidad por la policía multiplicó los incidentes, de manera que, su permanencia en los centros, en vez de contribuir a su pacificación, fue causa de constantes conflictos. Las intervenciones diarias de la policía para retirar carteles, disolver asambleas o detener estudiantes, ocasionaban enfrentamientos y, en algunos casos, grandes movilizaciones. La violencia

---

<sup>232</sup> “El Problema Universitario en España a Partir del Estado de Excepción”, sin fecha, sin firma, p. 1. AGA.

<sup>233</sup> “El Problema Universitario en España a Partir del Estado de Excepción”, sin fecha, sin firma, p. 1. AGA.

de los estudiantes venía provocada en gran parte de los casos por la violencia previa de la policía”.<sup>234</sup>

La represión promovida durante el estado de excepción operó, en un comienzo, como una oportunidad política para los estudiantes, y les dio nuevas causas para su lucha. Sin embargo, en la práctica la represión sobre el movimiento estudiantil contribuyó a su fragmentación y radicalización, con lo que comenzó un ciclo de reflujo en las movilizaciones, del que lograron salir recién a fines de 1970. Según señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, “los efectos del estado de excepción sobre el movimiento estudiantil fueron inmediatos. La represión cayó como una losa sobre los representantes sindicales, que por su carácter público y representativo eran ya identificados sin dificultad por la Brigada Político-Social; la tarea de seleccionar responsables era indiscutiblemente más fácil, y a ellos iba aplicárseles con dureza el castigo ejemplar”.<sup>235</sup> Así, desde la implantación de esta medida la universidad vivió prácticamente ocupada por las fuerzas policiales y los “grises”, que patrullaban dentro y fuera de las Facultades, disolviendo reuniones y asambleas, retirando carteles y propaganda, cacheando y deteniendo indiscriminadamente e incluso apaleando arbitrariamente a los estudiantes.

En una nota de prensa del gabinete de Enlace del MIT, se explica que, con fecha 1º de febrero, el estado de excepción

“entró el viernes en su fase dinámica, estiman los observadores políticos. Las medidas de la policía parecen también desbordar claramente el marco que el Gobierno del General Franco les había asignado en un principio: la “limpieza” de los grupos extremistas de la universidad. Según informaciones de buena fuente, 83 personas han sido detenidas desde el jueves en Madrid solamente, y otras 20 alejadas por medio de asignación de residencia en provincias lejanas”.<sup>236</sup>

Uno de los grupos más afectados por la represión, debido a la cantidad y a la visibilidad de sus militantes fue el la Organización Universitaria del PCE, que hizo un diagnóstico bastante triunfalista de la situación. Según los estudiantes comunistas, el estado de excepción indicaba claramente la debilidad del Régimen, ya que era la única forma en la que podía poner freno a las fuertes movilizaciones sociales que se habían producido durante el año 1968 y principios de 1969. En este sentido:

“El estado de excepción era necesario contra la lucha en España, y su objetivo no es otro que intentar frenar o retrasar en lo posible una activa toma de

---

<sup>234</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 146.

<sup>235</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 277.

<sup>236</sup> Nota de prensa, 1º de febrero de 1969, p. 1 AGA.

conciencia de sectores cada vez más amplios del país que pone en cuestión el actual sistema económico y político español. De todo ello hemos deducido – y ello tiene mucha más importancia – que frente al estado de excepción la única alternativa posible es intensificar la lucha, plantearla con mucha más claridad y alcance que nunca y dar pasos prácticos hacia la destrucción del actual poder político”.<sup>237</sup>

La lucha, a la que llamaban los estudiantes del PCE debía incluir a todos los grupos antifranquistas en la Huelga General Política o Huelga Nacional: “Para nosotros la labor política de agitación y movilización entre las masas, debe ir acompañada por un acercamiento entre todas las fuerzas políticas antidictatoriales. Lograr reuniones conjuntas de todas las fuerzas activas, de todos los grupos, tendencias y partidos contrarios al estado de excepción, a la política de la dictadura, nos parece una tarea de primer orden”.<sup>238</sup> Así, la movilización de las masas crearía las condiciones para derribar a la dictadura, y la organización de las fuerzas democráticas permitiría concretar un eventual Gobierno Provisional. En este contexto, el Sindicato Democrático de Estudiantes de Madrid (SDEUM) tenía una labor fundamental, la de presionar sobre todas las clases democráticas, para ayudar a su coordinación.<sup>239</sup>

Pese a la importancia que los estudiantes comunistas le otorgaban a su labor, eran perfectamente conscientes de que quienes lideraban la lucha contra el Régimen eran los obreros. Y en ese sentido, la coordinación y solidaridad entre obreros y estudiantes era un eje vital para masificar las movilizaciones.

“La clase obrera dirige en el sentido amplio: es la única capaz de dar alternativas globales y revolucionarias, en lo político y en lo económico, ante la situación actual; es la única susceptible de dar solución, al desarrollar su propia perspectiva, a los problemas y objetivos de las clases antioligárquicas del pueblo. Es la que puede dirigir la lucha por destruir el actual régimen franquista-capitalista y sentar las bases de un poder democrático popular que abra las vías para la superación de la explotación, las vías hacia el socialismo”.<sup>240</sup>

Además de los comunistas, el otro grupo importante de militantes que actuaba en la universidad era el *Frente de Liberación Popular* (FLP). El Comité Político de esta agrupación publicó, en febrero de 1969, un documento titulado “El Estado de

---

<sup>237</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 18 de febrero de 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>238</sup> Ibid.

<sup>239</sup> Ibid.

<sup>240</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, febrero de 1969, p. 1. AHPCE.

Excepción y los objetivos del movimiento revolucionario” en el que hacía referencia a la movilización estudiantil constante durante el curso, y a los espacios ganados para la libertad de expresión en el interior de los centros, desafiando la presencia de la policía. “Durante todo el año pasado, se fue haciendo habitual la aparición de banderas rojas, hoces y martillos, puños en alto en los locales universitarios. Fenómenos para los que el régimen ha creado, a través de treinta años, una sensibilidad muy susceptible y que siempre habían provocado en sus apariciones esporádicas anteriores, fulminantes y violentas respuestas”.<sup>241</sup>

Este documento también hacía hincapié en la necesaria convergencia de los movimientos estudiantil y obrero, para continuar y aumentar la movilización social hasta derribar al Régimen. Y en la necesidad de que, en los centros de enseñanza, la lucha se llevara hasta las bases del movimiento, “para así estimular la formación de plataformas y comités de lucha que, reuniendo a los estudiantes anticapitalistas, estructuren el movimiento, asegurando su continuidad y su carácter revolucionario”.<sup>242</sup>

Por su parte, el Sindicato Democrático de Estudiantes de Madrid (SDEUM) – en el que los estudiantes comunistas eran mayoría – también se manifestó en torno al estado de excepción, en un documento titulado “Llamamiento a los universitarios”, publicado en febrero de 1969. La Junta de Estudiantes del SDEUM denunciaba, en este documento, la brutal represión ejercida sobre los estudiantes a manos de la Policía Armada y especialmente, de la Brigada Político Social. En la primera semana del estado de excepción, la BPS detuvo a más de 150 estudiantes y deportó a 18 profesores adjuntos. En el mismo documento, el SDEUM se refería al triunfo conseguido por el movimiento estudiantil al lograr coordinar a casi 500 estudiantes de diferentes escuelas y facultades, con la universidad cerrada. Si lo comparamos con las masivas manifestaciones llevadas a cabo por la muerte de Enrique Ruano (según los autores de *Estudiantes contra Franco*, el día posterior al anuncio de la muerte de Ruano, dos mil, estudiantes se manifestaron en Moncloa) podemos ver que la represión había causado un efecto importante entre los universitarios y había llevado a muchos de ellos a no participar de las movilizaciones, por el lógico temor a ser detenido, torturado, expedientado o expulsado de la universidad.

---

<sup>241</sup> “El Estado de Excepción y los objetivos del movimiento revolucionario”, Comité Político del Frente de Liberación Popular, febrero de 1969, p. 1-2. AHPCE.

<sup>242</sup> Ibid.



Como meta a conseguir, el SDEUM proponía aumentar el número de estudiantes movilizados y discutir ampliamente la situación política para que “posibilitemos miles de acciones surgidas de los cursos, formas flexibles de acción, que agrupen a miles de estudiantes, combinadas adecuadamente con acciones de gran contundencia contra las fuerzas represivas del gobierno que pretenden traer la violencia y el terror a la universidad”.<sup>243</sup>

Por su parte, los estudiantes de la Asociación de Estudiantiles Revolucionarios, a través de su periódico *Comuna*, hacían un llamado a continuar la movilización social en contra del estado de excepción, ya que éste indicaba la debilidad del régimen, impotente para frenar el ascenso de las masas. También consideraban que el estado de excepción era un intento de frenar a las vanguardias revolucionarias conscientes e impedir su fusión con las masas: “la burguesía intenta desarticular a la vanguardia, evitar el rol conciente de la vanguardia en la preparación de la Huelga General, aunque saben que no lo van a impedir, pero intentan ganar tiempo, impedir la coordinación de las luchas en todo el país”.<sup>244</sup>

En general, todos los grupos políticos que participaban en la universidad coincidían en el diagnóstico de la situación política, considerando que el estado de excepción era una clara muestra de la debilidad del Régimen franquista. “Un estado de excepción, una restricción aún mayor de derechos y una represión más brutal son fenómenos que corresponden perfectamente a una fase de malestar y debilidad estructural del sistema opresor”.<sup>245</sup> Para la Organización Universitaria del PCE en Madrid, el estado de excepción era un capítulo más de la lucha de clases en España, y demostraba que la oligarquía sentía que sus intereses estaban amenazados por el creciente movimiento de masas, por lo que “recurren a su gobierno para que utilice de nuevo un instrumento en su defensa, pretendiendo desesperadamente modificar una correlación de fuerzas que progresivamente les aparece más adversa”.<sup>246</sup> En lo que no coincidían, y que veremos más adelante, era en las formas de lucha contra esta medida y contra el Régimen de Franco.

---

<sup>243</sup> “Llamamiento a los universitarios”, Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Madrid, febrero de 1969, p. 1-2. AHPCE.

<sup>244</sup> *Comuna*, Órgano de la Agrupación Estudiantil Revolucionaria. Nº 14, 26 de enero de 1969, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>245</sup> “El Estado de Excepción y los objetivos del movimiento revolucionario”. Comité Político del FLP, febrero 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>246</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, febrero de 1969, p.1. AHPCE.

El diagnóstico de la situación política que hacían las organizaciones estudiantiles era más bien una expresión de deseo que una situación real ya que la represión sí logró su objetivo: desarticular la movilización social. Y tuvo particular éxito con el movimiento estudiantil.

El día 22 de marzo de 1969 se levantó el estado de excepción, y según apuntaba el diario *Informaciones*, en el momento de acordarse el levantamiento había 208 personas detenidas, de las cuales 28 eran estudiantes.<sup>247</sup> Un mes después del levantamiento del estado de excepción, el Presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, ya advertía que los desórdenes en la universidad se debían a:

“minorías disolventes que se manifiestan, no sólo en España, sino en otros muchos países, es evidente que responden a la consigna de actuar en los centros que, como la universidad, frecuentan gran número de personas, creando situaciones confusas ante las que ha de actuarse con la necesaria energía respecto a los agitadores, pero con serenidad, que evite perjuicios a quienes no alcance ninguna culpa”.<sup>248</sup>

Se equivocaba el Almirante Carrero Blanco al decir que los estudiantes que se manifestaban contra el Régimen eran una minoría. Si bien la represión logró agotar al movimiento estudiantil y terminar con la oleada de movilizaciones que se había iniciado a mediados de la década de los sesenta, el malestar que sentía una gran masa de universitarios por la situación en la universidad y el proceso de socialización entre los estudiantes militantes y los “compañeros de ruta” harían que las movilizaciones en la universidad fueran siempre un dolor de cabeza para el Régimen.

## **II. Los efectos del Estado de Excepción en el ME: represión y agotamiento.**

En pleno estado de excepción, el SDEUM publicaba un nuevo documento titulado “Al Pueblo de Madrid”, en el cual denunciaba la represión sufrida en la universidad. “Cientos de estudiantes han sido detenidos, brutalmente interrogados durante varios días y después algunos ha sido deportados o puestos a disposición de los Tribunales Especiales (Militar y Orden Público) por el único delito de ser nuestros representantes, de destacarse en la lucha por una Universidad Democrática”<sup>249</sup>. Por su parte, la Junta de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de Madrid también publicó un

---

<sup>247</sup> *Informaciones*, 22 de marzo de 1969. BNE.

<sup>248</sup> *ABC*, 25 de abril de 1969. BNE.

<sup>249</sup> “Al pueblo de Madrid”, SDEUM, marzo de 1969, p. 1. AHPCE.

documento, en marzo del 69, sin título, en el cual relataba la lucha llevada a cabo por los estudiantes de toda la universidad, en contra del estado de excepción y especialmente, de la ocupación de las Facultades por parte de la policía: “huelgas en algunos cursos, salidas de clase, cantadas, comandos dentro de las facultades y fuera de ellas, pintadas, murales, concentraciones dentro de los centros, pegatinas, interpelaciones a catedráticos”<sup>250</sup>. Esta Junta también señalaba que en la convocatoria al boicot de las clases habían participado 500 estudiantes de la Facultad, número que no podía despreciarse, ya que significaba que existía esa cantidad de universitarios dispuestos a “sacudirse” el miedo, porque “hemos comprendido que el movimiento universitario existe esté o no la policía en los centros”.<sup>251</sup> Finalmente, la Junta de Filosofía llamaba a los estudiantes a buscar nuevas formas de lucha y a continuar con las reivindicaciones que tenían antes de la medida de excepción.

El levantamiento del estado de excepción no significó que la policía abandonara la universidad. Y en los días siguientes las manifestaciones de estudiantes fueron reprimidas de forma brutal. Así lo constata un documento de la Organización Universitaria del PCE, con fecha de abril de 1969, titulado: “A los estudiantes, a los profesores”, en el cual señalaba que las condiciones represivas en la universidad no habían disminuido luego del levantamiento del estado de excepción, sino todo lo contrario. “La Universidad está militarizada. La presencia de la fuerza pública en los centros está planeada como una auténtica ocupación militar de los edificios. Continúan las detenciones y las torturas a estudiantes de las que el caso más reciente son las practicadas a varios estudiantes de la Facultad de Ciencias”.<sup>252</sup> Otro tipo de represión ejercida sobre los estudiantes y que denunciaba este documento son los expedientes académicos, las negaciones de prórroga del servicio militar, la prohibición de realizar las milicias universitarias, etc.

Pese a la represión que se estaba ejerciendo en la universidad, el levantamiento del estado de excepción fue visto como un triunfo por todas las organizaciones de estudiantes. Así, la Organización Universitaria del PCE, publicó un documento titulado “Un triunfo para el pueblo”, en el que señalaba que el levantamiento de la medida era un fracaso sin precedentes en la política franquista y que el régimen había entrado en un

---

<sup>250</sup> Sin Título. Junta de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Madrid, marzo de 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>251</sup> Ibid.

<sup>252</sup> “A los estudiantes, a los profesores”, Organización Universitaria del PCE, abril de 1969, p. 1. AHPCE.

callejón sin salida, que lo conduciría a su fin. “Es un índice del grado de descomposición del sistema el que después de haberse decidido por el camino de la represión más brutal, después de haber demostrado que los estados de excepción son su única arma, se vea obligado a reconocer que tampoco este arma es eficaz”.<sup>253</sup>

Con todo, la represión seguía cebándose sobre la universidad. Así lo denunciaba la Junta de Estudiantes de Filosofía, en abril de 1969, cuando reconocía que el movimiento estudiantil en Madrid pasaba por una etapa de reflujo debido al desmantelamiento de la vanguardia, a la detención, encarcelamiento y procesamiento de la mayor parte de los dirigentes estudiantiles y a la imposibilidad – debido a la presencia de la policía en los centros – de reorganizar plataformas estudiantiles que impulsen la movilización.<sup>254</sup> Este documento, con un contenido más realista de la situación por la que atravesaba el movimiento estudiantil, terminaba con un llamamiento a organizar instancias y a discutir formas concretas de acción para las manifestaciones del 1º de Mayo, durante las cuales se relanzaría la movilización estudiantil, junto a la clase obrera y al pueblo.

La Organización Universitaria del PCE también llamó a los estudiantes a movilizarse el 1º de Mayo, fundamentalmente contra la presencia de la fuerza pública en los centros, contra las detenciones y todo tipo de represión, y a favor de las libertades que se habían conseguido antes del estado de excepción. Además, consideraba que la lucha de los estudiantes debía insertarse en la lucha popular por las libertades y la amnistía, en suma, por la lucha contra el franquismo. Acababa diciendo: “avancemos decididos, preparemos un 1º de mayo en que los estudiantes y los profesores desarrollemos mil formas de agitación y lucha contra la represión y las falsas soluciones que impone el Régimen a la Universidad y al país”.<sup>255</sup>

Por su parte, el FLP, a través de *Acción Universitaria* (abril 1969) hacía un llamado a los estudiantes revolucionarios para que se manifestaran el 1º de Mayo, no sólo en contra del Régimen, sino también en contra de los planteamientos oportunistas, dogmáticos y acomodaticios (según ellos, los planteamientos del PCE), desbordando así el revisionismo y fomentando la verdadera lucha de clases.<sup>256</sup>

---

<sup>253</sup> “Un triunfo para el pueblo”, Organización Universitaria del PCE, 24 de marzo de 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>254</sup> “Nuestras tareas hoy”, Junta de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Madrid, abril de 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>255</sup> “A los estudiantes, a los profesores”, Organización Universitaria del PCE, abril de 1969, p. 2. AHPCE.

<sup>256</sup> *Acción Universitaria*, órgano del FLP en la Universidad, abril de 1969, p. 1. F. Pablo Iglesias.

Las manifestaciones del 1º de Mayo de 1969 no lograron el objetivo que los estudiantes, o al menos una parte de ellos, se había propuesto. La policía no se fue de la universidad, la represión no cedió y el ME no logró articular nuevas plataformas o instancias de participación y organización de todos los estudiantes.

En este contexto y a propósito de la presencia de la policía en la universidad y de sus consecuencias en la desmovilización de los estudiantes, el SDEUM publicó, en el mes de mayo de 1969, un documento denunciando la represión y la grave situación por la que atravesaba la universidad.

“En estos días de mayo de 1969 la situación se hace insostenible. Cientos de policías armadas y miembros de la Brigada Político Social ocupan desde hace más de tres meses nuestros centros creando en ellos un clima de permanente terror. El estudio es imposible. Cientos de compañeros han sido detenidos y muchos más no pueden entrar en los centros por temor a correr la misma suerte. La Universidad está paralizada, muerta. No existe Universidad. Por esto consideramos necesario dirigirnos a todos los españoles para explicar la situación que vivimos y la represión de que somos objeto”.<sup>257</sup>

Como hemos dicho anteriormente, el estado de excepción sistematizó la represión que se ejercía sobre los estudiantes, tanto por parte de las autoridades académicas como de los policías, sociales, grises, etc., Esta represión, que podía ir desde la retirada del pasaporte hasta penas de cárcel tuvo el éxito previsto por el Régimen ya que paralizó la movilización estudiantil y en parte también, la contestación ciudadana.

### **III. Radicalización y fragmentación del ME.**

Pese a que la represión golpeó a todos los grupos políticos por igual, y que todos compartían el diagnóstico de que el estado de excepción indicaba la debilidad o el fracaso del Régimen, lo que no compartían era la forma de luchar contra éste. Las diferencias de estrategia entre los grupos tenían directa relación con la radicalización que estaba sufriendo el movimiento estudiantil, y muchas veces estas diferencias fueron percibidas como luchas entre los sectores más radicales y los menos. Una consecuencia directa de estas luchas fue la disolución del SDEUM (en el segundo semestre de 1969) y la fragmentación de las organizaciones estudiantiles.

---

<sup>257</sup> “La Junta de Estudiantes denuncia la represión”, SDEUM, Mayo de 1969, p. 1. AHPCE.

Desde mediados de la década de los sesenta podemos observar una fragmentación creciente de los grupos actuaban en la universidad. Los partidos o grupos que habían tenido más influencia dentro de la universidad, como el PCE y el FLP, comenzaron a sufrir divisiones internas, normalmente propiciadas por grupos radicales. Del PCE se escindieron el PC (m-l) en 1964 y el PC (I) en 1967. Este último también se dividió a finales de 1968, creándose *Bandera Roja*. En 1967-1968 se formaron también los grupos trotskistas *Partido Obrero Revolucionario* (POR) y *Asociación de Estudiantes Revolucionarios* ligada a la *Federación Universitaria Democrática Española* (AER-FUDE), aunque nunca tuvieron demasiados militantes.

Según Gregorio Valdelvira, después del mayo francés y de las revoluciones estudiantiles de todo el mundo, el movimiento español rompió con la trayectoria de etapas anteriores. “A las reivindicaciones y planteamientos democráticos sucedieron los radicales. En las etapas inmediatamente anteriores, los programas dibujaban una sociedad democrática con algunos rasgos socializantes y, en todo caso, al socialismo se llegaría con métodos democráticos después de consolidar la democracia, mientras que para la universidad, el proyecto casi unánime era la reforma democrática de la universidad. Ahora los proyectos diseñaban el mapa radical de una sociedad revolucionaria, mezcla de maoísmo, trotskismo y anarquismo, cuyos modelos eran China, Vietnam y Cuba”.<sup>258</sup>

En términos generales, y si bien cada agrupación tenía sus particularidades, los grupos radicales se definían como anticapitalistas, antiimperialistas y antiburgueses. Rechazaban fuertemente lo que ellos llamaban el “imperialismo yanqui” y se identificaban con las luchas que se estaban llevando a cabo en esos momentos en Vietnam, Cuba y China. Podemos distinguir tres corrientes dentro de los estudiantes radicales de la Universidad de Madrid, durante el curso 68-69: maoístas, trotskistas y anarquistas. Algunos de estos grupos conformarían partidos políticos en la década de los setenta, pero en su gran mayoría, eran grupos de corta vida, organizados en torno a un líder y con escasa estructura.

Dentro de los grupos maoístas o “pro-chinos”, destacaba el PCE (Marxista-Leninista) que luego derivó en el FRAP, y el PCE (I). El primero había logrado reorganizar una FUDE (distinta de la propiciada por AER) que no tuvo mayor incidencia en el movimiento estudiantil. El segundo fue el grupo maoísta con mayor

---

<sup>258</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 134.

presencia en la Universidad madrileña y fue el embrión del futuro *Partido del Trabajo de España*, del cual su organización juvenil, la *Joven Guardia Roja*, se convirtió en un importante grupo dentro de los estudiantes madrileños, llegando a disputar la hegemonía del PCE a mediados de los años setenta. El PCE (I) criticaba fuertemente a los espontaneístas y carrillistas<sup>259</sup>, y, aunque no rechazaba de plano el SDEUM, lo consideraba inútil por lo que propiciaba otras formas de organización, como las comisiones de estudiantes y comités de base. Según Álvarez Cobelas, estos comités eran grupos de activistas radicalizados y “estaban compuestos por todos aquellos que mediante la lucha violenta se comprometían a atacar y, si se podía, expulsar de la Universidad a los estudiantes reaccionarios, a los catedráticos retrógrados, a las autoridades académicas y a la policía”.<sup>260</sup>

Entre los grupos trotskistas destacaban el *Partido Obrero Revolucionario* (POR) y la *Asociación de Estudiantes Revolucionarios* (AER-FUDE). El primero era un grupo pequeño pero con un buen aparato de propaganda, que desapareció a finales de 1968. AER, en cambio, era más numeroso, aunque nunca alcanzara la veintena de seguidores. Desde AER-FUDE se promovía la creación de un frente obrero-estudiantil y la Universidad Popular. En este sentido, los estudiantes debían hacer “de la Universidad un centro de discusión permanente del Frente Obrero Estudiantil, discusión de las luchas del proletariado, de los mineros, la situación objetiva de España, el estado de excepción, las reivindicaciones y necesidades de las masas y la salida obrera revolucionaria”.<sup>261</sup> Aunque eran partidarios de la existencia del SDEUM, su intención era radicalizarlo, con lo cual aumentaron las luchas en su interior.

Por último, los grupos ácratas mantenían algunas diferencias con los otros grupos radicales, por ejemplo, privilegiaban las formas de acción (incluida la violencia física) a la formación ideológica, rechazaban las jerarquías (lo que les restaba estructuración pero los hacía más atractivos para algunos estudiantes, sobre todo de los primeros cursos) y proponían la destrucción de la universidad burguesa destruyendo el funcionamiento cotidiano de la misma. Siguiendo a Álvarez Cobelas, los ácratas fueron los agitadores políticos y culturales de la universidad, y jugaron un papel importante aunque la represión logró desarticularlos rápidamente.

---

<sup>259</sup> Los espontaneístas eran grupos ácratas que organizaban actos espontáneos, sin mayor coordinación con otros grupos. Los carrillistas eran los militantes del PCE.

<sup>260</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 255.

<sup>261</sup> *Comuna*, Órgano de la Agrupación Estudiantil Revolucionaria. Nº 14, 26 de enero de 1969, p. 1. F. Pablo Iglesias.

Los grupos ácratas rechazaban los métodos de la democracia representativa, por lo tanto, se oponían a todas las organizaciones de este tipo, como los sindicatos democráticos, los claustros y las juntas, y a mecanismos como el diálogo y la negociación, ya que los consideraban pasivos y, por lo tanto, inútiles. El modelo de acción colectiva que propugnaban era el de la democracia directa. Los radicales defendían las formas de lucha revolucionarias, y el enfrentamiento constante con las autoridades universitarias (incluida la policía), como formas de propiciar la lucha revolucionaria y contrarrepresiva. Consideraban que el PCE era pactista, revisionista y colaboracionista con los partidos burgueses y con el régimen de Franco, por lo que tampoco estaban dispuestos a integrar las organizaciones auspiciadas por el PCE. Pese a la radicalidad de sus postulados, los grupos ácratas nunca pasaron de ser una minoría en la universidad, aunque sí lanzaron un desafío importante al ME, cuestionando la unidad de acción y propiciando el mecanismo de la democracia directa en lugar de las formas representativas, que habían sido la bandera de lucha del ME durante la década de los 50 y los 60.

Ahora bien el PCE siguió siendo el partido más organizado dentro de la universidad. Como explican los autores de *Estudiantes contra Franco*, “no sólo contó siempre con estudiantes muy valiosos en cuanto a su entrega a la organización del movimiento contra Franco, sino que tuvo en torno suyo a un número relativamente importante de artistas y de gentes de letras. Y cuando la represión – que seguirá cebándose en sus militantes – se ejerza sobre sus adheridos o simpatizantes, “el Partido” siempre sabrá poner en marcha una poderosa maquinaria para pedir y conseguir su libertad”.<sup>262</sup> De esta manera, los grupos radicales nunca lograron coordinar una plataforma amplia de contestación dentro de la universidad, y sus acciones fueron vistas como las de una minoría radicalizada.

#### **IV. La disolución del SDEUM.**

Un tema que produjo fuertes divisiones entre las organizaciones del ME fue la postura del *Partido Comunista* de hacer una distinción entre los adeptos al Régimen, entre los “ultras” (los franquistas acérrimos) y los “evolucionistas” (más bien liberales y que intuían que al Régimen no le quedaba mucho tiempo). En relación con los

---

<sup>262</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 280-281.



segundos, el PCE consideraba que debía ejercer presión sobre ellos para llevarlos a la oposición democrática. Siguiendo esta postura, la Junta de Estudiantes del SDEUM, en febrero de 1969 decía a través de *Vanguardia* (el periódico de la Organización Universitaria del PCE) que para derribar al Régimen era necesario un gran movimiento de masas, y que su labor era ejercer “presión sobre todas las clases y capas, sobre los evolucionistas y liberales, sobre los oficiales del ejército, etc.”.<sup>263</sup>

Los grupos más radicales criticaron fuertemente esta postura, considerando que tanto el PCE como el SDEUM – que ellos controlaban – eran pactistas y antirrevolucionarios. En un documento titulado “En la vía del proletariado”, el Comité de Estudiantes Revolucionarios de la Universidad de Madrid señalaba que solamente un grupo de renegados como los que controlaban el Sindicato, podían hablar de “ultras” y “evolucionistas”, y culpar solamente a los primeros del Estado de Excepción. “Ellos afirman que el “amplio movimiento democrático de todas las capas y clases sociales”, en el que incluyen a curas, obispos, abogados, profesionales de la firma de cartas, carlistas, monárquicos juanistas, profesores progres (o no muy fascistas), oficiales del Ejército, ministros con velocidades europeístas, es decir, todos los “evolucionistas”, amenazaba con el predominio de los “ultras”.<sup>264</sup>

Por el contrario, en dicho documento los estudiantes revolucionarios consideraban que el estado de excepción era una declaración de guerra abierta de los capitalistas contra la clase obrera y el pueblo trabajador, que ya estaba encauzando su lucha hacia la destrucción de la burguesía.

Por su parte, los miembros del FLP, en su documento titulado “El Estado de Excepción y los objetivos del Movimiento Revolucionario”, hacían la misma crítica al PCE y consideraban que el evolucionismo-liberal y la represión ultra, eran dos caras de la misma moneda: el poder burgués; que además, utilizaba a unos u otros grupos, dependiendo de la coyuntura. En este contexto, la labor del movimiento revolucionario se dirigía a revelar a la población la mascarada que suponía el estado de excepción y proponer la lucha anticapitalista.

El FLP optaba por la vía revolucionaria, una estrategia basada en un profundo análisis de la situación socio-política, que denunciara las causas estructurales de las contradicciones del capitalismo en la Universidad. La base de esta estrategia era elevar a

---

<sup>263</sup> *Vanguardia*, 18 de febrero de 1969, p. 3. AHPCE.

<sup>264</sup> “En la vía del proletariado”, Comité de Estudiantes Revolucionarios de la Universidad de Madrid, febrero de 1969, p. 1. AHPCE.

la lucha estudiantil al nivel de lucha anticapitalista y antiimperialista para “desarrollar la agitación y propaganda desde hechos concretos”.<sup>265</sup> El objetivo último de esta estrategia era formar un movimiento estudiantil revolucionario, que se uniera al movimiento obrero (para evitar verse reducido a un segundo plano) y que encuadrara sus acciones en el contexto general de la lucha de clases.

Para el *Frente de Liberación Popular*, las tareas específicas que los estudiantes debían asumir en esta nueva etapa era la de organizar a las bases y estimular la creación de plataformas y comités de lucha que aseguraran la continuidad del movimiento y su carácter revolucionario.<sup>266</sup> Para esta tarea, el SDEUM dejaba de ser efectivo, ya que se había transformado, según los estudiantes del FLP, en una vanguardia desconectada del resto de los estudiantes. Y lo que era peor, en un grupo de reformistas.

En la revista *Acción Universitaria* del mes de marzo de 1969, el Comité del Sector Estudiantil del FLP hacía un duro análisis de la situación del movimiento estudiantil, identificando tres tácticas en la Universidad de Madrid.

1.- La táctica de los síndicos carrillistas, con su brazo armado, la Junta de Estudiantes, obsoletos y aferrados al poder, recordando su glorioso pasado e intentando “consolidar a un muerto”, al imponer una nueva versión del Sindicato Democrático. “Convocarán vigorosos happenings creadores de conciencia, Grandes Marchas pacíficas al rectorado, a Princesa, para que lo más selecto del Madrid de siempre comprenda que el franquismo es malo”.<sup>267</sup>

2.- La táctica de los síndicos radicales, las escisiones del PCE, que son solamente variaciones del carrillismo, sin definir su postura en el SDEUM, se acercaba a las plataformas de estudiantes revolucionarios y a la Junta de Estudiantes, y luego se retiraron de ésta para formar su propia Junta.

3.- La táctica más acertada, la de la ruptura con la etapa democrática del movimiento estudiantil, es decir, la ruptura con cualquier tipo de sindicato u organización representativa formal. En su lugar se proponía consolidar organismos de base en forma de comités o plataformas de estudiantes revolucionarios, que defendieran

---

<sup>265</sup> “En la vía del proletariado”, Comité de Estudiantes Revolucionarios de la Universidad de Madrid, febrero de 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>266</sup> “El Estado de Excepción y los objetivos del movimiento revolucionario”, Comité Político del Frente de Liberación Popular, febrero de 1969, p. 10 y ss. AHPCE.

<sup>267</sup> *Acción Universitaria*, marzo de 1969, p. 2. F. Pablo Iglesias.

principios fuertemente anticapitalistas. “El objetivo inmediato es la lucha contra el actual instrumento del capital, de la burguesía, en la Universidad: la reforma”.<sup>268</sup>

En abril de 1969, a través de *Acción Universitaria*, el FLP distinguía dos estrategias a seguir por parte del movimiento estudiantil, la vía reformista y la vía revolucionaria. La vía reformista era aquella que solamente significaba oposición en lo formal, pero que utilizaba algunas instancias institucionales para manifestar desde allí sus críticas al régimen. Por ejemplo, denunciaban que la oposición a la reforma de la universidad desde las comisiones mixtas era más bien colaboracionismo. De esta forma, criticaban la estrategia reformista, tildándola de oportunista.<sup>269</sup> La crítica al PCE es evidente, en tanto esta organización utilizaba las elecciones de delegados y otras instancias que existían en la Universidad para intentar fomentar la oposición desde dentro.

La *Asociación de Estudiantes Revolucionarios* (AER) hacia 1969 reorganizó temporalmente (y sin mucho éxito) la *Federación Universitaria Democrática de España* (FUDE), que se había creado a principios de los años 60, y a través de ella planteó una plataforma unitaria para los estudiantes revolucionarios, una suerte de competencia al SDEUM pero “estrictamente revolucionaria”. En el periódico *Democracia Popular*, la FUDE señalaba que “la unidad estudiantil no debe englobar a todos los estudiantes (como pretenden los revisionistas, sectores prooligárquicos y algunos neo-revisionistas que han surgido últimamente aunque débiles) pues en el seno del estudiantado existe un porcentaje (que sobrepasa el 10%) de hijos de la oligarquía que, no sólo tienen intereses de clase diferentes, sino contrarios al resto de los estudiantes”.<sup>270</sup> Sólo debían componer esta nueva plataforma, aquellos estudiantes comprometidos con las clases populares y con la lucha revolucionaria, que llevara a la instalación de una Democracia Popular. También criticaban directamente al SDEUM, tildándolo de “superestructura sindical formada por órganos fantasma controlados por grupos integracionistas”.<sup>271</sup>

La radicalización de las posturas de algunos grupos, combinada con la fragmentación y el regreso a la clandestinidad debido a la fuerte represión que sufrían los estudiantes terminó por destruir las plataformas unitarias de acción del ME. Durante

---

<sup>268</sup> *Acción Universitaria*, marzo de 1969, p. 3. F. Pablo Iglesias.

<sup>269</sup> *Acción Universitaria*, abril de 1969, p. 2. F. Pablo Iglesias.

<sup>270</sup> *Democracia Popular*, periódico de la Federación Universitaria Democrática Española, enero-febrero de 1969, p. 3. AHPCE.

<sup>271</sup> *Democracia Popular*, enero-febrero de 1969, p. 4. AHPCE.

el curso 68-69 la eficacia del SDEUM se había puesto a prueba, y comenzaban a profundizarse las diferencias que existían entre los distintos grupos que lo integraban. Los ácratas fueron los primeros en manifestar su desacuerdo con la actitud del SDEUM, más contemporizadora con profesores y autoridades académicas. Por su parte, los estudiantes comunistas acusaban a los ácratas de desdeñar los órganos sindicales. Sin embargo, las diferencias más importantes se manifestaron entre el PCE y los grupos maoístas y trotskistas, quienes consideraban que el SDEUM actuaba de forma desfasada o retrasada con respecto al grado de politización de las vanguardias. Se discutía así la relación entre las vanguardias radicalizadas y las masas menos politizadas, y se rechazaba la idea de que dentro del ME pudieran actuar unidos los grupos de izquierda y sectores democráticos de las capas medias, como propiciaba el PCE.

En enero de 1969, el periódico *Vanguardia*, ya hacía un diagnóstico de la compleja situación por la que atravesaba el movimiento estudiantil, a la vez que hacía un llamado a vincularse con otros movimientos antifranquistas para lograr una amplia movilización de masas.

Por su parte el FLP estaba en medio de una fuerte crisis interna, entre los grupos leninistas y los gradualistas, lo que provocó su creciente radicalización. En este contexto, los estudiantes del FLP intentaron hacerse con el control del SDEUM, que compartían con el PCE, lo que provocó la ruptura entre los dos partidos. Como señala Álvarez Cobelas, en la Universidad madrileña el FLP y el PCE tenían un número similar de militantes, aunque el “*Felipe*” era menos disciplinado y rígido, lo que lo hacía más atractivo para una parte de los estudiantes.<sup>272</sup>

La radicalización del FLP tuvo efectos importantes en sus órganos de expresión. Así, el periódico *Acción Estudiantil* cambió de nombre a *Barricada*, en marzo de 1969. Y este cambio de nombre tenía por objeto que la revista de los estudiantes del FLP representara mejor la línea revolucionaria que ahora defendía la organización.

“Las barricadas son una constante en la lucha revolucionaria de los oprimidos y explotados del mundo; el mejor parlamento cuando el Poder se debate en la calle. Barricada es el símbolo de la unión - la más real de todas las uniones - entre cuantos luchamos contra la burguesía. Por eso, nosotros, estudiantes revolucionarios, queremos expresarnos bajo ese símbolo, en espera de una unión y de una dirección práctica del proletariado en las calles de nuestras ciudades. En las barricadas triunfantes de la Revolución Socialista”.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 248.

<sup>273</sup> *Barricada*, Órgano Estudiantil del FLP, marzo de 1969, p. 1. F. Pablo Iglesias.

La ruptura entre el FLP y el PCE repercutió con fuerza dentro del SDEUM. El proceso de radicalización vivido por el FLP (que en la universidad optaba cada vez más por acciones espontáneas y con algún grado de violencia) lo llevó a abandonar el Sindicato, por considerar que no apoyaba la lucha revolucionaria y socialista. Los militantes del FLP proponían una crítica permanente a la sociedad y a la universidad burguesa, que debía ser destruida para llegar a la universidad popular. En este sentido, el objetivo del FLP era generar una nueva forma de organización de los estudiantes, en base a asambleas de curso y centro, con direcciones colegiadas, creando una vanguardia socialista estudiantil que propiciara la agitación y movilización de forma permanente.

En el número de abril de *Barricada*, las críticas apuntaban directamente al SDEUM como un instrumento “para encuadrar a los estudiantes e incorporarles a la lucha democrática de la oposición formal, un refinado y progresista instrumento de integración, en definitiva, un arma del revisionismo. La actitud revolucionaria frente al revisionismo no es, desde luego, colocarse al margen, sino en contra. Lucha contra él hasta su destrucción”.<sup>274</sup>

Ahora bien, tal como señala José Álvarez Cobelas, la crisis del SDEUM no se debió solamente al Estado de Excepción. Antes de la imposición de esta medida ya se había manifestado la ruptura del consenso entre la dirección y el resto de los estudiantes. Pese a que siempre mantuvo su carácter de organización ilegal, el SDEUM había logrado transformarse, en parte, en un interlocutor válido para las autoridades académicas. Sin embargo, las elecciones sindicales de octubre de 1968 demostraron la fractura interna que vivía el SDEUM. El FLP lo consideraba inútil y contemporizador, y no se ajustaba a su nueva estrategia de ser la vanguardia de la lucha revolucionaria de los estudiantes. El PCE (I) también lo rechazaba, y más aún los grupos ácratas; sólo el Partido Comunista quería continuar con esta plataforma. Con la imposición del estado de excepción, el Sindicato simplemente no pudo seguir funcionando porque la represión se abatió con mayor fuerza sobre sus dirigentes, que eran conocidos, y porque los que quedaban no tenían ninguna posibilidad de reunirse.<sup>275</sup>

En suma, la radicalización de los grupos políticos que operaban dentro del SDEUM produjo su fractura, en tanto que los más revolucionarios lo veían como un

---

<sup>274</sup> *Barricada*, Órgano Estudiantil del FLP, abril de 1969, p. 17 en Julio García Alcalá, op. cit., p. 241-242.

<sup>275</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 266 y ss.

estorbo para conseguir sus objetivos y el conjunto de los estudiantes dejó de sentirse representado por él.

## **V. Las reivindicaciones del movimiento estudiantil: lucha contra la LGE, por la amnistía y las libertades.**

En medio de las fuertes movilizaciones ocurridas en España en el año 1968, el nuevo ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, comenzó a dar pasos para realizar la tan esperada reforma de la universidad. En este sentido, se publicó el llamado *Libro Blanco de la Educación en España*, en donde se sentaron las bases para la reforma. Ésta se basaba en dos ideas:

- 1.- Resolver los problemas creados por la masificación de la universidad
- 2.- Ajustar la estructura de la enseñanza a las necesidades de producción

Aunque la Ley General de Educación sería aprobada en 1970 y puesta en práctica en los años posteriores, ya en 1968-1969 había una fuerte crítica contra las ideas que la sustentaban, especialmente, en contra de la segunda idea. El movimiento estudiantil consideraba que el problema de la masificación se podía solucionar invirtiendo más dinero en infraestructura, en salarios de los profesores, en investigación, etc., para lograr que la educación española se asemejara a la del resto de Europa. Sin embargo, la principal crítica que se le hacía a la reforma era que pretendía consolidar una enseñanza tecnocrática, al servicio de las necesidades del capitalismo, que estaba identificado con los grupos de poder a nivel político y económico, que intentaban, de esta forma, perpetuarse en el poder.

Así lo comprendieron los estudiantes universitarios, quienes rechazaron desde un comienzo la reforma pretendida por Villar. En términos más concretos, los estudiantes consideraban inaceptables varios puntos de la ley, en particular el *numerus clausus*, los cursos selectivos en las Facultades, el traslado de la Facultad de Políticas y Económicas desde la Ciudad Universitaria a Somosaguas y las cuatro convocatorias, ya que todos ellos estaban dirigidos a fomentar el clasismo en la universidad.

El febrero de 1969, el SDEUM declaraba que las reivindicaciones más inmediatas del movimiento estudiantil, como la enseñanza abierta a corrientes de pensamiento modernas, profesorado competente, sindicato libre, libertades de reunión, huelga, etc., eran imposibles bajo un régimen que no tenía interés en la cultura popular, “ya que mientras la enseñanza esté condicionada a formar técnicos serviles al

capitalismo, no servirá a los intereses de las clases populares”.<sup>276</sup> En este sentido todas las organizaciones estudiantiles de oposición propiciaban el cambio de la universidad burguesa a la universidad democrática, sin embargo, ésta sólo podía ser posible con un cambio de régimen, en “una España Democrática y Popular”, señalaba el SDEUM. Las definiciones de lo que era una universidad democrática no eran para nada claras, y dependiendo de las corrientes ideológicas, los contenidos variaban entre proyectos más y menos radicales.

Para el Sindicato Democrático, una universidad democrática sería aquella en la cual tuvieran acceso todos los sectores de la población, independientemente de sus posibilidades económicas. “Una Universidad donde la formación sea integral y no destinada a formar hombres – máquina que sirvan para mantener el estado actual de las cosas. Una Universidad donde nadie sea perseguido por las conclusiones a que llegue después de un proceso de estudio y meditación. En definitiva, una Universidad que sirva a los intereses del pueblo y del país”.<sup>277</sup>

Por su parte, el Comité del Sector Estudiantil del FLP, en el número de marzo de Acción Universitaria, señalaba que la reforma de Villar era efectivamente la reforma democrática que los estudiantes pedían, ya que cuando se pedía dicha reforma, nunca se había puesto en cuestión al estado burgués que la estaba concediendo.

“La RDU (reforma democrática de la universidad) era real y verdaderamente una petición de reforma. Añadirle o no la palabra “democrática” es una cuestión estética; puede sonar bien a determinados oídos, pero no añade contenido a la palabra “reforma”, porque democracia no quiere decir nada: democracia burguesa sí, democracia obrera también. Pedir que los criterios de acceso a la Universidad no sean clasistas y no decir que éste exige la destrucción del Estado burgués; pretender que se suponga que Estado burgués y Universidad Popular son compatibles es una mixtificación, pura demagogia”.<sup>278</sup>

En el contexto de radicalización que vivía el ME madrileño a finales de la década de los 60 las agrupaciones políticas no solamente propugnaban la derrota del franquismo, sino el establecimiento de una democracia popular. Seguimos aquí la tesis de José Álvarez Cobelas, quien señala que el movimiento estudiantil no pretendía la implantación de una democracia de tipo occidental sino más bien la instauración de “un

---

<sup>276</sup> “Llamamiento a la clase obrera”, SDEUM, febrero de 1969, p. 1 AHPCE.

<sup>277</sup> “Al pueblo de Madrid”, SDEUM, marzo de 1969, p. 1. AHPCE.

<sup>278</sup> *Acción Universitaria*, marzo 1969, p. 8. F. Pablo Iglesias.

socialismo de caracteres difusos y contradictorios, en consonancia con los movimientos estudiantiles de distintos países por los que estuvo influenciado”.<sup>279</sup>

De esta manera, la Junta de Estudiantes de la Facultad de Filosofía hacía un llamado a luchar contra la reforma de Villar, “POR UNA UNIVERSIDAD PARA EL PUEBLO EN UNA ESPAÑA DEMOCRÁTICA Y POPULAR” (marzo 69), *Barricada* llamaba a los estudiantes a unirse “en las barricadas triunfantes de la Revolución Socialista” (marzo 69), la Junta de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid también hacía un llamado a los universitarios a movilizarse por UNA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA Y POPULAR (junio 69). El PCE era más cauto y en marzo de 1969 su Organización Universitaria exigía “AMNISTÍA GENERAL, LA CANCELACIÓN DE TODOS LOS DELITOS POLÍTICOS Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. Por esta vía avanzaremos hacia la democracia y el socialismo”.

Sin embargo, como señala Rafael Argullol, los discursos radicales no lograron permear demasiado en los estudiantes menos politizados de la Universidad de Madrid. Los grupos más radicales se encontraban con la dificultad de que, al fundar su ideología en un sentido anticapitalista y antiburgués, la importancia del movimiento estudiantil quedaba en segundo plano debido a su “escaso peso específico directo del estudiantado en el tablero de las relaciones capitalistas de producción”.<sup>280</sup> Para resolverlo, se utilizaron dos estrategias:

- Llevar la lucha de clases a la universidad, para lo cual se propiciaba la creación de comités de acción, curso o base.
- Calificar al movimiento estudiantil como un instrumento “al servicio” de la clase obrera.

Ninguna de las dos estrategias dio demasiados resultados, y el discurso radical sí alejó a muchos estudiantes poco politizados, que veían como las luchas por las reivindicaciones académicas cedían terreno frente a los discursos políticos radicales de las diversas organizaciones políticas que iban apareciendo en la universidad. Como señala de nuevo Argullol, “la denuncia moral del capitalismo y el repudio a las formas burguesas de vida estuvieron en todo momento desprovistos de realización táctica. Tampoco la denuncia de la “función social clasista” de la universidad, motivo favorito

---

<sup>279</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. xv – xvi.

<sup>280</sup> R. ARGULLOL, “Reflexión” sobre los años radicales (movimiento estudiantil 1968-1971)”, p. 89.



del radicalismo estudiantil, estuvo arropada por una política menos abstracta que la pura declaración de principios”.<sup>281</sup>

Ahora bien, aunque las organizaciones políticas de oposición que actuaban en la universidad coincidían en la urgente necesidad de derribar al franquismo y de implantar un nuevo sistema más o menos radical, dependiendo de la organización, las diferencias más importantes entre estos grupos era la forma de llevar a cabo las luchas. Para AER-FUDE, la estrategia para luchar contra el franquismo era la creación de un Frente Obrero – Estudiantil, en el cual los estudiantes jugarían transitoriamente el papel de la vanguardia, pero siempre teniendo en cuenta que el sujeto revolucionario era la clase obrera.

“Hay que hacer jugar al estudiantado el papel detonante, y transitoriamente, de la vanguardia, con el programa de clase del proletariado, ese es el papel de FUDE y de la vanguardia estudiantil revolucionaria, ser el centro organizador de esa amplia vanguardia que está obrando como dirección en toda España, de la tendencia revolucionaria que está interviniendo aun sin estar coordinada nacionalmente y concientemente, pero que tiene un funcionamiento objetivo en la fábrica, en el barrio obrero, en el estudiantado, en el campesinado”.<sup>282</sup>

El PCE insistía en su estrategia de plataformas unitarias y de colaboración con el movimiento obrero (no solamente con el movimiento obrero revolucionario) ya que veían que ambos estaban dando la misma batalla: “Los problemas de la Universidad confluyen y se insertan en el conjunto de problemas que la permanencia del franquismo plantea a todas las clases y capas del pueblo. Pese a los intentos del Régimen, la Universidad no está aislada; su lucha coincide con la de la clase obrera por un sindicato democrático y de clase...”.<sup>283</sup>

El FLP también propiciaba la unión con el movimiento obrero, sin embargo criticaba la coordinación del movimiento estudiantil con un movimiento obrero reformista (criticaban así las propuestas del PCE), ya que consideraba que esa era una unión de mínimos, que daba la espalda a la lucha de clases. En este sentido, la estrategia del FLP era llevar la lucha de los estudiantes al nivel de lucha de clases, es decir, la “unión al Movimiento Obrero anticapitalista, colaborando con él desde todos los

---

<sup>281</sup> Ibid.

<sup>282</sup> *Comuna*, Órgano de la Agrupación Estudiantil Revolucionaria. Nº 14, 26 de enero de 1969, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>283</sup> “A los estudiantes, a los profesores”, Organización Universitaria del PCE, abril de 1969, p. 1. AHPCE.

campos y por todos los medios en el planteamiento de acciones y alternativas que desborden el revisionismo”.<sup>284</sup> Para llevar a cabo esta lucha, proponían el desarrollo de los comités de acción y las organizaciones de base, autónomos y con capacidad de acción, capaces de dirigir el movimiento de masas anticapitalista en la universidad.

En este sentido, la lucha contra la reforma burguesa de la universidad fue rápidamente sobrepasada por la lucha en contra del sistema capitalista implantado por el franquismo; una universidad democrática y popular no era compatible con un Estado burgués. De ahí que junto a la lucha contra la reforma de Villar, también se luche por las libertades políticas, por la amnistía de los presos (ya fueran estudiantes o no) y en contra de la represión en general.

Esta dinámica de superposición de las reivindicaciones académicas y políticas generales será una constante en el movimiento estudiantil. Generalmente, las reivindicaciones académicas funcionarán como oportunidades políticas pero serán rápidamente superadas por cuestiones políticas generales. En este contexto se enmarcan los diversos llamamientos a la movilización para el 1º de mayo de 1969, que, como hemos visto anteriormente, no tuvo éxito.

De esta manera, a las puertas de las vacaciones de verano de 1969, el movimiento estudiantil se encontraba en un claro momento de reflujo. La fragmentación en organizaciones pequeñas, la mayoría de ellas de corta vida, la radicalización ideológica y las luchas entre los que promovían la revolución y los llamados “reformistas” contribuyeron a debilitar aún más al ME. Como consecuencia de las divisiones entre agrupaciones, el SDEUM (según Álvarez Cobelas, una aportación original del movimiento estudiantil español al internacional) se disolvió, constatando lo difícil que era conseguir la coordinación de los estudiantes en una plataforma unitaria, al mismo tiempo que se radicalizaban los mensajes que recibía el estudiantado.

Con todo, no podemos achacar la disolución del SDEUM solamente a la fragmentación y radicalización vivida por el ME. La represión jugó un papel fundamental en este proceso, ya que se abatió con particular fuerza sobre los representantes estudiantiles (eran más fáciles de identificar), y si bien en un comienzo pudo actuar como una oportunidad política, en el sentido de que los propios estudiantes la denunciaban y se movilizaban por la retirada de la policía de la universidad, finalmente, terminó por lograr su propósito: desarticular y dividir al Movimiento

---

<sup>284</sup> *Acción Universitaria*, abril de 1969, p. 3. F. Pablo Iglesias.

Estudiantil. Como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, “en el arranque de la década de 1970 alguien podría pensar que no le vendría ya al franquismo, desde la universidad, ninguna amenaza grave. Al verla tan agotada y replegada, alguno pensaría que el peligro había ya pasado”.<sup>285</sup> Se equivocaban quienes pensaban así.

---

<sup>285</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 292.

## CAPÍTULO 5

### 1969-1971: FLUJO Y REFLUJO TRAS EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

#### I. Curso 1969-1970: La lucha contra la Ley General de Educación.

Como mencionamos en el capítulo anterior, la represión consiguió desarticular la movilización de los estudiantes en Madrid, imponiendo cierres continuos, encarcelamientos masivos de estudiantes, patrullajes constantes de la policía y la Brigada Político Social en los centros, expulsión de catedráticos, profesores y alumnos, prohibición de entrada a los Centros a los alumnos libres, expedientes indiscriminados, limites de convocatorias a exámenes, etc. La idea era aislar a la universidad de la realidad política. Debido a esto, el curso 1969-1970 fue una etapa de reflujo del movimiento estudiantil en la Universidad de Madrid, caracterizada además por la creciente enemistad entre los militantes del PCE y los denominados estudiantes revolucionarios.

Las principales reivindicaciones de los estudiantes en este curso decían relación con la Ley General de Educación (LGE) y los intentos del régimen franquista por aplicar a la universidad una reforma tecnocrática, que según *Vanguardia*, era una “afrenta que el impotente capitalismo español lanza contra los estudiantes y las masas populares del país; es una realidad que no podemos soslayar y contra la cual no cabe una lucha verbal o al nivel de formulaciones abstractas”.<sup>286</sup> Los principales problemas detectados por los estudiantes respecto de la LGE tenían que ver con la agudización del clasismo en la Universidad, que resultaría en beneficio de las entidades privadas de educación superior. El *numerus clausus* (reducción de cupos para el ingreso a las distintas Facultades), los cursos selectivos en primer año y las cuatro convocatorias (la posibilidad de presentarse solamente a cuatro convocatorias en los exámenes de cada asignatura) apuntaban a crear trabas y dificultades para el acceso y, además, resolver el problema del bajo rendimiento de algunos alumnos a través de su expulsión.<sup>287</sup>

Otro tema importante en este curso fue el relativo a la representatividad de los estudiantes. En 1968, el Ministerio de Educación creó las Asociaciones de Estudiantes, las cuales fueron un fracaso ya que para el ME, éstas eran simples intentos de dividir al

---

<sup>286</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Octubre de 1969, p. 1 AHPCE.

<sup>287</sup> *Ibid.*, p. 2.

movimiento y eliminar las plataformas unitarias de los estudiantes. “El intento de crear un falso pluralismo estudiantil por parte de Villar demuestra que lo que el régimen y las clases dominantes temen de verdad es una organización unitaria, masiva, abierta y representativa de los estudiantes”.<sup>288</sup> Las elecciones de representantes para las AES en el curso 69-70 se desarrollaron, según indica el *Boletín Informativo de Actividades Estudiantiles*, en completa anarquía, “habiéndose convocado elecciones oficiales en algunos Centros Docentes de las cuales muchas no fueron aceptadas por el estudiantado y otras lo fueron, realizándose con un número tan insignificante de electores que puede considerarse prácticamente nula la representatividad de los nombrados”.<sup>289</sup>

En este sentido, durante todo el curso los estudiantes comunistas hicieron constantes llamados a convertir el asunto de la representatividad un tema central del ME. Para ellos, la representatividad debía darse en todos los niveles: Curso, Facultad y Distrito, ya que esto posibilitaría la continuidad de las acciones colectivas y de los conflictos. Además, la coordinación a nivel de Distrito permitiría insertar al movimiento estudiantil en la lucha política general, sin perder de vista los problemas propios de la universidad. “Su resolución [del conflicto] sólo está en la lucha política unida de los estudiantes y la clase obrera junto con las fuerzas democráticas del país. Para ello es necesaria también la representatividad a los niveles de Facultad y Distrito”.<sup>290</sup>

La Organización Universitaria del PCE hacía llamados a todos los estudiantes a luchar en contra de la LGE y del Régimen de Franco, y a unirse con el resto de los sectores democráticos, especialmente con la clase obrera. De esta manera, los comunistas volvían a articular las luchas sectoriales del ME dentro de un contexto de lucha política general.

Respecto de la situación que vivía la Universidad madrileña a finales de 1969, el PCE tenía una postura clara. El estado de excepción había logrado su objetivo al impedir el desarrollo del movimiento estudiantil con carácter masivo, al infundir cansancio y miedo en el alumnado y al desarticular las formas de organización de los estudiantes (especialmente el SDEUM). Para sobrevivir al estado de excepción, las organizaciones universitarias tuvieron que sumergirse aún más en la clandestinidad, con

---

<sup>288</sup> Ibid., p. 5.

<sup>289</sup> *Boletín Informativo de Actividades Estudiantiles*, p. 10. AHN. Facilitado por Alberto Carrillo-Linares.

<sup>290</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Octubre 1969, p. 6. AHPCE.

lo cual, hacia finales de 1969 se vislumbraban una serie de estructuras o plataformas de vanguardia, desconectadas de las masas de estudiantes.

Sin duda, esta era la principal crítica de la Organización Universitaria del PCE al ME en esta fase: la ruptura entre vanguardia y masa. Para los estudiantes comunistas, la vanguardia tenía el rol de orientar a las masas, no de sustituirlas, por eso hacían hincapié en la representación, entendiendo siempre que las masas (en concreto, las asambleas) decidían, y la vanguardia iniciaba las acciones. Sobre este mismo tema, se comenzaba ya a discutir el complejo tema de las elecciones de representantes, que debían nacer de la sensibilidad política de las masas estudiantiles, y cuyo “papel era el de ser cauce para la actuación de las masas en los problemas centrales: la Ley de Educación, la Ley Sindical, la represión...”.<sup>291</sup>

Para lograr el objetivo de una plataforma de masas, los estudiantes del PCE decidieron formar una Junta Provisional de Estudiantes de Distrito. Si bien no lograron celebrar elecciones (clandestinas, por supuesto) en todos los Centros, sí lograron establecer ciertas estructuras de representación en algunas facultades. En este sentido, el discurso del PCE en la universidad insistía en la elección de representantes para generar una organización en donde todas las Facultades y Centros estuvieran presentes. Sin embargo, esta política no era compartida por los grupos más radicales, especialmente los grupos trotskistas que publicaban el periódico *Universidad Roja*. (Grupos escindidos del difunto FLP, unidos en la redacción de la revista *Comunismo* y que formarían luego la *Liga Comunista Revolucionaria*).

El día 20 de enero de 1970, al cumplirse un año de la muerte de Enrique Ruano se registraron nuevos incidentes en la Ciudad Universitaria. Según señala la edición del 21 de enero de ABC, más de mil estudiantes

“se dirigieron a la capilla de la Ciudad Universitaria con intención de asistir a un funeral – que fue suspendido – en sufragio del estudiante don Enrique Ruano, que falleció hace un año”.<sup>292</sup> Luego de esto, los estudiantes se desplazaron hasta las zonas de Princesa, glorieta de Quevedo, Bilbao y Manuel Becerra, en donde se “tiraron bancos a la calzada, interrumpieron el tráfico por unos instantes, apedrearon escaparates de establecimientos y profirieron gritos”.<sup>293</sup>

---

<sup>291</sup> *Vanguardia*, Noviembre-Diciembre 1969, p. 3. AHPCE.

<sup>292</sup> *ABC*, 21 de Enero de 1970, p. 23. BNE.

<sup>293</sup> *ABC*, 21 de Enero de 1970, p. 23. BNE.

De acuerdo al periódico *Vanguardia*, estas manifestaciones del 20 de enero de 1970 fueron “una demostración de la combatividad y claridad política del movimiento estudiantil”.<sup>294</sup> Sin embargo, también se vinculaban a la lucha política general que estaba llevando a cabo la oposición al Régimen. El éxito de las manifestaciones del día 20, según los estudiantes comunistas, se debió a un nuevo carácter del movimiento, surgido de las directrices que habían establecido los representantes de los estudiantes en la Junta Provisional. Dicha Junta, que se había creado con algunas representantes “ilegales” de las distintas Facultades, tenía como objetivo impulsar la movilización. En este sentido, la Junta “ha jugado el papel de motor, ha potenciado las acciones de los Cursos, y al tiempo su trabajo se ha dirigido a preparar y encabezar las acciones comunes de todos los estudiantes”.<sup>295</sup>

Los estudiantes comunistas, con bastante optimismo, escribían en Marzo de 1970 que la lucha en contra de los expedientes y de los cierres, por la expulsión de la policía de los campus y por la conquista de libertades políticas era cada vez más profunda. Sin embargo, los periódicos no consignan grandes manifestaciones ni movilizaciones en la Universidad madrileña en este mes (aunque ya sabemos que eso no quiere decir que no las hubiera).

Recién el día 10 de abril ABC señala que se ha realizado una jornada para exigir la expulsión de la policía de la universidad y para protestar por la LGE. Según el periódico, dicha jornada fue un fracaso ya que tuvo escaso seguimiento. Por su parte, *Informaciones* apunta que estos incidentes fueron los primeros del tercer trimestre universitario, “en los que se observó cierta tensión estudiantil en la Ciudad Universitaria, donde hubo gran profusión de panfletos y carteles, promovidos, al parecer, por grupos subversivos”.<sup>296</sup> Según este periódico, la Junta de Representantes de la universidad (de carácter ilegal, remarca el diario): “había invitado a los estudiantes a desalojar las Facultades y Escuelas a las doce de la mañana para marchar al centro de Madrid en manifestación pacífica y silenciosa. La afluencia de estudiantes a la convocatoria fue muy escasa, fracasando el llamamiento, que quedó reducido a incidentes aislados en los que tomaron parte varios centenares de estudiantes”.<sup>297</sup>

---

<sup>294</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Enero-Febrero 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>295</sup> Ibid.

<sup>296</sup> *Informaciones*, 10 de Abril de 1970. BNE.

<sup>297</sup> Ibid.

Una nueva convocatoria se hizo para el día 1º de Mayo, bajo la consigna de unir la lucha estudiantil con la lucha obrera. Sin embargo, tampoco tuvo demasiado éxito, como reconoce *Vanguardia*, “la asistencia de estudiantes a las manifestaciones convocadas por la Junta de Representantes fue inferior a la esperada”.<sup>298</sup>

## **II. Los problemas de organización: reformismo y revolución.**

El período de reflujo que supuso el curso 1969-1970 fue interpretado de distintas formas por los grupos políticos que actuaban en la Universidad madrileña. Para la Organización Universitaria del PCE, el problema pasaba claramente por la dificultad de generar plataformas unitarias, ya que la parcelación y el localismo que afectaba al ME lo debilitaban. En este sentido, la propuesta del PCE era bastante clara: sacar de la clandestinidad a la Junta Provisional, llevar las discusiones a las Asambleas de Curso y Sección, y desde allí ejercer un control abierto y transparente sobre la Junta, para fortalecerla. La consigna era: “TODO EL PODER DE DECISIÓN A LOS ESTUDIANTES Y A SUS ASAMBLEAS”.<sup>299</sup>

Esta propuesta se basaba en el diagnóstico hecho por los estudiantes comunistas de los dos primeros trimestres del curso 69-70 y en la constatación de la desmovilización que afectaba a la universidad en su tercer trimestre. Para los estudiantes comunistas, la razón de esta desmovilización estaba en que las decisiones (sobre cuándo movilizarse y por qué motivos) se habían tomado de forma muy esquemática, sin promover discusiones en torno a las reivindicaciones, lo cual habría alejado a la masa de estudiantes.

Ahora bien, en este mismo sentido y también después de las jornadas del 1º de Mayo, los militantes de *Universidad Roja* hacían un diagnóstico negativo de la situación del Movimiento Estudiantil en Madrid. Sus críticas apuntaban a las fuertes contradicciones que existían dentro del ME, que tenían relación con las contradicciones fundamentales del sistema capitalista. Debido a esto, “el movimiento universitario es

---

<sup>298</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 26 de Mayo de 1970, p. 2. AHPCE.

<sup>299</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Abril 1970, p. 3. AHPCE.



incapaz de hacer frente por sí solo a la política burguesa, carece de autonomía estratégica y política al margen de la clase obrera”.<sup>300</sup>

La propuesta de *Universidad Roja* tenía relación con la superación de las reivindicaciones sectoriales de los estudiantes, para así superar el marco contradictorio que afectaba al ME. Este marco contradictorio era, básicamente, la lucha por reformas democráticas en un contexto de dictadura: “La estructura universitaria no puede ser transformada (...) sin llevar a cabo una transformación revolucionaria de la sociedad entera, sin la destrucción del Estado Burgués del que la Universidad es parte integrante”.<sup>301</sup> En este sentido, los redactores de *Universidad Roja* aseguraban que “los estudiantes no constituyen una capa social con intereses específicos comunes, ni por su origen ni por su futura relación de clase”.<sup>302</sup> Debido a esto, los estudiantes no podían adquirir una postura revolucionaria masiva a partir de la lucha por reivindicaciones sectoriales, sino que debían situar su lucha en el contexto general de la lucha de clases.

*Universidad Roja* proponía entonces una organización estudiantil revolucionaria, que hiciera el papel de vanguardia frente al movimiento obrero. Es decir, planteaba una estrecha vinculación entre estudiantes y obreros, en sus formas de lucha y marcos de significado. Los postulados de *Universidad Roja* estaban orientados a la construcción de una organización revolucionaria que acometiera la tarea de construcción del Partido Revolucionario del proletariado, y esa vanguardia debían ser los estudiantes: “La política comunista en la universidad debe venir impulsada y dirigida por un núcleo de militantes de vanguardia, disciplinado, centralizado y armado de una concepción teórica marxista-leninista”.<sup>303</sup>

Para los trotskistas de *Universidad Roja*, la política del PCE (partido al que no consideraban comunista) era reformista y traidora, ya que postulaba una política general democrática. La división entre “ultras” y “evolucionistas” a la que los referimos en el capítulo anterior también aparece en este curso, y es uno de los argumentos más poderosos de *Universidad Roja* para desprestigiar la línea política del PCE considerada “vendida a la burguesía” y utilitaria con respecto al ME, ya que “el carrillismo ha utilizado las reivindicaciones académicas sólo como instrumento de mantenimiento y

---

<sup>300</sup> *Universidad Roja*, Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, Mayo 1970, p. 3. Archivo F. Pablo Iglesias.

<sup>301</sup> *Universidad Roja*, Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, Octubre 1970, p. 2. Archivo F. Pablo Iglesias.

<sup>302</sup> Ibid.

<sup>303</sup> *Universidad Roja*, Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, Mayo 1970, p. 11. Archivo F. Pablo Iglesias.

revitalización de la estructura organizativa sindical del MU [Movimiento Universitario], lo fundamental para el reformismo es tener organizados a todos los estudiantes en torno a su política, ya que se trata de presionar sobre el estado no de luchar contra él”.<sup>304</sup>

Respecto del curso 1969-1970, *Universidad Roja* lo consideraba un período de reflujo debido a dos situaciones. La primera, la represión ejercida por el Régimen en la universidad, que básicamente se reflejaba en la presencia constante de la policía en los Centros. La segunda, debido a la división entre los estudiantes, división que se manifestaba en el aislamiento de los sectores políticos más avanzados respecto de las masas de estudiantes, división entre Centros y entre generaciones de estudiantes.

La disolución del FLP (ocurrida a fines de 1969) dejó un espacio vacío a la izquierda del movimiento estudiantil que, según los trotskistas de Universidad Roja, fue aprovechado por los militantes del PCE para crear la Junta Provisional de Estudiantes, y por la FUDE, para intentar organizar una lucha de masas.<sup>305</sup>

Finalmente, otra gran diferencia entre *Universidad Roja* y el PCE, era la concepción del papel de la vanguardia en la lucha en contra del Régimen. Para *Universidad Roja*, como ya hemos dicho, la vanguardia debía estar altamente politizada en los principios de marxismo-leninismo, para así guiar a las masas (de obreros y estudiantes) a la lucha revolucionaria. En cambio, para el PCE, la vanguardia siempre debía estar “controlada” por las masas reunidas en las Asambleas. En este sentido, los estudiantes del PCE abogaban por una organización más democrática que permitiera crear mejores condiciones “para que el curso que viene pueda existir una organización democrática propia de los estudiantes con mucha más entidad que la habida este curso pasado”.<sup>306</sup>

### **III. Curso 1970-1971: El Proceso de Burgos y la reactivación del Movimiento Estudiantil.**

El curso 1970-1971 estuvo marcado desde el comienzo por dos situaciones que afectaron directamente al mundo universitario. En primer lugar, la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) el 4 de agosto, en plenas vacaciones de verano, y, en

---

<sup>304</sup> *Universidad Roja*, Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, Octubre 1970, p. 4. Archivo F. Pablo Iglesias.

<sup>305</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>306</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Junio 1970, p. 3. AHPCE.

segundo lugar, el Proceso de Burgos, un Consejo de Guerra sumarísimo que afectaba a dieciséis personas, para las que se pedía la pena capital, bajo la acusación de pertenecer a ETA y haber asesinado a tres personas. Este juicio generó una intensa campaña que logró involucrar a diversos sectores de la oposición al régimen, pidiendo la amnistía para los procesados.

Ya a inicios del curso, en la primera sesión de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense realizada el 16 de septiembre, los decanos se mostraban preocupados por el mantenimiento del orden. En dicha sesión se acordó que el orden público en la universidad sería resguardado por las autoridades gubernativas, mientras que el orden académico sería protegido por las autoridades de la universidad. También se convino en pedir la intervención de la fuerza pública para los casos de violencia en contra de personas o infraestructura de los Centros.<sup>307</sup> Respecto de las acciones políticas, la Junta resolvió que no se responsabilizaría por “la vigilancia o represión de otro tipo de actividades que pudieran en algún caso, estimarse subversivas por los agentes del orden público”<sup>308</sup>, con lo cual prácticamente se está dando carta blanca a la acción de la Brigada Político Social y de la Policía Armada dentro de los recintos universitarios.

La diferencia que se hacía respecto del “orden público y del orden académico” en el Acta del 16 de septiembre tenía que ver directamente con las reivindicaciones de los estudiantes. Si bien a comienzos del curso la lucha contra la LGE tenía un lugar prioritario, rápidamente fue eclipsada por las luchas políticas generales, especialmente por la lucha en favor de la amnistía. Ésta última va a ir cobrando fuerza a medida que avance el curso, y rápidamente se va a transformar en el grito aglutinador de todas las fuerzas políticas de oposición.

En octubre de 1970 los estudiantes de *Vanguardia* señalaban que el movimiento democrático estaba tomando nuevas fuerzas y generando movilizaciones importantes. En este contexto,

“el desarrollo de la problemática específica de la Universidad – que la opone también al sistema – es inseparable de la lucha en torno a los problemas centrales, políticos. La solidaridad con la clase obrera, la lucha por la amnistía, la ofensiva contra el imperialismo – bases yanquis en España, presencia económica, OTAN, solidaridad con Vietnam y el pueblo palestino, con los

---

<sup>307</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 16 de Septiembre de 1970, p. 5. ACUCM.

<sup>308</sup> Ibid.

pueblos sometidos por el imperialismo yanqui – son componentes de primera importancia en la lucha del movimiento estudiantil”.<sup>309</sup>

La introducción del ME en una lucha mayor tuvo efectos importantísimos sobre los estudiantes, efectos que se presentarán con dos sentidos. Por un lado, la conexión del ME con el movimiento democrático incrementó sus posibilidades de acción colectiva y movilización, pero por otro lado, dejó a las reivindicaciones propiamente universitarias en segundo plano.

Con respecto al Proceso de Burgos, el PCE organizó una campaña para pedir el indulto de los procesados, ya que ésta estaba en sintonía con su estrategia de la Huelga General Pacífica, y convocó a una marcha para el día 3 de noviembre, bajo el nombre de “Día de Lucha contra la Represión y por la Amnistía”. Según José Álvarez Cobelas, entre los días 2 y 3 de noviembre de 1970 se produjeron los incidentes más grandes en la Universidad de Madrid desde la muerte de Enrique Ruano, y a nivel nacional, los mayores desde las grandes movilizaciones del año 1967.<sup>310</sup>

El día 3 de noviembre se produjo la jornada por la Amnistía. La Policía, alertada por la numerosa propaganda de la convocatoria reforzó los puntos de mayor conflicto, como la glorieta de Atocha y las calles cercanas. Según informa ABC, a las ocho y diez de la noche algunos grupos de jóvenes cortaron el tránsito, se realizaron detenciones en el paseo de las Delicias y Antón Martín, y se reforzó la vigilancia en Cuatro Caminos y la glorieta de Quevedo, donde un grupo de jóvenes apedreó a un jeep de la Policía Armada.<sup>311</sup> Según el periódico, la manifestación fue un fracaso. Así también lo afirmaba la Vicesecretaría provincial de Ordenación Social: “La reacción de la población laboral madrileña ante la convocatoria de la denominada “jornada proamnistía” ha sido prácticamente nula, manteniendo una casi plena normalidad en sus actividades”.<sup>312</sup> Según estudiantes del PCE, la convocatoria había sido seguida por más de 68.000 mil personas en Madrid.<sup>313</sup>

En cualquier caso, las preparaciones para la jornada del día 3 en la universidad supusieron asambleas numerosas, en las que se discutieron problemas como la debilidad del Régimen, la amnistía para los presos políticos, las peticiones de condena a muerte

---

<sup>309</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Octubre 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>310</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 289-290

<sup>311</sup> *ABC*, 4 de Noviembre de 1970, p. 59. BNE.

<sup>312</sup> *Ibid.*

<sup>313</sup> Sin Título, primeros días de Enero de 1970, p. 1. AHPCE.

para los militantes vascos, etc. “Nunca ha habido una introducción tan fuerte de temas políticos en la Universidad y nunca ha habido un entusiasmo tan grande, una combatividad tan amplia. Vivimos situaciones en que está permitida la mayor audacia, la propaganda escrita y los murales no son suficientes. Es necesaria la discusión, la polémica viva en las asambleas...”<sup>314</sup> La enorme politización que se vivía a esa altura en toda España, y particularmente en la universidad, había logrado movilizar a escuelas o centros considerados “atrasados” en la lucha política.

Sin embargo, los estudiantes comunistas tenían la permanente preocupación de que la participación se diluyera si no se generaban las estructuras y organizaciones necesarias para darle continuidad. En este sentido, los comunistas llamaban a elecciones para crear una organización que fuera capaz de cimentar la unidad de los estudiantes de Madrid. En un documento con fecha 10 de noviembre, los estudiantes comunistas de la Facultad de Políticas daban cuenta de las dos posturas existentes en la universidad con respecto a la organización. La primera era la de quienes pretendían organizar una vanguardia e imponer su dinámica a las asambleas. La segunda, la del PCE, implicaba organizar al conjunto de los estudiantes, quienes, con una dinámica propia y no impuesta, ejercerían el control sobre sus representantes.<sup>315</sup> Respecto del siempre complejo tema de las elecciones, el documento señalaba que lo fundamental era lograr hacer elecciones de representantes a nivel de Facultad y Distrito. “El Rector Botella y el Ministro Matesa (sic) Villar permiten las elecciones, pero no más allá de los grupos y cursos. Permiten las elecciones pero no la creación de una organización propia en todos los centros y en el distrito”.<sup>316</sup>

A partir del día 13 de noviembre, las asambleas y manifestaciones en la universidad se produjeron diariamente. También la colocación de carteles alusivos al Proceso de Burgos y pidiendo solidaridad con el pueblo vasco. La policía tuvo que desalojar el campus de la Universidad Complutense, y las autoridades se mostraban sorprendidas por la enorme politización que una situación completamente alejada de la problemática universitaria producía entre los estudiantes.

El día 14 de noviembre se produjo un nuevo desalojo de las Facultades de la Universidad de Madrid, por lo que los estudiantes decidieron llevar sus reivindicaciones

---

<sup>314</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 9 de Noviembre de 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>315</sup> “La actual situación de nuestra Facultad”, Estudiantes comunistas de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, 10 de Noviembre de 1970, p. 1.

<sup>316</sup> *Ibid.*

a la calle. Hacia el final de la mañana, se manifestaron en la calle de Cea Bermúdez, cortando el tráfico y gritando consignas en contra de la presencia de la policía en la universidad. Como hemos señalado anteriormente, lejos de contribuir a estabilizar la situación en los campus, la presencia de las fuerzas de orden fue causa de constantes incidentes con los estudiantes.

El 19 de noviembre, los estudiantes de la Organización Universitaria del PCE de Madrid hacían un nuevo llamamiento a la lucha para impedir las condenas a muerte: “Su consumación sería el preludio de un incremento más feroz de la represión contra la clase obrera, los estudiantes y todos los antifranquistas. La debilidad del franquismo permite que una acción unitaria detenga la acción del Régimen y haga de esta lucha un triunfo popular. Iniciemos desde ahora la lucha más enérgica. Declaremos ya en todo el Distrito huelga general el día del comienzo del Consejo de Guerra”.<sup>317</sup>

Este clima de creciente agitación política – que por lo demás no afectaba solamente a la universidad – trajo consigo nuevas detenciones por parte del Régimen. Según los estudiantes comunistas, la debilidad de la dictadura era tal que sólo podía enfrentarse a este “brote” de agitación que unía a los trabajadores, los estudiantes, los profesionales y los campesinos, a través de la represión, la tortura y las condenas.<sup>318</sup> En este contexto, el mes de noviembre fue tremendamente convulso, y, según la perspectiva de *Vanguardia*, muy positivo para el movimiento estudiantil: “las acciones llevadas a cabo por las diferentes facultades, Económicas, Derecho, Ciencias, Filosofía, etc. Su grado de combatividad, el número de estudiantes que han participado en ellas, nos dan la auténtica imagen del grado de politización y sentimiento antifranquista que hoy se respira en la Universidad y en el país”.<sup>319</sup> Como señalamos al comienzo del presente apartado, las reivindicaciones de este curso eran mucho menos académicas y estaban en directa sintonía con las luchas políticas generales: “Hoy las luchas por la expulsión de la policía, por la libertad de las Asambleas, por la libertad de los detenidos, está enmarcada en la lucha por la Democracia en España”.<sup>320</sup>

La movilización estudiantil que preocupaba a los organismos de gobierno de la Universidad Complutense desde el inicio del curso, se fue transformando en el tema

---

<sup>317</sup> “El gobierno prepara la ejecución de seis jóvenes vascos”, Organización Universitaria del PCE de Madrid, 19 de Noviembre de 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>318</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 30 de Noviembre de 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>319</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>320</sup> *Ibid.*, p. 6.

principal de las sesiones de la Junta de Gobierno. En la reunión del 18 de noviembre de 1970 se trató extensamente el asunto de la agitación estudiantil. Los diversos decanos relataron los problemas que se presentaban en sus facultades, y el Rector determinó no modificar los planteamientos sobre las asambleas, pero advirtiéndole que “si un grupo o curso convierte una asamblea autorizada para tratar temas académicos en una asamblea de carácter político, o se vierten ofensas al profesorado, hay suficientes fundamentos para que se deniegue a ese grupo o curso la celebración de nuevas asambleas”.<sup>321</sup> Finalmente, los decanos y el Rector coincidieron en señalar que la agitación de los estudiantes iba en aumento y la universidad no era capaz de controlarla, por lo que se decidió informar al Ministerio de Educación.

#### **IV. Las semanas álgidas del Proceso de Burgos.**

El día 3 de diciembre comenzó el Proceso de Burgos en medio de una fuerte tensión, aumentada por el secuestro del cónsul alemán en Bilbao, Eugen Beihl, atribuido a ETA. Paralelamente, la conflictividad en el País Vasco aumentó, produciéndose un acusado absentismo laboral (entre veinte y treinta mil obreros faltaron al trabajo el día 3 de diciembre, según ABC), manifestaciones en diversas ciudades y un encierro en la catedral de Bilbao. El día 5 de diciembre, el gobierno declaró el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa para atajar la conflictividad que estaba ocasionando el Proceso de Burgos.

“El reciente secuestro en nuestro país del representante cónsul de un Estado extranjero, hecho con el expreso propósito de coaccionar la actuación de los Tribunales de Justicia, constituye la culminación de unas actividades subversivas que especialmente se concentran en la provincia de Guipúzcoa. El Gobierno está obligado, por exigencias de la paz pública, a la adopción de las medidas que el orden constitucional prevé, con carácter extraordinario, en defensa de la normal convivencia de los ciudadanos y para garantía de sus libertades. Es la Ley, el orden y la Justicia lo que a todos nos corresponde defender”.<sup>322</sup>

Según informa el diario *Madrid*, el 30 de noviembre se ordenó el cierre por tres días de todas las Facultades de la Universidad de Madrid, con la excusa de que las comisiones de evaluación necesitaban tiempo para entrevistar a los mayores de 25 años

---

<sup>321</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la UCM. 18 de Noviembre de 1970, p. 6. ACUCM.

<sup>322</sup> ABC, 5 de Diciembre de 1970, p.1. BNE.

que se presentaban a las pruebas de acceso a la universidad. El cierre se amplió hasta el 7 de diciembre. El 4 de diciembre, se suspendieron las clases “*sine die*” en las Facultades de Económicas y Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.<sup>323</sup> La finalidad del cierre de las facultades más conflictivas era evitar el excesivo crispamiento dentro de la universidad a causa del Proceso de Burgos. Pese a ello, los estudiantes militantes y aquellos que sin militar en un partido determinado se oponían al régimen, se involucraron profundamente en el movimiento generalizado de rechazo a las condenas del Proceso.

Como apunta el periódico ABC, el 9 de diciembre las Facultades de Ciencias, Económicas y Políticas de Madrid estaban en huelga, así como parte de la de Medicina. La Facultad de Derecho fue desalojada por la policía mientras unos cuatrocientos estudiantes intentaban realizar una asamblea. El día 10 de diciembre de la policía desalojó el campus de Somosaguas cuando cerca de cuatrocientos estudiantes estaban reunidos en asamblea.

“La fuerza pública, tras una conminación para que el aula fuese desalojada, al tiempo que una Comisión de alumnos se entrevistaba con el decano para tratar sobre la celebración de dicha asamblea y sobre los incidentes ocurridos, cargó sobre los alumnos. Fueron momentos de gran tensión, pues los alumnos retrocedieron hasta la parte superior del aula, que está en plano inclinado, y los bancos superiores comenzaron a hundirse por el peso, alcanzando a los que iban quedando en los inferiores. Hubo numerosas contusiones y algunos alumnos fueron asistidos en la enfermería de la Facultad”.<sup>324</sup>

En este contexto, los estudiantes comunistas hacían llamamientos para continuar la lucha pese a la intensificación de la represión en la universidad. En las primeras semanas de diciembre más de 40 representantes estudiantiles fueron detenidos.<sup>325</sup> Además, la presencia de la Policía Armada y de los Guerrilleros de Cristo Rey (grupo violentista de extrema derecha) produjeron momentos de mucha tensión en la universidad.

Durante varios días, ABC recoge informaciones sobre huelgas y asambleas universitarias que los estudiantes estaba realizando en sus respectivas Facultades:

“En la Facultad de Derecho se celebraron a primera hora de la mañana (diez y media) diversas asambleas en algunos cursos, que fueron disueltas por

---

<sup>323</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 289-290.

<sup>324</sup> *Madrid*, 11 de Diciembre de 1970. BNE.

<sup>325</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 10 de Diciembre de 1970, p. 2. AHPCE.



las fuerzas de orden público. Hacia las once y media se pretendió realizar una asamblea en el bar de la Facultad a la que asistían aproximadamente 400 estudiantes y la Policía solicitó su disolución. Ante la negativa de los estudiantes la Policía realizó una pequeña carga y produjo una gran desbandada, mientras algunos estudiantes proferían gritos subversivos. Las clases se desarrollaron prácticamente con normalidad”.<sup>326</sup>

Es bastante discutible la normalidad en la que se desarrollaron las clases ya que muchos estudiantes optaron por el absentismo, en señal de protesta por el juicio contra los etarras. Como señala Álvarez Cobelas, “la mayoría de los estudiantes habían optado por dejar de ir a clase, por una mezcla de miedo, de rechazo a la situación o de apoliticismo, mientras una minoría se reunía para después provocar diversos saltos y manifestarse con gran agresividad por toda la Universidad y sus alrededores”.<sup>327</sup>

El día 11 de diciembre, los estudiantes de Filosofía y Letras, reunidos en asamblea, colocaron carteles pidiendo la expulsión de la policía de la universidad, y, según informa ABC, cuando agentes de la policía intentaron quitar los carteles, fueron agredidos con vasos.

“Ayer se celebró en el bar de la Facultad de Filosofía y Letras una asamblea no autorizada y se colocaron diversos carteles alusivos a la presencia de la Policía en la universidad y al Consejo de Guerra de Burgos. Varios números de la Policía Armada, que intentaron quitar los carteles fueron agredidos con vasos. Poco más tarde, grupos de estudiantes de varias Facultades se manifestaron a la altura de los comedores, y un “jeep” de la Policía Armada que se encontraba estacionado en los alrededores fue apedreado. Los manifestantes se dirigieron hacia la Moncloa, profiriendo gritos subversivos y apedrearon algunos locales comerciales.”<sup>328</sup>

La asistencia a clases durante el mes de diciembre fue muy escasa y, aunque sólo en las Facultades de Políticas y Económicas hubo huelga activa, en todas se produjeron incidentes diversos. Ante esta situación, el rectorado de la Universidad Complutense hizo pública una nota pidiendo que no se alterara la vida universitaria y que se asistiera a clase, y aprovechó de recordar que la inasistencia podía ser sancionada con la prohibición de examinarse.

Los estudiantes de la Universidad de Madrid se hicieron eco también del Manifiesto de Montserrat, un documento firmado por más de 300 intelectuales en el Monasterio de ese nombre, en el cual se criticaba fuertemente al Proceso de Burgos y se

---

<sup>326</sup> ABC, 10 de Diciembre de 1970, p. 32. BNE.

<sup>327</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 290-291.

<sup>328</sup> ABC, 12 de Diciembre de 1970, p. 32. BNE.

exigía una amnistía general para los presos políticos. Terminaba este Manifiesto exigiendo “que se establezca un Estado auténticamente popular que garantice el ejercicio de las libertades democráticas y de los derechos de los pueblos y naciones que forman el Estado español, incluido el derecho de autodeterminación”.<sup>329</sup> Finalmente, el día 14 de diciembre se decidió adelantar las vacaciones de Navidad para evitar la creciente conflictividad en las universidades de Madrid, Barcelona y Salamanca. En esta situación de fuerte tensión, el día 15 de diciembre el gobierno decidió reimponer el estado de excepción en toda España, por 18 meses.

Con las facultades cerradas, la Junta de Gobierno de la Complutense volvió a reunirse el 17 de diciembre y realizó un diagnóstico muy pesimista de la situación. Los decanos, en conjunto con el Rector redactaron una comunicación al Ministerio de Educación manifestando su enorme preocupación:

“La situación general de agitación en España repercute desfavorablemente en la universidad, que es el punto más vulnerable de todos los estamentos sociales. Esta vulnerabilidad se ve gravemente multiplicada en la Universidad Complutense en función de su enorme masificación. Considerándose por lo tanto que el remedio principal a los males universitarios es más de Política general que de Política concretamente universitaria o de régimen académico”.<sup>330</sup>

El principal problema, según la Junta de Gobierno, era la huelga que habían llevado a cabo los estudiantes, ya que impedía el normal funcionamiento de las clases y, cuando los profesores decidían suspenderlas, se transformaban en asambleas “ilegales” que normalmente concluían en desórdenes y enfrentamientos con las fuerzas policiales. En esa misma sesión, se denunciaron las agresiones que habían sufrido profesores, administrativos e instalaciones de la Universidad. También se hacía una fuerte crítica a los Profesores No Numerarios, en cuanto “éstos, en una elevada proporción simpatizan con el estamento estudiantil y colaboran en la huelga activa y en la politización de las horas lectivas antes señaladas”.<sup>331</sup>

La Junta de Gobierno también tuvo palabras críticas para la acción de la policía, que había actuado “con una inmediata e indiscriminada violencia, que choca con la serenidad y corrección con que hasta ahora se había comportado. Han resultado

---

<sup>329</sup> “Servicio Informativo de la Organización Universitaria del PCE en Madrid”, 13 de Diciembre de 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>330</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 17 de Diciembre de 1970, p. 7. ACUCM.

<sup>331</sup> Ibid., p. 8.

apaleados numerosos muchachos y muchachas, algunos profesores numerarios totalmente inocentes de agitación y, en algún caso, hasta un Profesor Agregado”.<sup>332</sup> Esta actuación había sido contraproducente, según la Junta, ya que en lugar de tranquilizar los ánimos, sólo los había convulsionado más. Debido a esto, los decanos y el Rector miraban con mucho pesimismo el inicio de las clases del segundo trimestre, y, para evitar nuevas movilizaciones, tomaron medidas muy duras. Entre ellas, se decretó que cualquier curso que iniciara una huelga activa y la mantuviera por 3 días consecutivos, sería suspendido hasta el período de exámenes.<sup>333</sup>

Ahora bien, el cierre de la universidad no contribuyó a disminuir la agitación. Los estudiantes se limitaron a trasladar sus movilizaciones desde los campus a las calles de Madrid. Sin embargo, no solamente se manifestaban los opositores al régimen, también lo hacían sus defensores. Así, el 17 de diciembre se produjo una manifestación en apoyo a Franco, que, según ABC, reunió a medio millón de personas en la Plaza de Oriente, con banderas y pancartas en contra del separatismo vasco, de la intervención extranjera, y en favor del régimen.<sup>334</sup> La intervención extranjera a la que se refiere ABC era la protesta de diversos países occidentales en contra de la petición de pena de muerte para los enjuiciados.

Finalmente, el 29 de diciembre se conoció la sentencia del Proceso de Burgos, que condenaba a pena de muerte a seis de los acusados. Apenas conocida la sentencia, la Coordinadora de Estudiantes de la Universidad de Madrid (creada *ad hoc* para las movilizaciones de fines de 1970) publicó un documento titulado “Los Estudiantes de la Universidad de Madrid al Pueblo de Madrid”, en el cual se hacía un llamado a los distintos sectores de la sociedad para presionar sobre el Régimen con el fin de evitar la muerte de los seis condenados.

“Nosotros, estudiantes que no hemos vivido la guerra civil, pensamos que hoy el pueblo, las fuerzas políticas y personalidades más influyentes, la Iglesia, el Ejército que debe reflexionar ante el abismo a que le conduce el Régimen, los hombres más conscientes de las Fuerzas Armadas, incluyendo la policía y la guardia civil, tienen capacidad para oponerse a la barbarie ultra que intenta hacerse con todos los resortes del poder”.<sup>335</sup>

---

<sup>332</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. 17 de Diciembre de 1970, p. 8. ACUCM.

<sup>333</sup> Ibid., p. 9.

<sup>334</sup> ABC, 18 de Diciembre de 1970, p. 1. BNE.

<sup>335</sup> “Los Estudiantes de la Universidad de Madrid al Pueblo de Madrid”, Coordinadora de Estudiantes de la Universidad de Madrid. 30 de Diciembre de 1970, p. 1. AHPCE.

La sentencia generó una ola de críticas fortísima, tanto a nivel nacional como internacional, lo que forzó al gobierno a decretar el indulto el día 30 de diciembre de 1970.

## **V. Las luchas del segundo cuatrimestre: Medicina, profesores encargados.**

En el momento de la sentencia y el posterior indulto la universidad se encontraba cerrada, pero el día 8 de enero de 1971 los estudiantes volvieron a clases bajo el estado de excepción impuesto en el mes de diciembre anterior. En este contexto, se encontraron con la exigencia de mostrar el carnet escolar a la entrada de los Centros, “para evitar la presencia de provocadores extraños”, según la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense.<sup>336</sup> Además, se prohibía la celebración de asambleas y de cualquier tipo de manifestación. En la sesión del 12 de enero, los decanos coincidieron en que lo que existía en la universidad era una calma aparente.

En esa misma sesión, el Director General de Enseñanza Superior e Investigación acusó veladamente a algunos decanos de “inhibiciones en el mantenimiento de la autoridad académica de consecuencias perniciosas para la Universidad”. En ese sentido, se negó rotundamente a retirar la policía del interior de las Facultades e informó de los contenidos del Decreto 3757/1970 que trataba de medidas de disciplina que debían ser aplicadas a los condenados por delitos.<sup>337</sup> Tres días más tarde, el 15 de enero de 1971, el Director General de Enseñanza Superior repetía sus argumentos en la Junta de Gobierno de la UAM.

En este contexto, los estudiantes denunciaron que la universidad estaba ocupada por la policía. Según un documento titulado “Hoja Informativa” (sin firma), con fecha de Febrero de 1971, en las Facultades de Ciencias, Filosofía, Economía, Derecho y Medicina de la UCM la policía mantenía “cuartelillos en el interior de los locales universitarios y por sus pasillos circulan patrullas de agentes uniformados”<sup>338</sup>. En cada Facultad había, al menos 6 o 7 agentes de la brigada Político Social, junto a una red de confidentes. Y por si eso fuera poco, “por el Paraninfo patrullan coches-manguera, jeeps y caballería. Dos helicópteros en misión de observación apoyan a las “fuerzas de

---

<sup>336</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. 4 de Enero de 1971, p. 4. ACUCM.

<sup>337</sup> Ibid., p. 9.

<sup>338</sup> *Hoja Informativa*, Febrero de 1971, Madrid, p. 1. AHPCE.

tierra”<sup>339</sup>. En este sentido el relanzamiento de la movilización en la universidad después de los agitados días del Proceso de Burgos fue bastante complejo.

La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense fue la primera en registrar cierta movilización. Los estudiantes de esa Facultad ya habían llevado a cabo una huelga durante el curso 1969-1970 en protesta por el cambio de Plan de Estudios, habían conseguido que el Ministro Villar se reuniera con sus representantes elegidos al margen de las Asociaciones de Estudiantes. También habían logrado que se creara una Comisión Mixta, “compuesta por representantes de los tres estamentos de la Universidad, aunque sólo con carácter democrático los estudiantes, y que se plantea la reforma de la enseñanza de la Medicina”,<sup>340</sup> en la cual se discutirían las reivindicaciones de los estudiantes.

Las movilizaciones en Medicina continuaron en el curso 70-71, y antes del cierre de la Universidad el 15 de diciembre de 1970, Medicina tenía a 2º, 4º y 5º curso en huelga. En enero, la Coordinadora de Representantes de la Facultad publicaba llamamientos y hojas informativas dando cuenta del problema existente. También se hacía una evaluación de las luchas de finales de 1970, en las cuales se destacaba el apoyo que los estudiantes recibieron de parte de los PNN y de algunos catedráticos, que solidarizaron por escrito con las reivindicaciones estudiantiles.<sup>341</sup> Según este documento, la Coordinadora había llevado a cabo grupos de trabajo e intentos de estrechar lazos con el resto de la Facultad y con el Distrito.<sup>342</sup>

En febrero, el conflicto en Medicina se agravó al enterarse los estudiantes de la existencia de Tribunales Examinadores que tenían por objetivo “supervisar los conocimientos de los alumnos de Selectivo, antes de entrar en la Facultad”.<sup>343</sup> Según la Coordinadora de Representantes de la Facultad, estos tribunales eran un cedazo para evitar el ingreso de demasiados estudiantes en el primer cuatrimestre.

La Facultad de Medicina era, a esta altura, la mejor organizada de la Universidad de Madrid, sin embargo, sus reivindicaciones eran principalmente académicas. En febrero de 1971 exigían la imposición de las asambleas, la supresión del Reglamento de

---

<sup>339</sup> *Hoja Informativa*, Febrero de 1971, Madrid, p. 1. AHPCE.

<sup>340</sup> Sin título, Organización Universitaria del PCE en la Facultad de Medicina, Junio de 1970, p. 1. AHPCE.

<sup>341</sup> Sin título, Medicina, primeros días de Febrero de 1971, p. 1. AHPCE.

<sup>342</sup> *Ibid.*

<sup>343</sup> “Compañeros”, Coordinadora de Representantes de la Facultad de Medicina. 9 de Febrero de 1971, p. 1. AHPCE.

Disciplina Académica, la expulsión de la policía de la universidad, la lucha contra el *numerus clausus*, la reestructuración de la enseñanza clínica y la participación de los estudiantes en la redacción de los Estatutos de la Facultad.<sup>344</sup>

El 25 de febrero, la Organización Universitaria del PCE en Medicina llamaba a los estudiantes a realizar una huelga indefinida, apoyando a la Coordinadora de Representantes de esa Facultad y exigiendo la eliminación de los tribunales extraordinarios y del impedimento de matricularse a quien no hubiese aprobado ninguna asignatura entre junio y septiembre. También exigían la liberación de todos los detenidos, el libre ingreso a la Facultad y la no imposición de ninguna forma de *numerus clausus*. Junto a esto, los estudiantes comunistas de Medicina hacían una pésima evaluación de la enseñanza recibida, señalando que “a cada promoción se le enseña peor y le hacen estudiar más que a la anterior y esto se completa con un sistema de exámenes tan irracional que han reducido la 1ª promoción de selectivo de 800 a los 120 actuales...”<sup>345</sup>

Otro de los problemas de la Facultad de Medicina era la dificultad para realizar la enseñanza clínica a partir de 5º cuatrimestre, debido a la falta de camas para llevar a cabo el curso práctico. En este sentido, los estudiantes comunistas señalaban que si en la UAM había 3.000 camas para 150 alumnos en período clínico, en la UCM apenas había 2.000 camas para igual número de alumnos.<sup>346</sup> Por lo tanto, también exigían una mejora en la estructuración del período clínico, la realización de las prácticas en rotatorios, con 5 camas por alumno como lo exigía la Organización Mundial de la Salud y el establecimiento del sistema de internados al terminar la carrera, otorgando a los estudiantes la seguridad de que contarían con plazas para ello.

Ahora bien, los estudiantes comunistas de la Facultad de Medicina intentaban ligar la lucha académica a la lucha en contra del régimen, llamando a la solidaridad con su causa y, a la vez, solidarizando con causas como la lucha contra los expedientes a estudiantes y profesores de otras Facultades. En este sentido, la Organización Universitaria del PCE en Medicina insistía en la creación de una organización

---

<sup>344</sup> “Compañeros”, Coordinadora de Representantes de la Facultad de Medicina. 9 de Febrero de 1971, p. 1. AHPCE.

<sup>345</sup> “Medicina”, Organización Universitaria del PCE en Medicina, 25 de Febrero de 1971, p. 2. AHPCE.

<sup>346</sup> Ibid.

estudiantil a nivel de distrito, para lo cual Medicina (y su Coordinadora) serían un buen ejemplo.<sup>347</sup>

Otro foco de movilización fueron los profesores encargados de curso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. El 14 de febrero de 1971, ABC informaba que dichos profesores se negaban a realizar sus funciones docentes hasta que las autoridades hubiesen acogido sus peticiones relacionadas con la inestabilidad de su situación laboral y con los bajos salarios que perciben. El paro continuó el día 15 de enero, y según ABC, “los afectados suman más de 200, lo que supone el 54,8 por 100 de los profesores de la Facultad de Filosofía, y según dicen, vienen planteando sus problemas desde hace diez meses a través de todos los cauces jerárquicos, sin que hasta la fecha les hayan dado una respuesta”.<sup>348</sup> Esta primera movilización de profesores encargados de curso fue un antecedente para el movimiento de PNN, que en los años siguientes se transformaría en una pieza clave dentro de la universidad.

Por su parte, el Ministerio de Educación señalaba que el paro de los encargados de curso era “un caso clarísimo de incumplimiento de contrato que supone lisa y llanamente motivo suficiente de rescisión del mismo, lo que ocurriría si no deponen inmediatamente su actitud”<sup>349</sup>. El día 17 de febrero, ABC informaba de un intento de agresión por parte de individuos desconocidos pero al parecer, ajenos a la Facultad, al profesor agregado de Historia Medieval, Julio Valdeón Baroque. La Junta de la Facultad (que celebró sesión extraordinaria debido a este acontecimiento), condenó la agresión, suspendió las clases del día 18 de febrero (no así los exámenes extraordinarios de febrero convocados para ese día), y acordó constituir una comisión de profesores que abriera una investigación de los hechos, para que la Facultad pudiera hacerse parte de la acusación de violencia ante los Tribunales de Justicia.

El 18 de febrero, la Junta de Gobierno de la Universidad señalaba, en relación con el paro de profesores adjuntos de la Facultad de Filosofía y Letras: “En tanto no depongan su actitud y se reintegren normalmente a sus actividades docentes, el Rectorado no continuará ninguna de las gestiones iniciadas ante la superioridad, destinadas a modificar el “status” actual de los profesores encargados de curso de la

---

<sup>347</sup> Ibid.

<sup>348</sup> ABC, 16 de Enero de 1971. BNE.

<sup>349</sup> Ibid.

Facultad de Filosofía y Letras”.<sup>350</sup> Los encargados de curso, por su parte, reclamaban no haber recibido respuesta a sus peticiones, y el Ministerio se defendía diciendo que la falta de configuración del profesor encargado en la LGE complicaba la resolución de sus problemas.

El 19 de febrero, según ABC, se reanudaron las clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, aunque persistía la inactividad de los profesores encargados de curso. Una comisión de este grupo se entrevistó con el decano para continuar las negociaciones, logrando un acuerdo de base, que consistía en que la Facultad adhería a la figura del profesor constituido, equipado y adjunto, para delimitar dicha figura de manera que no se lesionaran sus intereses. Finalmente, el día 22 de febrero de 1971 los encargados de curso de la Facultad de Filosofía y Letras reanudaron sus actividades, mientras una comisión de profesores encargados y una sección del profesorado de dicha Facultad, estudiaban las peticiones. El principal problema de este estamento docente era la inestabilidad en el empleo, por lo que exigían ser contratados por cuatro años y asimilados, académicamente, a la categoría de profesor adjunto.<sup>351</sup>

Ahora bien, apenas resuelto el problema de los encargados de curso, el 23 de febrero ABC consignaba incidentes en la Facultad de Filosofía y Letras, debido a la colocación de un cartel, lo que motivó la intervención de la Policía. El día 9 de marzo, también según ABC, el Rectorado de la UCM señalaba que aún no había recibido las propuestas de la Facultad de Filosofía y Letras en relación a las peticiones de los profesores encargados de curso. A la vez, un miembro de la Comisión Permanente de profesores encargados de curso señalaba que estos docentes están muy inquietos por la falta de respuestas de la autoridad académica a sus peticiones.<sup>352</sup> En suma, el conflicto estaba lejos de acabar.

El 12 de marzo, los profesores encargados de Filosofía y Letras hicieron un nuevo paro parcial, aduciendo que sus demandas no habían tenido respuesta de parte de la autoridad académica. Paralelamente, la Comisión Permanente de la Junta de Facultad presentó al Rectorado una propuesta para solucionar los problemas de los encargados de curso, sin lesionar los derechos de otros profesores no numerarios. Ese mismo día, la Policía desalojó dos asambleas, una realizada en la Facultad de Filosofía y Letras de la

---

<sup>350</sup> ABC, 19 de Febrero de 1971. BNE.

<sup>351</sup> ABC, 23 de Febrero de 1971. BNE.

<sup>352</sup> ABC, 9 de Marzo de 1971. BNE.



Ciudad Universitaria, y la otra en Psicología en Somosaguas, con resultado de dos estudiantes detenidos.<sup>353</sup> El 14 de marzo de 1971 continuaba el paro parcial de profesores encargados de curso en Filosofía y Letras.

En el mes de marzo se reactivó la agitación de los estudiantes, básicamente en dos frentes. Uno, en apoyo a las peticiones de los estudiantes de Medicina, y otro en apoyo a los profesores encargados de curso en Filosofía y Letras. En el número del 28 de marzo de *Vanguardia*, los estudiantes comunistas distinguían dos circunstancias que estaban afectando especialmente la situación en la universidad. La primera, referida a “la convocatoria de lucha general realizada por la Coordinadora de Representantes” y la segunda, “la huelga de los profesores encargados de curso en Filosofía”.<sup>354</sup> Respecto de la Coordinadora de Representantes mencionada, ésta era a nivel de Distrito pero no participaban todas las Facultades sino solamente aquellas que habían logrado elegir representantes. Respecto de la huelga de profesores, según *Vanguardia* era la manifestación de la voluntad general de lucha en la universidad, y además, el apoyo de los estudiantes a los profesores encargados serviría para concretar una plataforma común de movilización. “La huelga de profesores y la lucha contra la policía y las detenciones de los estudiantes prefiguran las coordenadas sobre las que se pueden asentar una auténtica ofensiva general contra la suspensión del artículo 18, contra el estado de excepción en que se encuentra el país en general y la Universidad en particular”.<sup>355</sup>

Con todo y pese a los intentos de relanzar la movilización de los estudiantes, ésta se mantuvo en un nivel más bajo que en años anteriores, básicamente debido a la represión de la que era objeto el movimiento estudiantil (*Vanguardia* consiga lo que ya era casi una costumbre: apaleamientos a estudiantes de Económicas, detención de dos estudiantes de Políticas, persecución y detención de 12 representantes estudiantiles, golpiza salvaje a un estudiante por un agente de la policía conocido con el apodo de “Billy el niño”, etc.)<sup>356</sup>

A partir de mediados del mes de abril, y con motivo del 40º aniversario de la II República hubo nuevos intentos por movilizar a los estudiantes. Los días 21 y 22 de abril se llevaron a cabo asambleas de más de mil alumnos en Medicina y Ciencias, el 26

---

<sup>353</sup> *ABC*, 13 de Marzo de 1971. BNE.

<sup>354</sup> *Vanguardia*, 28 de Marzo de 1971, p. 1. AHPCE.

<sup>355</sup> *Vanguardia*, 28 de Marzo de 1971, p. 1. AHPCE.

<sup>356</sup> *Ibid.*

se produjo una “batalla campal” entre los estudiantes de Económicas y la policía, también se realizaron concentraciones en Políticas, Derecho y Ciencias entre el 26 y el 29 de abril. El día 30, las Facultades fueron desalojadas a mediodía, y la Coordinadora de Representantes convocó a una manifestación por las calles de Madrid.<sup>357</sup> De esta manera, “luchando centro a centro y coordinadamente, arrancando desde los múltiples problemas que sacuden la Universidad, represión, planes de estudio, proyecto de Ley de Orden Público, Estatutos, etc., hemos ido levantando todos una importante movilización que ha hecho justicia al llamamiento que la Coordinadora suscribió con Comisiones Obreras y que ha puesto de manifiesto un ME con conciencia antifascista, enemigo de la dictadura, del terror reaccionario, de la anticultura que practica el régimen, y orientado hacia la libertad, la democracia y, en buena medida, hacia soluciones socialistas para España”.<sup>358</sup>

Sin embargo, y pese al tono optimista del texto anteriormente mencionado, el 23 de abril de 1971 la policía detuvo a varios miembros de la Organización Universitaria del PCE: “en doce días fueron detenidas catorce personas: casi todo el Comité de Estudiantes, los miembros del aparato de propaganda y los activistas más destacados”.<sup>359</sup>

La oleada de movilizaciones que se inició en abril tuvo su punto álgido el 1º de Mayo de 1971, cuando estudiantes y obreros se manifestaron por la Gran Vía de Madrid, pese a que continuaba vigente el estado de excepción. Según ABC, en su edición del 2 de mayo, grupos de jóvenes o “comandos” habían cortado el tránsito, brevemente, en distintos puntos de la capital, y habían lanzado “gritos y propaganda subversivos”.<sup>360</sup> Según *Mundo Obrero*, por primera vez la Coordinadora de Representantes de la Universidad de Madrid y las Comisiones Obreras hacían un llamado conjunto a manifestarse por las libertades políticas, por la reposición del artículo 18, por la expulsión de la policía de la universidad, las escuelas y los sindicatos, por la amnistía contra todo tipo de represión.<sup>361</sup>

Los propios estudiantes sacaban cuentas alegres de las manifestaciones del 1º de Mayo, consignando que habían reunido a 300 profesores y catedráticos en contra del estado de excepción, y a favor de la expulsión de “grises y sociales” de la universidad. Las acciones de abril y mayo en la Universidad de Madrid se saldaron con más de 40

---

<sup>357</sup> “Adelante compañeros”, Organización Universitaria del PCE, 3 de Mayo de 1971, p. 1. AHPCE.

<sup>358</sup> Ibid.

<sup>359</sup> E. GONZÁLEZ CALLEJA, *Rebelión en las aulas*, p. 344 (cfr. Rodríguez Tejada, 2007)

<sup>360</sup> ABC, 2 de Mayo de 1971, p. 1. BNE.

<sup>361</sup> *Mundo Obrero*, 15 de Mayo de 1971, p. 4. BNE.

estudiantes detenidos. Hacia mediados del mes de mayo, los estudiantes recibieron con disgusto la nueva Ley de Orden Público, según la cual se exigiría certificado de “buena conducta” para matricularse en la universidad. Esta medida era considerada un paso más en el intento del régimen por convertir a la universidad en un campo de concentración.

Como evaluación del periodo 1970-1971, los estudiantes comunistas señalaban que el curso había terminado con una serie de victorias para el movimiento estudiantil y “con un conjunto de perspectivas a desarrollar que representan otra victoria mayor aún”.<sup>362</sup> En el documento titulado Tareas pendientes y urgentes, destacaban la incorporación de algunos profesores a la lucha, la vinculación más estrecha con CC.OO., y con las huelgas de los trabajadores. También criticaban la imposibilidad para realizar actos culturales en la Universidad, y de forma muy enfática, la presencia de la policía en los centros, ya que eso significa “la supeditación de la vida universitaria al concepto de orden público que tiene el régimen, demostrando que no habrá normalidad, ni orden, ni paz mientras no exista libertad”.<sup>363</sup>

En este contexto, se volvía a insistir en la necesidad urgente de crear organismos que coordinaran la acción de los estudiantes y que permitieran ampliar la lucha a todos los centros universitarios de Madrid, y además, dar proyección ciudadana a las luchas universitarias, para lo cual era necesario aumentar las manifestaciones en la calle y tomar contacto con los distintos sectores de la oposición al franquismo.<sup>364</sup>

Luego del éxito de la campaña a favor del indulto a los condenados en el Proceso de Burgos, los estudiantes comunistas intentaron llevar adelante una plataforma unitaria de coordinación de todos los estudiantes del Distrito de Madrid. Durante el curso 69-70, y debido a la fuerte represión a la que fue sometido el movimiento estudiantil, las formas de organización se fueron desarticulando lo cual afectaba el accionar del ME. A partir de los últimos meses de 1970, y en el contexto de la lucha en contra del Proceso de Burgos, aparecieron los Comités de Curso (primero en Barcelona, luego en Madrid) y posteriormente las coordinadoras de Comités de Curso. Según Joseph M. Colomer, esta nueva forma de organización de los estudiantes surgió con el objetivo de coordinar las acciones, manifestaciones y discusiones en torno al Proceso. La novedad era que los Comités de Curso eran agrupaciones espontáneas, lideradas por

---

<sup>362</sup> “Tareas pendientes y urgentes”, Organización Universitaria del PCE, 25 de Mayo de 1971, p. 1. AHPCE.

<sup>363</sup> Ibid.

<sup>364</sup> “Por la Unidad Universitaria”, Organización Universitaria del PCE, 14 de Mayo de 1971, p. 1. AHPCE.

los estudiantes más activos de cada curso, y que van a lograr estructurar “toda una red de encuadramiento de centenares de estudiantes en todo el distrito que va a estar en la base de la nueva ‘generación’ del movimiento universitario”.<sup>365</sup>

Los Comités de Curso (CC) convocaban reuniones y asambleas semiclandestinas, en las cuales se discutía mucho sobre teoría revolucionaria y poco sobre los problemas del ME.<sup>366</sup> Esto ocurría porque dentro de los CC se enfrentaban las distintas corrientes ideológicas que componían el movimiento estudiantil, y se saboteaban unas a otras, con lo cual era muy difícil llegar a acuerdos. El más común de todos, por ser el más transversal, era siempre la exigencia de la retirada de la policía de la universidad.<sup>367</sup>

Los CC estaban abiertos a la participación de todos los estudiantes que estuvieran dispuestos a trabajar por el ME, y, aunque el número de participantes difería mucho de un centro a otro, la idea era incluir a la mayor cantidad posible de estudiantes. En un documento citado por Hernández Sandoica, Baldó y Ruiz Carnicer, sin firma y perteneciente a la colección privada de Antonia Fernández Valencia, se establece que los Comités de Curso no eran partidos políticos “ni una agrupación de éstos, por lo tanto, no posee[n] presupuestos o posturas previas, sino que va[n] concretando sus objetivos a partir de la lucha de todos los estudiantes, partiendo de los problemas cotidianos para profundizar en ellos y adoptar así tomas de postura de mayor alcance”.<sup>368</sup>

A principios de 1971 se produjo una nueva instancia de organización del ME, la primera Reunión General de Universidades, en la cual participaron algunos miembros de los CC de la Universidad de Madrid, y que se va a repetir en los cursos siguientes.

Ahora bien, el siempre espinoso asunto de la organización estudiantil – o más bien de la falta de ella – volvía a aparecer como un factor que dificultaba la continuidad y el éxito de la movilización. En abril de 1971, *Vanguardia* ponía como ejemplo de organización a la Facultad de Medicina, que llevaba cuatro meses en huelga y que seguía registrando altas tasas de participación, gracias a que “los estudiantes son los que realmente dirigen y controlan la lucha a través de sus representantes, esta carencia de organización a nivel de distrito ha arrojado las dificultades de la participación en

---

<sup>365</sup> Joseph M. COLOMER I CALSINA: *Els estudiants de Barcelona sota el franquisme*. Vol. II, Barcelona, Curial, 1978, Vol. II, p. 62.

<sup>366</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 304.

<sup>367</sup> Ibid.

<sup>368</sup> Ibid., p. 306.

Marzo”.<sup>369</sup> En este caso, la Coordinadora de Representantes de Medicina jugó un papel crucial en la huelga que mantuvieron los estudiantes de esa Facultad en el curso 70-71, y que hizo posible que el conflicto en esa facultad llegara a niveles muy altos en el curso siguiente.

A partir de la aplicación de la LGE, comenzó en las universidades la discusión respecto de los estatutos de cada institución, dentro de los cuales se debían fijar las formas de representación de los estudiantes. El artículo 85, parágrafo 2 de la Ley señalaba que “estatutariamente se fijará la competencia y composición de los órganos a que se refiere el párrafo anterior [Junta de Gobierno o Comisiones universitarias] y la participación en ellos de autoridades académicas, del alumnado y del personal administrativo y subalterno, en función de la naturaleza, eficacia y competencia del órgano correspondiente”.<sup>370</sup>

La elaboración de los Estatutos de Autonomía de las Facultades se transformó en una nueva instancia para exigir la participación de los estudiantes en los asuntos universitarios. La Coordinadora de Representantes de Medicina, a la altura de febrero de 1971, planteaba que los Estatutos eran una forma de imponer todos aquellos elementos de la LGE que eran rechazados por los estudiantes (*numerus clausus*, selectividad, etc.), por lo que deciden incorporar a sus exigencias la participación de los estudiantes en las instancias encargadas de elaborar los Estatutos.

Respecto de la representación estudiantil, es importante señalar que ésta no estaba prohibida, y que existían instancias para elegir a representantes estudiantiles controlados por la autoridad académica. Desde la disolución del SEU, el Ministerio había procurado encauzar y controlar la representación de los estudiantes, primero a través de las fracasadas Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APES), y luego a través de las Asociaciones de Estudiantes (AES). Sin embargo, los estudiantes más movilizados no participaban de las elecciones “legales” de representantes, y proponían formas alternativas de organización, las cuales no siempre daban buenos resultados.

La estrategia del PCE en la universidad seguía siendo la misma, generar plataformas unitarias que permitieran la coordinación entre los estudiantes. En este sentido, la Organización Universitaria del PCE promovía la creación de Coordinadoras de Curso y Facultad, e incluso de Distrito. Sin embargo, la aparición de estas instancias

---

<sup>369</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 11 de Abril de 1971, p. 5. AHPCE.

<sup>370</sup> Ley General de Educación 4/1970, BOE núm. 187, 6 de Agosto de 1970. [www.boe.es](http://www.boe.es).

era discontinua y sólo lograban articularse cuando se planteaba alguna lucha específica. Los grupos más radicales también generaban sus propias estructuras de organización, sin embargo, en la mayoría de las veces, eran muy pequeñas y carecían de continuidad. En el curso 1970-1971, el FRAP organizó un Comité Coordinador pro-FRAP, con el objetivo de “dar nuevos y decididos pasos hacia una coordinación más amplia de todos los sectores y organizaciones revolucionarias”<sup>371</sup>

Tal como explican los autores de *Estudiantes contra Franco*, la FUDE no sólo proponía una estrategia distinta a la del PCE, sino que también hacía una evaluación diferente de la situación española en general y universitaria en particular. Para los miembros de FUDE-FRAP, el franquismo gozaba de buena salud, y cuando se sentía amenazado, utilizaba todas las formas de represión que tenía al alcance, por lo tanto la estrategia del PCE de ir ocupando los vacíos de poder era, para ellos, una forma de contribuir con el régimen.<sup>372</sup>

Para concluir, los estudiantes de la Organización Universitaria del PCE de Madrid proponían un programa mínimo de lucha, que incluía la retirada de la policía, la retirada de los expedientes a profesores y estudiantes, la retirada de la exigencia de los certificados de buena conducta que preveía la Ley de Orden Público. Se proponían trabajar durante el verano para garantizar la continuidad del movimiento estudiantil durante las vacaciones. Sin embargo, y pese al tono optimista de los últimos documentos, el movimiento estudiantil, al terminar el curso 70-71 era un movimiento desgastado, con grandes dificultades para organizar plataformas amplias de coordinación, con quiebres entre distintas corrientes (especialmente entre comunistas y trotskistas), y con prácticamente todas sus luchas derrotadas.

## **VI. Balance de unos años dispares.**

Tal como señala Joseph M. Colomer, la campaña en contra del Proceso de Burgos supuso la reanudación del movimiento popular, dentro del cual se encontraba el ME, que asumió “un carácter directamente político, antifranquista y combativo”.<sup>373</sup> La movilización política que se generó a finales de 1970 y que demandaba la amnistía y el indulto de los encausados, también manifestó un creciente (y hasta entonces latente)

---

<sup>371</sup> *Periódico FUDE-FRAP*, Abril- Mayo de 1971, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>372</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 288.

<sup>373</sup> J.M. COLOMER i CALSINA: *Els estudiants de Barcelona*, p. 62.

sentimiento de descontento en contra del régimen de amplios sectores sociales. El gobierno respondió profundizando la represión y reinstalando el estado de excepción. Esta situación contribuyó a desgastar aún más al movimiento estudiantil, que todavía no se reponía del golpe que había supuesto para ellos el estado de excepción de 1969.

En palabras de Sidney Tarrow, los estados autoritarios siempre intentan desincentivar los movimientos sociales, pero la represión tiene consecuencias diversas. “El éxito de la represión puede producir una radicalización de la acción colectiva y una organización más eficaz de los oponentes al tiempo que los disidentes moderados abandonan la lucha y los más militantes ocupan una posición central”.<sup>374</sup>

Sin embargo, el desgaste en el movimiento estudiantil no se produjo solamente por la represión, sino que también, y quizás paradójicamente, por su participación en las luchas en contra del Proceso de Burgos. La buena recepción que tuvo la campaña por la amnistía dejó a la lucha de los estudiantes en segundo plano. Como señala Álvarez Cobelas, la represión y el estado de excepción obligó al movimiento estudiantil a replegarse, y cuando los partidos políticos se hicieron con el mando de la campaña ciudadana durante el Proceso de Burgos, muchos estudiantes decidieron ingresar al mundo de la política a nivel nacional.<sup>375</sup> En este sentido, el Proceso de Burgos fue un punto de inflexión para el movimiento estudiantil. Las movilizaciones generadas a raíz del Proceso dieron a entender que por fin los partidos habían logrado sus objetivos, tenían un motivo claramente político y extra universitario. Muchos estudiantes aceptaron ingresar en los partidos para institucionalizar sus demandas desde una plataforma política. Esta decisión significó una inevitable debilitación del movimiento estudiantil.

Para Hernández Sandoica, Baldó y Ruiz Carnicer, el Proceso de Burgos fue la primera ocasión en la que los estudiantes se movilaron por razones exclusivamente políticas.<sup>376</sup> Desde este episodio en adelante, las reivindicaciones estudiantiles fueron combinando cada vez más las demandas académicas con las demandas políticas. Y si bien, como veremos más adelante, las movilizaciones en la universidad se iniciaban por demandas académicas (en contra de la LGE, del decreto de Selectividad, etc.), rápidamente aparecían las demandas políticas ya que lograban aglutinar a los diferentes grupos políticos que existían en la universidad, en torno a temas transversales como la

---

<sup>374</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p. 127.

<sup>375</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 357.

<sup>376</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 296.

amnistía, la expulsión de la policía de los recintos universitarios y las libertades democráticas.

Si bien varios autores coinciden en que en 1970 comenzó una etapa de reflujo del movimiento estudiantil<sup>377</sup>, podemos ver que en esos mismos años se estaban gestando ciertas formas y luchas que tomarían fuerza a partir de 1973. La lucha en la Facultad de Medicina será un catalizador importante del ME en el curso 72-73, y la creación de los Comités de Curso y las Reuniones Generales de Universidades también servirán como impulsores de las nuevas movilizaciones en contra de la aplicación de la LGE y sus múltiples intentos de reformar la universidad. Se equivocaban quienes creían que el ME había entrado en fase terminal. La fuerza con la que resurgirán las movilizaciones en la universidad serán vitales para dar forma a los últimos años del franquismo.

---

<sup>377</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 357, E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 292.



## **CAPÍTULO 6**

### **1971-1972: EL CONFLICTO EN MEDICINA. LOS ESTUDIANTES DESPIERTAN DEL LETARGO**

Ciertamente, después del Proceso de Burgos se inició una etapa de reflujo en el Movimiento. Pero como comentábamos en el capítulo anterior que desde la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense vendría un nuevo impulso para el Movimiento Estudiantil. Desde 1970 se habían producido, al menos, dos paros de estudiantes de dicha Facultad, debido a la reforma del Plan de Estudios de Medicina, contemplado en la Ley General de Educación (LGE). El 20 de noviembre de 1971 comenzó un nuevo paro, el más prolongado, complejo y, probablemente, más exitoso para los estudiantes.

La situación de la Facultad de Medicina marca un nuevo hito en el desarrollo del ME español ya que supuso un relanzamiento de las movilizaciones colectivas en la universidad, luego de varios años de reflujo. Además, esta huelga consiguió la solidaridad de estudiantes de otras facultades, de profesores, de otros distritos universitarios y de sectores extra universitarios, como médicos, obreros y diversas agrupaciones profesionales. En este sentido, el conflicto de Medicina fue una oportunidad política inmejorable para que los estudiantes se organizaran y continuaran sus luchas en contra de la LGE y del régimen. Un elemento a destacar de este conflicto es que consolidó la relación entre los estudiantes y los Profesores No Numerarios, quienes se convirtieron en un apoyo fundamental para el ME

El ME logró ciertas victorias luego de las arduas luchas del curso 71-72, entre el levantamiento de la suspensión de matrícula a 4.000 estudiantes de Medicina, el boicot a los exámenes finales para forzar el levantamiento de expedientes, algunos cambios en la aplicación de la LGE, pero por sobre todo, consiguió llegar a la opinión pública y articular una solidaridad extra universitaria.

Con todo, la coyuntura del paro de Medicina (que duró desde noviembre de 1971 hasta finales de 1972) evidencia ya un cambio en el lenguaje político. Comienza a hablarse más de universidad democrática que de universidad popular, y de alguna forma, el PCE, empieza a dibujar lo que será su forma de acción en la universidad durante la transición a la democracia.

## **I. Para entender la Ley General de Educación.**

A grandes rasgos, la LGE (aprobada en agosto de 1970) establecía la obligatoriedad y gratuidad de la Educación General Básica, que duraba 8 años. Luego de eso, el alumno pasaba al Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o a la Formación Profesional (FP). El BUP duraba tres años. Durante el cuarto año el alumno debía realizar el Curso de Orientación Universitaria (COU) antes de acceder a la educación superior. En cuanto a la enseñanza universitaria, ésta se dividió en tres ciclos: un primer ciclo para el estudio de disciplinas básicas que duraba 3 años; un segundo ciclo de especialización, que duraba 2 años; y un tercer ciclo de especialización para investigación y docencia (la ley no establecía duración). Respecto de la Formación Profesional (FP) – quizá la innovación más importante de la LGE –, existían los estudios de primer, segundo y tercer grado. A los primeros se podía acceder luego de haber completado la Educación General Básica y sin haber realizado el BUP; a los segundos, se accedía habiendo realizado el BUP o habiendo terminado los estudios de FP de primer grado; a los terceros se accedía habiendo terminado el primer ciclo de enseñanza universitaria o el segundo grado de estudios de FP.<sup>378</sup>

Las principales críticas a la Ley de Educación decían relación con la discriminación y, especialmente, con la selectividad, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. Los estudiantes consideraban que al existir dos salidas a la EGB, la Formación Profesional y el BUP, se establecía una criba para el ingreso a la universidad. Además, al no ser gratuito, el Bachillerato suponía otra forma de discriminación, y, para peor, los sistemas de evaluación al final del BUP decidían si el alumno continuaba al COU o al segundo ciclo de FP. Por su parte, al finalizar el COU había que rendir otro examen para el ingreso a la Universidad, esto, “para adecuar el número de alumnos a la cifra oficial permitida en los primeros cursos de las carreras. Esto constituye el más descarado y brutal sistema de ‘*numerus clausus*’”.<sup>379</sup> En cuanto a la Formación Profesional, se la consideraba una manera de encaminar a los alumnos “desechados del ciclo normal de Enseñanza al engrosamiento de la mano de obra cualificada”.<sup>380</sup>

---

<sup>378</sup> Ley General de Educación 4/1970, BOE núm. 187, 6 de Agosto de 1970. [www.boe.es](http://www.boe.es). P. 12526 y ss.

<sup>379</sup> “Hacia la más amplia lucha por impedir la aplicación de la Ley de Educación”, Organización Universitaria del PCE, Marzo 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>380</sup> Ibid.

En este sentido, concordamos con los autores de *Estudiantes contra Franco*, cuando señalan que en cuestiones de educación, la izquierda consideraba que la igualdad de oportunidades iba de la mano con la “ausencia de criba para saltar de un nivel a otro en la enseñanza – en particular para acceder a la enseñanza superior – ”.<sup>381</sup> Así lo consideraba el PCE cuando señalaba que

“la enseñanza en la Universidad pretende la reducción drástica del número de estudiantes y la más drástica aún del de licenciados (creando un nuevo título que detendrá a los estudiantes a los 3 años de iniciados sus estudios). Está orientada, en suma, a sacar una nueva élite de la Universidad. Un número reducidísimo de titulados superiores, puesto al servicio del capital, y un número algo más amplio de titulados medios que pasarán a engrosar el ejército de parados y subempleados”.<sup>382</sup>

## **II. La movilización comienza en Medicina.**

Además de todo lo anteriormente comentado, la implantación de la LGE se combinó con la reforma de los planes de estudio de diversas Facultades. Y ésta fue la chispa que hizo saltar la llama en Medicina. El 28 de octubre de 1971 se publicó la aprobación del Plan Nuevo para la Facultad de Medicina, en donde se introducían cambios importantes respecto de los estudios y, especialmente, del internado rotatorio. Según el decreto, una vez aprobado el período clínico, los estudiantes de Medicina debían realizar el internado rotatorio en el Hospital Clínico u otros hospitales coordinados con la Facultad de Medicina de la Complutense, sin embargo, este internado se realizaría aún como estudiante y sin goce de sueldo. Después del internado, los estudiantes debían realizar un examen para conseguir el título de Licenciado en Medicina y Cirugía, el cual sería establecido por la Junta de Facultad. Y para terminar, para obtener la especialidad, los alumnos debían aprobar los cursos establecidos en las distintas escuelas y realizar prácticas por, al menos, dos años.

Cuando comenzó la huelga en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, los estudiantes publicaron un texto explicando la situación. Según dicho informe, “la huelga comenzó a raíz de la publicación en el BOE del 28-X-71 del decreto

---

<sup>381</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 317.

<sup>382</sup> “Hacia la más amplia lucha por impedir la aplicación de la Ley de Educación”, Organización Universitaria del PCE, Marzo 1972, p. 1-2. AHPCE.

regulador del plan de estudios del periodo clínico del Plan Nuevo”.<sup>383</sup> Dentro de los aspectos más relevantes del decreto se encuentran:

- 1.- La obligatoriedad para el plan nuevo de un año de internado rotatorio, realizado como alumnos (en los hospitales Clínico y Francisco Franco).
- 2.- La necesidad de realizar un examen para obtener el título de licenciado, después de realizar el año de internado rotatorio.
- 3.- La necesidad de aprobar cursos establecidos en las distintas escuelas, para conseguir el título de la especialidad. En cuanto a este punto, criticaban especialmente el peligro de anular la formación práctica de los especialistas, al reemplazar la residencia hospitalaria, por “cursillos teóricos y prácticos”.<sup>384</sup>

El 2 de diciembre de 1971, ABC informaba que el paro de estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid seguía en pie. Según el decano de esa Facultad, Jorge Tamarit, el problema estaba en la regulación del curso obligatorio y rotatorio de prácticas en el hospital, ya que los estudiantes querían realizarlo como titulados y con un contrato de trabajo. El decano también señaló al diario que el paro era completamente injustificado ya que una Comisión de la Facultad de Medicina se encontraba estudiando posibles soluciones.<sup>385</sup> Sin embargo, esa Comisión no era legítima para los estudiantes ya que no participaban en ella. Según el decano, esto se debía a que los estudiantes no se habían puesto de acuerdo para elegir representantes. Pero para los estudiantes, el problema era mucho más complejo.

La edición de *Informaciones* del 29 de noviembre también habla del paro en Medicina y señala que su causa es la disconformidad con varios aspectos relacionados con los nuevos planes de estudios. “Los puntos en los que los estudiantes basan sus reivindicaciones se refieren a la necesidad de que el curso rotatorio y obligatorio de prácticas en hospitales se haga con el título de licenciado y no como condición para la obtención de tal título. Asimismo, piden que este curso se haga con contrato y con remuneraciones académicas”.<sup>386</sup>

Los estudiantes de Medicina también criticaban fuertemente el Plan Nuevo debido a que en éste se contemplaban apenas 130 plazas para realizar el internado, lo cual era visto como una forma solapada de selectividad. Dicha selectividad era, según

---

<sup>383</sup> “Informe de la situación de huelga de los estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense”, Coordinadora de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid, Enero 1972, p 1. AHPCE.

<sup>384</sup> Ibid.

<sup>385</sup> ABC, 3 de Diciembre de 1971. BNE.

<sup>386</sup> *Informaciones*, 30 de noviembre de 1971. BNE.

los estudiantes, una forma de mantener “una estructura burocrática y unos intereses de grupos en contra de la concepción de la sanidad como FUNCIÓN SOCIAL”.<sup>387</sup> La selectividad contemplada en el Plan Nuevo no tenía ninguna relación con las necesidades sanitarias de España ni con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales eran de un médico por cada 400 habitantes, mientras que con el Plan Nuevo habría 1 médico por cada 808, según el Informe citado.

Ahora bien, siguiendo el ejemplo de años anteriores, los alumnos de Medicina se organizaron a través de la Coordinadora de Estudiantes de Medicina y canalizaron a través de ella, sus peticiones, sus informaciones a la opinión pública y, cuando llegó el momento, las negociaciones con la autoridad académica. En el Informe antes citado y firmado por la Coordinadora, las peticiones de los estudiantes se resumían en tres puntos. Primero, exigían la supresión de la selectividad debido a la necesidad de más médicos en España. Para hacerlo efectivo, pedían la supresión de los tribunales examinadores (la habían pedido también en febrero de 1971) “establecidos para evitar el paso de más de 200 de selectivo al segundo año, sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas durante el curso y refrendadas por los catedráticos de la facultad de Ciencias con lo que de hecho se admite el *numerus clausus*”.<sup>388</sup> Segundo, exigían que se suprimiera la selectividad en los cuatrimestres, poniendo como ejemplo que en el Plan Nuevo, de los mil alumnos que comenzaron en la primera promoción, a media carrera quedaban solamente 37. Tercero, exigían la obligatoriedad del año rotatorio, sin distinción de planes ni facultades,

“por ser imprescindible para la consecución de una experiencia práctica en cualquier plan de estudios, con título de licenciado obtenido al finalizar la enseñanza teórico-clínica, ya que para la eficacia del rotatorio es necesario realizar una práctica que sólo es posible hacer con título, con contrato de trabajo y remuneración adecuada, por estar realizando un trabajo como médico con un programa eminentemente práctico y común a todos los hospitales del país”.<sup>389</sup>

Junto con el planteamiento de sus exigencias, la Coordinadora también presentó algunas críticas generales a la sanidad española, como la falta de hospitales de carácter docente, la necesidad de construir nuevos hospitales y las formas de inversión de los superávits de la Seguridad Social.

---

<sup>387</sup> “Informe de la situación de huelga de los estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense”, Coordinadora de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid, Enero 1972, p 1. AHPCE.

<sup>388</sup> Ibid.

<sup>389</sup> Ibid.

La Coordinadora de los estudiantes de Medicina, consciente de que necesitaban demostrar su fuerza, empezó rápidamente a buscar aliados entre los Médicos Internos Residentes (MIR) de diversos hospitales. En este contexto, y como señala *Informaciones*, el 17 de diciembre de 1971, los médicos del Hospital Clínico de San Carlos de la Facultad de Medicina de la UCM (en adelante Hospital Clínico) se reunieron en una asamblea general – autorizada y presidida por el director de este hospital por ausencia del decano – y acordaron rechazar por unanimidad el decreto que generó la huelga. También acordaron pedir la creación de una Comisión paritaria, elegida democráticamente, que incluyera a profesores, médicos y estudiantes, y que tuviera como función reestructurar el decreto en cuestión. Finalmente, la asamblea general exigió el reconocimiento del estatuto médico del Hospital Clínico, y su participación en la redacción de los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid y en el Reglamento de la Facultad.<sup>390</sup> Vemos así que luego de casi un mes de paro, los estudiantes de Medicina habían logrado la solidaridad de un sector profesional extra universitario, que también se veía afectado por las políticas educativas del régimen.

Otro grupo al que se dirigieron los estudiantes para buscar solidaridad fue el de los profesores no numerarios de la Facultad, algunos catedráticos, médicos y personal auxiliar del Hospital Clínico. Sin lugar a dudas, los primeros que se solidarizaron con la Coordinadora fueron los estudiantes de Medicina de otras universidades españolas. Así, entre diciembre y enero (no tengo la fecha exacta) [no importa] se celebró la primera Coordinadora Nacional de estudiantes de Medicina, a la que asistieron representantes de las Universidades de Madrid, Barcelona, Oviedo, Santiago y Salamanca. En esta reunión se unificaron las reivindicaciones de las distintas facultades y se constató que hacia el final del primer trimestre, estaban en huelga o paro las facultades de Medicina de Madrid (Complutense y Autónoma), Barcelona (Central y Autónoma), Bilbao, Valladolid, Oviedo y La Laguna.<sup>391</sup>

Por su parte, la sección de Médicos Jóvenes del Colegio Oficial de Médicos de Madrid declaró el 23 de enero que consideraba que las peticiones básicas de los estudiantes de Medicina eran correctas. La supresión de la Selectividad en todos los cuatrimestres, y de los Tribunales de Selectivo, estaba justificada porque “condiciona un

---

<sup>390</sup> *Informaciones*, 27 de diciembre de 1971. BNE.

<sup>391</sup> “Informe de la situación de huelga de los estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense”, Coordinadora de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid, Enero 1972, p 1. AHPCE.

*numerus clausus*, cuando en España es necesario el doble de médicos de los que actualmente existen, la creación de un contrato de trabajo para el curso rotatorio, que es un punto básico doctrinal del Colegio de Médicos de Madrid, y el estudio de las especialidades médicas en Hospitales y no de las formas atomizadas actualmente disponibles”.<sup>392</sup> También exigieron que se levantaran las sanciones a los 4000 estudiantes, que se suprimiera el decreto sobre el nuevo plan de estudios, que se incluyera la participación representativa en la solución de los problemas universitarios y que se prestara urgente atención a los problemas sanitarios planteados.

Durante el mes de diciembre, el decano Tamarit convocó a una Junta de Clínicas, a la que asistieron dos portavoces de los estudiantes (uno del plan viejo y otro del nuevo), que tuvieron que enfrentarse a la postura inflexible de la mayoría de los catedráticos, con respecto a las peticiones de los alumnos. Pocos días después fue convocado un Claustro de Facultad, al que asistieron catedráticos, profesores y PNN. La Coordinadora de estudiantes envió a siete representantes de los distintos cursos, a los cuales se les prohibió entrar.<sup>393</sup> Al finalizar su informe, la Coordinadora señaló que los estudiantes estaban en una posición de fuerza, que habían mantenido una huelga de un mes y medio, apoyada por cuatro mil alumnos, por los MIR del Hospital Clínico y varios sectores más, señalando que el problema de Medicina ha dejado de ser solamente universitario y se ha transformado en un problema social.<sup>394</sup>

El 8 de enero, el rector de la UCM manifestaba su preocupación por la situación en la Facultad de Medicina, declarándose dispuesto a resolver los problemas, siempre que éstos cayeran dentro de ámbito universitario. También señaló que estaban en estudio todas las propuestas hechas por los alumnos de Medicina, pero que la petición de retribución solicitada para el último año de internado no era una cuestión universitaria, y que ello supondría a la Hacienda española un mínimo de 400 millones de pesetas anuales.<sup>395</sup>

El 10 de enero el decano se entrevistó con una comisión de 5 alumnos, sin que se lograra un acercamiento en las posiciones. Debido a la negativa de los estudiantes a deponer la huelga, el decano insistió en que la entrada a clases era un requisito previo de cualquier negociación, y anunció que si dentro de cuarenta y ocho horas (a contar del 10

---

<sup>392</sup> *Informaciones*, 24 de Enero de 1972. BNE.

<sup>393</sup> “Informe de la situación de huelga de los estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense”, Coordinadora de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid, Enero 1972, p 1. AHPCE.

<sup>394</sup> *Ibid.*

<sup>395</sup> *ABC*, 9 de Enero de 1971. BNE.

de enero) continuaba el paro, se aplicaría el Reglamento de Disciplina Académica. “Se recuerda a todos los alumnos de esta Facultad la vigencia del decreto de 5 de septiembre de 1958, en cuyo artículo 1º se establece: Las faltas colectivas y de desobediencia a la autoridad académica, de acuerdo con lo que dispone el decreto de 13 de enero de 1956, podrán ser sancionadas de oficio con pérdida de matrícula”.<sup>396</sup> Ese mismo día, un grupo de alumnos volcó el coche del decano de Medicina, lo que provocó el rechazo de parte de la Junta de Gobierno de la Universidad.

Con esta situación de creciente movilización de los estudiantes de Medicina, el día 13 de enero, el decano informó que “por orden del rector, en cumplimiento del artículo 1º del decreto de 5 de septiembre, advertido previamente, queda anulada la matrícula de los alumnos del plan moderno de los cursos segundo, tercero, cuarto y quinto, cuyas clases quedan interrumpidas hasta nueva orden”.<sup>397</sup> Esto significaba que más de cuatro mil alumnos perdían su matrícula. La nota – colocada en la puerta de entrada de la Facultad de Medicina – señalaba también que aquellos alumnos que consideraran no haber cometido una falta de disciplina podían presentar un pliego de descargo mediante una instancia dirigida al rector. Los impresos para realizar este trámite se facilitarían en la portería de la Facultad a partir del viernes 14 a las dos de la tarde, y el plazo para presentar esta instancia era el lunes 17 de enero antes de las dos de la tarde.

### **III. Solidaridad con Medicina: se levanta el ME.**

Lejos de calmar los ánimos, la pérdida de matrícula supuso un revulsivo para los estudiantes de Medicina. El 14 de enero se sucedieron diversos los incidentes en la Facultad y la policía desalojó con violencia varias concentraciones de estudiantes en la Ciudad Universitaria. Paralelamente, un grupo de estudiantes intentó realizar un encierro en el Hospital Clínico, aunque sin éxito. Por su parte, cerca de trescientos médicos se reunieron en asamblea en dicho hospital, en la que discutieron la sanción colectiva a los estudiantes. Como resultado de estos incidentes, dos estudiantes resultaron detenidos.

El día en que vencía el plazo para presentar los pliegos de descargo, un grupo de alumnos de Medicina envió una carta al periódico *Informaciones*, señalando que

---

<sup>396</sup> *Informaciones*, 11 de Enero de 1972. BNE.

<sup>397</sup> *Informaciones*, 13 de Enero de 1972. BNE.



“las causas inmediatas que nos llevaron a este estado de cosas más o menos conocidas son, entre otras cosas: la selectividad, el año rotatorio propuesto en el nuevo plan, el mismo plan nuevo, etc. Creemos que todo lo anterior tiene su origen en la falta de unión entre profesores y alumnos, con la consiguiente carencia de información mutua. Así, a la hora de llevar a cabo una tarea que afecta a todos por igual, como la elaboración del plan nuevo o de los Estatutos, surgen enfrentamientos que sólo se explican por la ausencia de un espíritu de colaboración y participación en fines comunes”.<sup>398</sup>

Por su parte, el gabinete de prensa de la UCM envió una nota a los medios de comunicación señalando que en las instancias de estudio del nuevo plan para Medicina se solicitó la colaboración de los alumnos, pero

“no fue aceptada por éstos y plantearon un nuevo problema con su decisión de paro. Se intentó mantener el diálogo con los estudiantes sin adoptar las autoridades académicas una posición de intransigencia, autorizando las reuniones informativas solicitadas por los alumnos y advirtiéndoles repetidamente de los perjuicios que supone un paro académico en un plan de estudios organizado en cuatrimestres, por la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido en el desarrollo del programa docente en el plazo previsto”.<sup>399</sup>

El 17 de enero – día en que finalizaba el plazo para presentar los pliegos de descargo – se produjeron diversos incidentes en la Ciudad Universitaria, por lo que la policía entró en el campus varias veces. Incluso, se produjo un enfrentamiento entre la policía y varios cientos de estudiantes concentrados fuera de la Facultad de Medicina, y estudiantes de otras facultades se sumaron a las movilizaciones en solidaridad con sus compañeros de Medicina. En otros lugares de Madrid también se produjeron incidentes. Según ABC: “En la calle Fernández de los Ríos, próxima a la glorieta de Quevedo, unos 250 jóvenes, puño en alto, profirieron gritos subversivos y arremetieron contra un grupo de policías armados, quienes para no verse arrollados, hubieron de disparar sus armas al aire”.<sup>400</sup> Según *Informaciones*, los incidentes de este día fueron los más graves en lo que iba del curso académico, y se saldaron con cincuenta detenidos y más de cincuenta heridos.

El 17 de enero apareció un panfleto titulado “Viva la huelga general de la Universidad”, firmado por Estudiantes de la Universidad de Madrid, en el cual se establecía que los estudiantes de las tres Universidades de Madrid se encontraban en

---

<sup>398</sup> *Informaciones*, 17 de Enero de 1972. BNE.

<sup>399</sup> Ibid.

<sup>400</sup> ABC, 18 de Enero de 1972. BNE.

huelga general para exigir la anulación de las sanciones y la dimisión del decano Tamarit y del rector Botella.

Lo que distingue a estos incidentes con los anteriores es que tanto estudiantes de la UCM como de la UAM y de la Universidad Politécnica de Madrid decidieron realizar paros y manifestarse en solidaridad con los estudiantes de Medicina.

“Mientras se espera que la situación universitaria disminuya en su tensión y tienda hacia una paulatina normalización, el problema de la Facultad de Medicina – que en definitiva ha motivado los incidentes y el malestar de estos días desde que comenzó el segundo trimestre – continúa todavía en vía muerta, sin soluciones concretas por parte de las autoridades académicas y sin aceptación de las débiles propuestas efectuadas a los estudiantes”.<sup>401</sup>

Además, el mismo 17, se reunió el comité técnico del Hospital Clínico (perteneciente a la Facultad de Medicina) y se acordó una “asistencia ininterrumpida, con reclusión en sus respectivos servicios”<sup>402</sup> a partir de las 9 de la mañana del día 18. También acordaron enviar notas de protesta al rector de la UCM y al director del hospital, en solidaridad con los estudiantes y en protesta por no haber autorizado una asamblea de médicos. Los médicos residentes e internos (MIR) de la Clínica La Concepción también realizaron un encierro voluntario, en apoyo a las demandas de los estudiantes. Por su parte, el cuerpo facultativo del Hospital Psiquiátrico de Leganés, en un escrito público manifestó su desacuerdo con el nuevo plan de estudios de Medicina y con la forma en que las autoridades académicas habían llevado el conflicto. Exigían la retirada de la policía de la Universidad y del Hospital Clínico.

El conflicto de la Facultad de Medicina se destaca porque luego de un curso académico casi sin movilizaciones (70-71), logró movilizar no sólo a los estudiantes de Medicina sino también a estudiantes de otras facultades y universidades, y a parte del mundo profesional. Desde que se conocieron las sanciones a los estudiantes, hubo manifestaciones y paros en diversas partes de Madrid (Glorieta de Quevedo, Lavapiés – donde se encuentra la Escuela de Ingeniería Técnica –, Cantoblanco (campus de la UAM), la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, etc.

Según ABC, el día 18 de enero se habían presentado más de dos mil solicitudes de condonación de la pérdida de matrícula.<sup>403</sup> Ese día se reunió la Junta de Gobierno de la UCM en sesión extraordinaria para tratar el conflicto en Medicina, y a la salida, el

---

<sup>401</sup> *Informaciones*, 18 de Enero de 1972. BNE.

<sup>402</sup> *Ibid.*

<sup>403</sup> *ABC*, 18 de Enero de 1972. BNE.

rector José Botella Lluisa señaló que todas las reivindicaciones de los estudiantes eran negociables, excepto la retribución del año rotatorio de séptimo de Medicina. Ese día se registraron nuevos incidentes en la Ciudad Universitaria: los estudiantes de Derecho y Filosofía y Letras desalojaron voluntariamente sus aulas y se encaminaron hacia la Facultad de Medicina, donde intentaron concentrarse. La policía intervino y disolvió la concentración, aunque algunos grupos lograron cortar el tráfico en la carretera de La Coruña y en las avenidas de la Ciudad Universitaria. Según *Informaciones*, “la actividad académica fue prácticamente nula en las tres Universidades de Madrid”.<sup>404</sup> El 20 de enero continuaba la anormalidad académica, con concentraciones y asambleas en varios centros. La facultad de Filosofía y Letras realizó una asamblea donde se decidió mantener una huelga en apoyo de los estudiantes de Medicina sancionados, sin embargo, la policía disolvió la reunión y se produjeron algunos enfrentamientos. También se celebraron asambleas en la Facultad de Políticas y en la Escuela de Caminos.

Según consta en el acta de sesión de la Junta de Gobierno de la UCM del 18 de enero, la anormalidad académica era la tónica en la Complutense. Desde Medicina a Filosofía y Letras se producían diariamente enfrentamientos con la policía (el decano de Políticas ya había manifestado en la sesión del 4 de enero de 1972, que la presencia de la policía en los edificios de su Facultad era contraproducente ya que generaba conflictos inevitables). Para remediar esta situación, el rector Botella comunicó a los decanos que en caso de que aumentara la escalada de disturbios “pueden solicitar del Rectorado el cierre de la Facultad respectiva, indicando al mismo tiempo que el Ministerio ha acordado que las sanciones disciplinarias de apliquen por la Inspección Central”.<sup>405</sup>

El 24 de enero se reunieron en Madrid el Ministro de Educación y el rector de la Universidad Complutense, para discutir la situación de la Facultad de Medicina. No deja de ser interesante que, según la nota del Ministerio que publica ABC ese día, la urgencia por resolver la situación sea

“a fin de resolver con máxima urgencia aquellos aspectos académicos y extraacadémicos que han venido siendo explotados por ciertos grupos con intereses inconfesables, para que, independientemente de otras medidas que fuera oportuno tomar, se logren a la mayor brevedad para la Facultad de

---

<sup>404</sup> *Informaciones*, 19 de Enero de 1972. BNE.

<sup>405</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. 18 de Enero de 1972, p. 3. ACUCM.

Medicina de esa Universidad Complutense los objetivos que desde los días de estudio y preparación de la reforma educativa han servido de guía en la reorganización de los estudios y reorganización de las Facultades de Medicina de la Universidad española en general”.<sup>406</sup>

El ministro también se reunió con una comisión de 15 estudiantes, aunque según *Informaciones*, eran los elegidos en las elecciones del pasado mes de octubre (en las cuales hubo un alto porcentaje de abstención) y algunos presidentes de APES (según ABC), quienes entregaron al ministro un documento con sugerencias para solucionar el conflicto.

En medio de este ambiente de negociaciones, las actividades académicas continuaban siendo muy escasas en las tres Universidades de Madrid, y continuaban también las asambleas y los desalojos por parte de la policía. Por su parte, los PNN de la Facultad de Medicina decidieron no impartir clases hasta que no se hubieran incorporado todos los alumnos a las clases, hubieran o no presentado los pliegos de descargo.

Finalmente, el 25 de enero, el Rectorado de la UCM levantó las sanciones académicas a los estudiantes de Medicina y publicó la siguiente nota:

“Ante el gran número de instancias que se han presentado y se siguen presentado todavía en justificación de la no asistencia a clase por parte de los alumnos de Medicina de esta universidad, este Rectorado estima que ha quedado suficientemente patente el deseo de reanudar el curso por la gran mayoría de los alumnos y que sólo la coacción ha mantenido la huelga. Considera, por tanto, que no debe prolongarse la suspensión de las clases y en consecuencia autoriza la continuación del curso lectivo en disfrute de la matrícula ordinaria”.<sup>407</sup>

Pese al levantamiento de la suspensión de matrícula, los estudiantes no volvieron a clases. En la sesión de la Junta de Gobierno de la UAM del 25 de enero, se discutió ampliamente cómo lograr poner fin a la huelga de estudiantes en Cantoblanco. Las sanciones colectivas se descartaron por ser “de eficacia dudosa cuando la aplicación de una sanción de este tipo ha sido la determinante de un conflicto en todas las Universidades de Madrid”.<sup>408</sup> Además, los decanos consideraron que imponer sanciones podría convertir a la UAM en un nuevo foco de conflicto, lo cual exigiría la intervención de la policía, con lo que la situación se podría tornar violenta. Finalmente

---

<sup>406</sup> ABC, 24 de Enero de 1972. BNE.

<sup>407</sup> ABC, 26 de Enero de 1972. BNE.

<sup>408</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 25 de Enero 72, p. 2. ACUAM.

decidieron suspender las actividades docentes, cerrando las facultades y además, suspendiendo el servicio de autobuses a la universidad, “ya que privaría a los activistas de su campo de operaciones e induciría en todos el posible temor de una pérdida de curso si no se reanudan las enseñanzas”.<sup>409</sup>

En vista de que la huelga continuó en diversos centros de las tres Universidades de Madrid, la represión siguió cayendo con fuerza sobre los estudiantes. Según la Organización Universitaria del PCE, durante el mes de enero se llevaron a cabo casi 600 detenciones, se retiraron más de mil carnet de identidad, se impusieron multas y encarcelamiento a decenas de estudiantes y se extendió la ocupación de la policía de la Universidad a los Institutos que solidarizaron con la huelga.<sup>410</sup>

La compleja situación que vivía la universidad española, y especialmente la madrileña, provocó diversos debates respecto de cómo enfrentar este problema. Así, el 27 de enero de 1972 ABC publicaba un editorial titulado “El orden en la Universidad”, en el cual se afirmaba que los principales problemas de la universidad española eran las políticas educativas y no en las de orden público. “Cada día es más urgente una política universitaria que devuelva a las aulas su normalidad, su orden; que imponga de nuevo, en ellas, un adecuado principio de autoridad”.<sup>411</sup> En este contexto, ABC publicó el día 10 de marzo un artículo de Gabriel Del Estal (OSA), en el cual arremetía duramente contra el fuero universitario, considerándolo una causa del problema de la universidad española. “La supresión del fuero universitario significa vigencia y aplicación de la misma ley de orden público para todos los ciudadanos por igual, sin discriminación institucionalizada entre destemple subversivo de estudiantes y cualquier otro estrato social menos agasajado por el poder”.<sup>412</sup>

Frente a esta opción, desde *Cuadernos para el Diálogo* se abogaba por otro tipo de soluciones.

“Frente a ellos [los problemas de la Universidad] sólo se ha seguido el método represivo, cuya última medida fue la incorporación permanente de la policía en los edificios universitarios. Las medidas reformadoras que pudieran existir en la Ley de Educación se aplican en un sustrato alterado, con un personal escéptico y desilusionado, y un elemento estudiantil radicalizado, al menos en parte, y que no encuentra ninguna actitud en la Administración que pudiera

---

<sup>409</sup> Ibid.

<sup>410</sup> “Esto no es más que el principio”, Organización Universitaria del PCE, 2 de Febrero de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>411</sup> ABC, 27 de enero de 1972. BNE.

<sup>412</sup> ABC, 10 de marzo de 1972. BNE.

concebir la idea de una evolución y adecuación al nivel social y político de los países democráticos”.<sup>413</sup>

El 2 de febrero, ABC informaba que la situación académica de las universidades madrileñas se había normalizado y que “incluso en la Facultad de Medicina de la Complutense, centro y origen de los pasados conflictos, han reanudado las clases alumnos de algunos cursos, mientras que otros procederán a la elección de sus representantes en la Comisión del Plan de Estudios que ha de resolver los problemas planteados por los estudiantes en este campo”.<sup>414</sup> Sin embargo, ese mismo día, *Informaciones* aseguraba que los estudiantes de Medicina de primero, segundo, tercero y cuatro cursos, rechazaron la invitación del Decano a reanudar las clases y la convocatoria a elecciones de representantes para formar parte de la Comisión para el Plan de Estudios, hasta que no fueran atendidas sus peticiones (a saber, que el curso rotatorio se hiciera con el título de licenciado, luego del sexto curso, que fuera con contrato y remuneración, que se suprimiera la selectividad de los cuatrimestres, así como los Tribunales de selectividad, la reforma total del plan de estudios y que las especialidades se hicieran en hospitales y no en escuelas).<sup>415</sup> También exigieron la libertad para los estudiantes detenidos en los incidentes previos.

El día 5, se llevó a cabo una reunión entre el decano de Medicina y veinticinco representantes estudiantiles, para estudiar posibles soluciones al conflicto. Los estudiantes exigieron el levantamiento de las sanciones académicas y extraacadémicas, (incluida la puesta en libertad de los ocho estudiantes de Medicina que se encontraban detenidos y la retirada de los expedientes a cuatro estudiantes procesados), la eliminación del sistema de selectividad de los cuatrimestres, el internado rotatorio obligatorio y remunerado con el título de licenciado, y la exigencia de que la Comisión de Estudios no se reuniera si antes y después, los estudiantes no podían celebrar reuniones y asambleas autorizadas.<sup>416</sup> El día 8 de febrero se produjeron nuevos incidentes en la Facultad de Medicina, cuando la policía intentó desalojar una concentración de estudiantes.

---

<sup>413</sup> “Universidad: la rigidez de un sistema”, *Cuadernos para el diálogo*, Febrero de 1972, num. 101, p. 4. BNE.

<sup>414</sup> ABC, 2 de Febrero de 1972. BNE.

<sup>415</sup> *Informaciones*, 2 de febrero de 1972. BNE.

<sup>416</sup> ABC, 5 de febrero de 1972. BNE

#### IV. Jornadas de lucha y nuevos intentos de organización.

El conflicto de Medicina supuso un claro desafío al régimen (tanto a las autoridades académicas como a las gubernamentales), que respondió solamente con represión y sanciones. Además, este conflicto logró poner nuevamente el tema de “los problemas de la Universidad” en la palestra, y dio pie para que el ME intentara nuevas formas de organización. En este sentido, el 30 de enero de 1972 se realizó la Primera Reunión General de Universidades<sup>417</sup>, de la cual resultó una convocatoria para hacer del 14 de febrero un día de lucha en contra de la LGE.

Ese mismo día, el ministro de Educación debía concurrir a las Cortes para informar sobre la aplicación de la Ley, a un año de su entrada en vigor. Ante las Cortes, el ministro Villar señaló que el programa de aplicación se estaba cumplido rigurosamente, y que la crítica situación de la universidad (“tanto en España como en el mundo”), se debía a muchos factores, algunos de carácter político y otros “debido a la cobardía de la sociedad, que no ejerce la autoridad que le compete”.<sup>418</sup>

El 14 de febrero se caracterizó por la anormalidad académica en varias ciudades españolas. “El paro y los ligeros incidentes registrados se extendieron de la vida universitaria a los últimos cursos de bachillerato y COU”<sup>419</sup>, lo cual era una novedad en España. Ese día no hubo clases en la Complutense, y la asistencia fue muy baja en la Autónoma y la Politécnica. La Coordinadora Amplia de las tres Universidades de Madrid hacía un positivo balance de la jornada de lucha del 14 de febrero, en la que habrían participado 150.000 universitarios y estudiantes de Enseñanza Media en toda España. Además, en solidaridad con los estudiantes, varias empresas del país también realizaron paros y manifestaciones, así como profesores de enseñanza media y universitaria, médicos y enfermeras, etc. “El día 14 ante la presentación a las Cortes de su gestión, Villar debe soportar desde su “sitio” parlamentario la magna jornada de lucha de todas las Universidades de España y otros centros de Enseñanza pidiendo su dimisión”.<sup>420</sup>

Pese a que la intensidad del conflicto fue bajando en la Facultad de Medicina, el 28 de febrero el decano se reunió con cerca de trescientos estudiantes, quienes

---

<sup>417</sup> Según cronología establecida en la Revista *Materiales*, 2 (Marzo-Abril 1977), Barcelona, p. 66. BNE.

<sup>418</sup> *ABC*, 15 de Febrero de 1972. BNE.

<sup>419</sup> *Informaciones*, 15 de Febrero de 1972. BNE.

<sup>420</sup> “Hacia la huelga general”, Coordinadora Amplia de las tres Universidades de Madrid, 18 de Febrero de 1972, p. 1. AHPCE.

rechazaron la invitación de reintegrarse a clase, y votaron por “mantenerse en el punto muerto actual, debido a las cuatro peticiones reiteradamente repetidas: no selectividad, internados rotatorios como médicos, libertad para los alumnos detenidos, actualmente cinco, y para celebrar asambleas”.<sup>421</sup>

Ese mismo día se celebró la segunda Reunión General de Universidades, a la cual asistieron representantes de 16 centros de toda España, así como algunos de Enseñanza Media y Escuelas Técnicas. De esta reunión resultó una convocatoria para realizar una Huelga General de Universidades el 8 de marzo, con el objetivo de paralizar la enseñanza en España. “Esto representará una gran batalla contra la LGE y una crisis social y política del régimen, y [ayudará a] atraer a otras fuerzas y sectores contra la actual política educativa y contribuir al desarrollo y profundización del ME”.<sup>422</sup> En este sentido, lo que proponían los representantes de la 2ª RGU era lanzar la Huelga General de las Universidades que llevara a la paralización de la Enseñanza, para lo cual propusieron la creación de un Comité General de Huelga, que coordinara a los distintos centros. La 3ª RGU se celebró el 8 de abril, pero tuvo mucha menor convocatoria que las dos anteriores. Los problemas de selección de delegados, de toma de decisiones de forma poco representativa, y la falta de participación de la masa estudiantil frenó la posibilidad de crear una organización unitaria, de masas y democrática. En este sentido, las RGU fueron perdiendo “continuidad y eficacia durante algún tiempo, hasta su revitalización por los delegados en 1974”.<sup>423</sup>

En forma paralela a las RGU, existían también otras organizaciones, como la Coordinadora Amplia de las tres Universidades de Madrid o las de distintas facultades, que seguían el ejemplo de la Coordinadora de la Facultad de Medicina. Estas instancias tampoco consiguieron estabilidad en el tiempo, aunque la Coordinadora Amplia de las tres Universidades de Madrid (con una mayoritaria participación de militantes comunistas) fue fundamental para la convocatoria de la segunda RGU y el llamado a la Huelga General de la Enseñanza. Según su análisis, dicha Coordinadora consideraba, a la altura de febrero de 1972, que el ME había alcanzado la madurez necesaria para

---

<sup>421</sup> *Informaciones*, 28 de Febrero de 1972. BNE.

<sup>422</sup> “Comunicado de la 2ª RGU”, 28 de Febrero de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>423</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 163.



vencer, tal como se había hecho en Medicina. “Medicina ha sido la primera batalla en la lucha contra la LGE. Hoy podemos y debemos paralizar su aplicación”.<sup>424</sup>

Como siempre, el PCE abogaba por la creación de una organización democrática de los estudiantes universitarios, basada en asambleas y órganos representativos, que rindiera cuentas a los estudiantes y que fuera controlada por ellos.<sup>425</sup> En la edición de enero de 1972 de su periódico *Vanguardia*, la Organización Universitaria del PCE proponía la celebración de una Asamblea Constituyente del distrito de Madrid, “que fije (...) los principios básicos y las formas que debe adoptar una organización de masas unitaria, representativa y democrática”. Criticaban también los comunistas a aquellos grupos clandestinos, que mantenían en “despachos y catacumbas [a] unos pocos ‘elegidos’ y no precisamente por los estudiantes”<sup>426</sup>, por considerar que esa postura solamente debilitaba los principios democráticos y diluía la organización de masas.

Pese al entusiasmo, la Asamblea Constituyente no se llevó a cabo. En su lugar surgieron las Reuniones Generales de Universidades (aunque ya se había convocado una en 1971, estas instancias no habían tenido continuidad), en donde se juntaban los representantes de las diversas facultades de las universidades españolas. El problema era que no todas las facultades habían elegido delegados, por lo que el tema de la representatividad en las RGU era cuestionable. Además, muchas facultades mandaban solamente observadores, lo que dificultaba la cohesión en los procesos de toma de decisiones.

Por su parte los estudiantes de la FUDE<sup>427</sup>, desde su periódico *Democracia Popular*, también se cuadraban con la lucha en contra de la LGE pero, como siempre, disientían de los comunistas respecto de la organización. Pese a que también se definían como partidarios de una organización representativa que uniera a los estudiantes y que pudiera unirse con todo el pueblo, consideraban que dicha organización debía ser clandestina.

“El aparato represivo que el Estado utiliza para tratar de impedir las luchas populares tiene uno de sus más importantes objetivos en desbaratar y

---

<sup>424</sup> “Hacia la huelga general”, Coordinadora Amplia de las tres Universidades de Madrid, 18 de Febrero de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>425</sup> “Esto no es más que el principio”, Organización Universitaria del PCE. 2 de Febrero de 1972, p. 2. AHPCE.

<sup>426</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Enero de 1972, p. 2. AHPCE.

<sup>427</sup> Organización cooptada por miembros del FRAP, heredero del PCE (m-l), que aún no se constituía formalmente pero que sí actuaba en la Universidad, aunque no tenía demasiados seguidores debido a la radicalidad de sus posturas.

destruir las organizaciones populares, para lo que se vale de todo tipo de medios, desde los salvajes interrogatorios – paliza cuando alguien cae en sus manos, hasta sus constantes intentos por introducir sus agentes en nuestras organizaciones, pasando por la permanente vigilancia, seguimientos, detenciones... Esto nos lleva a tomar medidas organizativas que nos lleven a ser lo menos vulnerables posible frente a la policía: LA CLANDESTINIDAD EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO ES UNA DE LAS BASES PARA ALCANZAR LA EFICACIA REVOLUCIONARIA PARA LA CONTINUIDAD DE LA LUCHA ANTIFASCISTA Y PATRIOTA”.<sup>428</sup>

Además, los estudiantes de la FUDE disentían en cuanto al funcionamiento democrático de la organización. Según ellos, no bastaba con la elección directa de los representantes, sino que también era “imprescindible que se transmitieran todas las informaciones, opiniones y sugerencias de cada miembro de la organización, para que una vez sintetizadas y depuradas, se reflejen en nuestra política general”.<sup>429</sup>

Otras voces se levantaban también, haciendo ver la necesidad de una organización unitaria de estudiantes. Los Comités de Lucha “Universidad Popular”, a través de su periódico *Lucha Estudiantil*, hacían un completo diagnóstico de los problemas de coordinación del ME. Consideraban que ya en el curso 68-69, el movimiento había comenzado un proceso de atomización en la lucha en contra del régimen, que había acabado por diluir su fuerza. Sin embargo, a la altura del curso 71-72, el ME de Madrid había demostrado un nuevo estado de madurez al rechazar de plano las elecciones oficiales, al llevar a cabo “violentos y masivos enfrentamientos directos con los agentes del fascismo”, y al plantear la lucha en contra de la LGE.<sup>430</sup> Sin embargo, “la inexistencia de una organización que coordinara estos combates, que abriera nuevas perspectivas, que marcara una dirección REVOLUCIONARIA, ha restado mucha eficacia a nuestra lucha”.<sup>431</sup>

En este mismo sentido, *Lucha Estudiantil* consideraba urgente la creación de una dirección unificada que diera mayor auge al ME y se alejara de “posturas reformistas, propuestas de forma de lucha confusas, caminos falsos que buscan más los resultados brillantes a corto plazo que el fortalecimiento del movimiento (como las huelgas “gigantes” pero desmovilizadoras) o bien posturas “vanguardistas” separadas de los

---

<sup>428</sup> *Democracia Popular*, Periódico de la FUDE, Abril de 1972, p. 3. F. Pablo Iglesias.

<sup>429</sup> Ibid.

<sup>430</sup> *Lucha Estudiantil*, Portavoz de los Comités de Lucha Universidad Popular, Enero de 1972, p. 2. F. Pablo Iglesias.

<sup>431</sup> Ibid., p. 3.

problemas del movimiento”<sup>432</sup>. También insistían en la importancia de la clandestinidad para protegerse de la represión.

Quizá lo más interesante que planteaba *Lucha Estudiantil*, era el rechazo de la elección de representantes como organización de los estudiantes. Consideraba necesario elegir representantes para llevar adelante las negociaciones con el régimen (cuando se produjeran) pero los representantes “sólo [tenían] sentido como órgano ejecutivo de las decisiones de las asambleas, nunca como organización para la dirección política, puesto que el aspecto principal y dominante de la lucha no es, ni mucho menos, la negociación, sino la lucha directa, el enfrentamiento, el fortalecimiento consiguiente del Movimiento.”<sup>433</sup>

En este sentido, volvemos a observar la fragmentación que vivía el movimiento estudiantil madrileño a principios de la década de los 70. Pese a que se había planteado una nueva oportunidad política, pese a que Medicina había relanzado las movilizaciones con una coordinación ejemplar, pese a que el diagnóstico de la situación política era similar en todas las organizaciones, no hubo acuerdo en cuanto a crear las plataformas unitarias que lideraran y sostuvieran la lucha de los estudiantes en el tiempo. Las RGU fueron decayendo junto con las movilizaciones, así como también las Coordinadoras.

Sin embargo, las luchas del curso 71-72 sí fueron tremendamente fructíferas en cuanto a unir a los estudiantes en torno a un objetivo común: la lucha en contra de la LGE. Tal como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, el movimiento estudiantil se iba configurando en torno al rechazo generalizado de la Ley General de Educación, especialmente en contra de la selectividad, que, como ya hemos dicho, era vista como una forma de excluir a las clases populares de la educación para reservarla a una elite.<sup>434</sup> Lo mismo opina Gregorio Valdelvira cuando afirma que el conflicto en Medicina se inscribía en uno mayor, contra la LGE. “Por ahora, la mayor parte de las protestas iban dirigidas contra los planes de estudio, impuestos autoritariamente y con los centros ocupados por la policía como garantía de su aplicación. (...) Los estudiantes buscaron mecanismos para oponerse a la LGE y a la sofocante represión a la que estaba sometida la universidad”.<sup>435</sup>

---

<sup>432</sup> Ibid.

<sup>433</sup> Ibid., p. 6.

<sup>434</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 315.

<sup>435</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 160-161.

En conflicto puso al régimen nuevamente en guardia frente a los estudiantes (aunque podemos preguntarnos si alguna vez el régimen bajó la guardia), y para acabar con los incidentes y movilizaciones que habían afectado el curso 1971-72, inició nuevas intervenciones en las facultades de Madrid. Así, los primeros días de Marzo, ABC informaba de la incautación de abundante material que “se hallaba dispuesto para su utilización y difusión en los medios universitarios madrileños”.<sup>436</sup> Las facultades afectadas por el registro de la policía fueron Derecho, Filosofía y Letras y Políticas de la UCM, y las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas, donde, según ABC, “se incautaron centenares de ejemplares de la publicación “Vanguardia”, comunista, así como millares de folios y pasquines con llamamiento a los estudiantes que firmaban las “Comisiones coordinadoras”.<sup>437</sup> También se incautaron folletos del PCE y otros, titulados “La lucha sexual de la juventud” o “Estudio sobre la sexualidad femenina”. Resulta revelador que se considere a estos últimos folletos – igual que a los del PCE –, subversivos.

Luego de este “hallazgo”, el periódico intentó vincular los desórdenes estudiantiles de los pasados meses, con una acción de tipo subversiva, “encaminada a crear un clima de constante tensión que mantuviese el desorden e incitase la agitación”.<sup>438</sup> También destaca el periódico la actuación de comandos o grupos violentos, formados por jóvenes de Bachillerato y COU, que actuaron arrojando cócteles molotov contra entidades bancarias y establecimientos comerciales en los incidentes que se produjeron en Madrid en relación con el conflicto de la Facultad de Medicina. Por lo demás, en esta misma edición, ABC consigna que hay conflictos en las Universidades de Sevilla (Filosofía), Santiago (cinco facultades cerradas) y Bilbao (Ciencias).

En Madrid, los incidentes en la Ciudad Universitaria continuaron. El día 1 de marzo, estudiantes de diversas facultades desalojaron sus centros y se reunieron en concentración para dirigirse a Moncloa, pero fueron dispersados por la policía. Los estudiantes cortaron el tráfico de la calle Princesa y la policía desalojó bares y comercios de la zona. Finalmente, este enfrentamiento se saldó con varios estudiantes heridos y más de veinte detenidos. Este tipo de incidentes se repitió en los días siguientes, a lo cual la autoridad académica respondió apoyando a las fuerzas de Orden

---

<sup>436</sup> ABC, 1 de Marzo de 1972. BNE.

<sup>437</sup> Ibid.

<sup>438</sup> Ibid.

Público y promoviendo las sanciones. El 7 de marzo, el rector de la Complutense informaba a la Junta de Gobierno de que el Rectorado había recibido muchas denuncias de faltas a la disciplina académica, por lo que proponía pedir al Ministerio de Educación “el nombramiento de un juez instructor para que una vez que estuviese designado, enviarle las correspondientes denuncias con petición de incoación de expedientes”.<sup>439</sup>

En este contexto de conflicto sostenido, el 7 de marzo, el vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, pronunció un discurso ante el pleno del Consejo Nacional del Movimiento, en el cual señalaba que “el bien común de la nación, en orden a la situación de la Universidad, está personificado en los miles de familias españolas que no quieren sufrir la tragedia de que la Universidad les devuelva a sus hijos mal formados profesionalmente y quizá envenenados de cuerpo y de espíritu para toda su existencia”, en una variación del “envenenados de cuerpo y alma” pronunciado por el mismo Carrero, el 8 de febrero de 1969. Tal como señala Pere Ysàs en su libro *Disidencia y Subversión*, Carrero se refirió también a la crisis de autoridad del profesorado, señalando que “una minoría, seguramente muy pequeña, del profesorado, es instrumento de la subversión marxista y liberal; consciente o inconscientemente sirven al Comunismo y a la Masonería” y terminaba afirmando que era absolutamente indispensable que los profesores y estudiantes subversivos salieran definitivamente de la universidad.<sup>440</sup>

Al día siguiente de la intervención de Carrero, 8 de marzo, se había convocado a una nueva jornada de lucha contra la LGE y en solidaridad con los estudiantes de Medicina, pero tuvo mucha menor repercusión que la del 14 de febrero. Además, ese mismo día se realizaron elecciones en la Facultad de Medicina, para elegir a los representantes estudiantiles que participarían en la Comisión del Plan de Estudios. Sin embargo las universidades madrileñas registraban, los primeros días de marzo, un paro importante de las actividades académicas, y no sólo de parte de los estudiantes. Los profesores adjuntos y ayudantes de Filosofía y Letras de la UCM también convocaron a un paro, exigiendo mejoras en su situación laboral.

Ahora bien, los incidentes estudiantiles no se producían solamente en la UCM. La Universidad Autónoma de Madrid también se vio afectada, tanto así que el día 8 de marzo, la Junta de Gobierno decidió suspender las clases: “La Junta de Gobierno de la

---

<sup>439</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 7 de Marzo de 1972, p. 3. ACUCM.

<sup>440</sup> P. YSÀS: *Disidencia y subversión*, p. 36-37.

UAM, a la vista de la anormalidad en la asistencia a clases de los alumnos, incompatibles con su régimen de enseñanza, ha decidido suspender las clases en las instalaciones de Canto Blanco hasta nuevo aviso. Continuarán, sin embargo, las actividades científicas y del doctorado”.<sup>441</sup> En la sesión del 11 de marzo de la Junta de Gobierno de la UAM, el decano de Filosofía lamentó la situación de su Facultad, señalando que el cierre de la misma no había sido bien recibido por los PNN. La UAM se reabrió recién el 16 de marzo.

Dos días después de la jornada de lucha del 8 de marzo, se informó del asesinato de dos obreros en El Ferrol como resultado de la intervención policial en el conflicto de la Empresa Nacional Bazán. Este dramático acontecimiento actuó como un nuevo revulsivo para el ME, y los días 12, 13 y 14 de marzo se registraron nuevos enfrentamientos entre los estudiantes y la policía en la Ciudad Universitaria, con las consecuentes persecuciones, retiradas de carné y detenciones.

“Nosotros, universitarios, mil veces apaleados, encarcelados, expedientados... sometidos con frecuencia a los tiroteos de la policía, sabemos por experiencia propia lo que significa perder a un compañero en la lucha por la libertad. Nunca lograrán aterrorizarnos los crímenes, su único fruto será el odio a la Dictadura (...) El pueblo no quiere la guerra civil pero nadie dude de que sabremos VENGAR A NUESTROS MUERTOS”.<sup>442</sup>

Durante los meses de marzo y abril, la Universidad madrileña se vio afectada por diversos incidentes, asambleas, concentraciones y movilizaciones de estudiantes, que dificultaron la labor académica. Los días 8 y 19 de abril se realizaron nuevas jornadas de lucha en contra de la LGE, aunque con menor éxito que en febrero. La UAM fue nuevamente cerrada entre el 28 de abril y el 2 de mayo, debido a “los actos de violencia realizados por un número reducido de alumnos en las instalaciones de la Universidad”.<sup>443</sup> Por su parte, los estudiantes de Medicina de la Complutense seguían sin volver masivamente a clases, y el proceso de deliberación y negociación para poner fin al conflicto en torno al nuevo plan de estudios continuaba.

A mediados del mes de mayo, y al tiempo que la movilización decaía, el régimen intentó presionar sobre los estudiantes para que regresaran a clase, y lo hizo a través de la represión y los expedientes. Así, durante todo el mes se sucedieron

---

<sup>441</sup> *Informaciones*, 8 de Marzo de 1972. BNE.

<sup>442</sup> “Estudiantes”, Organización Universitaria del PCE, 15 Marzo de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>443</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 27 de Abril de 1972, p. 1. ACUAM.

enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de Orden Público, mientras en las distintas facultades se incoaban expedientes disciplinarios. Los estudiantes comunistas llamaron la atención sobre estos métodos y sobre las maniobras del fin de curso, advirtiéndolo que “los criterios fundamentales de la LGE se quieren imponer “a la chita callando” en los nuevos planes de estudio que están siendo elaborados clandestinamente en casi todas partes”.<sup>444</sup>

Justo dos días después de esta advertencia, ocurrió un grave incidente en la Facultad de Ciencias de la UCM. Cuando la policía estaba disolviendo una asamblea no autorizada en dicho centro, el estudiante de Físicas, Juan Manuel Mediavilla Calleja, fue herido de bala “atravesándole de espalda a pecho. Cuando fue ingresado en el Hospital Clínico, su estado era crítico. La muralla policíaca establecida en torno a él impide conocer su evolución”.<sup>445</sup> El estudiante no murió pero sí tuvo una difícil recuperación, y este incidente hizo que los estudiantes volvieran a las movilizaciones, exigiendo la retirada de la policía de los campus universitarios y el levantamiento de expedientes. Por su parte, en la sesión de la Junta de Gobierno de la UCM del 19 de mayo, el rector manifestó su preocupación “por el empleo de armas de fuego en el mantenimiento del orden público en el Campus Universitario que ha producido una víctima y podría conducir a situaciones más lamentables que las que se pretenden evitar”.<sup>446</sup> Debido a esto, la Junta decidió dar por finalizado el período lectivo y comenzar con el período de exámenes.

Esta medida, lejos de traer la calma a los recintos universitarios, fue aprovechada por los estudiantes para continuar el conflicto. En diversos centros se boicotearon los exámenes con el objetivo de exigir la retirada de los expedientes que afectaban a decenas de estudiantes de Madrid. Según la Organización Universitaria del PCE “el aplazamiento de los exámenes en la Universidad de Madrid, en tanto que los expedientes no sean levantados, está siendo uno de los más resonantes éxitos logrados hasta ahora por el movimiento estudiantil, y junto a él por los Profesores No Numerarios”.<sup>447</sup> Los PNN habían realizado su I Asamblea Estatal en la ciudad de Granada, en mayo de este mismo año, en donde habían acordado exigir reivindicaciones

---

<sup>444</sup> “¡Atención a las maniobras de fin de curso!”, Organización Universitaria del PCE, 17 de Mayo de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>445</sup> “Compañeros”, Organización Universitaria del PCE, 19 de Mayo de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>446</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 19 de Mayo de 1972, p. 11. ACUCM.

<sup>447</sup> “Avanzar con unidad, firmeza e inteligencia”, Organización Universitaria del PCE, Junio 72, p. 1. AHPCE.

laborales y colaborar con algunas de las luchas de los estudiantes con respecto a la LGE. Como informa *Cuadernos para el Diálogo*, en dicha asamblea los PNN trataron cuestiones profesionales como el problema de los contratos provisionales, la atípica situación jurídica de sus nombramientos, etc. Además, presentaron sus propuestas y sus críticas a la LGE. Pero sin duda, lo que más destaca *Cuadernos* de esta asamblea es la vinculación de los problemas de los PNN como una manifestación de las transformaciones producidas en la universidad española.<sup>448</sup> Además, como recoge la revista, los PNN aprovecharon de denunciar la represión que sufren tanto profesores como estudiantes en la universidad, “recalcando que los problemas universitarios tienen su origen inmediato en las contradicciones de la situación económica y social del país y en las propias limitaciones de la actual estructura universitaria”.<sup>449</sup>

El apoyo y la coordinación con los PNN fue fundamental para el éxito del aplazamiento de los exámenes, ya que en su mayoría, eran ellos los encargados de hacer las evaluaciones finales. En el mismo comunicado, los estudiantes comunistas recomendaban a cada facultad a coordinarse con los PNN, para que éstos expresaran sus opiniones de forma colectiva, para influir en los catedráticos: “llamamos a los catedráticos que tengan un mínimo sentido de la dignidad a que se nieguen a hacer los exámenes bajo coacción policial”.<sup>450</sup>

Enrique Palazuelos, en su libro *Movimiento Estudiantil y democratización de la Universidad*, considera que la huelga de exámenes de junio de 1972 fue la expresión más valerosa de la resistencia de los estudiantes contra el régimen. En este sentido, según Palazuelos, una asamblea minoritaria pero apoyada por la mayoría de los PNN, determinó el aplazamiento de exámenes en la Facultad de Económicas, lo que luego fue seguido por otros centros. “Inmediatamente surgió la represión: amenazas de más expedientes, arbitrariedades de la policía (vigilando los exámenes en las aulas), cierres, nuevas fechas de exámenes – hasta cinco vueltas – intentando sembrar la división y el cansancio; nada consiguieron de positivo, salvo encrespar los ánimos, arrastrar al boicot a los vacilantes e incluso obligar a la amplia mayoría de los catedráticos a negarse a

---

<sup>448</sup> *Cuadernos para el Diálogo*, Junio de 1972, núm. 105, p. 9. BNE.

<sup>449</sup> Ibid.

<sup>450</sup> “Avanzar con unidad, firmeza e inteligencia”, Organización Universitaria del PCE, Junio 72, p. 1. AHPCE.



realizar los exámenes con presencia de la policía y en las condiciones en las que se encontraba la facultad”.<sup>451</sup>

Producto del boicot de los exámenes, las relaciones entre estudiantes y PNN se estrecharon, así como también las relaciones con algunos catedráticos. Los estudiantes comunistas eran optimistas al respecto: “la policía no se irá por arte de magia de la Autónoma<sup>452</sup>, se irá cuando las asambleas, los estudiantes, de PNN y los Claustros y Juntas de Facultad decidan luchar por ello y lo exijan abiertamente al Ministerio”.<sup>453</sup>

Finalmente, los primeros días de julio de 1972 los expedientes fueron sobreesidos (se consideró que los delitos estaban prescritos). Pero ¿significaba esto que el curso 72-73 iba a ser más tranquilo? No necesariamente. Aunque los exámenes finales se aplazaron para septiembre, el régimen iba a responder durante el verano con dos decretos que consiguieron poner a la Universidad madrileña casi bajo estado de excepción.

## **V. La lucha en contra de la LGE: de académica a social.**

Cuando estalló la huelga en Medicina, en noviembre de 1971, la Coordinadora de esa Facultad se propuso mantener constantemente informada a la opinión pública, con el fin de ganar adeptos para su causa. En este sentido, desde el primer momento se explicó que la lucha en contra de la selectividad y del Plan Nuevo no era puramente académica, sino que tenía consecuencias – y muy importantes – a nivel social.

Debido a esto, una de las estrategias del ME para encarar este nuevo período de movilizaciones, fue la búsqueda de aliados. Ya hemos comentado más arriba cómo los médicos del Hospital Clínico y otros sectores profesionales apoyaron a los estudiantes en contra de la LGE. Pero quizás, lo más interesante de esta dimensión social del conflicto fue el apoyo de otros sectores de la enseñanza (especialmente de estudiantes y profesores de Enseñanza Media) y, sin duda, de los Profesores No Numerarios de la universidad.

---

<sup>451</sup> Enrique PALAZUELOS: *Movimiento estudiantil y democratización de la Universidad*, Madrid, Manifiesto Editorial, 1978, p. 71.

<sup>452</sup> La Universidad Autónoma de Madrid también se plegó al boicot, por lo que recibió una fuerte dosis de represión.

<sup>453</sup> “La dictadura histórica”, Organización Universitaria del PCE, 30 de Junio de 1972, p. 2. AHPCE.

Así por ejemplo, luego de la jornada de lucha del 14 de febrero del 72, la Coordinadora de las tres universidades madrileñas aseguraba que había

“surgido un potente movimiento social, un movimiento contra uno de los instrumentos de continuidad del régimen: la Ley General de Educación. (...) Al llamamiento de la 1ª Reunión General de Universidades se unen todos los distritos. El lunes no se da ninguna clase, asambleas hasta en pueblos como Seo de Urgol, manifestaciones de estudiantes de enseñanza media, magisterio, laboral, superior... en todas las ciudades. Valencia recibe hasta en los pueblos más alejados la convocatoria y se une a la lucha. Salamanca, Valladolid, Santiago, Gerona, Bilbao, Palma de Mallorca, Tarragona, Granada, La Laguna ... Madrid está cerrada, el régimen que expedienta, que encarcela, ese día ha tenido miedo y ha cerrado la Universidad con un pretexto absurdo. De todo el mundo se reciben telegramas de apoyo. La Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza en nombre de sus 12 millones de afiliados se solidariza con nuestra lucha”.<sup>454</sup>

La condición social de la lucha quedaba claramente expuesta en el comunicado de la 2ª RGU, del 28 de febrero.

“Creemos que la lucha contra la LGE no puede quedarse encerrada en el marco de la Universidad. El carácter social de la Educación afecta a todo el pueblo, y en especial a la clase obrera, hace necesario plantear la lucha con la perspectiva de una lucha popular contra la política educativa del régimen. Planteamos también la necesidad de una convergencia política contra la LGE y la dictadura que la ha engendrado. Por todo esto llamamos a todo el pueblo a que asuma esta lucha, su lucha, por una enseñanza auténticamente popular”.<sup>455</sup>

Uno de los principales argumentos de los estudiantes en contra de los cambios llevados a cabo en Medicina decía relación con los problemas que esto supondría para la sanidad en España, debido a que la selectividad haría disminuir el número de médicos por habitante en el país, con lo cual los pacientes demorarían más en ser atendidos. Pero además, se criticaba el efecto que la selectividad tendría en el ámbito laboral: “cuando gritamos ‘NO a la selectividad, más puestos de trabajo’, estamos reivindicando una exigencia nacional por una España mejor, más avanzada, que realmente salga del subdesarrollo”.<sup>456</sup>

Para la Organización Universitaria del PCE, la LGE era un intento del régimen de impedir que las clases populares accedieran a la universidad, para impedir su promoción social. La LGE “está orientada, en suma, a sacar una nueva élite de la

---

<sup>454</sup> “Hacia la Huelga general de la enseñanza”, Coordinadora Amplia de las tres Universidades de Madrid, 18 de Febrero de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>455</sup> “Comunicado de la 2ª RGU”, 28 de Febrero de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>456</sup> Sin título, Estudiantes de la Universidad de Madrid, Marzo de 1972, p. 1. AHPCE.

Universidad. Un número reducidísimo de titulados superiores, puesto al servicio del capital, y un número algo más amplio de titulados medios que pasarán a engrosar el ejército de parados y subempleados”.<sup>457</sup>

Y sigue:

“Condena a todo el país a la incultura y al atraso. Un país que como pretende el franquismo no desarrolla las capacidades de toda la población en cuanto a la ciencia, la técnica y la investigación se refiere, queda condenado a corto plazo a la invasión de la tecnología extranjera y a largo plazo a sumirse en el atraso y subdesarrollo totales. ESTA ES LA PERSPECTIVA QUE LA DICTADURA OPUS FRANQUISTA OFRECE AL PAÍS, demostrando hasta que punto su supervivencia es el mayor obstáculo que se opone al desarrollo político, social y económico de España”.<sup>458</sup>

Esta postura era compartida por otros grupos políticos del ME. Por ejemplo, la FUDE a través de su periódico *Democracia Popular*, explicaba que la LGE acentuaba el clasismo y la selectividad como una medida para evitar el paro de profesionales pero que beneficiaba a la clase dominante, “impidiendo la salida de todos los técnicos y licenciados que necesitaría el desarrollo del país y la investigación necesaria, fomentando en cambio la formación de titulados de grado medio, incapaces de desarrollarla, pero lo suficientemente preparados en la aplicación de la investigación y técnica desarrolladas por los monopolios yanquis”.<sup>459</sup>

En el mismo sentido apuntaban diversas agrupaciones como la *Liga Comunista Revolucionaria*<sup>460</sup>, *Juventudes Socialistas*, *Estudiantes Democráticos* y la Organización Universitaria del PCE. En un panfleto sin título, con fecha 27 de abril de 1972, señalaban que “En el terreno de la educación la dictadura sólo nos ofrece la policía y la Ley de Educación, Ley que no sólo frustra las ansias populares de acceso a la enseñanza con la multiplicación de toda clase de medidas selectivas, sino que es un paso más en la adecuación de la enseñanza a las necesidades de un capitalismo monopolista que depende en gran parte de las inversiones y de la tecnología extranjeras”.<sup>461</sup>

Además de este diagnóstico, todos los grupos políticos de la universidad consideraban fundamental convocar a más sectores a la lucha contra la LGE. Así, ya hemos comentado como Medicina se atrajo a médicos y otros profesionales de la

---

<sup>457</sup> Sin título, Organización Universitaria del PCE, Marzo de 1972, p. 1-2. AHPCE.

<sup>458</sup> Sin título, Organización Universitaria del PCE, Marzo de 1972, p. 1-2. AHPCE.

<sup>459</sup> *Democracia Popular*, Periódico de la FUDE, Abril de 1972, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>460</sup> Partido trotskista formado por algunos ex miembros del disuelto FLP en 1971.

<sup>461</sup> Sin título, Liga Comunista Revolucionaria, Juventudes Socialistas, Estudiantes Democráticos y la Organización Universitaria del PCE, 27 de Abril de 1972, p. 1. AHPCE.

sanidad. Por su parte, la Organización Universitaria del PCE también hacía un llamado a coordinar la lucha de los estudiantes con las de otros sectores sociales, como el movimiento obrero, el movimiento de PNN y algunos sectores profesionales: “con nosotros están combatiendo todos los sectores de la enseñanza y otras fuerzas del país, y en algunas provincias, como Barcelona, las jornadas contra la LGE han tenido una participación ciudadana”.<sup>462</sup>

En este sentido, la LCR, *Juventudes Socialistas* y *Estudiantes Democráticos* proponían que la alternativa a la LGE debía superar el marco de la enseñanza, ya que era un problema que afectaba a toda la sociedad, por lo que su solución debía encontrarse junto con la clase obrera y el pueblo. “OBREROS Y ESTUDIANTES EN UN MISMO COMBATE CONTRA LA DICTADURA Y POR EL SOCIALISMO”.<sup>463</sup>

Los *Comités de Lucha Universidad Popular* también consideraban fundamental ampliar los conflictos y buscar alianzas con el pueblo. Dentro de él, el eje principal era la clase obrera y todos “los sectores más combativos del pueblo español, porque son los que en mayor medida están contribuyendo a aislar a nuestro enemigo”.<sup>464</sup> Ahora bien, también era importante contar con el apoyo de otros sectores sociales, como médicos, profesionales, profesores, etc., y “arrastrarles a posiciones políticas más avanzadas, y hacer así que fortalezcan su movimiento en particular y el movimiento antifascista en general”.<sup>465</sup>

Sin lugar a dudas, los aliados más cercano de los estudiantes fueron los profesores, y dentro de ellos, en particular, los Profesores No Numerarios. Siguiendo a los autores de *Estudiantes contra Franco*, desde el año 72 no solo los estudiantes se movilizarían en la universidad. Los PNN también lo harían, aunque no lograrían conseguir algunas de sus reivindicaciones hasta 1975. Por lo tanto, el conflicto en la universidad se daba de forma doble: estudiantes y profesores no numerarios, muchos de los cuales habían sido estudiantes movilizados en años anteriores.<sup>466</sup> Ahora bien, las peticiones de los PNN no eran solamente de tipo laboral (a ello nos dedicaremos más adelante) sino también se aliaron con los estudiantes en contra de la LGE. Aunque

---

<sup>462</sup> *Medicina* 9, Organización Universitaria del PCE, Abril 72, p. 1. AHPCE.

<sup>463</sup> Sin título, Liga Comunista Revolucionaria, Juventudes Socialistas, Estudiantes Democráticos y la Organización Universitaria del PCE, 27 de Abril de 1972, p. 1. AHPCE.

<sup>464</sup> *Lucha estudiantil*, Portavoz de los Comités de Lucha Universidad Popular, Marzo de 1972, p. 7. F. Pablo Iglesias.

<sup>465</sup> Ibid.

<sup>466</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 332.

durante el primer semestre de 1972 los profesores no realizaron huelgas, si criticaron duramente las consecuencias de la Ley General de Educación, y especialmente, el no haber sido convocados para participar en su redacción.

Al igual que en el caso de los estudiantes, había profesores más y menos radicalizados, y algunos participaban de grupos políticos. Por ejemplo, dentro de las organizaciones que formaban el FRAP existía la *Unión Popular de Profesores Demócratas* (UPPD), que tenía un periódico llamado *Cultura Popular*. A través de este medio, los profesores de UPPD señalaban los problemas laborales que vivía el profesorado (inseguridad en el empleo, bajos salarios, desigualdad de salarios para un mismo trabajo, retraso en los cobros, etc.) pero también hacían referencia – y con bastante énfasis – a la situación de la educación en España. Criticaban especialmente el que los planes de enseñanza se hicieran sin su participación: “y somos nosotros los que, llevando el peso de la enseñanza, tenemos que aplicar cada día en nuestro trabajo, estas disposiciones hechas por un gabinete pretendidamente técnico y apolítico, pero en realidad al servicio de los intereses económicos y políticos de la oligarquía, y por lo tanto, contrario a los intereses educativos de nuestro pueblo”.<sup>467</sup>

Los profesores de UPPD consideraban que la LGE, al limitar la escolarización y el acceso a la educación de las clases populares, iba a reducir drásticamente los puestos de trabajo y de esta manera, se iba a profundizar la situación de explotación en la que se encontraba el profesorado. Su propuesta era “una enseñanza popular, y planteamos como objetivo la lucha al lado de las restantes clases populares en el FRAP para derrocar a la dictadura monárquica – fascista e instaurar en nuestra patria una República Popular y Federativa”.<sup>468</sup> En este sentido, la UPPD manifestaba su solidaridad con los estudiantes de la FUDE y la FEDEM (Federación de Estudiantes Democráticos de Enseñanza Media) en su lucha en contra de la Ley General de Educación.

Por su parte, las Comisiones de Enseñanza de CC.OO., que reunían en su seno a los profesores militantes o simpatizantes del PCE, también hacían duras críticas a la LGE:

“La Ley ha sido elaborada por arriba, sin consulta a los sectores afectados: padres, alumnos, profesores. Tampoco acoge las reivindicaciones que ya muchos de estos sectores tenían planteadas y formuladas. (...) El aspecto sobresaliente de la Ley es su espíritu demagógico. Este régimen está

---

<sup>467</sup> *Cultura Popular*, Boletín de la Unión Popular de Profesores Demócratas, Diciembre de 1971, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>468</sup> Ibid.

incapacitado para llevar a cabo una reforma auténtica de la Enseñanza, ya que sólo puede defender sus intereses de clase cerrando el acceso a la cultura y, por lo tanto, a los puestos directivos y de control, a las clases trabajadoras y medias”.<sup>469</sup>

Al igual que los estudiantes de la Organización Universitaria del PCE, los profesores de las Comisiones de Enseñanza consideraban que la LGE intentaba imponer “una enseñanza tan clasista como antes, lograr una mano de obra barata, despolitizada y de una calificación excesivamente especializada y limitada, que satisfaga las necesidades mínimas de desarrollo a que este régimen aspira”.<sup>470</sup> Por eso, destacaban que los universitarios y los alumnos de Enseñanza Media estaban haciendo oír su voz más fuerte que nunca, por lo que los profesores debían apoyarlos.

## VI. ¿Un asunto de lenguaje?

Pese a que los grupos políticos de la universidad hacían, en general, la misma crítica hacia la LGE y todos estaban de acuerdo en que era necesario sacar el conflicto del ámbito estrictamente universitario, las formas de lucha no eran coincidentes. Nuevamente encontramos aquí la división entre el PCE y los grupos más radicales, división que podemos observar tanto en las estrategias como en el lenguaje usado. En este sentido, mientras los grupos radicales siguen imbuidos de una ideología socialista, buscando llegar a la República y a la universidad popular, el PCE paulatinamente se desmarca de ese lenguaje.

Así, los estudiantes de FUDE apostaban por derrocar al régimen a través de la lucha popular, para luego implantar un sistema socialista, en el cual se insertaría la universidad socialista.

“Hemos de ser conscientes que tanto la lucha contra la Ley de Educación como contra la represión no terminará hasta el derrocamiento del estado fascista, por ser producto no de personalidades individuales, sino de una realidad nacida de la actual estructura económica en manos del imperialismo yanqui, a través de los grandes financieros y terratenientes que componen la clase dominante. Todo ello nos demuestra el único camino a seguir: el aumento de las luchas hasta el derrocamiento de nuestros enemigos que nos permita la implantación de una Universidad Popular”.<sup>471</sup>

---

<sup>469</sup> *Enseñanza democrática*, Boletín de las comisiones de enseñanza de Comisiones Obreras, Febrero de 1972 p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>470</sup> Ibid.

<sup>471</sup> *Democracia Popular*, Periódico de la FUDE, Abril de 1972, p. 2. F. Pablo Iglesias.

Los estudiantes de FUDE promovían una lucha que congregara a todas las clases y grupos sociales en contra del régimen. En suma, proponían la revolución y rechazaban la negociación. “Para el derrocamiento de la oligarquía y el imperialismo necesitamos la unidad con todo el pueblo para implantar un Estado nuevo que defienda nuestros intereses”.<sup>472</sup> ¿Cómo se llevaría a cabo esto? “Se propone como única salida la violencia revolucionaria y la República Popular Federativa, consignas que son aplaudidas con entusiasmo por los estudiantes”.<sup>473</sup>

Sin embargo, ni los estudiantes de FUDE ni los diversos comités pro-FRAP explican qué entienden por República Popular o por universidad popular. En este sentido, concordamos con José Álvarez Cobelas cuando señala que el Movimiento Estudiantil de los años sesenta – y agregamos que también el de los primeros años de la década de los 70 – no era democrático sino más bien socialista y revolucionario, aunque “de carácter difuso y contradictorio”.<sup>474</sup>

Por su parte, podemos observar que el PCE ya ha comenzado a combinar un lenguaje revolucionario con otro de corte democrático. En cuanto a las estrategias, para el PCE las condiciones de los países desarrollados hacían imposible llegar al socialismo a través de la revolución.

“Las condiciones objetivas hoy de estos países no son las de la Rusia del 17 (...). La vía que hay que seguir en España para llegar a ello es una vía democrática. La experiencia de Chile nos demuestra que esto no es hoy un problema de ciencia ficción, sino un problema de ciencia, y nos demuestra también que el socialismo se puede construir en el pluralismo político e ideológico, con el respeto a las libertades individuales...”.<sup>475</sup>

En este sentido, también proponen (y desde hacía bastante tiempo) la formación de un frente antifranquista que reúna a todos los grupos y clases sociales de oposición, pero a diferencia de FUDE y los grupos más radicales, confían en la vía democrática para llegar al socialismo; aunque tampoco explican a qué tipo de socialismo pretenden llegar. El PCE ya está intentando articular en la universidad la estrategia que lanzará en 1974, con la creación de la Junta Democrática de España.

---

<sup>472</sup> Ibid.

<sup>473</sup> *Acción*, comité pro-FRAP, febrero de 1972, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>474</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. xvi.

<sup>475</sup> *Medicina 9*, Organización Universitaria del PCE, Abril 72, p. 2. AHPCE.

## VII. Consecuencias de las movilizaciones en el Curso 72-73.

Las luchas estudiantiles del curso 71-72 tuvieron algunos resultados alentadores, en cuanto a la aplicación de la LGE. En primer lugar, la compleja situación en la Universidad terminó por forzar, en mayo, la salida del Subsecretario del Ministerio de Educación, Ricardo Díez Hochleiner, y su equipo, quienes eran sindicados por los estudiantes como los cerebros tras la Ley General de Educación. Tal como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, la salida de este equipo y la movilización obligaron a modificar algunos aspectos de la LGE, lo cual podía ser considerado como una victoria del movimiento estudiantil.<sup>476</sup>

Según *Vanguardia*, periódico de la Organización Universitaria del PCE, las movilizaciones habrían conseguido frenar algunos elementos de la puesta en práctica de la selectividad. Por ejemplo, el Ministerio se comprometió a retrasar el BUP por dos años (comenzó a aplicarse en 1975 en lugar de 1973) y a no aplicar medidas selectivas tan rigurosas en el COU.

En el caso específico de Medicina, las negociaciones entre la Comisión del Plan de Estudios y el Ministerio acordaron la supresión de la selectividad de los cuatrimestres, del examen especial de ingreso a la Facultad y la consecución del título de médico antes del internado rotatorio. Desde su periódico, *Medicina Socialista*, los estudiantes comunistas de dicha Facultad eran conscientes de lo mucho que habían conseguido, pero también de que todavía quedaban muchas resistencias y barreras que vencer con respecto a la selectividad.<sup>477</sup> Aunque para los estudiantes estos fueron considerados logros del ME, a largo plazo la selectividad se impuso de todas formas.

Otra consecuencia directa de la importancia que tuvieron las movilizaciones estudiantiles del año 1972 fue la aprobación y publicación de dos decretos destinados a “mantener el orden en la Universidad”.<sup>478</sup> El primero de ellos decía relación con el nombramiento de los rectores y afectaba a todas las universidades españolas. El segundo, afectaba sólo a la UCM y a la UAM, en tanto que suspendía temporalmente los Estatutos de dichas Universidades. Estos dos decretos, que fueron aprobados en julio

---

<sup>476</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 321.

<sup>477</sup> *Medicina Socialista*, Periódico de los estudiantes comunistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Noviembre de 1972, p. 2. AHPCE.

<sup>478</sup> *Informaciones*, 28 de Julio de 1972. BNE.



– con la universidad prácticamente vacía –, a espaldas de la comunidad académica y de los estudiantes, fueron muy mal recibidos por ellos.

En ese apartado nos centraremos en analizar las consecuencias del segundo decreto, ya que es exclusivo para la Universidad de Madrid y además, contempla un amplio panorama de sanciones disciplinarias. Con este decreto se pretendía asegurar “el normal funcionamiento de las instituciones docentes y de la vida universitaria, y el mantenimiento del orden académico que garantice el libre ejercicio de las tareas docentes investigadoras”.<sup>479</sup> Para esto, se creaba el Consejo de Disciplina de la universidad, encargado de “velar por el mantenimiento de los derechos básicos señalados en el artículo segundo y le corresponde la función de salvaguardarlos, así como la de imponer las medidas y sanciones a tal fin”.<sup>480</sup> Este consejo es de carácter permanente y estará formado por tres profesores designados por el Rector. Las sanciones que este Consejo puede imponer, son:

- La pérdida de una o más asignaturas
- La pérdida del curso
- La expulsión temporal de la universidad, no pudiendo cursar estudios como alumno oficial en ninguno de los Centros del mismo Distrito Universitario.
- La expulsión definitiva de la universidad, no pudiendo cursar estudios como alumno oficial en ninguno de los Centros del mismo Distrito Universitario.
- La inhabilitación temporal para cursar estudios en cualquier Centro de Enseñanza.

Si bien los decretos fueron bien recibidos por la prensa adepta al régimen, desde *Cuadernos para el diálogo* se lanzó una fuerte crítica a los decretos, especialmente a la figura del Consejo de Disciplina, debido a la vaguedad en que estaban definidas las infracciones. Según la revista, “la prohibición de matrícula oficial tendrá lugar cuando decanos y rectores consideren la infracción de fórmulas tan vagas como comportamiento responsable en el trabajo propio de la condición de estudiante”.<sup>481</sup> *Cuadernos* critica también la forma en que el régimen aborda el problema de la universidad, considerándolo como un asunto de subversión minoritaria que se podría

---

<sup>479</sup> *Informaciones*, 28 de Julio de 1972. BNE.

<sup>480</sup> Decreto 2056/1972 del 28 de Julio de 1972. [www.boe.es](http://www.boe.es).

<sup>481</sup> “Decreto para las universidades Complutense y Autónoma de Madrid”, *Cuadernos para el Diálogo*, Octubre de 1972, núm. 109, p. 10. BNE.

resolver con arrestos, detenciones y expedientes, en lugar de considerar a la universidad como “un fiel exponente de los problemas del país, no pudiendo, por tanto, considerarse como algo aislado o, como se ha llamado, un foco de subversión”.<sup>482</sup>

Para los estudiantes de la Organización Universitaria del PCE, los decretos de julio añadían

“un nuevo Estado de Excepción al ya existente en las Universidades Complutense y Autónoma, y [suponían] el reconocimiento de facto de que el conflicto Dictadura-Universidad ha calado en la opinión pública y ya no se puede ocultar: es un problema social. Por ello el Gobierno, al hacer tabla rasa de sus anteriores leyes, se ve obligado a dar apariencias de respetabilidad legal al terrorismo que proyecta descargar en la Universidad”.<sup>483</sup>

Por su parte, los militantes de la *Organización Revolucionaria de Trabajadores* (ORT), desde su periódico *En Lucha*, también criticaban “la legislación veraniega”, aunque destacaban el nivel de combatividad alcanzado por el ME en el curso anterior. Sin embargo, también advertían de los peligros que los decretos entrañaban para el movimiento estudiantil. “Esta situación exigirá necesariamente a la vanguardia el cumplimiento de una serie de tareas para esquivar el peligro de aniquilamiento o cuando menos, de estancamiento del ME y abordar estas tareas se hace tanto más necesario, para estar a la altura que la nueva situación reclama”.<sup>484</sup>

Una consecuencia inmediata del decreto que suspendía los Estatutos de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid fue la renuncia de sus respectivos rectores. El primero en hacerlo fue Luis Sánchez Agesta, rector de la UAM, el 9 de septiembre, y dos días después lo hizo José Botella Lluisa, rector de la UCM. Los nuevos rectores, Adolfo Muñoz Alonso (para la Complutense) y Julio Rodríguez Martínez (para la UAM) tomaron posesión de sus respectivos cargos el día 20 de septiembre. Si bien ambos rectores utilizaron formas de represión, Sánchez Agesta fue bastante más mesurado que Rodríguez Martínez, quien prohibió la matrícula de todos los estudiantes que hubieran participado activamente en las movilizaciones del curso anterior, además de no renovar contrato a varios PNN, lo que supuso la expulsión de la universidad de aquellos que se habían solidarizado con los estudiantes.<sup>485</sup>

---

<sup>482</sup> Ibid., p. 11. BNE.

<sup>483</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Septiembre de 1972, p. 2. AHPCE.

<sup>484</sup> *En Lucha*, Periódico de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, Agosto de 1972, núm. 8, p. 24-25. F. Pablo Iglesias.

<sup>485</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 333.

Durante septiembre, los estudiantes volvieron a clase y tuvieron que enfrentarse a la nueva situación en la universidad. Producto de las luchas del curso anterior, la alianza entre estudiantes y profesores (especialmente PNN) se había estrechado, y los decretos de julio no hicieron más que favorecer esto, ya que para una parte importante del estamento docente, la intervención del Gobierno era inaceptable. En este sentido, los estudiantes comunistas quisieron aprovechar la oportunidad que se les presentaba de unir fuerzas con los profesores: “con el nuevo decreto, el estamento docente queda situado políticamente junto a los estudiantes, frente a la Dictadura”<sup>486</sup>, sin embargo no supieron crear las instancias necesarias para ello.

La UPPD, a través de *Cultura Popular*, también rechazó firmemente el decreto de julio, ya que con ello se les impedía reunirse.

“Se nos obliga a acatar militarmente las órdenes del rectorado, se crea un tribunal disciplinario cuyos procedimientos son ¡verbales y sumarios!, las denuncias ante este tribunal se toman como verdades salvo que se demuestre lo contrario, violando con ello el más elemental principio jurídico; a cualquier profesor se le puede hacer miembro de tal tribunal, se nos obliga a reprimir y denunciar cualquier acto democrático de los estudiantes y de nuestros mismos compañeros”.<sup>487</sup>

Además de las características represivas del decreto, a comienzos del primer semestre del curso 72-73, varios PNN fueron expulsados de las Universidades de Madrid. Según *Cultura Popular*, 42 de la UCM y 12 de la UAM. Para solidarizarse con los exonerados, los profesores de UPPD hicieron un llamado a los profesores para negarse a dar clases mientras no fueran readmitidos los 54 PNN expulsados.<sup>488</sup>

En noviembre del 72 actuó por primera vez el Consejo de Disciplina Académica de la UCM, en relación con el asalto a un laboratorio ocurrido el día 10 de noviembre. Los estudiantes comenzaron a movilizarse en contra de este Consejo, y el 21 de noviembre se produjeron incidentes en la Ciudad Universitaria (concentraciones y cortes de tráfico). A partir de noviembre, se produjeron algunos incidentes en las facultades de Derecho y Ciencias de la Complutense, mientras que en la Facultad de Económicas de la UAM se convocó a un paro, en solidaridad con diez alumnos de ese mismo centro que no habían sido admitidos por su “comportamiento” en el curso

---

<sup>486</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Septiembre de 1972, p. 3. AHPCE.

<sup>487</sup> *Cultura Popular*, Boletín de la Unión Popular de Profesores Demócratas, Octubre-Noviembre de 1972, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>488</sup> *Ibid.*

pasado. Este nuevo brote de movilización estuvo motivado fundamentalmente por la readmisión de los estudiantes y profesores expulsados, por la libertad de los detenidos y en contra de la LGE. Para lograrlo, los estudiantes comunistas clamaban por una organización de masas con un órgano de dirección unitario, al tiempo que criticaban la aparición de los “provocadores de izquierdas y de derechas (...) que de forma diferente unos y otros hacen el juego al Gobierno”.<sup>489</sup> La situación en la Universidad se tornó más compleja cuando se conoció la noticia de que un joven estudiante de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela había muerto de un disparo.

Una novedad que trajo el nuevo curso fue que las fuerzas de orden dejaron el interior de los edificios universitarios, pero como señala Vanguardia, “la Policía Armada sigue actuando en la Universidad tan brutalmente como siempre, y siguen dentro de los centros legiones de ‘sociales’ y chivatos”.<sup>490</sup> El 12 de diciembre, el Director General de Universidades e Investigación del MEC, Luis Suárez, declaraba que “a pesar de las instigaciones de los agitadores, la Universidad [seguía] sin fuerza pública y ningún profesor [tenía] que pasar por el molesto trance de ver guardias uniformados y con cascos por los pasillos”.<sup>491</sup>

Pese a la oportunidad política que significaba el que la policía no estuviera dentro de los edificios universitarios, los llamados a movilizarse por la muerte del estudiante de Santiago no tuvieron buena acogida. Los estudiantes ya estaban cansados después de un curso completo de movilizaciones, de nuevas formas de represión, como el Consejo de Disciplina Académica, y de la aparente imposibilidad de derrotar a la LGE, pese a las pequeñas victorias conseguidas en 1972. Además, nuevamente nos encontramos con la falta de unidad dentro del ME. Los grupos radicales continuaban con las estrategias más violentas y propiciando organizaciones clandestinas, mientras que el PCE proponía una organización de masas, democrática y representativa que no lograba cuajar aún entre la mayoría de los estudiantes.

En general, el curso 72-73 fue de poca conflictividad. Aunque sí se produjeron algunos incidentes en las diversas facultades, no se logró retomar la movilización que había caracterizado el curso 71-72, y en general, las movilizaciones de este curso no

---

<sup>489</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Diciembre de 1972, p. 4. AHPCE.

<sup>490</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>491</sup> *ABC*, 12 de Diciembre de 1972. BNE.

fueron impulsadas por los estudiantes sino por el cada vez más importante movimiento de profesores no numerarios.

En el mes de marzo de 1973, los PNN de universidad convocaron a una huelga para los días 8 y 9 de ese mes. Los estudiantes apoyaron esta convocatoria, realizando asambleas, concentraciones y manifestaciones. El día 9 se realizó una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, compuesta por estudiantes y PNN, la cual fue violentamente disuelta por la policía.<sup>492</sup> La convocatoria a huelga de los PNN significó un aliciente para los estudiantes, ya que algunas de sus reivindicaciones era también aceptadas por el ME. Así, el 14 de marzo, diversas facultades de la Universidad Complutense se encontraban en paro de actividades, y los estudiantes y PNN participaban en asambleas informativas conjuntas.

Ese mismo día, los PNN de la Facultad de Ciencias de la UAM continuaron el paro y convocaron a una reunión a la que asistieron 130 profesores y el vicedecano. Mientras, el rector de la UAM, Julio Rodríguez, comunicó su decisión de sancionar a 3 profesores no numerarios de la Facultad de Ciencias, con la suspensión de empleo y sueldo durante un mes. Con estos, ya eran 12 los PNN sancionados por Rodríguez, en su intento de "asegurar el normal desarrollo de la vida académica".<sup>493</sup> A raíz de esta decisión, la Facultad de Ciencias registró un par casi total de actividades, el 16 de marzo. Los PNN exigían mejoras salariales, estabilidad laboral (contrato) y levantamiento de las sanciones impuestas por el rector a algunos profesores.

Durante los últimos días del mes de marzo y los primeros de abril, se vuelven a producir algunos incidentes entre estudiantes y policía en la Ciudad Universitaria, sin embargo, no se coordina una nueva plataforma de lucha estudiantil. La IV Reunión de Universidades realizada en abril de 1973 fue un fracaso, reflejando así el estado en el que se encontraba el ME.

---

<sup>492</sup> ABC, 10 de Marzo de 1973. BNE.

<sup>493</sup> ABC, 16 de Marzo de 1973. BNE.

## **CAPÍTULO 7**

### **1973-1975: EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. ENTRE LA RADICALIZACIÓN Y LA MUERTE DE FRANCO.**

#### **I. Curso 1973-1974: planteamiento de nuevos marcos de significado.**

El 11 de junio, luego de la llegada de Carrero Blanco a la presidencia de Gobierno, el rector de la UAM, Julio Rodríguez Martínez es nombrado como Ministro de Educación y Ciencia, en reemplazo de Villar Palasí, el encargado de poner en marcha la discutida Ley General de Educación. Durante el verano, el nuevo ministro adopta una de las más insólitas reformas hechas a la universidad, la que, además, contó con el rechazo de prácticamente toda la comunidad académica: el cambio de calendario, para ajustar el año académico al año natural. La orden ministerial fue publicada en el BOE el 27 de septiembre de 1973, y una de sus justificaciones fue que dicho cambio de calendario “contribuye a hacer realidad la parte esencial y más noble de la reforma educativa: la calidad de la educación”.<sup>494</sup> En la argumentación de la orden se mencionaba también que, con este cambio de calendario, todos los estudiantes podrían disfrutar mejor de sus vacaciones de verano, ya que en el sistema que había hasta ese momento, los estudiantes que tuviesen que examinarse en septiembre no podían disfrutar, sin inconvenientes, de sus vacaciones. Además, el nuevo calendario reportaría beneficios financieros, al coincidir con la vigencia del presupuesto de la universidad, y también castrenses, al ofrecer una adecuación con las disposiciones especiales sobre el servicio militar que rigen a los universitarios.<sup>495</sup>

La imposición del calendario “juliano” fue contestada por casi todos los sectores académicos, pese a que el Ministerio comunicó que se haría en forma gradual, a partir de enero de 1974, para los nuevos planes de estudio.<sup>496</sup> El ministro Rodríguez, que alcanzó a estar menos de siete meses en su cargo, no sólo quiso imponer el cambio de calendario (quizás ésta fue la más anecdótica de sus medidas) sino que, siguiendo la política represiva que había impuesto en la UAM durante su rectorado, llamó a la policía nuevamente a los campus universitarios y prohibió toda participación de los

---

<sup>494</sup> Orden de 27 de septiembre de 1973 sobre calendario para la aplicación de los nuevos planes de estudio en las Facultades Universitarias. BOE núm. 234, 29 de Septiembre de 1973, p. 18853. [www.boe.es](http://www.boe.es).

<sup>495</sup> Ibid.

<sup>496</sup> ABC, 12 de Octubre de 1973. BNE.

estudiantes en las Juntas de Facultad, lo cual provocó un fuerte rechazo en la comunidad universitaria.<sup>497</sup>

Como indican los autores de *Estudiantes contra Franco* el ministro Rodríguez contribuyó a agitar la situación en la universidad española, provocando un aumento importante de los conflictos entre estudiantes y fuerzas policiales. “Hubo constantes huelgas y sentadas, tanto de profesores como de alumnos, y frecuentes boicots a los transportes, que acarrearón a su vez la sistemática irrupción de la policía en los centros, junto a la renovación constante de la cadena de sanciones y cierres”.<sup>498</sup> El alza de precios en el transporte y en los comedores universitarios provocó protestas de parte de los estudiantes, así como las pruebas de ingreso a ciertas Facultades (Medicina) y la implantación, a partir de septiembre de 1973, del calendario “juliano”.

Para sofocar estas protestas, el ministro Rodríguez cesó al rector de la Universidad Complutense, que el año anterior había sacado a la policía del campus, y lo reemplazó por Ángel González Álvarez, quién en noviembre pidió a las fuerzas policiales que volvieran a los recintos universitarios. Para el nuevo rector, “la Universidad no puede ser tomada como medio de agitación política, factor de rebeldía social o instrumento de revolución cultural”.<sup>499</sup> El ministro Rodríguez estaba profundamente interesado en mantener el orden en la universidad, para lo cual, según sus propias palabras, había que restaurar “la Autoridad, escrita con mayúsculas”.<sup>500</sup>

Sin embargo, el ministro no se dirigió solamente contra los estudiantes. También inició expedientes a doce catedráticos de la Universidad de Salamanca que habían publicado una carta criticando las medidas tomadas por el Ministerio de Educación. Es así como Julio Rodríguez consiguió atraerse, con notable eficiencia, el malestar de toda la comunidad universitaria, incluidos los catedráticos.

En este contexto, las organizaciones políticas de los estudiantes comenzaron a llamar a movilizaciones exigiendo la renuncia del ministro. En noviembre, regresó la agitación a las universidades madrileñas, influidas por el boicot a la selectividad, por el problema de los alumnos reprobados en primer curso. Desde *Vanguardia* se llamó a los estudiantes a movilizarse en contra de las medidas represivas tomadas por Rodríguez: “Si algo resalta hoy con fuerza es la profunda indignación social provocada por el caos

---

<sup>497</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 345.

<sup>498</sup> Ibid., p. 346.

<sup>499</sup> *Pueblo*, 9 de Noviembre de 1973. BNE.

<sup>500</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 346.

en que Julio Rodríguez ha sumido a la enseñanza. De una forma u otra, amplios sectores – padres de familia, colegios profesionales, Patronatos... – hacen oír su voz exigiendo soluciones”.<sup>501</sup> Durante ese mes se sucedieron asambleas, concentraciones y manifestaciones en contra de la selectividad, la policía desalojó facultades y se produjeron enfrentamientos con los estudiantes. El día 30 de noviembre, según informa el diario Pueblo, la UCM amaneció prácticamente acordonada por la policía.

Las movilizaciones de los estudiantes durante el segundo semestre de 1973 tenían como núcleo las mismas reivindicaciones que en los cursos anteriores: la lucha contra la LGE, contra la selectividad que ya había empezado a imponerse en ciertas facultades, contra una enseñanza dominada por los intereses de la burguesía, etc. No obstante, no se producen manifestaciones masivas y el movimiento estudiantil evidencia una situación de agotamiento que incluso le lleva a desperdiciar oportunidades políticas como las presentadas por la polémica administración de Julio Rodríguez. La situación del movimiento estudiantil es analizada desde distintas perspectivas por diversas organizaciones políticas, que intentan generar estrategias que permitan relanzar las movilizaciones.

Para la *Oposición de Izquierdas del PCE*<sup>502</sup>, las luchas del curso 71-72 habían dejado al ME en estado de agotamiento, debido a que las luchas se mantenían siempre dentro del contexto universitario.

“La contradicción que sufre el ME no puede encontrar solución más que en su lucha al lado del movimiento obrero (única clase capaz de garantizar la resolución de sus contradicciones), alineándose en el campo revolucionario para la resolución de la contradicción principal que hoy se nos presenta (la caída de la Dictadura y sus formas de continuismo centrista) pero enmarcada cada lucha en una vía al socialismo, hacia la resolución de la contradicción fundamental: la dictadura del proletariado. No hay lugar para una estrategia universitaria si no es englobada dentro de una estrategia revolucionaria válida para todo el país”.<sup>503</sup>

Este grupo, surgido en 1973, condenaba la transformación del PCE en un “órgano de expresión y control político de una minoría, de un aparato”.<sup>504</sup> En este

---

<sup>501</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1973, p. 4. AHPCE.

<sup>502</sup> La Oposición de Izquierdas del PCE (OPI) fue una corriente surgida al interior del Partido Comunista de España, que se escindiría en 1973 y que en 1977 formará el Partido Comunista de los Trabajadores, de orientación marxista-leninista.

<sup>503</sup> *Medicina Socialista*, Oposición de Izquierdas del PCE en la Facultad de Medicina, Julio de 1973, p. 7, F. Pablo Iglesias.

<sup>504</sup> “Comunicado”, Oposición de Izquierda del PCE a todos los estudiantes, 14 de Septiembre de 1973, p. 1. AHPCE.



sentido, consideraba que el movimiento estudiantil había utilizado una dinámica poco adecuada, basada en el patrón de estímulo – respuesta, y que no había sido capaz de llevar la iniciativa en la lucha contra el Régimen. Criticaba fuertemente al PCE y sus intentos de llevar adelante una reforma democrática de la universidad y consideraba que el movimiento estudiantil carecía “de toda confianza política en un partido dirigente de la lucha tanto en la universidad como en todo el país unido al mundo que lucha por el socialismo en su conjunto”.<sup>505</sup>

La *Organización Comunista de España Bandera Roja*<sup>506</sup> hacía la misma crítica hacia la lucha basada en la dinámica de agresión - respuesta, y promovía la creación de un movimiento estudiantil coordinado sobre bases autónomas con objetivos políticos y reivindicativos propios, que dirigieran las luchas hacia las aspiraciones democráticas.<sup>507</sup>

En este sentido, a partir de finales de 1973 comienzan a surgir cada vez con más fuerza las voces que postulan la unión de los estudiantes con los otros movimientos de oposición, especialmente con el movimiento obrero. La antigua idea de que los estudiantes podían ser una vanguardia dentro de los grupos de oposición da paso a una noción de coordinación de estos grupos en torno a reivindicaciones comunes. La OCE-BR postulaba también la creación de grandes plataformas reivindicativas capaces de articular “un movimiento amplio, masivo, estable y organizado, capaz de coordinarse y de potenciar formas conjuntas de movilización con otros sectores de la enseñanza (PNN, licenciados, maestros...), capaz asimismo de participar en las campañas generales del movimiento obrero a través de la coordinadora efectiva entre Comisiones Obreras y las Organizaciones de masas de los estudiantes”.<sup>508</sup> Para lograr esto, proponían potenciar los Comités de Curso – que durante el último curso habían sido la única estructura organizativa más o menos permanente – como núcleos de defensa de las reivindicaciones estudiantiles. La ventaja de los Comités de Curso, según la OCE-BR, era que “parten del curso para volver al curso. Parten de los estudiantes más avanzados del curso para sintetizar y dirigir las reivindicaciones de sus compañeros”.<sup>509</sup>

---

<sup>505</sup> “Comunicado”, Oposición de Izquierda del PCE a todos los estudiantes, 14 de Septiembre de 1973, p. 1. AHPCE.

<sup>506</sup> La Organización Comunista de España Bandera Roja, (OCE-BR) fue una agrupación política de ideología maoísta, escindida del PSUC en 1970. Tuvo una participación política destacada, especialmente en Cataluña, En 1989 vuelve al PSUC-PCE.

<sup>507</sup> *Tribuna Comunista*, Órgano de la OCE-BR, Octubre de 1973, p. 7. F. Pablo Iglesias.

<sup>508</sup> Ibid.

<sup>509</sup> Ibid.

En la misma línea, la *Juventud Socialista de Madrid* publicaba en su periódico *Prensa Libre Socialista*, que el futuro del ME debía basarse en “la integración del movimiento universitario en el Movimiento general de la enseñanza y su coordinación con el resto de los movimientos antifascistas y en particular del Movimiento Obrero y sus organizaciones de masas”.<sup>510</sup> Los jóvenes socialistas también apoyaban la creación de los Comités de Curso, ya que los consideran como “organizaciones unitarias de base”, con un funcionamiento democrático que permite agrupar a todos los estudiantes, tanto militantes como no militantes, en torno a las luchas universitarias.

Por su parte, el PCE, a través de la Organización Universitaria, también hacía un análisis crítico del estado del movimiento estudiantil durante el curso 72-73, señalando que se había perdido una valiosa oportunidad política al no aprovechar la retirada de la policía de la universidad.

“La salida de la policía pone de manifiesto la inexperiencia de la gran mayoría de los estudiantes para autogobernarse, la estrechez de las formas de participación democrática, y, en definitiva, los perniciosos hábitos de funcionamiento “vanguardista” y clandestino (...) Más de un año después de la salida de la policía de las facultades, éstas están muy lejos de ser el bastión inexpugnable del ME que pueden y deben ser”.<sup>511</sup>

El diagnóstico que hacían los comunistas del movimiento estudiantil también decía relación con la coordinación del ME con otros sectores de la Enseñanza y con el movimiento obrero. Sin embargo, postulaban que para relanzar las luchas estudiantiles era necesario partir de los problemas específicos de cada centro y facultad, para así “formular correctamente las reivindicaciones más queridas por los estudiantes y buscar el punto de ruptura”.<sup>512</sup> Además, como ya era habitual entre los estudiantes comunistas, se achacaba parte del desgaste del ME a la inexistencia de una organización unitaria que coordinara a las distintas facultades y distritos universitarios, y a la incapacidad de establecer vínculos permanentes con profesores y catedráticos.

Ahora bien, parte del desgaste que sufría el ME se debía, según la Organización Universitaria del PCE a aquellos grupos radicales que pretendían crear un movimiento de vanguardia, centrado en la lucha contra la represión ya que “no ofrecen alternativa alguna a los problemas estudiantiles, quitan toda proyección al movimiento, lo debilitan

---

<sup>510</sup> *Prensa Libre Socialista*, Juventud Socialista de Madrid, Octubre de 1973, p. 7. F. Pablo Iglesias.

<sup>511</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1973, p. 2. AHPCE.

<sup>512</sup> *Ibid.*, p. 7.

en la Universidad y lo aíslan en la sociedad, lo encierran en una dinámica meramente antirrepresiva”.<sup>513</sup>

Como un intento de reactivar las movilizaciones estudiantiles, *Vanguardia* lanzó un programa general que buscaba responder a la universidad que la mayoría de los estudiantes deseaba. En este sentido, no era un programa para establecer una alternativa socialista al sistema de enseñanza (y lo dejan claramente explicitado), sino más bien un conjunto de reivindicaciones y temas abiertos a la discusión. En primer lugar, se rechazaban todas las formas de “desmasificación de la Universidad, en particular la selectividad y el *numerus clausus*. Se exigía una educación universitaria gratuita y abierta a todas las clases sociales. En segundo lugar, se exigía una educación “abierta a todas las corrientes de pensamiento sin discriminación”<sup>514</sup> y una actualización de los contenidos de la enseñanza. En tercer lugar, una reivindicación que cobra fuerza en estos años es la referida a la gestión democrática de la universidad, a la participación de los estudiantes en la discusión y decisión de los grandes temas universitarios.

Con todo, los estudiantes comunistas no estaban de acuerdo con organizar el ME basándose en los Comités de Curso. Para ellos eran estructuras burocráticas o de vanguardia, y lo que el movimiento requería era “agrupar masivamente a nivel de distrito a todos los compañeros que están al frente de las asambleas y luchas estudiantiles, dotarles de una continuidad a nivel de coordinación del distrito y tratar de promover iniciativas semejantes – reuniones amplias y democráticas – que doten de continuidad en cada Facultad”.<sup>515</sup>

Ahora bien, la represión impuesta por el ministro Rodríguez, lejos de calmar los ánimos de los estudiantes, los agitó. Así, en diciembre, los comunistas de *Vanguardia* llamaban a movilizaciones y luchas en las Facultades y en la calle, y especialmente, a coordinarse con los catedráticos.

“El Régimen sabe, igual que nosotros, que las condiciones objetivas de la Universidad bajo la aplicación concreta de la Ley al ‘estilo’ Julio Rodríguez, favorecen enormemente la confluencia de los tres estamentos enfrentados al Ministerio. (...) Cuando nuestras luchas despegan, saltan a la prensa – rompiendo así su silencio –, preparan su extensión a nivel local y nacional,

---

<sup>513</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1973, p. 12-13. AHPCE.

<sup>514</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>515</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Diciembre de 1973, p. 3. AHPCE.

empiezan a ser capaces de dirigir al bloque universitario hacia el “choque con el Gobierno”.<sup>516</sup>

Otro tema que convocó a los estudiantes durante el segundo semestre de 1973 fue el Proceso 1001, del Tribunal de Orden Público en contra de la cúpula de Comisiones Obreras. Desde *Vanguardia* se hacían constantes llamados a oponerse a este juicio, que además, comparaban con el de Burgos, de finales de 1970.

“Los miles de estudiantes de todo el país estamos presentes. Y esta presencia está motivada no sólo para expresar nuestro apoyo total a la clase obrera, sino para luchar por nuestros propios objetivos: contra la LGE, contra los planes de estudio impuestos, contra los encarcelamientos de estudiantes, contra las expulsiones de compañeros de la Universidad, contra las torturas, multas. Por una Universidad democrática. Por la Libertad”.<sup>517</sup>

CC.OO. convocó a una huelga en solidaridad con los acusados para el día 12 de diciembre, a la que se adhirieron los diversos grupos políticos de la universidad.<sup>518</sup>

Como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, a finales de 1973 se fue haciendo cada vez más visible un nuevo grupo político, la *Joven Guardia Roja* (JGR), organización juvenil del PCE (i) de tendencia maoísta, que llegará a disputar con el PCE el control del movimiento estudiantil. La JGR logrará, a partir de su fundación a comienzos de la década de los 70, una presencia importante, tanto entre los estudiantes secundarios como entre los universitarios.

Sin embargo, cualquier iniciativa de los estudiantes quedó estancada debido al asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, el día 20 de diciembre de 1973. Este suceso produjo un importante cambio de gabinete: Julio Rodríguez salió del Ministerio de Educación y en su reemplazo se nombró a Cruz Martínez Esteruelas, quién dio marcha atrás a la implantación del polémico “calendario juliano”. Pero además, producto del asesinato de Carrero Blanco, la represión se profundizó en los recintos universitarios. Las organizaciones de extrema derecha como los *Guerrilleros de Cristo Rey* y *Fuerza Nueva* comenzaron a realizar diversas actividades propagandísticas y de amedrentamiento, especialmente contra los estudiantes de izquierdas.

Con todo, las incipientes luchas mantenidas por los estudiantes durante el primer trimestre del curso 73-74 serán un incentivo para lo que vendrá después. Los grandes

---

<sup>516</sup> Ibid., p. 2

<sup>517</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1973, p. 7. AHPCE.

<sup>518</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 357.

motivos de reivindicación de los estudiantes ya están planteados, y las medidas tomadas por el nuevo Ministro de Educación durante 1974 les darán más motivos para movilizarse. En este sentido, ¿podríamos hablar de un resurgimiento del Movimiento Estudiantil en 1973? Posiblemente sí, ya que las oportunidades políticas están planteadas y los marcos de significado también han adquirido cohesión entre los estudiantes. El problema sigue siendo la estructura organizativa del ME, que durante 1974 se convertirá en el centro del debate entre las organizaciones estudiantiles.

## **II. El asesinato de Puig Antich, la Ley de Selectividad y el relanzamiento del Movimiento Estudiantil.**

Del mismo modo que la política represiva de Julio Rodríguez durante 1973, el asesinato con garrote vil del miembro del *Movimiento Ibérico de Liberación*, Salvador Puig Antich, el día 2 de marzo de 1974, también fue un revulsivo para la universidad. La condena a muerte del joven estudiante – por el asesinato de un miembro de la BPS en septiembre de 1973 –, fue recibida con horror diversas organizaciones políticas, tanto nacionales como internacionales. Partidos políticos, asociaciones de derechos humanos y hasta el Vaticano pidieron el indulto para Puig Antich, pero a diferencia de lo ocurrido en el Juicio de Burgos, estas peticiones no fueron tomadas en cuenta, “y las ejecuciones fueron seguidas de una nueva ola de protestas contra el franquismo en buena parte de los países europeos”<sup>519</sup> y también en la universidad española. Incluso, el Parlamento Europeo manifestó su repudio al asesinato del joven, declarando que las reiteradas violaciones del Régimen español a los derechos humanos hacían imposible la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

El día 3 de marzo se produjeron diversos enfrentamientos entre la policía y los estudiantes de la Ciudad Universitaria. En las Facultades se colgaron carteles en contra de la pena de muerte, crespones negros, etc. “Grupos de estudiantes se manifestaron a media mañana en el ‘campus’, momento en el que intervino la policía y se produjeron los enfrentamientos y algunos disparos al aire. La anormalidad académica se produjo fundamentalmente en las Facultades de Derecho, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociología”.<sup>520</sup>

---

<sup>519</sup> Carme MOLINERO y Pére YSAS.: *Anatomía del Franquismo*, Barcelona, Crítica, 2008, p. 190.

<sup>520</sup> *Informaciones*, 4 de Marzo de 1974. BNE.

Los estudiantes comunistas hicieron un llamado “¡A TODOS LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y CATEDRÁTICOS! ¡A TODOS LOS DEMÓCRATAS Y REVOLUCIONARIOS!”<sup>521</sup> a movilizarse en protesta por el asesinato del joven estudiante catalán. Según el Comité Universitario del PCE, la muerte de Puig Antich evidenciaba la frágil situación en la que se encontraba el régimen. “La Dictadura pretende hoy, acosada y debilitada, desatar una oleada de terror para intentar frenar algo evidente: la firme decisión de nuestro pueblo, del conjunto de nuestra sociedad, de restablecer una convivencia libre y democrática, alejada de la actual situación”.<sup>522</sup>

Frente a este panorama, los estudiantes comunistas veían dos opciones: la primera era la representada por el régimen, que “obsesionado exclusivamente en la idea del mantenimiento de la actual situación no duda en arrastrar al país hacia un nuevo baño de sangre”. La segunda opción era “la opción de la Amnistía, de las libertades de reunión y expresión, de la supresión de tribunales y policías especiales (...) Frente a un régimen que en su descomposición amenaza con hundir a España en la violencia y el caos, urge el diálogo, la convergencia de todas las fuerzas interesadas en el paso de la Dictadura a la Democracia”.<sup>523</sup>

Las movilizaciones se intensificaron durante el mes de marzo y fueron particularmente fuertes en Madrid, donde se produjeron alteraciones del orden y enfrentamientos con la policía. Según *Informaciones*, a las protestas de los estudiantes se sumaron también los PNN, plegándose a los paros. La Ciudad Universitaria fue estrechamente vigilada por la policía. “Además de los enfrentamientos que se registraron por la mañana en la Complutense, hubo paro también en la Autónoma y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica. Se registraron numerosas detenciones”.<sup>524</sup> El día 5 de marzo, las asambleas de estudiantes decidieron guardar luto por el joven anarquista, mientras la policía desalojaba facultades y centros, y aumentaban las detenciones. El día 6, un grupo de estudiantes arrojó cócteles molotov a la secretaría de la Facultad de Políticas de la Complutense, y el 10 de marzo, producto de los incidentes, se cerró la Facultad de Derecho durante dos días. Sin

---

<sup>521</sup> “Comunicado del Comité Universitario del PCE”, Marzo de 1974, p. 1. AHPCE.

<sup>522</sup> Ibid.

<sup>523</sup> Ibid.

<sup>524</sup> *Informaciones*, 5 de Marzo de 1974. BNE.

embargo, esto no ayudó a calmar los ánimos. Cuando se reabrió la Facultad, la inasistencia fue generalizada.

El día 13 de marzo, un grupo de treinta estudiantes de Derecho solicitó al decano de esa Facultad la posibilidad de llevar a cabo actividades culturales, participar en la elaboración de los planes de estudios, convocar a las Juntas de Facultad y Sección con participación estudiantil, la retirada de la policía del centro y del campus, y libertad para celebrar Asambleas. Cuando estaba reunidos en el despacho del decano, la Policía desalojó el despacho con violencia.

El supuesto “espíritu del 12 de febrero”, encabezado por el nuevo gobierno de Arias Navarro quedaba así en agua de borrajas. Como señala Gregorio Valdelvira, el aperturismo predicado por Arias no tuvo concreción en la universidad: la BPS y la policía entraban a los recintos universitarios todos los días a retirar carteles, requisar propaganda y disolver asambleas.<sup>525</sup> El conflicto con el obispo Añoberos en febrero y el asesinato de Puig Antich en marzo fueron claras señales del cambio gatopardiano del Régimen. “Para muchos observadores extranjeros, para buena parte de la sociedad española y obviamente para el antifranquismo, el “espíritu del 12 de febrero” era un viaje a ninguna parte”.<sup>526</sup>

Con todo, el gran tema que movilizó a los estudiantes durante el año 1974 fue el decreto de Selectividad. El mismo día del asesinato de Puig Antich, el Ministerio de Educación hizo públicas las decisiones tomadas en el Consejo de Rectores reunido a finales de febrero. Las medidas más importantes fueron las relacionadas con la autonomía universitaria, la participación de los estudiantes y la selectividad. En cuanto a la primera, el Consejo de Rectores consideraba que, para elevar la calidad de la docencia y de la investigación era necesario regular la autonomía universitaria, así como la estructura interna de la universidad. En cuanto a la autonomía universitaria, el Consejo de Rectores señalaba que ésta debía plantearse dentro de un marco jurídico que contemplara, entre otras cosas, la selección del alumnado, que era “cuestión vital para la calidad universitaria a que se aspira y está relacionada con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros e informado favorablemente por el Consejo de Rectores”. Y también la participación del profesorado en la designación de los cargos académicos y en la elaboración de los planes de estudio.<sup>527</sup>

---

<sup>525</sup> G. VALDELVIRA, *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 180.

<sup>526</sup> MOLINERO e YSÀS, *Anatomía del franquismo*, p. 190.

<sup>527</sup> ABC, 2 de Febrero de 1974. BNE.

En relación a los estudiantes, el Consejo de Rectores insistió especialmente en que el acceso a la universidad debía depender exclusivamente de la capacidad intelectual, y también se comprometía a incentivar todo tipo de actividades formativas culturales, servicios asistenciales, políticas de becas y representación estudiantil. Este último punto era especialmente sensible para el movimiento estudiantil, y a su alrededor se producirán agrias disputas entre los grupos de estudiantes, especialmente cuando el Ministerio apruebe el Decreto sobre participación estudiantil de 17 de octubre.

El anuncio de que el Consejo de Rectores acordaba remitir a las Cortes el proyecto de Ley de selectividad fue suficiente para que, desde diversos sectores del área de la enseñanza, se lanzaran fuertes críticas. De esta manera, el 14 de marzo, ABC publicó una nota señalando que el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de Madrid consideraba improcedentes las pruebas de selectividad ya que “anulan el régimen de evaluación continua con el que se viene calificando, de arreglo a la normativa vigente, en el curso de orientación universitaria”. Juzgaban también que, dada la fecha en la que se estaba anunciando la selectividad, era imposible que los estudiantes pudieran prepararse adecuadamente, y finalizaban criticando la decisión del Ministerio de no consultar a profesores y estudiantes antes de tomar una decisión que los involucraba directamente.<sup>528</sup>

En vista de que el anuncio del Decreto de selectividad se hizo prácticamente al mismo tiempo que la ejecución de Puig Antich, las movilizaciones de los estudiantes durante el mes de marzo tuvieron un doble carácter, por un lado, la protesta por la aplicación de la pena de muerte y, por otro, la protesta en contra de la selectividad, aunque sin duda el segundo motivo fue el que articuló el conflicto estudiantil durante el año 1974. Además, el conflicto por la selectividad consiguió atraer a un nuevo sector de la enseñanza: el de los estudiantes de COU y de bachillerato. De esta manera, el día 16 de marzo, un pequeño grupo de estudiantes de COU realizó una concentración pacífica ante el Ministerio de Educación para protestar en contra de la ley de selectividad.<sup>529</sup>

Por su parte, la *Asociación Nacional de Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media* también mostró su sorpresa y extrañeza ante la ley de selectividad. En una nota firmada por su presidente, Antonio del Toro, se criticaba duramente el que esta decisión haya sido tomada de espaldas a los sectores afectados, especialmente cuando pocas semanas antes, la Asociación había pedido al Ministerio que tomara en cuenta su

---

<sup>528</sup> ABC, 14 de Marzo de 1974. BNE.

<sup>529</sup> ABC, 17 de Marzo de 1974. BNE.



opinión “para el estudio o resolución de cualesquiera problemas docentes, jurídicos, administrativos o económicos relativos a la Enseñanza Media y al acceso a la Universidad, a los cuerpos docentes y a la educación en general”.<sup>530</sup> Además, el comunicado de la Asociación señalaba que si el proyecto de ley seguía adelante, consideraría recomendar a los catedráticos de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media que facilitaran la evaluación positiva de los alumnos del COU, debido a la gran depreciación de las calificaciones que se contemplaba en el proyecto de ley. También consideraba recomendar a dichos catedráticos que no participaran en los Tribunales universitarios y que renunciaran a impartir el COU a partir del próximo año académico. Finalmente, el comunicado nota era tajante al asegurar que este proyecto de ley de selectividad, que afectaba directamente a los alumnos que en ese momento realizaban el COU, “vulnera las condiciones jurídicas concretas en que tales alumnos hicieron su inscripción en el mencionado Curso”.<sup>531</sup>

Desde comienzos de abril, las movilizaciones en contra de la selectividad universitaria se sucedieron por toda España, mientras varias organizaciones de estudiantes y de padres manifestaron su rechazo a este proyecto. La Junta Diocesana de Padres de Familia de Barcelona, en un comunicado, señalaba que “las pruebas de selectividad contradicen los valores educativos propugnados por la Ley General de Educación y las normas de su aplicación y desarrollo”.<sup>532</sup> Por su parte, la Asociación de Padres de Alumnos de la Universidad de Oviedo, consideraba que la selectividad vulneraba tanto el principio de igualdad de oportunidades, como los derechos académicos de los estudiantes del COU. En este sentido, las principales críticas contra la selectividad decían relación con la lesión de los derechos de los actuales estudiantes del COU, la discriminación de dos categorías de universitarios, los de las Escuelas Técnicas y Facultades (que sí debían rendir las pruebas de selectividad) y los de Escuelas Universitarias (que no las rendían), la degradación del principio de autonomía universitaria, y la realización del proyecto a espaldas de los sectores más afectados. Con todo, sí hubo algunas voces a favor del decreto, como la de la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo, que la consideró totalmente necesaria.<sup>533</sup>

---

<sup>530</sup> *ABC*, 19 de Marzo de 1974. BNE.

<sup>531</sup> *Ibid.*

<sup>532</sup> *ABC*, 5 de Abril 1974. BNE.

<sup>533</sup> *Ibid.*

Por su parte, las diversas organizaciones políticas del ME también manifestaron su más profundo rechazo a la Ley de selectividad. *Vanguardia* señalaba lo paradójico que resultaba que el régimen se preocupara de la calidad de la enseñanza, cuando “durante más de 30 años ha mantenido el caos y el oscurantismo en la Cultura y la Enseñanza, no ha vacilado en expulsar a centenares de profesores e intelectuales calificados en base a su disidencia política (...), [y] ha mantenido uno de los presupuestos más bajos en Educación e Investigación”.<sup>534</sup> En este sentido, lo que el régimen pretendía, según los estudiantes comunistas de *Vanguardia*, era crear un sistema educativo en donde los procesos de selectividad fueran constantes, desde la Educación General Básica hasta la universidad, de modo de que ésta última pudiera producir los cuadros técnicos mínimos que las clases dominantes necesitaban.

Siguiendo este mismo argumento, los militantes de OCE-BR criticaban al ministro Martínez Esteruelas, ya que sus medidas sólo buscaban imponer la reforma educativa y profundizar la selectividad y la represión.<sup>535</sup> Por su parte el *Movimiento Comunista de España*, a través de su órgano *Servir al Pueblo*, también se hace eco de las críticas a selectividad, considerada como una manera de mantener el actual sistema porque “para atender la España de ellos (...) les basta y sobra con unos pocos miles de personas seleccionadas. Esa es la razón de ser de la selectividad”.<sup>536</sup>

La polémica generada en torno a la selectividad fue una inmejorable oportunidad política que los estudiantes supieron aprovechar. A las intensas manifestaciones y movilizaciones del mes de marzo, siguieron nuevos intentos de coordinación en abril. Así, a mediados de ese mes se convocó a una nueva Reunión General de Universidades, la cual contó con la asistencia de representantes de diversas universidades españolas (Autónoma, Central y Politécnica de Barcelona, Bilbao, Granada, Autónoma, Complutense y Politécnica de Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza). Pese a que no todos los participantes tenían el mismo nivel de representatividad (algunos eran representantes estudiantiles, otros delegados de organizaciones universitarias del ME, e incluso algunos simplemente observadores), la RGU lanzó un comunicado dando cuenta de la importante coyuntura del momento: “Las últimas actuaciones del Gobierno Arias – desde el asesinato de Puig

---

<sup>534</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Abril 1974, p. 1-2. AHPCE.

<sup>535</sup> *Política Comunista*. Revista teórica y política de la OCE-BR, Abril 1974, p. 14. F. Pablo Iglesias.

<sup>536</sup> *Servir al pueblo*, Órgano de la dirección del MCE, Abril 74, p. 16. F. Pablo Iglesias.

Antich, hasta las subidas de precio – ponen aún más, si cabe, a la orden del día el problema de la liquidación de la Dictadura y la consecución de las libertades políticas. Esta es una tarea fundamental a plantearse también en la Universidad”.<sup>537</sup>

Además del diagnóstico del régimen que hizo la RGU, quizás la medida más importante fue el lanzamiento de un Programa Mínimo para el movimiento estudiantil, que ponía en primer lugar los problemas de la universidad. En este sentido, los estudiantes reunidos hacían una fuerte crítica a las medidas del nuevo Ministro ya que las consideraban como una manera de concretar los aspectos más clasistas de la LGE. “El nuevo proyecto de Ley sobre Selectividad y el proyecto de financiación, según el cual el coste de la enseñanza caería sobre los estudiantes, constituyen un claro ejemplo de cómo se pretende impedir el acceso del pueblo a la Enseñanza y a la Cultura, todo ello demuestra la incesante demagogia actual acerca del “Principio de Igualdad de Oportunidades” que a nadie consigue engañar”.<sup>538</sup> Los principales puntos del Programa Mínimo eran:

- 1.- No a la selectividad y retirada inmediata del proyecto de ley. Además, exigían que los nuevos planes de estudio se declararan provisionales, y que se crearan comisiones mixtas de estudiantes y profesores para elaborar nuevos planes de estudio de forma democrática.
- 2.- Autonomía y gestión democrática en la universidad. Se exigía la participación democrática en Juntas, Claustros, departamentos y en todos los órganos de gestión de los centros universitarios.
- 3.- Retirada de la policía de la universidad y oposición a las sanciones, expedientes, detenciones y cierres de los centros.
- 4.- Amnistía universitaria y libertades democráticas en la universidad, se exigía también el derecho a realizar asambleas, a la libertad de expresión, a la inmunidad de los representantes de los estudiantes, etc.<sup>539</sup>

Junto con la presentación de este programa, la RGU también hizo un llamado a los estudiantes y a todos los sectores de la enseñanza para realizar una manifestación, el día 8 de mayo, en donde se exigiera al Ministro la retirada del Proyecto de Ley de

---

<sup>537</sup> “Comunicado de la Reunión General de Universidades”, 12 a 14 de Abril de 1974, p. 1. AHPCE.

<sup>538</sup> Ibid.

<sup>539</sup> Ibid.

selectividad. En caso de que esto no sucediera, se convocaba a la huelga el día 9 de mayo.<sup>540</sup>

Ahora bien, la propuesta de la Reunión General de Universidades no fue la única. Los militantes de OCE-BR, también redactaron un programa que tenía por objetivo reconstruir al movimiento estudiantil e impulsar una lucha masiva, coordinada y unificada.<sup>541</sup> En este contexto, sus reivindicaciones eran prácticamente las mismas que las planteadas por la RGU: contra la selectividad, contra los planes de estudio tecnocráticos, por un mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones pedagógicas de la enseñanza, por la gestión democrática de la universidad, por las libertades democráticas y contra la represión. Una novedad que presenta la propuesta de la OCE-BR es la idea de unir las luchas reivindicativas de los estudiantes con las luchas políticas generales “para incorporar al movimiento estudiantil a la lucha por las libertades políticas para el pueblo”.<sup>542</sup>

*Bandera Roja* también realiza un diagnóstico crítico de la situación del ME desde las luchas de Medicina en 1972 hasta ese momento. El principal problema que presentaría el movimiento, según OCE-BR era que

“había caído en muchas ocasiones en una dinámica de movilizaciones de la vanguardia politizada contra las agresiones de la Dictadura, [lo] que podría suponer un grave peligro de aislamiento para la propia lucha universitaria. La pura dinámica de agresión-respuesta, sin bases sólidas de lucha reivindicativa y política de masas, y sin una clarificación de los objetivos de lucha a medio y largo plazo de los estudiantes y sin formas organizativas realmente de masas, encierra el peligro de aislamiento de la vanguardia politizada del resto de los estudiantes, y del mismo movimiento estudiantil con respecto al movimiento obrero y al conjunto de los distintos movimientos populares y democráticos”.<sup>543</sup>

El certero análisis de *Bandera Roja* apuntaba a un tema fundamental, que era sindicado como el talón de Aquiles del movimiento estudiantil: su aislamiento o su incapacidad para conectar las luchas universitarias con el movimiento general de oposición. En este sentido, si bien las luchas llevadas a cabo en el curso 71-72, impulsadas por el conflicto en la Facultad de Medicina, fueron un momento importante dentro del devenir del ME (especialmente, debido a las formas de coordinación que desarrollaron), no lo podemos considerar como un relanzamiento del movimiento

---

<sup>540</sup> Ibid., p. 2.

<sup>541</sup> *Política Comunista*, Revista teórica y política de la OCE (Bandera Roja), Abril de 1974, p. 34. F.

Pablo Iglesias.

<sup>542</sup> Ibid., p. 38.

<sup>543</sup> Ibid., p. 34.

estudiantil debido a que no tuvo continuidad en el tiempo. Dicha continuidad sí la podremos encontrar en las luchas del curso 73-74 y posteriores, básicamente porque los estudiantes logran combinar sus reivindicaciones sectoriales con las luchas generales del país, aunque quizás a costa de sacrificar su identidad como movimiento social.

Para sortear la desconexión entre luchas estudiantiles y luchas generales, *Bandera Roja* proponía impulsar las luchas en contra de la política educativa del régimen pero además, unir esas luchas reivindicativas con la lucha política de los movimientos obrero y popular, y “de todos los sectores democráticos antifranquistas por las libertades políticas y la República”.<sup>544</sup> Los artífices de esta unión debían ser los Comités de Curso, que actuarían como organizaciones de masas de los estudiantes y como enlaces de coordinación con otros movimientos de lucha. Junto a esto, OCE-BR proponía la realización de tareas de propaganda, destinadas a educar a los estudiantes en el socialismo. Es interesante como ya algunos grupos políticos comienzan a utilizar un lenguaje menos revolucionario, en donde el socialismo va dando paso a la democracia, aunque no se abandona completamente el primero.

Por su parte, los militantes del PCE (I), desde su periódico *Mundo Obrero Rojo*, también hacen un llamado a luchar contra la selectividad, y también hacen un diagnóstico crítico de la situación del ME:

“Durante los últimos años prácticamente no han cesado las luchas estudiantiles en España; giraban básicamente alrededor de los mismos problemas (la selectividad, las medidas represivas, la falta de libertad para reunirse, expresarse, organizarse, etc.) pero no llegaron a cuajar en ese fuerte movimiento unitario que necesitan todos los estudiantes de España, con unos objetivos y unas demandas comunes. Las luchas quedaban aisladas y la fuerza de las masas estudiantiles se diluía”.<sup>545</sup>

Para solucionar esta debilidad, al igual que OCE-BR, los militantes del PCE (I) proponían una estrecha colaboración entre estudiantes y obreros ya que los deseos de recuperar la democracia eran comunes a todos ellos. “El movimiento estudiantil debe, a su vez, ir haciendo suyas en el curso de la lucha las demandas democráticas generales del pueblo, todas las libertades que nos arrancó el fascismo, así como la amnistía

---

<sup>544</sup> Ibid.

<sup>545</sup> *Mundo Obrero Rojo*, Órgano central del Partido Comunista de España (Internacional), 3 de Mayo de 1974, p. 4. F. Pablo Iglesias.

general para los presos y exiliados políticos y el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades vasca, catalana y gallega”.<sup>546</sup>

Por su parte, el PCE y el PSUC (rama catalana del PCE) también realizaron una evaluación del papel del movimiento estudiantil en los últimos años y coincidieron con los demás grupos políticos en que era necesaria una ampliación de las reivindicaciones sectoriales para evitar que el ME se desgastara en pequeños conflictos y explosiones esporádicas. En este sentido, era imprescindible hacer del movimiento un “portavoz y exponente no ya de las opiniones estudiantiles únicamente, sino de las diversas opciones políticas y sociales que coinciden con la necesidad de un marco democrático para la resolución de la problemática educativa”.<sup>547</sup>

La propuesta entonces era crear un movimiento estudiantil que incluyera a la gran mayoría de los estudiantes y que fuera capaz de dar un planteamiento político y social a sus reivindicaciones. Vale decir, era necesario incluir las reivindicaciones y propuestas de los estudiantes en un marco político general, y plantear la problemática educativa desde un contexto más amplio, “de transformaciones de tipo económico y social que apunten hacia una perspectiva antimonopolística, de avance hacia el socialismo”. Los estudiantes comunistas consideraban que en abril de 1974, se estaban produciendo “las condiciones para realizar la REVOLUCIÓN POLÍTICA que conquiste la democracia”.<sup>548</sup> Nuevamente podemos observar un cambio en el lenguaje utilizado por los estudiantes del PCE y PSUC, que combina los planteamientos democráticos con los socialistas. En este sentido, la radicalización ideológica que había afectado al movimiento estudiantil a partir de 1970, comienza a dar paso a un discurso más moderado, imbuido del lenguaje democrático, aunque sin abandonar del todo los anhelos revolucionarios.

Uno de los grupos más radicales que actuaban en la universidad en esos años era la *Liga Comunista*, grupo de orientación trotskista y minoritario, y de ella vendrán las críticas más duras hacia el ME y su capacidad de lucha. Desde su periódico *Barricada*, los miembros de la Juventud del Comité Central de la *Liga Comunista* atacaron la estrategia de los diversos grupos políticos señalando que buscaban mantener el combate

---

<sup>546</sup> Ibid.

<sup>547</sup> “Declaración de la Reunión Nacional de las Organizaciones Universitarias del PCE y del PSUC”, Abril 1974, p. 2. AHPCE.

<sup>548</sup> Ibid., p. 1.

de los estudiantes por la vía reformista, desechando la alianza revolucionaria entre obreros y jóvenes.

“Empezando por el PCE, que desde su política de alianzas con la burguesía trata de buscar aliados a la juventud supeditando su lucha a decanos ‘democráticos’ y personalidades distinguidas. Tal es el sentido de ‘las fuerzas del trabajo y la cultura’ opuesta a la alianza revolucionaria entre la juventud y el proletariado (...) Este mismo planteamiento es el de BR y el que en definitiva está en el fondo de otras organizaciones como el PCI y el MCE dentro de sus diversos proyectos de “democratización” de la enseñanza que éstos plantean”.<sup>549</sup>

Ahora bien, los estudiantes de la *Liga* no se quedan solamente en críticas y también hacen una propuesta para recuperar el movimiento estudiantil, básicamente a través de la creación de una alianza revolucionaria de los estudiantes con el proletariado, lo que permitiría articular una lucha más eficaz en contra la LGE.<sup>550</sup>

El día 3 de mayo, una Junta de Estudiantes Delegados de la Universidad de Madrid publicó en el periódico *Mundo Obrero Rojo*, una carta abierta al Ministro de Educación rebatiendo punto por punto los argumentos en favor de la selectividad. Respecto de la mala calidad de la educación, de la masificación, de la falta de infraestructura y de la mala preparación de profesorado, argumentos que se usaban para justificar la selectividad, dicen:

“podríamos hablar de cómo hay edificios medio vacíos, cómo en Medicina, miles de estudiantes se ven obligados a concentrarse en una sola aula, e incluso a no poder entrar, porque nunca llega el dinero para adecuar nuevas clases; de cómo desde hace mucho tiempo venimos pidiendo más laboratorios, bibliotecas y materiales para estudiar e investigar, sin haber recibido nunca ninguna contestación; de cómo hay realmente muchos profesores, que no sabemos si son buenos o malos porque no aparecen por la Universidad, ya que con la seguridad que les brinda su cátedra vitalicia, se dedican a cargos públicos o negocios particulares...”.<sup>551</sup>

Además, en la carta, la Junta de Estudiantes Delegados exigía la convocatoria de Juntas de Facultad,

“en las que participemos Catedráticos, Profesores No Numerarios y estudiantes en la discusión y solución de todos los problemas que se planteen en la vida universitaria. Es evidente que cuando no existen unos cauces legales de participación para los estamentos universitarios, la vida de la universidad se deja

---

<sup>549</sup> *Barricada*, Órgano de la Juventud del Comité Central de la Liga Comunista, Abril de 1974, p. 10. F. Pablo Iglesias.

<sup>550</sup> *Ibid.*

<sup>551</sup> *Mundo Obrero Rojo*, Órgano central del Partido Comunista de España (Internacional), 3 de Mayo de 1974, p. 2. F. Pablo Iglesias.

en manos de organismos y personas extrañas a ella, como ocurre en este caso, ya que hoy la Universidad está gobernada por las fuerzas de la Policía Armada, que es quien decide cuándo y cómo podemos hablar, reunirnos, etc., impidiéndonos por la fuerza que nos interese por nuestros propios problemas”.<sup>552</sup>

También exigían la retirada inmediata de la policía de los recintos universitarios, el levantamiento de las sanciones y expedientes abiertos a estudiantes, la derogación de los actuales planes de estudio y la retirada del proyecto de Ley sobre selectividad. En este contexto, para estos estudiantes, el único camino válido para resolver los problemas de la universidad era el ejercicio de una vida democrática.

En vista de que el ministro Martínez Esteruelas no acogió ninguna de las peticiones de los estudiantes, ni las de la Junta de Delegados ni las de la RGU, se realizó la convocatoria de una jornada de huelga en contra de la selectividad, para el 9 de mayo. Según *Informaciones*, en algunos distritos universitarios de España hubo incidentes y alteraciones académicas. La Universidad Complutense registró un paro casi total, así como las Universidades de Santiago de Compostela y Valencia. El periódico también afirma que en la UCM hubo diversos enfrentamientos entre los estudiantes y la policía que patrullaba la zona.<sup>553</sup> Sin embargo, la jornada no logró movilizar a muchos estudiantes, por lo que ABC la considera un fracaso.

Desde *Vanguardia* reconocieron la poca convocatoria que tuvo la huelga en Madrid, señalando que quizás ésta había sido mal comprendida, “viéndola más como una huelga de Universidades que como la palanca que permitiría avanzar con más rapidez en la conquista de las reivindicaciones de los distintos sectores”.<sup>554</sup>

En este contexto, las críticas de los distintos grupos políticos hacia la situación del ME, que hemos reseñado en las páginas anteriores, hacían mucho sentido: la incapacidad de conectar las luchas estudiantiles con las políticas generales había hecho fracasar la jornada del 9 de mayo. Era necesario entonces, un cambio en el ME, tanto a nivel de discurso como de organización. Y aquí nuevamente vemos posturas encontradas. Por un el PCE, que proponía la creación de un Frente Democrático de la Enseñanza, “capaz de capitalizar la enorme sensibilidad social en este plano, de aparecer ante todo el país como portavoz de una alternativa democrática a la

---

<sup>552</sup> Ibid.

<sup>553</sup> *Informaciones*, 10 de Mayo de 1974. BNE.

<sup>554</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Junio 1974, p. 2. AHPCE.



organización que la dictadura pretende hacer de la enseñanza”<sup>555</sup> Por otro lado, la *Liga Comunista* era muy crítica de la idea de crear este frente de enseñanza que vinculara solamente a estudiantes y profesores, y postulaba la necesidad de una verdadera alianza entre el proletariado y la juventud, que superara el marco universitario. Para ello era necesario crear y reformar los Comités Unitarios de la juventud, “en todos los distritos universitarios, en todos los institutos, escuelas, barrios. Crearlos allí donde no existen o tienen todavía una débil realidad, allí donde las políticas divisorias los han disuelto...”<sup>556</sup> De esta manera, la Juventud de la *Liga Comunista* propiciaba superar los límites del movimiento estudiantil, que según esta organización, había impedido relanzar verdaderamente la movilización de la juventud.

Con todo, al finalizar el curso 73-74, el ME aún no tenía la fuerza ni la organización suficiente para emprender una movilización continuada y exitosa, con lo que el año académico termina con una derrota para los estudiantes. La Ley de Selectividad terminó siendo aprobada el 24 de julio de 1974 y publicada en el BOE el 9 de enero de 1975, aunque su aplicación se aplazó hasta el curso 75-76. En el curso 74-75, sin embargo, se pondrán en práctica algunas de las propuestas hechas por los grupos políticos, y además, otros desafíos lanzados desde el régimen, en concreto el decreto de participación del 17 de octubre de 1974, permitirán al movimiento estudiantil entrar en una nueva fase de lucha.

### **III. Curso 74-75: Participación estudiantil y organización, un debate inacabado.**

#### **El decreto provisional de participación estudiantil en la universidad.**

Con este decreto, promulgado el 17 de octubre de 1974, el régimen intentaba canalizar y controlar la participación de los estudiantes en los órganos universitarios. De esta manera, la representación se establecía en varios niveles: de Curso, de Centro Universitario y de Universidad (también existía el nivel de Grupo o Sección, en caso de que los cursos estuvieran divididos en ellos). Lo interesante de este decreto es que los representantes del primer nivel, es decir, de Curso, se elegirían por vía directa, y de entre ellos salía un delegado, un subdelegado y un número de consejeros igual al cinco

---

<sup>555</sup> Ibid.

<sup>556</sup> *Barricada*, Órgano de la Juventud del Comité Central de la Liga Comunista, abril de 1974, p. 13. F. Pablo Iglesias.

por ciento de los alumnos oficiales matriculados (pero nunca superior a 8).<sup>557</sup> Para que las elecciones fueran válidas, el quórum debía ser el 50% de los alumnos oficiales matriculados (con lo que quedaban fuera los alumnos libres), y además, los candidatos debían obtener la mayoría absoluta en primera vuelta.

Luego, los delegados y subdelegados de Curso constituirían el Consejo de Centro, del cual saldría el delegado y subdelegado de Centro. Los representantes de Centro constituirían a su vez el Consejo de Universidad, cuyo delegado y subdelegado se elegirían de entre los miembros de dicho Consejo. Los requisitos para ser elector o candidato a representante de curso eran ser español y alumno oficial del curso correspondiente “y hallarse en el pleno disfrute de sus derechos académicos”<sup>558</sup>, es decir, tener la matrícula vigente.

El artículo 6º señalaba que el rector era el encargado de velar por la transparencia del procedimiento, y en el artículo 8º se especificaba que a los representantes estudiantiles sólo les podría sancionar una comisión especial, integrada por un presidente (magistrado de la Audiencia Territorial respectiva) y dos vocales (catedráticos o profesores agregados del centro al que pertenezca el interesado).

El decreto fue recibido con cautela, tanto por los estudiantes como por la opinión pública. Desde *Cuadernos para el Diálogo* se lo consideró una medida positiva, en el sentido de que era la única normativa realista que había dictado el régimen sobre la materia. Era, decían, un reconocimiento parcial a la extensa lucha llevada adelante por estudiantes y profesores para conseguir una auténtica representación democrática. Sin embargo, junto con aceptar el decreto, se insistía en la necesidad de tomar otro tipo de medidas para que éste fuera operativo. En este sentido, se pedía la amnistía para todos los sancionados universitarios (estudiantes y profesores); la garantía para los derechos de reunión y expresión en todos los niveles de la universidad; y la celebración de un Congreso democrático de estudiantes, entre otros.<sup>559</sup>

Por su parte, los estudiantes recibieron el decreto con opiniones encontradas. Mientras los militantes del PCE lo consideraban un avance y promovían la participación en las elecciones, otros grupos políticos fueron menos optimistas y hubo incluso quienes lo rechazaron.

---

<sup>557</sup> Decreto 2925/1974. Por el que se regula provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario. BOE, núm. 252, 21 de Octubre de 1974, p. 21344-21345, [www.boe.es](http://www.boe.es).

<sup>558</sup> Ibid.

<sup>559</sup> “Sobre la participación estudiantil”, *Cuadernos para el Diálogo*, Noviembre de 74, núm. 134, p. 35. BNE.

Entre estos últimos estaban las *Juventudes Socialistas* (JJSS), quienes veían en el decreto un intento de parte del régimen de cooptar al movimiento estudiantil, dividirlo y separarlo de las luchas populares y de la clase obrera. “Su aparición motivó que los estudiantes se enzarzaran en discusiones sobre la participación, corriendo el riesgo de apartarse de sus problemas concretos, de su denuncia y de la lucha por su solución. Este riesgo se convirtió en realidad en las facultades donde fue aceptado, que se sumieron en un folklórico ambiente electoral”.<sup>560</sup> En este sentido, las JJSS hicieron fuertes llamados a boicotear activamente las elecciones, y a proseguir la lucha en contra de la LGE, por la amnistía y por la universidad popular.

Los estudiantes de la Organización Universitaria del PCE fueron los primeros en determinar su postura frente al decreto de participación, y lo consideraron una muestra de la fuerza del ME “De alguna forma, el movimiento estudiantil en las ciudades más avanzadas estaba ya imponiendo formas representativas electorales. Es pues, una victoria arrancada al Ministerio por una realidad que se imponía”.<sup>561</sup> En este sentido, se propusieron utilizar y superar la legalidad establecida en el decreto para hacer llegar sus propuestas a la gran masa estudiantil y a la opinión pública.

Por su parte, los estudiantes del PCE (I) y de la *Joven Guardia Roja* recibieron el decreto con suspicacia, pero decidieron participar en las elecciones. Desde *Mundo Obrero Rojo*, los estudiantes del PCE (I) manifestaban su molestia con respecto al decreto de participación, ya que lo consideraban lleno de limitaciones: no se reconocía el derecho a realizar asambleas, no se levantaban los expedientes a los estudiantes encarcelados y sancionados, no se reconocía, tampoco, el derecho a la libertad de expresión, asociación y participación a los profesores no numerarios. “Nosotros queremos la libertad completa, sin trabas ni limitaciones, pero de eso no habla el fascismo”.<sup>562</sup> Con todo, finalmente aceptaron participar en las elecciones ya que eran vistas como una oportunidad, un espacio abierto gracias a las luchas estudiantiles, que era indispensable aprovechar para atacar al régimen. Así proponían hacer de las elecciones “el mayor pronunciamiento de nuestra repulsa del Estado fascista, alentando

---

<sup>560</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Noviembre de 1974, núm. 8, p. 5. F. Pablo Iglesias.

<sup>561</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Enero de 1975, p. 8. AHPCE.

<sup>562</sup> *Mundo Obrero Rojo*, Órgano central del Partido Comunista de España (Internacional), 3 de Noviembre de 1974, núm. 28, p. 9. F. Pablo Iglesias.

a la lucha por la amnistía, las libertades, elecciones libres y por un gobierno provisional de lucha antifascista”.<sup>563</sup>

Otro grupo político que aceptó participar en las elecciones fue el *Movimiento Comunista de España* (MCE), de orientación maoísta, surgido a comienzos de la década de los 70. Desde su periódico *Servir al Pueblo*, proponían elegir delegados, pero siempre teniendo en cuenta que la participación era sólo una de las armas de lucha en contra del régimen. En este sentido, el MCE es muy enfático al declarar que era necesario combinar la lucha legal (elecciones) con la ilegal, era necesario combinar entonces “los delegados con las organizaciones políticas de estudiantes de los Comités de Curso”.<sup>564</sup> Como ya era costumbre, aprovecharon también de criticar al PCE, quien había recibido con entusiasmo la noticia del decreto porque, según el *Movimiento Comunista*, “veían en las elecciones una buena oportunidad para continuar su política de liquidación de las organizaciones políticas estables y clandestinas, como los Comités de Curso, para aislar a los sectores revolucionarios de la mayoría de los estudiantes, para recuperar su iniciativa política y hacerse con la dirección de buena parte del movimiento estudiantil”.<sup>565</sup>

Lo más interesante de la postura del MCE es su propuesta de aprovechar la pequeña apertura que significaba la campaña electoral para promover la agitación política. En este sentido, utilizaron aquellos espacios para dar a conocer sus posturas sobre los problemas de la universidad, pudiendo llegar a más alumnos. En el período de campaña electoral, “daba gusto ver asambleas de mil y mil quinientos estudiantes presididas por el decano o jefe de departamento, en las que se les llamaba fascistas a la cara, en las que se exigía la anulación de la selectividad, y en las que los estudiantes se reafirmaban en la lucha por las libertades democráticas”.<sup>566</sup>

Las organizaciones estudiantiles miembros del FRAP, como el Comité de Universidad del PCE (M-L) y FUDE (*Federación Universitaria Democrática Española*), se pronunciaron inmediatamente en contra del decreto, argumentando que no había que esperar del franquismo más libertades que “aquellas que nosotros les

---

<sup>563</sup> Ibid.

<sup>564</sup> *Servir al Pueblo*, Órgano del Movimiento Comunista de España, Diciembre de 1974, p. 18. F. Pablo Iglesias.

<sup>565</sup> Ibid.

<sup>566</sup> Ibid., p. 19.

arrancamos”.<sup>567</sup> En este sentido, FUDE llamó a renovar la lucha contra el régimen en el contexto de una huelga general.

Una vez publicado el decreto, cada universidad debía fijar las fechas de las elecciones. En la UAM se celebrarían entre el 14 y el 28 de noviembre, mientras en la UCM, lo harían entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre. En las primeras elecciones realizadas, las de la Facultad de Medicina de la UAM, varios cursos no eligieron representantes por falta de quórum e incluso, en algunos cursos ni siquiera se realizaron las elecciones.

Por su parte, las Facultades de Ciencia y de Filosofía y Letras de la UAM realizaban, por esas mismas fechas, un paro de actividades. Los estudiantes de Ciencias exigían la convocatoria de exámenes extraordinarios para los alumnos del primer, segundo y tercer curso, y la eliminación de la selectividad en el tercer curso de ciencias, mientras los de Filosofía y Letras protestaban por la expulsión de tres PNN de esa Facultad, por el levantamiento de expedientes y sanciones a estudiantes, por la posibilidad de celebrar actos culturales y por la expulsión de la policía del campus.<sup>568</sup> Respecto de las elecciones, en ambas facultades se discutía la posibilidad de participar. El 14 de noviembre, la policía ingresó y desalojó varias facultades en el campus de Cantoblanco, sin embargo el paro persistió en Ciencias y Filosofía y Letras. El 20 de noviembre, la Junta de Gobierno de la UAM decidió cerrar la Facultad de Filosofía y Letras, ante la inasistencia generalizada a clases y los permanentes conflictos allí producidos.<sup>569</sup> De esta forma, en pleno período electoral, los incidentes en los centros universitarios iban en aumento. El 21 de noviembre, los alumnos de Económicas y Ciencias de la UAM desalojaron voluntariamente sus facultades en solidaridad con los de Filosofía y Letras, y realizaron una manifestación que se dirigió hacia el Rectorado para pedir la dimisión del Rector.

Ese mismo día, en la UCM, los alumnos también desalojaron las Facultades de Derecho, Filosofía, Políticas, Ciencias y Ciencias de la Información, en solidaridad con los estudiantes de Filosofía y Letras de la UAM y realizaron una manifestación que fue disuelta por la policía, y que terminó con varios estudiantes detenidos en la DGS.<sup>570</sup>

---

<sup>567</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 391.

<sup>568</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 14 de Noviembre de 1974. P. 2. ACUAM.

<sup>569</sup> Ibid. La Facultad de Filosofía y Letras finalmente se reabrió el 25 de Noviembre de ese año.

<sup>570</sup> ABC, 22 de Noviembre de 1974. BNE.

En cuanto a las elecciones, el 23 de noviembre empezaron en la Facultad de Veterinaria de la UCM, pero no alcanzaron el quórum necesario. En Derecho, una asamblea de estudiantes, en la que participaron cerca de mil quinientos, decidió, por mayoría, no acudir a las elecciones, sin embargo, algunos cursos eligieron representantes. Según *Informaciones*, tanto la Facultad de Derecho como la de Filosofía y Letras “registraron afluencia de alumnos y en algunos casos pudieron ser elegidos delegados. En líneas generales, los alumnos de la Universidad Complutense, la más problemática de todas, a mucha diferencia de las demás, se muestran partidarios de participar aunque con algunas reservas. Hasta ahora, la oposición mayor a las elecciones proviene de grupos extremistas tanto de derecha como de izquierda”.<sup>571</sup>

Por su parte, el 27 de noviembre los estudiantes de Filosofía y Letras de la UAM votaron por el regreso a clases pero solicitaron al Rectorado la readmisión de tres profesores no numerarios de esa Facultad a los que no se les renovó el contrato, el levantamiento de la sanción de pérdida de matrícula a tres alumnos de ese centro y la dimisión del rector. Las peticiones de los estudiantes no fueron aceptadas. Los incidentes continuaron, y el 5 de diciembre, un grupo de representantes estudiantiles, en reunión con el rector y ante la poca acogida de sus propuestas, presentó su dimisión.<sup>572</sup> Con esto, la situación en la UAM se crispó más aún, y el 9 de diciembre, una concentración de más de mil doscientos estudiantes se reunió en Cantoblanco. Éstos, junto a cuarenta profesores de la UAM, escribieron una carta al Ministerio exigiendo la readmisión de tres profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, la supresión de las sanciones a los alumnos a los que se les había denegado la matrícula y la dimisión del rector.<sup>573</sup>

Durante los meses de diciembre de 1974 y enero de 1975 se celebraron elecciones en diversas facultades y escuelas en Madrid. Los resultados de dichas elecciones no están claros, según ABC la abstención fue mayoritaria, pero según el periódico de la Organización Universitaria del PCE, *Vanguardia*, las elecciones fueron un éxito. Gregorio Valdelvira, señala que en la UCM se eligieron solamente 500 delegados, de los 2000 que correspondía.<sup>574</sup> En cualquier caso, consideramos que el número de delegados que resultaron elegidos no es tan importante como el proceso

---

<sup>571</sup> *Informaciones*, 26 de Noviembre de 1974. BNE.

<sup>572</sup> *Informaciones*, 5 de Diciembre de 1974. BNE.

<sup>573</sup> *Informaciones*, 9 de Diciembre de 1974. BNE.

<sup>574</sup> G. VALDELVIRA: *La oposición estudiantil al franquismo*, p. 191.

vivido en la universidad. Las elecciones no se hicieron de forma pacífica, sino con la policía interviniendo permanentemente en los centros, desalojando facultades, deteniendo estudiantes. En algunas facultades, las elecciones se dificultaron todo lo posible, fijándose para un sábado o a horarios extremos, muy temprano o muy tarde. Pese a esto, las mismas organizaciones políticas, y en particular el PCE, lucharon para imponer ciertas condiciones que no se contemplaban en el decreto, como por ejemplo, la legalización de asambleas en las cuales los candidatos estudiantiles pudieran presentarse, la votación de los estudiantes libres e incluso la aprobación de elecciones con falta de quórum.<sup>575</sup>

Es en este sentido que consideramos que este proceso eleccionario, independiente de su resultado final, es valioso en tanto fue una primera experiencia de actuación del ME dentro de un marco lega. A partir de él, el movimiento estudiantil pudo diversificar su lucha: por un lado, intentar coordinar una organización estudiantil unitaria que fuera considerada un interlocutor válido en las conversaciones con el Ministerio, y por otro lado, continuar con sus métodos tradicionales de asambleas y movilizaciones ilegales.

Tal como señalan los autores de *Estudiantes contra Franco*, el decreto permitiría, por primera vez, que los estudiantes participaran legalmente de los órganos de gobierno. “Los delegados de curso asumieron entonces una función primordial, elaborando programas de actuación conjunta, coordinándose y extendiendo al total del territorio nacional la integración entre el total de las universidades, y en su seno, la trama del tejido más denso de las facultades”.<sup>576</sup> Sin embargo, las plataformas ilegales de representación, como la RGU o los Comités de Curso, siguieron existiendo, y de hecho, continuaron siendo la base del ME, en tanto la actuación de los delegados “legales” se vio seriamente dificultada por la actuación represiva del régimen.

Ya hemos dicho que las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de fuerte movilización y continua intervención de la policía en los recintos universitarios. Una vez terminado el proceso eleccionario, las movilizaciones continuaron, así como los enfrentamientos con la policía. Lejos de calmar al ME, las elecciones de representantes supusieron una nueva oportunidad política para manifestar su descontento con el régimen y sus políticas represivas. El 23 de enero de 1975, las Facultades de Medicina y

---

<sup>575</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Enero de 1975, p. 9. AHPCE.

<sup>576</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 389.

Ciencias de la UCM se encontraban en paro. En el caso de Ciencias, el paro se convocó producto de la detención de numerosos estudiantes en la Plaza de las Salesas, cuando se dirigían al juicio de otro estudiante de ese centro. Entre los estudiantes detenidos en la Plaza de las Salesas, se encontraban varios de los representantes elegidos pocas semanas antes.<sup>577</sup> Esta situación comenzó a poner en entredicho la eficacia del decreto de participación estudiantil, ya que en teoría, dicho decreto ofrecía garantías a los estudiantes y éstos consideraban que estaban siendo violadas.

El 5 de febrero, los representantes elegidos de la UCM y algunos de la UAM y de la Politécnica, hicieron público un comunicado exigiendo el inicio de negociaciones para redactar un estatuto de representación estudiantil que incluyera las siguientes reivindicaciones:

- Reconocimiento explícito y real de los derechos democráticos de reunión y expresión en la universidad.
- Retirada de la policía del campus.
- Legalización e inmunidad para todos los delegados elegidos.<sup>578</sup>

Al día siguiente, las tres universidades madrileñas registraron un paro casi total de actividades académicas. En la UCM se realizó una marcha pacífica en protesta por las detenciones de estudiantes y por la imposibilidad de poner en práctica el decreto de participación. En la UAM se produjeron asambleas de facultad en Ciencias y en Derecho.

Por su parte, los representantes estudiantiles de la Complutense solicitaron una entrevista con el Director General de Universidades para pedir la apertura de negociaciones sobre los Estatutos de la Universidad, la convocatoria de una reunión nacional de representantes universitarios, la convocatoria de Juntas de Facultad, la dimisión de las autoridades académicas no elegidas según los estatutos, la libertad para los estudiantes detenidos, la anulación del artículo 28 del Reglamento de disciplina académica y la retirada de la policía de la universidad.<sup>579</sup>

En este contexto, se hizo evidente la falacia que representaba el decreto de participación. Pese a haberlo aprobado, era indudable la nula disposición del Ministerio y del régimen por abrir canales reales de participación y de inclusión de los estudiantes

---

<sup>577</sup> *Informaciones*, 24 de enero de 1975, BNE.

<sup>578</sup> *Informaciones*, 5 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>579</sup> *Informaciones*, 6 de Febrero de 1975, BNE.



en las decisiones de la universidad. ¿Para qué entonces se dicta esta medida si después de entorpece su ejecución? Según el PCE, la intención era provocar a los grupos de izquierda del ME para alejarlos de las elecciones, así, “el paso aperturista se habría dado, las elecciones o bien no se habrían realizado o habrían sido ganadas por la derecha”.<sup>580</sup> Para las Juventudes Socialistas, el objetivo era desviar y retrasar la lucha de los estudiantes, y se había logrado.<sup>581</sup>

Podemos pensar esta medida también como un claro intento de parte del Ministerio de cooptar y controlar al ME, y en la medida en que esto no fue posible, se decide poner trabas a la participación. Sea como sea, los representantes estudiantiles recién elegidos prácticamente no tuvieron espacios para ejercer su función. El régimen continuó con su política represiva y continuó imponiendo medidas desde arriba, sin consultar a los estamentos universitarios. Un ejemplo patente de esto lo encontramos en el cierre de la Universidad de Valladolid.

#### **IV. El Cierre de Valladolid y el aumento de la conflictividad estudiantil.**

Paralelamente a los conflictos que hemos descrito en Madrid, la agitación universitaria se profundizaba en Sevilla, Málaga, Badajoz, Cáceres, Oviedo y Zaragoza.<sup>582</sup> El caso de Valladolid merece atención aparte, ya que el 7 de febrero la Junta de Gobierno de ese centro anunció que, en vista de la anormalidad que reinaba, se podría cancelar lo que queda del curso 74-75.

La Universidad de Valladolid había vivido un curso particularmente conflictivo, debido a la movilización estudiantil que reinaba que varias facultades, y al juicio, celebrado durante el mes de enero de 1975, en contra de varios estudiantes detenidos el año anterior. Los autores de *Estudiantes contra Franco* recalcan que el juicio se convirtió en un acto multitudinario, con encierros en el Hospital provincial, agresiones al rector y catedráticos y paros en diversas facultades. Ante este panorama, el 8 de febrero, el Ministerio de Educación decidió clausurar las Facultades de Filosofía, Ciencias, Derecho y Medicina de la Universidad de Valladolid, hasta el comienzo del curso 75-76.

---

<sup>580</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Enero de 1975, p. 9. AHPCE.

<sup>581</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Noviembre de 1974, núm. 8, p. 5. F. Pablo Iglesias.

<sup>582</sup> *Informaciones*, 7 de Febrero de 1975, BNE.

Esta medida produjo una honda preocupación en la Universidad vallisoletana, ya que con ella, casi ocho mil universitarios perdían el curso. Varios editoriales en los principales diarios de la ciudad cuestionaban la noticia, por considerarla exagerada e inútil. Así, el *Norte de Castilla* explicaba que

“nos parece que situaciones más extremas ha habido en la Universidad vallisoletana a lo largo de los últimos años, que no han obligado a tal castigo. Y, además, la decisión ministerial llega precisamente en un momento en que la situación tendía a normalizarse. Existe, en primer lugar, una desproporción evidente en la medida, y ésta resulta obviamente extemporánea. En segundo lugar, no queda más remedio que plantearse el tema de su posible justicia, porque si como se dice los desórdenes de universitarios los provoca siempre ‘una minoría revoltosa’, no es justo que pague por ellos una enorme mayoría estudiantina y formal, y que pague con un gravísimo perjuicio, no sólo económico, sino evidentemente moral, intelectual y temporal también, como es la pérdida, posiblemente irreversible, de todo un año de vida práctica”.<sup>583</sup>

Por su parte, la Diputación Provincial de Valladolid se manifestó públicamente en contra del cierre, y solicitó al Ministerio que reconsiderara su decisión. Además, un grupo de padres de familia manifestó su intención de estudiar la posibilidad de impugnar la decisión del cierre, mientras que los representantes legales de los afectados se reunieron con varias autoridades de la ciudad para que intercedieran ante el Ministerio.

La situación de la Universidad de Valladolid despertó inmediatamente la solidaridad en otros distritos universitarios. Debemos recordar que Valencia y Barcelona, además de Madrid, vivían un período especialmente conflictivo. En Madrid, durante la primera quincena de febrero, tanto la Complutense como la Autónoma registraron un paro casi total de actividades académicas, motivado por la vista del proceso 1.001 y, especialmente, por el cierre de la Universidad de Valladolid.<sup>584</sup>

El 15 de febrero, el Ministerio de Educación publicó una nota explicando el cierre de algunas facultades de Valladolid, aduciendo que el desorden era generalizado y que se habían producido graves agresiones contra el Rector. “El cierre de cuatro facultades de la Universidad de Valladolid se ha producido después de reiteradas advertencias de la autoridad académica, producidas ante la gravedad progresiva de la situación, que llegó a un momento límite, con agresión personal al propio rector de la

---

<sup>583</sup> *ABC*, 9 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>584</sup> *Informaciones*, 13 de Febrero de 1975, BNE.

Universidad y un desorden generalizado.<sup>585</sup> Por su parte, y como era de esperar, el Consejo de Ministros, reunido el 14 de febrero, expresó su completa solidaridad con el cierre de las facultades y con las medidas tomadas para poner fin a los conflictos en la Universidad. Además, reafirmaba su intención “de restablecer por todos los medios, el orden universitario”.<sup>586</sup>

Para paliar, en parte, la situación de cierre, los estudiantes de la Universidad de Valladolid, apoyados por los PNN y algunos catedráticos, formaron una verdadera universidad paralela, que se reunía en bares, cafés y otros locales, con el fin de proseguir con el aprendizaje. Los estudiantes se dividían en grupos de 15 o 20, y en cada grupo se discutían tanto las movilizaciones futuras como las tareas docentes a efectuar.<sup>587</sup>

A mediados de febrero de 1975, la situación en las universidades españolas era especialmente compleja. Además de las cuatro facultades cerradas en Valladolid, se encontraban cerradas la Universidad de Sevilla y la Facultad de Letras de la Universidad de Málaga. Existía una huelga de PNN en la Universidad de Bellaterra en Barcelona, y en las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias, Farmacia y la Escuela de Formación del Profesorado de EGB de la Universidad de Granada. En Zaragoza y Salamanca continuaban las manifestaciones y concentraciones de estudiantes, y los constantes enfrentamientos con la policía. En Madrid, la situación no era mejor. El 19 de febrero, continuaba el paro casi total de actividades en la UCM y la UAM, y la policía ingresó ese día en varias facultades, especialmente de la Complutense, para retirar carteles y disolver asambleas. Según *Informaciones*, “en Madrid las actividades docentes son escasísimas - y en la mayoría de los centros, nulas -, proliferan las asambleas y carteles a pesar de que la fuerza pública actúa con rapidez para suprimirlos. A la actitud de protesta de los estudiantes, por otra parte, se ha sumado en numerosas facultades la del profesorado no numerario”.<sup>588</sup>

Para el 20 de febrero se convocó a una jornada de huelga y marcha pacífica por la Ciudad Universitaria en solidaridad con Valladolid. “Ni un grito, ni una palabra, ni un ademán contra la fuerza pública, que en determinados momentos obligaba a dividirse a

---

<sup>585</sup> *ABC*, 15 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>586</sup> *Informaciones*, 15 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>587</sup> EQUIPO LÍMITE: *La agonía de la Universidad Franquista*, Barcelona, Laia, 1976. P. 118.

<sup>588</sup> *Informaciones*, 19 de Febrero de 1975, BNE.

la gran masa de estudiantes que se dirigían hacia la Moncloa”.<sup>589</sup> Esta marcha luego prosiguió hasta el Ministerio de Educación, en donde los representantes estudiantiles de varios distritos pensaban entrevistarse con el Ministro para interceder por los alumnos de Valladolid. Finalmente, la marcha – de 5 mil estudiantes, según *Informaciones* – fue disuelta con gran violencia por la policía, que detuvo a más de noventa personas. Por su parte, los representantes estudiantiles no fueron recibidos por el ministro. Al día siguiente, tanto *ABC* como *Informaciones* reproducen una nota de la DGS que señala que la jornada de huelga ha fracasado. “Como se había observado por los servicios de la Jefatura Superior de policía de Madrid en días pasados, distintos grupos clandestinos comunistas tenían el propósito en el día de hoy de originar una serie de alteraciones de orden público para lo que habían convocado a diversos sectores de la población para una titulada “jornada de lucha”, con la pretensión, además, de lograr una huelga general”.<sup>590</sup>

Ante esta situación de creciente conflicto en las universidades españolas, el 21 de febrero se reunió la Junta de Universidades (Consejo de Rectores) y en ella se trataron temas como el incremento de las plazas para profesorado numerario, la situación del profesorado no numerario, la consecución de nuevos créditos para investigación y prácticas, entre otros. Aunque sin duda, el debate en torno a la situación actual de la universidad española fue el más amplio y complejo. En sus conclusiones, la Junta Nacional consideró que, para garantizar el orden y la disciplina académica era necesario reforzar “las medidas que garanticen el máximo rigor y seriedad en la impartición de las labores docentes y, en general, de toda la vida universitaria”.<sup>591</sup> La Junta también solidarizó con las medidas tomadas por el Ministerio en relación a la Universidad de Valladolid.

Un elemento interesante que comienza a aparecer en este curso es la compleja relación entre las autoridades académicas y la policía, especialmente en la UCM. Si bien algunos decanos son concientes de que las actuaciones de la policía tienden a ser contraproducentes en el crispado ambiente universitario, los rectores se mostraron, por lo general, mucho más dispuestos a utilizar a las fuerzas policiales para imponer orden. En la Junta de Gobierno de la UAM del 15 de febrero de 1975, cuando el ambiente en Cantoblanco era bastante conflictivo, con anomalías o paro de actividades en Ciencias y

---

<sup>589</sup> *Informaciones*, 20 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>590</sup> *ABC*, 21 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>591</sup> *ABC*, 23 de Febrero de 1975, BNE.

Filosofía y Letras, se acordó sólo requerir el auxilio de la policía “en casos de muy extrema necesidad y cuando se hubieran agotado todos los recursos, reuniones y diálogos que se puedan intentar”.<sup>592</sup> Sin embargo, apenas cinco días después, la misma Junta de Gobierno publicó un comunicado en el cual se manifestaba dispuesta a “garantizar con cuantos medios sea preciso, el derecho que tiene todo alumno que lo desee de asistir a las clases, sin que se vea impedido a hacerlo por la violencia de quienes están interesados en yugular la vida académica”.<sup>593</sup> En este sentido, se declaraban dispuestos a aplicar de forma individual o colectiva, el reglamento de Disciplina Académica, y a mantener el orden en las facultades “para lo cual si hace falta, se colocaría policía hasta en la puerta de las aulas”.<sup>594</sup>

Desde la UCM, algunos decanos tomaron una postura más coherente y lanzaron fuertes críticas a la actuación de la policía. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho criticó duramente el ingreso de las fuerzas del orden los días 19 y 20 de ese mes, “desalojando seminarios y oficinas, y expulsando incluso al Profesorado, lo que se considera vejatorio para la autoridad académica”.<sup>595</sup> El 26 de febrero, la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Complutense manifestó públicamente su molestia por la reiterada entrada de la policía en esa Facultad, “sin consentimiento ni conocimiento de la autoridad académica”. Señalaba la Junta que “la actuación de las Fuerzas de Policía ha culminado con la violenta expulsión de estudiantes, profesores y personal no docente, realizada los días 20 y 21, con absoluto desprecio de la autoridad académica, llegándose incluso a entrar en las dependencias del Decanato y en el propio despacho del decano, con las defensas desenvainadas, para expulsar a los profesores que se encontraban reunidos con él”. La Junta de Derecho también señalaba en su comunicado que, para restablecer la normalidad académica, era indispensable que todos los centros clausurados, en especial Valladolid, fueran abiertos. Finalmente, se reiteraba la necesidad de asegurar la inmunidad de los representantes estudiantiles.<sup>596</sup> Este comunicado resulta particularmente interesante ya que, por primera vez, una autoridad

---

<sup>592</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 15 de Febrero de 1975, p. 2. ACUAM.

<sup>593</sup> Ibid.

<sup>594</sup> Ibid.

<sup>595</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 21 de Febrero de 1975, p. 2. ACUCM.

<sup>596</sup> ABC, 26 de Febrero de 1975, BNE.

académica se manifiesta públicamente en contra de la actuación de la policía en la universidad y además, en defensa de los representantes de los estudiantes.

Con todo, los conflictos continuaron y, al día siguiente de que se hiciera público este comunicado, la policía desalojó violentamente la Facultad de Filosofía y Letras de la UCM, en donde se realizaba una asamblea de profesores y estudiantes. En la UAM, por su parte, continuaba el paro casi generalizado de profesores y alumnos, y en la Politécnica la tónica era la inasistencia a clases.

El 27 de febrero, cerca de 300 estudiantes se encerraron voluntariamente en la catedral de San Isidro para pedir al cardenal Vicente Enrique y Tarancón que intercediera por la Universidad de Valladolid. Sin embargo, fueron desalojados violentamente por la policía, que detuvo y trasladó a los estudiantes a la DGS. Por la noche, la DGS hizo pública una nota en la que señalaba que se había efectuado el desalojo luego de “obtener un permiso” y agregaba que

“debajo de los bancos y en algunos confesionarios aparecía propaganda subversiva de organizaciones marxistas, varios paquetes con juegos de naipes, dados, así como abundantes provisiones de alimentos y bebidas. (...) La actitud de las personas que se encontraban recluidas era de desconsideración y falta de respeto para el lugar en que estaban, fumando y bebiendo mientras escuchaban las consignas de algunos agitadores, que les invitaban a una actitud de rebeldía y permanencia en la iglesia”.<sup>597</sup>

Sin embargo, el Gabinete de Prensa del Arzobispado publicó otra nota en la que lamentaba profundamente los incidentes en la Iglesia de San Isidro, pero aseguraba que ni el cardenal ni los vicarios habían dado autorización a la fuerza pública para desalojar el templo.<sup>598</sup> De los casi trescientos desalojados, cincuenta y dos quedaron detenidos en la DGS, entre ellos, varios representantes de las universidades madrileñas y algunos profesores no numerarios.

Ante la creciente escalada de conflictos en la universidad, las diversas organizaciones políticas intentaban capitalizar las movilizaciones y utilizar el cierre de la Universidad de Valladolid como una oportunidad política en la lucha contra el régimen. De este modo, las Juventudes Socialistas defendían la oleada de movilización del ME como una forma de romper la política del miedo impuesta por el régimen, pero además proponían la creación de “organizaciones de base, unitarias, permanentes y clandestinas, que mediante la incorporación de toda la base demócrata y antifascista,

---

<sup>597</sup> ABC, 28 de Febrero de 1975, BNE.

<sup>598</sup> Ibid.

superen las deficiencias de los comités actuales”.<sup>599</sup> La propuesta de las Juventudes Socialistas se enfrentaba directamente a la del PCE, en el sentido de que si éste propiciaba la utilización de diversas formas de lucha, desde la negociación y las concentraciones pacíficas, hasta las manifestaciones en la calle, los socialistas consideraban que la lucha debía ser radical y clandestina.<sup>600</sup>

La propuesta de la Organización Universitaria del PCE para capitalizar la situación de conflicto generada a partir del cierre de la Universidad de Valladolid era mucho más contundente. Incluso antes del cierre, desde *Vanguardia* se hacía un llamado a crear una Junta Democrática Universitaria (JDU), siguiendo el modelo de la Junta Democrática de España (JDE), creada en julio de 1974 e impulsada por el PCE. *Vanguardia* presentaba a la JDE como una alternativa de poder, en la que debían confluír todas las fuerzas sociales y políticas que estuvieran a favor de la lucha por las libertades democráticas. Y este mismo modelo era el que había que replicar en la universidad. La JDU sería la instancia de reunión de “todas las fuerzas universitarias, sea cual fuere su tendencia política, dispuestas a imponer un poder democrático en la Universidad”.<sup>601</sup> Los puntos de convergencia de la JDU eran la exigencia de amnistía para estudiantes, profesores y catedráticos; de libertades políticas y autonomía universitaria; de gestión democrática de la universidad; de expulsión de la policía y de bilingüismo en las Universidades de Cataluña, Euzkadi y Galicia.<sup>602</sup>

En este contexto, los estudiantes comunistas supieron aprovechar la oleada de movilizaciones de los primeros meses de 1975 para intentar articular y coordinar la lucha universitaria por las libertades democráticas con la lucha a nivel nacional. Por eso propiciaban la huelga general en todas las universidades de España y la ruptura de la universidad con el régimen. Y la herramienta para conseguir esto era la Junta Democrática Universitaria, que debía asumir el liderazgo de la lucha de masas en la universidad y la coordinación con la JDE. Es así como desde *Vanguardia* se propone una nueva forma de lucha para el ME y su organización, que “no consiste ya en la contestación, más o menos efectiva, sino en la ocupación democrática de la universidad,

---

<sup>599</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Marzo de 1975, p. 12. F. Pablo Iglesias.

<sup>600</sup> Ibid.

<sup>601</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Enero de 1975, p. 18. AHPCE.

<sup>602</sup> Ibid.

en la constitución de las bases de la futura Universidad Democrática dentro de una sociedad democrática”.<sup>603</sup>

Ahora bien, a la altura de abril de 1975 la Universidad de Valladolid, pese a las numerosas peticiones públicas de apertura, continuaba cerrada, y la situación en la UCM seguía siendo conflictiva, con numerosas intervenciones de la policía para desalojar los centros, quitar carteles y detener estudiantes e incluso profesores. El 15 de ese mes, la policía entró en las Facultades de Medicina y Derecho de la Complutense, para retirar banderas republicanas y para dispersar concentraciones de estudiantes que pedían la libertad de los detenidos en días anteriores. En esta ocasión, la policía también detuvo a dos profesores no numerarios de la Facultad de Derecho, quienes fueron puestos en libertad pero multados con 50.000 pesetas.

Por su parte, el 19 de abril, los representantes estudiantiles de las cuatro facultades cerradas en Valladolid publicaron una nota en la cual señalaban que la medida afectaba a 8 mil estudiantes, por lo que se requería de una solución clara, que significara la reapertura de las facultades de forma inmediata y sin sanciones.<sup>604</sup>

En torno a la situación de la Universidad vallisoletana, los estudiantes de la Complutense continuaron con las concentraciones y manifestaciones pidiendo su reapertura. Además, se manifestaron por la libertad de los estudiantes detenidos. En particular, se pidió la libertad para Federico Acevedo que llevaba seis meses detenido, sin que se hubiera determinado si pasaría al TOP o a la Justicia Militar. Por supuesto, los incidentes en las universidades madrileñas continuaron. El 25 de abril, la policía desalojó la Facultad de Derecho de la UAM, en la Complutense retiró carteles y banderas portuguesas que celebraban el primer aniversario de la Revolución de los Claveles, desalojó la Facultad de Filosofía y Letras mientras se celebraba un recital de música portuguesa, y detuvo a varios estudiantes que vendían claveles rojos.<sup>605</sup>

En este ambiente de creciente conflictividad, el 9 de mayo se reunió el Consejo de Ministros, presidido por Franco, en el cual se tomaron decisiones importantes. La principal, que afectaba a la sociedad en general, fue el reconocimiento del derecho a huelga, pero con cortapisas y limitaciones. Por ejemplo, se establece que la huelga sólo puede hacerse por motivos laborales, nunca políticos ni en solidaridad con otros

---

<sup>603</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Abril de 1975, p. 3. AHPCE.

<sup>604</sup> *ABC*, 20 de Abril de 1975. BNE.

<sup>605</sup> *ABC*, 26 de Abril de 1975. BNE.



trabajadores. Otra decisión fue la de permitir la realización de exámenes en septiembre (una sola convocatoria) para los alumnos del curso 74-75 de las facultades cerradas de la Universidad de Valladolid.<sup>606</sup>

Contrario a lo que cabía pensar, los estudiantes consideraron que la medida era tardía e insuficiente, por lo que el anuncio de celebración de exámenes en Valladolid no supuso el descenso del conflicto estudiantil, al menos en Madrid. A principios de mayo se celebró en Madrid una nueva versión de la Reunión General de Universidades, pero su representación fue escasa. No participaron todos los delegados, e incluso hubo una convocatoria a “una RGU falsa” desde Valladolid. Las diferentes instancias que coexisten en este momento dentro del ME (RGU, delegados elegidos en las elecciones “oficiales”, Comités de Curso, JDU, etc.) produjeron confusión entre los estudiantes, y de alguna manera, compitieron entre sí. La RGU se convirtió, en el curso 74-75, en la “cara ilegal del aparato de delegados”<sup>607</sup>, ya que allí se reunían delegados legales e ilegales, mientras el Consejo de Universidades era la cara legal. Por eso, en el próximo curso, el problema de la organización del movimiento será un asunto trascendental.

Con todo, la RGU convocó a una jornada de lucha en la Universidad de Madrid para el 14 de mayo. Ese día, la policía ingresó en varias facultades de la Complutense (Derecho, Ciencias Políticas y Económicas), donde tres grupos distintos habían iniciado sendas marchas hacia el Rectorado. La policía disolvió las marchas y los estudiantes huyeron hacia la plaza de Moncloa, cortando el tráfico por unos minutos. La policía también retiró carteles de Derecho, Filosofía y Medicina<sup>608</sup>, pero no hubo mayores conflictos porque la jornada no tuvo el éxito esperado. Desde *Vanguardia* se reconocía que la convocatoria no había “alcanzado los grados de espectacularidad a los que la Universidad nos tiene acostumbrados”<sup>609</sup> aunque de todos modos sirvió para presentar ante los estudiantes que sí participaron los planteamientos de la JDU. ¿A qué se debió esta baja respuesta de los estudiantes ante la jornada del 14 de mayo? Los mismos estudiantes comunistas dan una respuesta: falló la forma de dar a conocer la convocatoria, así como la asistencia individual de muchos representantes, sin que hayan podido movilizar a las masas de estudiantes.

---

<sup>606</sup> ABC, 10 de Mayo de 1975. BNE.

<sup>607</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 390.

<sup>608</sup> ABC, 15 de Mayo de 1975. BNE.

<sup>609</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Mayo de 1975, p. 2. AHPCE.

Ahora bien, el fin del curso se acercaba rápidamente, y aún no se había resuelto el problema de la Universidad de Valladolid y la posible pérdida de curso de los casi ocho mil estudiantes de las facultades cerradas. Ya estaba meridianamente claro el costo político que tendría para el régimen la pérdida del curso de esos alumnos; si el sólo hecho de cerrar cuatro facultades había logrado levantar una oleada de movilizaciones importante en los centros universitarios españoles, ¿qué podría ocurrir en caso de la pérdida del curso de esos ocho mil jóvenes? Para intentar solventar esto, el rector de Valladolid anunció, el 16 de mayo, que, con vistas a los exámenes de septiembre, se reanudarían las clases prácticas en las cuatro facultades cerradas.<sup>610</sup> De esta manera, el día 19 de mayo, comenzaron las clases prácticas en la Facultad de Medicina de Valladolid, con bastante asistencia de estudiantes y sin incidentes.

Los cuatro meses de clausura de la Universidad de Valladolid fueron una inmejorable oportunidad política para los estudiantes españoles en general, y de Madrid en particular. Este conflicto permitió relanzar las movilizaciones estudiantiles, que ya habían ido cobrando fuerza en el curso 73-74, y sobre todo, permitió coordinar estas luchas con las luchas políticas generales. La labor de la Organización Universitaria del PCE fue central en esto, al promover la creación de la JDU y otras instancias de reunión de los estudiantes, como la Reunión General de Universidades. Las luchas del curso 74-75 serán fundamentales para comprender la fuerza que adquiere el ME en el curso siguiente, y cómo logra vincularse de forma estrecha con el proceso general de movilización ciudadana que vive España después de la muerte de Franco.

Otro elemento a destacar es el lenguaje utilizado por los estudiantes, especialmente los estudiantes comunistas, que van dejando atrás sus referencias a la revolución socialista y a la universidad popular, y asumiendo cada vez con más fuerza el compromiso democrático, tanto para la sociedad española como, por cierto, para la universidad.

## **V. La huelga de PNN: un nuevo frente en el conflicto universitario.**

En forma paralela al conflicto de los estudiantes, la situación de los profesores no numerarios (PNN) se volvía a agravar en la universidad española, luego de un paro convocado el 12 de febrero por los PNN de Instituto. Y es que, desde principios del mes

---

<sup>610</sup> ABC, 17 de Mayo de 1975. BNE.

de febrero, los PNN de la Universidad Autónoma de Barcelona, y de varios otros centros en toda España, habían comenzado a movilizarse para exigir al Ministerio una mejora en su situación laboral. El 3 de marzo, el Ministerio de Educación anunció que “la relación de servicios entre el MEC y los profesores interinos y contratados no puede ampararse en un contrato laboral, por impedirlo el ordenamiento jurídico vigente”, es decir, a los PNN no se les haría contrato laboral, una de sus principales reivindicaciones.<sup>611</sup> A partir de estas declaraciones, los PNN de universidad comenzaron a realizar paros académicos. Así, en la UAM, pararon los PNN de Filosofía y Letras, Ciencias y Económicas. En la Complutense, en cambio, el paro se hizo dentro de las mismas clases, por lo que era mucho más difícil de determinar.

Sin duda, durante los meses de abril y mayo, los conflictos más importantes fueron el de la Universidad de Valladolid y el de los PNN. El primero, por ser primera vez que el Ministerio tomaba una medida tan extrema y porque dicha medida contó con la oposición de importantes sectores de la sociedad. Además, el conflicto de Valladolid movilizó a estudiantes de otros distritos, contribuyendo a la agitación y a la movilización estudiantil en toda España. El conflicto de los PNN fue también muy importante porque añadió un nuevo frente al ya de por sí complejo panorama de la universidad española, además, tanto profesores como estudiantes asumían acciones coordinadas y por ende, ambos conflictos se potenciaban mutuamente.

Además, los PNN encontraron apoyo a sus reivindicaciones en la opinión pública. Así, desde *Cuadernos para el Diálogo* se hacía un análisis de la figura del PNN, que había nacido como una solución temporal al problema del aumento de los estudiantes universitarios, pero que se había transformado en permanente.

“Su función consistía únicamente en cubrir la necesidad de un incremento en el profesorado durante el período de tiempo necesario para dotar y cubrir las cátedras que el crecimiento estudiantil hacía indispensable. Y ello con una doble ventaja para el sistema en su conjunto, por un lado, mediante un vínculo inestable que a muy poco obligaba al Ministerio y que éste podría fácilmente rescindir, y, por otro, con un coste económico mínimo”.

Y continúa: “parece hoy claro, y el propio Ministerio así lo ha reconocido, que la figura del PNN no es “provisional”, a extinguir, sino permanente. Máxime cuando las

---

<sup>611</sup> ABC, 3 de Marzo de 1975. BNE.

tres cuartas partes del profesorado son ya no-numerarios con unas condiciones de trabajo deplorables”.<sup>612</sup>

Ahora bien, el conflicto de los PNN no era puramente laboral. Sobre los hombros de estos profesores descansaban el crecimiento y la masificación de la educación universitaria, además de contribuir a las labores de investigación propias de la vida académica. En este sentido, según *Cuadernos*, la negociación de los PNN con el Ministerio iba más allá de las reivindicaciones laborales y se centraba en una concepción de la universidad diferente de la que tenían las autoridades académicas. “Lo que se está negociando son los primeros pilares de una Universidad distinta, de estructura democrática, que decida autónomamente quién enseña y qué se enseña (se exige por ello criterios objetivos y democráticos de contratación no dejados a la arbitrariedad administrativa). Una universidad, en definitiva, al servicio en sus investigaciones y proyección, de las necesidades reales que la sociedad demanda”.<sup>613</sup>

El conflicto entre los PNN de universidad y el Ministerio continuó con bastante intensidad durante todo el mes de marzo. El 9 de abril, según publica ABC, las negociaciones entre el Ministerio y los PNN llegaron a un punto muerto, luego de que el subsecretario del MEC amenazara con despedir a los profesores no numerarios que continuaran el paro. El 10 de abril, los PNN convocaron a la Tercera Asamblea General de Profesores No Numerarios, para estudiar las opciones que tenían luego de la ruptura de la negociación con el Ministerio.<sup>614</sup>

Esta asamblea se realizó el 20 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y contó con la asistencia de representantes de 16 provincias españolas. La reunión giró en torno a dos grandes temas, la selectividad y el Estatuto del Profesorado no numerario. En relación con la selectividad, los PNN decidieron negarse a cualquier tipo de colaboración en las pruebas, y a manifestarse públicamente en contra de dicho proceso. Y en relación al Estatuto del Profesorado, se elaboró un documento en el que se insistía en la necesidad del contrato laboral, ya que se consideraba como el medio normal de iniciar y proseguir la carrera universitaria. Finalmente, la Asamblea hizo un llamado a que, a partir del lunes 21 de abril, los PNN de todos los centros

---

<sup>612</sup> “Los PNN, algo más que un conflicto laboral”, *Cuadernos para el Diálogo*, Mayo de 1975, núm. 140, p. 13. BNE.

<sup>613</sup> Ibid.

<sup>614</sup> ABC, 9 de Abril de 1975. BNE.

adoptaran una actitud de fuerza, hasta que el Ministerio diera una respuesta satisfactoria.<sup>615</sup>

Ante este llamamiento, el 22 de abril, el subsecretario del MEC, Federico Mayor Zaragoza, recibió a los representantes de los PNN de los distintos distritos con el objetivo de continuar las negociaciones. Dentro de las medidas propuestas se encontraban los siguientes puntos:

- Aumento de las retribuciones para todos los profesores, teniendo en cuenta los distintos niveles y quienes tienen dedicación exclusiva.
- Contratación por cuatro años, prorrogables a otros dos, a los ayudantes de profesores.
- Aumento de retribución a los profesores contratados, adjuntos, agregados y catedráticos, especialmente a los que tengan dedicación exclusiva.
- Concesión de becas de investigación para el doctorado, a los encargados de curso con colaboraciones de tres, seis, nueve y doce horas.
- Imposibilidad de contrato laboral pero posibilidad de retocar el contrato administrativo.
- Nuevo sistema de oposiciones.<sup>616</sup>

Como respuesta a esta proposición, los PNN dirigieron una carta al subsecretario del MEC, en la que sintetizaban sus problemas más urgentes y las posibles soluciones. Entre los principales problemas se encontraba la inestabilidad en el empleo, que sólo podía eliminarse con el contrato laboral; el aumento del salario acorde con el aumento del costo de la vida, el pago de los salarios atrasados; la gestión democrática en el gobierno de la universidad, con la participación de todos los sectores implicados; y finalmente, el levantamiento de sanciones y el establecimiento de un diálogo para intentar dar solución a los problemas planteados.<sup>617</sup>

Al no tener una respuesta clara del Ministerio, los PNN, tal como se había planteado en la Tercera Asamblea, continuaron con el paro. Éste fue casi total en la Complutense (Psicología, Químicas y Física, Derecho, Políticas, Económicas...), y la policía ingresó en varias facultades a disolver manifestaciones y concentraciones de profesores. Paralelamente, los PNN de Barcelona también decidieron continuar con el

---

<sup>615</sup> ABC, 20 de Abril de 1975. BNE.

<sup>616</sup> ABC, 23 de Abril de 1975. BNE.

<sup>617</sup> ABC, 24 de Abril de 1975. BNE.

paro, de carácter indefinido, que mantenían desde hacía dos meses.<sup>618</sup> El 26 de abril, los PNN de Málaga y Sevilla también se plegaron al paro. De esta manera, la universidad española se veía enfrentada a un conflicto a dos bandas, los estudiantes y su lucha contra el cierre de Valladolid, por un lado, y los PNN, y sus reivindicaciones laborales, por el otro. Lógicamente, ambos conflictos se potenciaban mutuamente.

Con el paro de PNN, la actividad académica en las universidades madrileñas era bastante escasa. Además, los estudiantes muchas veces se sumaban a las asambleas de PNN, de hecho, el 29 de abril la policía intervino en una asamblea conjunta de PNN y estudiantes en la Facultad de Derecho de la Complutense. En este ambiente de conflicto creciente, el 1º de mayo la policía intervino en las tres Universidades de la capital, desalojando asambleas, disolviendo manifestaciones y retirando carteles de la Junta Democrática y banderas rojas.

El 5 de mayo, el rector de la UCM envió un escrito a todos los decanos de la Universidad, comunicándoles que debían advertir a los PNN que no estuvieran impartiendo clases que debían regularizar esa situación, ya que en caso contrario, se les aplicarían las medidas establecidas en la normativa vigente.<sup>619</sup> Sin embargo, después de este apercibimiento, los PNN volvieron masivamente al paro y realizaron asambleas en los distintos centros, muchas de las cuales fueron disueltas por la policía. Ante esta situación, el 6 de mayo se reunió el Pleno de la Junta Nacional de Universidades, con el fin de analizar la situación de la universidad española en los últimos cursos, pero con especial atención en la experiencia del curso 74-75.<sup>620</sup>

Durante todo el mes de mayo, el conflicto de los PNN de universidad continuó sin solución, por lo que la Coordinadora Nacional de PNN de universidad, reunida en Madrid, acordó el 20 de ese mes, no realizar los exámenes hasta que el Ministerio no aprobara los cuatro puntos de sus reivindicaciones. La Coordinadora también exigió que la confirmación de la contratación de profesorado para el nuevo curso se hiciera antes del 31 de mayo, y aceptó la propuesta del subsecretario del MEC de continuar las negociaciones, con la condición de que el Ministerio presentara medidas concretas.<sup>621</sup>

Ahora bien, el tema de los exámenes era complejo porque también afectaba a los estudiantes, sin embargo, muchos PNN recurrieron a la fórmula del “aprobado general

---

<sup>618</sup> ABC, 25 de Abril de 1975. BNE.

<sup>619</sup> ABC, 6 de Mayo de 1975. BNE.

<sup>620</sup> ABC, 7 de Mayo de 1975. BNE.

<sup>621</sup> ABC, 21 de Mayo de 1975. BNE.

político”, aprobando así, de forma automática a todos los estudiantes sin necesidad de examinarse. Los últimos días de mayo (no se confirma la fecha), en una reunión del Consejo de Rectores, se acordó tomar medidas ante la concesión de los “aprobado generales políticos”.<sup>622</sup> Los PNN de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, reunidos en asamblea, decidieron conceder el aprobado general político, aunque el Rectorado anunció que no aceptaría ningún acta que no estuviera refrendada por los jefes de departamento. También en la UAB se recurrió a la misma fórmula, pese a las notas en contra del MEC.<sup>623</sup>

Sin embargo, desde la Junta de Gobierno de la UAM se anunciaron medidas drásticas para aquellos PNN que se negaran a tomar los exámenes: serían sustituidos por otros profesores en una segunda convocatoria y verían rescindido su contrato.<sup>624</sup> En la Junta de Gobierno de la UCM, realizada para tratar específicamente el asunto de la huelga de PNN, queda de manifiesto el problema que suponía la negativa de los PNN de tomar los exámenes. En decano de Económicas señalaba ante la Junta que en su Facultad había 31 numerarios frente a 270 profesores interinos, y que había “una resistencia por parte de los primeros a sustituir a los segundos, y existe la incógnita de la actitud de los estudiantes que podrían negarse a examinarse”<sup>625</sup>, aunque no estaba dispuesto a examinar con la policía dentro de las facultades (posibilidad que se discutió en la Junta).

En el contexto de la huelga de PNN y la continuación del conflicto estudiantil, vuelven a surgir voces del mundo académico en contra de la actuación de la policía en la universidad. El decano de Derecho de la Complutense, en la misma Junta del 2 de junio, hace una dura crítica a la entrada de las fuerzas de orden en su Facultad, ya que considera que eso atenta contra la dignidad universitaria. Además, argumenta que “los hechos cometidos en la Universidad y por universitarios deben resolverse dentro de la Universidad adoptando las medidas que procedan”. Finalmente, propone que se eleve al Ministerio una nota manifestando “la preocupación de la Junta por la forma en que la

---

<sup>622</sup> *ABC*, 3 de Junio de 1975. BNE.

<sup>623</sup> *ABC*, 6 de Junio de 1975. BNE.

<sup>624</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 30 de Mayo de 1975, p. 2. ACUAM.

<sup>625</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 2 de Junio de 1975, p. 2. ACUCM.

autoridad gubernativa trata a la Universidad y por el rigor que se emplea con los universitarios”.<sup>626</sup>

Ahora bien, en el contexto de la oposición nacional contra el régimen de Franco, la Junta Democrática de España convocó en Madrid a una jornada de lucha para exigir libertades democráticas, para el 4 de junio. La convocatoria, recogida por las Asociaciones de vecinos y amas de casa, Colegios Profesionales, organismos sindicales, y por supuesto, por el Movimiento estudiantil tuvo relativo éxito. Pese a que ABC la considera un fracaso porque según sus cálculos habría parado el 0,8% de la población laboral madrileña<sup>627</sup>, de todas formas hubo movilizaciones y protestas, especialmente en la universidad. Según *Vanguardia*, “se realizó una importante concentración de estudiantes y profesores en Princesa, estrenando además con esta ocasión nuevos planteamientos como el carácter pacífico de la concentración (...) el impacto ciudadano de la concentración y el escaso número de detenidos son prueba fehaciente de la operatividad de estos métodos nuevos”.<sup>628</sup> Al parecer, va siendo cada vez más evidente para el ME la necesidad de superar el contexto de la lucha exclusivamente académica o universitaria, para generar marcos de referencia que logren mayor convocatoria, como los promovidos por la JDE. “La Universidad ha participado ampliamente en la Acción Democrática de Madrid. Desde las reuniones de catedráticos a las acciones en la calle de profesores y estudiantes, han manifestado que la alternativa a la situación de la Universidad está en las libertades políticas, en la autonomía, en su democratización; por eso han participado todos los estamentos en la jornada”.<sup>629</sup>

En medio de la difícil situación en la universidad, *ABC* informó el 14 de junio, que más de mil profesores de todas las universidades españolas habían enviado al Ministerio de Educación un escrito en el que se mostraban extremadamente preocupados por la situación de la universidad, y además pedían la reincorporación de los profesores Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo, expulsados hacia diez años de la universidad. También pedían la reincorporación de todos los profesores no numerarios expulsados o sancionados y la amnistía universitaria para todos los estudiantes.<sup>630</sup> En este sentido, la situación en la universidad,

---

<sup>626</sup> Ibid.

<sup>627</sup> *ABC*, 5 de Junio de 1975. BNE.

<sup>628</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Junio de 1975, p. 2. AHPCE.

<sup>629</sup> Ibid., p. 3.

<sup>630</sup> *ABC*, 14 de Junio de 1975. BNE.



lejos de resolverse, parecía complicarse aún más. Aunque a finales de mayo se reabrió la Universidad de Valladolid, el frente abierto por los PNN no vislumbraba aún una solución, y además, una parte importante de los estamentos universitarios (estudiantes y catedráticos) y de la opinión pública estaban de parte del profesorado no numerario.

El balance del curso 74-75 fue positivo para el ME Los estudiantes comunistas de Vanguardia, se congratulaban de haber logrado formar un

“frente amplio de enseñanza, que recogiendo las reivindicaciones de los PNN, la preocupación de Enseñanza Media ante las pruebas de selectividad, la aplicación en la Universidad de unos planes de estudio antidemocráticos... ha planteado una batalla nacional al Ministerio el 14 de mayo.”<sup>631</sup> Por su parte los delegados de la RGU, reunida nuevamente a finales de mayo de 1975, también sacaban cuentas alegres del curso, y destacaban principalmente “tanto la masividad como la generalización a nivel de todo el Estado español del amplio movimiento estudiantil de este curso 74-75”.<sup>632</sup>

Ahora bien, como ya era su costumbre, cuando el curso estaba prácticamente acabado, el Consejo de Ministros acordó aprobar un decreto-ley sobre la permanencia en la universidad llamado de Garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad. De esta manera, se establecía que los futuros alumnos tendrían como límite máximo de permanencia en la universidad, el período correspondiente a los cursos académicos de cada plan de estudios y dos más. También, se limitaba a cuatro las convocatorias de exámenes para cada asignatura. Y quizás lo más grave, este decreto también establecía la creación de una Comisión Especial, que tenía entre sus funciones imponer sanciones de denegación de matrícula o imposibilidad para examinarse en la universidad respectiva, así como proponer medidas para asegurar el mantenimiento o recuperación del orden académico en la universidad.<sup>633</sup>

Este decreto, aprobado en Consejo de Ministros del 21 de junio y publicado en el BOE el 10 de julio, fue redactado sin contar con la comunidad universitaria. Los estudiantes lo consideraron un paso más en la tecnocratización de la universidad, ya que aumentaba la selectividad, contra la que se había luchado, sin éxito, en los cursos anteriores, y profundizaba la concepción clasista de la universidad que impulsaba el régimen. Además, suponía profundizar la represión que afectaba de manera especial, a los estudiantes. “Siguiendo la tradicional consigna de palo y tente tieso, el Gobierno en

---

<sup>631</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Junio de 1975, p. 2. AHPCE.

<sup>632</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, 22 de Junio de 1975, núm. 8 p. 5. AHPCE.

<sup>633</sup> Decreto Ley 9/1975. BOE núm. 169, 16 Julio 75. [www.boe.es](http://www.boe.es).

pleno ha vuelto a dar en el clavo para resolver los graves problemas de la Universidad”.<sup>634</sup> Lejos de calmar los ánimos, con este decreto se abría una nueva oportunidad política. Las movilizaciones estudiantiles del curso 75-76 exigirán, entre otras cosas, la derogación de este decreto.

A la hora de hacer un balance del curso 74-75, podemos observar una fuerte extensión de los conflictos en la universidad, los que rebasaron el ámbito exclusivo de los estudiantes y llegaron también hasta los profesores no numerarios. Desde *Cuadernos para el Diálogo* el diagnóstico es crítico con la actuación del régimen en la universidad, incapaz de generar verdaderos diálogos tanto con los delegados estudiantiles como con los PNN.

“Las autoridades académicas aceptan la representación estudiantil pero no les entusiasma. En algunos casos la rechazan y dificultan, espaciando al máximo la convocatoria de los órganos de Gobierno a nivel de Centro y desautorizando reuniones, asambleas, etc. (...) El profesorado ha protagonizado en este curso por vez primera una contestación de resonancia nacional. La actitud de paro generalizado de los PNN ha puesto a la Universidad española al borde del colapso”<sup>635</sup>.

Y a la altura del verano de 1975, ambos conflictos continuaban, proyectándose al curso 75-76, que verá resurgir con mucha fuerza la movilización y contestación, no solo en la universidad sino en toda la sociedad española, que iniciaba un difícil e incierto camino hacia la democracia.

---

<sup>634</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, 22 de Junio de 1975, núm. 8 p. 5. AHPCE.

<sup>635</sup> “Un curso más, un curso menos”, *Cuadernos para el Diálogo*, Junio-Julio 1975, núm. 141-142, p. 7. BNE.

## CAPÍTULO 8

### **1975-1976: EL ME EN UN AÑO CLAVE. LOS ESTUDIANTES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA.**

El curso 1975-1976 fue testigo de una de las oleadas de movilización estudiantil más fuertes de toda la década. Si bien durante el primer lustro de la década de los setenta las movilizaciones estudiantiles se producían con relativa periodicidad, la fuerza y la continuidad con que se produjeron en el curso 75-76 fueron excepcionales.

La batalla de los estudiantes por las libertades democráticas marcó este período, en el cual la universidad vivió en un estado de permanente agitación: se dictaron pocas clases, se sucedieron las asambleas, manifestaciones y concentraciones a lo largo de todo el curso, se multiplicaron las pintadas en los murales y la prensa política. Los estudiantes eran conscientes del momento crucial que vivía España después de la muerte de Franco, por lo que sus movilizaciones buscaban extender la lucha por la democracia a toda la sociedad española para imponer la vía de la ruptura.

Los universitarios actuaron en coordinación con otros movimientos sociales, como el movimiento obrero, y muy influidos por los partidos políticos que buscaban imponer su programa de libertades democráticas. De hecho, en este período proliferaron las organizaciones partidarias dentro de la universidad. Grupos que hasta entonces no habían manifestado mayor interés por el ME comenzaron a organizar secciones estudiantiles, con órganos de prensa ad hoc, de hecho para el curso 75-76 existe una cantidad mucho mayor de periódicos y panfletos que para los cursos pasados, lo que da cuenta de la agitación que se vivía en el país y también en la universidad. En este sentido, la situación política de España en 1975 y 1976, los últimos meses de la vida de Franco y el incierto inicio de la transición a la democracia fueron oportunidades políticas inmejorables para el movimiento estudiantil.

El curso se inició en medio de la urgencia generada por las condenas a muerte de tres militantes del FRAP y dos de ETA, que produjeron una enorme agitación política y social, no solo en la universidad, sino en la sociedad española en general. Además, durante el verano, el régimen había dictado el decreto de Garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad<sup>636</sup> que fue un importante estímulo para relanzar las movilizaciones estudiantiles. Los estudiantes hicieron suya la lucha por la

---

<sup>636</sup> Decreto-Ley 9/1975 de 10 de julio de 1975, de Garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad. [www.boe.es](http://www.boe.es).

democratización del país y de la universidad, entendiendo que no se podía conseguir la segunda sin la primera, y se insertaron en una plataforma de reivindicaciones políticas generales, pero mantuvieron las reivindicaciones propiamente universitarias, las que, al fin y al cabo, le otorgaban parte de su identidad como movimiento social. De esta manera, y como ya habían hecho en los cursos anteriores, los estudiantes lograron combinar las reivindicaciones políticas con las propiamente universitarias, aunque el equilibrio entre ambas fue complejo, en la medida en que la situación política fue opacando progresivamente a los problemas de la universidad.

En este contexto de constantes movilizaciones, que se mantuvieron prácticamente durante todo el curso, apareció nuevamente el problema de la organización de los estudiantes. El ME consideraba imprescindible la creación de un organismo que actuara como vocero y que coordinara a los estudiantes españoles, de manera que éstos fueran actores válidos y con presencia en el escenario político que se había inaugurado con la muerte de Franco. El siempre complejo asunto de la organización estudiantil hizo correr ríos de tinta y fijó las posiciones de los distintos grupos políticos en la universidad. Algunos, como el PCE, estaban a favor de utilizar las elecciones de delegados oficiales para generar la anhelada organización; otros, como el PSOE, proponían el boicot a dichas elecciones. Durante 1976 se produjeron varios intentos por reconstruir el Sindicato Democrático de Estudiantes, creado durante el curso 66-67, pero todos ellos fracasaron. La imposibilidad de llegar a acuerdos entre las organizaciones políticas hizo naufragar la idea de una organización unitaria de estudiantes, y aunque el PTE efectivamente creó un SDEU, éste no contó con el apoyo del PCE ni de otros grupos más pequeños. Aunque en los cursos anteriores ya se había discutido mucho sobre la necesidad de una organización (basta recordar las posturas a favor o en contra del decreto de participación de 1974), los estudiantes no fueron capaces de llegar a acuerdos en torno a sus estructuras de movilización, lo que fue fundamental para la desarticulación del ME y para su pérdida de protagonismo en los cursos posteriores.

Finalmente, en el curso 75-76 percibimos un cambio fundamental en los marcos de significado, que había comenzado a aparecer en los cursos anteriores, pero que se instaló ya en este y tiene relación con un cambio en el lenguaje de los estudiantes. Progresivamente, se dejaba de lado el lenguaje de la Revolución Socialista y se adoptaba el lenguaje de la democracia. Los conceptos de amnistía y democracia fueron adquiriendo cada vez más importancia, frente a los de revolución y socialismo. Ahora

bien, no se abandonó por completo la idea de la Revolución Socialista ni el lenguaje de la lucha de clases, sin embargo, pareciera que el acento estaba puesto ahora en la consecución de la democracia como objetivo principal.

### **I. Los últimos fusilados del franquismo y la muerte del “Caudillo”.**

Como ya hemos señalado, el curso 75-76 comenzó en medio de la urgencia por salvar la vida a los 5 condenados a muerte por el régimen de Franco. El 28 de agosto comenzaron los Consejos de Guerra contra varios terroristas del FRAP y ETA, acusados de asesinar a dos guardias civiles y dos policías armados. Apenas dos días antes, el régimen había aprobado el Decreto-ley Antiterrorista, que no sólo contemplaba la pena de muerte para quienes asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado, sino que reiteraba la ilegalidad de “los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social” y condenaba a “los que organizaren o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliaren al grupo u organización”<sup>637</sup> al grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para asociaciones ilícitas. Es decir, la Ley antiterrorista equiparaba a aquellas organizaciones de oposición pacíficas, como los grupos comunistas o socialistas, con las que hacían uso de la lucha armada, como ETA y FRAP. Como señalan Molinero e Ysàs, “la nueva norma no se dirigía a las actividades violentas y terroristas sino a la *subversión* de siempre”<sup>638</sup>.

La aplicación de esta Ley en los Consejos de Guerra, celebrados simultáneamente entre agosto y septiembre de 1975 produjo once condenas a muerte, que luego serían rebajadas a cinco, ya que seis de los condenados fueron indultados el 26 de septiembre. Los fusilamientos se llevaron a cabo el 27 de septiembre en medio de fuertes movilizaciones y peticiones de indulto, que no fueron acogidas. La condena internacional no se hizo esperar, en Francia, Holanda y Portugal, las embajadas españolas sufrieron ataques de manifestantes contrarios a los fusilamientos. El Papa Pablo VI dijo haber enviado tres peticiones de clemencia al gobierno español, sin obtener respuesta.

---

<sup>637</sup> Decreto Ley 10/1975 de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo. [www.boe.es](http://www.boe.es).

<sup>638</sup> MOLINERO e YSÀS: *Anatomía del franquismo*, p. 222. *Cursiva en el original*.

Las movilizaciones en contra de las penas de muerte congregaron a diversos sectores de la población que no necesariamente militaban en partidos políticos, y además, supusieron una importante plataforma de relanzamiento de las reivindicaciones de la oposición. En este sentido, los estudiantes utilizaron estas movilizaciones como una oportunidad para articular un discurso político sobre la necesidad de la democratización del sistema, y para denunciar el recrudecimiento de la represión como un intento desesperado del régimen por sobrevivir. “Acosado por la sociedad española, incapaz de dar la menor solución a los graves problemas del país, internacionalmente aislado, se aferra a la represión como última razón de su existencia. Trata de volver a la década de los cuarenta, ignorando que la sociedad española ha cambiado profundamente en un irreversible proceso hacia la libertad y la democracia”.<sup>639</sup>

En este contexto adquiere fuerza la petición de amnistía, no sólo para los condenados a muerte sino para todos los presos y exiliados políticos españoles. La amnistía era considerada como el primer paso en la exigencia de libertades democráticas, ya que permitiría “a todos los españoles participar en la construcción de una nueva sociedad basada en la libertad y el respeto a los derechos humanos, y no en la represión en que la dictadura franquista quiere sumir a España”.<sup>640</sup>

Ahora bien, junto con condenar las penas de muerte, el ME también denunciaba la nueva oleada represiva que se cernía sobre la prensa (cierre de diversos periódicos y revistas), sobre algunos militares (miembros de la Unión Militar Democrática) y especialmente sobre la clase obrera:

“La represión se agudiza sobre todos los sectores y en especial sobre las fuerzas obreras y populares, como bien indican nuevos secuestros de revistas (*Destino*, *Por Favor*, supresión de un artículo de Tácito en el *Ya*, etc.), decenas de expedientes a estudiantes destacados en las movilizaciones del año pasado, continuas redadas de la policía desde Euzkadi a Andalucía, con constantes torturas a los detenidos y un nuevo asesinato de la Policía en Canarias en la persona de un militante del PCE”.<sup>641</sup>

Se acusaba al régimen de generar un ambiente de guerra civil, que pretendía dividir al país en dos, como parte de una estrategia desesperada para mantenerse en el poder.

---

<sup>639</sup> “Universitarios”, Organización Universitaria del PCE, Septiembre de 1975, p. 1. AHPCE.

<sup>640</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Septiembre de 1975, p. 5. AHPCE.

<sup>641</sup> *Bandera Roja*, Portavoz de la Organización Comunista de España, 12 de Noviembre de 1975, p. 1. F. Pablo Iglesias.

Otro elemento fundamental para las movilizaciones estudiantiles y que operó como una oportunidad política en el ámbito universitario fue la publicación del decreto de Garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad, también conocido como decreto de permanencia, que establecía que cada estudiante podía permanecer como límite máximo dos cursos más de los contemplados en su plan de estudios, ponía un límite de cuatro convocatorias a exámenes y creaba una comisión especial compuesta por el rector, el presidente del Patronato universitario, el vicerrector más antiguo y un inspector del Ministerio de Educación. Esta comisión tenía entre sus funciones “imponer las sanciones de denegación de matrícula o inhabilitación para examinarse en los Centros de la universidad respectiva en los casos de comisión de actos que perturben gravemente el orden académico” y “proponer a los órganos de gobierno de la Universidad, y en su caso al Ministerio de Educación y Ciencia las medidas que estime necesarias para el mantenimiento o restauración del orden académico y el cumplimiento estricto de todos los deberes inherentes al funcionamiento de la Universidad”<sup>642</sup>. Es decir, la comisión creada por el decreto de permanencia funcionaba como una suerte de “tribunal disciplinario” en la universidad, ya que era la encargada de establecer qué se entendía por orden académico y sancionar su falta.

Este decreto, redactado en verano y sin contar con la comunidad universitaria fue considerado por los estudiantes como un paso más en la tecnocratización de la universidad, ya que aumentaba la selectividad, contra la que se había luchado sin éxito, en los cursos anteriores, y profundizaba la concepción clasista de la universidad que impulsaba el régimen. Para los jóvenes del PSOE, el objetivo del decreto era reducir el número de alumnos en la universidad, “porque al capitalismo español le sobra y le basta con los técnicos y profesionales que explota, porque el paro de los licenciados es abrumador y se prevé mayor, porque los presupuestos estatales para la enseñanza son misérrimos en relación a las necesidades sociales del pueblo trabajador”.<sup>643</sup> Por su parte, el PCE entendía este decreto como una prueba más del abandono y desinterés del franquismo por la universidad: “Es evidente que un modelo de crecimiento basado en la colonización económica y tecnológica no precisa sino de técnicos preparados para

---

<sup>642</sup> Decreto-Ley 9/1975 de 10 de julio de 1975, llamado de Garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad, BOE Núm. 169, p. 15.320. [www.boe.es](http://www.boe.es).

<sup>643</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Octubre de 1975, p. 13-14. F. Pablo Iglesias.

aplicar lo que otros investigan”.<sup>644</sup> Para la *Joven Guardia Roja* y el PTE, era una provocación más de parte del régimen a la universidad, con el objetivo de suscitar una oleada represiva de sanciones y expedientes sobre los estudiantes.<sup>645</sup>

Para luchar contra del decreto, el ME proponía lo de siempre: movilizaciones y coordinación con los profesores, especialmente con los PNN, que en el curso anterior ya habían demostrado su fuerza: “ganarse el apoyo de los profesores y de los catedráticos demócratas y dejar claro ante la opinión pública que los estudiantes desean solucionar los problemas universitarios y que, por el contrario, son las autoridades fascistas, quienes con sus provocaciones, crean un permanente caos en la Universidad”.<sup>646</sup>

Ahora bien, si en septiembre y octubre de 1975 los estudiantes habían tenido motivos de sobra para movilizarse, ya fuera en contra de las condenas a muerte o del decreto de permanencia, la muerte de Franco fue un estímulo más poderoso aún para las movilizaciones en la universidad y en la sociedad en general. En este sentido, la muerte del dictador operó como una oportunidad política inmejorable. Con la desaparición de Franco se abría una nueva etapa en la vida política española, una etapa incierta pero que ofrecía la posibilidad de luchar por un cambio en el sistema político. En este contexto, el ME tenía una doble tarea, por un lado, movilizar a la mayor cantidad de estudiantes posible, y por otro, insertarse, sin perder protagonismo, en las luchas políticas generales. Esta compleja labor se hizo combinando las reivindicaciones propiamente estudiantiles (fin del decreto de permanencia, fuera policía de la universidad) con las exigencias de democratización de la sociedad española. La Organización Universitaria del PCE proponía, por ejemplo, combinar la democratización de la universidad, la participación de los estudiantes en Consejos y Claustros de Facultad, la derogación del decreto de permanencia con “la consecución de las libertades provisionales negadas por el franquismo y garantizadas por un Gobierno Provisional de unidad nacional”.<sup>647</sup>

Los acontecimientos políticos que siguieron a la muerte de Franco – la coronación de Juan Carlos I (22 de noviembre) y el nombramiento del primer gobierno de la monarquía, (12 de diciembre), incluido el nuevo Ministro de Educación, Carlos Robles Piquer – fueron percibidos como una mera continuación del régimen franquista.

---

<sup>644</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Noviembre de 1975, p. 6. AHPCE.

<sup>645</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano Central del PTE, Núm. 17, 22 de Octubre de 1975, p. 7. F. Pablo Iglesias.

<sup>646</sup> Ibid.

<sup>647</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Octubre de 1975, p. 5. AHPCE.



La figura del Rey no producía mayores expectativas de cambio entre los estudiantes (“Aún cuando se quiera “aperturista”, Juan Carlos camina flanqueado por el “búnker”<sup>648</sup>), y mucho menos, la de Arias Navarro, quien cargaba con haber sido el último presidente de gobierno nombrado por el dictador, durante cuyo mandato se habían producido las ejecuciones de septiembre de 1975. En este contexto, el diagnóstico del ME respecto de la situación del país era bastante optimista: el régimen había entrado en una situación de debilidad extrema, por lo que la agitación social era el camino para exigir la democracia: “En España hoy no se puede ser “demócrata a medias”. O se es Franco – y Juan Carlos no lo es ni podrá serlo – o la democracia, mil veces exigida por millones de españoles, es la única alternativa”.<sup>649</sup>

## **II. El lenguaje de la ruptura: amnistía y libertades políticas.**

Los estudiantes eran muy conscientes de que estaban en un momento clave para España, de ahí que se generalizara el uso del lenguaje de “la ruptura”, que exigía la democratización del país, un gobierno provisional y, sobre todo, la amnistía. Esta última reivindicación era fundamental para el movimiento estudiantil, que no sólo la pedía para los presos políticos sino también para los estudiantes y académicos sancionados o expulsados de la universidad.

“Al decir esto pensamos ya en la vuelta de los profesores Tierno, Aranguren y García Calvo, y en el homenaje universitario que debe recibirles. Pensamos en el levantamiento de sanciones y expedientes. Pensamos, claro está, en la retirada definitiva de la Policía y el cese de detenciones a universitarios. Pero la amnistía es más. La Universidad debe unir sus esfuerzos a los de toda la sociedad española para ganar la libertad de todos los presos políticos”.<sup>650</sup>

En este sentido, la amnistía era considerada como el primer paso hacia la democracia, como un elemento de cohesión del antifranquismo,<sup>651</sup> y como una etapa indispensable para comenzar a construir el cambio de sistema político. Las campañas a favor de la amnistía fueron particularmente fuertes a partir de noviembre de 1975. El 29 de ese mes concretó el Indulto real concedido con motivo de la coronación de Juan

---

<sup>648</sup> *Vanguardia* (Especial postfranquismo), Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 27 de Noviembre de 1975, p. 1. AHPCE.

<sup>649</sup> Ibid.

<sup>650</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1º quincena de Diciembre de 1975, p. 2. AHPCE.

<sup>651</sup> M. PÉREZ LEDESMA: “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, p. 137.

Carlos I, y se liberó a más de cinco mil presos, a los procesados por el caso Matesa y a los condenados por el proceso 1001, entre ellos, Marcelino Camacho. Pero no era suficiente, miles de presos políticos, entre ellos dirigentes estudiantiles, seguían en las cárceles españolas. Por esto, el movimiento estudiantil se plegó a las jornadas de protesta convocadas por el PCE para los días 10, 11, 12 y 16 de diciembre de 1975, y también a las realizadas en enero de 1976.

Las peticiones de amnistía eran particularmente importantes para los estudiantes, porque durante noviembre de 1975, la represión había ido en aumento en la universidad: “La actuación policíaca rebasa todos los límites. Es propia de un ejército de ocupación. Con caballería, con perros, con metralleta en la mano, las detenciones se producen masivamente”.<sup>652</sup> Desde el inicio del curso, el ingreso de la policía a las facultades de las distintas Universidades de Madrid se producía prácticamente a diario. Por ejemplo, el 19 de noviembre, un día antes de la muerte de Franco, ABC informaba de la intervención de la policía en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense, para disolver una asamblea no autorizada convocada por estudiantes de esa Facultad. En esa ocasión siete estudiantes fueron detenidos.<sup>653</sup> Debido a esto, se pedía insistentemente la liberación de los detenidos, muchos de los cuales eran representantes elegidos por los mismos estudiantes en las elecciones oficiales de fines de 1974, (como el caso de Juan Gutiérrez denunciado por Vanguardia), a los cuales se pretendía aplicar la Ley Antiterrorista de agosto de 1975.

Para ganar apoyo en la lucha por la amnistía, el PCE proponía la denominada Acción Democrática Nacional, es decir, la unión de fuerzas de todos los grupos que defendían la solución democrática, como la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática. Y los estudiantes del PCE también proponían recurrir a la Iglesia y al Ejército, “que no pueden permanecer ajenos al brutal clima de violencia – que puede desembocar en una tragedia irreparable – generado por la Policía y las bandas parapoliciales en nuestras Facultades y Escuelas”.<sup>654</sup>

La muerte de Franco, lejos de relajar el clima de agitación en la universidad, lo exacerbó. El ingreso de la policía a las Facultades se hizo más frecuente, así como las exigencias de amnistía y libertades políticas, por parte de los estudiantes y de los grupos

---

<sup>652</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Noviembre de 1975, p. 1. AHPCE.

<sup>653</sup> *ABC*, 20 de Noviembre de 1975. BNE.

<sup>654</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Noviembre de 1975, p. 3. AHPCE.

de oposición al régimen. A partir de diciembre, los periódicos informan constantemente de los altercados entre estudiantes y fuerzas de seguridad, a raíz de la propaganda política – ilegal aún – y, especialmente, de la retirada de carteles. Las movilizaciones estudiantiles aumentaron bastante a partir de diciembre, y los conflictos ya no se producían solamente entre los estudiantes y la policía, sino también entre estudiantes de distinta ideología, reproduciendo así en la universidad, las crispaciones que vivía la sociedad española después de la muerte del dictador.

El 4 de diciembre, en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, cuatro secciones de las brigadas antidisturbios ingresaron a las Facultades de Derecho, Ciencias y Económicas para disolver asambleas y concentraciones de estudiantes, y aprovecharon de retirar carteles “subversivos” en la Facultad de Filosofía y Letras. Los policías se enfrentaron con los estudiantes cuando éstos se manifestaban frente al rectorado de la Universidad. El 5 de diciembre se suspendió intempestivamente una conferencia del profesor Joaquín Ruiz-Giménez, sobre “La problemática del indulto”, en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense. Ya había más de mil personas congregadas en el aula, por lo que la sorpresiva suspensión causó mucha molestia. La policía desalojó violentamente esa Facultad y también ingresó en la de Políticas, donde se estaba realizando una asamblea no autorizada. A raíz de esto, hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y la policía, que se saldó con varios alumnos heridos. Estos acontecimientos provocaron la dimisión del decano de la Facultad de Políticas, Manuel Medina Ortega, quien pidió al rector la retirada de la policía de la universidad, por considerar que “en las condiciones actuales, no es posible el desarrollo normal de las actividades docentes en la Facultad de Ciencias Políticas”.<sup>655</sup> A raíz de lo sucedido en la Facultad de Física y Políticas los primeros días de diciembre, la Junta de Gobierno de la UCM decidió celebrar una reunión extraordinaria, en la que se condenó la actuación de la policía. Los mismos decanos rechazaron la violencia utilizada, además de criticar el hecho de que la policía decidiera qué se podía o no se podía hacer en la Universidad. Por ejemplo, el decano de Geografía e Historia, Alberto de la Hera, consideraba intolerable que la policía pegara a los alumnos, por lo que propuso que la Junta de Gobierno de la Universidad acudiera al Ministerio de Gobernación para resolver este problema.<sup>656</sup>

---

<sup>655</sup> ABC, 10 de Diciembre de 1975. BNE.

<sup>656</sup> Acta de Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 9 de Diciembre de 1975. ACUCM, p. 3.

En este contexto de creciente agitación, el 11 de diciembre se convocó a una jornada de lucha estudiantil por la ruptura democrática. Las universidades madrileñas, especialmente la Complutense, fueron custodiadas por un gran despliegue policial. A las 11 de la mañana, gran parte de los estudiantes abandonaron sus facultades y se dirigieron a la zona de Moncloa, donde se produjeron enfrentamientos con la policía, cortes de tráfico y detenciones. La UCM fue desalojada a media tarde, y en Barcelona se registraron incidentes este mismo día. Entre las reivindicaciones de esa jornada, la amnistía y las libertades democráticas seguían siendo las más destacadas: “Es el momento de lanzarse a fondo, de ganar la amnistía y las libertades. De vencer. Pero eso sólo es posible si sumamos miles y miles de estudiantes a los que hoy ya están en la brecha, si abrimos cauces de expresión y de acción para decenas de miles de compañeros”.<sup>657</sup>

Ahora bien, las peticiones de amnistía no venían solamente de parte de los estudiantes, sino también de los profesores. El 18 de diciembre se celebró una Junta de Facultad en Derecho de la Complutense, presidida por el decano, en la cual se pidió la amnistía.<sup>658</sup> El 22 de diciembre, quinientos profesores de las tres universidades madrileñas firmaron un escrito solicitando una amnistía universitaria amplia, en el marco de una amnistía general. Además, pedían la reincorporación de los profesores Tierno Galván, López Aranguren y García Calvo.<sup>659</sup> Ese mismo día, la Junta de Facultad de Geografía e Historia de la UCM pidió al nuevo Ministro de Educación y Ciencia la reincorporación de los profesores antes mencionados y una amnistía universitaria para los profesores y estudiantes sancionados por motivos políticos e ideológicos.<sup>660</sup>

En este contexto fue cada vez más frecuente la coordinación o la confluencia de peticiones entre los estudiantes y algunos profesores, no solamente PNN sino profesores numerarios e incluso decanos. Comenzaba a cobrar mayor sentido la idea propiciada por los estudiantes comunistas, de hacer un gran frente universitario, que incluyera a los tres estamentos, en la lucha por la democracia. Y para conseguir esto, los miembros de la Organización Universitaria del PCE pusieron todo su empeño en crear la Junta Democrática de Universidad, inspirada en la JDE, creada en 1974. “El momento actual exige de la Junta Democrática de Universidad y de todas las fuerzas democráticas su

---

<sup>657</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1º quincena de Diciembre de 1975, p. 2. AHPCE.

<sup>658</sup> *ABC*, 19 de Diciembre de 1975. BNE.

<sup>659</sup> *ABC*, 23 de diciembre de 1975. BNE.

<sup>660</sup> *Ibid.*

presencia pública, su capacidad para incidir políticamente en todos los organismos de gobierno universitario, en las asambleas, en conferencias y actos culturales”.<sup>661</sup>

### **III. Las estructuras de movilización: el ME de la ruptura.**

En esta etapa final del régimen franquista, las organizaciones políticas estudiantiles comenzaron a tomar posiciones y a discutir acerca del papel del movimiento estudiantil en la lucha por la democracia. Ciertamente, hay acuerdo respecto de la importancia que tiene el ME en este proceso, pero no lo hay respecto de cómo llevar esta lucha. Para el PCE, por ejemplo, era imprescindible movilizar a todos los estamentos de la universidad: “conquistar Claustros y Juntas, exigir la elección democrática de Rectores de las tres Universidades. Estar atentos a los intentos de expulsión de PNN y de aplicación del decreto sobre disciplina a estudiantes”.<sup>662</sup> La lucha por la democracia, tanto en el país como en la universidad, requería de la unión de todas las fuerzas políticas, tanto de las que se calificaban como revolucionarias, como de las burguesas. En este sentido, el PCE proponía la articulación de un conjunto lo más amplio posible de sectores movilizados en contra del régimen, ya que consideraba que el ME debía ser “un sector de primer plano en el derrocamiento de la dictadura fascista y disputar a la burguesía sus opciones en la Universidad”.<sup>663</sup>

Si bien la estrategia de los estudiantes del PCE era la más conocida, no era la única. Las organizaciones de izquierda más radical, como algunos grupos maoístas o trotskistas no postulaban necesariamente la unión de todos los estamentos universitarios en la lucha por la democracia, sino que consideraban más útil la vinculación del ME con las luchas obreras. En este sentido, la *Organización Comunista de España* (OCE-BR), a través de su periódico *Bandera Roja*, postulaba lo siguiente: “el movimiento estudiantil tiene que tomar partido sin ambigüedades, o por la alternativa obrera y popular, y participar activamente en su ofensiva general política, o por las posiciones conciliadores que buscan un arreglo “pacífico” con el Régimen, y convertirse así, en mero comparsa susceptible de ser movilizado como simple instrumento de presión”.<sup>664</sup> La OCE-BR era

---

<sup>661</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Diciembre de 1975, p. 2. AHPCE.

<sup>662</sup> Ibid.

<sup>663</sup> Ibid.

<sup>664</sup> *Bandera Roja*, Portavoz de la Organización Comunista de España, 12 de Noviembre de 1975, p. 9. F. Pablo Iglesias.

bastante crítica de la actuación del PCE, a quién calificaba de revisionista y de pactar con fuerzas cercanas al régimen.

Ahora bien, la discusión sobre el lugar que le correspondía al ME en la lucha por la democracia se dio junto con el cuestionamiento sobre qué tipo de movimiento estudiantil había que formar, y especialmente, sobre qué tipo de organizaciones tenía que tener este movimiento. En este sentido, el debate respecto de si participar o no en las elecciones oficiales de delegados, convocadas por el Ministerio de Educación, reapareció con mucha fuerza a comienzos del curso 75-76, producto del cambio en la situación política del país.

El 20 de octubre, el MEC dictó una nueva orden de participación estudiantil, para regular este proceso en el curso 75-76. Las elecciones debían celebrarse antes de transcurridos cincuenta días desde la publicación de dicha orden, en todo lo demás, regía la orden de octubre de 1974. El ME volvió a dividirse en torno a las elecciones, nuevamente los estudiantes comunistas defendieron la participación en ellas, mientras los grupos más radicales (socialistas y extrema izquierda) propiciaban la abstención y el boicot. Las posiciones habían cambiado muy poco con respecto al año anterior, pero el tema adquirió mayor importancia, porque finalmente, lo que se discutía era la forma de organizar al ME en un momento crucial de la historia de España.

Para el PCE, participar en las elecciones era disputar al régimen una zona de legalidad ganada justamente, gracias a las luchas de los cursos anteriores. El reconocimiento legal, tanto de las elecciones como de los delegados, permitiría visibilizar las reivindicaciones de los estudiantes frente a la opinión pública. Los estudiantes comunistas criticaban a las organizaciones de vanguardia – tipo Comités de Lucha – o clandestinas, que solo llevarían a “disputas minoritarias entre estudiantes ideologizados y grupos políticos; al activismo de los menos y la inhibición de los más”.<sup>665</sup> Entonces, la estrategia era conseguir unas elecciones masivas, con amplia participación del estudiantado, en las cuales se eligiera a los delegados más representativos. Para ello, proponía, a nivel universitario, lo mismo que el PCE proponía a nivel nacional en la lucha contra el régimen: la unión de todos los grupos democráticos: “Hoy todos los demócratas, estén o no encuadrados en grupos concretos han de jugar un papel revolucionario y progresista. Las elecciones son el cauce”.<sup>666</sup>

---

<sup>665</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Octubre de 1975, p. 5. AHPCE.

<sup>666</sup> *Ibid.*

En cuanto al programa propuesto por los estudiantes comunistas, éste incluía desde reivindicaciones específicamente universitarias (derogación del decreto de permanencia y democratización de la gestión universitaria) hasta exigencias de libertades políticas a nivel nacional y la formación de un Gobierno Provisional. Las elecciones también tenían el apoyo de la *Joven Guardia Roja*, que propiciaba una estrategia muy similar a la del PCE: participación masiva y programas que recogieran las demandas específicas de los estudiantes con las necesidades democráticas.

Desde la vereda opuesta, la OCE-BR postulaba un discurso bastante más radical, al menos en el lenguaje. En el periódico *Bandera Roja* se exigía la “liquidación completa y total del franquismo y todos sus aparatos específicos y la imposición de la República Democrática”.<sup>667</sup> Para conseguir esto, era necesario que el ME se decidiera, o seguía las posiciones reformistas de un arreglo pacífico con el régimen – la posición del PCE según la OCE –, o bien tomaba partido por la alternativa obrera y popular y su ofensiva general. Para los maoístas de la Organización Comunista de España, el ME sólo podría involucrarse en la lucha contra el franquismo en la medida en que pudiera desarrollar una organización unitaria, representativa y democrática que combinara las reivindicaciones académicas con la lucha política. Sin embargo, no estaban de acuerdo con la participación en las elecciones, ya que consideraban que las elecciones del curso pasado solamente habían servido para una negociación en donde el ME no había logrado ni una sola victoria. En este sentido, la OCE-BR proponía una organización libre, sin sujeción al régimen, cuyo reconocimiento legal vendría “de la mano de su capacidad de movilización y lucha, cuando el Ministerio tenga cuestiones concretas que negociar y comprenda que no puede hacerlo con nadie más”.<sup>668</sup>

Una postura más radicalizada, aunque muy minoritaria, era la presentada por la ODEA (*Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas*) grupúsculo asociado a la organización terrorista GRAPO. A través de su periódico *Prensa Libre Estudiantil*, propugnaban el boicot a las elecciones y la constitución de una organización independiente para el ME. Su argumento se basaba en la enorme represión sufrida por los delegados estudiantiles durante las luchas del curso 74-75, y en la resistencia activa al régimen: “nosotros luchamos por arrinconarle, destruirle y conseguir la libertad para

---

<sup>667</sup> *Bandera Roja*, Portavoz de la Organización Comunista de España, 12 de Noviembre de 1975, p. 9. F. Pablo Iglesias.

<sup>668</sup> *Ibid.*, p. 10.

nuestro pueblo. Por eso no votaremos bajo el fascismo, porque bajo este régimen “participar” sólo es una trampa policíaca”.<sup>669</sup>

El debate en torno a la participación en las elecciones a delegados prefiguraba ya un conflicto que se mantuvo durante todo el curso, el tipo de organización necesaria para el ME A medida que avanzaba el año 1976, la imposibilidad para lograr acuerdos entre las distintas organizaciones políticas del movimiento estudiantil hizo naufragar la idea de una estructura coordinada de los estudiantes, que les permitiera ir a la cabeza en la lucha por el cambio político necesario para el país.

Ahora bien, la discusión en torno a las elecciones y a las estructuras de movilización se dio en un contexto de fuerte agitación y conflictividad estudiantil. Ya hemos mencionado las constantes intervenciones de la policía en la universidad, las manifestaciones de los estudiantes a favor de la amnistía y en contra del decreto de permanencia, y su vinculación con el movimiento de oposición al franquismo, ejemplificado en las manifestaciones frente a la cárcel de Carabanchel, producidas en diciembre de 1975.

En este contexto, el 10 de diciembre se celebró la primera ronda en las elecciones para representantes estudiantiles en las Universidades de Madrid, aunque, según ABC, la participación fue muy escasa; no se logró el quórum necesario en la UCM y se alcanzó por muy poco margen en Derecho y Filosofía de la UAM. Las elecciones se celebraron de forma escalonada en Madrid y la tónica general fue de gran abstención.<sup>670</sup> Los mismos estudiantes del PCE reconocieron el fracaso de las elecciones. Para el Ministerio, el resultado del proceso reflejaba claramente que los estudiantes no querían organizarse; para los grupos más radicales, la abstención en las elecciones significaba que los estudiantes no querían participar de la “legalidad franquista”. Para los estudiantes comunistas, lo que había ocurrido se debía a la falta de libertades y a la represión a la que habían sido sometidos los representantes elegidos el curso anterior, que había inhibido a los universitarios de participar en el proceso electoral.

Sin embargo, la interpretación más sugerente de este fracaso viene de los mismos estudiantes comunistas, quienes, desde *Vanguardia*, criticaron su propia incapacidad para comprender de manera cabal la situación que se había abierto con la

---

<sup>669</sup> *Prensa Libre Estudiantil*, Órgano de la Organización democrática de Estudiantes Antifascistas, Núm. 2, Noviembre de 1975, p. 6. F. Pablo Iglesias.

<sup>670</sup> ABC, 11 de diciembre de 1975. BNE.



muerte de Franco. En este sentido, los estudiantes comunistas habían propiciado la participación en las elecciones – igual que en el curso anterior y bajo la misma normativa – sin tener en cuenta que el escenario político había cambiado profundamente, y que en este nuevo contexto, podían exigir más: “ha llegado el momento de ejercer los derechos democráticos, de abrir cauces de acción y expresión para todos los universitarios”.<sup>671</sup> Los estudiantes socialistas, opuestos desde el curso 74-75 a las elecciones, coincidían en su diagnóstico: “Pedir a los estudiantes después de las ejecuciones y de la muerte de Franco, de la monarquía y del nuevo gobierno y, sobre todo, después de las luchas cada vez más amplias y unificadas de todos los sectores hacia la libertad, que participen en las elecciones de un decreto de un ministro dimitido y bajo el que suenan las mohosas cadenas del fantasma del 12 de Febrero, ha sido sencillamente imposible”.<sup>672</sup>

A partir del fracaso de las elecciones de 1975 surgió un intenso debate en torno a la creación de una organización estudiantil unitaria, que coordinara y liderara las movilizaciones de los estudiantes. Sin embargo, esta discusión tampoco llegaría a buen puerto, propiciando entonces que los estudiantes abandonaran la lucha en la universidad para concentrarse en la lucha a nivel nacional.

#### **IV. Invierno de 1976: el comienzo de un año clave.**

El regreso a clases, tras las vacaciones de Navidad, se inició bajo un signo auspicioso. El 8 enero de 1976 se reunió el Consejo de Rectores para tomar medidas ante el nuevo semestre. La idea era darle más autoridad a los órganos académicos para intentar rebajar la tensión en la universidad. En la misma línea, el 9 de enero, el Ministro de Educación, Carlos Robles Piquer, anunciaba por televisión que era necesario “devolver la Universidad a los universitarios”<sup>673</sup> para lo cual la policía se retiraría de la universidad. El Ministro aseguró que sólo en casos de extrema gravedad, la autoridad académica podría llamar a la fuerza pública para que ingresara en los campus.

---

<sup>671</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Enero de 1976, p. 6. AHPCE.

<sup>672</sup> *Prensa Libre Socialista*, Órgano de las Juventudes Socialistas de Madrid, Enero de 1976, p. 6. F. Pablo Iglesias.

<sup>673</sup> *Informaciones*, 10 de enero de 1976. BNE.

Sin embargo, esto no se concretó, ya que si bien la policía se retiró del interior de las facultades, se mantuvo en las vías de acceso y los alrededores. De hecho, el 12 de enero, apenas dos días después del anuncio de la retirada de la policía de la universidad, ésta ingresó en la Ciudad Universitaria para disolver una manifestación de estudiantes que se dirigía a Moncloa llevando pancartas a favor de la amnistía. El 13 de enero, el rector de la Universidad Complutense aseguraba que la policía acudiría a la Universidad solamente en casos de violencia física, y anunció también que ya no serían necesarias las autorizaciones del Ministerio de Información y Turismo para la celebración de actos culturales, ya que esa responsabilidad recaería en adelante en las autoridades universitarias.<sup>674</sup> Parecía que los órganos académicos recuperaban parte de su autoridad perdida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En este contexto, los estudiantes supieron aprovechar cualquier indicio de apertura y tolerancia para multiplicar sus acciones. Así, durante todo el mes de enero se sucedieron asambleas y manifestaciones, en las cuales participaban militantes de Comisiones Obreras y otros sindicatos y miembros de partidos políticos de oposición. Por ejemplo, el 14 de enero se celebró una asamblea en el edificio B de la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, que contó con la presencia de tres obreros de la Standard Eléctrica, empresa que llevaba varias semanas en huelga.<sup>675</sup> El 16 de enero se celebró en la misma facultad, un masivo acto para pedir la amnistía general y universitaria, en el que participaron más de cuatro mil estudiantes, y durante el cual hicieron uso de la palabra algunos miembros de CC.OO. Al finalizar el acto, un grupo numeroso de estudiantes inició una manifestación, que fue disuelta por la brigada antidisturbios de la Policía Armada, en la plaza del Cardenal Cisneros.<sup>676</sup>

Como ya hemos señalado más arriba, la amnistía y la democracia iban de la mano. Para el ME “no se puede hablar de democracia sin poner las piedras angulares de la misma. Esas vanas promesas, esos demagógicos gestos, tiene la respuesta en la calle. Las masas de trabajadores, de estudiantes, de mujeres exigen amnistía”.<sup>677</sup> Para los estudiantes comunistas, había llegado el momento de apoyar decididamente la causa de la democracia en la universidad, y en razón de ello, apoyaron y propiciaron diversos actos y marchas a favor de las libertades:

---

<sup>674</sup> *Informaciones*, 14 de enero de 1976. BNE.

<sup>675</sup> *Informaciones*, 15 de enero de 1976. BNE.

<sup>676</sup> *ABC*, 17 de enero de 1976. BNE.

<sup>677</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Enero de 1976, p. 2. AHPCE.

“Ha llegado el momento de hacer carne en nuestras Facultades y Escuelas las libertades por las que tanto hemos luchado. Ha llegado el momento de que las fuerzas políticas y las personalidades de la Junta y la Convergencia se presenten públicamente – como Tamames en la Autónoma –. Ha llegado el momento para todos los universitarios de hablar claro y alto, en asambleas, en actos culturales, inventando mil iniciativas que hagan realidad en nuestras aulas el ejercicio de la democracia”.<sup>678</sup>

El lenguaje de la democracia se había extendido entre los estudiantes del PCE, que, dejando de lado las pretensiones revolucionarias y socialistas clásicas, se hacían cargo de la necesidad de unir a todas las fuerzas democráticas de España bajo un objetivo común: crear una alternativa política al régimen.<sup>679</sup>

A comienzos de febrero, los estudiantes comunistas habían elaborado un programa mínimo para el ME y se disponían a hacerlo público. Así, el 4 de febrero, un grupo numeroso de estudiantes (cuatro mil, según *Vanguardia*) realizó una marcha hacia el Ministerio de Educación para exigir los principales puntos de este programa: la derogación del decreto de cuatro convocatorias, la disolución de los Comités de Disciplina Académica, la amnistía universitaria en el marco de la amnistía general, el levantamiento de las sanciones y la reincorporación de todos los estudiantes y profesores afectados por ellas. Los estudiantes también exigieron la renuncia de todas las autoridades académicas no elegidas democráticamente, la retirada definitiva de la policía de los campus universitarios, libertades de expresión, asociación y reunión, el reconocimiento del derecho de los estudiantes a crear un sindicato propio y la paralización de la redacción de los Estatutos de los Centros Docentes y de Participación Universitaria, por considerar que estos debían ser redactados por representantes de todos los estamentos universitarios.

Para lograr los apoyos necesarios para el programa mínimo, era necesario, según los estudiantes, reivindicarlo en la calle. De esta manera fue tomando cuerpo la idea de llevar el programa ante el Ministro Robles Piquer, el 4 de febrero. “La concentración ante el Ministerio, con no ser el final, es un paso de gigante en sacar el programa ante la sociedad madrileña y realizarlo ante la propia Universidad, dando esa prueba de fuerza y unidad que tanto necesitamos”.<sup>680</sup>

---

<sup>678</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Enero de 1976, p. 4. AHPCE.

<sup>679</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>680</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Enero de 1976, p. 4. AHPCE.

La convocatoria fue un éxito, no sólo por la cantidad de estudiantes, sino también porque el Ministro de comprometió a iniciar una negociación en torno a algunos de los puntos del programa del ME. Los estudiantes no eran ingenuos y sabían que el Ministro trataría de dar largas al asunto o haría promesas vagas en torno a asuntos menores, sin atacar los problemas de fondo, pero al menos, se le había puesto ante una disyuntiva: “o dar las libertades a la Universidad, o demostrar su auténtico talante”.<sup>681</sup> Para los estudiantes comunistas, la convocatoria del 4 de febrero había llevado el programa de la ruptura ante la opinión pública, lo había sacado a las calles en lugar de mantenerlo “encerrado” en los recintos universitarios.

En este sentido, cada vez cobraba más fuerza la idea de que la universidad y la sociedad española debían luchar en conjunto por el cambio de régimen político: “Tampoco la Universidad tendría posibilidades de vencer si no recogiera los ejes de ruptura de toda la sociedad española. La ruptura se decide – aún cuando tenga manifestaciones locales de enorme importancia – en lo político y en la calle”.<sup>682</sup> Esta convicción era fundamental para la lucha por la democracia, pero significaba también un peligro para el ME: en la medida en que el escenario político se fue abriendo y las organizaciones políticas fueron teniendo más posibilidades de actuación en el marco institucional, abandonarían la universidad, dejando al ME debilitado, sin rumbo y con una fuerte crisis identitaria.

La retirada de la policía del interior de las Facultades, anunciada los primeros días de enero, rebajó en parte las tensiones entre los estudiantes y la policía, pero los conflictos entre estudiantes radicalizados ganaron terreno, poniendo de manifiesto la sensación de incertidumbre y la polarización que se vivía, tanto en la universidad como en la sociedad española. El 6 de febrero, por ejemplo, un grupo de estudiantes de extrema derecha intentó disolver un acto celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en el que participaban miembros de las CC.OO. Uno de los estudiantes ultra amenazó a los participantes con una pistola, lo que produjo una huida general del aula en el que se celebraba el acto. Inmediatamente, un grupo de cerca de 200 alumnos pidieron al rector que abriera un expediente de investigación para aclarar esta situación.<sup>683</sup>

---

<sup>681</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Febrero de 1976, p. 3. AHPCE.

<sup>682</sup> “Pasar a la ofensiva”, Organización Universitaria del PCE, Febrero 1976, p. 3. AHPCE.

<sup>683</sup> *ABC*, 7 de Febrero de 1976. BNE.

A los pocos días se produjo otro enfrentamiento entre estudiantes de oposición que participaban en una asamblea, y estudiantes franquistas (que acompañaban al estudiante que días antes había amenazado con un arma de fuego en plena asamblea). Los enfrentamientos se saldaron con varios alumnos heridos, entre ellos, un sobrino del Presidente de Gobierno, según *Informaciones*, que habría sido golpeado por miembros del grupo *Guerrilleros de Cristo Rey*.<sup>684</sup> El 19 de febrero, en un claustro realizado en la Facultad de Derecho de la Complutense, se acordó prohibir la entrada al centro a cuatro alumnos durante algunos días, y presentar una denuncia por lesiones y daños.

En este contexto de enfrentamientos casi diarios entre estudiantes de distintas ideologías, el Gobierno publicó una nota oficial advirtiendo que tomaría medidas contra las asambleas que se realizaban sin la autorización correspondiente, y que enturbiaban el ambiente universitario, haciendo prácticamente imposible la labor docente.

“Especialmente serán impedidas las actuaciones de los agitadores que crean un clima de violencia moral o física. En los casos necesarios, las autoridades académicas – que carecen de fuerza física propia – no dejarán de recurrir al apoyo de las fuerzas del orden público. El Gobierno no tolerará que individuos, para los que la Universidad no es más que un arma política, alteren el espíritu de respeto mutuo y de convivencia que le es propio y que predomina en el resto de la Universidad española”.<sup>685</sup>

La mínima tolerancia que se había permitido en el último mes fue rápidamente coartada, ante el temor a que la movilización estudiantil rebasara el marco universitario y “contagiara” al resto de la sociedad. Los sectores más intransigentes del franquismo temían los efectos de la agitación social en el panorama político incierto que se había abierto tras la muerte de Franco. De esta manera, presionaron al gobierno para que reprimiera y controlara al ME. El 21 de febrero, ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cortes, el procurador Antonio Pedrosa Latas, se refirió a la universidad como un “búnker marxista”, señalando que en “los claustros universitarios el grito de Viva España va constituyendo ya un delito y los patriotas pasan así por delincuentes”.<sup>686</sup> Por su parte, el procurador Pedro Nieto Antúnez señaló que en caso de que la autoridad no tomara cartas en el asunto, “las tomarían ellos”, declaraciones todas que molestaron

---

<sup>684</sup> *Informaciones* 18 de febrero de 197. BNE.

<sup>685</sup> *ABC*, 20 de Febrero de 1976. BNE.

<sup>686</sup> *El País*, 1 de Febrero de 1979. Hemeroteca digital El País.

profundamente a la comunidad universitaria.<sup>687</sup> A consecuencia de estos dichos, cientos de estudiantes se reunieron en la Facultad de Derecho y decidieron paralizar la actividad académica en protesta por lo sucedido en las Cortes y por las medidas tomadas por el Ministerio.

El 23 de febrero, la Junta de Gobierno de la Complutense celebró una sesión extraordinaria, en la cual varios decanos protestaron contra la forma en que se había tratado a la universidad en las Cortes. Independiente de las apreciaciones particulares de cada decano, todos coincidían en que los incidentes ocurridos en la Facultad de Derecho eran un ejemplo de cómo la violencia había penetrado en la universidad, violencia que no necesariamente venía de los estudiantes, sino que parecía venir de la policía y, ahora último, desde los procuradores de Cortes: “lo que ocurre en la Universidad es consecuencia de la situación general del país que ha empezado un camino de evolución que va más rápidamente que las Instituciones; la problemática nacional se refleja en la Universidad y no podemos pretender expulsar la política de la misma porque no hay medidas capaces de hacer esto”.<sup>688</sup> Ese mismo día, cientos de alumnos se manifestaron ante el rectorado de la UCM apoyando las medidas del claustro de la Facultad de Derecho, y al día siguiente convocaron a una asamblea a favor de la autonomía universitaria y de la unidad de los estudiantes.

Pero los problemas no se concentraban solamente en la Universidad Complutense. En la Universidad Autónoma también se convocó a asambleas y concentraciones durante casi todo el mes de febrero. El 11, cuatrocientos estudiantes se manifestaron en el campus de Cantoblanco para pedir la dimisión del rector de la UAM, Gratiniano Nieto. El rector acordó recibir a una comisión de cuatro estudiantes, quienes le expresaron su deseo de que todas las autoridades académicas fueran democráticamente elegidas, a lo que el rector respondió que él no pensaba en dimitir si no se lo pedía expresamente la autoridad que lo había nombrado.<sup>689</sup> Al día siguiente, unas quinientas personas, entre estudiantes y profesores no numerarios, realizaron una sentada frente al Rectorado de la UAM, al mismo tiempo que una comisión de PNN le

---

<sup>687</sup> En las Actas de Sesión de la Junta de Gobierno del día 23 de febrero de 1976 se transcribe el malestar de los decanos y rector de la Universidad Complutense ante lo que consideran una agresión injusta de parte de las Cortes.

<sup>688</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 23 de Febrero de 1976, p. 4. ACUCM.

<sup>689</sup> *Informaciones*, 12 de Febrero de 1976. BNE

entregaba una carta al rector, exigiendo la anulación de todas las medidas disciplinarias impuestas a estudiantes y profesores, y pidiendo su dimisión.<sup>690</sup>

Las peticiones de renuncia de los rectores de las universidades madrileñas se fue haciendo cada vez más habitual, y se enmarcaba dentro de la reivindicación de democratizar las elecciones de las autoridades académicas. Esta exigencia fue ganando terreno progresivamente en el programa mínimo del ME, y tenía directa relación con la reconstrucción de la vida universitaria. En el contexto de la ruptura política que se buscaba producir, la universidad debía experimentar un cambio radical, que tenía que ver, en primer lugar, con la democratización de la vida universitaria, y en segundo lugar, con la función que la universidad debía tener en la sociedad española.

El mismo 12 de febrero, el Consejo de Rectores reunido en Madrid, publicó una nota de prensa en la que se hacía un positivo balance de la retirada de la policía de la universidad, aunque también se hacía referencia a “algunos grupos minoritarios [que] han organizado ciertos actos ajenos a la temática y al estilo propio de las Universidades, sin el permiso preceptivo de las autoridades académicas, que no disponen ahora de fuerza física para imponer sus decisiones”.<sup>691</sup> Este recuento positivo por los rectores era paradójico, porque la policía continuaba con sus intervenciones en los campus, por lo que en la práctica, los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de seguridad seguían produciéndose periódicamente.

Sin ir más lejos, el 19 de febrero la fuerza pública ingresó nuevamente en el campus de Cantoblanco para disolver una asamblea realizada en la Facultad de Económicas, dejando a una estudiante herida. Una vez disuelta, un grupo de cien estudiantes se dirigió al rectorado para pedir explicaciones por el ingreso de la policía al campus. En los días siguientes, se registraron paros parciales en varias facultades de la Autónoma, y el 27 de febrero se registró un encierro cerca de cien personas, entre estudiantes y PNN de la UAM, en la iglesia de San Antonio, ubicada en la calle Bravo Murillo. Los participantes reivindicaron exigencias académicas y políticas, como la liberación de Simón Sánchez Montero, detenido unos días antes por intervenir en un acto en la universidad.

En medio de esta situación de constante conflicto, el Ministro de Educación, Robles Piquer, prohibía en la universidad todos los actos que no fueran de exclusivo carácter cultural o científico, para intentar atajar la creciente oleada de movilización y

---

<sup>690</sup> *Informaciones*, 13 de Febrero de 1976. BNE

<sup>691</sup> *Informaciones*, 12 de Febrero de 1976. BNE.

conflicto que afectaba a la universidad. Nuevamente, el gobierno echaba pie atrás en la mínima apertura que había permitido, lo que lógicamente provocó un enorme malestar entre los estudiantes, que veían como las presiones de los sectores más duros del franquismo lograban su cometido. Para los estudiantes comunistas la situación era bastante clara: “El Régimen ha arremetido contra la Universidad: con pistoleros, con policías, con detenciones, con procesos, con prohibiciones. El búnker inicia así la “toma de la situación” imponiendo sus soluciones “típicas” a cualquier opción reformista”.<sup>692</sup>

Ahora bien, no sólo los estudiantes se movilizaban en la universidad. En el curso 1975-1976 también fue fundamental la movilización de los Profesores No Numerarios (PNN), que durante el curso académico 1974-1975 habían llevado a cabo una extensa huelga exigiendo el contrato laboral y mejoras salariales, a la vez que pedían la derogación de todos los decretos de excepción, el levantamiento de las sanciones y la readmisión de estudiantes y profesores sancionados.<sup>693</sup> El movimiento de los PNN fue importantísimo para los estudiantes, no sólo porque muchas de sus reivindicaciones coincidían, sino también porque al estar en huelga los profesores, la presión de los exámenes y de la pérdida del curso era menor para los estudiantes. Además, es importante recordar que muchos PNN habían sido dirigentes estudiantiles por lo que conocían y apoyaban las reivindicaciones del ME.

De esta manera, el 22 de enero un grupo de PNN de la Facultad de Económicas de la UCM se encerró en el decanato de su Facultad, para protestar por los salarios que se les adeudaba desde el mes de octubre de 1975. Este paro terminó el 26 de enero, cuando el rectorado de la Complutense les abonó los salarios adeudados.<sup>694</sup> El 30 de enero, se realizó una Asamblea de Distrito de los PNN de Madrid, en la cual se aprobaron varias reivindicaciones: aumento de salario de 15.000 pesetas y retribución mínima de 30.000 al mes, contratación laboral mediante comisiones mixtas y paritarias, readmisión de los profesores despedidos de la universidad en el marco de una amnistía general, autonomía universitaria y elaboración de Estatutos con comisiones representativas del estamento docente. También acordaron exigir la derogación del decreto sobre selectividad y el de permanencia en la universidad.<sup>695</sup>

---

<sup>692</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Febrero, 1976, p. 1. AHPCE.

<sup>693</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 398.

<sup>694</sup> *Informaciones*, 23 de Enero de 1976 – 27 de Enero de 1976. BNE.

<sup>695</sup> *Informaciones*, 31 de Enero de 1976. BNE.



En forma paralela, los PNN de universidad se reunieron en Valencia, en la IV Asamblea Estatal de Profesores No Numerarios, y acordaron convocar en marzo, una huelga de dos días para reivindicar el salario mínimo de 30.000 pesetas para la dedicación exclusiva y el aumento proporcional para las demás categorías, equiparación salarial de los profesores de Escuelas Técnicas y de Universidad, contrato laboral, a través de comisiones mixtas de profesores y estudiantes, elaboración democrática del Estatuto del profesorado, reincorporación de profesores y alumnos expulsados por motivos políticos, libertad y readmisión de los trabajadores detenidos y represaliados, amnistía general y libertades democráticas.<sup>696</sup> De esta forma, durante los dos primeros meses de 1976, la universidad fue un foco permanente de agitación y conflicto, situación que lejos de ceder, tiende a agravarse producto de los sucesos de Vitoria.

## **V. La lucha contra el decreto de permanencia.**

El 3 de marzo de 1976, la policía armada ingresó en la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria, en donde se encontraban encerrados cientos de trabajadores en huelga, y disparó contra los manifestantes, asesinando a 5 de ellos. Cuando se conoció la noticia en Madrid, dos mil estudiantes se reunieron en asamblea en la Facultad de Derecho de la Complutense, la cual fue disuelta violentamente por la policía. Los estudiantes decidieron entonces dirigirse en marcha pacífica al Ministerio de Educación, con la intención de reunirse con estudiantes de la Autónoma y Politécnica de Madrid. La fuerza pública, que vigilaba la marcha, disolvió un par de intentos de manifestación en la plaza Cibeles, dejando como saldo a varios estudiantes heridos. (“Ante el Ministerio de Educación, los estudiantes hemos podido comprobar el creciente salvajismo de la policía. Agentes de la social cargaron con barras de madera y hierro, causando un elevado número de heridos”).<sup>697</sup>)

La impresión del ME era que el régimen intentaba recuperar por la fuerza el terreno cedido en la universidad a partir de la muerte de Franco. Las asambleas, la propaganda, la prensa política, y todos aquellos espacios que los estudiantes habían ganado desde diciembre de 1975, estaban en peligro. Para los estudiantes de la LCR (IV Internacional), el régimen quería “arrancar las conquistas que se han impuesto en las

---

<sup>696</sup> *Informaciones*, 23 de Febrero de 1976. BNE.

<sup>697</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Marzo, 1976, p. 1. AHPCE.

facultades en el contexto general de la movilización de todas las capas oprimidas”.<sup>698</sup> En este sentido, los estudiantes comunistas hacían constantes llamados a renovar la lucha por la democracia y por la ruptura: “Para España ha llegado la hora de la ruptura, en cuya consecución deben estar más y más interesadas cada vez todas las fuerzas políticas y sociales que quieran un futuro para nuestro país”.<sup>699</sup>

El 5 de marzo, un cóctel molotov fue arrojado contra el edificio del rectorado de la Universidad Complutense y otro contra un coche patrulla, durante la madrugada. Ese mismo día, la policía ingresó y desalojó las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. En este contexto, Facultades que se habían mantenido en relativa calma, como Biología, se plegaron a la lucha de sus compañeros. El 8 de marzo la fuerza pública ingresó en este centro, que se encontraba en paro desde el día anterior, en protesta por los sucesos de Vitoria y por la detención de estudiantes en diferentes movilizaciones. Derecho, Políticas, Ciencias de la Información y Geológicas también realizaron paros en protesta por la muerte de los obreros en Vitoria. De esta manera, el 9 de marzo la Universidad Complutense registraba un paro total de actividades, con sucesivas asambleas y manifestaciones durante toda la jornada. Además de Madrid, hubo incidentes graves en las Universidades de Zaragoza, Valladolid, Sevilla y Santiago.

Así, la agitación estudiantil en lugar de ceder, crecía por momentos. Durante el mes de marzo, casi no se dictaron clases en las universidades madrileñas, los estudiantes que asistían a las Facultades se congregaban en asambleas y concentraciones, que rápidamente derivaban en enfrentamientos con la policía. Por ejemplo, el 9 de marzo, los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid paralizaron la mayor parte de los centros, exigiendo la derogación del decreto de permanencia en la universidad. La situación en la Politécnica de Madrid era bastante compleja, ya que sus facultades se veían particularmente afectadas por el decreto de permanencia, ya que la duración normal de las carreras técnicas era superior a lo que establecía el decreto. Pese a los intentos de negociación con el Ministerio, el conflicto se agravó hacia fines de marzo, cuando trescientos estudiantes se manifestaron por el campus, pidiendo la liberación de seis estudiantes detenidos y la derogación del decreto en cuestión. La policía dispersó la manifestación a caballo.<sup>700</sup> Pese a la represión, la agitación estudiantil no daba señales

---

<sup>698</sup> *Combate*, Órgano Central de la LCR (IV Internacional), 3 de Marzo de 1976, p. 10. F. Pablo Iglesias.

<sup>699</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Marzo, 1976, p. 1. AHPCE.

<sup>700</sup> *ABC*, 1 de Abril de 1976. BNE.

de ceder, al contrario, los estudiantes de las universidades madrileñas continuaron presionando por sus reivindicaciones de democratización, aún cuando la policía había vuelto a su vieja costumbre de ingresar a los campus y facultades.

La ofensiva lanzada desde la Politécnica sirvió para retomar la lucha contra el decreto de permanencia, un tanto olvidada en el fragor de la batalla por la amnistía. De hecho, las facultades de la Universidad Politécnica de Madrid no participaban masivamente en las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, el decreto consiguió congregarse a escuelas como Minas, Industriales, Forestales, Arquitectura y Agronomía, en donde se realizaban constantemente asambleas y actos culturales con amplia participación de estudiantes y profesores. En este contexto, los estudiantes de la Organización Universitaria del PCE hacían un llamado a extender el conflicto, ya que “las cuatro convocatorias no afectan solo a la Politécnica de Madrid, sino a las Escuelas Técnicas de toda España y a las Universidades de toda España. En concreto, por la brecha abierta por los estudiantes de la Politécnica deberían entrar, ensanchándola, otras Facultades (Ciencias, Medicina, Físicas...)”.<sup>701</sup>

Independientemente de por qué se estuviera luchando en cada Facultad, ya fuera contra el decreto de permanencia, por la ruptura democrática, contra la policía, o por todo ello en conjunto, la realidad era que la Universidad madrileña estaba en pie de guerra contra el régimen, y éste respondía con represión, generando más agitación, más hostilidad y más enfrentamientos entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad. El 2 de abril, la policía entró al campus de Cantoblanco para quitar carteles “insultantes para altas jerarquías del Estado”, según ABC, provocando un enfrentamiento con estudiantes, que terminó con varios de ellos detenidos.<sup>702</sup> Luego de que la fuerza pública se hubiera ido del centro, un grupo de estudiantes apedreó el edificio del rectorado de la Universidad Autónoma, en protesta por la detención de algunos estudiantes (uno o dos, según la Junta de Gobierno de la UAM) y porque había sido el rector quién habría pedido a la policía que interviniera en el campus. La compleja situación vivida en la UAM motivó que el 5 de abril la Junta de Gobierno de la UAM se reuniera en sesión extraordinaria para dar cuenta de los incidentes de días anteriores y de los daños causados al edificio (“por un valor de 165.000 pesetas”). En el momento en que estaba por producirse la reunión extraordinaria, se realizaron nuevos ataques al edificio del

---

<sup>701</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Marzo de 1976, p. 3. AHPCE.

<sup>702</sup> ABC, 3 de Abril de 1976. BNE.

rectorado exigiendo también la dimisión de las autoridades académicas y la puesta en libertad de los estudiantes detenidos. En este contexto, la Junta acordó pedir a la DGS que restableciera “el jeep con policía armada que había junto al Rectorado hasta finales del año pasado”.<sup>703</sup>

Paralelamente, en la Universidad Complutense, los estudiantes de Física, Geológicas, Biológicas, Química, Matemáticas, Farmacia, Medicina y Veterinaria se reunieron con los decanos de dichas facultades y con el rector para tratar la posible derogación del decreto de permanencia. El 9 de abril se reunió en Consejo de Rectores en La Rábida, para tratar los temas más urgentes relacionados con la universidad, como el decreto de permanencia (causa de los paros en la Politécnica y en algunos centros de la Complutense), la situación del profesorado (paro de PNN), la autonomía universitaria y la representatividad.

La lucha contra el decreto de permanencia seguía la misma línea que la lucha de años anteriores contra la LGE y contra la selectividad. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, la estrategia de los estudiantes fue generar un frente que uniera a los tres estamentos universitarios en contra del decreto, el objetivo era comprometer a PNN, catedráticos y autoridades académicas en la defensa de la universidad. Y tuvieron éxito. La ofensiva de la Politécnica consiguió que el Ministro Robles Piquer iniciara conversaciones con el Consejo de esa Universidad, y finalmente, producto de las negociación entre el MEC y las Universidades, y también de las movilizaciones estudiantiles que se mantuvieron durante prácticamente todo el curso, el Consejo de Ministros decidió derogar el “decreto de verano”. Ahora, la victoria no fue total para el ME porque el decreto de Garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad fue modificado por el Real decreto ley 8/1976, que igualmente ponía límites a la permanencia en la universidad y al número de convocatorias, pero en condiciones algo mejores que el decreto anterior. Con la modificación introducida en 1976, la permanencia de los estudiantes la universidad y el número de convocatorias quedaban regulados por los estatutos de cada centro, pero la permanencia no podía ser inferior a dos cursos más de los previstos en el plan de estudios de cada carrera y el número máximo de convocatorias se aumentaba a seis.<sup>704</sup> Con todo, lo más importante

---

<sup>703</sup> Acta de Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, 5 de abril de 1976, p. 1. ACUAM.

<sup>704</sup> Real Decreto-Ley 8/1976 de 16 de junio de 1975. Boe núm. 146, 18 de junio de 1976, p. 11.893. [www.boe.es](http://www.boe.es).

fue que se suprimieron las comisiones disciplinarias que podían sancionar a los estudiantes que “perturbaran el orden académico”.

Este triunfo – parcial pero triunfo al fin – del ME fue recibido con cautela por los estudiantes, que estaban conscientes de que la situación en la universidad española estaba lejos de ser la que ellos esperaban. Sin embargo, fue una demostración de que para tener éxito en sus reivindicaciones era fundamental la articulación de un frente unido de estudiantes, profesores y administrativos. Así, para los estudiantes comunistas, el éxito del ME se debía a que había logrado hacer de una reivindicación propia de los estudiantes un problema universitario, “colocando así al Ministerio en la alternativa de solucionar el problema o enfrentarse a la Universidad en su conjunto”.<sup>705</sup> En este sentido, lo que ellos llamaban el “Pacto Universitario” aparecía como la estrategia más efectiva para derrotar al régimen y para conseguir la reconstrucción de la universidad, “que el régimen pretende aniquilar”.<sup>706</sup>

## **VI. La recuperación del Sindicato Democrático de Estudiantes: una iniciativa fallida.**

Durante todo el curso 75-76, el ME se había visto enfrentado a un problema fundamental relacionado con la representación y con las estructuras de movilización. El debate sobre la organización es una constante en el movimiento y lo podemos encontrar, con más o menos fuerza, en todas las etapas del movimiento estudiantil.

Desde la construcción de la Federación Universitaria Democrática de Estudiantes (1961) hasta la del Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEU, 1966 en Barcelona, 1967 en Madrid), ninguna de las organizaciones del ME consiguió unir a los grupos políticos ni generar mecanismos de verdadera dirección. Así, cuando el SDEU fue desbaratado en 1969, no hubo ningún otro organismo que se encargara de dirigir a los estudiantes, dejando al ME en una suerte de anarquía organizativa. Durante los años 1970 y 1975 se ensayaron diversas formas de coordinación, como las Reuniones Generales de Universidad, en las que participaban delegados elegidos de forma diferente en cada curso, cada facultad y cada centro, por lo que la representatividad era una condición variable y cuestionable. También se constituyeron los Comités de Curso

---

<sup>705</sup> *Vanguardia* (edición especial), Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 25 de Mayo de 1976, p. 1. AHPCE.

<sup>706</sup> Ibid.

y Comités de Lucha, propiciados por los grupos más radicales, por lo que eran muy minoritarios. La represión y la clandestinidad, además de la radicalización de las posturas de los grupos políticos que participaban en la universidad hicieron imposible la creación de un organismo estable para el movimiento estudiantil.

Sin embargo, durante el curso 1975-1976 las condiciones parecían haber cambiado: los estudiantes estaban dispuestos a aprovechar aquellos espacios de libertad, por pequeños que fueran, que habían ganado en los cursos anteriores, para organizarse públicamente. En este contexto, se hacía más evidente que nunca la necesidad de tener una organización representativa, que liderara y coordinara al ME, y que le permitiera tener presencia y vinculación con otros organismos de la sociedad civil, en la lucha por la democracia. El problema se presentaba al momento de debatir qué tipo de organización era la adecuada. Durante el primer semestre de 1976 la discusión adquirió tales proporciones, que la organización del ME se transformó en el principal problema entre los grupos políticos presentes en la universidad, quitándole protagonismo incluso a las reivindicaciones políticas generales.

El auge de los debates en torno a la organización del movimiento estudiantil se dio luego del fracaso en las elecciones de representantes de 1975, en las que hubo una muy baja participación por lo que comenzaron a surgir diversas propuestas para constituir un organismo de coordinación estudiantil alternativo a la propuesta por el Ministerio. Algunos grupos políticos comenzaron a promover la construcción de un Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDEU), inspirado en el de mediados de los años 60. El SDEU, tal como señala Álvarez Cobelas, fue una aportación original del ME español al ME internacional, en primer lugar, por llevarlo a cabo de manera pública bajo una dictadura y en segundo lugar, porque “representa la institucionalización de valores democráticos comunes a las fases de ascenso de los movimientos”.<sup>707</sup> En este sentido, el SDEU era considerado como la experiencia de organización más importante que había tenido el movimiento estudiantil, justamente en unos años (1966-1969) en donde las movilizaciones universitarias habían llegado a niveles nunca antes vistos. “Fueron los momentos en que el nivel de participación democrática de los estudiantes en las luchas ha sido mayor, y el Sindicato supuso la forma más avanzada de organización que hemos tenido los estudiantes. Estas siguen

---

<sup>707</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 341.

siendo experiencias que aún tienen validez”.<sup>708</sup> Por eso, los intentos de reconstruirlo tenían que ver con el anhelo de recuperar parte de ese pasado “glorioso”.

Desde el mes de enero de 1976 la prensa de los grupos políticos universitarios insistía constantemente en la necesidad de crear una organización para el ME. Los estudiantes comunistas querían que fuera una organización de masas, que surgiera de las asambleas y fuera democrática y representativa en su constitución. De hecho, fueron ellos los primeros en hablar de un Sindicato Democrático de Estudiantes y aunque consideraban que éste solo era posible bajo un sistema democrático, proponían comenzar con su construcción para convertirlo en una reivindicación de ruptura.<sup>709</sup> La organización ideal para el PCE era aquella que permitiera la más amplia participación de todos los estudiantes en la lucha por la democracia, y junto con el Sindicato, también proponían la creación de asociaciones culturales, recreativas, deportivas e incluso religiosas que permitieran conseguir una plataforma amplia de apoyos para el ME:

“En la medida en que, en la perspectiva de un Sindicato Democrático, avancemos estas primeras formas de decisión directa (la asamblea), de representación directa (elección y control por las asambleas) y de participación (asociaciones...) estaremos haciendo infinitamente más difícil cualquier intento de marcha atrás y crearemos las condiciones para luchar con éxito por una Universidad democrática en una España democrática. Estaremos haciendo realidad la ruptura democrática”.<sup>710</sup>

El PTE también impulsó la reconstrucción del Sindicato Democrático, ya que consideraba que una organización que articulara al ME podía ser más efectiva en la lucha por las libertades democráticas y las reivindicaciones universitarias: “Porque un Sindicato Democrático es representativo, autónomo e independiente, es decir, construido sólo por los estudiantes, reestructurado por los estudiantes al margen de todos los partidos y organizaciones del tipo que sean”.<sup>711</sup> Incluso las juventudes socialistas en el exilio propiciaban una organización que fuera capaz de “asumir los intereses de los estudiantes, potenciar y dirigir la lucha por la resolución de los mismos, incorporar a la lucha al máximo número posible de ellos y dirigir sus movilizaciones en

---

<sup>708</sup> Sin título, Organización Universitaria del PCE, fines de 1975, p. 1. AHPCE.

<sup>709</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 2ª quincena de Enero de 1976, p. 3. AHPCE.

<sup>710</sup> Ibid.

<sup>711</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano Central del PTE, 13 de marzo de 1976, p. 3. F. Pablo Iglesias.

un sentido progresivo, confiriéndole al Movimiento Estudiantil las características de estabilidad y continuidad de las que ha carecido hasta ahora”.<sup>712</sup>

Sin embargo, los estudiantes no eran los únicos interesados en formar una organización. El 1 de marzo, el Ministro de Educación inauguró la Asamblea Libre de Representantes Estudiantiles organizada por la Delegación Nacional de la Juventud, a la cual acudieron cerca de 250 delegados (desconocemos cómo fueron elegidos, pero según la prensa estudiantil, fue “a dedo”). En la inauguración de la Asamblea, el Ministro rechazó los actos de violencia física y moral que se habían producido en la universidad ya que en ella debía reinar el espíritu crítico. “Nunca debe ser una catapulta para destruir, ni nunca un lugar de vocería, suciedad ni para el agravio chabacano”.<sup>713</sup> Esta Asamblea y el intento del Ministerio de articular una organización estudiantil “oficial” fue rechazada de plano por el ME, ya que se veía como un intento propagandístico de parte del régimen para decir a la opinión pública que estaba llegando a acuerdos con los estudiantes. “El Ministerio estará contento, posee ya la coartada de que los estudiantes “han participado”, para poder elaborar ya su política con participación de los estudiantes cuando en realidad es todo lo contrario”.<sup>714</sup> Paradójicamente, mientras el Ministerio organizaba esta Asamblea Libre de Representantes, los estudiantes de la Universidad Politécnica iniciaban su ofensiva contra el decreto de permanencia, potenciando aún más las movilizaciones estudiantiles que se habían iniciado al comienzo del curso.

En este contexto, los estudiantes del PCE, del PTE y de la JGR fueron los más activos a la hora de construir la organización estudiantil, pero ya durante los meses de marzo y abril empezaron a aparecer diferencias entre ambos partidos. Los estudiantes comunistas propiciaban, desde *Vanguardia*, la construcción de una alternativa de organización que garantizara el protagonismo de los estudiantes en ella. Como ya hemos señalado, proponían una organización democrática y de masas, que permitiera defender los intereses sociales y políticos de los estudiantes, pero eran muy conscientes de que esta organización sólo podría cumplir con sus funciones bajo un estado democrático. “Cuando se está gestando la formación de un nuevo Estado, un Estado

---

<sup>712</sup> Características fundamentales de la alternativa organizativa para el Movimiento Estudiantil, Juventudes Socialistas en el exilio, 1976, p. 1, F. Pablo Iglesias.

<sup>713</sup> *ABC*, 2 de Marzo de 1976. BNE.

<sup>714</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano Central del PTE, 13 de marzo de 1976, p. 3. F. Pablo Iglesias.



democrático y pluripartidista, es necesario plantearse la organización del ME en la perspectiva del papel que debe jugar en ese Estado y en esa etapa”.<sup>715</sup>

En este sentido, para los estudiantes comunistas la prioridad era la lucha por la ruptura democrática, porque solamente en un contexto de libertades políticas el ME podría desarrollar plenamente sus objetivos, y solo en ese contexto, un Sindicato Democrático tendría sentido. “El objetivo político central hoy por hoy es la realización de la RUPTURA DEMOCRÁTICA. Y es un contrasentido afirmar que hoy la alternativa al ME es la construcción de un sindicato para la ruptura. La realidad es precisamente la contraria: sin ruptura no habrá sindicato que valga”.<sup>716</sup> Esta posición de los estudiantes del PCE implicó un progresivo abandono de las formas de organización y de las reivindicaciones propiamente universitarias para dedicarse de lleno a la lucha política. Y como el PCE era el principal grupo político dentro del ME, su alejamiento produjo un fuerte debilitamiento en la contestación estudiantil.

Por su parte, los estudiantes del PTE y de la *Joven Guardia Roja* concentraron todos sus esfuerzos en construir el SDEU, “como única vía de que los estudiantes, en unión con el pueblo, conquistemos la democracia política”.<sup>717</sup> Uno de los primeros pasos dados en este sentido, fue la creación de la Federación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes de la Universidad (FSDEU), que tuvo lugar el 18 de abril de 1976, y que unía a nueve sindicatos democráticos de diferentes puntos del país, con el objetivo de promover un SDEU autónomo, unitario, representativo e independiente, a nivel estatal.<sup>718</sup> La Federación se comprometía también a convocar a un Congreso Constituyente al cual asistirían delegados elegidos por las asambleas de los distintos centros. Según *Informaciones*, “apoyan la existencia de este Sindicato diversos grupos políticos, como el Partido del Trabajo y la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Queda totalmente al margen el PCE, aunque sí interviene un movimiento pro chino que se dice Movimiento Comunista”.<sup>719</sup>

Ahora bien, problema fundamental de este nuevo intento de organización era la representatividad, porque generalmente, quienes resultaban elegidos eran los estudiantes más movilizados, militantes del PCE o del PTE, pero había una masa importante de

---

<sup>715</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena de Marzo de 1976, p. 5, AHPCE.

<sup>716</sup> Ibid.

<sup>717</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano Central del PTE, 13 de marzo de 1976, p. 3. F. Pablo Iglesias.

<sup>718</sup> Ibid., p. 9.

<sup>719</sup> *Informaciones*, 21 de Abril de 1976. BNE.

estudiantes que no participaba en las asambleas y que, por lo tanto, no votaba. En este sentido, la base de apoyo de los delegados era débil. Además, existían grupos minoritarios pero “ruidosos” que intentaron boicotear desde el comienzo al nuevo SDEU. Para las Juventudes Socialistas, por ejemplo, los intentos de crear un SDEU unitario respondía a un interés de las vanguardias, completamente alejadas de las luchas estudiantiles: “el Sindicato Democrático no es más que una organización impuesta desde arriba y en donde la participación de los estudiantes se reduce a la mera elección de representantes sindicales”.<sup>720</sup> Y para los extremistas de la ODEA, había que “mandar a mejor vida la maniobra del Sindicato Democrático, parche a las elecciones carrillistas y sus comparsas del PTE y demás conciliadores frustrados”.<sup>721</sup>

Hasta los estudiantes de derecha agrupados en la Federación de Asociaciones Universitarias (ANUE), el Comité Español del Movimiento Estudiantil para la ONU (ISMUN), el Comité Federal Español para la Asamblea Mundial de la Juventud (WAY) y el Comité Internacional de Estudiantes del Medio Ambiente para los Países del Mediterráneo, publicaron un manifiesto rechazando la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes. “Los firmantes (unos seiscientos) se muestran partidarios del pluralismo sindical universitario; de libertad para agruparse; sindicatos que vinculados a la mayoría hagan planteamientos reales y den soluciones, sindicatos de gestión y reivindicación profesional; no al sindicato único que acaba controlado por militantes sin base entre los universitarios”.<sup>722</sup>

Con todo, el 19 de mayo de 1976, diez años después de la Caputxinada y de la conformación del primer SDEUB, se realizó el primer Congreso del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios en Barcelona, con la asistencia de algunos delegados y representantes de diversas partes de España<sup>723</sup>. El principal acuerdo de este Congreso fue la creación de una Junta Promotora Estatal de SDEU, destinada a crear el ansiado Sindicato Democrático unitario, pero no tuvo éxito. ¿Por qué? Según los estudiantes del PCE, su fracaso se debió a que este Sindicato fue la iniciativa de un determinado grupo político, que “rompe irremediabilmente la unidad necesaria y

---

<sup>720</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Junio 1976, p. 8. F. Pablo Iglesias.

<sup>721</sup> *Prensa Libre Estudiantil*, Órgano de la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA), núm. 7, Abril 1976, p. 14. F. Pablo Iglesias.

<sup>722</sup> *Informaciones*, 29 de Abril de 1976. BNE.

<sup>723</sup> Los representantes eran de: Madrid, (UCM y UAM); Barcelona, (Central, UAB y Politécnica), Oviedo, Valencia, Lérida, Bilbao y Granada.

posible del movimiento estudiantil y su organización”.<sup>724</sup> El problema que detectaba el PCE era cómo conseguir que los estudiantes participaran activamente en su propia organización y que ésta no fuera el resultado de iniciativas partidistas. Para ello, proponía abrir la discusión en torno a las estructuras de movilización a todo nivel, en asambleas y reuniones, para convocar, a comienzos del curso 76-77, una Asamblea de Estudiantes a nivel estatal. Esta propuesta sería rápidamente dejada de lado.

Para las *Juventudes Socialistas*, el fracaso del SDEU se debía a que había sido una “organización impuesta desde arriba y en donde la participación de los estudiantes se reduce a la mera elección de representantes sindicales. Pensamos que la FSDEU no es sino un montaje superestructural que una vanguardia reducida pretende imponer a todo el estudiantado”.<sup>725</sup>

Si bien se fundaron algunos Sindicatos Democráticos en determinadas universidades, no se logró constituir el SDEU a nivel estatal, y al no contar con el apoyo de todas, o al menos las más importantes organizaciones políticas en la universidad, el PTE se quedó solo liderando un organismo que no representaba a los estudiantes, y que, por lo tanto, no era capaz de coordinar ni liderar las luchas del ME

Finalmente, la unidad de los estudiantes, ya fuera a través de un sindicato democrático o de una forma alternativa, no fue posible, y cada grupo siguió estrategias independientes. La decisión de los partidos de tener presencia directa en la universidad (y no participar de una organización intermedia) y las luchas entre los grupos políticos impidieron dotar al ME de una organización que dirigiera sus movilizaciones, canalizara sus reivindicaciones y presentara un frente unido ante el Ministerio, lo que dificultó la coordinación de los estudiantes y la continuidad de la lucha.

## **VII. El final de un curso intenso.**

Durante los meses de abril y mayo, la conflictividad en las universidades madrileñas tendió a descender pero no a desaparecer. Las movilizaciones en contra del decreto de permanencia se mantuvieron durante buena parte del mes de abril, aunque la discusión en torno a la organización del ME ciertamente restó protagonismo y energía a esta lucha. Con todo, seguían produciéndose en la universidad, diversas asambleas y

---

<sup>724</sup> *Vanguardia* (edición especial), Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 25 de Mayo de 1976, p. 3. AHPCE.

<sup>725</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Junio de 1976, p. 8. F. Pablo Iglesias.

reuniones en las que participaban profesores, miembros de Comisiones Obreras y militantes de partidos de oposición. Así, por ejemplo, el 29 de abril, la fuerza pública impidió una conferencia autorizada por las autoridades académicas de la UCM, que contaba con la presencia del jurista del PSOE, Gregorio Peces Barba. El 30 de abril, la policía intervino nuevamente en la Complutense, para retirar propaganda política y para disolver un acto en el que dos miembros de Comisiones Obreras convocaban a manifestarse el 1º de mayo.

La celebración del primer 1º de mayo sin Franco se vivió con mucha intensidad en las universidades madrileñas, con diversas asambleas y manifestaciones en varios puntos de la ciudad, pero ya se percibía el cansancio de los estudiantes que habían estado en pie de guerra durante prácticamente todo el curso 75-76. Las movilizaciones comenzaron a descender a medida que se acercaban los exámenes finales, aunque el conflicto de los PNN madrileños continuaba sin solución.

¿Cuál fue el balance de este intenso curso? Disímil. Por una parte, los estudiantes habían tenido éxito en cuanto a sus reivindicaciones específicas, cuando forzaron al régimen a modificar el decreto de permanencia. Ya hemos dicho que esta fue una victoria parcial porque no se logró todo lo que los estudiantes querían, pero sí se consiguió un avance importante, especialmente en lo que se refiere a la desaparición de los tribunales de disciplina. Por otra parte, el ME se había insertado en la lucha política general del país y había hecho suyos tanto el lenguaje democrático como la estrategia de la ruptura, propiciada por Coordinación Democrática, el organismo unitario constituido en marzo de 1976, que reunió a la Junta Democrática de España y a la Plataforma de Convergencia Democrática en pos de objetivos comunes. En este sentido, podemos pensar que el curso 75-76 fue exitoso para el movimiento estudiantil.

Sin embargo, ya antes de que terminara el curso, podemos observar ciertos elementos que manifestaban el cansancio, la división y el abandono que afectaban al ME. Ciertamente, mantener a la universidad movilizada durante casi todo el curso académico implicaba un esfuerzo enorme, que desgastó naturalmente al movimiento. Pero además, la imposibilidad para conseguir una organización que coordinara las luchas y defendiera los intereses de los estudiantes, dificultó la continuidad de las movilizaciones. Además, reflejó que las divisiones entre los distintos grupos políticos que participaban en la universidad eran profundas, y que no había voluntad para superarlas. Ningún partido estuvo dispuesto a colaborar con otro en un organismo común, por lo que boicotearon la posibilidad de dotar al ME de una estructura de

movilización unitaria. Esto, posiblemente se debía a que hacia mediados de 1976 ya estaba medianamente claro que la democracia no se iba a conseguir a través de la movilización social sino mediante la negociación política. En este sentido, las movilizaciones estudiantiles y el ME pasaron a segundo plano, y los mismos dirigentes estudiantiles prefirieron dejar de lado la lucha universitaria para insertarse en los partidos políticos de oposición.

Pese a esto, creemos que el movimiento estudiantil fue un actor importantísimo en el proceso de transición, ya que, a través de sus luchas por la democratización de la universidad y del sistema político, se convirtió en una zona de libertad y en una escuela cívica para muchos estudiantes, en donde el lenguaje de la democracia fue un componente esencial de socialización de una parte importante de la juventud española. A modo de ejemplo, en medio de las luchas y movilizaciones del curso 75-76, el PTE y la FACUM organizaron el Festival de Pueblos Ibéricos, en el que participaron muchos de los grandes cantautores españoles de la década de los 70, la mayoría de los cuales había estado vetado durante el franquismo (El País, 23 de Enero de 1996). La organización fue muy compleja, las letras de las canciones fueron sometidas a revisión, y el MEC entregó el permiso correspondiente apenas un día antes de la celebración del evento. El 9 de mayo, día del recital, el campus de Cantoblanco amaneció rodeado de fuerzas especiales, autobuses, jeeps y policía a caballo.

Sin embargo, cerca de 50 mil jóvenes venidos de todas partes de España se congregaron frente al escenario por el cual fueron pasando artistas como La Bullonera, Luis Pastor, Enrique Morente, Mikel Laboa, Víctor Manuel y Raimon. Los asistentes hacían ondear las banderas de Euzkadi, Cataluña, Castilla, Valencia, Andalucía y Aragón, y de diversos partidos políticos, gritando “amnistía y libertad” y llevando claveles rojos en las manos.

El Festival de Pueblos Ibéricos fue un hito para los estudiantes durante el primer año de la transición, ya que logró convocar a 50 mil jóvenes, que de forma totalmente pacífica, participaron de una manifestación cultural que también tenía un contenido político. Las luchas llevadas a cabo por el ME durante el curso 75-76 no solamente habían tenido efectos a nivel político, también habían contribuido a socializar a un grupo importante de estudiantes en el lenguaje y las actitudes de la democracia. El grito de “amnistía y libertad”, lanzado en mayo de 1976, continuaba siendo una provocación, pero, también era un anhelo de parte importante de la juventud española.

## CAPÍTULO 9

### **1976-1977: DESGASTE Y DESMOVILIZACIÓN. EL ME PIERDE SU LUGAR EN LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA.**

El descenso en las movilizaciones estudiantiles del curso 76-77 dejaba en evidencia la profunda crisis que estaba afectando al Movimiento Estudiantil de Madrid. Las luchas llevadas a cabo el curso anterior (la mayoría de las cuales tenían relación con los cambios políticos ocurridos en España a partir de la muerte de Franco) habían dejado al ME en un estado de agotamiento y desorganización tal que lo llevaría a perder protagonismo en el proceso de transición a la democracia. Una vez que los partidos políticos comprendieron que la transición se haría mediante la reforma, decidieron institucionalizar sus “batallas”, luchar por su reconocimiento y legalización, y progresivamente, fueron abandonando las movilizaciones sociales, particularmente en la universidad.

Uno de los síntomas del agotamiento del ME fue la escasa reacción ante la muerte del estudiante Carlos González Martínez, quien estaba en 2º curso de Psicología en la Complutense. El joven participó el 27 de septiembre en una manifestación en recuerdo de los últimos fusilados del franquismo, y murió a causa de los disparos de un comando de extrema derecha infiltrado en la manifestación<sup>726</sup>. El asesinato de Carlos González Martínez causó una oleada de indignación, sin embargo, su muerte generó escasas respuestas por parte del Movimiento Estudiantil. El funeral del joven se realizó el 1 de octubre en la capilla de la Universidad Complutense, y coincidió con una Jornada de Lucha convocada por Coordinación Democrática y los principales sindicatos de trabajadores. En esta jornada, participaron más de 50 mil trabajadores, especialmente del cinturón industrial de Madrid<sup>727</sup>, y se plegaron también grupos de estudiantes que se manifestaron en el sector de Moncloa luego del funeral. Sin embargo, su participación fue reducida comparada con la de los obreros.

La desorganización del ME se manifestó desde el inicio del curso 76-77, el cual estuvo marcado por unas tímidas movilizaciones en contra del alza de las matrículas y por los encierros de los estudiantes no admitidos en las Facultades de Medicina y

---

<sup>726</sup> El autor o autores del asesinato de Carlos González Martínez nunca fueron identificados, por lo que no hubo condena en este caso. El año 2006, el Consejo de Ministros otorgó al joven la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Supremo.

<sup>727</sup> *El País*, 2 de Octubre de 1976. Hemeroteca digital El País.

Ciencias de la Información, en Madrid. Según *El País*, el 7 de septiembre, treinta y cinco representantes estudiantiles de las tres universidades madrileñas habían pedido a los estudiantes que no se matricularan hasta que se resolviera el asunto de la elevación del coste de las matrículas, ya que consideraban que esta medida era antidemocrática y que agudizaba la selección económica de los estudiantes.<sup>728</sup> El 11 de octubre, se celebraron diversas asambleas y reuniones de estudiantes en la Complutense, para discutir el alza del coste de la matrícula y para llamar a manifestarse en su contra. Sin embargo, las manifestaciones no se produjeron, o, al menos, no tuvieron el éxito esperado. Periódicos como *Vanguardia* (Organización Universitaria de Madrid del PCE), *Renovación* (Juventudes del PSOE) y *Con el Pueblo* (Comité de la Universidad de Madrid de ORT) apenas mencionan este conflicto en sus ediciones de septiembre y octubre de 1976.

Distinto fue el caso de las movilizaciones de los estudiantes no admitidos en algunas Facultades, producto de la aplicación de las pruebas de selectividad. Medicina y Ciencias de la Información fueron las Facultades más afectadas de Madrid. En el primer caso, la Junta de Facultad de Medicina de la Complutense aprobó una limitación de entrada en el primer curso a seiscientos estudiantes que obtuvieran una nota superior a 5.5 en las pruebas de selectividad, quedando mil doscientos estudiantes fuera. Sin embargo, los estudiantes y algunos PNN consideraron que ésta era una medida antidemocrática y que estaba en contradicción con la subida de las tasas de matrícula, cuya razón era aumentar los presupuestos para la universidad.

En el caso de Ciencias de la Información, más grave aún que Medicina, de las más de dos mil solicitudes de ingreso se admitieron solamente cuatrocientas. El día 29 de septiembre, el rector de la UCM se mostró receptivo a la posibilidad de solucionar el problema, salvo en el caso de Medicina, debido a que el claustro de esa Facultad de pronunció en contra.<sup>729</sup> El 29 de septiembre, más de cien estudiantes no admitidos se encerraron en la sala de juntas del Decanato de Ciencias de la Información para presionar por un aumento de plazas, pero el mismo día desalojaron las oficinas cuando el vicerrector les comunicó que todos serían admitidos.<sup>730</sup>

Por su parte, los estudiantes no admitidos en la Facultad de Medicina realizaron una asamblea para estudiar su situación, alarmados por los dichos del rector Vián, en

---

<sup>728</sup> *El País*, 7 de Septiembre de 1976. Hemeroteca digital El País.

<sup>729</sup> *El País*, 29 de Septiembre de 1976. Hemeroteca digital El País.

<sup>730</sup> *El País*, 1 de Octubre de 1976. Hemeroteca digital El País.

relación a que se podría solucionar la situación de todos los no admitidos salvo los de Medicina. Un grupo de los no admitidos se entrevistó con el decano, quién les dijo que era imposible admitir a más de 650 estudiantes, ya que de otra forma peligraría la seguridad de los enfermos. El 4 de octubre, los estudiantes no admitidos en Medicina se encerraron en las facultades de la UCM y de la UAM, y un pequeño grupo inició una huelga de hambre. Exigían ser acomodados en la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares; el acondicionamiento del Centro Ramón y Cajal para la docencia, con el objetivo de crear una tercera Facultad de Medicina en Madrid; la equiparación del número de alumnos entre las Facultades de Medicina de la UCM y de la UAM y el acondicionamiento de los hospitales de La Paz, Puerta de Hierro y Gran Hospital.

Finalmente, los estudiantes no admitidos elaboraron un estudio en el cual explicaban que eran concientes de que se estaba llegando al número límite de médicos que podía soportar el país (la razón del *numerus clausus*) pero, hasta que no se hiciera un estudio objetivo de las necesidades futuras previsibles de médicos en el país, por zonas geográficas y por especialidades, la selectividad era un proceso elitista,

“originado por falta de medios, que el Estado no ha sabido prever y que tiene la obligación de resolver por sí mismo, máxime cuando se han realizado unas pruebas de selectividad generales para todos los que pretenden entrar en la universidad y solamente en dos facultades se ha impuesto el criterio de doble selectividad, totalmente discriminatorio, sin previo anuncio y sin saber el alumno el criterio de selección que se ha llevado a cabo”.<sup>731</sup>

Tres días después, 120 estudiantes seguían encerrados y once continuaban la huelga de hambre, esperando una solución de parte del Ministerio y de la universidad.

Las autoridades de la Complutense señalaban que no se establecía el *numerus clausus* de 650 estudiantes sólo por deseo, sino por falta de espacio, tanto en la Facultad como en los hospitales donde se realizaban las prácticas. El 7 de octubre, una comisión de padres y alumnos no admitidos intentó reunirse con el Ministro de Educación, pero no lograron hacerlo. En un comunicado, se mostraron en desacuerdo con la posible solución de remitir a los alumnos no admitidos a facultades de otras ciudades españolas, ya que consideran que con ello se daría lugar a una peligrosa selectividad económica. Tampoco aceptaban la solución de cambiar de facultad, por el riesgo de que en el futuro hubiera una serie de profesionales no vocacionales.<sup>732</sup> Por último, los padres de los alumnos encerrados aseguraron que, de no solucionarse el problema, ellos también se

---

<sup>731</sup> *El País*, 5 de Octubre de 1976. Hemeroteca digital El País.

<sup>732</sup> *El País*, 8 de Octubre de 1976. Hemeroteca digital El País.



encerrarían. Finalmente, el 8 de octubre quedó resuelto el problema de los no admitidos en Medicina. El Ministerio autorizó que, todos aquellos estudiantes no admitidos (1200) y que reúnan los requisitos exigidos, puedan cursar sus estudios de Medicina. Con todo, el MEC dejó claro que esta medida era excepcional y que no se repetiría en los cursos siguientes. Lo que hizo el Ministerio fue dar largas a un problema que se repetiría, con igual intensidad, el curso 77-78.

El conflicto de los no admitidos parece haber pillado desprevenido al ME y el liderazgo de las acciones correspondió a los estudiantes afectados y a sus padres, más que al movimiento estudiantil. En este sentido, hay un desplazamiento del protagonismo desde la Universidad a la Enseñanza Media.

En este sentido, el agotamiento del ME se refleja en la falta de aprovechamiento de las oportunidades políticas que se les presentaron a comienzos del curso, como los problemas derivados de la aplicación de la selectividad, el alza en las tasas académicas y el conflicto de los PNN, que se arrastraba del curso anterior. A finales de 1976, el movimiento estudiantil estaba desorientado, en medio de un fuerte proceso de autocrítica y de reformulación de sus marcos de significado. Esto, junto a la incapacidad para generar estructuras de movilización que le permitieran organizarse y al abandono progresivo de los partidos políticos, trajo como resultado la pérdida progresiva de protagonismo del ME en el proceso de transición a la democracia.

Con esto no queremos decir que se dejara de hacer política en la universidad, sino que el peso que el movimiento estudiantil había tenido como un pilar fundamental en la lucha antifranquista, se diluye en esta nueva etapa de la historia política de España.

## **I. Estructuras de Movilización: SDEU sí, pero...**

Si el Movimiento Estudiantil no fue capaz de aprovechar las oportunidades políticas que supusieron el alza en las tasas de matrícula y el conflicto de los no admitidos fue porque las fracturas en su interior seguían siendo muy profundas. Una vez comenzado el curso, las organizaciones políticas retomaron la discusión sobre las estructuras de movilización y, particularmente, sobre la creación de un sindicato unitario de estudiantes, perfilada ya a fines del curso pasado. La idea era enfrentar las elecciones de representantes estudiantiles, que se realizarían en noviembre y diciembre, desde una nueva perspectiva, más acorde con los cambios que se estaban viviendo en el país. Para esto, los representantes estudiantiles de nueve organizaciones políticas

publicaron un acuerdo de puntos mínimos, con vistas a crear un sindicato de estudiantes, que fuera capaz de “recoger todo el abanico de actividades y necesidades estudiantiles, de defender y dar solución a los problemas que como actuales estudiantes y como futuros profesionales, tenemos planteados, de asumir las aspiraciones democráticas del ME, de ser un instrumento de transformación universitaria y social en consonancia con sus intereses y necesidades”.<sup>733</sup>

Los partidos involucrados en esta iniciativa eran: PCE, ORT, *Partido Socialista Popular* (PSP), *Partido Carlista*, *Movimiento Comunista*, *Convergencia Socialista de Madrid* (CSM), *Federación Popular Democrática* (FPD), *Liga Comunista Revolucionaria* (LCR) y *Alianza Socialista de la Juventud* (ASJ). Los grupos participantes tenían filiaciones ideológicas muy diversas, desde trotskistas hasta demócrata-cristianos, lo que tuvo consecuencias diversas. Por un lado, la amplitud ideológica permitía atraer a más estudiantes, pero por otro lado, hacía muy difícil llegar a acuerdos. Por esta razón, sólo se alcanzaron puntos mínimos, entre los que estaban la creación de comisiones de base (a nivel de curso o facultad), abiertas a todos los estudiantes, que recogieran los problemas de cada centro y que promovieran el debate en torno al sindicato. Luego de esto, las comisiones y las asambleas estudiantiles de las tres universidades madrileñas convocarían a elecciones de delegados provinciales, que constituirían un congreso sindical constituyente.

Ahora bien, hacia finales de 1976 ya existía un Sindicato Democrático de Estudiantes, organizado y dirigido por el PTE y la *Joven Guardia Roja* durante el curso anterior. Sin embargo, esta iniciativa no fue respaldada por los otros grupos políticos e incluso fue boicoteada por el PCE, lo que impidió que el SDE fuera efectivamente, unitario. “La tenaz oposición de diversas fuerzas políticas (especialmente el PCE), su constante actividad boicoteadora impidió esta unidad, y por ello, el SDE surgió agrupando sólo a una parte del movimiento estudiantil”.<sup>734</sup> Algunos de los argumentos para criticar al SDE del PTE era que no existían las libertades políticas suficientes como para crear una organización democrática de esta naturaleza, y además, se lo consideraba sectario. En este sentido, el PTE se defendía criticando la actitud de los otros partidos políticos por “la falta de unidad y de organización que aún existe en el Movimiento

---

<sup>733</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, N° 1, 1 de Octubre de 1976, p.3. F. Pablo Iglesias.

<sup>734</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, 1º de Noviembre de 1976, p. 4. F. Pablo Iglesias.

Estudiantil. Si el SDEU no es hoy más unitario, es responsabilidad exclusivamente suya por su negativa a construir este Sindicato Unitario”.<sup>735</sup>

Ante la iniciativa del nuevo sindicato, el PTE reaccionó marginándose y denunciando la incoherencia de aquellas agrupaciones que habían rechazado participar del SDE liderado por ellos el año anterior, y que ahora insistían en la necesidad de crear un sindicato. La actitud del PCE en este debate fue clave: no quiso ser parte de una organización sindical a menos que fuera liderada por él. Lamentablemente, este tipo de conflictos no beneficiaba en nada a la organización del ME, muy por el contrario, terminó por sumirlo aún más en el agotamiento y la desorganización.

El sindicato propuesto por el PCE y las otras organizaciones rechazaba coexistir con la iniciativa del PTE. Aunque se propiciaba la libre afiliación, se pretendía crear una sola organización de estudiantes, que no se contentara con reivindicar ciertos asuntos ante las autoridades académicas, sino interviniera en la gestión de la universidad, en conjunto con los otros estamentos universitarios.<sup>736</sup>

En este sentido, para el PCE, la principal función de la organización estudiantil era conseguir la gestión democrática de la universidad, que vendría a plasmar en ese ámbito, las libertades políticas conseguidas a nivel nacional. Aunque las condiciones generales no había cambiado demasiado<sup>737</sup>, el PCE comenzó a reivindicar la necesidad de contar con una organización de estudiantes para que “defienda las reivindicaciones de los estudiantes y gestione con responsabilidad la universidad para que, en un proceso permanente de transformación, responda en cada momento a las necesidades de todo el pueblo, no a los intereses de una minoría”.<sup>738</sup> Con todo, el PCE no cejaba en su estrategia posibilista, por lo que continuaba impulsando la participación en las elecciones de representantes estudiantiles (aún cuando no se hubieran hecho cambios al decreto oficial que las regulaba), ya que a través de ellos, podía luchar contra la desorganización de las masas de estudiantes, y fomentar la discusión en asambleas.<sup>739</sup>

---

<sup>735</sup> Ibid.

<sup>736</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, 1ª quincena Octubre 1976, p. 16. AHPCE.

<sup>737</sup> Había salido la policía de los campus y los estudiantes tenían más facilidades para instalar carteles y repartir propaganda, pero siempre dentro de un límite demarcado por la legislación franquista que seguía vigente.

<sup>738</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre 1976, p. 6. AHPCE.

<sup>739</sup> Ibid., p. 7.

La *Liga Comunista Revolucionaria* (LCR) también apoyaba la construcción del sindicato, entendiéndolo como la única herramienta para luchar contra la legislación franquista, y “contra del proyecto de rentabilización del Ministerio”, traducido en el alza de las tasas de matrícula y el *numerus clausus*.<sup>740</sup>

Por su parte, el Comité de Universidad de la *Organización Revolucionaria de Trabajadores* (ORT) comenzó a editar, a comienzos del curso 76-77 una revista llamada *Con el Pueblo*, desde la cual se hacía un diagnóstico bastante negativo de la situación de la universidad y se insistía en la necesidad de la organización: “Un año de política reformista ha producido, en la Universidad, consecuencias que la sitúan al borde del colapso (...) Las medidas adoptadas se reducen a la imposición de topes selectivos (que han sido rebasados en gran parte por la lucha estudiantil) o a aumentar el coste de las tasas académicas, solución regresiva que no palia en absoluto el angustioso estado de los presupuestos”.<sup>741</sup>

En este contexto, se hacían imprescindibles las elecciones “LIBRES Y SINDICALES”<sup>742</sup> de representantes, para constituir un Congreso Constituyente del Sindicato, en el distrito de Madrid. Las críticas de ORT alcanzaban también la actuación anterior del ME, con movilizaciones aisladas y reacciones ante hechos consumados, pero sin propuestas claras sobre “cómo conseguir la democracia y una Universidad científica y nacional y los aliados para ello”.<sup>743</sup>

Ahora bien, no todos los grupos políticos estaban de acuerdo con la creación del sindicato. Los estudiantes de la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA, ligada a la organización terrorista GRAPO), planteaban una “organización independiente, al margen del control fascista y en lucha abierta con él”<sup>744</sup> y propiciaban la formación de piquetes violentos que participaran en las manifestaciones y marchas.

Con todo, la oposición más fuerte al sindicato planteado por el PCE provino de la juventud del PSOE. Paradójicamente, esta organización había tenido una escasísima participación en el ME durante la dictadura franquista, pero a partir de 1975 comenzó a adquirir cierta presencia (aunque siempre fue minoritaria) en la universidad, al tiempo

---

<sup>740</sup> *Universidad Roja*, Órgano de la Fracción Universitaria de Madrid de la Liga Comunista Revolucionaria (IV Internacional), Octubre de 1976, p. 3. F. Pablo Iglesias.

<sup>741</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, N° 2, Noviembre de 1976, p. 2. F. Pablo Iglesias.

<sup>742</sup> *Ibid.*

<sup>743</sup> *Ibid.*

<sup>744</sup> *Prensa Libre Estudiantil*, Órgano de la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA), N° 13, Octubre de 1976, p. 8. F. Pablo Iglesias.

que el PSOE adquiriría protagonismo a nivel nacional. En todo caso, la oposición de los estudiantes socialistas tenía que ver, básicamente, con discrepancias procedimentales: se oponían a que fueran los delegados surgidos de las elecciones los que constituyeran el Congreso Sindical. Y esto porque consideraban que la regulación del proceso eleccionario era deficiente (un decreto redactado desde el régimen, sin participación de los estudiantes, con apenas cambios desde 1974 hasta ese momento), y también porque consideraban que los delegados promovían la pasividad del resto de los estudiantes (que, al haber elegido a un delegado, dejaban de involucrarse en la toma de decisiones), provocando “la creación de organismos burocráticos y superestructurales que pretenden controlar al ME”.<sup>745</sup>

Por esto, la propuesta de la juventud del PSOE era crear comisiones pro-sindicales, de manera que todos los estudiantes que acepten incluirse en ellas, estarán participando de la construcción del sindicato, y “no construirán el verdadero sindicato aquellos que, por el mero hecho de acudir a clase un día concreto, participen de modo directo e indirecto en una votación oficial a delegados”.<sup>746</sup>

Hacia finales de 1976 se convocó a elecciones de representantes estudiantiles, tal como en años anteriores, con la diferencia de que de estas elecciones saldrían los delegados para el Congreso Constituyente del Sindicato. Para el PCE, era fundamental hacer de estas unas elecciones libres, que asegurasen “en su funcionamiento la transparencia y el protagonismo del conjunto de los estudiantes, esto es, que van a posibilitar el conseguir esta unidad de acción de los estudiantes con su organización, de la asamblea y sus delegados”.<sup>747</sup>

Sin embargo, y pese a que todos los grupos políticos, salvo el PSOE, se mostraron a favor de las elecciones, la participación en ellas fue muy baja. Con esto, la iniciativa de construir un Sindicato Democrático y Unitario perdió fuerza. Una de las razones de la escasa participación en las elecciones fue, según los militantes del PCE, la no incorporación de la masa estudiantil al debate en torno al SDEU y a los problemas de la universidad.

“En la mayoría de los centros el debate se situó a nivel de vanguardias más o menos amplias, estructurándose a veces en Comisiones pro Sindicato que, salvo excepciones, desarrollaron discusiones exclusivamente ideológicas y en

---

<sup>745</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Diciembre de 1976, p. 6. F. Pablo Iglesias.

<sup>746</sup> *Ibid.*

<sup>747</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1976, p. 7. AHPCE.

abstracto sobre la organización, eludiendo en muchos casos el problema de que eran las asambleas de curso, grupo y facultad las que tenían que decidir sobre la organización de los estudiantes”.<sup>748</sup>

Una vez más, las organizaciones políticas que componían el ME fallaban en una cuestión básica: involucrar a las masas estudiantiles en la toma de decisiones sobre la organización del movimiento. La constatación de este problema producirá un cambio importante en los discursos y reivindicaciones del curso 76-77, que dejarán en segundo plano los asuntos de política nacional para volver a dar protagonismo a los problemas específicos de los estudiantes. “Se olvidaba quizá, la situación de masas en los centros, así como que la necesidad de organizarse más primaria sólo surge ante la defensa de las reivindicaciones más concretas, base del auténtico sindicalismo”.<sup>749</sup>

## **II. Una universidad Democrática, Científica y al servicio del Pueblo.**

Probablemente, el cambio más notorio que podemos encontrar en el ME del curso 76-77 dice relación con los marcos de significado, es decir, con las reivindicaciones de los estudiantes, con el tipo de universidad que querían para esta nueva etapa de la historia de España. En este sentido, el curso 76-77 marca una diferencia importante con respecto al anterior, hay un regreso y una re-valoración de la situación universitaria y de los problemas específicos de los estudiantes, aunque siempre en sintonía con el proceso de transición que vive el país. Si en el curso 75-76 las reivindicaciones de política nacional como la amnistía y las libertades democráticas, habían sido las protagonistas, en el período 76-77 cobra importancia la gestión democrática y la autonomía universitaria.

A seis años de implementada la Ley General de Educación, ya era posible evaluar sus efectos, y a esos temas apuntaban las reivindicaciones del ME. En el curso 76-77 se hablaba constantemente de una “crisis universitaria”, que tenía relación con el contenido y la calidad de la enseñanza recibida, la mala calidad de la infraestructura (edificios que colapsan, por ejemplo), y el déficit presupuestario de la educación superior en España.

---

<sup>748</sup> “Resoluciones de la Primera Conferencia de la Organización Universitaria de Madrid”, Febrero de 1977, p. 12. AHPCE.

<sup>749</sup> Ibid.

Apenas iniciado el curso, el 29 de septiembre de 1977, el segundo piso del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM se hundió, dejando a más de setenta estudiantes heridos. El edificio tenía apenas seis años, por lo que dejó al descubierto graves falencias en la construcción, debido a la excesiva rapidez con que se ejecutó. De hecho, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid sometió a proceso a 15 personas relacionadas con las empresas constructoras que participaron en la edificación.<sup>750</sup> El hundimiento del edificio de la UAM fue, para el ME, la prueba flagrante de que la universidad española estaba en crisis: “Nuestra universidad de hunde. Se hunden sus edificios, como hundida está la planificación educativa, los planes de estudio, la organización de la enseñanza. Y necesitamos levantar la Universidad democrática alternativa a la actual del fascismo”.<sup>751</sup>

Luego del hundimiento del edificio de Filosofía y Letras de la UAM se produjeron diversas manifestaciones de los estudiantes, protestando por la deficiente infraestructura y por la escasa inversión del Estado en la universidad. El 20 de octubre, un grupo de 150 estudiantes de la UAM se encerró en la sede de San Bernardo de la UCM para protestar porque el informe del Ministerio en la investigación de las causas del hundimiento fue hecho por las mismas personas que construyeron el edificio, seis años atrás. Por su parte, estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina de la UAM, también se manifestaron, alarmados por la aparición de grietas y desperfectos en el edificio.

Un grupo de profesores y alumnos de diversas facultades de la UAM, reunidos en el campus de Cantoblanco, se entrevistaron el día 22 de octubre con el Ministro Aurelio Menéndez (asumido el 5 de julio de 1976 en el gabinete del primer gobierno de Adolfo Suárez) para plantearle la situación de los edificios y el retraso en el comienzo del curso, la necesidad de que convocar a un claustro extraordinario para realizar una elección democrática del rector y la participación de profesores, estudiantes y personal no docente en las instancias de gobierno de la universidad.

Por su parte, en la UCM los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras celebraron una asamblea para discutir los problemas que presentaba el edificio de Filosofía B (grietas, almacenamiento de libros, etc.), alarmados por un informe requerido por el Ministerio de Educación, en donde se informaba que la estructura del

---

<sup>750</sup> *El País*, 11 de Febrero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>751</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, Nº 1, Octubre de 1976, p. 1. F. Pablo Iglesias.

edificio podía soportar 450 kg. de peso por metro cuadrado. Sin embargo, dadas sus actuales actividades y número de alumnos, estaba soportando 1200 kg. Los estudiantes también protestaron porque no podían utilizar los 90 mil libros que existen en la primera planta de ese edificio porque se encontraban sin clasificar. El problema era que el claustro de profesores de la Facultad había solicitado el cierre del centro y la suspensión de las actividades académicas, pero los estudiantes se negaban a hacerlo mientras no existiera un lugar concreto donde impartir las clases.<sup>752</sup> El 27 de octubre, en protesta por el estado del edificio, los estudiantes de la Facultad de Filosofía junto a algunos profesores realizaron un desalojo simbólico del edificio de Filosofía B.

La sensación de crisis en la universidad era algo que se arrastraba desde hacía muchos años. La implementación de la LGE (ver capítulos 3 y 4) había generado fuertes cuestionamientos dentro del ME respecto del tipo de educación superior que necesitaba la sociedad española. En esa oportunidad y ante los cambios propuestos por la ley (entre los que se encontraban la selectividad y el *numerus clausus*, que habían generado conflictos a comienzos del curso 76-77), el movimiento estudiantil organizó diversas manifestaciones rechazando la concepción capitalista de la universidad. El concepto de universidad popular cobró fuerza, en oposición a la universidad elitista que se quería imponer. Siete años después, la discusión seguía siendo básicamente la misma, pero ahora, a tono con los cambios políticos, se exigía una universidad democrática.

Para el ME, los principales problemas de la universidad no se limitaban a las fallas en la infraestructura. “La pésima calidad de la enseñanza; la carencia de medios y material docente; las barreras selectivas; la falta de participación; la opresión de las culturas nacionales; la corrupción administrativa; la deficiente distribución de los presupuestos; la solución a las demandas del profesorado un numerario y del personal no docente”<sup>753</sup> eran las principales.

En este sentido, uno de los aspectos más importantes del debate decía relación con el déficit presupuestario que vivía la universidad pública en España. De hecho, ésta fue la razón para subir las tasas académicas en curso 76-77, pero la medida no había conseguido acabar con el déficit. “Los edificios se nos agrietan y caen encima, en las aulas no podemos entrar, los laboratorios son peligrosos sótanos para la investigación.

---

<sup>752</sup> *El País*, 23 de Octubre de 1976. Hemeroteca digital El País.

<sup>753</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, Nº 65, 1 de Noviembre de 1976, p. 2. F. Pablo Iglesias.



(...) Los estudiantes podemos sintetizar unidos nuestro problema más angustioso: el déficit presupuestario que nos impide materialmente dar clases, funcionar”.<sup>754</sup>

El problema era, entonces, de dónde obtener el dinero necesario para mejorar la calidad de la educación superior, o bien salía de las arcas del Estado, como pretendía el ME, o bien de los bolsillos de los estudiantes (o sus padres), como quería el gobierno. En el fondo, lo que se estaba debatiendo era si la universidad debía ser considerada un servicio público o un bien de consumo. Para el movimiento estudiantil la estrategia del gobierno estaba en sintonía con la tan criticada Ley General de Educación: “Para ellos [las autoridades] la universidad es un artículo de lujo que cada cual debe costearse, y claro, encima solo lo hacen quienes tienen el dinero para pagarlo. (...) Con semejantes medidas al servicio de los intereses del gran capital, el Ministerio, además de obtener sustanciosos ingresos, consigue llevar adelante su lucha contra la “desmasificación” estudiantil”.<sup>755</sup> Con este tipo de medidas, argumentaban los estudiantes del PCE, se “restringe aún más el acceso a la enseñanza superior de las fuerzas esenciales del proceso productivo, las promesas de gratuidad incumplidas alejan de la enseñanza media a los hijos de obreros desviándolos hacia una formación profesional que tiende a consolidar la explotación hereditaria”.<sup>756</sup>

Ahora bien, ¿qué tipo de universidad proponía el ME? Una universidad democrática, científica y al servicio del pueblo. Por “democrática” los estudiantes entendían varias cosas, entre ellas, el fin del control de la universidad por parte del régimen, lo que equivalía a autonomía universitaria, y la gestión democrática, entendiendo por esto la participación de los tres estamentos en el gobierno de la universidad. Por científica entendían tanto la capacidad de investigación y creación cultural, como el equipamiento de medios materiales e instalaciones para desarrollar de manera adecuada las labores de estudio, docencia e investigación. Y al servicio del pueblo quería decir que la enseñanza universitaria debía estar “al servicio del desarrollo de la sociedad española, lo que en estos momentos quiere decir de las clases populares y no de los monopolios y el imperialismo”.<sup>757</sup>

---

<sup>754</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1976, p. 7. AHPCE.

<sup>755</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, Nº 65, 1 de Noviembre de 1976, p. 2. F. Pablo Iglesias.

<sup>756</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1976, p. 6. AHPCE

<sup>757</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, Nº 2, Noviembre de 1976, p. 7. F. Pablo Iglesias.

En este contexto, el ME intentará articular un discurso y unas acciones destinadas a luchar por su propuesta de universidad. Si analizamos la propuesta de los tres grupos políticos con mayor presencia en la universidad (PCE, PTE y ORT), veremos que hay una cierta comunidad de objetivos en relación a las reivindicaciones a conseguir: enseñanza democrática, para todo el pueblo (no clasista) y que involucre a los estudiantes en la gestión de la universidad. Y las estrategias para conseguir estos objetivos tampoco diferían demasiado. Para el PTE, el ME debía articular un gran frente de lucha (que incluyera a profesores no numerarios, catedráticos y personal no docente) para exigir al Gobierno una reforma democrática de la universidad. “Ese es el camino para desarrollar un potente y organizado Movimiento Estudiantil. No obstante, todos los estudiantes deben ser plenamente conscientes de que la solución de los problemas más graves y generales de toda la universidad, sólo es posible abordarla a nivel estatal; es decir, con la unión de todos los universitarios de los distintos distritos exigiendo las mismas reivindicaciones”.<sup>758</sup> Para el PTE, las reivindicaciones del ME estaban en consonancia con la lucha política general, pero no estaban subordinadas a ella: ambas debían llevarse a cabo de forma coordinada y paralela.

Según ORT, el objetivo del ME era “luchar por las reivindicaciones estudiantiles frente a un sistema educativo que, concretado en la universidad, impide el acceso a la misma de las clases populares”.<sup>759</sup>

Para el PCE, la estrategia fundamental en la universidad era “orientar una práctica revolucionaria, de masas, que tenga como guía unos principios de alternativa a la Universidad selectiva y jerárquica de los monopolios y poner en pie un movimiento masivo y organizado que pueda realizar esas efectivas transformaciones de la Universidad”.<sup>760</sup> Con todo, no olvidaban la labor que los comunistas debían hacer a nivel general. Y en ese aspecto, el ME debía integrarse en la unión de las fuerzas del trabajo y de la cultura. “Hoy los comunistas debemos estar a la cabeza de esta lucha, dirigiéndola en lo concreto, y esto significa discutirla con todos los sectores interesados, demostrar que esa lucha no es negativa, a favor de una enseñanza para todo el pueblo, a favor de una enseñanza democrática y significa también tomar conciencia de que la garantía de continuidad organizativa, política y efectivamente revolucionaria del actual

---

<sup>758</sup> Ibid., p. 3.

<sup>759</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, N° 3, Enero de 1977, p. 2. F. Pablo Iglesias.

<sup>760</sup> “Resoluciones de la Primera Conferencia de la Organización Universitaria de Madrid”, Febrero de 1977, p. 10. AHPCE.

ME frente al aparato de poder de la oligarquía, radica en la capacidad que se tenga para insertar la problemática educativa en la estrategia del movimiento obrero”.<sup>761</sup>

En este sentido, todas las organizaciones del ME apuntaban a lo mismo, generar un movimiento social de masas, que partiera de los problemas específicos de la universidad y que fuera, facultad por facultad y centro por centro, incluyendo a las masas estudiantiles en el proyecto de universidad democrática y científica. Con todo, este “regreso” a los problemas estudiantiles no quería decir que el ME se olvidara de la situación de la política española. Para ORT, “el ME debe seguir en lucha, codo con el Movimiento Obrero y Popular, por la Amnistía Total, la legalización de todos los partidos políticos, la democracia y la garantía de que el pueblo pueda elegir la forma de Estado y de Gobierno que desea para sí mismo”.<sup>762</sup>

Debido a esto, el ME recibió con suspicacia el proyecto reformista de Suárez, porque veía que éste se limitaría a hacer cambios superficiales, que le permitieran al régimen continuar controlando la universidad. Aunque se habían dado algunos pasos tendientes a modificar este rígido control, como por ejemplo, la retirada de la policía de los campus y la derogación del decreto que apartaba de las aulas a los profesores Enrique Tierno Galván y José Luis López Aranguren<sup>763</sup>, entre otros, ciertamente no se había llevado a cabo – ni tampoco se anunciaban – reformas profundas. Y así lo denunciaban los estudiantes:

“La mayoría de los rectores de las universidades se declaran “fervientes demócratas”, anuncian mejoras próximas, prometen participación en juntas y claustros, hablan de participación en la elaboración de planes de estudio y de estatutos, y de una mayor tolerancia para la celebración de asambleas.

Ahí están las promesas; pero los estudiantes y profesores siguen sufriendo crudas realidades: permanece toda la legislación represiva y selectiva de cursos anteriores, suben el 300 por cien las tasas académicas, se reimplanta el *numerus clausus* y todas las decisiones se siguen tomando a espaldas de estudiantes y profesores”.<sup>764</sup>

Para ORT, la reforma del gobierno de Suárez era solamente una componenda política, que le permitiría al régimen administrar la universidad según los intereses capitalistas, en lugar de hacer un verdadero cambio democrático. “Aún cuando la

---

<sup>761</sup> *Vanguardia*, Periódico de la Organización Estudiantil del Partido Comunista de España, Noviembre de 1976, p. 6. AHPCE

<sup>762</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, N° 3, Enero de 1977, p. 2. F. Pablo Iglesias.

<sup>763</sup> *El País*, 19 de Octubre de 1976. Hemeroteca digital El País.

<sup>764</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, N° 65, 1 de Noviembre de 1976, p. 2. F. Pablo Iglesias.

gestión de los demócratas burgueses vaya a estar muy limitada (pues se mantiene la esencia fascista del aparato universitario), serán introducidas algunas reformas, pero sólo aquellas que no pongan en cuestión los intereses del gran capital en la universidad, reformas con las que tratarán de esterilizar los objetivos del ME<sup>765</sup>

En cualquier caso, llama la atención que el ME no le otorgara mucha importancia a la Ley para la Reforma Política ni al posterior referéndum popular que la aprobó, posiblemente porque lo veían como una herramienta más del régimen para llevar adelante el proceso de cambio político por la vía reformista.

### **III. Estatutos de Autonomía para la universidad.**

Dentro de los marcos de significado del ME del curso 76-77, hay un tema en particular que cobró gran importancia: la redacción de los estatutos de autonomía de la universidad. En teoría, a partir de la aplicación de la LGE en 1970, las universidades españolas gozarían de autonomía. Según el artículo 64. 1., del capítulo II, sección 3ª de la ley: “Las Universidades gozarán de autonomía y determinarán por sí mismas los procedimientos de control y verificación de conocimientos, el cuadro y el sistema de sus enseñanzas y su régimen de docencia e investigación dentro de las disposiciones de la presente Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo”.<sup>766</sup>

Sin embargo, la estructura de gobierno de los centros de enseñanza universitaria seguía siendo jerárquica y piramidal, y en la práctica, la universidad era controlada por el Ministerio de Educación, a través del Consejo de Rectores. El 31 de diciembre de 1970 se aprobaron unos estatutos provisionales para las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, pero no fueron más que un “barniz de independencia”. De hecho, en momentos de conflicto en los centros universitarios, como por ejemplo, en julio de 1972 con las movilizaciones en la Facultad de Medicina de la UCM, el Ministerio no dudó en suspender dichos estatutos. Además, estos no se elaboraron en conjunto con la comunidad universitaria sino, por el contrario, a través de comisiones de catedráticos designados por los rectores, a puertas cerradas.

En este contexto, la elaboración de los estatutos definitivos de las universidades madrileñas se transformó en una bandera de lucha importante para el ME ya que era una

---

<sup>765</sup> *Con el Pueblo*, Órgano del Comité de Universidad de Madrid de ORT, N° 3, Enero de 1977, p. 1. F. Pablo Iglesias.

<sup>766</sup> Ley General de Educación 4/1970, BOE núm. 187, 6 de Agosto de 1970. [www.boe.es](http://www.boe.es).

oportunidad de llevar a la práctica la reforma democrática en la universidad. Pero para que esto fuera posible, los estatutos debían ser democráticos y redactados luego de un proceso constituyente, que incluyera a los tres estamentos universitarios: estudiantes, personal docente y personal no docente. Solamente con unos estatutos democráticos se podría consagrar la verdadera autonomía universitaria y construir una universidad realmente democrática. Según la Organización Universitaria del PCE, “los futuros estatutos que hayan de regir las universidades españolas serán el primer elemento de disputa con la derecha sobre si la Universidad estará al servicio de la sociedad o de los monopolios”.<sup>767</sup>

El debate sobre los estatutos de autonomía de la universidad se planteó como parte del proceso de transición a la democracia. De esta manera, el PTE criticaba duramente al gobierno por manifestar públicamente la necesidad de cambios democráticos, tanto para la sociedad como para la universidad, y, sin embargo, no generar las condiciones necesarias para realizar aquellos cambios. “Efectivamente, la situación de la Universidad exige un cambio democrático, a través de la elaboración de los nuevos Estatutos. Ahora bien, ¿quién los va a elaborar? ¿cuál va a ser su contenido? Éstas son las dos cuestiones trascendentales que van a determinar la auténtica naturaleza de ese “cambio” del que hoy todo el mundo habla”.<sup>768</sup>

Para el ME era fundamental establecer un marco democrático mínimo que pudiera garantizar la adecuada redacción de unos estatutos de autonomía reales y democráticos. Entre las condiciones requeridas estaban la derogación de toda ley selectiva y represiva; el reconocimiento de derechos democráticos y de organismos y sindicatos de todos los estamentos universitarios; el derecho de cada centro para determinar el profesorado que necesita; la composición representativa y paritaria de los órganos de decisión máxima; la participación de la universidad en los órganos de decisión del estado; y el financiamiento con cargo al presupuesto estatal.<sup>769</sup>

Solo a partir de estas condiciones, estimaba el ME, se podría construir una universidad democrática, científica y al servicio del pueblo: “Una Universidad de este tipo es capaz de crear condiciones para el progreso de la cultura, la ciencia y la investigación en el seno de la enseñanza universitaria, y como mejor medio para luchar

---

<sup>767</sup> “Resoluciones de la Primera Conferencia de la Organización Universitaria de Madrid”, Febrero de 1977, p. 15. AHPCE.

<sup>768</sup> *El Correo del Pueblo*, Órgano central del PTE, N° 75, 18 de enero de 1977, p. 9. F. Pablo Iglesias.

<sup>769</sup> Ibid.

por hacer realidad esa latente aspiración de poner la Universidad al servicio de las necesidades del pueblo”.<sup>770</sup>

En este contexto, las organizaciones políticas del ME insistían en la importancia de construir un sindicato democrático de estudiantes, que asumiera el protagonismo en la lucha por la autonomía, pero más importante aún era involucrar a toda la comunidad universitaria, y en particular a las masas estudiantiles, en este propósito. “Ante el ME se presenta una gran batalla en la lucha por la Universidad Democrática. Unidas al profesorado y al personal no docente, las masas estudiantiles deben ser plenamente conscientes de que la única garantía para alcanzar ese Estatuto de Autonomía está en ellas mismas; ello sólo será posible si se disponen a la lucha, si son capaces de unirse, organizarse y combatir resueltamente por sus derechos”.<sup>771</sup>

Ahora bien, pese a los intentos por organizarse y relanzar la lucha por una universidad democrática, el ME no pudo hacerlo, no solamente por las fracturas en su interior y el agotamiento que arrastraban desde el curso pasado. Justo cuando las organizaciones políticas del ME discutían estos temas, la realidad se impuso con mucha violencia en España, trasladando la atención desde la problemática universitaria a la política nacional.

El 23 de enero, en una manifestación por la amnistía a la que asistieron más de 8 mil personas, fue asesinado el estudiante de BUP, Arturo Ruiz García. La manifestación no había sido autorizada por el gobierno civil, por lo que las medidas de seguridad fueron muy grandes. La zona entre Plaza de España y Callao estaba resguardada por las brigadas especiales de antidisturbios y fuerzas a caballo, con botes de humo, bombas de gas lacrimógeno y balas de goma, que intentaron disolver la manifestación, pero los participantes hicieron constante uso de piedras y cócteles molotov. En medio de la refriega aparecieron cuatro personas lanzando vivas a Cristo Rey que dispararon al aire contra los manifestantes, pero uno de ellos disparó un tiro a Arturo Ruiz.<sup>772</sup> El asesinato fue reivindicado por una agrupación de extrema derecha denominada Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista).

El asesinato del joven estudiante causó una honda impresión en todos los sectores de la sociedad, y se produjeron nuevas manifestaciones en protesta por su muerte. El 24 de enero se produjo una nueva víctima, María Luz Nájera Julián,

---

<sup>770</sup> Ibid.

<sup>771</sup> Ibid., p. 10.

<sup>772</sup> *El País*, 25 de Enero de 1977. Hemeroteca digital El País.

estudiante de tercer curso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. María Luz, que participaba en una manifestación en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz García, murió producto de un traumatismo craneal, al ser golpeada a muy corta distancia por un bote de humo de los que utilizaba la policía para disolver las manifestaciones.<sup>773</sup> Además, ese día GRAPO había secuestrado al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el Teniente General Emilio Villaescusa, crispando aún más el ambiente político.

Según el diario *El País*, desde la muerte de Arturo Ruiz se habían sucedido manifestaciones y actos de protesta en todo el país, pero habían sido especialmente intensos en las universidades madrileñas. Pareciera ser que el ME continuaba inserto en la lógica de la lucha antirrepresiva, ya que estas movilizaciones fueron las más grandes que se produjeron en el curso 76-77. De hecho, el 24 de enero la fuerza pública fue llamada para desalojar la Facultad de Derecho de la UCM, lo que hizo arrojando bombas de humo en su interior, por lo que los estudiantes se dirigieron en manifestación hacia la zona de Moncloa. También se produjeron incidentes en las glorietas de Bilbao y San Bernardo, donde los estudiantes hicieron barricadas con bancos y otros objetos. Los rectorados de la UAM y de la UCM decidieron, entonces, suspender las clases para evitar nuevas manifestaciones. El resultado de esta jornada de protesta fue de un herido grave y nueve heridos leves.<sup>774</sup> Sin embargo, lo peor estaba por venir. El 24 por la noche ocurrió la Matanza de Atocha, cuando un grupo terrorista de ultraderecha asesinó a tiros a cinco personas en un despacho de abogados laboristas, vinculados al PCE y a CC.OO, marcando quizá el momento más trágico del proceso de transición a la democracia.

En vista de lo dramático de la situación, las Juntas de Gobierno de la UCM, UAM y UPM, decidieron suspender todas las actividades académicas hasta el 31 de enero, como manifestación de duelo y repulsa por los dramáticos acontecimientos de los últimos días. Asimismo, la Junta de Gobierno de la UCM pedía públicamente que la policía no actuara en los campus sin el consentimiento de las autoridades académicas.

“Esta Junta de Gobierno pide justicia ejemplar y pronta para con los criminales que de modo intolerable dificultad el deseado desenvolvimiento político del pueblo español; desea que la fuerza pública respete el ámbito académico y no actúe en él sin el consentimiento de las autoridades académicas; invita muy cordialmente a profesores y estudiantes a no perder la serenidad y a

---

<sup>773</sup> *El País*, 25 de Enero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>774</sup> Ibid.

ser ejemplo de ciudadanía y no dejarse utilizar, en la Universidad, para fines extraños”.<sup>775</sup>

El 26 de enero, cerca de trescientos estudiantes se concentraron frente al Rectorado de la Complutense, e intentaron que un grupo de estudiantes tomara parte en la reunión de la Junta de Gobierno, pero la policía dispersó a los manifestantes con bombas de humo. Los estudiantes redactaron un comunicado en el cual protestaban por los asesinatos provocados por los grupos fascistas y por las fuerzas del orden, y también repudiaron el cierre de la universidad, por considerarlo una medida unilateral y desmovilizadora del ME<sup>776</sup>

En vista de lo incierto de la situación política de ese momento, el Consejo de Rectores decidió aplazar la redacción de los Estatutos de Autonomía para el verano de 1977, aunque luego se aplazaría nuevamente hasta la redacción de la polémica Ley de Autonomía Universitaria.

#### **IV. El conflicto de los PNN.**

Ahora bien, los estudiantes no eran los únicos que planteaban desafíos al régimen, de hecho, el desafío más importante del curso 76-77 no fue protagonizado por los estudiantes sino por los profesores no numerarios. El conflicto de los PNN iniciado el curso anterior seguía sin resolverse, por lo que los días 11 y 12 de diciembre de 1976 se celebraron en Valencia las Jornadas Estatales de PNN. El objetivo principal de estas jornadas era llegar a un acuerdo en cuanto a tres de las principales reivindicaciones del profesorado no numerario: el contrato laboral, la supresión de oposiciones y la readmisión de los PNN despedidos. Además, se pretendía crear una organización unitaria de profesores no numerarios a nivel estatal. Cerca de 200 PNN asistieron a las jornadas de Valencia, en las cuales se tomó la decisión de iniciar reclamaciones administrativas y presentar demandas en la Magistratura del Trabajo, debido a que “la relación jurídica entre PNN y Universidad es de carácter laboral, por lo que se estaría incumpliendo el decreto 2259/74 20 de julio y la aplicación de la legislación laboral general”.<sup>777</sup>

---

<sup>775</sup> Acta de Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, 25 de Enero de 1977, p. 1 ACUCM.

<sup>776</sup> *El País*, 26 de Enero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>777</sup> *El País*, 12 de Diciembre de 1976. Hemeroteca digital El País.



La prácticamente nula respuesta del MEC ante las reivindicaciones de los PNN hicieron que, hacia fines de enero de 1977, el conflicto se agravara. El 24 de enero, los PNN de universidad iniciaron un paro casi a escala nacional, para exigir estabilidad en su empleo, supresión de las oposiciones, salario mínimo de 40.000 pesetas, autonomía y gestión democrática de los centros.<sup>778</sup> Esto coincidió con las semanas más violentas de la transición y con las movilizaciones en la universidad.

El 31 de enero la Asamblea General de PNN de universidad votó por el paro indefinido, que ya afectaba a dieciocho distritos universitarios. El 3 de febrero se celebró una asamblea de PNN en el edificio de Filosofía B de la UCM a la que asistieron más de trescientas personas.<sup>779</sup> En dicha reunión se aprobó un comunicado conjunto en el cual se exigía estabilidad laboral, control democrático de las actividades pedagógicas y de los centros, unidad de los enseñantes, reducción del número de alumnos por aula, y paralización de medidas administrativas como oposiciones, concursos de traslado y decreto de plantillas. También se reivindicaba la amnistía política y la supresión de la selectividad estudiantil.<sup>780</sup>

Los días 12 y 13 de febrero se celebró en Madrid una Asamblea General de PNN de universidad, en la cual se trató sobre los requisitos mínimos del estatuto del profesorado. El problema básico entre los PNN y el Ministerio era que cada parte tenía una concepción distinta de lo que significaba ser profesor; para los no numerarios, el profesor era un trabajador asalariado de la enseñanza, mientras que para el Ministerio, el profesor era un funcionario, que obtenía su puesto a través de las oposiciones y de la realización de una Tesis de Doctorado. Esta funcionarización de los profesores era vista por la Asamblea de PNN como “un intento de convertir a los profesores en dóciles instrumentos de control ideológico al servicio del bloque dominante en el poder”.<sup>781</sup>

Según la Asamblea, la precariedad de la situación de los PNN había colaborado en la degradación de la enseñanza y la investigación en la universidad española. “Los PNN con efectiva dedicación a la enseñanza, deben combinar su destajo en las aulas para poder subsistir económicamente, con la elaboración inmediata de un trabajo de investigación que deben presentar como tesis doctoral obligatoria. Y la realización de

---

<sup>778</sup> *El País*, 25 de Enero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>779</sup> A dicha asamblea asistieron representantes de PNN de Instituto, Universidad y Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB, enseñanza privada, licenciados en paro, etc.

<sup>780</sup> *El País*, 4 de Febrero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>781</sup> “Manifiesto de los PNN frente al sistema de oposiciones”, Asamblea General de PNN, Madrid, 12-13 de Febrero de 1977, p. 1, Archivo Fundación 1º de Mayo.

esta tesis doctoral, o cualquier otro trabajo de investigación, está tanto más imposibilitada cuanto mayor sea el grado de dedicación a la enseñanza.

Así pues, el propio sistema que impone el Ministerio impide de hecho el que puedan realizarse adecuadamente ninguna de las dos actividades de nuestra función social como trabajadores: la Enseñanza y la Investigación”.<sup>782</sup>

En esta ocasión también se discutió si hacer los exámenes de febrero. Ante esta disyuntiva se plantearon tres opciones: dejar que las pruebas las hicieran los profesores numerarios; dar el aprobado general político o simplemente, no examinar. Finalmente, los PNN decidieron no celebrar los exámenes de febrero. Además, los PNN de universidad manifestaron que seguirían en paro hasta que el MEC se declarara a favor del contrato laboral, la congelación de oposiciones y la readmisión de los profesores despedidos.<sup>783</sup> Esta decisión tuvo consecuencias inesperadas, como el ataque que sufrió la Asamblea de PNN de universidad del Distrito de Madrid cuando se encontraba reunida en la Facultad de Ciencias de la Información. Hasta allí llegó un grupo de jóvenes de extrema derecha gritando “Viva Cristo Rey” y agrediendo a los presentes. El 23 de febrero, además, la misma Asamblea reunida fue disuelta de manera violenta por la policía.<sup>784</sup>

El 19 de marzo, los PNN se reunieron en la VI Asamblea Estatal de PNN de universidad celebrada en Granada, y decidieron continuar su huelga, ya que consideraron el Ministerio no había iniciado una negociación real, sino apenas un diálogo, el cual no había dado respuesta a las condiciones mínimas propuestas por los PNN para acabar la huelga.<sup>785</sup>

El 12 de abril, se reunieron representantes de los PNN de universidad con representantes del Ministerio de Educación, para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, la reunión no fue fructífera porque el MEC no estaba dispuesto a negociar sobre el contrato laboral, y solamente aceptó “conversar acerca del diseño de las líneas generales del Estatuto del Profesorado”.<sup>786</sup> En cuanto a la congelación de las oposiciones, el MEC solo se comprometió a recomendar a los tribunales que no

---

<sup>782</sup> Ibid.

<sup>783</sup> *El País*, 15 de Febrero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>784</sup> “Comunicado de los PNN de Universidad, INB y Escuelas de Formación del Profesorado de EGB”, 24 de Febrero de 1977, p. 1. Archivo Fundación 1º de Mayo.

<sup>785</sup> Ibid.

<sup>786</sup> “Comunicado de la Séptima Asamblea Estatal de PNN de Universidad”, Bilbao el 19 de Abril de 1977, p. 1, Archivo Fundación 1º de Mayo.

convocaran a oposiciones antes del primero de julio. Y finalmente, donde sí hubo un pequeño avance fue en la eliminación, por parte del Ministerio, de las cláusulas restrictivas que se habían impuesto para impedir la readmisión de los PNN despedidos. Con todo, la Asamblea no quedó conforme con este último punto porque la fórmula “readmisión de los despedidos por motivos no académicos” fue considerada demasiado ambigua<sup>787</sup>, por lo que decidió continuar la huelga, incluida la de exámenes, hasta conseguir las tres reivindicaciones mínimas (contrato laboral, readmisión de los despedidos, congelamiento de oposiciones).

En la VII Asamblea Estatal de PNN de universidad, celebrada el 19 de abril en Bilbao, se puso especial énfasis en la relación con los estudiantes. Para los profesores no numerarios era importante explicar a los estudiantes las razones de la huelga de exámenes y formar con ellos comisiones mixtas para buscar formas de solucionar el problema de manera conjunta. “Con respecto a los exámenes debemos (...) garantizarles que, cuando éstas sean logradas y se reanude la actividad académica no lo haremos de forma unilateral, decidiendo por nuestra cuenta cuál va a ser la suerte de las clases o los exámenes, sino que discutiremos con ellos las distintas posibilidades con el objeto de llegar a un acuerdo que respete sus intereses y exigencias”.<sup>788</sup>

Además de lo relacionado con los exámenes, existían varios puntos en común entre el ME y los PNN. Ambos grupos partían del mismo diagnóstico de crisis, respecto de la universidad española (“La enseñanza universitaria en el Estado español está en una situación desastrosa”<sup>789</sup>) y ambos compartían aquellas reivindicaciones relacionadas con la democratización de la universidad, la autonomía y los estatutos democráticos para los centros y para el profesorado. En este sentido, el contrato laboral se consideraba como la base de la participación democrática en la universidad, ya que con él los PNN podrían incluirse, junto al resto del personal docente, no docente y estudiantes, en la gestión democrática.

Aunque algunas agrupaciones como el PTE achacaban a la huelga de PNN la escasa asistencia de estudiantes a los centros (con el consiguiente perjuicio para el ME), lo cierto es que esta movilización de profesores no numerarios, especialmente en la Universidad de Madrid, contribuyó a impulsar, aunque tímidamente, algunas

---

<sup>787</sup> Ibid., p. 2.

<sup>788</sup> Ibid., p. 4.

<sup>789</sup> “Boletín de la coordinadora de PNNs de la Universidad de Madrid”, N° 3, febrero 1977 p. 3, Archivo Fundación 1º de Mayo.

movilizaciones estudiantiles. Así, el día 18 de febrero fueron desalojados 400 alumnos de la Facultad de Medicina de la UAM, encerrados en el edificio de la Paz, que protestaban por el *numerus clausus* y por la revisión del contrato de la Facultad con el INP, que limitaba el número de alumnos de 4º curso a 150.<sup>790</sup> Durante ese mismo mes, los estudiantes de Medicina de la UAM llevaron a cabo una huelga de 15 días. Con todo, el desgastado movimiento estudiantil no fue capaz de aprovechar más la oportunidad política que significaba la huelga de PNN, por lo que las movilizaciones fueron decayendo progresivamente hacia el final del curso.

La huelga de los profesores no numerarios pareció solucionarse a finales de abril, cuando la Coordinadora Estatal de PNN de universidad propuso a las asambleas de los distritos universitarios la vuelta a clases para el 15 de mayo. De hecho, el 27 de abril, *El País* informaba que los PNN habían decidido volver a clases, luego de tres meses de huelga, aunque la decisión no era unánime, y persistía el temor a que no se hicieran los exámenes finales.<sup>791</sup> Sin embargo, apenas unos días después, la Coordinadora Estatal propuso a sus miembros relanzar la huelga, debido a que el MEC había roto las negociaciones de forma unilateral. Esta nueva etapa de la huelga de los PNN era particularmente compleja en vista de la proximidad de los exámenes finales.

La VIII Asamblea Estatal de PNN de universidad, realizada en Madrid los días 14 y 15 de Mayo realizó una dura crítica a la actitud del Ministerio, que había quebrado unilateralmente las negociaciones y convocó a la realización de unas jornadas de lucha para el 23, 24 y 25 de mayo. Además, a modo de recomendación, sugirió a los profesores no numerarios que aplazaran el cierre del curso hasta el 30 de junio, para dar tiempo a retomar las negociaciones con el Ministerio.<sup>792</sup> De esta manera, el curso 76-77 terminó en medio de un conflicto, pero no protagonizado por los estudiantes sino por los PNN.

---

<sup>790</sup> *El País*, 19 de Febrero de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>791</sup> *El País*, 27 de Abril de 1977. Hemeroteca digital El País.

<sup>792</sup> “Comunicado VIII Asamblea Estatal de PNN”, Madrid, 14 y 15 de Mayo de 1977, p. 1. Archivo Fundación 1º de Mayo.

## V. Interpretaciones del desgaste del ME en el curso 76-77.

La apatía y desgaste evidente del ME llamó la atención de algunas revistas de oposición, como Cuadernos para el Diálogo y Materiales, las cuales dedicaron varias páginas a buscar la explicación a este fenómeno.

Desde Cuadernos se consideraba que la crisis del ME tenía que ver con que luego de muchos años dedicados a la lucha antirrepresiva, ahora que la policía ya no estaba en los campus y que los estudiantes podían colgar carteles, repartir prensa y realizar asambleas, “los partidos que durante la dictadura más habían contribuido a configurar la lucha, de carácter antifascista, se encuentran ahora sin política concreta que poder aplicar a los graves problemas que tiene la Universidad española”.<sup>793</sup> De hecho, podemos considerar acertada esta interpretación, si tenemos en cuenta que el momento más álgido de las movilizaciones estudiantiles durante el curso 76-77 se produjo en enero, luego de la muerte de Arturo Ruiz y María Luz Nájera, precisamente, en un contexto de lucha antirrepresiva. De esta manera, era necesaria una reconversión del ME, que sobrepasara la contestación y se implicara en el funcionamiento de la universidad, tanto en calidad de centro de enseñanza como de institución esencial para la sociedad española.

Esta toma de distancia de la política estatal, que hemos verificado en los marcos de significado del ME, y el retorno a los problemas específicamente universitarios son, a nuestro modo de ver, un intento de reconversión del movimiento estudiantil, que se da cuenta de que ha perdido protagonismo e identidad en las luchas políticas generales y que necesita retomar contacto con aquellos temas que afectan a la masa de estudiantes, y no solamente a los más politizados. De ahí el nuevo discurso relacionado con los estatutos y la autonomía Universitaria, la crítica a la universidad burguesa y clasista, y la exigencia de gestión democrática. Pero para lograr esto no bastaba con un cambio en el discurso, era necesario también involucrar a las masas en esta nueva etapa, para lo cual era fundamental tener una organización. En este contexto, pudimos ver que a comienzos del curso tomó fuerza la idea del Sindicato Democrático de Estudiantes, pero que, producto de las divisiones y competencias entre los partidos, no se logró concretar. Ya en los primeros meses de 1977, los intentos de constituir un SDEU habían sido

---

<sup>793</sup> *Cuadernos para el Diálogo*, Núm. 214, del 4 al 10 de junio de 1977, p. 26. BNE.

dejados de lado por casi todas las agrupaciones, salvo el PTE, que continuó impulsando, sin éxito, las juntas promotoras del sindicato.

Ahora bien, desde la *Revista Materiales*, Francisco Fernández Buey ofrecía una buena explicación de la discontinuidad o crisis cíclicas del ME. Esto ocurría, según el filósofo, porque los movimientos estudiantiles en general tienen que lidiar con el continuo recambio de integrantes, lo que “dificulta la articulación de objetivos, análisis críticos y métodos de lucha, que es lo único que puede dar continuidad y coherencia interna a un movimiento social”.<sup>794</sup> Y junto con el recambio de integrantes, los movimientos estudiantiles también se caracterizan por ir transformando constantemente sus organizaciones y formas de lucha, “por una tendencia constante a la renovación y la regeneración”<sup>795</sup>, que muchas veces puede ser positivo, pero que también coadyuva a la discontinuidad.

En cuanto al ME español, Fernández Buey argumenta que se veía a sí mismo como “un movimiento popular, con reivindicaciones específicas propias, internas a la Universidad, pero con los mismos objetivos de transformación de la sociedad en un sentido genéricamente democrático que los otros movimientos”.<sup>796</sup> En este sentido, el ME buscaba reproducir en la universidad los cambios que se estaban gestando a nivel nacional. Es decir, si la sociedad española transitaba hacia la democracia, la universidad también debía hacerlo.

De esta manera, podemos entender el desgaste y agotamiento del ME desde la perspectiva propuesta por Fernández Buey, respecto de la discontinuidad intrínseca de los movimientos estudiantiles, y también desde el diagnóstico realizado por Cuadernos para el diálogo respecto de la pérdida de objetivos del ME español una vez que la represión cedió. Sin embargo, creemos que hay otro factor muy importante en el desgaste del movimiento estudiantil, que ayuda a explicar su pérdida de protagonismo en el curso 76-77, y que dice relación con los partidos políticos.

Bajo el régimen franquista no existía la posibilidad de hacer política institucional, los partidos de oposición tenían que actuar en la clandestinidad y, por lo tanto, buscaban espacios alternativos desde donde realizar su acción política. En este sentido, la universidad se constituyó en un lugar particularmente fértil para hacer

---

<sup>794</sup> Francisco FERNÁNDEZ BUEY, “Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo”, p. 1. BNE.

<sup>795</sup> Ibid.

<sup>796</sup> Ibid., p. 2.

política clandestina, ya que allí existía una mínima tolerancia al debate y a la discusión, y además, había muchos jóvenes con ansias de rebelarse contra el mundo de sus mayores, que estuvieron dispuestos a desafiar a los aparatos represivos del Estado para hacer política. Sin embargo, una vez que el juego político se institucionalizó, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política y la consiguiente legalización de los partidos (febrero del 77, PSOE; abril del 77, PCE; julio del 77, PTE; agosto del 77, ORT; septiembre del 77, LCR), éstos prefirieron canalizar sus energías y recursos en el ámbito de la política tradicional, abandonando al movimiento estudiantil.

Cierto es, como relata Alberto Carrillo-Linares en su libro *Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla* (1965-1977), que la universidad había proporcionado muchos militantes a los partidos de oposición, y en un porcentaje amplio (48,4% para el caso de Sevilla<sup>797</sup>, no tengo el dato para Madrid), los candidatos a las elecciones de 1977 habían realizado estudios superiores. En este sentido, la relación entre el ME y los partidos había sido muy fructífera, pero a partir de 1977, las organizaciones políticas de la universidad comenzaron a decaer, algunos de los periódicos que tradicionalmente funcionaron como transmisores de propaganda política en la universidad, desaparecieron, y el ME perdió su impulso central. En la misma línea, Sergio Rodríguez Tejada señala que “el abandono del espacio universitario por oleadas de activistas que trasladaban su experiencia y su capacidad al frente más popular de los movimientos obrero y vecinal privaron al movimiento estudiantil de la continuidad intergeneracional que necesitaba para recuperarse: de esa savia vital que lo había mantenido vivo durante la crisis anterior”.<sup>798</sup>

El caso del PSOE no fue tan dramático, porque nunca había tenido una presencia importante en el ME, no así el PCE. Éste había sido, por lejos, el partido más organizado y con más militantes en la Universidad de Madrid (y española en general), y a través de la Organización Universitaria de Madrid y su periódico Vanguardia había encabezado el movimiento estudiantil madrileño. Aunque desde finales de la década de los 60 habían surgido agrupaciones más radicales y muy críticas contra el PCE, éste siempre mantuvo su prestigio y capacidad de liderazgo entre los estudiantes más politizados. Sin embargo, ya a comienzos de 1977 el PCE fue abandonando progresivamente la universidad, con lo que la Organización Universitaria de Madrid y

---

<sup>797</sup> A. CARRILLO-LINARES: *Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla*, p. 580 y ss.

<sup>798</sup> S. RODRÍGUEZ TEJADA: *Zonas de libertad*, p. 431.

su periódico *Vanguardia*, perdieron protagonismo hasta desaparecer de escena. El PTE y ORT, que fueron legalizados en julio y agosto de 1977, mantuvieron una cierta presencia en la universidad, pero no fue suficiente. De hecho, el curso 77-78 comenzó arrastrando los mismos problemas que el anterior, conflictos de los estudiantes no admitidos y de PNN, sin que el ME fuera capaz de utilizar estas oportunidades políticas para relanzar las movilizaciones estudiantiles.



## CAPÍTULO 10

### 1978-1980: DEL “PASOTISMO” A LA LUCHA CONTRA LA LAU. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL NUEVAMENTE EN PIE DE GUERRA.

#### I. Curso 77-78: “Militar en la Universidad, peor que escuchar ocho horas las palabras de Monseñor Balaguer”.<sup>799</sup>

Durante los cursos 76-77 y 77-78, el ME había entrado en un proceso de agotamiento que parecía no tener fin. Las movilizaciones habían descendido drásticamente, la organización era prácticamente inexistente y además, los partidos políticos con más presencia en la universidad habían decidido jugar sus cartas en las elecciones y en el Parlamento, dejando así a la deriva a un movimiento que había sido punta de lanza en la lucha contra el franquismo. Además, el fin del franquismo y de la lucha antirrepresiva había dejado al ME sin objetivos, sin propuestas y prácticamente, sin nada qué decir. Salvo algunos problemas que se arrastraban de años anteriores, como la selectividad en algunas carreras (particularmente, Medicina) y el conflicto de los PNN, la universidad había dejado de ser un foco de movilización y un espacio de discusión respecto de los cambios que debían producirse en el país. Las elecciones de junio de 1977, las primeras libres en más de 40 años, casi no fueron tema en la universidad, así como tampoco los Pactos de La Moncloa y otros hitos importantes del proceso de transición a la democracia. El ME parecía dormido, y los únicos conflictos que se dieron en estos cursos fueron los que se arrastraban de años anteriores.

Por ejemplo, en septiembre de 1977 se repitió el problema de los estudiantes no admitidos, y el tira y afloja entre éstos y las autoridades académicas, para ampliar el número de plazas. El caso de las facultades de Medicina tuvo una leve diferencia con respecto al curso anterior ya que por primera vez, se enfrentaron el Consejo de Rectores por un lado y las universidades por otro. El Consejo de Rectores había fijado en 14.150 las plazas para estudiar Medicina en toda España, cifra considerablemente superior a la propuesta por las universidades. En el caso de la Universidad Complutense, los decanos acordaron admitir a 600 estudiantes, mientras el Consejo de Rectores presionaba para que se admitiera a 1100.<sup>800</sup> Según la Junta de Gobierno de la UCM, la ampliación del número de plazas decretada por el Consejo de Rectores era una medida demagógica ya

<sup>799</sup> *Cuadernos para el Diálogo*, núm. 253, 4-10 de Marzo de 1978, p. 30. BNE.

<sup>800</sup> *ABC*, 17 de Septiembre de 1977. BNE.

que la universidad no contaba con la capacidad necesaria para preparar a tantos alumnos.

El problema de Medicina generó algún tipo de movilización entre los estudiantes no admitidos, que el 29 de septiembre protestaron contra la doble selectividad, ya que, aún habiendo aprobado estas pruebas, no fueron admitidos en razón de la limitación de plazas acordada por los decanos de las Facultades de Medicina de España. De hecho, el 5 de octubre, un grupo de no admitidos se manifestó violentamente contra las autoridades académicas e intentó agredir al decano de la Facultad, Dr. Alberto Oriol, quién fue defendido por los representantes estudiantiles. Con motivo de estas agresiones, las autoridades académicas de la UCM pidieron a la fuerza pública que desalojara al grupo de estudiantes encerrados en la Facultad de Medicina (cerca de 200), algunos de los cuales se encontraban con sus padres. Por su parte, la policía detuvo a más de 50 personas que realizaban una asamblea en la Facultad de Medicina para tratar el problema de los estudiantes no admitidos. Paralelamente, un grupo de estos mismos estudiantes se manifestó en el centro de Madrid.<sup>801</sup> Finalmente, el rectorado de la Complutense aceptó la propuesta del Consejo de Rectores, con lo que todos los preinscritos que obtuvieron una nota superior a 5.90 podrían matricularse en Medicina. La cifra de admitidos entonces, se acercaba mucho a la cifra total de estudiantes que habían solicitado inscribirse en dicha Facultad.<sup>802</sup>

A raíz de este conflicto, el 21 de octubre se reunió en Toledo el Consejo de Rectores, para tratar dos asuntos sensibles: la autonomía universitaria y la selectividad. En cuanto a la primera, el Consejo de Rectores acordó difundir los temas que compondrían esta reforma para poder tener en cuenta las voces de todos los sectores de la educación superior. Luego, el Consejo elaboraría las bases para el anteproyecto de Ley de Autonomía Universitaria (LAU). En cuanto al segundo asunto, nuevamente se plantearon discrepancias. Algunos rectores se mostraron favorables a derogar la Ley de Selectividad para sustituirla por pruebas específicas para cada Facultad, aunque finalmente, las autoridades académicas y del MEC decidieron que las pruebas de selectividad no se cambiarían hasta que la LAU las modificara.<sup>803</sup> Es decir, siguieron dando largas a un problema que se arrastraba, a lo menos, desde la primera aplicación de la selectividad en 1974. Lo interesante de este conflicto es que muestra la tensión

---

<sup>801</sup> *ABC*, 6 de Octubre de 1977. BNE.

<sup>802</sup> *ABC*, 12 de Octubre de 1977. BNE.

<sup>803</sup> *ABC*, 22 de Octubre de 1977. BNE.

entre el Ministerio y las autoridades académicas de las universidades. Básicamente, el Consejo consideraba que el *numerus clausus*, es decir, el número de estudiantes y de profesionales que debía existir en España era una decisión política que debía hacer el Parlamento y no las autoridades universitarias,<sup>804</sup> aunque, paradójicamente, el mismo Consejo instaba a las universidades a debatir en torno a la ley de autonomía, que, supuestamente, les daría libertad frente al poder político.

En este sentido, la autonomía universitaria se había instalado ya como un tema fundamental, y en torno a él se realizarán debates, ponencias y conferencias. Por ejemplo, el 21 de enero de 1978, el rector de la UAM, Pedro Martínez Montávez y el profesor José Luis López Aranguren, participaron en unas conferencias sobre la reforma de la universidad que se llevaron a cabo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos conferenciantes coincidieron en destacar a la autonomía como parte fundamental del proceso democratizador, y toda la comunidad universitaria se mostró de acuerdo en la imperiosa necesidad de realizar una reforma.<sup>805</sup> El problema se producirá unos meses más tarde, cuando se comiencen a debatir los contenidos específicos de dicha reforma, y especialmente, cuando el proyecto de ley se elabore de espaldas a la comunidad.

Ahora bien, aunque el tema de la reforma en la universidad estaba instalado desde hacía tiempo en el debate público, en el invierno de 1978 solo un puñado de estudiantes politizados tenía algo que decir con respecto a esto. La gran mayoría iba a clases y luego regresaba a casa, sin involucrarse en nada, en un estado de indiferencia que contrastaba enormemente con las movilizaciones de unos años atrás. La revista *Cuadernos para el Diálogo*, en su número de marzo de 1978, dedicó un reportaje a los universitarios españoles, titulado “De la contestación al porro”, en el que intentaba descifrar la apatía que mostraban los estudiantes. “El movimiento estudiantil se ha desinflado hasta casi desaparecer. Esos miles de estudiantes que durante años llevaron a cabo duras luchas contra la represión del franquismo y contra la política universitaria de las autoridades solo tienen ahora una muy escasa sucesión”.<sup>806</sup> Los pocos estudiantes que participaban en partidos políticos reconocían la dificultad del momento y el descenso dramático de militantes en la universidad, especialmente en los partidos de

---

<sup>804</sup> *El País*, 9 de Noviembre de 1977. Hemeroteca Digital El País.

<sup>805</sup> *ABC*, 21 de Enero de 1978. BNE.

<sup>806</sup> *Cuadernos para el Diálogo*, núm. 253, 4-10 de Marzo de 1978, p. 26. BNE.

izquierda: “Un afiliado del PCE reconoce que sus militantes han descendido en un año de cien a quince en la Facultad de CC.PP.”.<sup>807</sup>

Las Facultades tradicionalmente más combativas, como Políticas, Sociología o Filosofía y Letras, estaban casi completamente desmovilizadas y desorganizadas, aunque la mayoría de los estudiantes reconocía la mala situación en la que se encontraba la universidad española. Las causas de esta apatía eran variadas, según los estudiantes entrevistados (ninguno de ellos es identificado por su nombre): algunos culpaban a la excesiva instrumentalización que los partidos políticos habían hecho del movimiento; otros a la incapacidad de crear una estructura de organización consistente en el tiempo; otros consideraban que era necesario buscar nuevas reivindicaciones, centradas en los problemas propios de los estudiantes, y por último, estaban aquellos que creían que nada podría cambiar por lo tanto, no tenía sentido involucrarse.<sup>808</sup>

Un PNN de la Facultad de Políticas – tampoco está identificado en el reportaje de *Cuadernos* – explicaba que ya antes de la muerte de Franco, “se estaba viendo venir una cierta desmoralización, la falta de una salida política al movimiento. Ahora hay una sensación de derrota, de que esto no hay quién lo cambie. Se une el desplazamiento de la cuestión política hacia otros centros, a las Cortes”.<sup>809</sup> La misma idea era sostenida por estudiantes de izquierda, que consideraban que el hastío había impregnado incluso a los demócratas y a los independientes, cansados de que los partidos políticos no dieran solución a los problemas de los estudiantes. Además, señalaban que los militantes más combativos habían salido de la universidad y se habían dedicado a la política institucional o las asociaciones de vecinos, dejando al ME sin líderes.<sup>810</sup>

La apatía e indiferencia de los estudiantes con respecto a la situación política queda reflejada en el escaso interés que generaron las elecciones a delegados estudiantiles de fines de 1977, en donde en la mayoría de las Facultades no se obtuvo el quórum mínimo necesario para realizar las elecciones. En este contexto, plantear una organización estudiantil – ya fuera un Sindicato o cualquier otro tipo de estructura – era completamente inútil e, incluso, contraproducente.

Los estudiantes entrevistados por *Cuadernos* se mostraron muy críticos de la actitud de los partidos políticos con respecto al ME, acusándolos de abandonar el

---

<sup>807</sup> *Cuadernos para el Diálogo*, núm. 253, 4-10 de Marzo de 1978, p. 27. BNE.

<sup>808</sup> Ibid.

<sup>809</sup> Ibid.

<sup>810</sup> Ibid., p. 30.

movimiento a favor de la política institucional: “Buena parte de la culpa la tienen los partidos de izquierda, que intentan limitarlo todo al Parlamento”, señalaba un militante de partido a la izquierda del PCE.<sup>811</sup> Con todo, quizá el punto clave en la crisis del ME no tenía tanta relación con los partidos políticos sino más bien con la forma en que se estaba llevando a cabo la transición a la democracia: “El movimiento estudiantil era de lucha contra el fascismo, pero la dictadura no ha caído, la han transformado. Y esto ha causado desmoralización”.<sup>812</sup> En este sentido, la lucha contra el régimen, que en varios momentos otorgó identidad al ME, había terminado por vaciarlo de sentido. Una vez que el franquismo desapareció (al menos, como régimen dictatorial), el movimiento estudiantil se quedó sin objetivos, sin enemigos, sin propuestas, y entró en una fase de reflujo.

Quizá la única Facultad que tenía algo más de actividad era Derecho en la Complutense, donde se habían creado varias asociaciones culturales de estudiantes, como AEDUC o FEUAN, compuestas en su mayoría por estudiantes de derecha e incluso extrema derecha (“miembros de Fuerza Nueva y de otros partidos fascistas”<sup>813</sup>). El problema era que, frente a la masa de estudiantes indiferentes, la extrema derecha se hacía notar, y de manera violenta: “sus provocaciones en este curso han sido continuas, desde carteles, pintadas, insultos, ataques...”<sup>814</sup> De hecho, el 19 de enero de 1978, un grupo de estudiantes de Derecho de la Complutense, pertenecientes a Falange Española Auténtica, ingresó a la Facultad con bates de béisbol y otros objetos contundentes y agredieron a los estudiantes que se encontraban en el vestíbulo repartiendo propaganda de los diferentes partidos políticos. Según ABC, la violenta situación terminó con el cierre de la Facultad, y con daños por más de trescientas mil pesetas.<sup>815</sup> Con todo, las agresiones de estos grupos de extrema derecha eran, por el momento, aisladas, por lo que tampoco generaron una reacción de parte de la masa de estudiantes.

De esta manera, el curso 77-78 transcurrió sin mayores conflictos en la universidad, aunque ciertos temas fundamentales para el futuro, como la autonomía, se estaban instalando en la discusión pública. Lamentablemente, el ME no tenía la capacidad de años anteriores para generar debate ni propuestas en relación a la

---

<sup>811</sup> Ibid.

<sup>812</sup> Ibid.

<sup>813</sup> Ibid. p. 28-29.

<sup>814</sup> Ibid. p. 29.

<sup>815</sup> ABC, 20 de Enero de 1978. BNE.

enseñanza universitaria, ni mucho menos para movilizar a los estudiantes en torno a un conjunto de reivindicaciones propias, que le dieran sentido nuevamente al movimiento.

## **II. Curso 78-79: Comienza la discusión en torno a la Ley de Autonomía Universitaria (LAU).**

El curso 78-79 se inició en medio de la misma apatía que los cursos anteriores, pese a acontecimientos tan importantes como la desarticulación de la Operación Galaxia (18 de Noviembre de 1978) y el referéndum por la Constitución (6 de Diciembre de 1978).

El único conflicto de cierta importancia que se dio en la universidad en el curso 78-79 fue el relacionado con los exámenes de febrero. El 27 de noviembre, una asamblea de estudiantes de Derecho de la Universidad Complutense decidió convocar a un paro indefinido en protesta por la decisión del rectorado de no convocar a exámenes extraordinarios en febrero. Esta medida afectaba notablemente a los estudiantes libres.<sup>816</sup> El conflicto fue aumentando y otras facultades de la UCM se involucraron. De esta manera, el 30 de noviembre, más de mil alumnos organizaron una manifestación ante el Rectorado para exigir la celebración de los exámenes de febrero. La movilización fue disuelta con bastante violencia por la policía, mientras el Rector señalaba que para iniciar conversaciones los estudiantes debían terminar con todas las medidas de presión, es decir, deponer la huelga.

El 1 de diciembre, un grupo de estudiantes se encerró en el decanato de la Facultad de Medicina de la UCM, en protesta por la no celebración de los exámenes de febrero<sup>817</sup>, pero el 3 de diciembre fueron desalojados por la policía. El 5 de diciembre, cerca de 500 estudiantes marcharon hacia el rectorado para intentar entrar en el edificio, pero también fueron dispersados por la policía<sup>818</sup>, por lo que, para evitar una escalada en el conflicto, el Rector de la UCM anunció que el 18 de diciembre se discutiría el tema en la Junta ordinaria de Gobierno, a la que podrán asistir dos representantes de los alumnos. En dicha reunión participaron los estudiantes Fernando Moreno Martínez, de la Facultad de Farmacia, y José Antonio Pérez Ruiz, de Medicina. Luego de que los representantes estudiantiles expusieran sus razones, la Junta decidió conceder una

---

<sup>816</sup> ABC, 28 de Noviembre de 1978. BNE.

<sup>817</sup> ABC, 2 de Diciembre de 1978. BNE.

<sup>818</sup> ABC, 6 de Diciembre de 1978. BNE.

excepción para que los estudiantes pudieran examinarse en febrero, aunque bajo ciertas condiciones: elevar una petición por escrito al decano de su facultad, tener una nota media mínima de aprobado en su expediente académico y no tener más de dos asignaturas pendientes.<sup>819</sup>

Ahora bien, en noviembre de 1978 el Ministro de Educación Íñigo Clavero, presentó a las Cortes el Proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, redactado por el equipo del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Luis González Seara. Apenas publicado el proyecto, comenzaron las críticas y el rechazo de los más diversos sectores políticos. En *Mundo Obrero*<sup>820</sup> se escribieron varios artículos en contra del proyecto de LAU, por considerarla clasista y perjudicial para las universidades estatales, y se hacía especial énfasis en que ningún grupo político, salvo UCD, apoyaba el proyecto:

“Hacía mucho tiempo que una Ley no había logrado reunir tan unánime oposición desde un abanico de posiciones ideológicas tan amplio. La futura Ley de Autonomía Universitaria ha conocido tres borradores distintos antes de convertirse en el definitivo proyecto aprobado por el Gobierno para ser remitido a las Cortes. (...) Pero ha sido el definitivo proyecto, aprobado en un reciente Consejo de Ministros, el que ha provocado un auténtico aluvión de protestas en todo el país. En las últimas semanas, desde la “amarilla” AIPU (Asociación Independiente de Profesores Universitarios) hasta FETE-UGT y CC.OO., pasando por los grupos parlamentarios del PCE, PSOE, PNV y CDC, reunidos en el madrileño hotel Mindanao; desde los claustros representativos de Bellaterra y la Central de Barcelona o la Autónoma de Madrid, hasta los decanos de las facultades de Derecho de todo el país, pasando por los estudiantes madrileños, que de nuevo han tenido que correr delante de la policía por querer una oportunidad en febrero, o por grupos de universitarios granadinos y malagueños, están ennegreciendo enormemente el futuro de tan controvertida ley.”<sup>821</sup>

El problema era que la oposición al proyecto se mantenía en el Parlamento y todavía no lograba movilizar a los estudiantes. Así lo veían las juventudes socialistas cuando publicaron un reportaje titulado “Este curso también: La Universidad aburre”, en la edición de noviembre de 1978 del periódico *Renovación*. “En efecto, mientras la militancia política en la universidad se mantiene, cuando no disminuye, en unas cotas

---

<sup>819</sup> Acta de Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, del 18 de Diciembre de 1978, p. 3. ACUCM.

<sup>820</sup> *Vanguardia*, el tradicional periódico de la Organización Universitaria del PCE dejó de publicarse a finales de 1976, por lo que las noticias relacionadas con la Universidad y el ME aparecían en el órgano central del PCE.

<sup>821</sup> *Mundo Obrero*, núm. 4, 28 de Diciembre 1978 a 3 de Enero de 1979, p. 8. BNE.

difíciles de superar, los campos se llenan de ácratas floridos, que “pasan de todo”.<sup>822</sup> Con esta actitud, pensaban los estudiantes socialistas, era imposible transformar la universidad, y había mucho que cambiar. Frente al proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, las juventudes socialistas eran bastante críticas, en primer lugar, porque el proyecto se había elaborado y mantenido en secreto durante un tiempo. En segundo lugar, porque consideraban que la autonomía no quedaba suficientemente asegurada, “pues se intentaba homogeneizar universidades con cierto grado de autonomía con otras más dependientes del Ministerio, perpetuando, su vez, el poder de los catedráticos”.<sup>823</sup> Con todo, las esperanzas no estaban totalmente perdidas. Según *Renovación*, las fuerzas universitarias del PSOE y del PCE ya habían comenzado a trabajar para buscar una salida alternativa a los problemas de la universidad, que incluyera un estatuto real de autonomía, financiamiento estatal adecuado y gestión democrática.

También la ORT, a través de su Comité de Universidad, lanzó duras críticas en contra del proyecto de LAU, por considerarlo una racionalización de la universidad, tendiente a formar profesionales que sirvieran en el aparato productivo de la oligarquía. Para ello, se proponía “acabar con la situación de “caos” y “masificación” adoptando medidas selectivas, recortar los avances que se han dado en algunas Universidades en lo referente a la democratización de los órganos de gobierno y reforzar los poderes del MEC sobre las Universidades de las comunidades autónomas”.<sup>824</sup> Además, rechazaba el apoyo financiero que el proyecto daba a las universidades privadas (creadas como centros de élite, donde se formarían los cuadros de dirección de la oligarquía), la supremacía del Consejo Económico sobre el Consejo Académico, transformando a los Claustros en órganos puramente informativos, el mantenimiento de la selectividad y las atribuciones del Ministerio de Educación sobre las universidades. “Las atribuciones del MEC son excesivas, hasta tal punto que en la práctica cuestionan el sentido del término autonomía. El MEC puede declarar un auténtico estado de excepción en la Universidad, suspendiendo los actos de los órganos de gobierno”.<sup>825</sup>

Los militantes de ORT sabían que la situación de indiferencia en la universidad podía ser peligrosa, ya que consideraban que el ME no solamente había perdido la iniciativa ante los problemas de la universidad, sino también toda capacidad de

---

<sup>822</sup> *Renovación*, Órgano de las Juventudes Socialistas, Noviembre de 1978, p. 11. F. Pablo Iglesias.

<sup>823</sup> Ibid.

<sup>824</sup> Sin título, Comité de Universidad de ORT, 1978-1979, p. 6. F. Pablo Iglesias.

<sup>825</sup> Ibid. p. 8.



respuesta ante los proyectos provenientes del Ministerio.<sup>826</sup> Esta situación, según los estudiantes de la ORT, se había generado por la forma en que se había llevado a cabo “el desmantelamiento del fascismo, la miseria cultural y científica que ofrece la Universidad, la instrumentalización de las posiciones claudicantes [se refiere básicamente al PSOE y al PCE] y por último la ofensiva ideológica desencadenada por la burguesía contra las posiciones revolucionarias”.<sup>827</sup> Por esta razón, era fundamental revitalizar al movimiento estudiantil, movilizar a los estudiantes, volver a convocar a asambleas, reuniones y marchas, pero también, era imprescindible dotar al ME de objetivos propios, que ayudaran a involucrar a los estudiantes en la reforma de la universidad. “La escasez de medios para impartir clases en muchas facultades, la falta de infraestructura, el modo en que se imparten las clases, la falta de perspectiva para el ejercicio profesional, el funcionamiento jerárquico de los departamentos..., no son sino botones de muestra de las cuestiones que tenemos que abordar para hacer ver la necesidad de la transformación democrática de la Universidad”.<sup>828</sup> Pese a los buenos intentos de ORT, el curso 78-79 no vio el resurgir del ME

Las elecciones generales celebradas el 1 de marzo de 1979, en las cuales UCD obtuvo la victoria pero sin mayoría absoluta, produjeron un cambio de gabinete. En abril, el Ministro Íñigo Clavero dejó su cargo en el Ministerio de Educación y fue reemplazado por José Manuel Otero Novas, pero quizá más importante que eso, en 1979 se creó, en paralelo al MEC, el Ministerio de Universidades e Investigación, a cargo de Luis González Seara, el antiguo Secretario de Estado para Universidades, y principal impulsor del proyecto de LAU. Con todo, el Consejo de Ministros de la nueva legislatura no ratificó el proyecto presentado en noviembre del 78, por lo que fue necesario redactar otro, que se presentó ante las Cortes en febrero de 1980, esperando que concitara mayor apoyo. No fue así, y de hecho, la oposición al segundo proyecto será tan importante, que permitirá el resurgimiento de las movilizaciones estudiantiles y un nuevo brote de conflicto en la universidad.

---

<sup>826</sup> Ibid. p. 5.

<sup>827</sup> Ibid., 10.

<sup>828</sup> Ibid.

### III. Curso 79-80: El ME se levanta en contra del Proyecto de Ley de Autonomía Universitaria.

El curso 79-80 comenzó en medio del debate por la redacción del segundo proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, y, contrario a los cursos anteriores, con un mayor grado de movilización entre los estudiantes. Luego de un noviembre tranquilo, en los primeros días de diciembre de 1979 se produjeron varias manifestaciones de estudiantes universitarios en contra de la LAU. El 5 de diciembre, los estudiantes de las Facultades de Filosofía, Derecho y Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, convocaron a un paro de una semana en contra de dicha Ley. El 7, se sumaron las Facultades de Filosofía-B, Geografía e Historia y Pedagogía de la Complutense y algunas facultades de la Politécnica. En casi todos centros se celebraban reuniones y asambleas para debatir sobre el proyecto de ley, cuyos puntos críticos eran la subida de las tasas académicas, la eliminación de convocatorias a exámenes y el endurecimiento de las pruebas de selectividad.<sup>829</sup>

En este ambiente de incipientes movilizaciones, algunos grupos políticos convocaron a unas jornadas de lucha en contra del proyecto, mientras, en paralelo, comenzaban a trabajar para construir una organización estudiantil que permitiera coordinar la batalla contra la LAU. Así, los jóvenes del *Partido Socialista de los Trabajadores* (creado en 1979 luego de que un grupo de militantes de la *Liga Comunista Revolucionaria* se escindiera de ésta y se uniera con militantes de otros partidos), abogaban por la creación de una coordinadora estatal estudiantil que “permita elevarnos a una lucha estatal concertada; podrá establecer lazos con los demás sectores sociales, especialmente obreros, podrá asegurar la unidad de acción de los universitarios y los bachilleres; dotará de un programa y objetivos únicos a la movilización sin detrimento de las particularidades nacionales y regionales, que se verán así potenciadas”.<sup>830</sup>

A partir del 7 de diciembre, las movilizaciones fueron en aumento. Ese día se había convocado a una manifestación pacífica frente al Ministerio de Educación, pero la zona fue ocupada por policías que dispersaron violentamente a los estudiantes. Una segunda manifestación se convocó, minutos más tarde, en la Glorieta de Quevedo, pero

---

<sup>829</sup> *El País*, 8 de Diciembre de 1979. Hemeroteca digital El País.

<sup>830</sup> *Boletín Estudiantil*, Órgano editado por jóvenes socialistas revolucionarios por la constitución del Partido Socialista de los Trabajadores, 5 de diciembre de 1979, p. 1. F. Pablo Iglesias.

los estudiantes fueron nuevamente dispersados por la policía, que utilizó grandes cantidades de bombas de humo. Según el periódico *Informaciones*, además de la actuación de la policía, algunos Guerrilleros de Cristo Rey agredieron a algunos manifestantes, quedando varios de ellos contusionados y heridos. Esta jornada se saldó con dos heridos graves y más de 30 detenidos.<sup>831</sup> Con esta dinámica, el conflicto escaló rápidamente. El 10 de diciembre comenzó una semana plagada de huelgas y manifestaciones organizadas por universitarios y bachilleres en contra del proyecto de Ley de Autonomía Universitaria.

Para el ME, el conjunto del proyecto de LAU era nefasto porque suponía la pérdida de representatividad de algunos estamentos en la vida universitaria, al crear un consejo económico que tenía primacía sobre el claustro (o consejo académico), que en la UAM, por ejemplo, estaba compuesto por una representación tripartita y paritaria de profesores, alumnos y personal no docente. Es decir, dejaba las decisiones finales a un organismo económico y no a la comunidad universitaria. También rechazaban que la ley pretendiera que en el claustro hubiera una representación de un 50% de doctores, no de profesores efectivos, PNN o agregados. Sin embargo, los puntos más conflictivo del proyecto – y por ende los que movilizaban en mayor medida a los estudiantes – eran aquellos que los afectan directamente: la selectividad y el alza de las tasas académicas, porque consideraban que con ello se volvía a la universidad elitista y discriminadora, ya que la educación superior estaría determinada por la capacidad económica. Según *Informaciones*, el proyecto de ley señalaba al respecto que “las tasas académicas de las Universidades públicas, de cuantía uniforme para todas, serán establecidas por el Gobierno previo informe del Consejo General de Universidades, tendiendo a cubrir los costes reales de la enseñanza”,<sup>832</sup> es decir, se transfería a los estudiantes el costo de la educación, que dejaba de estar subvencionada por el Estado.

Desde *Mundo Obrero* también se realizaron duras y constantes críticas al proyecto, por considerar que tendía a privatizar la educación y a transformar a ésta en un negocio, a través de medidas que endurecían la selectividad y favorecían a aquellos jóvenes que podían dedicarse exclusivamente a los estudios y no tenían que combinarlos con trabajo. Además, el *numerus clausus* favorecía a las universidades privadas, que, según *Mundo Obrero*, estaban homologadas a las estatales, en cuanto a

---

<sup>831</sup> *Informaciones*, 7 de Diciembre de 1979. BNE.

<sup>832</sup> *Informaciones*, 10 de Diciembre de 1979. BNE.

financiamiento y títulos, pero sobre las cuales nadie podría ejercer control, ni para su creación ni para asegurar la libertad académica.<sup>833</sup>

*Mundo Obrero* criticaba también el interés del gobierno por elevar las tasas académicas y reducir la gratuidad de la enseñanza solamente a aquellas personas cuyos ingresos familiares fueran realmente escasos. “Es una medida más de selectividad, teniendo en cuenta que, con número limitadísimo de convocatorias y sin grupos de enseñanza nocturna, es imposible trabajar y estudiar, a sabiendas de que dos, tres o cuatro años de estudios universitarios pueden irse por la borda al ser expulsado por no aprobar una determinada asignatura en un par de cursos”.<sup>834</sup>

Lo interesante del conflicto en torno a la LAU, es que rápidamente se extendió a diversos distritos universitarios, como Alcalá, Barcelona, Córdoba, Granada, La Laguna, Málaga, Murcia, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En cada ciudad, y en cada centro, había problemas específicos, pero lo que predominaba en todos ellos era el rechazo a la selectividad que imponía la LAU y a los recortes en la autogestión de muchas universidades, especialmente en aquellas regiones que estaban negociando sus estatutos de autonomía. Por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona señalaba que el proyecto de LAU era regresivo porque la Generalitat nunca podría tener competencias sobre la educación superior.<sup>835</sup>

De esta manera, la primera quincena de diciembre de 1979 vio el resurgir del ME, soliviantado contra un proyecto de ley que profundizaba la selectividad en la universidad, ahora por motivos económicos. Así, lo que movilizaba a los estudiantes era la defensa de una universidad democrática, pública y sin discriminación económica, con autonomía en su gestión, en la configuración de los órganos de gobierno y en la selección del profesorado. “La enseñanza vuelve a estar en pie de guerra en toda España, con el problema de fondo de la falta de oportunidades y los añadidos de una burocratización y un conservadurismo que ocasionan, en general, una pésima calidad de enseñanza”.<sup>836</sup>

El 12 de diciembre, más de 4 mil estudiantes celebraron una asamblea de distrito en la UAM, y se sucedieron diversos encierros y huelgas de hambre, no sólo de

---

<sup>833</sup> *Mundo Obrero*, núm. 54, 20 al 26 de Diciembre de 1979, p. 5. BNE.

<sup>834</sup> *Mundo Obrero*, núm. 53, 13 al 19 de Diciembre de 1979, p. 18. BNE.

<sup>835</sup> Ibid.

<sup>836</sup> Ibid.

estudiantes universitarios sino también de Enseñanza Media.<sup>837</sup> La asamblea, de la cual saldría la Coordinadora de las tres universidades madrileñas, decidió poner fin a la huelga que se estaba llevando a cabo desde el 10 de diciembre, y reemplazarla por otro tipo de acciones que manifestaran su oposición a la LAU, básicamente manifestaciones y marchas en las calles de la capital. El problema era que el gobierno civil de Madrid se resistía a dar su autorización para realizar este tipo de manifestaciones, hasta que finalmente aceptó una marcha para el 13 de diciembre, pero con un recorrido distinto del solicitado por los estudiantes. Así, en lugar de dirigirse al MEC, los estudiantes saldrían de Moncloa en dirección a la plaza de Juan de Zorilla.

Ahora bien, no solo los estudiantes universitarios y de Enseñanza Media se oponían a la LAU, diversos claustros y académicos a título personal también lo hacía. Así, el 11 de diciembre los profesores Aranguren, García Calvo, Savater, Sadaba y Pollán, participaron en un acto informativo organizado en la UAM, en torno al tema “Alternativa a la Universidad”.<sup>838</sup> Por su parte, la Junta de Gobierno de la UAM publicó un comunicado en el que se criticaba duramente el proyecto de Ley ya que restringía el margen de autonomía de los estatutos de las universidades. El 12 de diciembre, el Rector de la UAM declaró a ABC que “el proyecto de Autonomía en su conjunto es negativo”. Los profesores adjuntos de universidad, que se encontraban en huelga desde el 29 de noviembre, también criticaron la LAU.<sup>839</sup>

#### **IV. Un fin de año difícil: ronda el fantasma de la represión.**

El 13 de diciembre de 1979 se llevó a cabo la manifestación convocada por la asamblea de distrito, que, según los organizadores congregó a 50 mil estudiantes (15 mil, según la policía) de las tres universidades madrileñas, institutos de Bachillerato y centros de Formación Profesional.<sup>840</sup> También participaron casi cinco mil trabajadores de la empresa Chrysler. La manifestación comenzó en la calle Isaac Peral y se trasladó hasta la plaza de Juan de Zorilla, y al final de ésta algunos grupos de manifestantes causaron incidentes como cortes de tráfico, barricadas con coches aparcados y papeleras. Los incidentes, según ABC, continuaron en la Glorieta de Cuatro Caminos,

---

<sup>837</sup> *El País*, 12 de Diciembre de 1979. Hemeroteca digital El País.

<sup>838</sup> *Informaciones*, 11 de Diciembre de 1979. BNE.

<sup>839</sup> *ABC*, 13 de Diciembre de 1979. BNE.

<sup>840</sup> *ABC*, 14 de Diciembre de 1979. BNE.

en la de Bilbao y en las calles cercanas a Gran Vía y el barrio Malasaña. Esta manifestación se saldó con 4 estudiantes detenidos y dos policías heridos.<sup>841</sup>

Sin embargo, lo más complejo vendría ese mismo día, más tarde. Aparentemente, grupos de participantes de la manifestación contra la LAU se unieron a la manifestación convocada por CC.OO. USO y SU en contra del Estatuto de los Trabajadores, que transcurrió sin incidentes hasta las 9 de la noche. A esa hora, cuando los manifestantes se encontraban en la Ronda de Valencia, algunos grupos de jóvenes<sup>842</sup> intentaron cortar el tráfico y atacaron a un jeep de la Policía Nacional con piedras y otros objetos contundentes. Algunos miembros de la policía efectuaron disparos que terminaron con la vida de dos jóvenes estudiantes, Emilio Martínez Menéndez y José Luis Montañés Gil.

José Luis Montañés era estudiante de la Universidad Complutense, el curso 78-79 se había matriculado en la Facultad de Políticas y el curso 79-80 lo cursaba como alumno libre. Por su parte, Emilio Martínez Menéndez no estaba matriculado en ese momento, pero lo había estado en el curso 77-78 en la Escuela Técnica de Ingeniería Industrial en Madrid. La muerte de los dos jóvenes causó honda conmoción en la sociedad, por lo que diversas instituciones y organismos hicieron públicos comunicados de condena. Así lo hizo la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid en un comunicado público en donde, junto con lamentar la muerte de los jóvenes y repudiar los episodios de violencia, “insiste en la imperiosa necesidad de racionalizar las actuaciones de la Fuerza Pública, de manera que no desemboquen en violencias innecesarias y desgracias irreparables, como lamentablemente viene ocurriendo”.<sup>843</sup>

Como era de esperar, el asesinato de estos dos jóvenes produjo una fortísima ola de movilizaciones, especialmente en la universidad. Así, el 14 de diciembre, se llevó a cabo una manifestación convocada por la Coordinadora de Estudiantes Universitarios y la de Enseñanza Media y Formación Profesional, y apoyada por diversos partidos políticos de izquierda.<sup>844</sup> Grupos de estudiantes y manifestantes se concentraron en

---

<sup>841</sup> ABC, 14 de Diciembre de 1979. BNE.

<sup>842</sup> Ajenos a la manifestación, según *El País* del 14 de Diciembre de 1979, y provenientes de la manifestación de estudiantes, según ABC de ese mismo día.

<sup>843</sup> Acta de Sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrada en el Rectorado el día 14 de diciembre de 1979, p. 2. ACUAM.

<sup>844</sup> Según *El País*, por el PTE, Movimiento Comunista, Liga Comunista Revolucionaria, Joven Guardia Roja, Unión de Juventudes Maoístas, Juventudes Comunistas Revolucionarias. También por CNT, Sindicato Unitario y Asociación Obrera Asamblearia, 15 de Diciembre de 1979. Hemeroteca Digital El País.

diversos puntos de Madrid, en protesta por la muerte de los dos jóvenes. En la zona de Embajadores, grupos de manifestantes construyeron barricadas, provocando un gran colapso de tráfico. También se registraron enfrentamientos con la policía, y con grupos de extrema derecha. Los estudiantes, que intentaban llegar hasta el lugar donde habían disparado a los dos jóvenes, tuvieron que dispersarse porque la zona estaba bajo un fuerte resguardo policial. La jornada se saldó con 53 detenidos y varios heridos.

Todos los centros universitarios de la capital suspendieron las clases en señal de duelo, y la UAM y la UCM decretaron el cierre de los centros hasta el próximo lunes 17 de diciembre. A su vez, la Coordinadora de las tres universidades madrileñas convocó a una reunión urgente y a una posterior conferencia de prensa, mientras en varias Facultades se produjeron asambleas y actos de protesta. En la Complutense, un grupo de doscientos estudiantes se concentró ante el rectorado para exigir al Rector Ángel Vian que condenara de manera pública la muerte de los jóvenes (máxime, cuando uno era estudiante de esa Universidad), pero éste rechazó el diálogo.

La muerte de los dos jóvenes generó un gran sentimiento de solidaridad entre los estudiantes españoles, de manera que las manifestaciones y movilizaciones no se produjeron solamente en Madrid. En Barcelona, cinco mil estudiantes realizaron una manifestación que terminó con incidentes (y con la prohibición de convocar a nuevas manifestaciones), y diversas marchas y concentraciones se produjeron en Toledo, Oviedo, Murcia, Santiago de Compostela, Zaragoza, Granada, Bilbao y Pamplona.<sup>845</sup> Ante la oleada de movilización del 14 de diciembre, el Gobierno civil de Madrid decidió suspender todas las manifestaciones aprobadas para los próximos días, con el fin de evitar nuevos incidentes. Además, aseguró que la forma de actuar de algunos manifestantes, obedecía a “un plan perfectamente estudiado y desarrollado en la práctica en un dispositivo de coordinación y actuación simultáneas, típico de guerrilla urbana”.<sup>846</sup>

La situación provocada por la muerte de los dos estudiantes y las posteriores manifestaciones e incidentes generaron una sensación de caos que el periódico ABC intentó fomentar. Así, el 15 de diciembre titulaba en primera página: “Ofensiva desestabilizadora de la izquierda comunista”, asegurando que la pérdida de protagonismo del PCE a nivel político y sindical se veía contrarrestada por la actividad de los grupos de izquierda extraparlamentaria, que fomentaban la movilización social y

---

<sup>845</sup> *El País*, 15 de Diciembre de 1979. Hemeroteca Digital El País.

<sup>846</sup> *Ibid.*

las reivindicaciones autonómicas y estudiantiles.<sup>847</sup> Además, ABC dedicó bastante tinta a negar la condición de estudiantes de los dos jóvenes asesinados y a tratar de hacerlos aparecer como agitadores y delincuentes. Nuevamente, el gobierno y los sectores conservadores intentaban reducir el problema estudiantil a los desórdenes callejeros y a los enfrentamientos con la policía, desviando la atención del verdadero problema: el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, que parecía no dejar conforme a nadie, salvo a sus redactores.

Desde *Mundo Obrero* se realizaron duras críticas al actuar de la policía y del gobierno en las manifestaciones del 13 y 14 de diciembre, quienes incluso habrían intentado aplicar la Ley Antiterrorista contra algunos miembros de la izquierda extraparlamentaria.<sup>848</sup> Sin embargo, lo que más destaca la publicación es el resurgimiento del ME y cómo éste había sorprendido incluso a los profesores, que luego de años de apatía e indiferencia, veían cómo las asambleas se llenaban de estudiantes interesados en discutir y derribar el proyecto de ley.

Cabe destacar también que en esta nueva etapa del ME la discusión en torno a las estructuras de movilización fue bastante escasa. Las movilizaciones y sus consecuencias impusieron la urgencia de contar con una organización a nivel de distrito, que para el caso de Madrid fue la Coordinadora de las tres universidades madrileñas, que luego se replicaría a nivel estatal. En esta instancia participaban los representantes elegidos en las distintas facultades, el problema era que el grado de representatividad alcanzado variaba mucho entre los centros, porque si bien en algunos los delegados se elegían con quórum amplio, en otros apenas se alcanzaba el necesario para legitimar la elección. Pese a esto, la estructura de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios (también se la llama de Universidad) fue bastante funcional a las necesidades del ME, y se replicó a nivel de Enseñanza Media y Formación Profesional. Así, ambas coordinadoras se propusieron trabajar unidas por las reivindicaciones estudiantiles, “contra una Ley que pretende convertir la Universidad en coto para ricos, gestionado al margen de los intereses populares por el cuerpo profesional más elitista y alejado de ellos”.<sup>849</sup> Según *Mundo Obrero*, el ME estaba reviviendo el espíritu de los mejores años de la lucha contra el franquismo, abarrotando asambleas y lanzándose a la calle,

---

<sup>847</sup> ABC, 15 de Diciembre de 1979. BNE.

<sup>848</sup> *Mundo Obrero*, núm. 54, 20 al 26 de Diciembre de 1979, p. 14. BNE. Esta información no aparece en otros periódicos, por ejemplo, El País.

<sup>849</sup> Ibid.



desmintiendo así a quienes habían anunciado la muerte del movimiento estudiantil. Y esto se debía a la adopción de nuevos objetivos y reivindicaciones, como era la lucha contra la LAU.

Con todo, desde el periódico del PCE se lanzaron también algunas advertencias al movimiento estudiantil, ante el temor de que éste se agotara en las acciones “espectaculares” y espontáneas (dirigidas por el PTE, según la publicación) y terminara por diluirse, sin cumplir con sus objetivos. Según los estudiantes comunistas, era imprescindible vincular al ME con estructuras representativas de los partidos de izquierda y de la clase obrera.<sup>850</sup> En este sentido, se vislumbra la ya clásica pugna entre los grupos políticos que actuaban en la universidad, con respecto a las estructuras de movilización, aunque en este momento, la discusión no llegará más allá.

En los días posteriores al entierro de los jóvenes – realizado el 15 de diciembre sin incidentes –, los sindicatos del sector de la enseñanza de Madrid, FETE-UGT y CC.OO. convocaron a un paro en todos los centros docentes, para el 18 de diciembre. Por su parte, la Coordinadora Estatal de Universidades, compuesta por más de trescientos delegados de todas las universidades españolas, se reunió en Valencia para acordar nuevas formas de protesta contra la LAU. En la reunión se decidió convocar a una jornada de lucha para los días 18, 19 y 20 de diciembre y exigir la retirada de la LAU. Además, convocaron a una huelga general para la semana del 28 de enero al 3 de febrero.<sup>851</sup>

El 17 de diciembre las universidades madrileñas reabrieron sus puertas, pero la tónica fue el absentismo generalizado, y el 18, se realizó una jornada de luto, en la que más de dos mil estudiantes – en su mayoría de la Complutense – marcharon en silencio y pacíficamente hacia la Ronda de Valencia, donde habían sido asesinados Emilio Martínez Menéndez y José Luis Montañés Gil.<sup>852</sup> Además de este tipo de movilizaciones, las coordinadoras de Universidades y de Enseñanza Media y Formación Profesional, dedicaron una buena parte de sus esfuerzos a conseguir la libertad de los estudiantes detenidos en las manifestaciones de los días 13 y 14 de diciembre, que sumaban más de 60. Las vacaciones de Navidad ayudaron a calmar un poco el ambiente. Sin embargo, fueron una tregua corta, ya que en enero de 1980 los estudiantes continuaban en pie de guerra.

---

<sup>850</sup> Ibid.

<sup>851</sup> *El País*, 18 de Diciembre de 1979. Hemeroteca Digital El País.

<sup>852</sup> *El País*, 19 de Diciembre de 1979. Hemeroteca Digital El País.

## **V. Las Coordinadoras al frente de la movilización: Enero de 1980**

El regreso a clases estuvo marcado por los preparativos de la huelga general convocada por la Coordinadora de Estudiantes Universitarios para la semana del 28 de enero al 3 de febrero. Además, el PCE, PSOE, UGT y CC.OO convocaron a una manifestación general en contra de la política educativa del gobierno, para el 17 de enero. Así, parecía que el año que estaba comenzando no iba a ser más tranquilo que el pasado mes de diciembre. Sin embargo, desde el mismo sector estudiantil comenzaron a manifestarse voces en contra de la huelga general. Así, el 18 de enero, ABC publicó una carta firmada por cientos de estudiantes de las tres universidades de Madrid – según el periódico –, en la cual se manifestaban en contra de la huelga general y denunciaban que los representantes estudiantiles se habían extralimitado en sus funciones, ya que la huelga había sido decidida “sin más apoyo que la decisión tomaba en asambleas tumultarias que la mayoría consideramos inadecuadas”.<sup>853</sup> Independientemente de cuántas personas hayan firmado efectivamente esta carta, es interesante constatar que el asunto de la representatividad y de la organización del ME seguía siendo una zona gris, aunque podemos apreciar un esfuerzo constante de parte del movimiento por vincular a las diferentes organizaciones estudiantiles de los distritos españoles en una estructura estatal.

De esta manera, el fin de semana del 19 y 20 de enero, se reunió la Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios, compuesta por 500 delegados elegidos en los 260 centros de siete provincias de España, para analizar los puntos fundamentales en los que debiera basarse el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, además de elaborar las bases para la consolidación de la propia Coordinadora Estatal. Al final de esta reunión se aprobó un documento en el cual se exigía la retirada de las Cortes del proyecto de LAU; se hacía un llamado a los parlamentarios de izquierda – básicamente del PCE y del PSOE – a que se retiraran de la comisión si se llegara a discutir la LAU; se mantenía la huelga general del 28 al 3 de febrero y se proponía hacerla extensiva a todos los ámbitos de la enseñanza; se convocaba a manifestaciones para el 31 de enero; se convocaba a una marcha de estudiantes universitarios en Madrid; y finalmente se

---

<sup>853</sup> ABC, 18 de Diciembre de 1979. BNE.

convocaba a una próxima reunión de la Coordinadora Estatal para los días 9 y 19 de febrero.<sup>854</sup>

En esta reunión, al igual que en la celebrada en Valencia a mediados de diciembre de 1979 se discutieron, además de las acciones a seguir, otros puntos clave, tendientes a reforzar la organización de los estudiantes y a definir ciertos objetivos comunes para el ME. En este sentido, los representantes eran conscientes de que en la medida en que mantuvieran un conjunto de reivindicaciones que fueran comunes a y específicas de la masa estudiantil, sería más fácil impulsar y mantener las movilizaciones en la universidad. Por esta razón, el documento elaborado por la Coordinadora Estatal hacía referencia la universidad que el ME quería, y los elementos que debían aparecer en la reforma de la educación superior. Entre ellos, los más destacados eran:

- 1.- Concepción de la universidad como servicio público, “íntegramente garantizado por el Estado, a los intereses populares, donde no rija la selectividad clasista”.<sup>855</sup>
- 2.- Universidad científica, “que ligue en forma efectiva la actividad académica, docente e investigadora a los intereses populares, donde se imparta una enseñanza cuyo contenido esté abierto de forma crítica a la realidad social”.<sup>856</sup>
- 3.- “Universidad democrática y autónoma, gestionada en todos los planos de su actividad por estudiantes y profesores. Que responda a la problemática social, económica y cultural de la nacionalidad y la región”.<sup>857</sup>

En el documento se explicitaba también el rechazo a las universidades privadas y a cualquier tipo de privatización de funciones o servicios en la universidad, se rechazaba la selectividad, la elevación de las tasas y se insistía en la gestión democrática. Para los estudiantes de la Coordinadora, la democratización de la sociedad y de la universidad eran dos partes de un mismo proceso, tendiente a eliminar aquellas trabas impuestas por el franquismo a las libertades personales. “Somos conscientes de la íntima relación entre la crisis de la universidad y la del vigente sistema social. Crisis que la clase dominante quiere resolver a costa del pueblo, restringiendo la democracia y aumentando su control sobre el conjunto de la sociedad”.<sup>858</sup>

---

<sup>854</sup> “Se ha celebrado la II RGU”, sin fecha específica pero redactado entre el 20 y el 28 de enero de 1979, p. 1 [www. http://www.pt-e-jgre.com/archivo/archivo.htm](http://www.pt-e-jgre.com/archivo/archivo.htm).

<sup>855</sup> Ibid.

<sup>856</sup> Ibid.

<sup>857</sup> Ibid.

<sup>858</sup> Ibid.

En este sentido, uno de los elementos que más rechazo provocaba era que la elaboración y redacción del proyecto de LAU se había hecho de espaldas a la comunidad universitaria, sin consultar a los sectores implicados, dejando de manifiesto la poca importancia concedida por el gobierno, no sólo a los estudiantes sino también a los PNN y al personal no docente. Para el ME, esto era inaceptable, de ahí la justicia de la exigencia de retirada del proyecto de las Cortes y el emplazamiento a los parlamentarios socialistas y comunistas a que se negaran a discutirlo: “Los estudiantes reivindicamos un nuevo proceso de elaboración de la LAU, que cuente con la participación de los universitarios; y este proceso es únicamente posible mediante la adopción de esta postura, impidiendo que se discuta en el Parlamento una ley en la que no hemos tenido arte ni parte”.<sup>859</sup>

Dentro de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios, los militantes del *Partido de los Trabajadores* tenían bastante fuerza, ciertamente, más que los militantes comunistas o socialistas. Este partido se había creado en julio de 1979 de la fusión del PTE y ORT, y no tenía parlamentarios. En este sentido, el emplazamiento a los parlamentarios de izquierda conllevaba un dejo de crítica a los partidos de oposición al franquismo, quienes se habrían dejado atrapar en las redes de la política de acuerdos, dando la espalda a las reivindicaciones más radicales. Para el *Partido de los Trabajadores*, que se consideraba a sí mismo de izquierda radical, la postura negociadora de los parlamentarios del PCE y PSOE era una traición a sus orígenes.

“¿Cuál es el camino a seguir, Sres. Parlamentarios de izquierda? No es rentable (al menos para el movimiento universitario) ningún intento “realista” de los parlamentarios del PSOE y el PCE de sacarle un poco de brillo a tanto barro como trae esta ley mediante la “práctica enmendante” (¿pero es acaso “enmendable” esta ley?) excepto para la UCD que aceptará cuantas enmiendas le venga en gana para dotar a su proyecto de una credibilidad de la que carece en estos momentos”.<sup>860</sup>

Los estudiantes del *Partido de los Trabajadores* temían que los partidos de izquierda parlamentaria intentaran capitalizar lo hecho por el movimiento estudiantil hasta ese momento, y que se transformaran en una suerte de paladines de la enmienda, para tratar de legitimar una ley que era, para ellos, inaceptable.

“Plantear la exigencia de la retirada de las Cortes del proyecto, es la única posición que permite convertir en principal protagonista de la lucha contra

---

<sup>859</sup> “¿Por qué pedimos la retirada de la LAU?”, Comité de Universidad Partido de los Trabajadores, 25 de enero de 1980, p. 1, <http://www.ptre-jgre.com/archivo/archivo.htm>.

<sup>860</sup> Ibid.

la LAU al movimiento universitario. Porque sitúa el eje de la lucha en la fuerza de éste y no es un estéril juego de enmiendas cuyo resultado sólo puede ser taparle las vergüenzas a esta ley, avalar implícitamente su proceso de elaboración al margen de los implicados e impedir que aparezca este Gobierno ante la comunidad universitaria y el conjunto del pueblo, con una ley reaccionaria ampliamente rechazada y denostada en sus exclusivas manos”.<sup>861</sup>

Durante los últimos días de enero, la Coordinadora de Estudiantes Universitarios y la de Educación Media y Formación Profesional se dedicaron a preparar las jornadas de huelga que comenzaban el 28. Esta semana de movilizaciones era fundamental para el ME, ya que vendría a probar su fuerza ante la opinión pública. Además, los estudiantes eran conscientes de la importancia de socializar sus reivindicaciones y objetivos, para obtener el apoyo de la ciudadanía. “La lucha del movimiento estudiantil adquiere en estos momentos una trascendencia que desborda el marco universitario. De todas las leyes reaccionarias del Gobierno, el eslabón más débil de la cadena quizás sea la LAU. Conseguir la retirada del proyecto de las Cortes es posible. Que los estudiantes rompamos la política legislativa del Gobierno tiene una gran significación para el resto de los sectores sociales”.<sup>862</sup> En este contexto, los estudiantes buscaron vincularse con los PNN, con las asociaciones de barrios y, por supuesto, con los sindicatos para ampliar la discusión respecto de la LAU, de la situación universitaria y de la sociedad española en general.

Ahora bien, esta necesidad de vinculación con otros movimientos sociales obedecía también a una estrategia de los partidos de izquierda, tanto parlamentaria como extraparlamentaria. Las movilizaciones en contra del proyecto de LAU se produjeron de forma paralela a movilizaciones en torno a otros proyectos planteados por el gobierno, tanto del área de la enseñanza (como el Estatuto de Centros Docentes) como de otras áreas (el Estatuto de los Trabajadores), lo que hizo que distintos sectores sociales solidarizasen en sus luchas. De esta forma, para apoyar la lucha contra la LAU, los colectivos de profesores de Enseñanza Media y Formación Profesional de CC.OO y FETE-UGT también convocaron a una jornada de huelga para el 30 de enero, en rechazo al Estatuto de Centros Docentes, que se estaba discutiendo en las Cortes, como parte de la reforma educativa planteada por UCD.

---

<sup>861</sup> Ibid.

<sup>862</sup> “Preparar la Huelga general”, Comité de Universidad Partido de los Trabajadores, 25 de enero de 1980, p. 1, <http://www.pt-jgre.com/archivo/archivo.htm>.

En una clara señal de solidaridad en las luchas contra el Gobierno, las Coordinadoras de Estudiantes Universitarios y de Enseñanza Media y Formación Profesional hicieron un llamado a los alumnos para que participaran en la manifestación convocada para el día 30. Y además, convocaron a una manifestación para el 31 de enero, a la que se adhirieron todos los partidos de izquierda extraparlamentaria. De esta manera, hacia fines de enero de 1980, el panorama de movilizaciones sociales de todo tipo era bastante complejo.

El 28 de enero, día de inicio de la huelga general convocada por la Coordinadora de Estudiantes Universitarios, se produjo una la paralización total de actividades en las tres universidades madrileñas, así como en los institutos y centros de Formación Profesional de la capital. Según el diario *El País*, 38 Institutos y 23 Centros de Formación Profesional, amanecieron paralizados. En algunas Facultades se celebraron asambleas y actos culturales, sin que se produjeran incidentes. Ese mismo día por la noche se efectuó un debate en TVE entre el Ministro González Seara y diputados del PSUC, UCD, PSOE y CD, en torno al cuestionado proyecto de Ley.<sup>863</sup> El 29 se desarrolló de manera similar al día anterior, con las universidades madrileñas casi completamente paralizadas, aunque la participación en los actos culturales organizados por los representantes fue escasa. Y finalmente, el 30 de enero se llevó a cabo la huelga convocada por el sector de enseñanza de CC.OO. y FETE-UGT, que tuvo una repercusión bastante amplia. Aunque el Ministerio de Educación cifró en 12% la participación de los profesores estatales de Educación General Básica, fuentes ligadas a los sindicatos convocantes señalaron que la huelga había sido seguida por el 60% de los maestros estatales y el 85% de los profesores de Enseñanza Media.<sup>864</sup>

El 31 de enero se realizó la manifestación convocada por la Coordinadora de Estudiantes de Universidad y la de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional. Según *El País*, cerca de veinte mil personas, en su gran mayoría estudiantes, se manifestaron pacíficamente entre la Plaza de Castilla y la Glorieta de Cuatro Caminos, bajo consignas como “Una enseñanza popular y gratuita”, “Gestión democrática en los centros”, “PSOE, PCE. No pacteis”.<sup>865</sup>

---

<sup>863</sup> *El País*, 30 de Enero de 1980. Hemeroteca Digital El País. El periódico recoge la acusación de parlamentarios de Convergencia Democrática de Cataluña y del PNV de haber sido marginados del debate televisado sobre la LAU, poniendo de manifiesto la tensión existente en ese momento, entre las competencias a nivel estatal y las autonómicas.

<sup>864</sup> Ibid.

<sup>865</sup> Ibid.

Sin embargo, hacia el final de la manifestación efectivos de la policía cargaron contra un grupo de estudiantes, que se encontraba aún en la Glorieta. Los manifestantes se refugiaron en el Metro y en un bar cercano, lugares que fueron desalojados por la policía, afectando así a personas ajenas a la movilización. A raíz de la acción de la policía, grupos de jóvenes protagonizaron pequeños incidentes en diversas zonas de Madrid, provocando cortes de tráfico o pequeñas barricadas con papeleras, bancos y bolsas de basura. Finalmente, la policía detuvo al menos a veinte personas.<sup>866</sup>

También hubo movilizaciones contra el proyecto de LAU en Barcelona (30.000 personas, según los organizadores); Granada (15.000 personas), donde incluso se realizó un simulacro de entierro del proyecto, con velas y capirotos incluidos; Salamanca (4.000 personas); Málaga, Pamplona y Bilbao.<sup>867</sup> Esta fuerte ofensiva contra la política educativa de UCD, tanto de parte de los estudiantes como de profesores y maestros, fue achacada, según el diputado de Unión Democrática de Cataluña, Antón Cañellas, a la instrumentalización que los partidos de izquierda, especialmente extraparlamentaria, harían de los Institutos y Facultades, retomando el típico discurso utilizado en el franquismo para intentar desacreditar al ME, tachándolo de politizado y radical.<sup>868</sup>

Y en parte, Cañellas tenía razón al decir que el movimiento estudiantil estaba politizado, pero no en cuanto a una posible instrumentalización de la izquierda sino más bien en el sentido de que los estudiantes querían cambios a nivel general, no sólo en el ámbito educativo. Si bien las movilizaciones estudiantiles tenían como objetivo central derribar el proyecto de LAU, también hacían mención a otros temas y proyectos que se estaban negociando en el parlamento, como por ejemplo el Estatuto de Centros Docentes, el Estatuto de los Trabajadores y la compleja discusión en torno a las autonomías y las nacionalidades. La Constitución de 1978 garantizaba el derecho de autonomía de las nacionalidades que conforman España, pero a la altura de 1980, sólo Cataluña y el País Vasco habían logrado aprobar – no sin dificultad – sus Estatutos de Autonomía, mientras otras regiones como Andalucía, Galicia, Valencia, Asturias, estaban en proceso de negociación. En este sentido, los estudiantes también se hacían cargo de esta peculiar y compleja situación política del Estado, por lo que durante la huelga general dedicaron un día completo (1 de febrero) al debate sobre las autonomías, sobre la necesidad de incorporar las lenguas de las distintas nacionalidades y sobre las

---

<sup>866</sup> *El País*, 1 de Febrero de 1980. Hemeroteca Digital El País.

<sup>867</sup> Ibid.

<sup>868</sup> *ABC*, 1 de Febrero de 1980. BNE.

escasas competencias que el proyecto de LAU entregaba a las comunidades autónomas respecto de la educación.<sup>869</sup> En este sentido, el ME sí estaba politizado, en tanto planteaba reformas que afectaban a diversos ámbitos de la sociedad española.

Ahora bien, además de la presión social que estaba ejerciendo el ME, los estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional y diversos grupos profesionales del sector de la enseñanza, el proyecto de LAU sufrió una dura derrota en las Cortes. El 1 de febrero se presentaron seis enmiendas a la totalidad y varios cientos de enmiendas parciales. Obviamente, los parlamentarios comunistas y socialistas rechazaron el proyecto, y también lo hicieron los diputados de Coalición Democrática, Minoría Catalana y de Andalucía. Además, parlamentarios de UCD, a título personal, realizaron más de cien enmiendas al articulado del proyecto.<sup>870</sup> Las críticas de los parlamentarios de izquierda abarcaban un amplio espectro, pero básicamente, rechazaban el proyecto por considerarlo un paso atrás con respecto a la universidad que se quería para España. Los parlamentarios socialistas consideraron que el proyecto era más regresivo, en algunos aspectos, que la Ley General de Educación de 1970, por lo que, junto a los parlamentarios del PCE, presentaron un proyecto alternativo, que recogía algunos de los objetivos del ME, como por ejemplo, la universidad como un servicio público, en el cual existiera presencia de todos los sectores sociales, tanto en las aulas como en el gobierno. Estaba bastante claro, a pocos meses de haberse presentado el proyecto de LAU en las Cortes, que éste contaba con un amplio rechazo, tanto a nivel de movimientos sociales como en el Parlamento.

En medio de esta compleja situación, el 1 de febrero la joven Yolanda González Martínez fue asesinada por el llamado *Batallón Vasco Español* (posteriormente se sabría que había miembros de Fuerza Nueva implicados en el asesinato), supuestamente, en represalia por el atentado realizado por ETA contra seis guardias civiles en el País Vasco, el 31 de enero. Yolanda González era miembro de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional y había participado en las manifestaciones en contra del proyecto de Ley de Autonomía Universitaria. Con todo, según la prensa (haciendo eco de la investigación de la policía) el asesinato de la joven no tenía ninguna relación con el movimiento estudiantil. Sus asesinos creyeron que formaba parte de un comando de ETA – lo cual fue desmentido

---

<sup>869</sup> *El País*, 2 de Febrero de 1980. Hemeroteca Digital El País.

<sup>870</sup> *Ibid.*



por las fuentes policiales – y por eso la mataron.<sup>871</sup> Yolanda González Martín tenía 19 años, estudiaba electrónica en un Centro de Formación Profesional de Vallecas y militaba en el *Partido Socialista de los Trabajadores*, formado por militantes de la *Liga Comunista Revolucionaria* escindidos en noviembre de 1979. La muerte de Yolanda encendió aún más los ánimos de los estudiantes y alertó a la ciudadanía en general, por lo que en los días siguientes se realizaron varios actos de protesta contra la violencia y el terrorismo.

El 4 de febrero se realizó una multitudinaria manifestación en contra de los últimos atentados perpetrados por grupos de ultraderecha. Varios miles de personas se reunieron en la plaza Tirso de Molina, convocados por el Club de Amigos de la Unesco, que el 26 de enero pasados había sido víctima de un atentado, resultando dos de sus miembros heridos de gravedad. Luego, los estudiantes que participaron en esa concentración se dirigieron en manifestación por Atocha hasta la Ronda de Valencia, lugar donde habían sido asesinados los dos jóvenes en diciembre del 79, exigiendo justicia. Para el día 5, las coordinadoras de Estudiantes Universitarios y de Enseñanza Media y Formación Profesional convocaron a una nueva huelga general del sector de la enseñanza, con el fin de continuar las movilizaciones contra los proyectos de Ley de Autonomía Universitaria, de Financiación de la enseñanza y del Estatuto de Centros.<sup>872</sup>

El ambiente político se tensó bastante luego del asesinato de Yolanda González. A las ya habituales críticas al Gobierno, relacionadas con el proyecto de LAU, se sumaban ahora otras que lo culpaban de permitir y amparar el terrorismo de extrema derecha. Particularmente duras fueron las críticas del *Partido de los Trabajadores*, que en un comunicado, junto con apoyar la huelga general de la enseñanza convocada para el 5 de febrero, acusaba al Gobierno de generar una situación social favorable a la acción de las bandas terroristas de extrema derecha. “Su ofensiva económica y legislativa contra el pueblo; su empeño en mantener proyectos de ley como los relativos a la enseñanza que se colocan frontalmente ante los intereses populares y el movimiento de masas; su intento de convertir al Parlamento en un foro inútil; el cerrojazo a las autonomías; los recortes y restricciones a los derechos democráticos; la prohibición y represión brutal de manifestaciones; la tolerancia con la acción de los fascistas, tanto en la calle como incluso en el seno del aparato estatal... han creado condiciones para que florezcan actuaciones terroristas de diferente tipo. El Gobierno es, pues responsable de

---

<sup>871</sup> *El País*, 3 de Febrero de 1980. Hemeroteca Digital El País.

<sup>872</sup> *El País*, 5 de Febrero de 1980. Hemeroteca Digital El País.

haber generado una dinámica que sirve a los fascistas para sus objetivos y que amenaza la democracia en nuestro país”.<sup>873</sup> Además de su crítica al Gobierno, el *Partido de los Trabajadores* aprovechaba también de pasar cuentas a los partidos de la izquierda parlamentaria, a quienes acusaba de tener una actitud de inhibición en lugar de censurar el comportamiento antidemocrático del Gobierno.<sup>874</sup>

## **VI. La movilización decae: Febrero de 1980.**

Ahora bien, la muerte de Yolanda González fue un punto de inflexión para el ME en varios sentidos. En primer lugar, la movilización tendió a decaer después del 5 de febrero, posiblemente por el temor provocado por el asesinato de la joven, pero sobre todo por la aparición de una percepción de fracaso en los objetivos planteados. Pese al enorme esfuerzo hecho para movilizar a la masa estudiantil, y pese al apoyo de diversos sectores de la enseñanza, el proyecto de LAU seguía discutiéndose en las Cortes (si bien, era atacado desde todas partes). En segundo lugar, la Coordinadora de Estudiantes Universitarios ya empezaba a mostrar fracturas en su interior y el ME se enfrentaba a la típica disyuntiva entre la vanguardia y las masas. De esta manera, el balance de la semana de huelga general fue dispar. Según la Comisión de Universidad del *Partido de los Trabajadores*, la huelga había sido positiva porque había ayudado a consolidar a un ME de masas a nivel estatal, con objetivos y formas de organización comunes y democráticas.<sup>875</sup> Pero también había dejado en evidencia fracturas internas que afectaban al movimiento.

Lo más importante, para el *Partido de los Trabajadores*, era que la presencia política y social del movimiento estudiantil había desafiado la forma de hacer política, había sacado la discusión del Parlamento y los ministerios a la calle, llegando a involucrar a las masas en ella.<sup>876</sup> Para el *Partido de los Trabajadores*, que no tenía representación parlamentaria y, por lo tanto, no tenía participación política institucional a nivel estatal<sup>877</sup>, era muy importante tener una presencia, lo más amplia posible, en los

---

<sup>873</sup> “Martes, día 5”, Comité Ejecutivo de Madrid del Partido de los Trabajadores de España (ORT-PTE), Madrid, 3 de Febrero de 1980, p. 1 <http://www.ptre-jgre.com/archivo/archivo.htm>.

<sup>874</sup> Ibid.

<sup>875</sup> Miguel Herrera, “Balance General. Huelga”, Secretario de la Comisión de Universidad del Comité Central del Partido de los Trabajadores (ORT-PTE), 13 de Febrero de 1980, p. 1. <http://www.ptre-jgre.com/archivo/archivo.htm>.

<sup>876</sup> Ibid.

<sup>877</sup> PTE y ORT tenían concejales en varios ayuntamientos, por lo que su participación local era mayor.

movimientos sociales. Por eso mantuvieron su participación en el ME y criticaron a los partidos que decidieron “abandonarlo” para dedicarse a la política institucional. El emplazamiento que hicieron a los diputados PCE y PSOE para que se retiraran del Congreso cuando se discutiera la ley era una forma de ponerlos contra la espada y la pared, en el sentido de que tenían que elegir entre apoyar a las masas estudiantiles o participar en una negociación con el Gobierno, que daba la espalda a la ciudadanía.

Con respecto al ME, el *Partido de los Trabajadores* hacía un balance positivo, ya que se había logrado una amplia participación en la huelga, que venía dada por la aceptación de los principales objetivos planteados y por la unidad de los estudiantes universitarios y los de Enseñanza Media. Además, había vuelto a surgir un grupo de estudiantes de vanguardia, politizados y militantes, sobre los que podía descansar la organización del movimiento. El problema era que durante los días de huelga, los centros habían estado prácticamente vacíos, aunque muchos estudiantes participaban en las manifestaciones y marchas. Parecía que la masa estudiantil estaba dispuesta a jugarse el pellejo en la calle y a correr delante de la policía, pero no a participar de asambleas, actos culturales o instancias de debate político. En este sentido, la Coordinadora de Estudiantes Universitarios se había alejado de las masas, con lo que se corría el peligro de que el ME quedara compuesto sólo por los sectores políticamente más avanzados, mientras el resto de los estudiantes volvía a la indiferencia y la apatía.<sup>878</sup> Los estudiantes del *Partido de los Trabajadores* eran conscientes de que el ME estaba en un momento complejo, en el cual era necesario “reforzar la conciencia de las masas en sus objetivos y neutralizar los peligros de la descomposición y desmoralización en que está sumido un amplio sector, así como neutralizar también las posiciones del PCE”.<sup>879</sup> Para ello, era imprescindible que la Coordinadora iniciara un amplio debate que incluyera a las masas estudiantiles y que los sectores más avanzados generaran iniciativas concretas para conseguir los objetivos.

Por su parte, el PCE también era consciente del momento que estaba viviendo el ME, por lo que desde *Mundo Obrero* abogó por la organización del movimiento con formas más representativas y democráticas, “evitando vanguardismos y tomas de decisiones no consultadas en los centros que separan a la mayoría de los estudiantes de la participación del movimiento”.<sup>880</sup> De esta manera, el ME conseguiría un carácter más

---

<sup>878</sup> Ibid.

<sup>879</sup> Ibid., p. 3.

<sup>880</sup> *Mundo Obrero*, núm. 63, 22 al 28 de Febrero de 1980, p. 20, BNE.

ofensivo, con iniciativas y objetivos claros, y “con un programa claro e inscrito en la lucha general por la transformación progresista y democrática del aparato educativo, en coordinación con todos los sectores interesados en ello: profesores, padres, sindicatos, partidos progresistas, etcétera”.<sup>881</sup> El PCE recelaba del poder que tenía el *Partido de los Trabajadores* en el ME, y temía que la radicalización excesiva de éste pudiera ser perjudicial. Por esta razón, proponía que el movimiento se organizara de manera más representativa, en donde las vanguardias estuvieran controladas por las masas, de manera que no se produjera el tan criticado vanguardismo. El problema de la organización aparecía nuevamente como la principal dificultad a vencer para conseguir la consolidación del ME. Sin embargo, la competencia entre PCE y del *Partido de los Trabajadores*, igual como antes había sido entre el PCE y el PTE (basta recordar los intentos fallidos de construir un Sindicato Democrático en los cursos 75-76 y 76-77), no ayudó en nada a articular un movimiento estudiantil fuerte y organizado.

Como hemos señalado anteriormente, después del asesinato de Yolanda González las movilizaciones decayeron, y aunque a la larga la LAU no fue aprobada (de hecho, pasó por innumerables discusiones, enmiendas, correcciones, hasta que en 1982 fue retirada de las Cortes por el Ministro Federico Mayor Zaragoza), su derrota se debió en buena parte, a la oposición legislativa que enfrentó, no solo de los partidos de izquierda sino también de centro y de la propia UCD. Así, la LAU desapareció casi al mismo tiempo que Unión de Centro Democrático, y en 1983, con el PSOE ya en el poder, se redactó y aprobó la Ley de Reforma Universitaria (publicada en el BOE del 15 de agosto de 1983), cuyo título primero otorgaba a la universidad la categoría de servicio público, una reivindicación largamente esperada por los estudiantes.

En este sentido, cabe preguntarse si las movilizaciones de diciembre de 1979 y enero de 1980 tuvieron alguna utilidad. Lo cierto es que sí la tuvieron y mucha. La movilización estudiantil del curso 79-80 fue fundamental para articular la oposición social a la LAU y para sacar la discusión de la Cortes y trasladarla a la calle, a las aulas y a los campus universitarios. De alguna manera, las movilizaciones de fines de 1979 fueron un llamado de atención a la clase política en general, ocupada de discutir las leyes entre las paredes del Parlamento, sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Ciudadanía que, por lo demás, era muy consciente de las libertades y derechos políticos que poseía, luego de luchar durante años contra el régimen franquista. Y que tenía una propuesta

---

<sup>881</sup> Ibid.

para la universidad, y para la sociedad española, que no se veía reflejada en la actividad legislativa de las Cortes, ni en el gobierno de UCD. En este sentido, la movilización estudiantil, en conjunto con la de otros sectores sociales, colaboró en la disolución de UCD, porque como ya hemos señalado, la Coordinadora de Estudiantes Universitarios solidarizó con otros grupos sociales, como los sindicatos de trabajadores de la enseñanza y sindicatos en general, que también se estaban movilizandando en rechazo de la legislación del gobierno de UCD.

Con todo, sería ingenuo pensar que la oleada de movilización del curso 79-80 estuvo inspirada solamente por la lucha contra la LAU. La represión también jugó un papel importante en este escenario, y de hecho, las movilizaciones se radicalizan luego del asesinato de los dos jóvenes a manos de la policía, en diciembre de 1979. En este sentido, los estudiantes respondieron ante lo que consideraron que era una vuelta a las actitudes del régimen franquista, y que no estaban dispuestos a permitir. La lucha antirrepresiva siempre fue un elemento importante para el movimiento estudiantil, basta recordar las movilizaciones por la muerte de Enrique Ruano en enero de 1969; la lucha contra la policía que permanecía en los campus desde el Estado de Excepción decretado en 1969; la campaña en contra del Proceso de Burgos en 1970; el asesinato de Puig Antich en 1974; los últimos fusilados del franquismo en 1975; los jóvenes asesinados por la policía en 1979. De hecho, en algunos momentos esta lucha logró eclipsar otros objetivos del ME haciéndolo parecer un movimiento reactivo más que propositivo, cuyo único propósito parecía ser desafiar al régimen en el ámbito del orden público.

Como fuera, la lucha antirrepresiva fue consustancial al ME, tanto durante el franquismo como durante la transición a la democracia, porque los estudiantes se consideraban a sí mismos como agentes de cambio social, y en cuanto tales, planteaban desafíos permanentemente al gobierno de turno, y esos desafíos iban desde la ocupación de las calles a la creación de un discurso alternativo al oficial (tanto del franquismo como de los gobiernos de UCD), con una propuesta de universidad y sociedad distinta de la que se quería construir desde el poder político. En este sentido, la relación entre el ME y el gobierno siempre fue antagónica, independientemente de quién ejerciera el poder. Los estudiantes plantaron cara al franquismo y a los gobiernos de UCD, porque querían instaurar una universidad clasista (reflejo de una sociedad de las mismas características) pero también se enfrentarán al gobierno socialista en dos ocasiones: en el curso 1986-1987, contra la selectividad y por una educación pública de calidad, y en el curso 1993-1994, en contra del alza en las tasas académicas. En 2001-2002 desafiarán

al gobierno del Partido Popular y se manifestarán en contra de la Ley Orgánica de Universidades, y a partir del 2007, lo harán esporádicamente contra “Bolonia”, el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior acordado en esa ciudad italiana en junio de 1999.<sup>882</sup>

Lo interesante es que la noción de los estudiantes como agentes de cambio social sobrevivió a la represión utilizada por el franquismo, a la radicalización de los mismos grupos políticos, y a la difícil transición a la democracia. Obviamente, los contenidos del discurso del ME cambian desde 1969 hasta 1980, ya hemos comentado como se deja de hablar de la universidad popular para hablar de la universidad democrática, o cómo ya no se aboga por una revolución socialista sino por una sociedad democrática para España. Sin embargo, independientemente del contenido de dicho discurso, lo que nos interesa rescatar es la actitud del movimiento estudiantil español, que se plantea a sí mismo como una pieza fundamental de la sociedad, y como un grupo humano que estuvo dispuesto a poner en riesgo su vida por un conjunto de valores y creencias consideradas justas, y por transformar una sociedad considerada injusta. Y esta percepción no varió con la transición a la democracia. Si los estudiantes de la primera mitad de la década de los 70 lucharon por la democracia de España, los estudiantes de la segunda mitad lucharon por la profundización de la democratización.

---

<sup>882</sup> E. GONZÁLEZ CALLEJA: *Rebelión en las aulas...*, p. 375.

## CAPÍTULO 11

### MEMORIAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL ESPAÑOL: REGISTRO DE EXPERIENCIAS

Cuando estudiamos a los movimientos sociales, en nuestro caso al movimiento estudiantil, generalmente nos encontramos con una gran variedad de definiciones posibles, pero todas tienden a presentarnos a un grupo homogéneo que actúa en conjunto, y la realidad dista bastante de esto. Por eso, cuando hablamos de movimiento estudiantil, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿a todos los estudiantes? ¿solamente a los militantes? ¿a los que iban a las marchas y manifestaciones? Y en relación a su número, ¿eran la mayoría de los universitarios? ¿eran una minoría politizada? En este capítulo intentaremos dar algunas aproximaciones a la composición del movimiento estudiantil español, pero no nos centraremos en el análisis cuantitativo del ME, objetivo por lo demás imposible, sino más bien en el estudio cualitativo, es decir, en las dinámicas internas, en las formas de participación, en suma, en el clima que rodeaba y posibilitaba la movilización estudiantil.

Insistimos en la idea de que la descripción de este grupo social es compleja, toda vez que su composición es tremendamente heterogénea, tanto a nivel social como político y cultural. Hablar de movimiento estudiantil no es lo mismo que hablar de estudiantes universitarios, no todos ellos participaban del movimiento. Pero tampoco es hablar exclusivamente de estudiantes que militaban en las organizaciones políticas, porque ellos eran una minoría. Por cierto, era una minoría que se arriesgaba y que tomaba sobre sus hombros la pesada carga de movilizar a la masa estudiantil, muchas veces sin éxito.

Sin embargo, junto a ellos, estaban aquellos otros estudiantes, que, sin tener un compromiso político formal con alguna organización, fueron desarrollando un sentimiento de oposición y rechazo a la dictadura, y formaron parte, a veces ocasionalmente, a veces de manera constante, del movimiento estudiantil, apoyando sus reivindicaciones, participando en sus manifestaciones y marchas y, finalmente, aportando identidad al ME

Ahora bien, ¿cómo podemos analizar la relación entre la minoría militante y la masa participativa? ¿cómo se influían mutuamente? ¿cuándo los estudiantes comprometidos pero no militantes apoyaban a los militantes y cuándo no? Las fuentes escritas que existen sobre el movimiento estudiantil nos aportan muchísima información sobre las organizaciones políticas que operaban en la universidad franquista y sobre sus

militantes, pero no dicen prácticamente nada acerca de los “compañeros de viaje”. Nos dan información “oficial” sobre el ME pero no nos muestran su cotidianeidad ni la experiencia del estudiante que ingresa a la universidad y, a veces sin quererlo, se ve envuelto en un proceso de politización y movilización.

Para suplir este silencio, quisimos recurrir a la vivencia y la memoria de diversos entrevistados que participaron en el movimiento estudiantil español, entre los años 1968 y 1978, para, a través de sus recuerdos, intentar comprender mejor, no los hechos, sino más bien las dinámicas internas del movimiento estudiantil, sus modos de socialización y politización, sus formas de participación, etc. Consideramos que la experiencia es una herramienta fundamental que nos puede otorgar información que no encontramos en las fuentes escritas e institucionales, por eso nos interesa la experiencia en tanto vivencia de un período de tiempo específico. En palabras de Julio Aróstegui, nos interesa la experiencia como “encrucijada entre praxis, conciencia adquirida, temporalidad y, en última determinación, como fundamento del sentido histórico o *historicidad*”.<sup>883</sup>

Ahora bien, en el caso de nuestros entrevistados la experiencia asume la forma de recuerdo o memoria, ya que los interrogamos por su pasado de estudiantes. Y aquí nos enfrentamos con una dificultad propia de los trabajos de memoria, que dice relación con lo que se recuerda y lo que se olvida. Somos conscientes de que no todas las experiencias forman parte de la memoria de un sujeto, en este sentido, la memoria es parcial y siempre subjetiva. Uno elige qué recordar (y cómo recordarlo) y qué olvidar, como señala Aróstegui, “no hay memoria neutral o inocente (...) Por lo general, los sujetos y los grupos organizan su memoria como autojustificación y autoafirmación, pero no necesariamente como contribución histórica desinteresada”.<sup>884</sup> Además, toda memoria individual contiene también elementos de memoria colectiva o social, tal como afirma Maurice Halbwachs: “para evocar su pasado, el hombre necesita frecuentemente acudir a los recuerdos de los otros”.<sup>885</sup> Es decir, quien recuerda no recuerda solamente su experiencia sino también la experiencia de su grupo.

Teniendo en cuenta estos elementos, que podríamos llamar trampas o falencias de la memoria, no pretendemos utilizar la memoria de nuestros entrevistados para la

---

<sup>883</sup> Julio ARÓSTEGUI: *La Historia vivida. Sobre la Historia del Presente*. Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 147.

<sup>884</sup> J. ARÓSTEGUI, *La Historia vivida*, p. 164.

<sup>885</sup> Maurice HALBWACHS cfr. en *La Historia vivida*, p. 159.



reconstrucción de hechos, ni para contrastarla con acontecimientos descritos y analizados en los capítulos anteriores, sino más bien quisimos obtener de sus experiencias aquella información que no nos proporcionaban las fuentes escritas y que nos parecía útil para mostrar la diversidad y heterogeneidad del movimiento estudiantil. Les preguntamos por el ambiente que se vivía en las diversas Facultades, por las formas de participación del ME, por la relación entre los militantes y el resto de los estudiantes, por las temáticas que los movilizaban y, finalmente, por su apreciación personal de lo que fue el movimiento estudiantil. Algunas de las experiencias vividas son similares, pero hay también muchas diferencias entre los entrevistados, y esa diversidad está dada por los años en que estuvieron en la universidad, por la Facultad a la que ingresaron, por la vinculación con grupos políticos (la experiencia de un militante del PCE es muy distinta a la de un libertario, por ejemplo), por su origen familiar (aquellos que venían de familias adeptas al régimen se demoraron más en involucrarse en el ME que aquellos que venían de la oposición), en fin, por un cúmulo de elementos que hacen que cada individuo experimente la realidad desde distintos ángulos. Debido a esto, no es nuestra intención llegar a ningún tipo de conclusión general sobre lo que fue el ME a partir de estas diez entrevistas, sino simplemente queremos dar cuenta del ambiente que se vivía en la universidad española durante el tardofranquismo, partiendo de la base de que contamos con información fragmentada, selectiva y subjetiva, que es la que nos pueden otorgar nuestros entrevistados.

Todas las personas entrevistadas para esta investigación participaron, de uno u otro modo, en el ME, algunos militando en organizaciones políticas como el PCE, el PTE, ORT, LCR o grupos libertarios. Otros desde el círculo exterior, acompañando o apoyando las iniciativas que les tocó presenciar en su etapa universitaria. Les agradecemos enormemente a todos el tiempo concedido y la disposición a indagar en un pasado no tan lejano, pero ciertamente, complejo.

Todas las entrevistas se hicieron en la ciudad de Madrid, entre los meses de septiembre y octubre de 2009.

Los entrevistados son:

- Jaime Pastor, cientista político y sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó a la Facultad de Políticas de esa universidad en el curso 1964-1965. Militó en la LCR.
- Esperanza Yllán, profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de esa Universidad en el curso 1966-1967 y fue militante del PCE.
- Javier Maestro, profesor titular del Departamento de Historia de la Comunicación Social de la UCM. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense en el curso 1967-1968.
- Elena Hernández Sandoica, catedrática del departamento de Historia Contemporánea de la UCM. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de esa Universidad en el curso 1969-1970.
- César Sánchez Polonio, odontólogo. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UCM en el curso 1969-1970 y luego se cambió a Medicina en el curso 1971-1972. Pertenecía al sector moderado del movimiento libertario.
- Santos Ruesga, catedrático de Economía en la UAM. Ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense (en Somosaguas) el curso 1970-1971.
- José Porrero, ingeniero. Ingresó a la Facultad de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid en el curso 1973-1974. Militó en el PTE.
- Luis Enrique Otero Carvajal, profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM. Ingresó a la Facultad de Medicina de la UCM en el curso 1974-1975 y posteriormente se transfirió a la Facultad de Filosofía y Letras.
- Carlos Taibo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UCM en el curso 1974-1975. Participaba en el grupo libertario.
- Rafael Cruz, profesor titular de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense. Ingresó a la Facultad Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma en el curso 1975-1976. Militó en la ORT.

## **I. Cuándo y donde: cada Facultad es un mundo.**

Un primer elemento que hay que tener en cuenta es que cada estudiante vive la movilización universitaria de distintas maneras, dependiendo de varios factores. En primer lugar, del año de ingreso a la universidad: no era lo mismo ser estudiante en 1968-1969 que en 1973-1974, los niveles de movilización eran distintos, las organizaciones políticas y su protagonismo también lo eran y, por cierto, las reivindicaciones también iban variando. Así, por ejemplo, aquellos estudiantes que estaban en la universidad en el momento álgido de 1968-1969, se encontraron con una fuerte oleada de movilización, la consecuente represión y posterior radicalización del ME

Según la experiencia de Esperanza Yllán, que ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en 1966-1967, el movimiento estudiantil de esos años eran tremendamente diverso, estaba compuesto por católicos, progresistas, cristianos de base, trotskistas, comunistas, etc., que luchaban contra el SEU y por un sindicato democrático, que finalmente consiguieron en 1967. Pero también recuerda la represión a la que era sometido el ME la cual se incrementó considerablemente a partir de 1969:

“Y te puedo contar cosas terroríficas, como cuando entró la policía a la universidad, entrabas a los servicios y te podías encontrar a la policía dentro. Eso fue a partir del 69, después de lo de Enrique Ruano, y el asalto al rectorado en Barcelona. Y todo eso provocó una cerrazón mucho mayor de las fuerzas del orden, que incluso entraron en la universidad. Porque, hasta entonces, estaban en el campus, los caballos, los destacamentos, cuando había manifestaciones... pero es que ya luego se dio un paso más, al entrar en la universidad. (...) Lo que pasa es que claro, había mucha complicidad de las autoridades, de los catedráticos, de los rectores. Muchos habían sido, y eran franquistas inquebrantables, de adhesión inquebrantable”.<sup>886</sup>

La experiencia de Elena Hernández Sandoica refuerza esta idea. Ella ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en el complejo año de 1969 y recuerda:

“Era una Facultad tomada absolutamente por la policía, con la entrega del carné a la puerta, los caballos colocados en el espacio que queda entre las dos facultades. Y eso pues era tremendamente impresionante y revulsivo. Clases, muy pocas. Hubo muy pocas clases. Nuestra formación está punteada de eso, de huecos permanentes, de cierres, de saltos, bueno de decisiones que se tomaban tanto en el ámbito de quienes gobernaban la universidad, como de los propios

---

<sup>886</sup> Esperanza YLLÁN. Entrevista realizada el 20 de Octubre de 2009 en Madrid.

estudiantes, porque yo participaba claramente en eso. Si hay que cerrar, se cierra”.<sup>887</sup>

La situación en la Facultad de Medicina de la UCM era relativamente parecida a la de Filosofía, como lo recuerda César Sánchez Polonio, quién entró a Filosofía en el curso 69-70 y luego se cambió a Medicina en el curso 71-72:

“Cuando yo entré a Filosofía efectivamente me sorprendió ese año, porque el año antes todavía había mucha libertad en las universidades, y se tenía el derecho de asilo antiguo, que en la universidad no podía entrar la policía, y ese año se había violentado y los policías estaban allí, la Brigada Político Social. (...) La policía estaba afuera [de los edificios], pero estaba la Político Social, y ellos podían llegar allí, por ejemplo, a una asamblea, y se paseaban los sociales, se exhibían los sociales, se sabía que eran los sociales, y la gente les abucheaba: ¡fascistas! ¡sociales! Había varias lecheras, que eran un tipo de furgonetas, y ahí no sé cuantos números podía haber, no sé cuantos policías. Entonces eran los grises, que luego cambiaron su indumentaria a marrones, y les inventamos un eslogan para molestarlos que decía: ¡de gris o de marrón, un cabrón es un cabrón! Y ya estaba la fiesta formada. Había gente a la que le gustaba tirarles piedras, a los grupos radicales les gustaba provocar y que hubiera un poco de batalla, para hacer notar que la policía era un poco represiva”.<sup>888</sup>

Una experiencia similar tuvo Luis Enrique Otero Carvajal, quien ingresó a la Facultad de Medicina en el curso 74-75, apenas un par de años después del gran conflicto protagonizado por esa Facultad en 1972-1973, que se saldó con el cierre de Medicina y la imposición de una prueba especial de acceso.

“Las autoridades franquistas temían que pudieran producirse protestas de los estudiantes en contra de las pruebas de acceso, con lo cual, el día del examen la Facultad estaba totalmente ocupada por las fuerzas de seguridad, policía nacional, y el acceso se tenía que hacer pasando un pasillo de policías nacionales, con los cascos puestos, escudos y las porras desenfundadas. Había que pasar de uno en uno, mostrando el carné a un ordenanza que revisaba que figuraras en las listas de las personas admitidas. Y luego, a lo largo de todos los pasillos de la Facultad, cada 15 o 20 metros había un policía nacional y en el interior de las aulas también había policías, mientras se desarrollaba la prueba. Así es que esa fue mi primera toma de contacto con la universidad y con el ambiente que se vivía allí. El siguiente fue cuando se publicaron las notas de las pruebas de acceso, que lógicamente tanto los estudiantes que esperábamos su publicación, como sobre todos los familiares de aquellos estudiantes, estaban a la expectativa de conocer. Cuando el ordenanza fue con los resultados para publicarlos en el tablón de anuncios, se produjo la consecuente aglomeración de personas para ver si habían aprobado. Ese día, como todos los demás días en la Ciudad Universitaria, había policías en la puerta de la Facultad de Medicina, había un par de jeeps y un autobús con policías nacionales, y cuando estaba toda

---

<sup>887</sup> Elena HERNÁNDEZ SANDOICA. Entrevista realizada el 19 de Octubre de 2009 en Madrid.

<sup>888</sup> César SÁNCHEZ POLONIO. Entrevista realizada el 1 de Octubre de 2009 en Madrid.

la aglomeración de gente mirando las notas, pues entró la policía nacional y cargó contra la gente que estaba allí. La situación, después de la carga policial fue un poco dantesca, pues el hall central quedó lleno de zapatos, carpetas...”<sup>889</sup>

Otro elemento a considerar en cuanto a la diversidad del ME tiene relación con las Facultades: Derecho, Medicina, Filosofía y Letras o Políticas solían ser más combativas y politizadas que las facultades técnicas, por ejemplo, aunque en estas también hay momentos de movilización y presencia de organizaciones políticas. La misma distinción vale para las universidades madrileñas: la Complutense, al ser la más antigua y más grande, concentraba el núcleo más poderoso del ME de Madrid, pese a que las autoridades académicas intentaron frenar la movilización universitaria trasladando algunas Facultades desde la Ciudad Universitaria a Somosaguas (al noroeste de Madrid, a 10 kilómetros de la Puerta del Sol). Tal como recuerda Santos Ruesga, quien ingreso a la Facultad de Económicas en Somosaguas el curso 70-71:

“el ambiente era explosivo en esos años, me acuerdo que el primer año que entré expedientaron a varios estudiantes, y hubo muchas movilizaciones. Eran los conflictos de Medicina, los expedientaron en relación con esos conflictos y era gente de izquierdas, del PCE, otros de otras organizaciones. Y eso nos llevó a hacer huelga de exámenes de junio, el primer año que entré a la universidad no nos examinamos de nada. Pero eran continuas movilizaciones, tanto en el campus como en Ciudad Universitaria, eran años muy movidos”.<sup>890</sup>

Ya en la década de los 70, varias facultades de la Autónoma también se movilizaron y llegaron incluso a protagonizar hitos dentro de la historia del ME, como fue el Festival de los Pueblos Ibéricos. Rafael Cruz, quién ingresó a la Facultad Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma en el difícil curso 75-76, recuerda:

“Ese fue el día [el del Festival de los Pueblos Ibéricos] en que la policía nos hizo pasillo al salir del autobús. Bueno, fueron decenas de miles de estudiantes en una explanada al lado de la Autónoma, y en un momento en el que no había libertad de reunión absoluta, o sea, era tolerada en algunas ocasiones por Fraga, por el Ministro de la Gobernación, y bueno era algo especial, algo excepcional, el que se pudieran reunir miles de estudiantes, llenos de banderas, llenos de octavillas, llenos de periódicos. Pero no hubo problemas, simplemente que fue algo muy celebrado y muy resaltado”.<sup>891</sup>

A la zaga en las movilizaciones quedaba la Universidad Politécnica, aunque en el curso 75-76 protagonizaron una huelga relativamente larga debido a los decretos de

---

<sup>889</sup> Luis Enrique OTERO CARVAJAL. Entrevista realizada el 16 de septiembre de 2009 en Madrid.

<sup>890</sup> Santos RUESGA. Entrevista realizada el 21 de septiembre de 2009 en Madrid.

<sup>891</sup> Rafael CRUZ. Entrevista realizada el 8 de septiembre de 2009 en Madrid.

Cuatro Convocatorias y de Permanencia en la Universidad (ambos publicados en 1975). Ahora bien, esto no quiere decir que los estudiantes de carreras técnicas no se interesaran por participar en el ME, allí también había militantes y organizaciones clandestinas, pero ciertamente, era más difícil movilizar a las masas, aunque, como recuerda José Porrero, que ingresó a la Facultad de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica en el curso 1973-1974, al tener fama de “facultad tranquila”, estaban sometidos a menos controles y menos represión.

“[La Escuela de Caminos] era un sitio que tenía hasta el favor de la policía, o sea que la policía no entraba allí. El que era subdirector, había sido candidato a ser ministro de Gobernación con Franco. O sea, que era un sitio que tenía ciertos problemas para la movilización. En esa época, allí en Caminos te digo que habría unos 30 y tantos del PCE, unos 20 y tantos que éramos nosotros [PTE-Joven Guardia Roja], luego había gente de la ORT, 3 o 4 a lo mejor, y 2 o 3 del MC, y gente que era anarquista. Y esa era la gente que estaba ahí, y por ejemplo había un cineclub que era bastante fuerte en la universidad, vamos tenía bastante fama, porque allí... ya te digo, que como no era una escuela conflictiva, como Derecho, que lo limitaban... en cambio, en la Escuela de Caminos nos permitían casi todo, películas de estas, yo me acuerdo de una película boliviana, que se llamaba tomar las armas, o algo así, y esas perfectamente nos las permitían. Luego también había una asociación cultural, y a través de este tipo de cosas tratábamos de politizar un poco a la gente. Pero ya te digo, que la gente entraba allí para ser algo en la sociedad, para ocupar los puestos altos de la administración”.<sup>892</sup>

## **II. Las organizaciones políticas y la masa estudiantil.**

A partir de 1969, año en el cual iniciamos nuestra investigación, la situación del ME cambió con respecto al período anterior. A raíz de la fuerte oleada de movilización vivida en el curso 67-68 y de la muerte de Enrique Ruano en enero de 1969, la represión se intensificó y contribuyó también a radicalizar las posturas entre las organizaciones políticas. Como recuerda Jaime Pastor, quien ingresó a la Facultad de Políticas de la UCM en el curso 64-65 y en enero de 1969 se exilió en París,

“con el estado de excepción de enero del 69 se cierra un ciclo de radicalización pero también de represión de la dictadura contra el ME, luego hay una reactivación de ese movimiento cuando se inicia el proceso de Burgos, y entramos en los años 70, en los cuales efectivamente ya no encontramos un movimiento estudiantil unitario, basado en el protagonismo de un sindicalismo estudiantil, sino con cierta división dentro del movimiento, con distintas

---

<sup>892</sup> José PORRERO. Entrevista realizada el 21 de Octubre de 2009 en Madrid.

estructuras, comités de curso, comités de acción, y con una presencia, aunque no legal, semipública de las organizaciones políticas”.<sup>893</sup>

Javier Maestro, quien ingresó a la universidad en el curso 1967-1968, también recuerda estos momentos, en donde a represión se tradujo en una radicalización del ME:

“fueron apareciendo, a partir del año 68, un conjunto de nuevas organizaciones, algunas maoístas, con el enfrentamiento entre la URSS y China... También surgieron organizaciones trotskistas de nuevo cuño, que salieron de agrupaciones castristas, guevaristas de diferente signo. Y surgieron otro tipo de organizaciones, anarquistas, por ejemplo, que intentaban reaparecer de diversas formas. Y todas estas organizaciones tenían sus dirigentes, sus organizaciones, y siempre aparecía una nueva escindida de otra, lo que creó un cierto desconcierto, porque lo que buscaban era fundamentalmente la unidad”.<sup>894</sup>

Con todo, el PCE seguía siendo la organización más importante y consolidada dentro del ME español. Como señala Elena Hernández Sandoica, la fuerza principal dentro del movimiento “era el Partido Comunista, sin duda. Yo aquí lo percibí al entrar, luego al haberlo estudiado la cosa se aclara de otra manera, pero desde el recuerdo y la experiencia vivida, el PCE era el único que se identificaba como tal y al que se le veía, el que tenía una entidad propia. Lo demás quedaba muy difuso, salvo los falangistas claro”.<sup>895</sup> Según Esperanza Yllán: “El ME estaba plagado de movimientos de izquierda, evidentemente, la voz cantante desde el punto de vista político la llevaba el PCE, y yo te puedo hablar con conocimiento de causa porque yo pertenecía al PCE. Y yo no tengo ningún reparo en decirlo, y además fueron los mejores años de mi vida”.<sup>896</sup>

Sin embargo, a partir de la radicalización y fragmentación que se vive desde 1969, fueron muchas las organizaciones políticas que criticaron las estrategias del PCE:

“Eran partidos a la izquierda del PCE, y yo he tenido unas peleas... mi primer novio era trotskista, imagínate las peleas. Esos, nos consideraban al PCE la derecha. Consideraban que el PCE era el revisionismo más absoluto, la claudicación, el abandono de los principios revolucionarios. (...) El problema es que a hacia finales de los años 60, ya hay muchos partidos políticos clandestinos, y muchos partidos de extrema izquierda. Un abanico que va desde los católicos progresistas, cristianos de base, hasta los trotskistas, maoístas, etc. La lucha estudiantil era una lucha muy heterogenia, cada partido hacía casi casi la guerra por su cuenta. Pero a la hora que había un acontecimiento como el proceso de Burgos, por ejemplo, o hechos de mucha significación, entonces había una

---

<sup>893</sup> Jaime PASTOR. Entrevista realizada el 25 de Septiembre de 2009 en Madrid.

<sup>894</sup> Javier MAESTRO. Entrevista realizada el 29 de Septiembre de 2009 en Madrid.

<sup>895</sup> Entrevista a Elena HERNÁNDEZ S.

<sup>896</sup> Entrevista a Esperanza YLLÁN.

unidad y se salía en manifestación mezclados, daba igual que fueran trotskistas, otros del PCE, porque el motivo era superior”.<sup>897</sup>

Según Luis Enrique Otero:

“Hay que tener en cuenta que [las organizaciones] eran clandestinas, por lo tanto la militancia era reducida cuantitativamente, pero con una gran capacidad de activismo político y de movilización de los estudiantes. En el curso 74-75, el PCE era la organización con mayor grado de militancia, pero desde el año 72-73 había ido creciendo también la presencia y la fuerza de las organizaciones situadas a la izquierda del PCE, los trotskistas, marxistas-leninistas y maoístas, la LCR y el menor medida la LC, el PTE, la ORT y el MC, y ya en el año 74-75 estaba presente pero iniciando su declive el PCE (m-l), que había dado lugar a la formación del FRAP”.<sup>898</sup>

Ya en la década de los 70, el grupo que logró competir más de cerca con el PCE fue el Partido del Trabajo, especialmente su organización juvenil, la Joven Guardia Roja. Como recuerda José Porrero, militante del PTE,

“sí que éramos [competencia del PCE], en algunos sitios teníamos más poder de convocatoria, hacíamos más actividades. Básicamente, la JGR y el PTE tenía una ideología, se proclamaban marxistas leninistas y teníamos a Stalin ahí, pero quizá nunca se nos planteó... por ejemplo, la LCR, los trotskistas estaban más preocupados del tema ideológico teórico, nosotros sí que hacíamos alguna vez alguna cosa teórica, pero éramos básicamente unos activistas. Si fuimos competencia del PCE, pero no cubríamos el espectro del PCE porque el PCE estaba en todos lados, pero en la Universidad de Madrid en un momento determinado yo creo que estábamos en casi todos los lados, desde luego estábamos en los lados importantes”.<sup>899</sup>

Esta enorme diversidad de organizaciones políticas que tenían presencia – más o menos llamativa – dentro del ME hacía muy difícil la coordinación de la lucha. La rivalidad y la competencia entre ellas hicieron prácticamente imposible que, desde la disolución del SDEUM en 1969, se pudiera establecer una plataforma unitaria de acción para el movimiento estudiantil español. Además, había otros grupos de estudiantes que no se identificaban con las organizaciones de izquierda, como por ejemplo, los grupos libertarios o anarquistas, que si bien eran minoritarios, de todos modos tenían presencia en la universidad. Es el caso de Carlos Taibo, quién ingresó a la UCM en el curso 74-75 y recuerda lo siguiente:

---

<sup>897</sup> Ibid.

<sup>898</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

<sup>899</sup> Entrevista a José PORRERO.



“Lo que había eran organizaciones partidarias, no había estructuras comunes. En aquel momento, las más fuertes eran las de los partidos de izquierdas, PCE, PTE, ORT, LCR y MC. Yo no estaba vinculado a ellos, yo formaba parte de grupos anarquistas de base, y en realidad, estábamos en relación muy tensa con los partidos. Pero quiero decir que entonces no había nada como un sindicato unitario que generara un espacio común de actuación para todas esas fuerzas, sino que cada cual se movía por su cuenta”.<sup>900</sup>

Con todo, es fundamental considerar que la militancia era minoritaria dentro de la universidad. Los militantes eran los estudiantes más activos dentro del ME, pero no eran los únicos, existía un conjunto amplio de estudiantes que participaban en las distintas instancias y actividades, ya fueran políticas o culturales, que servían para movilizar a las masas estudiantiles. Tal como recuerda Luis Enrique Otero, “el movimiento estudiantil era mucho más amplio que los militantes”. Y para llegar a las masas estudiantiles se organizaban una serie de

“actividades paralelas que se hacían en las facultades de aquellos años, como podía ser la celebración de cineforum, charlas, conferencias, conciertos, es decir, toda una serie de actividades culturales, paralelas a las oficiales, que permitían a los estudiantes entrar en contacto con la cultura democrática, a través del conocimiento de aquellos autores que habían integrado las filas del exilio español, tras la guerra civil, bien a través de su literatura o bien a través de la música, con el conocimiento de la música de los cantautores de la llamada canción protesta, con cantantes como Raimon, Paco Ibáñez, Serrat, etc.”.<sup>901</sup>

Por cierto, estas actividades también se realizaban en semiclandestinidad, y muchas de ellas servían para captar – o al menos intentar captar – militantes.

### **III. Formas de participación: delegados, asambleas y RGU.**

Ahora bien, si el ME de fines de los 60 y comienzos de los 70 estaba compuesto por este conjunto de organizaciones políticas, muchas de ellas rivales, además de aquellos estudiantes que no necesariamente militaban pero tenían interés en participar, ¿cómo se organizaban, cómo se canalizaba la participación? Este es quizá uno de los elementos más complejos de rastrear dentro del movimiento estudiantil. Cada organización proponía diferentes formas de participación, aunque finalmente todo se canalizaba a través de las asambleas.

---

<sup>900</sup> Carlos TAIBO. Entrevista realizada el 17 de septiembre de 2009 en Madrid.

<sup>901</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

La forma más básica – y también la más permanente – de representación era la elección del delegado de curso, que en muchos casos se encargaba de tareas más bien administrativas (fotocopias, anuncios, etc.) pero que a veces, adquiría un cariz político, dependiendo de quién fuera el elegido. Ahora bien, ¿cómo se elegía al delegado de curso? Como recuerda Esperanza Yllán, quién fuera delegada en segundo curso, esto se hacía por votación (a mano alzada o en papeletas), “pero normalmente era la que más se destacaba, el que más se destacaba, el que repartía panfletos, el que se movilizaba, el que defendía a los estudiantes frente a algún profesor arbitrario, hay una casuística muy grande de motivaciones”.<sup>902</sup>

Los recuerdos de César Sánchez Polonio van en el mismo sentido:

“Esas votaciones se hacían a mano alzada, se presentaba la gente a delegado y de los diferentes grupos que querían fiscalizar el asunto, pues presentaban a sus delegados. Entonces claro, esto era tácito, la gente no sabía que este hombre era del FRAP, los más enteradillos sabíamos que era rojete, etc. La gente sabía que era rojete pero no sabíamos que militaban, era clandestino, eso no se sabía. Entonces se hacía a mano alzada y había una fiscalización de los otros grupos que presentaban a un candidato, pero vamos, la mayor parte de las veces no se acudía a una votación explícita, porque si era muy mayoritario, por ejemplo este chico era alto, guapete, con bigote [recuerda al delegado de segundo curso de Medicina]”.<sup>903</sup>

Una vez elegidos, los delegados de curso se reunían y escogían al delegado de Facultad, quien actuaba como interlocutor ante las autoridades académicas, respecto de los problemas o cuestiones del centro en cuestión. Con todo, la estructura de los delegados de curso y facultad era muy diversa y dependía de cada curso, facultad y centro.

Sin duda, la estructura más importante de organización, comunicación y difusión del movimiento estudiantil eran las asambleas, que tenían una vida independiente de los delegados de curso y Facultad, aunque muchas veces ellos participaran en estas instancias. Las asambleas funcionaban como espacios de discusión y socialización de los problemas que aquejaban a los estudiantes, aunque no eran las organizaciones políticas las que convocaban a las asambleas. Como señala Jaime Pastor, éstas podían ser convocadas por los comités de curso, o incluso, sin firma, “se buscaba la mejor fórmula que pudiera servir también para no quemar a nadie”. Los comités de curso, como explica el sociólogo, eran pequeños grupos de militantes “fomentados por el

---

<sup>902</sup> Entrevista a Esperanza YLLÁN.

<sup>903</sup> Entrevista a César SÁNCHEZ POLONIO.

Movimiento Comunista en Madrid (...) que funcionaban de manera semipública, es decir que normalmente no anunciaban cuándo ni dónde se reunían, pero sí eran ellos los que convocaban asambleas”.<sup>904</sup> Dichos comités se habrían creado en Barcelona, con motivo de las movilizaciones en contra del Consejo de Guerra de Burgos, como un intento de generar una organización estable y unitaria para el ME, estaban abiertos a todos los estudiantes (militantes y no militantes) pero eran controlados por grupos de izquierda, que a veces se enfrascaban en disquisiciones excesivamente teóricas que terminaban por alejar a los estudiantes que estaban interesados en las reivindicaciones académicas.<sup>905</sup>

Ahora bien, los comités de curso no eran los únicos que convocaban a asambleas. Según recuerda Elena Hernández Sandoica,

“la organización [del ME] era opaca para los que estábamos fuera. De repente se convocaba a asamblea, de repente se colocaba el cartel, convocatoria para hoy, se dejaba la clase que fuera, ahí no te lo pensabas dos veces, ibas allá y para entonces ya estaba la escenografía montada. Empezaba casi siempre un pecero [del PCE], y a partir de ahí, los otros grupos seguían, o estorbaban, o se llegaba a la conclusión de un cierre, de un salto, o de lo que fuera pertinente. Y sobre las 11.30 bajaba automáticamente la policía a quitar el cartel, o sea que la asamblea tenía que estar convocada muy a primera hora, los bedeles normalmente quitaban los carteles”.<sup>906</sup>

Como relata César Sánchez Polonio,

“llegábamos a una clase antes de que llegara el profesor y hablábamos con los compañeros, y si veías la receptividad a que hubiera una asamblea para discutir el problema que tú estabas planteando, entonces lo planteabas, y si había receptividad, cuando llegaba el profesor decías vamos a tener que hacer y tal... entonces, a lo mejor, si era una persona democrática o tolerante, se esperaba un poco de tiempo, y los profesores más fachas o menos permisivos, decían: pues terminen rápido. Es que ya no se oponían, era una época en la que esta gente estaba ya sobrepasada y los grupos de derecha eran muy minoritarios. La mayoría del estudiantado, si no es que fuesen de izquierda, si seguían las directrices de los militantes de izquierdas. Y si el profesor no quería que hubiese, entonces llamaba a la policía, y efectivamente, llegaba la policía y desalojaba”.<sup>907</sup>

Esta misma dificultad para convocar y mantener las asambleas, ya que muchas veces entraba la policía a desalojar los edificios cuando se estaba produciendo una de

---

<sup>904</sup> Entrevista a Jaime PASTOR.

<sup>905</sup> E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M. A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ: *Estudiantes contra Franco*, p. 303-304.

<sup>906</sup> Entrevista a Elena HERNÁNDEZ S.

<sup>907</sup> Entrevista a César SÁNCHEZ POLONIO.

estas instancias, funcionaba como un mecanismo de politización de los estudiantes que participaban en ellas. Según la experiencia de Luis Enrique Otero:

“Si tu ibas a una asamblea y en esa asamblea se estaba hablando, y a ti te parecía razonable, que si los parciales eran liberatorios, y entraba la policía y cargaba contra todos los que estuvieran allí, y repartía porrazos y golpes a diestro y siniestro, y te desalojaba violentamente de la Facultad, inclusive te detenían y te llevaban a comisaría, pues tú, que no tenías ningún tipo de ideología preestablecida contraria al propio franquismo, inclusive que lo que habías vivido en tu casa era la adhesión más o menos firme a la dictadura franquista, pues te ibas a encontrar con una realidad que te colocaba sin que se hubiera producido un proceso ideológico de politización previo, en las filas de la oposición. Y entonces se iniciaba el proceso de politización, inducido o desencadenado como consecuencia de los propios efectos represivos de la dictadura”.<sup>908</sup>

Ahora bien, en las asambleas, dependiendo de quién las convocara, también se producían pugnas entre los grupos políticos, así, a veces ocurría que militantes de una organización asistían exclusivamente para “reventar” la asamblea convocada por sus rivales, y lo hacían politizando la discusión, en caso de que se estuviera debatiendo un tema más bien académico, o denunciando la estrategia de sus competidores (se acusaba de pactismo al PCE; de vanguardismo a los grupos a la izquierda del PCE, por ejemplo). Con todo, las asambleas eran la instancia fundamental en la socialización de las reivindicaciones y las luchas del ME. Las asambleas otorgaban legitimidad al proceso de movilización, en la medida en que en ellas participaban – como ya hemos señalado – no solamente militantes sino estudiantes comunes y corrientes que, incluso sin quererlo, se veían inmersos en la dinámica de movilización del ME.

La participación estudiantil sufrió un cambio, al menos a nivel teórico, en 1974, con el Decreto de Participación dictado por el régimen, en el cual se convocaba a elecciones “oficiales”, con el objetivo de generar un canal de comunicación entre el alumnado y las autoridades académicas. El decreto establecía la elección de delegados de Curso, Centro y Universidad, a través de votación directa, quienes tendrían entre sus funciones la participación en los órganos de gobierno universitario, entre otros. Sin embargo, la sola convocatoria a elecciones oficiales produjo una variedad de reacciones entre las organizaciones políticas del ME. Mientras algunos propiciaban dicha participación (por ejemplo, el PCE), otros la condenaban porque consideraban que era colaborar con el régimen. El resultado fue tremendamente desigual, en algunos cursos y

---

<sup>908</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

centros se logró elegir a delegados, en otros no. Lo mismo ocurre con la valoración del proceso eleccionario de 1974 y de los que le siguieron (hubo elecciones oficiales en 1975 y 1976, con resultados igualmente variables); para algunos entrevistados fue un acontecimiento importante, mientras que para otros era sólo una farsa. Insistimos entonces en la idea de que la fragmentación que vive el ME a partir de finales de la década de los 60 impidió cualquier tipo de plataforma unitaria o coordinación sistemática.

Tal como señala Elena Hernández Sandoica:

“Lo que yo viví nunca era común, siempre era fragmentario y aleatorio. Yo creo que eso pasó en todas las facultades y en todos los lugares, el miedo a los encierros y las vidas destrozadas, los estudios abandonados por causa de la persecución política, la persecución de la policía o el control que la policía llevaba más sobre unos que sobre otros. (...) En cualquier caso, cambiaban mucho los chicos, casi siempre eran chicos (más chicos que chicas) y eran muy variables, así es que intentos de unidad o una sistematicidad, en parte se estorbaba por razones estructurales, porque la policía estaba siempre controlando, pero en parte dependía también del propio conflicto interno, de los grupos, de las fracciones, que eran muchas”.<sup>909</sup>

Respecto de las elecciones de delegados de 1974, la profesora recuerda que en su Facultad (Filosofía y Letras de la UCM) el proceso fue imperceptible. “Aquí no se notó nada, yo estaba todavía y estaba muy sensibilizada... y no hubo participación, que yo viera, que a mi me afectara, yo no lo noté”.<sup>910</sup> En el mismo sentido apunta el recuerdo de Luis Enrique Otero: “Los niveles de participación en el curso 74-75 a elección de delegados estudiantiles fueron desiguales en función de unas y otras facultades. También fue desigual con respecto a los cursos, las tasas de participación en primer y segundo fueron más elevadas, y en los cursos superiores fueron menores”.<sup>911</sup> Con todo, Otero tiene una visión positiva respecto de la labor de los delegados, en el sentido de que eran interlocutores válidos y reconocidos por las autoridades académicas:

“En última instancia esos delegados no dejaban de ser los líderes naturales, que habían surgido en el contexto del curso o de la Facultad, porque muchos de ellos además eran los dirigentes estudiantiles de los partidos de oposición que actuaban públicamente de cara al estudiante (aunque luego tenían sus aparatos clandestinos). Y eso generaba un liderazgo dentro del curso, que iba más allá de la tasa de participación, porque cuando había un problema, era el delegado el que iba a hablar con el profesor, y luego en ese problema, todos los estudiantes se reconocían. Luego, se convirtió el tema de los delegados

---

<sup>909</sup> Entrevista a Elena HERNÁNDEZ S.

<sup>910</sup> Ibid.

<sup>911</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

estudiantiles en un mecanismo de ampliación de la influencia de aquellos partidos que optaron por participar en ese proceso de elecciones”.<sup>912</sup>

Una visión completamente distinta es la que tiene Carlos Taibo, quien durante su vida universitaria participaba del movimiento libertario. Para Taibo, las elecciones oficiales no eran un mecanismo adecuado porque terminaban por producir a grupos de vanguardia que escapaban del control de las bases.

“Una de las pocas cosas que recuerdo de aquella época es que a mí me eligieron delegado, aunque yo no me presentaba a las elecciones, cómo serían las cosas, que el procedimiento no exigía que se presentase alguien, era tan aberrante que podía ser elegido cualquier alumno y la cosa fue que en unas elecciones, probablemente el año 77 o 78, dos o tres personas estábamos en la puerta del aula donde estaba la urna intentando convencer a la gente de que no votase, y debimos caerles simpáticos a tres chicas que entraron a votar, y dos de ellas votaron por mí. Hasta el punto de que hubo tres votos, fueron las tres únicas personas que votaron, y salió elegido formalmente delegado una persona – yo – que boicoteaba las elecciones. Era completamente absurdo. No hacía falta presentarse, podía ser votado cualquiera, y luego no hacía falta ningún quórum, con 3 votos salía elegido alguien delegado. Todo era completamente absurdo, no preciso decirte que no recogí el acta de delegado, ni fui a ninguna reunión, pero creo que da cuenta del espíritu de aquello y de las manipulaciones a las que se prestaba todo”.<sup>913</sup>

Además de la participación a nivel de curso, facultad y universidad, durante la década de los 70 se convocaron varias Reuniones Generales de Universidades (RGU), que tenían por objetivo coordinar la lucha del ME a nivel estatal. Así, a las RGU asistían delegados y estudiantes de diversas ciudades españolas, pero no existía ninguna forma establecida de participación o representación. Es decir, no se elegía a delegados especiales para las RGU, a veces asistían los delegados de curso o de Facultad, junto con militantes de las organizaciones políticas que veían con buenos ojos estas instancias.

Sin embargo, aunque su objetivo era generar coordinación y unidad en las luchas del ME, las RGU muy pocas veces tuvieron éxito. De hecho, la misma discontinuidad en su convocatoria atentaba contra este objetivo. Además, por lo general, estas reuniones acababan siendo dominadas por una agrupación política, básicamente el PCE, con lo cual las otras organizaciones se manifestaban en contra (en algunos casos se retiraban o prohibían a sus militantes asistir). Así lo señala Luis Enrique Otero: “El PCE

---

<sup>912</sup> Ibid.

<sup>913</sup> Entrevista a Carlos TAIBO.

trata de controlar la RGU, las reuniones de los representantes de los estudiantes universitarios, y que de esas RGU no salgan programas de movilización si no es conectado dentro de la lógica del proceso de movilización política que [proponía] la estrategia del PCE”.<sup>914</sup> La experiencia de un militante del PTE, José Porrero, indicaba más o menos lo mismo: “Nosotros también participábamos en las RGU, hubo incluso una expulsión de gente de los que fueron a la RGU, por parte de la Joven Guardia porque decía que no se había defendido suficientemente las posiciones del partido, porque en aquella RGU había como 40 y tantos del PCE, 4 o 5 del partido [PTE o Joven Guardia Roja] y 1 o 2 del MC...”.<sup>915</sup>

Ahora bien, la intención de generar una plataforma unitaria para el ME rondaba en la mente de las organizaciones políticas desde la disolución del Sindicato Democrático de Estudiantes de Madrid (SDEUM) en 1969, y como ya hemos señalado, el SDEUM terminó debido a la fractura y la división interna entre las organizaciones que participaban en él. Con todo, a la altura de 1976, el Partido del Trabajo intentó reeditar el SDEUM, pero no tuvo éxito porque la iniciativa no contó con el apoyo de las demás organizaciones políticas. Según el militante del PTE, José Porrero, “en la cabeza de los dirigentes de aquella época había la idea de que los movimientos sociales, de barrio, de soldados, de amas de casa, tenían que tener unas plataformas unitarias de carácter social para que se enfrentaran al poder y a las posiciones que ellos querían alcanzar. Y el Sindicato Democrático de Estudiantes se hizo con esa idea, pero como todos los demás partidos estaban en contra de eso, lo acusaron de montaje”.<sup>916</sup>

La oposición al nuevo SDEUM tenía que ver con la hegemonía del ME, con qué organización sería la que dirigiera al movimiento estudiantil, y en este contexto, la oposición del PCE fue clave. El PCE seguía siendo, a la altura de 1975-1976 el principal grupo político en la universidad, pero ya desde comienzos de los 70, el PTE y la Joven Guardia Roja se habían transformado en una fuerte competencia. Por esta razón, recuerda Luis Enrique Otero, el PCE se niega a apoyar una iniciativa que no había surgido de su seno.

“Evidentemente, esa herramienta [sindicato democrático] no dejaba de ser importante, si acababa imponiéndose, quién la controlara iba a controlar al movimiento estudiantil. En esa estrategia no entró ni el PCE ni la ORT. El PCE, porque temía que la constitución de un sindicato de estas características

---

<sup>914</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

<sup>915</sup> Entrevista a José PORRERO.

<sup>916</sup> Ibid.

impulsado por el cada vez más influyente PTE y la JGR, en los años 75-76, pues podía colocarle en una posición de subordinación, porque la iniciativa además había sido tomada por el PTE, por lo tanto si te incorporabas después lo hacías desde una posición subordinada”.<sup>917</sup>

A partir de este fracaso, ya no hubo más intentos de generar plataformas unitarias permanentes para el ME, lo que coincidió con el fuerte descenso en las movilizaciones universitarias, a partir de 1977. En este sentido, la falta de una organización común a los estudiantes es fundamental para comprender la discontinuidad en las movilizaciones, aunque no es su única causa. En las manifestaciones de 1979-1980 en contra de la LAU, veremos aparecer una nueva forma de organización, la Coordinadora de Estudiantes de las Tres Universidades de Madrid, pero su existencia fue netamente coyuntural y desapareció cuando hubo acabado ese ciclo de movilizaciones.

#### **IV. Las reivindicaciones: por qué se movilizan los estudiantes.**

Si las formas de participación eran muy variadas dentro del ME, también lo eran las reivindicaciones estudiantiles. Aquí podemos encontrar una gran diversidad de causas que llevan a los estudiantes a movilizarse, algunas de ellas son problemas concretos de un curso o Facultad (como el caso de Medicina en el curso 72-73), otras responden a asuntos académicos que afectan a todos los centros (la lucha contra la LGE) y por último, están aquellas causas políticas, que escapan a la vida estrictamente universitaria pero que resuenan con mucha fuerza en los centros y facultades (el Juicio de Burgos, la ejecución de Puig Antich, las peticiones de amnistía para los presos políticos, etc.).

Sin embargo, por lo general, tanto las reivindicaciones académicas como las políticas se daban en conjunto. Muchas veces los estudiantes comenzaban movilizándose por asuntos académicos (nuevos planes de estudio, Decreto de Cuatro convocatorias o Permanencia en la Universidad), pero rápidamente estas movilizaciones se politizaban, tanto por la acción represiva de la policía como por las mismas organizaciones políticas, que buscaban siempre trascender a las reivindicaciones puramente académicas para instalar en la opinión pública los temas políticos.

---

<sup>917</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.



Por ejemplo, Jaime Pastor recuerda que a partir de los años 70, con la LGE, las reivindicaciones del ME adquieren una dimensión más universitaria, pero manteniendo la dimensión política.

“Entonces se configura un movimiento más en torno a campañas, unidades de acción puntuales, más reactivo que... bueno antes también era reactivo, pero también proactivo, que marcaba una meta que era construir un sindicato estudiantil. Y claro, está la protesta contra la LGE, las luchas de Medicina que fueron relevantes, y luego lo que es la extensión del movimiento estudiantil al profesorado, sobre todo los PNN, que se configuran como un nuevo movimiento del que forman parte muchos de los estudiantes de los años 60. Y claro, otra dimensión importante a medida que nos acercamos a los años 75-76, es la dimensión más política todavía. Pero al mismo tiempo, con un menor protagonismo público en la sociedad, que el que había tenido en los años 60”.<sup>918</sup>

Esta mixtura de reivindicaciones también forma parte de la experiencia de Elena Hernández Sandoica, quien recuerda que, por lo general, las motivaciones de los estudiantes solían ser muy variadas:

“amnistía y libertad que eran los gritos permanentes, no a la ley general de universidades, en cuanto que la LGE se puso en marcha, el rechazo a la Ley estaba en primer lugar. No sabíamos bien en qué consistía la ley, y con el tiempo se ha visto clarísimamente, que era una ley de adecuación a Europa, muy parecida a la actual, hubiéramos adelantado mucho si entre todos no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. Y luego claro, dependía del grupo político. Lo cual para alguien que no estaba politizada añadía confusión, porque a veces era ligarse al movimiento obrero, y a veces era desligarse absolutamente. Hacer reivindicaciones de tipo muy particular, muy concreto, contra el decano, en fin, de una manera muy focalizada”.<sup>919</sup>

En cuanto a las reivindicaciones académicas, estas podían ser relativas a asuntos puntuales de cada Facultad o a temas más generales de la enseñanza universitaria, pero en general, en la base de este tipo de reivindicaciones estaba el deseo de los estudiantes de intervenir y modificar ciertos aspectos que consideraban críticos de la educación superior española. Según la experiencia de Javier Maestro,

“el grueso de los estudiantes se movilizaba en contra del encorsetamiento del régimen, la falta de libertad de expresión, la baja calidad de la enseñanza, la no modernización de la universidad española, o sea, un conjunto de temas (...). Cuestiones propias de los estudiantes, contra la masificación de las aulas, por una enseñanza moderna y crítica, entonces se hicieron muchos juicios a profesores, se les echaba la pintura blanca. A Fraga Iribarne le hicieron uno en Políticas, él daba un curso, entonces le hicieron un juicio crítico diciendo que

---

<sup>918</sup> Entrevista a Jaime PASTOR.

<sup>919</sup> Entrevista a Elena HERNÁNDEZ S.

estaba totalmente vendido al régimen, él les permitió que hablaran, pero luego denunció al rectorado...”<sup>920</sup>

Por lo general, la radicalización de las reivindicaciones se producía por la acción represiva de la policía. Así lo recuerda César Sánchez Polonio, en relación con el conflicto de Medicina de 1972-1973, por las modificaciones del Plan de Estudios. Este conflicto duró varios meses y fue muy importante para volver a movilizar al ME, que luego del Juicio de Burgos había entrado en una etapa de reflujo.

“El acto más importante de la huelga [de Medicina] fue en enero o febrero, que fue un acto de manifestación de solidaridad de todas las Facultades de Madrid, que eso fue lo que efectivamente hizo que la huelga se ganara. Es decir, Derecho, Físicas, Económicas, yo recuerdo gente de esos sitios, y una gran manifestación de mucha gente. Yo creo que hubo un poco de sorpresa de la policía porque no esperaba tanta gente... Y llegó la policía a dar palos, pero ya luego la gente llegó hasta Moncloa, entonces hubo mucha gente en Moncloa manifestándose y haciendo saltos. Efectivamente, se estructuraba la cosa así, se llamaba a una manifestación, y luego diferentes grupos de amiguetes decían, vamos a hacer un salto en tal sitio, se tiraban pasquines y con el fin de que no te cogieran, el salto se debía disolver en 6 u 8 minutos”.<sup>921</sup>

De la misma manera lo recuerda Santos Ruesga:

“Cuando yo entré [curso 71-72 a Económicas], era por los expedientes que se habían hecho a seis o siete personas, que si mal no recuerdo eran del PCE. Y eso, entre una cosa y otra nos llevó... eran muy políticas las reivindicaciones, siempre venían acompañadas de amnistía, libertad de los detenidos, porque en cualquier movilización acababan 20 o 30 en la DGS. Eran básicamente políticas, lo que no consigo es acordarme de las reivindicaciones académicas de aquella época. Las de Medicina empezaron siendo académicas, el cambio de Plan de Estudios, pero cualquier reivindicación académica acababa politizada en aquella época”.<sup>922</sup>

En este sentido, era muy habitual que las reivindicaciones estrictamente académicas, que a veces no tenían ningún componente político, derivaran en una movilización política ya que los principios que sostenían a la universidad española de esos años eran autoritarios, no había cabida para el diálogo y la negociación. Así por ejemplo, cuando los estudiantes pedían exámenes parciales liberatorios, muchos catedráticos o decanos lo consideraban una intromisión inadmisible, o cuando se realizaban asambleas o manifestaciones por motivos estrictamente académicos, el

---

<sup>920</sup> Entrevista a Javier MAESTRO.

<sup>921</sup> Entrevista a César SÁNCHEZ POLONIO.

<sup>922</sup> Entrevista a Santos RUESGA.

régimen las consideraba como problemas de orden público. Según el recuerdo de Luis Enrique Otero:

“Al interior de las Facultades había miembros de la BPS, de la policía secreta, que tenía sus dependencias permanentes en las Facultades y había miembros de la BPS, de la policía política del franquismo, en las aulas para controlar la actividad del ME De tal manera que cuando se producía una asamblea, inmediatamente las fuerzas de seguridad terminaban actuando, entrando en los edificios y procediendo a la disolución de las asambleas, cargando contra los estudiantes, etc. De tal forma que reivindicaciones o asambleas estrictamente universitarias, o que trataban temas académicos y universitarios, como era el tema de los exámenes, acababan derivando rápidamente en un enfrentamiento con las fuerzas policiales, y en la consiguiente deriva de ese movimiento hacia un movimiento politizado (...) Cuando tú convocabas una asamblea o una manifestación al rectorado, una reunión de delegados, y la policía intervenía y detenía estudiantes o delegados estudiantiles, eso inmediatamente introducía una reivindicación: la libertad de los estudiantes detenidos. Tú empezabas a pedir un parcial liberatorio, hacías una movilización, cargaba la policía, gritabas LIBERTAD y POLICÍA ASESINA, en ese grito ya se estaba introduciendo un elemento de politización. Pero si además, como consecuencia de las manifestaciones detenían a estudiantes, inmediatamente, eso desencadenaba un movimiento de movilización en la universidad, ahora ya no para pedir parciales liberatorios sino la libertad de los detenidos. Y claro, la libertad de los detenidos inmediatamente conectaba con la demanda de las libertades democráticas y de la liberación de los presos políticos, y la demanda de la amnistía. Luego, la politización y la conexión de las reivindicaciones políticas del movimiento estudiantil se convertía en un enlace natural como consecuencia de la propia lógica del sistema represivo de la dictadura. No era una superposición artificial sino que era una conexión directa”.<sup>923</sup>

A medida que se avanza en la década de los 70, las reivindicaciones por libertades políticas y por el fin del régimen se hacen cada vez más fuertes. Según Carlos Taibo, “la percepción general, y ésta era unánime, era que los muchos problemas que tenía la universidad sólo podían ser encarados una vez que desapareciera el franquismo, con lo cual, discutir entonces sobre qué proyecto de universidad correspondía, era poner el carro delante de los bueyes. Lo que había que hacer era acabar con la dictadura y después entraríamos en una discusión sobre la universidad. Pero este es mi recuerdo”.<sup>924</sup>

Sin embargo, Luis Enrique Otero señala que las reivindicaciones académicas generaban mayor compromiso e implicación emocional entre la masa estudiantil no militante, que las reivindicaciones políticas generales. Había estudiantes dispuestos a desafiar a la policía por motivos académicos, pero no por motivos políticos extra-

---

<sup>923</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

<sup>924</sup> Entrevista a Carlos TAIBO.

universitarios. “Otra cosa es que cuando tú convocabas unas jornadas de movilización estrictamente políticas, como las de la Junta Democrática del 4 y 5 de junio de 1975, en este caso la complicidad de los estudiantes era menor que cuando lo que estaba era la lógica de la reivindicación universitaria, que conectaba con la represión y la petición de libertad de los compañeros detenidos”. De ahí que las organizaciones políticas del ME buscara casi siempre la fusión de las causas académicas con las políticas, porque era la mejor manera de movilizar a las masas de estudiantes.

Ahora bien, las movilizaciones estudiantiles se podían producir de diversas maneras. Por ejemplo, de una asamblea surgía el acuerdo de marchar al rectorado o a otra parte de la ciudad; o bien se decidía hacer una manifestación en Moncloa (esto era muy habitual entre los estudiantes de la Ciudad Universitaria) o en las glorietas de Bilbao y Quevedo. Sin embargo todo tenía que ser bastante espontáneo y clandestino para que la policía no se anticipara. Dentro de estas formas de acción estaban los saltos o comandos. Según el recuerdo de Santos Ruesga, estas eran movilizaciones muy reducidas. “Se pasaba de boca en boca, a las 7 en la calle Cartagena, y llegaba gente... y a veces cuando llegabas estaba ya la policía. En lenguaje militar los llamábamos comandos, duraban dos o tres minutos, y al llegar la policía salíamos corriendo”.

Carlos Taibo también recuerda este mecanismo, que no tenía más objetivo que marcar una presencia:

“Yo creo que era simbólico, lo de los saltos, no obedecía a ninguna razón material de un objetivo y conseguirlo, era demostrar que estábamos ahí. Lo del salto además es que no daba para más, era un procedimiento hiperclandestino en virtud de la cual se decía, “esta tarde va a haber un salto”, entonces tú ibas a una cita en un lugar de Madrid, en esa cita te daban otra cita para otro lugar, entonces al final... Es que sólo tengo recuerdos de las historias, en aquel momento trágicas, pero vistas desde hoy, divertidas. Recuerdo un salto en la zona de Prosperidad, y éramos como 400 personas. No sé quién había planificado el salto pero el trayecto, que era igual un kilómetro que íbamos corriendo, entonces tú imagínate el efecto, nada más que simbólico, de alucinar a la población, que pasan 500 personas gritando, pero no tenía otro propósito, y quien había planificado el salto, con muy buen criterio decidió que pasásemos por enfrente de un cuartel de la guardia civil. Entonces yo recuerdo ver a un guardia civil con una ametralladora en la puerta, salimos todos despavoridos, y en un momento determinado yo oí como un traqueteo, y es de esas cosas que dices, tu percepción biológica te dice que lo peor que puedes hacer es no mirar, porque al menos si miras, sabes lo que está pasando. Y qué había ocurrido, que el guardia civil estaba mucho más “acojonao” que nosotros, y había salido corriendo con nosotros, y le habían tirado tres o cuatro cócteles molotov, y lo que yo había oído era el ruido de los cócteles molotov que caían sobre del pobre guardia civil que había tirado su ametralladora”.

## V. Valoraciones del ME: experiencia e interpretación.

Como señalamos al comienzo de este capítulo, el recuerdo de cada entrevistado sobre el ME es diferente y depende de diversos factores. En este sentido, la valoración que muchos de ellos hacen de él está teñida, como es lógico, por su propia experiencia. Y si bien dichas valoraciones difieren de un entrevistado a otro, todos ellos coinciden en que las movilizaciones del ME no eran constantes sino cíclicas, pasaban por momentos de flujo y reflujo, lo que obviamente, influía en el ánimo de los estudiantes. Como recuerda Elena Hernández, la movilización en sus años de estudiante (1969-1974) era “muy guadianizada, como a saltos, momentos de una cresta de pasión movilizadora y de creer que sinceramente aquello contribuía a desmoronar al franquismo y acabar con el dictador, y otros momentos no, de apatía total, de valle, digamos. Esa sería la cuestión muy fragmentada. Y de desánimo...”.<sup>925</sup>

Todos coinciden en que la lucha contra el franquismo era la principal motivación del ME, aunque no siempre tuviera éxito en ella, y aunque tampoco hubiera consenso respecto de la importancia del ME en esta lucha. Según recuerda Carlos Taibo, los grupos libertarios “pensábamos que el movimiento estudiantil era un movimiento de jóvenes privilegiados, que vivían muy bien y que tenían una voluntad y capacidad de contestación del régimen más bien ligera, lo decíamos de nosotros mismos, no era por criticar al PCE, nosotros mismos, nosotros éramos un elemento marginal de la contestación activa del franquismo”.<sup>926</sup> Mientras que Luis Enrique Otero señala que el movimiento estudiantil fue fundamentales a la hora de articular una oposición al franquismo, no sólo por las movilizaciones que protagonizó sino especialmente porque permitió un espacio de apertura y discusión política en la universidad.

“Además de las propias reivindicaciones de los estudiantes y sus preocupaciones con respecto a determinadas cuestiones relacionadas a su formación, o la propia actividad clandestina de los partidos que actuaban en la Universidad con su propaganda vinculada a la ideología política, o la venta de periódicos y prensa clandestina, estaban también estas actividades culturales paralelas, que no dejaban de ser un caldo de cultivo de la cultura democrática que alimentaba o retroalimentaba al movimiento estudiantil”.<sup>927</sup>

---

<sup>925</sup> Entrevista a Elena HERNÁNDEZ S.

<sup>926</sup> Entrevista a Carlos TAIBO.

<sup>927</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

A la hora de evaluar el descenso en las movilizaciones estudiantiles a partir de 1976-1977, todos los entrevistados coinciden en que la transformación del sistema político desde la muerte de Franco influyó decisivamente en el ME, generando una desmovilización y, a la vez, un desencanto, de parte de los estudiantes. En este sentido, la experiencia de Rafael Cruz, quién vivió la muerte de Franco y los años iniciales de la transición a la democracia en la universidad, es clave: “Cómo se va a comparar la lucha estudiantil en un marco de dictadura, en que te la juegas, pero que al mismo tiempo es tu vida, pero también es peligroso, pero que también hay momentos en que se realizan cosas atractivas y tal. Eso es muy diferente a luchar contra una ley en el marco de una democracia, y que ahí es muy rutinario aunque pueda haber enfrentamientos gordos”.<sup>928</sup>

Ahora bien, las razones dadas para el descenso de las movilizaciones son diversas, pero en general todas tienen que ver con la institucionalización del proceso político y el progresivo abandono de los partidos de la universidad. Según Javier Maestro, “la transición supuso para muchos un desencanto, desencanto con la transición, con los partidos que habían impulsado ese tipo de transición, y ese desencanto se perpetúa durante años, a partir del año 78, más o menos. Desde que se ve en el 77 [sic] con la Constitución, que la transición va por una vía determinada, que no es en absoluto congruente con lo que se había esperado, pues eso va acompañado también de una serie de reformas que no satisfacen...”.<sup>929</sup>

El desencanto del que habla Maestro es también rescatado por Jaime Pastor, quien explica que esta actitud “se refleja más en un sector del estudiantado y del profesorado, una relativa frustración porque evidentemente ya no existe la dictadura, pero tampoco se han logrado las transformaciones que se deseaba. Yo creo que hay eso, la combinación de objetivo político central conseguido, pero relativa frustración y por tanto desmovilización añadida al no haber logrado ir más allá de la mera transición, que ha sido además vista a través de una reforma pactada”.<sup>930</sup> A la hora de profundizar en el abandono de los partidos políticos, Jaime Pastor señala que, junto al menor interés de demostrado por los partidos en la universidad, también hay que tener en cuenta la crisis que viven los partidos de izquierda radical: “son organizaciones que todavía crecerán hasta finales del 78, con unas organizaciones de juventud, pero a partir del 79 se va produciendo el reflujo. Tanto los Pactos de la Moncloa como el referéndum

---

<sup>928</sup> Entrevista a Rafael CRUZ.

<sup>929</sup> Entrevista a Jaime MAESTRO.

<sup>930</sup> Entrevista a Jaime PASTOR.

constitucional aparecen como un relativo cierre de la transición, y por lo tanto esa frustración en la izquierda radical será mayor. Pero también en los grandes partidos hay un menor interés”.<sup>931</sup>

¿A qué se debe este abandono o vaciamiento de los partidos políticos que actuaban en la universidad? Según Luis Enrique Otero, las elecciones de 1977 fueron clave, ya que los militantes de los partidos son llamados a participar en la campaña electoral, ya sea como candidatos o como activistas:

“a partir de la legalización del PCE, se produce una descapitalización de cuadros militantes del movimiento estudiantil que se van a preparar las campañas electorales de los correspondientes partidos, y esa descapitalización tiene continuidad en el año 77-78, porque muchos de esos militantes son reclamados por los partidos legalizados, que necesitan cuadros para alimentar una creciente infraestructura que demanda el régimen democrático”.<sup>932</sup>

En el mismo sentido, José Porrero recuerda su experiencia: “El PCE desactiva los movimientos sociales, no es porque yo haya sido del PTE, podría haber sido del PSOE. Te estoy hablando de lo que yo pienso, que efectivamente se desmovilizaron, porque había otras perspectivas que se podían conseguir las cosas a través del Congreso de los Diputados, entonces se desmoviliza”.<sup>933</sup>

Con todo, el abandono o institucionalización de la lucha de los partidos no es la única razón para el descenso de las movilizaciones, el fin de la dictadura y el fin de la represión también influyeron en ello. Según la experiencia de Luis Enrique Otero,

“todavía el curso 77-78 se mantiene una cierta actividad en la universidad, pero ya ha perdido buena parte del carácter reivindicativo que tenía antes, porque claro, después de las elecciones democráticas ya no hay represión en la universidad, no hay policía en la universidad... Las reivindicaciones de ese movimiento se han conquistado con el restablecimiento de la democracia, ya no tienes que pedir libertad de los presos políticos ni la amnistía, ni la libertad de expresión, reunión y asociación, lo puedes hacer perfectamente, la policía desaparece del campus universitario, puedes poner los carteles que quieras, la propaganda que quieras. En el ámbito estrictamente político, con las elecciones de junio del 77 todas esas reivindicaciones han sido conquistadas, incluso desde antes”.<sup>934</sup>

En el mismo sentido, Santos Ruesga señala que la fase más política del movimiento estudiantil dura hasta 1977, aproximadamente.

---

<sup>931</sup> Ibid.

<sup>932</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

<sup>933</sup> Entrevista a José PORRERO.

<sup>934</sup> Entrevista a Luis Enrique OTERO.

“[El ME] Es un movimiento muy político, no es un movimiento corporativo o económico, esto pasa también en el movimiento obrero. Esto dura hasta el 77 más o menos, sobre todo los sectores radicales que intentan aguantar por una democracia mejor, pero vamos, en el 78 ya prácticamente ese tipo de movimiento ha desaparecido, porque ha desaparecido la dictadura. Y eso tenía una razón de ser como movimiento democrático frente a la dictadura, entonces todo lo que aparece posteriormente en el ME – que no quiere decir que no sea político - tiene un origen y un desarrollo mucho más corporativo, mucho más de reivindicaciones propias de los estudiantes...”<sup>935</sup>

Según el relato de Carlos Taibo, cuando el franquismo se derrumba, entre 1975-1976, desciende la actividad reivindicativa en la universidad porque una de las principales reivindicaciones, que era el fin del régimen, se ha conseguido. Entonces,

“el hecho de que la represión descienda visiblemente, de que empiecen a tolerarse muchas cosas que antes no se toleraban, tiene el efecto paradójico de desmovilizar a quienes antes sentían que tenían motivos objetivos para protestar. Yo me acuerdo que de las últimas cosas que hice, al calor de las elecciones generales [de 1977] y claro, nuestra actitud era muy crítica con respecto a las elecciones generales... montamos – esto lo recuerdo perfectamente porque fue una de las etapas más divertidas de mi vida universitaria – un partido ficticio de extremo centro que concurría a las elecciones. Y recuerdo que montamos una gigantesca campaña, a la que se sumó mucha gente, porque le parecía que había mucho elemento de farsa en la actividad de los partidos dentro de la universidad, para conseguir el voto en las elecciones generales. Pero esto ya indicaba que el escenario era completamente distinto del curso 74-75, donde la represión estaba allí, la policía estaba allí, la cárcel estaba allí”.<sup>936</sup>

Ahora bien, independientemente de la valoración respecto de la importancia del ME en la lucha contra el franquismo, o de su éxito o fracaso en este proceso, la mayoría de los entrevistados rescata la experiencia colectiva de participar en un movimiento con un contenido político tan intenso, en un momento clave de la historia del país. Como recuerda Elena Hernández S.,

“cuando veíamos una movilización activa, evidentemente, nos creíamos estar tocando el cielo con las manos, ‘esto ya está, esto es estupendo, somos la pera’. Cuando no, cuando la represión era demasiada, el desánimo era total. Ahora sí había una cierta sensación de construcción de la ciudadanía, éramos importantes. Por primera vez, colectivamente, para la mayoría de nosotros se estaba haciendo algo en común, más allá de la vida privada. Se sentía la política como una posibilidad, y eso era estupendo”.<sup>937</sup>

---

<sup>935</sup> Entrevista a Santos RUESGA.

<sup>936</sup> Entrevista a Carlos TAIBO.

<sup>937</sup> Entrevista a Elena HERNÁNDEZ S.



## CAPÍTULO 12

### 1973-1984: LOS AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL CHILENO BAJO LA DICTADURA.

En los capítulos destinados al caso chileno estudiaremos los momentos más importantes del proceso de reconstrucción y desarrollo del movimiento estudiantil bajo la dictadura de Pinochet y los primeros años de la transición a la democracia, enfocando el análisis principalmente en los momentos de auge y de desgaste. Para ello utilizaremos tanto fuentes documentales como testimonios de los protagonistas, algunos de los cuales se encuentran en la bibliografía secundaria que hemos revisado para esta Tesis. Nuestro objetivo es observar la evolución de este movimiento, su imbricación con el movimiento de oposición general contra la dictadura y sus problemas internos. También nos interesa comprender qué ocurre con el ME chileno una vez que se ha recuperado la democracia, como una forma de entender cómo la sociedad civil se recobra luego de largos años bajo un régimen autoritario. Partimos de la base de que los movimientos sociales no surgen solos sino agrupados, y tal como señala Sidney Tarrow, “es en el interior de esa espiral de ciclos de acción colectiva cuando consiguen sus mayores éxitos”.<sup>938</sup>

Al igual que lo que ocurre en el caso español visto en los capítulos anteriores, en el contexto de una dictadura militar las oportunidades políticas serán escasas y las dificultades muchas. Sin embargo, el régimen dejará algunos espacios que los dirigentes estudiantiles sabrán aprovechar para reorganizar al movimiento. En cuanto a las estructuras de movilización, éstas serán el factor más complejo para el movimiento estudiantil y el que provocará fisuras importantes entre sus dirigentes. Por último, los procesos enmarcadores van a desarrollarse en un arco amplio de significados, que van desde la lucha general contra la dictadura a la resolución de conflictos propios de la vida universitaria. Veremos cómo en distintos momentos van a primar ciertas estructuras de movilización y ciertos marcos de significado, dependiendo de los objetivos que se plantee el movimiento y veremos cómo este movimiento se inserta en el contexto general de la oposición al régimen y qué sucede con el consenso interior.

Pese a que utilizaremos el mismo enfoque que hemos aplicado al caso español, la investigación en Chile se ha realizado de manera diferente debido,

---

<sup>938</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p. 197.

fundamentalmente, a la escasez de material documental y de bibliografía secundaria respecto del tema. Para analizar el ME español contamos con una gran cantidad de fuentes primarias, derivadas principalmente de los archivos del Partido Comunista de España y de la Fundación Pablo Iglesias, en donde pudimos encontrar documentos de diversas organizaciones políticas que operaban en la universidad. Para el caso chileno, en cambio, hemos utilizado el Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es relativamente nuevo y cuenta con documentos de dicha federación, y el Fondo Documental Eugenio Ruiz Tagle, de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que reúne documentos de diverso tipo de organizaciones de oposición a la dictadura, entre los que se incluyen algunos partidos políticos con presencia universitaria. De esta manera, la cantidad de fuentes en uno y otro caso es muy diferente, lo que, por cierto, hace que hayamos podido profundizar más en el caso español que en el caso chileno.

Ahora bien, somos también conscientes de las diferencias de espacio y tiempo que existen entre los dos ME que queremos comparar. El movimiento estudiantil español que protagoniza esta investigación se desarrolla en la década de los 70, inspirado en su lenguaje e ideología por los movimientos estudiantiles de 1968 (podríamos hablar de un lenguaje revolucionario, con una fuerte influencia marxista de distintas tendencias, desde leninista hasta maoísta, pasando por trotskista), y con Europa como referente. Mientras, el movimiento estudiantil chileno que aquí analizamos se desarrolla en la década de los 80, utiliza un lenguaje menos doctrinario y la referencia inmediata es América Latina. En Chile, el PC de los años 80 todavía propiciaba el socialismo como objetivo final, pero a través de una vía democrático-popular, no revolucionaria.<sup>939</sup> En este sentido, en Chile se habla mucho menos de revolución que de democracia.

Pese a estas diferencias de base, creemos posible la comparación porque en su desarrollo y comportamiento ambos movimientos tienen una evolución similar. Cambia el contexto, cambia el escenario y por cierto, cambia la cultura política de los pueblos en los cuales se desenvuelven, pero de todos modos nos parece un ejercicio interesante el observar cómo los estudiantes se sitúan en la lucha contra una dictadura y posteriormente, cómo rearticulan su quehacer y su discurso cuando se ha recuperado la democracia.

---

<sup>939</sup> Alfredo RIQUELME S: *Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia*, Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2009, p. 129.

Para comenzar a analizar el caso chileno, creemos necesario hacer una pequeña referencia a la institución más importante del ME de este país y que, por cierto, será protagonista en los capítulos que siguen: la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

La FECH fue fundada en 1906, como una federación de centros de estudiantes de las distintas carreras que componían la Universidad de Chile (UCH), convirtiéndose así en la organización que aglutinaría y representaría a todos los estudiantes matriculados en la UCH. Con el tiempo, la FECH se fue convirtiendo en un organismo con bastante presencia en la sociedad civil, alcanzando su mayor protagonismo desde la década de los 60 en adelante. En 1967, en colaboración con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) inició la llamada Reforma Universitaria, que buscaba cambiar el carácter elitista de las universidades y hacerlas más abiertas. La reforma supuso un profundo cambio en el ejercicio del gobierno universitario, los estudiantes exigieron mayor inclusión en la toma de decisiones y una mayor igualdad entre las voces de los académicos, estudiantes y trabajadores. Por ejemplo, tras la Reforma Universitaria de 1968 se logró en la Universidad de Chile un cogobierno de un 65% para profesores, 25% para estudiantes y 10% para empleados administrativos y obreros.

Esta transformación se logró gracias a una fuerte movilización de los estudiantes que presionaron al gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei Montalva para que interviniera. A partir de entonces, el movimiento estudiantil fue un agente activo en la movilización de distintos sectores, y al igual que la sociedad chilena, vivió en carne propia la polarización y el radicalismo político de los años 70. Por esta razón, cuando se produjo el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, la universidad fue uno de los primeros lugares en ser intervenido y en el cual se produjeron arrestos, expulsiones, desapariciones y muertes de profesores, alumnos y trabajadores.

La dictadura militar intervino todas las universidades, pero fue especialmente dura con la Universidad de Chile ya que en ella se encontraba la cúpula del movimiento estudiantil y los sectores más radicales del mismo. El régimen destituyó al Rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger, y nombró en su reemplazo al general de aviación César Ruiz Danyau. Sin embargo, la intervención no terminaría aquí sino que iría directamente contra lo que posibilitaba, a juicio de los militares, la existencia de un movimiento estudiantil opositor: la universidad reformada. Para concretar la intervención era necesario asegurar el principio de unidad de mando, es decir,

administrar la universidad como un cuerpo militar. El Decreto-ley 50, de 2 de octubre de 1973 establecía que los Rectores delegados serían designados por la Junta de Gobierno, por lo que desde la designación de Ruiz Danyau se irán sucediendo los Rectores militares en la UCH. El Decreto-ley 111, de 3 de octubre de 1973, señalaba que el Rector delegado podía disponer de todas las funciones y atribuciones que la legislación de la Universidad de Chile y demás leyes, hubieran entregado a las autoridades colegiadas o unipersonales. Es decir, el nuevo Rector delegado tenía facultad para resolver todos los asuntos relativos al personal de la universidad, además de poder hacer nombramientos sin sujeción a concursos públicos.

Asimismo, el DL 111 disolvió automáticamente los Claustros Universitarios y todos los cuerpos colegiados que componían el gobierno de la Universidad de Chile. En virtud de este Decreto, la FECH fue disuelta e ilegalizada y toda actividad reivindicativa fue calificada de peligrosa y subversiva. En suma, durante el primer año de la dictadura, la Universidad de Chile perdió al 25% de su personal docente, al 10% del personal no académico y al 18% de sus estudiantes,<sup>940</sup> lo que fue un golpe devastador para el movimiento estudiantil.

### **I. 1977 – 1983: la rearticulación de los estudiantes: la ACU y la FECECH.**

En 1976 los estudiantes de la Universidad de Chile iniciarán una incipiente reorganización en torno a actividades culturales, que eran más discretas y, por lo tanto, más difíciles de reprimir que las actividades políticas. En este contexto fue fundamental la Agrupación Cultural Universitaria (ACU), creada en 1977 y que impulsó, organizó y desarrollo diversas labores culturales, generando así una plataforma inmejorable para la reorganización del movimiento estudiantil de corte más político. A partir de 1975 fue aumentando la actividad cultural en la universidad. En los distintos campus de la UCH se crearon pequeños grupos, talleres y organizaciones (de teatro, de música, de danza, de literatura, etc.) que trabajaban de manera independiente, y que poco a poco comenzaron a vincularse. Además, hacia 1977 ya había comenzado, aunque tímidamente, la rearticulación de las juventudes de los partidos políticos, lo que también contribuyó a la coordinación de los distintos grupos<sup>941</sup>.

---

<sup>940</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 23.

<sup>941</sup> V. MUÑOZ TAMAYO. *ACU. Rescatando el asombro*, p. 51.

A comienzos de 1977, algunos estudiantes de la UCH decidieron organizar un festival de música popular y folklórica, con lo que comenzó a tejerse una red de contactos entre grupos de distintos campus y de distintas disciplinas, para organizar esta instancia. Como señala Víctor Muñoz, estudiantes de la Facultad de Ingeniería fueron los primeros en establecer vínculos con otras facultades, y desde ahí, “irradiaron los contactos con el resto de las escuelas, en una dinámica en que uno sumaba a otro aprovechando en ello todas las redes a disposición, ya fuesen amistades, de solidaridad e identidad artística entre talleres y entre militantes de un mismo partido político que entonces, aún precariamente, comenzaban a recomponer sus orgánicas”.<sup>942</sup>

El Festival, realizado en agosto de 1977, fue un éxito. Logró convocar a miles de estudiantes, que demostraron que estaban interesados tanto en las actividades culturales como en la rescate de la universidad como espacio de desarrollo intelectual y social, de cara a la sociedad. En este sentido, “la convocatoria de este primer festival fue clara en decir que lo que se quería era volver a ser protagonista en la sociedad desde una identidad común, siendo libre en la percepción (ojos), la palabra (voz), la acción (músculos) y la proyección (imaginación) (...), siendo libres de ataduras, libres, a fin de cuentas, de la dictadura. Todo ello se decía sin escribir “Dictadura”, “Libertad” ni “Pasado”, palabras que no se necesitaron porque ahí estuvieron los contenidos en símbolos: la libertad en una paloma, el pasado prohibido en Violeta Parra y la Dictadura en todo aquello a lo que se hacía frente, lo que forzaba a los sujetos y a la universidad a “dar la espalda a su propia historia”.<sup>943</sup>

El éxito del Festival sirvió como aliciente para que los estudiantes que habían participado en su organización decidieran dar continuidad a este movimiento cultural-artístico-político, que era inédito en la dictadura de Pinochet. Así nació la Agrupación Cultural Universitaria, ACU, que entre 1977 y 1982 promovió un sinnúmero de iniciativas, ya no solo ligadas a la música y al folklore, sino también al teatro, la literatura y las humanidades en general. En este sentido, la ACU fue el primer – y por lo demás, exitoso – intento de recomposición del movimiento estudiantil chileno, ya que supo ligar con inteligencia la actividad cultural con la actividad política, consiguió sortear muchas de las dificultades impuestas por las propias autoridades universitarias y ofreció una plataforma inmejorable para la creación de redes de contacto entre los distintos grupos de estudiantes.

---

<sup>942</sup> V. MUÑOZ TAMAYO. *ACU. Rescatando el asombro*, p. 55.

<sup>943</sup> V. MUÑOZ TAMAYO. *ACU. Rescatando el asombro*, p. 59.

De esta manera, y pese a que las universidades, y particularmente la UCH estaban intervenidas y en su interior deambulaban agentes de inteligencia vestidos de civiles y delatores, los estudiantes decidieron utilizar la plataforma cultural como una oportunidad política para la reorganización. Como señala Tarrow, “en los sistemas autoritarios, en los que los manifestantes no violentos serían rápidamente reprimidos, los movimientos de oposición se han especializado en organizar formas de alteración simbólicas, pacíficas y discretas para evitar la represión a la vez que simbolizan la protesta”.<sup>944</sup>

Ahora bien, en el contexto de la universidad intervenida, cobró muchísima importancia el tema de la representación de los estudiantes ante las autoridades universitarias. Dicha representación se basaba en la misma premisa que la elección de Rector: en la designación. Así, en cada área o campus se elegía a dos coordinadores, designados por el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, quien podía tener en cuenta a los centros de alumnos respectivos, cuyas directivas eran también designadas por la Vicerrectoría.<sup>945</sup> Estos dirigentes estudiantiles conformaban el llamado Consejo Superior Estudiantil, creado en noviembre de 1976. Indudablemente, con este sistema era prácticamente imposible que estudiantes de la oposición llegaran a ser representantes.

Sin embargo, con la creación del Consejo Superior Estudiantil, los universitarios disidentes tuvieron un interlocutor contra quién hacer sus reclamos y críticas, y de esta forma se generó un debate en el cual los disidentes exigían más representatividad (o representatividad a secas) y los designados intentaban legitimar su postura. Pese al apoliticismo que predicaba el Consejo, la discusión política era inevitable. Entre las fiestas y los partidos de fútbol, los patios de la universidad se convirtieron en “un circunstancial y bullicioso *ágora* en tiempos de silencio, mediante la celebración de fiestas mechonas, (novatadas) y trabajos voluntarios, espacios de rearticulación de lo público y lo colectivo en medio del reflujo societario predominante”.<sup>946</sup>

En este contexto, en octubre de 1978, tuvo lugar el nacimiento de una nueva instancia de representación, subordinada al régimen y a las autoridades designadas de la UCH: la Federación de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile (FECECH), que pretendía representar un nuevo escalón en la jerarquía piramidal que debía regir en la

---

<sup>944</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p. 143.

<sup>945</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 64.

<sup>946</sup> *Ibid.*, p. 71.

“nueva universidad”. El movimiento gremialista universitario, creado por Jaime Guzmán a fines de la década de los 60, y especialmente el Frente Juvenil de Unidad Nacional<sup>947</sup>, tuvieron particular interés en controlar la FECECH como herramienta para difundir su ideología<sup>948</sup> en la Universidad de Chile, por lo general más reacia que otras universidades públicas al pensamiento político de derecha. Y no les fue difícil porque la elección de los centros de alumnos era indirecta, debía estar autorizada por los decanos y era controlada directamente por el Rectorado, por lo tanto, era lógico que los Rectores designados por el régimen escogieran a centros de alumnos que concordaran con sus ideas políticas. De todos modos, la FECECH introducía una novedad: la elección de delegados. Para escoger a estos delegados, cada presidente de centro de alumnos convocaba a los estudiantes de su carrera a manifestar por escrito sus preferencias respecto de tres alumnos de ella. Una vez establecidas las preferencias, el presidente del centro de alumnos junto a alguna autoridad universitaria procedía a designar a los dos delegados de entre las cuatro primeras mayorías.

Es interesante que dentro del rígido esquema de designación que existía para elegir a las autoridades universitarias y estudiantiles, se abriera un espacio para la manifestación de los estudiantes. De forma paralela, los disidentes crearon sus propios espacios de deliberación, como periódicos y revistas, conciertos de música y poesía, y también mítines y reuniones clandestinas. En la medida en que estos espacios se fueron haciendo más visibles, también se visibilizó la presencia de lo político en la universidad.

La creación de la FECECH significó un avance importante en la rearticulación del movimiento estudiantil. El espacio que se entregaba a los estudiantes para elegir a los delegados fue utilizado como una oportunidad política por los disidentes, aunque la decisión de ingresar en la estructura de participación fue ardua y dividió a los grupos opositores. Como señala John McCarthy, la discusión respecto de la estructura que

---

<sup>947</sup> Creado en 1975-1976. Para más información sobre el gremialismo y el Frente Juvenil de Unidad Nacional ver Verónica VALDIVIA: “Lecciones de una Revolución. Jaime Guzmán y los gremialistas, 1973-1980”. En Verónica VALDIVIA, Rolando ÁLVAREZ y Julio Pinto: *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y Derechas en el Chile de Pinochet. 1973-1981*. Vol I, Santiago, LOM Ediciones, , 2006.

<sup>948</sup> El gremialismo es un movimiento político chileno de inspiración tradicionalista y católica, que surge en 1967 como respuesta al fenómeno de la Reforma Universitaria. Su líder, Jaime Guzmán, se inspiró en el pensamiento corporativista y falangista de José Antonio Primo de Rivera, que luego fue mezclando con otras corrientes, como el racionalismo y la idea de progreso, aunque siempre limitados por los límites de lo que consideraban natural. En términos muy generales, el gremialismo proponía dar mayor poder y autonomía a los cuerpos intermedios de la sociedad y utilizaba un lenguaje apolítico, aunque ciertamente, apoyaba al régimen de Pinochet, hasta el punto de que Jaime Guzmán es considerado uno de los ideólogos detrás de éste.

finalmente tendría el movimiento, esto es, la estructura de movilización,<sup>949</sup> fue fundamental en el caso de los universitarios chilenos, ya que en ella van a confluir dos corrientes que actuarán unidas en un principio, pero que pronto comenzarán a mostrar fisuras.

Los demócrata cristianos y los comunistas abogaban por ingresar a la FECECH para, desde ella, crear nuevos espacios de representación de los estudiantes, mientras los jóvenes socialistas, MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) e Izquierda Unida (IU) rechazaban esta posibilidad y propiciaban formas alternativas de poder estudiantil. De todos modos, los estudiantes disidentes impulsaron diversas iniciativas tendientes a manifestar su desacuerdo con la universidad intervenida, entre ellas se contaban las ocupaciones pacíficas de las oficinas administrativas de los decanatos, los "días del ruido" en que todos los estudiantes hacían ruido, los "días del silencio", etc. En la medida que el movimiento consiga reorganizarse y se inserte en un contexto de protestas mayor, las formas de acción pacíficas serán combinadas con formas de acción violentas.

A pesar de sus diferencias internas, la reorganización del movimiento estudiantil comenzó a hacerse más sólida y visible, con actividades de repudio contra la dictadura, participación de los propios estudiantes en manifestaciones generales, e instancias de diálogo con los estudiantes oficialistas sobre los problemas propios de la universidad, como el alza de aranceles a los estudiantes. Así, entre 1979 y 1980 el movimiento estudiantil fue incrementando su agitación.

Sin embargo, en 1981 recibió un golpe inesperado: la Ley General de Universidades (LGU), compuesta por un compendio de decretos con fuerza de ley (DFL) que modificaban radicalmente la relación entre el Estado y las universidades públicas. En términos generales, esta nueva ley permitía la creación de universidades privadas, a la vez que establecía que sólo las universidades podrían otorgar grados de licenciado, magíster y doctor; prohibía la participación de los estudiantes y administrativos en los organismos encargados de la gestión y dirección, y los dejaba fuera de la elección de las autoridades universitarias.<sup>950</sup> Además se modificaba completamente el sistema de financiamiento de las universidades, que en adelante

---

<sup>949</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 205.

<sup>950</sup> José Joaquín BRUNNER: "Informe sobre desarrollo y el estado actual del sistema universitario en Chile". Documento de Trabajo FLACSO, Núm. 227, Diciembre de 1984, p. 65-66. <http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/1984/DT/001008.pdf>.



constaría de dos partes: el aporte fiscal directo, entregado por el Estado; y el aporte fiscal indirecto, que sería “prorrateado entre las universidades según el número de los 20 mil mejores postulantes que ingresen a ellas”.<sup>951</sup> Esto, en la práctica, significó la disminución de aportes del Estado: si antes de 1973 era de un 80%, después de la Ley llegó al 50%. Además, se incorporó el cobro de aranceles a los estudiantes por la docencia recibida y ya no por la situación económica del alumno, para lo cual se creaba el “crédito fiscal universitario para los alumnos que lo requieran, y que les permitirán cancelar el costo de la enseñanza, crédito que será reintegrado a largo plazo y con bajo interés”.<sup>952</sup> Lo que estaba en la base de este cambio era el principio de subsidiariedad del Estado, en el sentido de que éste no consideraba como parte del aparato estatal a las universidades públicas, ya que gozaban de autonomía (puramente nominal en este período), por eso el sistema de financiamiento tendía a privilegiar la calidad de la enseñanza a través del aporte fiscal indirecto, reduciendo así el financiamiento directo. Por esto mismo, la Ley permitía y estimulaba la creación de universidades privadas, que tenían la misma posibilidad que las públicas de conseguir el aporte fiscal indirecto. De hecho, el aporte fiscal directo iría decreciendo con los años, a medida que el aporte fiscal indirecto iría aumentando, pero se repartiría ahora entre más universidades, introduciendo un elemento de competencia hasta entonces desconocido en el sistema universitario chileno.<sup>953</sup> Básicamente, la LGU tendía al autofinanciamiento de las universidades públicas, disminuyendo al máximo el aporte estatal a éstas.<sup>954</sup>

La institución más afectada por esta normativa fue, sin duda, la Universidad de Chile, ya que fue privada de todas sus sedes regionales (de ellas surgieron 9 universidades públicas nuevas), y de sus carreras pedagógicas y tecnológicas.<sup>955</sup> Además, la UCH era la que percibía mayores ingresos de parte del Estado, por lo que los recortes de éstos la afectaron sobremanera. Si hasta 1981, la Universidad de Chile

---

<sup>951</sup> Ibid., p. 68.

<sup>952</sup> Ibid.

<sup>953</sup> Ibid., p. 73-74.

<sup>954</sup> Si antes de la creación de las universidades privadas, las estatales percibían el 100% de aportes del estado, a partir de 1982, estas últimas percibieron solamente en 55,9% del aporte fiscal directo, mientras las privadas recibieron el 44,1%. En J. J. BRUNNER, “Informe sobre desarrollo y el estado actual del sistema universitario en Chile”, p. 95.

<sup>955</sup> En 1981, el Instituto Pedagógico fue separado de la Universidad de Chile y se constituyó como un ente autónomo. A partir de la ley, pasó a llamarse Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, pero en 1986 recuperó su calidad universitaria, pasando a ser la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Las carreras técnicas de la Universidad de Chile vivieron una situación similar cuando en 1981 fueron separadas de la UCH para formar el Instituto Profesional de Santiago. En 1993, ya en democracia, el IPS pasó a ser la Universidad Tecnológica Metropolitana.

recibía el 43% del presupuesto estatal destinado a educación superior, a partir de la Ley General de Universidades solamente recibía el 25,68% de todo el aporte fiscal (incluyendo directo, indirecto y crédito fiscal).<sup>956</sup>

En este contexto, a partir de la aplicación de la LGU de 1981, que supuso cambios profundos en el sistema de financiamiento y en la autonomía de las universidades públicas, la ACU comenzó su declive porque con la nueva legislación se abrió una nueva etapa, más política, dentro del ME chileno. Así, desde la misma FECECH, los estudiantes de oposición comenzaron a desarrollar una actividad política tendiente a reorganizar al movimiento estudiantil para oponerse a la LGU, pero ahora tenían en mente un objetivo más ambicioso: restaurar la antigua FECH, aquella institución que había aglutinado a los estudiantes de la Universidad de Chile y que había protagonizado momentos destacados de la historia política del país.

El deseo de restaurar una federación histórica y no crear una nueva tiene directa relación con lo que los especialistas en movimientos sociales llaman “procesos enmarcadores”. La FECH había luchado durante años por hacer de la universidad un espacio democrático, llegando a su punto culminante en el año 1967 con la Reforma Universitaria. En este sentido, la FECH era un símbolo de lucha que dotó de sentido al nuevo movimiento estudiantil, y como señalan McAdam, McCarthy y Zald, los significados compartidos y los conceptos a través de los cuales las personas definen su situación son fundamentales para la creación de movimientos sociales. De esta manera, no basta con que haya oportunidades políticas y estructuras de movilización definidas, es necesario que las personas se sientan agraviadas u ofendidas, y que consideren que la movilización y la acción colectiva ayudará a solucionar esta situación.<sup>957</sup>

Siguiendo con el análisis de los procesos enmarcadores que nutrieron al ME chileno, debemos hacer referencia a las protestas nacionales que se produjeron en el país una vez al mes, a partir del 11 de mayo de 1983 y que asumieron la forma de una oleada de movilización general contra el régimen de Pinochet. Estas protestas tienen su origen en diversas variables, pero las principales son la crisis económica que se mantenía desde 1981, con altas tasas de cesantía e inflación; el despertar de los actores políticos y sociales que habían estado presentes en la esfera pública desde la década de los 70 pero que la dictadura había silenciado a través de la represión; y el llamado de los trabajadores del cobre a realizar un gran paro nacional que pusiera en jaque al régimen.

---

<sup>956</sup> “Informe sobre desarrollo y el estado actual del sistema universitario en Chile”, p. 96-99

<sup>957</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 26

Finalmente y por temor a la represión, el paro se reemplazó por una protesta, que se transformó en una fuerte e inesperada manifestación en contra del régimen.

Durante las protestas, los diferentes movimientos sociales se unieron en torno a la idea de derribar a la dictadura a través de la movilización social. En este proceso, las protestas de los estudiantes tuvieron especial importancia. En la mañana del 11 de mayo de 1983 los universitarios se manifestaron con intensidad en las facultades de Ingeniería, Derecho, Medicina de la Universidad de Chile y en el ex Pedagógico.<sup>958</sup> En este contexto, las protestas fueron fundamentales para la reorganización del movimiento estudiantil, ya que en ellas evidenciaron que la contestación al régimen militar era masiva, y que estaba dispuesta a ocupar el espacio público.<sup>959</sup>

Además, las protestas también fueron una instancia de cambio en los repertorios de acción, tanto de los estudiantes como de la policía. La represión ya no se hacía de forma selectiva sino de manera abierta e indiscriminada, grupos de carabineros<sup>960</sup> seguían a los estudiantes hasta dentro de los recintos universitarios, disparando balines y balas. Por su parte, los estudiantes respondían de forma violenta, arrojando piedras y cócteles molotov a las fuerzas del orden. Este repertorio se hizo tan recurrente que los mismos estudiantes se organizaban para provocar a la policía y establecer rutas de huida.

La violencia política caracterizó toda la época de las protestas, poniendo a prueba la tolerancia del régimen y haciendo de ella un llamado de atención a otros movimientos de oposición. Durante los días de protesta las personas se abstendían de realizar trámites bancarios o en oficinas públicas, no mandaban a sus hijos al colegio, a una hora concertada (generalmente a las 20 o 21 horas) se tocaban cacerolas, en los barrios periféricos se organizaban barricadas, etc. La noche era el momento más complejo de la jornada, ya que muchas veces se producían cortes de luz, lo que amparaba situaciones extremas. En la represión de las jornadas de protesta no sólo actuaba la policía, sino también los militares, e incluso se ha registrado la participación de civiles en autos sin patente (presumiblemente de la CNI) que disparaban a diestra y siniestra. Según consta en el Informe Rettig, lo más grave de este período fue “el diseño represivo de las protestas mismas, que consistió en el empleo de una violencia excesiva

---

<sup>958</sup> Campus donde estaban las carreras pedagógicas de la Universidad de Chile, y donde se producían las mayores actividades en contra del régimen.

<sup>959</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 152.

<sup>960</sup> Fuerza policial chilena, usaremos mayúscula cuando se hable de la institución y minúscula cuando se hable de individuos.

por parte de Carabineros y el Ejército y la utilización de civiles no identificados que desde automóviles y al amparo de la noche disparaban indiscriminadamente contra quienes protestaban – particularmente en barrios populares – dejando un gran número de víctimas fatales”.<sup>961</sup>

Ahora bien, como señala Sidney Tarrow, “la violencia es el rastro más visible de la acción colectiva, tanto en la cobertura que los medios contemporáneos le ofrecen como en el registro histórico. No resulta sorprendente, ya que la violencia es noticia y preocupa a aquellos cuya tarea es mantener el orden”.<sup>962</sup> Los repertorios de acción colectiva que se dieron durante las protestas fueron aumentando en violencia, la cual venía de ambos lados, aunque como ya hemos señalado, la capacidad de acción de la policía o de las fuerzas especiales eran muchísimo mayor que la de la población movilizada. Así, si los manifestantes lanzaban palos y piedras o hacían barricadas, la policía respondía lanzando agua, gases lacrimógenos, balines y balas. Por esto, muchas de estas jornadas de protesta se saldaron con decenas de muertos y heridos, producto, en su mayoría de la represión policial.

De esta forma, el movimiento de oposición general recurrió a la violencia no sólo como respuesta y defensa por la represión, sino también como una manera de romper la barrera de la censura, que acallaba tanto a los medios escritos como a los audiovisuales, y hacerse visible en medio de una sociedad civil silenciada por el miedo. Los estudiantes fueron, en este aspecto, la vanguardia de la protesta social, ya que llevaban luchando contra la represión desde los inicios del régimen. Así, el éxito de las protestas contribuyó a la formación de un movimiento ciudadano en el cual el estudiantil se insertó, con éxito en términos generales, pero con bastantes riesgos en lo que se refiere a la identidad propia de dicho movimiento. Las protestas crearon una identidad colectiva en torno a la disidencia del régimen, como apunta Yerko Ljubetic, dirigente estudiantil: “Existía un sentimiento colectivo de los chilenos, que era el reconocerse en las protestas, en la esquina de la calle, en la fogata o la barricada, en el local universitario, en la población, o en cualquier lugar en donde se encontraban para expresarse”.<sup>963</sup>

---

<sup>961</sup> VV.AA: *Nunca más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, Santiago, LOM Ediciones, Santiago, 1999, p. 92-93.

<sup>962</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p.139

<sup>963</sup> Entrevista a Yerko Ljubetic en Ricardo BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, Santiago, CESOC, 1988, p. 57.

Esta creación de identidad contribuirá a dar mayor cohesión y fuerza al movimiento opositor, y aunque el movimiento estudiantil haya sido uno de los protagonistas durante las protestas, coincidimos con Tarrow en que “la identidad colectiva es un proceso básico en la formación de los movimientos, bien sea heredada como identidad categórica o creada en el curso de un conflicto con los adversarios, pero contiene en su interior las semillas del aislamiento, del sectarismo y del “crepúsculo de los sueños comunes””.<sup>964</sup>

En términos generales, la movilización social producida a partir de 1983 y que se extendería hasta 1986, tuvo éxito ya que consiguió poner al régimen en una situación delicada, tanto así que se volvió a imponer el toque de queda, se sacaron tanques a la calle, y se mandó al exilio a numerosos dirigentes sindicales y políticos. Sin embargo, el movimiento opositor no logró completar su objetivo: derribar al régimen. Pese a esto, la oleada de protestas no cayó en el vacío ya que se transformó en la plataforma de convergencia de los grupos opositores al régimen.

En el caso particular del movimiento estudiantil, podemos considerar que la época de las protestas tuvo consecuencias dicotómicas, ya que contribuyó de forma fundamental a la reorganización y democratización de éste, pero también a la ruptura del consenso interior.

## **II. 1984: el renacer de la FECH y la relación con los partidos políticos.**

La oleada de protestas favoreció la extensión de un movimiento que exigía la democratización de los estatutos de la FECECH, ofreciendo otra oportunidad política al movimiento opositor. Esto se tradujo en una fuerte campaña a favor de la votación directa de centros de alumnos, que tuvo efectos positivos en Derecho, que el 19 de julio de 1983 eligió por primera vez a un centro de alumnos de oposición. A éste le siguieron los centros de alumnos de Ciencias Básicas, Filosofía y Medicina Norte<sup>965</sup>, que se habían apartado de los estatutos de la FECECH, y Arquitectura y Medicina Oriente, que habían conseguido elegir a delegados de oposición dentro del sistema.

La demanda de democratización de la FECECH comenzaba a cobrar fuerza entre los representantes de los alumnos, y quizás más importante, desde dentro de la misma

---

<sup>964</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p. 197.

<sup>965</sup> La Universidad de Chile tiene distintos campus en donde se imparte la carrera de Medicina, por eso están señalados con sus respectivas orientaciones geográficas.

Federación. Cada vez más centros de alumnos elegían de forma directa a sus delegados, y en la mayoría de ellos triunfaba la oposición. La Facultad de Ingeniería era clave para la FECECH porque, debido al alto número de alumnos, tenía una importante representación en la Federación. En este contexto, a fines de septiembre de 1983, los estudiantes de oposición convocaron a un plebiscito en Ingeniería para resolver el tema de la representación directa. En 42% de los alumnos apoyó el sistema de elección directa, por lo que dos semanas después se eligió a una directiva de oposición encabezada por el socialista Ricardo Herrera, paralela a la directiva oficialista elegida bajo el sistema indirecto.

Para resolver la situación de tener dos directivas – las cuales se negaban recíprocamente – , ambos centros de alumnos decidieron celebrar un plebiscito, el 17 de mayo de 1984, para que los estudiantes de manifestaran respecto de su permanencia en la FECECH. El 56,5% votó por retirarse de la FECECH, validando así al centro de alumnos de oposición. Ante esta pérdida de poder, la dirigencia de la FECECH decidió autodisolverse, y Rectoría dictó una normativa en la cual establecía que los estudiantes podían organizarse de forma autónoma, con sus propios estatutos, sin recurrir a la autoridad universitaria, siempre que se hiciera de manera “respetuosa”. Además, señalaba que no se admitiría ninguna organización que empleara la violencia y que perjudicara el normal desarrollo de las actividades académicas. De esta forma, los centros de alumnos de oposición comenzaron a planear el renacimiento de la FECH, no sólo como instancia de oposición sino también - y en esto rebasaban los límites puestos por Rectoría - como instancia de representación, ante las autoridades universitarias, de reivindicaciones de todos los estudiantes.

La reorganización de la FECH fue, sin duda, una excelente oportunidad política para la rearticulación del movimiento estudiantil. Reconstruir la antigua federación era, a ojos de los estudiantes, infligir un golpe al régimen, ya que significaba abrir una grieta en la intervención en las universidades e introducir un elemento democrático en un país que carecía por completo de ello. En este sentido, el dirigente socialista Ricardo Brodsky señala que: “Intuíamos, en aquel entonces, que reconstruir la FECH era el mejor golpe que podíamos dar a la Dictadura y su lógica de dominación. No sólo porque implicaba dar consistencia y permanencia a la movilización que venían protagonizando los estudiantes sino, sobre todo, porque importaba una derrota definitiva

a los intentos del régimen militar de dominar a la juventud por medio del olvido y el temor”.<sup>966</sup>

De esta manera, el renacimiento de la FECH se transformó en la bandera de lucha del movimiento estudiantil, otorgándole cohesión y unidad a un colectivo de intereses muy diversos. Para conseguir este objetivo, los centros de alumnos de oposición se organizaron en la Coordinadora de Centros de Alumnos Democráticos, que decidió convocar a un plebiscito en el cual los estudiantes podrían manifestarse en torno a la restauración de la FECH o a la alternativa de la “libre afiliación”, propiciada por Rectoría. Dicha alternativa era un claro intento por diluir el movimiento estudiantil en la lógica del neoliberalismo implantado por el régimen, y así lo entendieron los dirigentes estudiantiles. El triunfo de la “libre afiliación” habría significado el aislamiento e individualidad de los centros de alumnos, y por lo tanto, el fin del movimiento. Ahora bien, el plebiscito no dio mayoría absoluta a la opción de restaurar la FECH, porque los grupos de derecha, cómodos en la estructura de la FECECH consideraban que restaurar la antigua federación les restaría poder dentro de la Universidad, y se opusieron. Para solucionar esta situación, los Centros de Alumnos que estaban por la restauración convocaron a una elección de Asamblea Constituyente para que elaborara los estatutos de la Federación. Estos estatutos fueron aprobados en octubre de 1984, en un plebiscito, con una amplia mayoría, con lo cual quedó legitimada la reconstrucción de la FECH.

Y aquí podemos encontrar un primer punto de comparación con el ME español, y que tiene que ver con la recuperación de instituciones u organizaciones que han sido importantes para los estudiantes. Así como en Chile se quiso reconstruir a la FECH, en España también se intentó reconstruir la FUE (Federación Universitaria Escolar, creada en 1930 y disuelta durante la guerra civil), en 1946, como una manera de hacer frente al Sindicato Español Universitario de Falange (SEU), único y obligatorio para todos los universitarios españoles (ver capítulo 1). En la década de los 70 también se intentó recuperar la FUDE, Federación Universitaria Democrática Española, fundada en 1961 por el PCE y el FLP. Sin embargo, la FUDE de los 70 fue cooptada por grupos de izquierda radical cercanos al FRAP (por eso, se la conoció como FUDE-FRAP); y finalmente, hacia 1976, se hizo un último intento por recuperar el SDEU (Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios), creado originalmente en 1967 y que fue la plataforma unitaria de los estudiantes españoles hasta su disolución en 1969.

---

<sup>966</sup> R. BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 32-33.

Todos estos intentos de reconstrucción se basan en la premisa de buscar, en el pasado, un referente para el ME. Incluso podríamos decir que opera una suerte de memoria idealizada de lo que estas organizaciones habían sido en el pasado, y se utiliza su nombre para proyectar esa “unidad perdida” al futuro. Es decir, se intenta recuperar lo que existía antes de un acontecimiento funesto que acabó con una época con la que el movimiento se identifica. Con todo, la gran diferencia que existe entre el caso chileno y el caso español es que la FECH tenía una trayectoria mucho más larga que cualquiera de las instituciones estudiantiles españolas. Como ya hemos dicho, fue fundada en 1906, en cambio las organizaciones estudiantiles españolas como la FUE (1930-1936), la FUDE (1961-1968) y el SDEU (1967-1969) tuvieron pocos años de vida. En ese sentido era mucho más difícil reconstruir una institución que contaba con menos tradición, y por ende, con menos arraigo entre los estudiantes, que una, como la FECH, que tenía, a la altura de 1984 casi 70 años de historia. Posiblemente, esta sea una de las razones por las cuales en España se realizaron varios intentos por crear organizaciones unitarias de estudiantes, aunque ninguno duró en el tiempo, mientras en Chile, la reconstrucción de la FECH fue un éxito y su protagonismo como organización social permanece hasta la actualidad.

Como ya hemos señalado, la reconstitución de la FECH fue un hito para el movimiento estudiantil chileno bajo el régimen militar, ya que supuso revivir a un organismo que había sido clave en la organización y movilización de los estudiantes, desde su fundación en 1906. No fue la primera ni la única, de hecho en otras universidades ya se habían reconstituido federaciones democráticas, sin embargo, la Universidad de Chile era la más grande e importante del país, pese al deterioro y la fragmentación que le impuso la dictadura y sus políticas, por lo que su federación de estudiantes había tenido y tendría en el futuro un peso enorme en el movimiento estudiantil. Además, apenas unos días después de la reorganización de la FECH, las federaciones de estudiantes de las universidades estatales del país se reunieron en Valparaíso y crearon la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile (CONFECH), que tuvo – y ha vuelto a tener en la actualidad – un papel importantísimo en la movilización estudiantil a lo largo de Chile. Como señalan los autores de *Los muchachos de antes*, “muy pronto, la CONFECH encabezaría llamados a movilizaciones, protestas o paros universitarios nacionales, o bien compartiría junto a



otras organizaciones sociales la convocatoria a jornadas de protesta nacional contra el régimen militar”.<sup>967</sup>

Volviendo a la FECH, una vez reconstruida, la federación apuntó sus dardos contra la universidad intervenida y contra la represión del régimen militar sobre los estudiantes y profesores. En este sentido, fue construyendo marcos de significado amplios, que aglutinaran no solamente a los militantes de partidos sino a todos los estudiantes que querían recuperar a la universidad como un espacio público abierto a la sociedad.

“La FECH hará por la universidad lo que ninguno de aquellos que quisieron convertirla en un regimiento fueron capaces de hacer. Compañeros: estamos convencidos de que la fuerza que da la justicia a nuestras demandas, nos ayudará al éxito final, pero este sólo será posible con la solidaridad y el compromiso de todos los estudiantes con su FECH. Enfrentemos con esperanza y optimismo este desafío, sabiendo que la verdad y la historia están de nuestra parte y que nosotros somos los que haremos el futuro”.<sup>968</sup>

Como era de esperarse, el régimen no vio con buenos ojos la reorganización de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por lo que intentó por diversos medios, fundamentalmente represivos, acabar con esta iniciativa. Es importante recordar que la reconstitución de la FECH se produjo en medio de un período de fuerte movilización social, caracterizado por una serie de protestas que se habían iniciado en 1983, producto de la crisis económica que afectaba al país desde el año anterior y, por cierto, de la asfixia que afectaba a gran parte de la sociedad chilena producto de las restricciones, censuras y castigos impuestos por el régimen de Pinochet, desde 1973. De hecho, pocos días antes de que los estudiantes aprobaran la reconstrucción de la FECH, específicamente el 30 de octubre de 1984, se produjo una masiva protesta convocada por el Movimiento Democrático Popular (alianza de partidos políticos y grupos de izquierda encabezados por el Partido Comunista de Chile) y el Comando Nacional de Trabajadores (agrupación sindical semiclandestina que reunía a los dirigentes sindicales de oposición). Esta jornada de protesta, “sorprendió a todo el mundo por su amplitud, y la represión que se sucedió fue a su medida, masiva y violenta. Nueve personas fueron asesinadas, decenas heridas y centenares arrestadas. La protesta y la huelga, ‘la primera huelga nacional y popular’ habían sido apoyadas

---

<sup>967</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 222.

<sup>968</sup> *Boletín FECH*, año I, Núm. 2, Noviembre de 1984. P. 1. Archivo FECH

ampliamente. Premisas de fortalecido retorno de los movimientos populares”.<sup>969</sup> Para contrarrestar la movilización social que, como indicaba el apoyo a la última protesta, se estaba fortaleciendo, Pinochet decidió volver a proclamar el Estado de Sitio, con lo cual se reimpuso también el toque de queda y la censura a los medios de comunicación.

En medio de este ambiente de movilización social y represión, resurgía la FECH, con una fuerte conciencia de su papel como núcleo de la movilización estudiantil y como protagonista en la lucha contra el régimen.

“Las últimas medidas del régimen, destinadas a anular toda manifestación social, ponen especial atención en el sector universitario ya que somos uno de los pocos frentes sociales que posee una orgánica fuerte y estructurada. Por lo tanto, no sólo se trata de defender la federación dentro de los márgenes de la universidad, sino también fuera de estos. (...) Los espacios de libertad conquistados no dependen sólo de las rabietas del tirano. Somos una juventud que ha aprendido a luchar bajo una dictadura. Somos un pueblo que ha sabido organizarse, unirse e inventar métodos de lucha adecuados bajo una dictadura”.<sup>970</sup>

Ahora bien, una vez reconstituida era necesario elegir una directiva para la federación. Sin embargo, mientras más poder obtenían los estudiantes opositores, mayor era el interés de los partidos políticos de oposición (aún proscritos) por participar en ella, ya que veían en la campaña electoral universitaria, una buena plataforma para posicionar sus estrategias de lucha en contra de la dictadura. Por esta razón, la campaña por la directiva de la FECH en noviembre de 1984 involucró directamente a los partidos que se alinearon en concordancia con sus posturas políticas extra universitarias, introduciendo así un elemento de lucha entre los mismos estudiantes. Esta intromisión de los partidos hizo peligrar la labor y el significado de la FECH en el movimiento estudiantil, como lo recuerda Yerko Ljubetic, presidente de la federación en 1984: “Entre los estudiantes la reinserción partidaria no fue tan brusca ni tan intempestiva, pero también se hizo notar. Cada vez fue mas frecuente escuchar a los dirigentes hablar de “nosotros pensamos” más que de “yo pienso”, y entender que tras ese “nosotros” no estaban los estudiantes de tal facultad o escuela, sino la visión del partido en el cual se militaba”.<sup>971</sup>

En este punto es necesario recordar el tema de la estructura de movilización que será crucial para el movimiento estudiantil. Siguiendo a John McCarthy, en cualquier

---

<sup>969</sup> GUILLAUDAT y MOUTERDE: *Los movimientos sociales en Chile*, p. 166.

<sup>970</sup> *Boletín FECH*, año I, Núm. 2, Noviembre de 1984. P. 1-2. Archivo FECH.

<sup>971</sup> Ljubetic en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 58.

movimiento los dirigentes tienen un conjunto de elementos estructurales de movilización, en este sentido, la estructura que cada movimiento tome estará dada por la cohesión interna, los objetivos y las influencias externas. Sin embargo, las estructuras de movilización coherentes nacen en distintas épocas, influidas por la cultura propia del lugar en donde surgen y con una importante carga histórica en lo que a movilizaciones se refiere. Por estas razones, los dirigentes de los movimientos tienen que escoger entre los distintos elementos que componen el imaginario de esa sociedad para generar una estructura de movilización cohesionada. Como señala McCarthy, “esta elección tiene consecuencias tanto en lo referente a la intensidad como respecto de la forma que adopte la movilización colectiva, influyendo asimismo sobre la ampliación o merma de la banda de resultados potenciales que se pueden producir”.<sup>972</sup> En este sentido, en algunos momentos, podremos ver cómo las elecciones del movimiento estudiantil irán afectando su estructura de movilización llevándola hasta el agotamiento.

Para la primera campaña de la FECH, los estudiantes de la Democracia Cristiana (DCU) habían pactado con los estudiantes comunistas una lista conjunta. Dicha decisión no fue del agrado de la Democracia Cristiana (DC) quien intentó, a toda costa, que se disolviera esa alianza. Al no poder conseguirlo, optó por asegurar la presidencia de la FECH a un estudiante de sus filas, Yerko Ljubetic y apoyar la campaña. Por su parte, el Partido Comunista (PC) tampoco estaba convencido del todo con esta alianza, ya que pensaba que los estudiantes comunistas podrían comenzar a centrarse demasiado en los temas universitarios y dejar de lado la movilización social a escala nacional que propiciaba el PC para derribar al régimen.<sup>973</sup>

La rivalidad entre los partidos, particularmente la DC y el PC provenía de la postura que ambos habían tomado en cuanto a los métodos a seguir para la derrota del régimen militar. En 1983 se había formado la Alianza Democrática (AD), que reunía a la DC con algunos socialistas renovados. Por su parte, ese mismo año el PC fundó el Movimiento Democrático Popular (MDP), que incluía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y a la parte no renovada del Partido Socialista (PS-Almeyda). Las principales diferencias entre ambos bloques eran, por supuesto, ideológicas, pero también estratégicas: el MDP aceptaba el uso de la violencia, en cambio la Alianza no. En este contexto, la lista conjunta de universitarios DC y comunistas podría significar

---

<sup>972</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 214-215.

<sup>973</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 184.

para los primeros, la legitimación del uso de la violencia en el contexto del movimiento estudiantil, mientras que para los comunistas significaba un toque de moderación que no contribuía a la estrategia desestabilizadora de movilización social que ellos propugnaban.

Aún así, y después de diversas conversaciones y discusiones al interior de los partidos, los estudiantes demócrata cristianos y comunistas se presentaron juntos en la lista “Unión Democrática” y obtuvieron la victoria. El delegado más votado fue el DC Yerko Ljubetic, quien asumió como presidente de la FECH el 7 de noviembre de 1984. En segundo lugar quedó Gonzalo Rovira, elevando a los comunistas a la condición de segunda fuerza más votada dentro de la universidad. En su primer discurso, el flamante presidente de la FECH señaló que el triunfo fue posible gracias a la voluntad democrática de los estudiantes y no a acuerdos cupulares ni mesas políticas. “A nuestro juicio, la lucha por terminar con la intervención en la universidad era una lucha viable, con posibilidades de éxito, a condición de que fuera asumida por el conjunto de la comunidad universitaria”.<sup>974</sup>

Por su parte, Rovira señaló que la unidad dentro de la directiva de la FECH fue posible porque:

“No entendíamos hacer política universitaria sin tener en cuenta el cuadro nacional que se estaba viviendo y sin comprender que esta federación tenía que ser de todos. (...). La gente entendía que había que hacer política en conjunto, que teníamos que actuar en conjunto. Pero nosotros aceptamos las condiciones de la DCU de hacer el plebiscito siempre y cuando ellos aceptaran las condiciones de las Juventudes Comunistas (JJ.CC) de insertar a la FECH en la movilización nacional, que estaba marcando al país”.<sup>975</sup>

La nueva FECH tenía como intención primordial la construcción de una ciudadanía universitaria, y un movimiento de oposición al régimen, a través de la organización de actos masivos al interior de las universidades. Por supuesto, el régimen no facilitó las cosas y dio orden para invadir y desalojar las sedes universitarias cada vez que fuera necesario. “La directiva de la FECH clamaba a las autoridades superiores de la Universidad para que defendieran los recintos universitarios del ingreso de Carabineros, mientras que la Asociación de Académicos protestaba ante la represión que Carabineros ejercía *motu proprio* ingresando a los claustros universitarios, sin

---

<sup>974</sup> Ljubetic en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 79.

<sup>975</sup> Entrevista a Gonzalo Rovira en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 95.

mediar orden o solicitud de las autoridades académicas”.<sup>976</sup> Según los autores de *Los muchachos de antes*, apenas un mes después de la proclamación del Estado de sitio que siguió a la jornada de protesta del 30 de octubre de 1984, las cifras de represión sobre los universitarios eran escalofrantes: 55 amedrentamientos a estudiantes; 27 ataques y 13 violaciones de fuerzas especiales o policiales a recintos universitarios; 25 estudiantes heridos por balas o balines; 54 estudiantes procesados por tribunales militares; 74 estudiantes expulsados de sus carreras y 48 relegados; 532 estudiantes detenidos...<sup>977</sup>

Pese a la enorme violencia que se abatió sobre los universitarios, durante lo que quedaba del año 84, la FECH se involucró con otros movimientos sociales, en un intento por crear una gran coalición contra la dictadura. Para ello recurrieron a las movilizaciones, paros, huelgas, produciéndose una espiral de protesta y represión que terminó con decenas de muertos. De hecho, una de las primeras acciones de la FECH fue adherir a la Jornada de Protesta y Paro convocada por diversas organizaciones sociales para los días 27 y 28 de noviembre.

Sin embargo, la discusión respecto de las formas de lucha se fue convirtiendo en una piedra de tope dentro de la FECH, ya que estas no eran compartidas por todos los miembros de la directiva, poniendo en cuestión la estructura del movimiento. Según el ex presidente de la FECH, Yerko Ljubetic:

“Cuando surge la polémica acerca de las formas más eficientes a través de las cuales el movimiento estudiantil se incorpora y hace su aporte a las protestas, la polémica en torno a los métodos de acción del movimiento estudiantil, se accede a ella armado del ‘espíritu partidario’, haciéndose una identificación entre determinados medios y determinados partidos. Se produce una permanente coincidencia entre el enfoque que cada dirigente decía tener acerca de cómo asumir una protesta en el movimiento estudiantil, con los énfasis que su partido ponía al margen o más allá de cada realidad específica”.<sup>978</sup>

En este contexto, las diferencias entre la DC y el PC atravesaron al movimiento estudiantil, lo que se vio reflejado con especial importancia en las formas de acción. En la directiva de la primera FECH, presidida por un demócrata cristiano y un comunista, la falta de acuerdos respecto de los métodos de protesta fue profunda y generó una sensación de desgobierno. Al no tener unidad se produjo lo que los estudiantes llamaban “chipe libre”, es decir, cada uno hace lo que quiere. La dinámica de las manifestaciones era más o menos así: jóvenes universitarios que no entraban a clases, y esperaban la

---

<sup>976</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 192.

<sup>977</sup> Ibid.

<sup>978</sup> Ljubetic en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 58.

llegada de un auto de Carabineros para apedrearlo. La policía respondía con carros lanza agua, y se producía el enfrentamiento. Muchas veces, no sólo era la policía la encargada de la represión de las movilizaciones sino también los militares, con toda la carga simbólica (y de fuerza) que ello implicaba.

El recuerdo de Germán Quintana, presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería (CEI) de la UCH, es muy gráfico en este aspecto:

“En la campaña electoral del CEI de 1985, nuestra lista era azul y todo era con símbolos pacifistas. No quisimos usar símbolos partidarios y ganamos el CEI en segunda vuelta, solos. Lo gracioso es que hicimos una campaña súper pacifista. Y el día que asumo, queda la grande. El juez Cánovas había dictado su famosa resolución en el caso degollados<sup>979</sup> declarándose incompetente porque había carabineros involucrados y se produce un enfrentamiento espontáneo en la calle contra Carabineros. Los estudiantes hicieron zumbear los guanacos chicos [carros lanza agua] a piedrazo limpio. Yo miraba desde la ventana del segundo piso del CEI, eran como mil estudiantes. Y veo a todos los miembros de nuestra directiva, a piedrazo limpio con los pacos [policías]: ¡los pacifistas de la Lista Azul, el día que asumíamos como directiva!”<sup>980</sup>

El mismo Quintana señala que el movimiento, “fue superado por el fenómeno de la violencia dentro de la escuela. Había (entre la DC y la izquierda) una grave diferencia en el tema de las formas de lucha, de llegar a un modo de convivencia dentro de la facultad, etc.”<sup>981</sup> lo que se tradujo en divisiones político partidistas y en la ruptura del consenso del movimiento estudiantil. Por su parte, Gonzalo Rovira, dirigente comunista, tenía otra visión del tema:

“Para algunos, hacer una barricada no era un problema de oportunidad, sino que se transformó en un problema de principios. Si bien es cierto que esto ocurrió, no nos afectó mayormente. Nosotros propiciábamos un tipo de salida a la dictadura y estábamos por vincular la lucha universitaria a la lucha nacional; eso nos identificaba, una forma de entender el fin de la dictadura, a través de la movilización decidida y ascendente del conjunto del pueblo. Eso es lo que nos da identidad”.<sup>982</sup>

Respecto de las estructuras de movilización, también en España se dio una fuerte discusión en torno al tema, aunque el debate allí fue más complejo y no se redujo solamente al apoyo o rechazo del uso de la violencia como forma de protesta. Aunque

---

<sup>979</sup> El caso degollados fue un asesinato cometido en marzo de 1985 por la Dicomcar, Dirección de Comunicaciones de Carabineros, en contra de tres profesores comunistas, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Ver nota 982.

<sup>980</sup> Entrevista a Germán Quintana en D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 217.

<sup>981</sup> Ibid., p. 216.

<sup>982</sup> Rovira en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 97.

ciertamente había diferencias entre los grupos políticos en cuanto al uso de la violencia, por ejemplo, entre grupos de izquierda radical y moderada, en el ME español la discusión se dio en otros términos. Por ejemplo, cuando los grupos más radicales criticaban la estrategia del PCE y de la Organización Universitaria del PCE de participar en las elecciones oficiales para elegir delegados, o cuando los estudiantes comunistas criticaban a los más radicales de vanguardismo, de no consultar las decisiones con las bases estudiantiles y así poner en peligro la unidad del ME

Ahora bien, otra diferencia importante es que en el caso español, estas discusiones se daban a nivel de organizaciones independientes, que no formaban parte de una plataforma unitaria, por lo que estos debates podían eternizarse sin que existiera necesidad de llegar a un acuerdo, lo que a la larga, fue perjudicial para el movimiento estudiantil, en tanto le restó continuidad y efectividad. En cambio, en el caso chileno, pese a que la discusión respecto de las formas de acción fue muy importante, los dirigentes de la FECH se las arreglaron para mantener una cierta unidad de acción y así, la primera directiva fue construyendo una base de apoyo amplia, sobre la cual se proyectaría el ME y de la cual sacaría fuerzas para los difíciles años que siguieron.

## CAPÍTULO 13

### 1985-1986: LA LUCHA CONTRA LA INTERVENCIÓN Y EL AÑO DECISIVO

#### **I. 1985: Construyendo marcos de significado amplios, contra la intervención y por la autonomía.**

1985 fue el primer año de funcionamiento de la reconstruida FECH, por lo que se le presentaban varios desafíos por delante. En primer lugar, la FECH (así como la CONFECH) seguiría involucrada en la movilización contra el régimen y participaría de todas las jornadas de protesta convocadas por las organizaciones sociales y los partidos de oposición, situándose así como un elemento clave en esta oleada de movilización social. En segundo lugar, la FECH buscó centrar parte de su acción en una propuesta de reforma para la Universidad de Chile, tendiente a conseguir el fin de la intervención militar y la autonomía. En este sentido, el principal problema al que tuvo que hacer frente la federación fue el de equilibrar y compatibilizar sus reivindicaciones propiamente universitarias con su rol en la movilización social general.

Además, 1985 fue un año particularmente violento para el movimiento estudiantil y para la sociedad en general<sup>983</sup>. De hecho, comenzó con la muerte de un estudiante de la Universidad de Chile, Patricio Manzano, que participaba en los Trabajos de Verano organizados por la FECH en el valle del Aconcagua (V Región). A fines de 1984 la FECH anunció que realizaría unos trabajos voluntarios en la V Región, abiertos a todos los estudiantes de la Chile que quisieran participar. Como aún estaba en vigencia el Estado de sitio, el régimen señaló que dichos trabajos no serían autorizados. Pese a esto, los estudiantes continuaron con la iniciativa y comenzaron los trabajos voluntarios el 1 de febrero. El régimen reaccionó y el 8 de febrero mandó a detener a los 200 estudiantes que se encontraban en el valle del Aconcagua. Algunos consiguieron huir o refugiarse en una capilla de la zona, pero la gran mayoría fue detenido y trasladado a Santiago, luego de haber pasado casi 24 horas al sol, casi sin alimento ni agua. En este contexto, el 9 de febrero, estando en la 1ª Comisaría de Santiago, el

---

<sup>983</sup> En marzo de 1985 se produjo la detención y posterior degollamiento de tres profesionales comunistas, por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), lo que produjo honda conmoción en el país. La brutalidad del caso forzó a la Corte Suprema a nombrar a un ministro en visita, el juez José Cánovas, quien determinó que el crimen había sido cometido por funcionarios de la DICOMCAR. Como resultado de la investigación, seis miembros del organismo fueron sometidos a cadena perpetua, la DICOMCAR se disolvió y el General Director de Carabineros, César Mendoza, miembro de la Junta de Gobierno desde 1973, tuvo que renunciar a su cargo.



estudiante de Ingeniería Patricio Manzano sufrió un paro cardio-respiratorio. Algunos estudiantes de Medicina que se encontraban detenidos en el mismo lugar le prestaron los primeros auxilios, pero cuando llegó la ambulancia, Carabineros no les permitió acompañar a Manzano, quién murió camino al hospital.<sup>984</sup>

Los estudiantes detenidos fueron finalmente liberados y se reencontraron con sus compañeros en los funerales de Patricio Manzano. Trescientos estudiantes marcharon por el centro de Santiago para despedir al joven muerto. Sin embargo, a la salida de la misa de responso, policías vestidos de civil detuvieron a Gonzalo Rovira, vicepresidente de la FECH y militante de las Juventudes Comunistas, quien fue relegado a la Isla de Chonchi, en Chiloé, X Región. Además, el régimen mandó a arrestar a Ricardo Brodsky, dirigente de la FECH, por lo que tuvo que esconderse por más de dos meses.<sup>985</sup> Así, el régimen presionaba a la FECH de dos maneras, intimidando a los estudiantes que participaban en las actividades organizadas por la Federación, y descabezando a la misma a través de las órdenes de arresto y la detención de sus dirigentes.

Pese a las dificultades, la FECH resistió el embate y comenzó a trabajar en su doble cometido: movilización social y reforma de la universidad. Una de las primeras acciones de la FECH en 1985 fue llamar a los estudiantes a no pagar los aranceles, como una forma de protestar por el alza de éstos y por la decisión de la Universidad de cobrar a los morosos el 10% de la deuda al contado.<sup>986</sup> El pago de aranceles y las constantes alzas de éstos fue un tema recurrente para los dirigentes de la Federación, ya que veían en ellos el mejor ejemplo de cómo el Estado chileno se desembarazaba de sus responsabilidades con la educación superior, y traspasaba el costo de ésta a los estudiantes y sus familias. Esto contrastaba fuertemente con la tradición de gratuidad que había caracterizado a las universidades estatales del país hasta la entrada en vigor de la Ley General de Universidades, de 1981.<sup>987</sup>

Para el ME y en particular, para los estudiantes de la UCH, a partir del golpe de estado y de la implantación de los Rectores delegados, la Universidad se había convertido en un “estudiadero (sic) de mala calidad y elitista, que asegure profesionales tecnócratas incapaces – en lo posible – de participar en la gestión de su propia sociedad.

---

<sup>984</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 193-195.

<sup>985</sup> Ibid., p. 198.

<sup>986</sup> Ibid., p. 203.

<sup>987</sup> La Ley General de Universidades, promulgada en 1981, supuso una fuerte disminución del aporte fiscal a las universidades estatales, con el objetivo de que estas instituciones se encaminaran hacia el autofinanciamiento.

Actitud política muy funcional a los intereses económicos, políticos y culturales de aquellos para quienes gobiernan los militares”.<sup>988</sup> Es importante consignar aquí que una de las transformaciones fundamentales que la dictadura llevó a cabo en Chile fue la implementación a rajatabla del modelo neoliberal propuesto por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, y este pensamiento se aplicó también a la educación superior. De ahí el traspaso del costo al estudiante y el alza constante de aranceles para que, a través de éstos, se financiase la educación universitaria. Además, como ya hemos señalado, el régimen intervino las universidades, designando a los Rectores (muchos de ellos eran militares), expulsando a los profesores que habían sido partidarios del gobierno de Salvador Allende o que militaban en partidos de izquierda, y persiguiendo a cualquier tipo de disidencia y oposición. En este sentido, el ME denunciaba que “por defender la Universidad militarizada, la autoridad designada debe recurrir a arbitrariedad como restringir el acceso a la educación superior sólo a aquellos que tienen para pagarla, marginar a los que discrepan, etc.; es decir, negar el derecho a la educación, violar la libertad de expresión e incluso atropellar el derecho a la vida como ocurrió con Patricio Manzano”.<sup>989</sup>

La imposición de la Ley General de Universidades de 1981 había generado un conflicto que, según el ME era político e ideológico. En primer lugar, el sistema político aseguraba

“la mercantilización de la educación con leyes que lo comprometen con el capital nacional y extranjero (autofinanciamiento, universidades privadas e institutos de formación técnica)”.<sup>990</sup> En segundo lugar, el régimen había impuesto un “proyecto de Universidad que refleja consideraciones ideológicas (espíritu de competencia, afán de lucro, individualismo, etc.). Dentro de este marco la Universidad cumple una función que nada tiene que ver con el interés nacional que supuestamente le ha fijado la NACIÓN”.<sup>991</sup>

Ante esta situación, los estudiantes proponían recuperar ciertos elementos que habían sido constitutivos de la Universidad de Chile de los años 60 y comienzos de los 70, y que de alguna manera, se configuraban como la misión de la universidad de cara a

---

<sup>988</sup> *Claridad*, (sin fecha, sin firma) 1985, p. 11. Archivo FECH. Claridad había sido el órgano de difusión de la FECH desde 1920 a 1926 y luego tuvo una breve resurrección en 1930-1931. Fue una revista emblemática y muy importante en el ambiente cultural chileno de aquellos años. No hemos podido rastrear el origen de esta edición de Claridad de 1985, sin firma y sin continuidad (al menos en el Archivo de la FECH), pero consideramos que de todas formas es una fuente interesante de consignar ya que manifiesta el pensamiento de una parte de los estudiantes de oposición.

<sup>989</sup> Ibid.

<sup>990</sup> Ibid., p. 18.

<sup>991</sup> Ibid.

la nación, como por ejemplo la participación de diversos sectores ideológicos, la preocupación por el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria, y, especialmente, la autonomía, que era entendida como la facultad de la universidad para cumplir su misión nacional eligiendo los mecanismos que considere más adecuados, con independencia de poderes externos.<sup>992</sup> En este sentido, para conseguir verdadera autonomía era imprescindible la democratización de la universidad y la participación de toda la comunidad universitaria (entendida como el conjunto de académicos, estudiantes y funcionarios). Los estudiantes no olvidaban como, a partir de la Reforma Universitaria iniciada en 1967, habían conseguido integrarse en el gobierno universitario con una participación estamental de 25%, y que, con el golpe, habían sido completamente excluidos de éste, lo que quedaría refrendado en la ley de 1981. Por eso, en este punto, los estudiantes eran enfáticos: “la presencia del movimiento estudiantil en la formulación de las políticas universitarias asegura la concreción de una Universidad al servicio del pueblo y del interés nacional, en definitiva, la concreción de la misión nacional de las Universidades”.<sup>993</sup>

Durante el primer semestre del año 85, la FECH se dedicó a crear y socializar su Propuesta de Cambio para la Universidad, tendiente a sacarla de la crisis que la que la tenía sumida la intervención militar y la Ley General de Universidades. En el boletín informativo *Fechorías*, de marzo-abril de 1985, se hacía un llamado a toda la comunidad universitaria a realizar cambios profundos en la Universidad de Chile “que permitan ponerla al servicio del pueblo y desarrollar las funciones que le son propias: Docencia, Investigación y Extensión”.<sup>994</sup>

La constatación de la crisis universitaria se reflejaba, según la FECH, en la enorme diferencia entre el gasto estatal en Defensa y el gasto en Educación Superior (el primero era diez veces superior al segundo); en los niveles de morosidad de los alumnos (60%); en el alza del 60% del arancel para los alumnos nuevos (generación 1985); en la disminución del Crédito Fiscal para financiar los estudios universitarios, etc. Por esto, las exigencias de la federación se relacionaban con la condonación de las deudas a los morosos, con la suspensión de los reajustes de los aranceles para 1986, con el reemplazo del sistema de crédito fiscal por el de arancel diferenciado (que consistía en

---

<sup>992</sup> Ibid.

<sup>993</sup> Ibid., p. 18-19.

<sup>994</sup> *Fechorías*, boletín informativo de la FECH. Número extraordinario, Marzo-Abril de 1985, p. 1. Archivo FECH.

ajustar los aranceles dependiendo del ingreso familiar del estudiante), carnet escolar con tarifa reducida en el transporte público para todos los estudiantes, y atención médico-dental completa y gratuita para ellos.<sup>995</sup> Además de estas reivindicaciones económicas, la federación exigía:

“- Reconocimiento de la FECH como única y representativa de todos los estudiantes.

- Reintegro del Instituto Profesional de Santiago y del Pedagógico.

- Derogación de los reglamentos represivos.

- Autonomía, participación y democracia en todas las instancias de gestión universitaria.

Para esto debemos poner en práctica, para terminar con la Intervención, la DESOBEDIENCIA ESTUDIANTIL Y LA MOVILIZACIÓN. Necesitamos audacia y decisión”.<sup>996</sup>

En este contexto, la FECH organizó un Referéndum contra la Intervención, destinado a proponer reformas en la Universidad de Chile, que podrían hacerse extensivas a otras casas de estudios superiores. Este plebiscito se realizó en junio de 1985 y consiguió un alto grado de apoyo: “8.424 alumnos apoyaron el planteamiento de la directiva de la federación, un 91,9% de los votantes”.<sup>997</sup> El referéndum significó un triunfo importantísimo para la federación, ya que una gran mayoría de estudiantes respaldaba su plan de democratización en la universidad. Por supuesto, las autoridades de la UCH y, especialmente su Rector, el general de Ejército Roberto Soto Mackenney, no reconocieron esta instancia ni establecieron algún tipo de diálogo con los estudiantes o con la federación. Sin embargo, otras organizaciones de la Universidad de Chile, como la Asociación de Académicos e incluso algunos decanos, comenzaron a apoyar las propuestas de los estudiantes, ya que coincidían con su propio anhelo de reformas y autonomía.

En el número de junio de 1985 del boletín *Fechorías*, el optimismo de los dirigentes de la federación era evidente:

“¡Qué manera de tomar en nuestras manos la iniciativa del cambio, qué manera de remover los cimientos de la casa de Bello haciéndole presente su vocación libertaria tan ajena a la bota de Soto Mackenney como al libre mercadismo (sic) del autofinanciamiento! ¡Qué manera de despeinar la peluca de esta reducida y apagada Universidad! (...) Nuestro camino es sencillo, nuestro camino es claro, queremos que esta Universidad sea gobernada por los universitarios. Para lograr esto nuestros pasos están dirigidos hoy a realizar las

---

<sup>995</sup> Ibid.

<sup>996</sup> Ibid.

<sup>997</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 206.

convenciones de facultad que recojan las proposiciones de estudiantes, académicos y funcionarios, acerca de cómo construimos en conjunto nuestra Universidad”.<sup>998</sup>

Ahora bien, pese al discurso, el camino que se abría ante el movimiento estudiantil no era fácil. Hay que recordar que en junio de 1985 todavía estaba vigente el Estado de sitio, que se había implantado una vez más en noviembre de 1984, y que el régimen no tenía reparos en ingresar a los campus universitarios y detener a los estudiantes, incluso en actividades extracurriculares, como lo había demostrado en el verano de 1985. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en la Facultad de Medicina, el 29 de agosto de 1985, cuando la fuerza pública ingresó al campus para disolver una asamblea de estudiantes que debatía temas relacionados con el financiamiento universitario. Carabineros detuvo a más de cincuenta estudiantes de distintas universidades y persiguió a otros hasta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La indolencia del decano Patricio Donoso ante la violencia con la que actuó la policía terminó por quebrar sus ya malas relaciones con los estudiantes y algunos académicos de la Facultad, y un mes después de este episodio, tuvo que renunciar.<sup>999</sup> Otro tanto ocurrió en la Facultad de Ingeniería. Para el 4 de septiembre, diversas organizaciones sociales habían convocado a una jornada de protesta nacional, a la cual la FECH se plegó.

El 5 de septiembre, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UCH realizaron una asamblea para discutir en torno a la exigencia de la renuncia del decano Juan Antonio Poblete, impuesto por el Rector unos meses antes. La asamblea derivó en una toma de la facultad que fue violentamente desalojada por fuerzas especiales. Según Germán Quintana, presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería:

“Y entonces en la noche las fuerzas especiales rodearon la escuela, había tantas micros [buses] como cabían estacionadas en el perímetro de la manzana. Hubo helicópteros, corte de luz. Y entraron a la escuela. Eran como las 9 o 10 de la noche. La luz que cortaron era de la calle, no la de los edificios. Y nosotros ahí, en el octavo piso de la torre. Los auxiliares nos avisaban por teléfono que las fuerzas especiales habían ingresado y que iban a la torre. Al saber esto, los ultras de izquierda que estaban en la vigilia se fueron a esconder a los techos, el resto permanecemos en el hall, yo sentado en una silla y el resto detrás de mí. En esos momentos, fue muy angustiante porque se escuchaba el sonido de las fuerzas especiales subiendo las escaleras, un sonido in crescendo. Desde la salida del hall, lo primero que se veía era la caja de la escalera del edificio, y cuando llegan, lo primero que vemos aparecer son unos tipos enormes con unos arcabuces, nunca había visto unas metralletas tan grandes. Yo estaba muerto de

---

<sup>998</sup> *Fechorías, boletín informativo de la FECH*. Número 4, Junio de 1985, p. 1. Archivo FECH.

<sup>999</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 211.

susto, y les digo “pasen no más, estamos desarmados”, y el oficial que encabeza al grupo, que estaba tenso mirándonos, luego de medio minuto sin decir nada, descansó y se relajó. Yo les explico la situación, que estamos en una vigilia pacífica, etcétera, y procedemos a un desalojo muy tranquilo del edificio. (...) Los ocho pisos de escaleras que bajamos estaban flanqueados por un paco a cada lado, y con la luz cortada. Yo los veía de cuatro metros a cada uno, y esperaba un callejón oscuro, pero no ocurrió nada. Estuvimos cinco días presos en la cárcel pública un grupo como de veinte, el resto estuvo como tres días. (...) Nos pasaron a la Fiscalía Militar porque existía la versión de que estábamos armados. Por suerte no encontraron nada, ni una molotov”.<sup>1000</sup>

Tanto en el caso de Medicina como en el de Ingeniería, los estudiantes recibieron el apoyo de algunos académicos de sus respectivas facultades. Incluso en el caso de Ingeniería, un profesor inició una huelga de hambre para exigir la libertad de los estudiantes detenidos. En este sentido, una de las grandes fortalezas del ME chileno es que supo consolidar redes de apoyo con los académicos. Así, por ejemplo, la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, dirigida por Patricio Basso, también exigía al Rector mayor participación en el gobierno universitario, y de hecho, apoyaban varias de las medidas de la Propuesta de Cambio de la FECH. A propósito de lo ocurrido en Ingeniería, Basso declaró que “Nuestra opción siempre serán los estudiantes. Y eso es conveniente que la autoridad lo tenga muy en cuenta en cualquier análisis futuro que haya sobre la solución al problema universitario”.<sup>1001</sup> A partir de esto, la coordinación entre la federación de estudiantes y la Asociación de Académicos irá en aumento, hasta formar, como veremos más adelante, un bloque sólido en defensa de la autonomía universitaria y en contra de los Rectores delegados.

En este sentido, el ME español también intentó y en algunas ocasiones logró establecer alianzas con los profesores, especialmente con los PNN. Por ejemplo, durante el conflicto de Medicina en los años 1971-1972 algunos profesores apoyaron las reivindicaciones estudiantiles. También lo hicieron los PNN en distintos momentos de la lucha contra la Ley General de Educación, especialmente contra la selectividad. Sin embargo, la intervención a la que fue sometida la universidad española y el sistema de cátedras hacía más difícil para el ME encontrar apoyos entre los catedráticos. Ciertamente los hubo, pero no existió en España algo parecido a la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, que dio públicamente su apoyo a la FECH.

---

<sup>1000</sup> Entrevista a Germán Quintana en D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 219-220.

<sup>1001</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 221.

Ahora bien, luego de la jornada de protesta del 4 y 5 de septiembre, que se saldó con 10 muertos, el régimen decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado, que lo facultaba para llamar a declarar y procesar a quienes hubieran convocado a dicha jornada. Por esto, todos los dirigentes de la FECH, la FEUC, la CONFECH y otras organizaciones sociales fueron detenidos y sometidos a proceso. Sin embargo, el régimen no calculó el gran apoyo que los dirigentes sociales tendrían de parte de la opinión pública. La situación en las distintas universidades del país aumentó en conflictividad, con la consiguiente represión de las fuerzas policiales. “La generalidad de la prensa debió reconocer esta vez que Carabineros había puesto la violencia al reprimir manifestaciones pacíficas en Derecho e Ingeniería. Mientras tanto, el gobierno procuraba encontrar alguna salida a la incómoda situación en que se encontraba”.<sup>1002</sup> Las declaraciones en contra del proceso a los dirigentes estudiantiles se dejaron sentir desde diversos sectores: la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile y su símil de la Universidad Católica participaron en varias manifestaciones para pedir la libertad de los estudiantes; así también lo hizo el Cardenal Juan Francisco Fresno y varias organizaciones sindicales.<sup>1003</sup>

Finalmente, y después de varios días de discusión, el régimen dejó en libertad a los dirigentes estudiantiles, en un intento por rebajar el conflicto en las universidades.

“La esperanza del régimen se basaba en que la libertad de los estudiantes disminuiría ostensiblemente la radicalización de las movilizaciones, considerando la cercanía del término del año académico y la realización de elecciones estudiantiles en la Universidad de Chile. En este sentido, el cálculo del gobierno se reveló exacto, puesto que, pese a la creación de un comando nacional de solidaridad con los restantes detenidos, la intensidad de las movilizaciones decreció sensiblemente tan pronto como se produjo el desistimiento que favoreció a los estudiantes”.<sup>1004</sup>

Una vez liberados, los dirigentes de la FECH se dedicaron a organizar las elecciones para la federación de 1986. El problema con el que se encontraron fue que la unidad entre demócrata cristianos y comunistas que se había logrado en 1984, era mucho más difícil de replicar a fines de 1985. Esto, debido a las dinámicas internas de los partidos, que además de las diferencias ideológicas propias de estos dos sectores, iban distanciándose cada vez más en torno a la utilidad de la movilización social y a las formas de lucha en contra del régimen.

---

<sup>1002</sup> Ibid., p. 233.

<sup>1003</sup> Ibid., p. 233-234.

<sup>1004</sup> Ibid., p. 236.

## II. El ME y el Acuerdo Nacional.

Las diferencias en las estrategias de los partidos de la oposición quedaron bastante bien reflejadas en el documento llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, impulsado por el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y suscrito en agosto de 1985 por diversos partidos y organizaciones políticas, que iban desde la derecha liberal hasta sectores moderados del socialismo, pasando por la Democracia Cristiana. Básicamente, el documento proponía una transición a la democracia que implicara un Congreso elegido por votación popular, un Presidente de la República elegido por votación directa, una reforma constitucional para modificar la carta impuesta por Pinochet en 1980 y que garantizara la libertad de pensamiento y de expresión, el pluralismo político y el respeto a los Derechos Humanos.<sup>1005</sup> En síntesis, la oposición le estaba proponiendo a Pinochet una vía pacífica y ordenada para entregar el poder:

“Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se alcancen se requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e indiscutible legalidad democrática; un marco político-económico-social que garantice tanto la gobernabilidad del país como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos de hoy y del futuro plantean; y, también, el retorno de las Fuerzas Armadas a sus indispensables funciones permanentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y requerimientos institucionales”.<sup>1006</sup>

Demás está decir que el régimen no aceptó esta propuesta.

Ahora bien, la entrega ordenada del poder también se podía leer como una crítica a la estrategia de movilización social, impulsada en 1983 y hasta 1984 por el conjunto de la oposición, y que un año después continuaba siendo sostenida por el Movimiento Democrático Popular y por diversas organizaciones sociales, que buscaban, a través de ella, derribar al régimen. Esta estrategia, iniciada en 1983 con las primeras jornadas de Protesta Nacional, había ido escalando en violencia, y, para los firmantes del Acuerdo Nacional, parecía haberse agotado sin conseguir resultados. Como era lógico, el Partido Comunista y el MDP que este encabezaba no quisieron sumarse al

---

<sup>1005</sup> *Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia*. 25 de agosto de 1985. Obtenido en: [www.odisea.ucv.cl/download/.../Acuerdo%20Nacional%201985.doc](http://www.odisea.ucv.cl/download/.../Acuerdo%20Nacional%201985.doc), p. 1.

<sup>1006</sup> *Ibid.*, p. 2.



Acuerdo Nacional. En este contexto, que incluyó asimismo el vehemente rechazo de la UDI y del propio Pinochet, el naufragio de la iniciativa se tornó inevitable.

Quienes sí le dieron su apoyo fueron las organizaciones sociales del país, entre ellas los sindicatos y la FECH, pero dejando claro que este acuerdo no era incompatible con la continuación de la movilización social. El 31 de agosto de 1985, la FECH publicó un documento en el cual manifestaba claramente su adhesión al Acuerdo Nacional: “expresamos nuestra adhesión al mencionado documento y reconocemos en él un grave alcance hacia el objetivo de producir el reencuentro democrático de todos los chilenos”. Sin embargo señalaba también que era un error plantear el acuerdo político como algo contradictorio de la movilización social:

“Muy por el contrario, consideramos que entre ambos hay una relación de complementariedad. En efecto, creemos que a través de la movilización social, como ha sido durante estos años, los distintos sectores de la vida nacional que sufre con más rigor las consecuencias derivadas de la actual situación de crisis integral de Chile, pueden seguir haciendo presentes y exigiendo soluciones reales para sus problemas más acuciantes”.<sup>1007</sup>

Ahora bien, la adhesión o no adhesión al Acuerdo Nacional fue fuente de discusión entre los estudiantes demócrata cristianos y los comunistas. Alineados con las estrategias de sus respectivos partidos, la unidad entre los de la DCU y los del PC se hacía cada vez más difícil. En el mes de junio de 1985, la DCU redactó y publicó un documento titulado “Lo que el movimiento estudiantil puede y debe hacer ante el imperativo nacional”, en el cual se expresaba la urgente necesidad de realizar acuerdos en torno a la democracia, y no esperar al fin del régimen para hacerlo. Así, los distintos sectores de la oposición debían acordar los mecanismos necesarios para llevar al país por la senda democrática. Y en este contexto, el movimiento estudiantil debía también trascender sus demandas propiamente universitarias y establecer demandas democráticas generales.<sup>1008</sup>

“A modo de ejemplo, no conduce a nada, a nuestro modo de ver, el construir el movimiento estudiantil contra el sistema de Rectores delegados. La experiencia nos demuestra que cuando nos encontramos frente a un Rector delegado militar y el movimiento estudiantil, o el movimiento universitario incluyendo a los académicos, se ha propuesto removerlo, pueden pasar meses o incluso años, después de los cuales la simple movida de ajedrez de la dictadura consiste en colocar a un Rector delegado... civil. (...) Nos olvidamos de que la

---

<sup>1007</sup> “La FECH y El Acuerdo Nacional para La Transición a la Plena Democracia”. 31 de agosto de 1985. Biblioteca FLACSO, Fondo Documental Eugenio Ruiz Tagle, p. 1.

<sup>1008</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 257-258.

intervención militar está íntimamente vinculada a la dictadura y que mientras no se acabe ésta no se terminará aquélla. Nos olvidamos de que no puede haber universidad democrática en un país en dictadura”.<sup>1009</sup>

A la hora de hablar de las estructuras de movilización, el documento descartaba de plano la vía armada, por considerarla inviable para la realidad chilena. Aquí ya se estaba planteando claramente otra diferencia con el PC (y con los estudiantes de las Juventudes Comunistas), ya que este partido, en enero de 1985, en un documento que hiciera suyo su Comité Central, indicaba un progresivo distanciamiento de los partidos opositores de centro y propiciaba el enfrentamiento con la dictadura, sin descartar la lucha armada:

“Los comunistas pensamos que sobre la base de la lucha combativa y de la acción común de todas las fuerzas democráticas, el camino más corto para terminar con la tiranía es, precisamente, el camino del enfrentamiento. (...) Uno de los elementos determinantes que ha elevado la calidad del combate de las masas ha sido la introducción de nuevos métodos de lucha, aquellos métodos que permiten el uso creciente de la violencia revolucionaria del pueblo en contra de la violencia impuesta por el fascismo”.<sup>1010</sup>

De esta manera, insistimos, una FECH compuesta por estudiantes DC y PC era mucho más difícil de conseguir en 1985 de lo que había sido el año anterior. Con las elecciones a nueva directiva ad portas, los estudiantes demócrata cristianos, liderados por Humberto Burotto, presionaban a los comunistas para que aceptaran los planteamientos fundamentales del Acuerdo Nacional pero no tuvieron éxito. Así, a las elecciones de octubre de 1985 se presentaron siete listas diferentes; el PC fue apoyado por los grupos que componían en MDP (PS Almeyda y MIR) y la DCU fue junto a los socialdemócratas, que tenían muy escasa fuerza en la universidad. Por su parte, los socialistas fueron divididos, entre los que apoyaban al PC y los llamados renovados, que presentaron su propia lista, impidiendo así una gran coalición de izquierda.<sup>1011</sup> Finalmente, ni la lista del MDP ni la de la DCU obtuvieron mayoría absoluta. La primera consiguió el 32,13% de los votos, mientras que la segunda obtuvo el 32,55%. Después de un complejo proceso de negociación, la presidencia de la FECH fue

---

<sup>1009</sup> “Lo que el movimiento estudiantil puede y debe hacer ante el imperativo nacional”. Sin páginas. Citado en D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 257.

<sup>1010</sup> “Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista, durante la vigencia del Estado de Sitio”. D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 256.

<sup>1011</sup> Para ver en mayor detalle las diferencias entre el PC y la DC, y sus consecuencias en la Universidad de Chile, así como la compleja contienda electoral de 1985, remitirse a D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 236-274.

ocupada por Humberto Burotto de la DCU, pero se invitó a miembros de la lista del MDP como Gonzalo Rovira y Ricardo Herrera, a participar de la nueva directiva de la federación. Rovira, del PC, fue nombrado vicepresidente, y Herrera, socialista, tesorero.

A pesar del difícil período electoral vivido en 1985, la FECH había conseguido renovar su directiva con una participación cercana al 78% del electorado estudiantil. En este sentido, y tal como señalan los autores de *Los muchachos de antes*, las elecciones de la FECH, seguidas por la prensa y la opinión pública eran un acontecimiento político notable en un país en donde no se producían este tipo de instancias. Además, todos los ojos estuvieron puestos en las elecciones de una organización que, a ojos del régimen, no existía (recordemos que la FECH no era reconocida por las autoridades delegadas en la UCH, ni, por supuesto, por el régimen); y lo más interesante de todo es que de las siete listas que se presentaron a las elecciones, ninguna representaba el punto de vista del gobierno, por lo que éste fue el principal derrotado.<sup>1012</sup>

### **III. 1986: El Paro Nacional Estudiantil Prolongado de Abril.**

Luego del complicado período electoral que vivió la FECH a fines de 1985, y como era habitual durante las vacaciones de verano, hubo un descenso en el conflicto estudiantil pero ya en marzo de 1986 comenzó un nuevo ciclo, no sólo de movilizaciones de universitarios sino de movilizaciones sociales en general. Como señalan los autores de *Los muchachos de antes*, “eran numerosos y diversos los sectores sociales que se habían reorganizado, y en todos ellos los grupos de oposición al gobierno acreditaban periódicamente su condición mayoritaria. Incluso sectores que habían sido refractarios a la Unidad Popular comenzaban a mostrar su disidencia en voz alta”.<sup>1013</sup>

Para los principales grupos opositores, Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, 1986 debía ser un año clave en la lucha contra el régimen. El presidente de la AD, Gabriel Valdés, se refirió a 1986 como “el año de la movilización de toda la sociedad”, mientras el MDP lo bautizó como “año decisivo”. Sin embargo, cada grupo utilizó distintas estrategias para combatir a la dictadura, lo que finalmente

---

<sup>1012</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 271. Los autores relatan una anécdota que refleja muy bien esto. Pinochet, días antes de las elecciones, habría preguntado cuál era su lista en la FECH, pero sus asesores no supieron responder.

<sup>1013</sup> Ibid., p. 275.

produjo un quiebre en la oposición, como veremos más adelante. Con todo, a comienzos de 1986, y pese a ser muy conscientes de sus diferencias ideológicas y estratégicas, tanto la DC como el PC intentaban actuar coordinados, especialmente dentro de las organizaciones sociales, como la FECH. Para enfrentar este año clave, se creó una plataforma unitaria de todos los grupos – tanto políticos como sociales – de oposición, llamada la Asamblea Nacional de la Civilidad (AC). Esta instancia fue fundada el 26 de abril de 1986, aunque el proceso de creación comenzó meses antes, y “en términos generales fue una organización que albergó a las más diversas formas de representación social, constituyéndose por colectividades de trabajadores, estudiantes, indígenas, profesionales, campesinos, pequeños comerciantes, transportistas, intelectuales, artistas y, por supuesto, agrupaciones de defensa de los derechos humanos, a través de las cuales, con sus dirigentes y representantes gremiales, se hacían partícipes todos los partidos políticos de oposición”.<sup>1014</sup> La FECH adhirió inmediatamente a la Asamblea de la Civilidad y de hecho, su presidente Humberto Burotto, participó activamente en la creación de esta plataforma.<sup>1015</sup>

Ahora bien, antes de la fundación oficial de la Asamblea de la Civilidad, la FECH y la CONFECH ya habían iniciado sus propios movimientos para hacer de 1986 el “AÑO DE LA DEFINICIÓN POR LA DEMOCRACIA”.<sup>1016</sup> Durante marzo, los dirigentes universitarios (tanto de la Universidad de Chile como de otras universidades) plantearon como estrategia generar un ciclo de movilizaciones estudiantiles que culminaran en un Paro Nacional Estudiantil Prolongado, que finalmente engazaría con una movilización social general. De esta manera, durante todo el mes, el ME chileno fue organizando las diversas acciones tendientes al Paro Nacional, cuya justificación se encontraba en la situación de crisis que afectaba al sistema educativo del país. En un documento de la FECH titulado Llamado a todo Chile, se resumían los planteamientos del ME al respecto:

“El derecho a la educación se restringe cada vez más a grupos de élite. Moral, cultural y económicamente el sistema de enseñanza, elemento fundamental de nuestro desarrollo, está destruido. (...) El movimiento estudiantil, por su grado de desarrollo en la organización y movilización, se ha constituido en actor relevante en la lucha por la recuperación de la Democracia

---

<sup>1014</sup> Jorge PIZARRO CRISTI: *La Movilización Social en la Lucha Democrática: El Caso de La Asamblea de la Civilidad en el Año Decisivo*. Tesis de Licenciatura en Historia de la Universidad Católica de Chile. Inédita, Santiago, 2003, p. 3.

<sup>1015</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 278.

<sup>1016</sup> “Llamado a todo Chile”, Marzo de 1986. FECH, p. 2. Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Biblioteca FLACSO.

en nuestro país. Consecuentemente, este movimiento estudiantil, que se ha planteado como objetivo hacer de este año 1986, el AÑO DE LA DEFINICIÓN POR LA DEMOCRACIA, desplegará toda su experiencia acumulada para la concreción de esta demanda vital”.<sup>1017</sup>

Para lograr este objetivo, el movimiento estudiantil proponía un proceso de coordinación entre todos los sectores de oposición para trabajar unidos por la recuperación de la Democracia en el país; para consolidar la fuerza de las organizaciones sociales y para articular las demandas específicas de los distintos sectores. En lo que respecta al ME, se propuso la creación de un Congreso Universitario, en el cual participaran estudiantes y académicos de todas las universidades chilenas, con el fin de organizar el Paro Nacional Estudiantil Prolongado. El llamado a la participación de toda la comunidad universitaria en este proceso de movilización tenía como eje fundamental la lucha contra la intervención y la derogación de la Ley General de Universidades. Una vez conseguido esto se lograría poner fin al sistema de Crédito Fiscal, reincorporar a los estudiantes y académicos expulsados y sancionados y avanzar en las reivindicaciones específicas de cada institución.<sup>1018</sup> Las acciones convocadas eran las siguientes: para el 2 de abril se organizó una jornada de protesta llamada DÍA DE DUELO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN; para el 15 y 16 de abril se realizaría un paro estudiantil por 48 horas, que, en caso de tener éxito, se convertiría en el Paro Nacional Estudiantil Prolongado.

En el caso específico de la Universidad de Chile, pocos días antes de la jornada de duelo por la educación, la FECH envió una carta al Rector delegado General Roberto Soto Mackenney para plantear sus exigencias con respecto al financiamiento de la educación superior, a los reglamentos de disciplina y a lo que ellos llamaban “normalización de la Universidad de Chile”, que básicamente significaba el fin de la intervención. Este documento es fundamental, en tanto resume las críticas y las propuestas del ME en relación a los tres puntos más importantes de sus reivindicaciones, los cuales lograrán aglutinar a una gran cantidad de estudiantes, además de a otros sectores sociales como los académicos, colegios profesionales, sindicatos, etc.

En relación con el financiamiento, la carta al Rector denunciaba la gran cantidad de estudiantes morosos (más de 60%); los reajustes desmedidos de los aranceles; la

---

<sup>1017</sup> Ibid., p. 2.

<sup>1018</sup> Ibid., p. 9.

disminución del Crédito Fiscal; la exigencia de que los estudiantes firmen una letra de cambio respaldada por un aval, para pagar sus estudios; la disminución del beneficio de transporte (pase escolar) y las restricciones a los servicios médicos y dentales de la Universidad. En conclusión, los estudiantes consideraban fracasado el sistema de financiamiento que se inauguró con la Ley General de Universidades de 1981. Como consecuencia de esto, el documento exigía al Rector la condonación de todas las deudas de los estudiantes; el cambio en el sistema de Crédito Fiscal y el retorno al Arancel Diferenciado (cada estudiante pagaría un arancel de acuerdo al ingreso familiar, la idea era que los estudiantes que provinieran de familias con mayor poder adquisitivo pagaran más y los que venían de sectores más desfavorecidos, pagaran menos, en una suerte de sistema solidario); la suspensión de la letra de cambio con requisito de aval; la suspensión del reajuste de aranceles para el año 1986; el beneficio de transporte y de atención médica y dental para todos los estudiantes, independientemente de su situación económica.<sup>1019</sup>

En relación al reglamento de disciplina, dictado para “asegurar” la convivencia y el orden dentro de la universidad, pero que en realidad permitía la detención basada en la presunción de culpabilidad y la sanción de los estudiantes antes de que se hubiese producido un fallo, la FECH exigía su derogación. Y finalmente, con respecto a la normalización de la Universidad de Chile, los estudiantes exigían el reconocimiento de la Federación de Estudiantes de la UCH como federación única, representativa y democrática de todos los estudiantes de esa universidad.<sup>1020</sup> El fundamento de esta exigencia era que la FECH fuera considerada un interlocutor válido, tanto en el diálogo con las autoridades como con la masa estudiantil. Con todo, aunque ni el Gobierno, ni el Ministerio de Educación ni las autoridades de la UCH habían reconocido públicamente a la FECH, esta ya actuaba, de facto, como un interlocutor, debido al respaldo con que contaba entre la masa estudiantil. Además, los estudiantes exigían la reincorporación del Pedagógico y del Instituto Profesional Santiago a la Universidad de Chile; la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que afectaran a la Universidad; la participación de los Centros de Alumnos en los Consejos de Facultad; elecciones libres, secretas e informadas de todas las autoridades unipersonales de la

---

<sup>1019</sup> “Carta de la FECH al Rector Soto Mackenney”. 24 de Marzo de 1986, p. 2. Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Biblioteca FLACSO.

<sup>1020</sup> Dentro de este mismo punto, también exigían el reintegro de la personalidad jurídica y de los bienes históricos de la FECH, los cuales habían sido anulados y arrebatados a partir del golpe de estado de 1973.

Universidad (como Directores de Departamentos, decanos de Facultad y, por cierto, el Rector); y finalmente, una nueva normativa para la UCH, “creada con la participación de toda la Comunidad Universitaria y que tenga como centro los principios históricos y tradiciones de nuestra Universidad”.<sup>1021</sup>

De esta manera, la FECH establecía, en la carta al Rector, sus principales reivindicaciones, que no sólo debían aplicarse en la UCH sino en todas las universidades estatales y tradicionales<sup>1022</sup> del país, ya que todas atravesaban por la misma crisis producto de la intervención y de la Ley General de Universidades.

Ahora bien, pese a las diferencias existentes entre los distintos grupos políticos que participaban en la universidad, y que hemos reseñado más arriba, las reivindicaciones propuestas por la FECH fueron apoyadas por todos, incluso por algunos grupos que no estaban representados en la directiva de la Federación, como la derecha liberal y los socialistas renovados. En este sentido, la FECH logró generar un conjunto de reivindicaciones transversales a una gran mayoría de estudiantes, de ahí el fuerte apoyo que tuvieron las jornadas de protesta estudiantil y posteriormente el Paro Nacional Estudiantil Prolongado. El sentido de dichas jornadas y del posterior paro era hacer de la universidad un espacio ingobernable a través de la movilización estudiantil, para forzar a la autoridad a aceptar las reivindicaciones propuestas por los estudiantes. Para los estudiantes del MDP, la estrategia era la siguiente: si el Rector no daba pronta solución a las exigencias del ME,

“no podrá dirigir ya la Universidad dentro de un marco de ingobernabilidad cada vez más generalizada y de Paro Prolongado en la Universidad de Chile, desconociéndose su potestad, ejerciéndose la desestabilización masiva, las tomas de facultades y de los centros vitales de la Universidad, imponiéndose paso a paso, por la vía de los hechos, nuestras reivindicaciones y las expresiones de autoridad y poder alternativos que logremos constituir con la comunidad universitaria y que sirvan de base a seguir luchando hasta acabar con la intervención”.<sup>1023</sup>

La estrategia de la ingobernabilidad, como hemos señalado, no era propuesta exclusivamente por los estudiantes del MDP. La misma FECH de 1986 consideraba que

---

<sup>1021</sup> “Carta de la FECH al Rector Soto Mackenney”. 24 de Marzo de 1986, p. 3. Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Biblioteca FLACSO.

<sup>1022</sup> Se considera como Universidades Tradicionales a aquellas privadas que existían antes de la Ley general de Universidades de 1981. Son básicamente las universidades católicas (9 en distintas regiones del país), la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María.

<sup>1023</sup> “Democracia para Chile y la Universidad”. Movimiento Juvenil Democrático y Popular de la Universidad de Chile. Marzo de 1986, p. 2. Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Biblioteca FLACSO.

esta estrategia era la única forma de luchar contra la intervención de la universidad y conseguir sus reivindicaciones. En el boletín *Fechorías*, de abril de 1986, el editorial señalaba que el objetivo fundamental del paro prolongado era el fin de la intervención y la salida del Rector designado. Para ello,

“hemos demostrado que la movilización unitaria, eficaz, oportuna, continua y ascendente; y el camino de la ingobernabilidad, asumido por nuestra Federación, son el camino para terminar con la INTERVENCIÓN MILITAR en las UNIVERSIDADES; el rector Soto no se irá por sí solo, habrá que echarlo. Hemos abierto un nuevo camino, el de la conquista de la verdadera transformación democrática de la Universidad, que no es otro que imponer en los hechos nuestras reivindicaciones y derechos conculcados”.<sup>1024</sup>

Y así llegó la primera jornada de protesta del 2 de abril y las jornadas de paro del 15 y 16 del mismo mes. Como era de esperar, la estrategia de ingobernabilidad generó una fuerte movilización estudiantil, que fue combatida con violencia por las fuerzas policiales. Un balance realizado por la CONFECH con respecto a los dos primeros días de paro, da cuenta de la represión a la cual fueron sometidos los estudiantes, y también de las respuestas de éstos ante la acción policial. Por ejemplo, el 16 de abril, en el campus Oriente de la Universidad Católica se produjeron enfrentamientos entre Carabineros y cerca de 300 estudiantes; el 18 de abril, la policía ingresó a la Casa Central de esa universidad y detuvo a más de cien estudiantes que participaban de un acto. En la Universidad de Santiago (USACH), el lunes 16 la paralización de clases y actividades académicas fue total, se realizó una asamblea con gran participación estudiantil. Al día siguiente, los estudiantes sacaron mesas y sillas de las salas, pintaron las pizarras con pintura roja, realizaron diversos actos culturales y una olla común. A las 3 de la tarde comenzó un largo enfrentamiento con Carabineros, que culminó en miércoles 18 con el ingreso de la policía al campus y el posterior desalojo de este. En la Universidad de Chile, la movilización alcanzó niveles muy altos, por lo que la represión fue extremadamente dura. Los enfrentamientos con Carabineros se produjeron desde el primer día de paro, en el campus Andrés Bello (ubicado en pleno centro de Santiago), que fue cerrado. La policía también ingresó al campus Juan Gómez Millas y al Pedagógico, golpeando y deteniendo a estudiantes. La peor parte se la llevó este último, con el ingreso de fuerzas especiales y la detención de 120 estudiantes.<sup>1025</sup> Al finalizar el

---

<sup>1024</sup> *Fechorías*, boletín informativo de la FECH. N° 2 de Abril de 1986, p. 1. Archivo FECH.

<sup>1025</sup> CONFECH, “Recuento Paro Nacional Estudiantil Prolongado”, Abril de 1986, p. 1-2. Archivo FECH.



paro, sólo la Universidad de Chile tenía a más de 500 estudiantes detenidos, incluida la directiva de la FECH.<sup>1026</sup>

Probablemente, lo más interesante de estos días de paro es que se produjo una coordinación muy efectiva entre estudiantes y algunos grupos de académicos y funcionarios, que participaron en las diversas actividades organizadas por los estudiantes en paro, y que además, públicamente, adhirieron a las reivindicaciones del ME. Así por ejemplo, en las diversas facultades de la UCH se produjeron, durante los días de paro, asambleas triestamentales (estudiantes, académicos y funcionarios), para coordinar acciones y reivindicaciones respecto de la normalización de la Universidad. Los académicos también se pronunciaron en relación a la violencia ejercida por la policía durante los días de paro, la que afectó también a algunos académicos. En una declaración pública difundida el 24 de abril de 1986, los académicos de la Facultad de Ciencias protestaban

“en los términos más enérgicos por la entrada injustificada y agresiva de la fuerza pública al recinto de la Facultad de Ciencias el día 17 de abril. En efecto, a pesar de lo informado en alguna prensa, ningún hecho ocurrido en esta Facultad el jueves 17 de abril autorizaba al despliegue militar y de las fuerzas de orden ni justificaba la toma de la Facultad con allanamiento y registro de laboratorios y salas de clases, y el apresamiento de estudiantes y personal administrativo”.<sup>1027</sup>

Finalizaban los profesores de Ciencias señalando que la situación a la cual se había llegado en la Universidad de Chile era tal que se hacía urgente adoptar medidas tendientes a la normalización de sus actividades, para lo cual era indispensable que la UCH fuera gobernada por los académicos y se pusiera fin a la intervención.<sup>1028</sup>

Además de la coordinación con los académicos, el Paro Nacional Estudiantil Prolongado generó una importante oleada de solidaridad en otras organizaciones sociales que salieron públicamente a defender las reivindicaciones estudiantiles. El 25 de abril se difundió una declaración pública firmada por diversas organizaciones sociales y personalidades del mundo artístico, intelectual y político, en la cual se apoyaba la lucha del ME, especialmente en el caso de la UCH. De hecho, el documento se titula *Chile defiende a la Universidad de Chile*, y es una crítica directa a la intervención.

---

<sup>1026</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 282.

<sup>1027</sup> “Declaración de los Académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile”. 24 de abril de 1986, p. 1. Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Biblioteca FLACSO.

<sup>1028</sup> Ibid.

“La comunidad nacional es testigo como a lo largo de estos años, miles de profesores, estudiantes y funcionarios han sido expulsados, suspendidos y perseguidos producto de la intolerancia y arbitrariedad del sistema. En el último tiempo, esta situación se ha visto agravada con el uso extremo de la violencia represiva en contra de los universitarios.

La política oficial de reducción presupuestaria, la disminución y desmembramiento de actividades académicas y administrativas, la paralización de la extensión universitaria, las graves dificultades económicas que los estudiantes enfrentan para mantenerse en la Universidad, son las mayores pruebas de la voluntad del Régimen imperante de erradicar la cultura y la capacidad creadora del pueblo chileno sacrificando la Universidad en aras de ello”.<sup>1029</sup>

La gran diversidad de organizaciones sociales que firman el documento da cuenta de la importante red de apoyo que había conseguido el ME: desde organizaciones de defensa del Pueblo Mapuche, hasta Colegios Profesionales, pasando por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, y de defensa de los Derechos Humanos.

Después del gran impulso que el paro supuso para las reivindicaciones del ME y de la FECH, en mayo se produjo otro acontecimiento importante: un plebiscito triestamental con el propósito de terminar con la intervención en la Universidad de Chile. La cuestión sobre la que se votaba era: “La inmediata renuncia del Rector delegado y la asunción del gobierno central de la universidad por el consejo de decanos elegidos”, sí o no. Como señalan los autores de *Los muchachos de antes*, los resultados fueron concluyentes: “2.438 académicos de un total de 4.500; 12.030 estudiantes de un total de 22.103, y 1.729 funcionarios de un universo de tres mil, votaban favorablemente la propuesta”.<sup>1030</sup> Sin embargo, pese al resultado del plebiscito, el régimen no hizo nada por acabar, o siquiera modificar, la situación de intervención que había causado esta enorme tensión en la UCH y en el resto de las universidades estatales. De hecho, en el momento más álgido del paro estudiantil prolongado, el Ministro de Educación, Sergio Gaete, propuso al Rector Soto cerrar el año académico (¡a un mes de su comienzo!), pero el Rector se negó aduciendo que era imprescindible dar algún tipo de salida razonable al conflicto y evitar el uso indiscriminado de la fuerza.

---

<sup>1029</sup> “Chile defiende a la Universidad de Chile”, 25 de abril de 1986, p. 1. Fondo documental Eugenio Ruiz Tagle, Biblioteca FLACSO.

<sup>1030</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 279.

En este sentido, el Rector delegado de la UCH estaba en medio de dos fuerzas opuestas: por un lado el régimen, cuya única respuesta al conflicto estudiantil era la represión, y por otro, los estudiantes, que veían en Soto la encarnación de la intervención militar en la universidad. Aparentemente Soto quería realizar un proceso controlado de normalización de la UCH, que poco a poco devolviera alguna capacidad de decisión a la comunidad universitaria y, especialmente, a los académicos, pero sin duda no pretendía dar respuesta a todas las exigencias del ME

#### **IV. La Asamblea de la Civilidad, las jornadas de julio y el ME.**

Ahora bien, mientras los estudiantes organizaban y realizaban el Paro Nacional Estudiantil Prolongado, la Asamblea de la Civilidad comenzaba a cobrar fuerzas. Ya mencionamos, al comienzo de este apartado, que la AC fue una plataforma político-social con el objetivo de articular las demandas de los sectores opositores al régimen y la lucha por la democracia. Así, eran miembros de la Asamblea el Comando Nacional de Trabajadores, la Central Democrática de Trabajadores, la CONFECH, la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, la Agrupación Gremial de Educadores de Chile, el Colegio de Profesores, Mujeres por la Vida, Comisión Nacional Campesina, Comisión Chilena de DDHH, Grupo de Estudios Constitucionales, y muchas otras organizaciones sociales. También estaba integrada la gran mayoría de los partidos políticos de oposición.<sup>1031</sup>

A los pocos días de su fundación, la AC publicó y entregó al gobierno un documento titulado *La Demanda de Chile*, en el cual estaba contenido el objetivo fundamental de la Asamblea: la recuperación de la democracia. A este fin estarían sometidas todas las reivindicaciones sociales de las diversas organizaciones y de los partidos políticos. Como señala Jorge Pizarro, “sobre el sustento de este estructurado y detallado documento, es que se expandiría la participación conjunta de demócratacristianos y comunistas en un plano de acción no violenta y sin mediar acuerdo político. Es por esto que más allá de las peticiones sectoriales que los dirigentes sociales defiendan, la cohesión de todo el proyecto la entrega el hecho de que el objetivo político se entienda como la respuesta final a las urgentes aspiraciones gremiales. En otras palabras, la esperanza agitadora de la AC se encuentra en que la

---

<sup>1031</sup> Para ver la lista completa de las organizaciones participantes en la Asamblea de la Civilidad, ver J. PIZARRO: *La Movilización Social en la Lucha Democrática*, pp. 67-68.

crisis de cada uno de los actores sociales se resuelve, por convicción absoluta de todos los sectores, en una sola opción: recuperar la democracia”.<sup>1032</sup>

A partir de la incorporación de la FECH y la CONFECH a la Asamblea de la Civilidad, y de lo poco conseguido pese a la amplia convocatoria lograda en el Paro Nacional Estudiantil Prolongado, el ME transformará un poco su discurso y la lucha por la democracia en el país irá eclipsando a los problemas propiamente académicos, es decir, a la cuestión de la intervención en la universidad. De esta manera, la víspera del 1º de Mayo de 1986, la FECH envió una carta abierta, a nombre del movimiento estudiantil, a los trabajadores de Chile, en la que percibe este cambio de orientación:

“Nos dirigimos a Uds., en los momentos en que el movimiento estudiantil nacional se encuentra movilizado con la decisión de terminar, de una vez por todas con la intervención militar de las Universidades, cuando existe una percepción común de la mayoría de los sectores sociales y políticos de que es posible y necesario terminar con la dictadura y recuperar la democracia. (...) Esto significa que en nuestro movimiento estudiantil debe provocarse un cambio cualitativo en lo que respecta a los fundamentos y al sentido de la movilización, por lo tanto nuestra demanda es la demanda de Chile. Queremos democracia, como lo expresa claramente la Asamblea de la Civilidad. Demandamos democracia porque aspiramos a una forma de convivencia en libertad que se funde en la verdad del pueblo y en el derecho de Chile a la libre determinación”.<sup>1033</sup>

La Asamblea de la Civilidad interpeló al régimen con *La Demanda de Chile*, con el objetivo de obtener alguna respuesta. Sin embargo, el régimen no se dio por aludido, por lo que la AC decidió convocar, para los días 2 y 3 de julio, a un paro llamado Desobediencia Civil Patriótica. La idea era generar una movilización social pacífica pero que alcanzara tanta fuerza que obligara al gobierno a reconocer a la AC (que aunque en teoría funcionaba en la semi-clandestinidad, era bastante visible para la gran mayoría de los chilenos ya que tenía presencia en la prensa de oposición y, en menor medida, también en la prensa oficialista) y a establecer una negociación que condujera al país a la democracia.

En el documento titulado *Instructivo único para junio de 1986*, se establecían los pasos a seguir para preparar las jornadas del 2 y 3 de julio. La idea era que en todas las provincias y comunas del país, se realizaran asambleas locales para coordinar la mejor forma de llevar adelante las jornadas de protesta. Además, a medio día se debía

---

<sup>1032</sup> J. PIZARRO: *La Movilización Social en la Lucha Democrática*, p. 70.

<sup>1033</sup> “Carta del Movimiento Estudiantil a los Trabajadores Chilenos”, 30 de Abril de 1986. Archivo FECH.

suspender toda actividad y cantar el Himno de la demanda (compuesto especialmente para la ocasión). También se llamaba a realizar un boicot económico a las empresas que auspiciaban a la prensa oficialista (especialmente a los noticiarios de TV) y a suspender los pagos de contribuciones, dividendos habitacionales y cuotas universitarias.<sup>1034</sup> Toda esta actividad culminaría en el paro del 2 y 3 de julio, que “será la primera advertencia de las organizaciones sociales en cuanto a los términos en que se profundizará la desobediencia pacífica en julio”.<sup>1035</sup>

El ME, que como hemos señalado, participaba de la Asamblea de la Civilidad a través de la FECH y la CONFECCH, comenzó también a preparar las jornadas de julio, para lo cual se convocó a un Congreso de la CONFECCH, a realizarse en junio, en el cual se discutirían los mecanismos con que el ME aportaría a la movilización social. Como resultado del Congreso, se estableció que “la situación de DICTADURA en el país se traduce en la intervención militar de la Universidad. Por tanto, el objetivo central de hoy en la Universidad es terminar con el régimen de intervención y, en conjunto con el pueblo chileno, terminar con la DICTADURA y recuperar la DEMOCRACIA”.<sup>1036</sup> Para insertarse de lleno en la lucha por la democracia, el ME partía por reconocer a la Asamblea de la Civilidad como “instancia máxima de representación y organización, que se ha dado el pueblo chileno en estos 13 años, esperando que ella dé una conducción clara y unitaria a los chilenos que anhelamos volver a la DEMOCRACIA”.<sup>1037</sup> De estas palabras se desprende que el ME se ponía al servicio de las estrategias establecidas por la AC y, de cierta forma, supeditaba sus intereses específicos a la lucha por la democracia.

Ahora bien, este proceso de integración del movimiento estudiantil en una plataforma mayor y más general, como era la Asamblea de la Civilidad era complejo y delicado, no sólo porque había que coordinar las estrategias de uno y otra, sino también porque el ME corría el riesgo de perder identidad y apoyos entre la masa estudiantil, que sí podía estar interesada en los problemas específicos de la Universidad, pero que quizás sería más apática cuando se trataba de política general. Por esta razón, el Congreso de la CONFECCH proponía una serie de mecanismos, de difícil aplicación, tendientes a, por

---

<sup>1034</sup> J. PIZARRO: *La Movilización Social en la Lucha Democrática*, p. 76-77.

<sup>1035</sup> Instructivo único para junio de 1986, citado en J. PIZARRO: *La Movilización Social en la Lucha Democrática*, p. 77.

<sup>1036</sup> “Principales acuerdos del Congreso de la CONFECCH”, *Fechorías*, boletín informativo de la FECH. N° 5, Junio de 1986, p. 5. Archivo FECH.

<sup>1037</sup> Ibid.

una parte, “participar y profundizar en la construcción de la futura democracia, levantando nuestro derecho a participar en las instancias que posteriormente a la caída del régimen se dé el pueblo chileno”, y por otra, “mantener la unidad del ME en torno a su organización nacional y sus instancias como Federaciones y centros de alumnos”.<sup>1038</sup>

La mejor manera de llevar a cabo estos objetivos era, según la CONFECH, fortalecer los vínculos con académicos y funcionarios, entendiendo que ellos tenían vínculos con distintas organizaciones sociales (asociaciones de profesores y funcionarios, colegios profesionales, etc.), para “rescatar, junto a la Comunidad Universitaria, la universidad para el pueblo y construirla democráticamente”.<sup>1039</sup> Para preparar el paro del 2 y 3 de julio, la FECH decidió tomarse la Casa Central de la UCH el 30 de junio, como una suerte de puntapié inicial de las movilizaciones convocadas por la Asamblea de la Civilidad. El problema fue que la toma terminó con 130 estudiantes detenidos y con el Consejo Universitario<sup>1040</sup> condenando la acción y respaldando al Rector.<sup>1041</sup>

Las jornadas de paro del 2 y 3 de julio fueron un éxito, ya que lograron una masiva convocatoria. Participaron desde sectores de clase media, normalmente más renuentes a la movilización, hasta los sectores más combativos, que se ubicaban, por lo general, en las poblaciones de la periferia de Santiago. Además, la violencia ejercida por los ciudadanos fue menor que en otras jornadas de este tipo, aunque la represión por parte del régimen fue brutal: el paro se saldó con 6 muertos y 50 heridos, incluyendo dos jóvenes quemados por una patrulla del Ejército, uno de los cuales falleció.<sup>1042</sup>

Ahora bien, pese a su fuerza, el paro no logró derribar a Pinochet, ni sentarlo a negociar, y por el contrario, agotó las fuerzas de los movimientos sociales, dejando el protagonismo a los partidos políticos, que además, ya evidenciaban fracturas en cuanto a las estrategias a seguir.<sup>1043</sup>

La actuación del Partido Comunista se convertiría en una dificultad para las demás fuerzas de oposición en 1986. Como hemos señalado más arriba, el PC designó a dicho año como “el año decisivo”, debido a que todas las estrategias se orientaron a

---

<sup>1038</sup> Ibid.

<sup>1039</sup> Ibid.

<sup>1040</sup> El equivalente a la Junta de Gobierno en la Universidad española.

<sup>1041</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 288.

<sup>1042</sup> Ibid., p. 287.

<sup>1043</sup> Para ver los efectos de las jornadas de julio en la Asamblea de la Civilidad, revisar el trabajo de J. PIZARRO: *La Movilización Social en la Lucha Democrática*, p. 135 y ss.

derribar a la dictadura. La defensa de la lucha armada se tradujo en una radicalización de las actuaciones, tanto a nivel estudiantil como a nivel nacional. De esta manera, para el dirigente comunista Gonzalo Rovira (en 1986, vicepresidente de la FECH) la violencia se legitimaba por el fin último de derribar la dictadura: “La violencia que se generó durante esos años [1985-1986], violencia legítima de los estudiantes, que rompieron trabas, que rompieron puertas, chapas, botellas, que hicieron fuego, montaron barricadas, en esas experiencias ellos estaban aprendiendo, estaban ejercitando lo que es un proceso revolucionario”.<sup>1044</sup>

Esta defensa de la lucha armada y del uso de la violencia provocó fuertes roces entre los estudiantes comunistas y los demócrata cristianos que componían la FECH. Así, aunque el primer semestre de 1986 la coordinación entre ambos grupos había funcionado casi a la perfección, en el contexto del paro estudiantil prolongado, a partir de las jornadas del 2 y 3 de julio, la fractura sería inevitable, y no sólo en el ámbito del ME sino a nivel nacional. La masiva respuesta obtenida en el paro de julio había dejado en evidencia la tremenda polarización política que existía en la sociedad chilena, y la movilización no se detuvo el 3 de julio. El descontento social que se manifestó en esas jornadas siguió haciéndolo a través de acciones sectoriales dirigidas por diversas organizaciones sociales. En el ámbito estudiantil, por ejemplo, el 16 de julio, estudiantes de la FEUC se tomaron la Casa Central de la Universidad Católica; el 23 de julio se produjeron incidentes y tomas en el Pedagógico y el IPS, y el 28 del mismo mes se repitieron las tomas en Derecho de la UCH, el Pedagógico y el IPS. Durante el mes de julio, al menos medio millar de estudiantes fueron detenidos en estas acciones.<sup>1045</sup>

Aparentemente, la Asamblea de la Civilidad no era capaz de canalizar el descontento social ni tampoco de coordinar las acciones las diversas organizaciones que la componían. Después del paro de julio, sus dirigentes fueron perseguidos y muchos de ellos, detenidos durante semanas. Los partidos políticos, salvo el PC, tampoco tenían mucha claridad de cómo dirigir a esta sociedad descontenta. Como señala Jorge Pizarro: “A nombre de los demócrata cristianos, Andrés Zaldívar coincidía con el presidente del MDP, al afirmar que el conflicto social ha alcanzado niveles de tanta profundidad que ‘estamos al borde de una verdadera catástrofe’. Es muy probable que este temor haya coincidido en millones de chilenos, incluidos la mayoría de los dirigentes políticos de oposición, sin embargo, cuando el 12 de agosto comienza a correr la noticia de que el

---

<sup>1044</sup> Rovira en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 98.

<sup>1045</sup> D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 288

régimen había encontrado un enorme depósito de armas en la localidad de Carrizal Bajo, atribuido a grupos de extrema izquierda, la incredulidad reinó entre las dirigencias opositoras. Era muy difícil de creer que la posibilidad de armar a la civilidad fuera una realidad inmediata”.<sup>1046</sup>

En el ámbito nacional, el recurso a la lucha armada, provocó un drástico cambio en el escenario político. La internación de armas en Carrizal Bajo por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización político-militar vinculada al PC, y el posterior atentado contra Pinochet, el 7 de septiembre de 1986 llevado a cabo por este mismo grupo, pusieron en jaque a la oposición. El gobierno restableció el Estado de Sitio y los partidos políticos se dieron cuenta de que no derrotarían al régimen a través de la movilización social, lo que hacía necesaria una nueva estrategia. El PC se aferró a la continuidad de la movilización social y la lucha armada, mientras la DC y los socialistas renovados optaron por seguir la lucha antidictatorial en el marco de las normas y los plazos impuestos en la Constitución de 1980. Este quiebre entre las fuerzas de oposición implicó la virtual desaparición de la Asamblea de la Civilidad, pero también es fundamental para explicar el fin del consenso dentro del movimiento estudiantil y su pérdida de poder,

La respuesta del régimen al atentado contra Pinochet fue feroz, la represión recrudeció y las universidades fueron, nuevamente, puestas bajo una estricta vigilancia. Toda la directiva de la FECH tuvo que esconderse por varios días, dejando a la federación acéfala en un momento crucial. En este contexto, las acusaciones cruzadas entre los estudiantes DC y los comunistas hacían inviable la unidad. Gonzalo Rovira, militante comunista y dirigente de la FECH señala que, a partir del atentado a Pinochet, “comenzamos a actuar en consonancia dentro de la Universidad de Chile, a tratar de ordenar el naipe ahí, procurando impedir que el movimiento estudiantil se desarticulara frente a una situación que la gente rápidamente iba a asociar a una derrota, porque en ese momento ya había una derrota, estábamos en bajada”.<sup>1047</sup>

Por su parte, Humberto Burotto, militante DC y presidente de la FECH, recuerda que, en el patio de la Facultad de Derecho, hizo un discurso improvisado en el cual condenó, a nombre de la federación, el atentado del FPMR, rechazó la lucha armada propuesta por el PC, por considerarlo una traición a las fuerzas democráticas del país.<sup>1048</sup>

---

<sup>1046</sup> J. PIZARRO: *La Movilización Social en la Lucha Democrática*, p. 150-151.

<sup>1047</sup> Gonzalo Rovira citado en D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 294.

<sup>1048</sup> Humberto Burotto, citado en D. GARCÍA, J. ISLA y P. TORO: *Los muchachos de antes*, p. 295.



Por cierto, los estudiantes comunistas le pidieron todo tipo de explicaciones. A esa altura ya estaba claro que la fructífera unidad entre la DCU y los estudiantes comunistas era parte del pasado.

Como señalan los autores de *Los muchachos de antes*, “la crisis del “año decisivo” venía a poner fin a la pretensión sostenida por muchos – sobre todo en la primera directiva de la FECH – de construir un referente generacional de amplitud política inédita en nuestra historia reciente, que señalara rumbos nuevos para la sociedad chilena al margen de los traumas del pasado de los políticos adultos”.<sup>1049</sup>

Sin embargo, pese a su agotamiento, el movimiento estudiantil de los años 85 y 86 dejó una profunda huella. Según el ex vicepresidente de la FECH, Gonzalo Rovira: “Logramos abrir espacios que le han permitido al movimiento estudiantil entrar a participar en la vida política. Si nosotros no hubiéramos logrado crear el Centro de Alumnos, si no hubiéramos logrado triunfos, triunfos concretos, reales, prácticos, que el estudiante ve y palpa, no habríamos logrado que los estudiantes tuvieran confianza en sí mismos y en el movimiento estudiantil. Pero lo logramos y ahora hay una juventud de pie”.<sup>1050</sup>

Con todo, y tal como señala Tarrow, “la razón más sencilla por la que decaen las movilizaciones es el agotamiento. A pesar de que las protestas callejeras, las manifestaciones y la violencia son estimulantes al principio, a medida que los movimientos se organizan mejor y se dividen entre dirigentes y seguidores, acarrear riesgos, costes personales, y a la larga fatiga y desilusión”.<sup>1051</sup> Este agotamiento fue patente en el movimiento estudiantil luego del “año decisivo”. Además del recrudecimiento de la represión, las diferencias entre los grupos opositores hicieron inviable una nueva directiva de consenso, y pusieron en entredicho la idea de que el movimiento era la vanguardia de la lucha contra la dictadura. Yerko Ljubetic lo recuerda de esta forma:

“Esta situación [la ruptura del consenso] es muy clara cuando, una vez que queda claro que las protestas son sólo el inicio de una larga marcha para terminar con la dictadura y surge la necesidad de incorporar a ella las demandas propiamente universitarias, se produce una contradicción entre los más vanguardistas, en el sentido que querían obviar ese tipo de consideraciones y seguir insistiendo en un discurso propiamente político, y los que buscan incorporar reivindicaciones que ligan a la cuestión política general, los

---

<sup>1049</sup> Ibid.

<sup>1050</sup> Rovira en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 102.

<sup>1051</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p. 210.

problemas y la realidad de la universidad. El mayor o menor apego entre la lógica de unas demandas o las otras, se va convirtiendo cada vez más en una cuestión privativa de uno u otro sector político dentro del movimiento estudiantil”.<sup>1052</sup>

En este sentido, el ME de 1986 no sólo se desgastó por las fracturas entre comunistas y demócrata cristianos al interior de la FECH, también lo hizo porque durante todo el segundo semestre, las reivindicaciones propiamente universitarias habían quedado en segundo plano, eclipsadas por la estrategia de movilización social para conseguir la democracia. Esta integración del movimiento estudiantil en una plataforma más amplia de reivindicaciones políticas, como por ejemplo la Asamblea de la Civilidad, le hizo perder identidad y distanció, en alguna medida, a la dirigencia de la masa estudiantil.

La difícil relación entre reivindicaciones universitarias y reivindicaciones políticas generales es algo que podemos observar tanto en el ME chileno como en el español. Cuando los estudiantes madrileños luchaban contra la LGE o contra la selectividad (por ejemplo, en el curso 71-72 o posteriormente en el curso 74-75) conseguían generar mayor identificación entre la masa estudiantil, que cuando luchaban por reivindicaciones puramente políticas. Las reivindicaciones académicas funcionaban muy bien como catalizador de la movilización estudiantil porque se referían a problemas cotidianos y cercanos a la mayoría de los estudiantes. En cambio, cuando el ME se integraba a movilizaciones generales, por ejemplo, las que se produjeron a raíz del Juicio de Burgos, tendía a perder también parte de su identidad y a diluirse en un movimiento político mayor, en donde los temas universitarios no eran protagonistas. De ahí los momentos de flujo y reflujo del ME. Con todo, el movimiento estudiantil español supo mantener este equilibrio precario: a ratos primaron las reivindicaciones puramente académicas, que eran las que más fácilmente gatillaban los procesos de movilización, pero pronto se combinaban con reivindicaciones políticas. Así, se partía gritando contra la Ley General de Educación pero rápidamente se incluían temáticas relacionadas con la amnistía, la democracia y el fin del régimen. Al igual que los estudiantes chilenos, los españoles eran muy conscientes de que los cambios que querían para la Universidad iban de la mano con la democratización de la sociedad. Volveremos sobre este punto más adelante. En el caso chileno, la relación entre reivindicaciones académicas y políticas generales también se da con dificultad. Así, todo el primer semestre de 1986

---

<sup>1052</sup> Entrevista a Yerko Ljubetic en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 59.

primó la exigencia de reformas para la Universidad, mientras el segundo semestre, con la integración del ME en la Asamblea de la Civilidad y a la estrategia de movilización social, estas reivindicaciones tendieron a pasar a segundo plano, dejando en el centro a la lucha por la democracia, con las consecuencias que ya hemos comentado más arriba.

Con respecto al delicado equilibrio que se produce entre reivindicaciones académicas y políticas al interior de los ME, nos preguntamos ciertamente si es inevitable. Y creemos que sí. Ambos movimientos estudiantiles se desarrollan bajo regímenes dictatoriales, por lo que tuvieron que asumir, inevitablemente, un cariz político. Muy vacía hubiese sido la existencia de estos movimientos si no se hubieran imbricado con la realidad política y social en la cual se desarrollaron. En este sentido, creemos que la importancia de los movimientos estudiantiles bajo regímenes autoritarios radica justamente en la capacidad de estos de salir del ámbito puramente universitario y proyectarse sobre la realidad social, en el entendido de que la Universidad es un espacio de desarrollo intelectual y científico que debe hacerse de cara a la sociedad.

## CAPÍTULO 14

### **1987: LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN PIE DE GUERRA CONTRA LA INTERVENCIÓN. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CONTRA FEDERICI.**

Hacia el final del complejo “año decisivo”, la FECH debía nuevamente elegir directiva para 1987, pero todo lo ocurrido a partir de las jornadas de julio hizo que este proceso eleccionario fuera muy distinto del de años anteriores. En primer lugar, la DCU y el PC se presentaron en listas separadas. La DC se presentó con los socialistas renovados en la lista llamada “La Fuerza del Cambio”, y obtuvo el triunfo. Así, el nuevo presidente de la FECH fue Germán Quintana (DC) y su vicepresidente Carolina Tohá (socialista). En segundo lugar, los nuevos dirigentes se ocuparon de reorganizar al agotado movimiento en torno a los temas que preocupaban a los universitarios, el costo de los aranceles, los problemas de los alumnos expulsados por participar en movilizaciones, etc. La nueva tarea del movimiento era proteger lo que tanto tiempo les había costado conseguir, las federaciones democráticas de estudiantes. Para ello, fue necesario proponerse objetivos reales al interior de las universidades y dejar el protagonismo de la lucha contra el régimen en manos de los partidos políticos.

Según señala Quintana, a partir de 1987 hubo un descenso de la presencia e influencia de los partidos políticos en los asuntos de la FECH. “Esto no significa que los actores políticos no hayan estado trabajando activamente en la defensa de la Universidad, sino que todo el diseño de las políticas se hizo mucho más transparente. Ya no existió más esa instancia en que se reunían cuatro personas en una cafetería; definían todo lo que había que hacer y después obtenían la aprobación formal de las instancias de la Federación, como un mero trámite”.<sup>1053</sup>

Respecto de los objetivos del movimiento estudiantil, al cual se acusó de replegarse en sí mismo y dejar de lado el objetivo mayor de oposición al régimen, Quintana asegura que “nosotros, estando conscientes que la lucha de los estudiantes debe ser orientada hacia las causas de fondo de nuestro país, creemos que debe avanzarse paso a paso, y junto con cada paso, buscamos consolidar lo avanzado”.<sup>1054</sup>

Es interesante constatar que, tal como dice Tarrow, los ciclos de protesta no acaban en el vacío, sino que tienen efectos indirectos. “Cuando los movimientos dejan redes estables de activistas, pueden reaparecer cuando surgen nuevas oportunidades una

---

<sup>1053</sup> Entrevista a Germán Quintana en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 185.

<sup>1054</sup> *Ibid.*, p. 187.

vez finalizado el ciclo”.<sup>1055</sup> El enorme esfuerzo que realizaron los estudiantes de oposición por reconstruir la FECH y por insertarla dentro de un movimiento de protesta más amplio no fue en vano, pese al agotamiento y a la polarización producida en año 86, a las divisiones político partidistas y a las diferencias en las estructuras de movilización. Los sucesos de 1986 fueron un punto de inflexión en el movimiento estudiantil. Los nuevos dirigentes sabían que su fuerza radicaba en la unidad y la cohesión, y que la actuación de los partidos políticos y la adhesión al movimiento general de oposición habían difuminado la identidad del movimiento estudiantil. Esta será la razón que llevará a la nueva directiva a proteger los logros conseguidos. Mal que mal, la tesis de la movilización general no había dado buenos resultados – basta recordar las consecuencias que tuvo el atentado contra Pinochet –.

En este contexto, el movimiento estudiantil vuelve a surgir con enorme fuerza en 1987, a raíz de la designación de José Luis Federici como Rector delegado de la Universidad de Chile, quien pretendía imponer un Plan de Racionalización de recursos que afectaba directamente a la universidad. La oposición al nuevo Rector será inmediata y producirá uno de los mayores trances que haya visto la comunidad universitaria, que utilizó la estrategia de la ingobernabilidad llevada hasta el extremo, pero siempre en el contexto del conflicto universitario.

Antes de explicar el conflicto desatado en la Universidad de Chile con el nombramiento de José Luis Federici como Rector designado, es preciso señalar que, por motivos que desconocemos, para este período específico existen poquísimas fuentes en los archivos consultados. Así como para los años 1984, 1985 y 1986, el Archivo de la FECH cuenta con una gran variedad de documentos de la propia Federación, de la Asociación de Académicos de la U. de Chile y de otras organizaciones, para 1987 sólo cuenta con recortes de prensa y algunos documentos sin fecha ni firma, pero que se refieren al conflicto de Federici. Lo mismo ocurre con el Fondo Documental Eugenio Ruiz Tagle, de FLACSO, en el cuál sólo pudimos encontrar algunos números de periódicos clandestinos como *El Siglo* (órgano del Comité Central del PC) y *Unidad y Lucha* (órgano del Comité Central del PS-Almeyda), pero ningún documento perteneciente a la FECH. Para suplir este “silencio”, hemos recurrido, además de a las fuentes señaladas más arriba, a información de prensa, tanto adepta al régimen como de oposición, a entrevistas a los dirigentes de la FECH compiladas en el libro

---

<sup>1055</sup> S. TARROW: *El poder en movimiento*, p. 231.

*Conversaciones con la FECH* y a los Informes mensuales de la Vicaría de la Solidaridad, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 1987, en los cuales se recogen los acontecimientos y declaraciones de los principales involucrados.

Con todo, no deja de ser particularmente llamativa la falta de documentos y fuentes primarias, aparte de la prensa, que están disponibles en los archivos para el año 1987, especialmente si consideramos que este conflicto fue tremendamente importante, no sólo a nivel universitario sino a nivel nacional, ya que por primera vez la resistencia conjunta de una comunidad (en este caso, de la comunidad universitaria de la U. de Chile) logró doblarle la mano al régimen y consiguió sacar al Rector delegado Federici a través de la estrategia de la ingobernabilidad y la desobediencia civil. Es decir, que la estrategia que no había tenido éxito a nivel nacional en 1986, lo tuvo en la universidad en 1987.

## **I. La llegada de Federici y el Plan de Racionalización de la Universidad de Chile.**

Como hemos señalado en capítulos anteriores, la situación económica de la UCH era bastante precaria, a raíz de los cambios en el financiamiento que trajo la Ley General de Universidades y, especialmente, del descenso de los aportes fiscales a las universidades públicas. En las movilizaciones de 1985 y 1986, una reivindicación recurrente de los estudiantes decía relación con el aumento del aporte del Estado a las universidades públicas, para evitar traspasar el costo de la educación superior a los alumnos y sus familias.

Ahora bien, no sólo los estudiantes se habían visto perjudicados por el descenso del aporte fiscal a la Universidad de Chile. Esto también había afectado a los académicos y a los funcionarios. Así por ejemplo, en el IV Encuentro Nacional de Asociaciones de Académicos de Chile, realizado en Temuco entre el 26 y 28 de junio, se estimó que sus remuneraciones habían descendido en un 70% desde 1981.<sup>1056</sup> En 1985, la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile había elaborado un documento llamado “Bases para la normalización de la U. de Chile”, en el cual daban cuenta de los nefastos efectos económicos que estaba teniendo la LGU de 1981. La autoridad no prestó demasiada atención a este asunto, por lo que muchos académicos

---

<sup>1056</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 24, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf)

decidieron participar en las movilizaciones realizadas durante 1985 y 1986, como vimos en capítulos anteriores.<sup>1057</sup>

Debido a lo crítico de la situación, los académicos de la UCH decidieron realizar un paro total de actividades, el 5 de julio de 1987, para exigir aumento de presupuesto, mejoras salariales de un 30% y ampliación del crédito fiscal, entre otros. Para intentar solucionar este conflicto, que ya estaba adquiriendo proporciones preocupantes, el Consejo de decanos se ofreció como mediador ante el Rector delegado General Roberto Soto Mackenney, y le entregó un documento solicitando un aporte estatal de mil millones de pesos para solventar la crisis económica de la Universidad. El Rector delegado encargó a la Junta Directiva<sup>1058</sup> de la UCH la formulación de propuestas en torno al tema, para hacerlas llegar al Ministro de Educación, Juan Antonio Guzmán, lo que realizó el 24 de julio.

Paralelamente a las gestiones “oficiales”, estudiantes y académicos comenzaban a movilizarse. La CONFECH decidió llamar a un paro nacional estudiantil para el 26 de agosto, y el Comité Coordinador de Asociaciones de Académicos<sup>1059</sup> decidió convocar a otro paro para el 25 de agosto. La idea era sumar ambas movilizaciones y generar una oleada de protesta universitaria que involucrara a estudiantes y profesores. Por su parte, los funcionarios de la Universidad de Chile también reactivaron sus peticiones económicas, entre ellas, mejoras salariales.<sup>1060</sup>

En este contexto, el 14 de agosto el Ministerio de Educación informó de la renuncia del Rector delegado Soto Mackenney, lo cual sorprendió a toda la Universidad. Nunca se explicaron las razones de dicha renuncia, pero es probable que no haya sido voluntaria, y que se haya debido a que el Rector apoyó algunas de las reivindicaciones

---

<sup>1057</sup> Carolina ESPINOZA BECERRA: *De las aulas a la calle. La lucha por el fin de la intervención en la Universidad de Chile*, Tesis de Licenciatura en Historia de la Universidad Católica de Chile., Santiago, 2005, p. 87.

<sup>1058</sup> La Junta Directiva, creada por la Ley General de Universidades de 1981, era la máxima autoridad de la Universidad, junto con el Rector. La Junta debía aprobar las decisiones tomadas por el Rector. Estaba compuesta por 9 miembros, de los cuales un tercio era elegido por el Consejo Universitario de entre los académicos de mayor jerarquía; el segundo tercio era elegido también por el Consejo Universitario, de entre académicos o profesionales que no ejercieran cargos en instituciones de educación superior; el último tercio era directamente por el Presidente de la República. El Rector podía participar de las reuniones de la Junta Directiva, pero sólo tenía derecho a voz. José Joaquín Brunner, “Informe sobre desarrollo y el estado actual del sistema universitario en Chile”. Documento de Trabajo FLACSO, Núm. 227, Diciembre de 1984, p.102. <http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/1984/DT/001008.pdf>.

<sup>1059</sup> Instancia que coordinaba a las asociaciones de académicos a nivel nacional.

<sup>1060</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad, agosto de 1987”, p. 25, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf)

de los académicos, adjuntando su firma a la solicitud de un aporte extraordinario de mil millones de pesos para la Universidad de Chile.<sup>1061</sup>

La figura del Rector Soto fue bastante particular, en el contexto de la intervención universitaria, porque a pesar de ser un Rector designado y militar, permitió que la UCH recobrara un cierto grado de autonomía: “se democratizaron los centros de alumnos; los académicos se organizaron; se eligieron los Jefes de Departamentos y posteriormente los Decanos. [El Rector] terminó haciendo suyos los planteamientos de los estudiantes, académicos y decanos de dicha institución, apoyando la tesis postulada por la comunidad universitaria de lo que debía ser la Universidad de Chile – esto es, una institución autónoma, estatal, fundamental para el desarrollo y la cultura nacional, democrática y pluralista –, postulados completamente contrarios a los señalados por el régimen que aspiraba a continuar con el modelo intervencionista, represivo, autofinanciable y asfixiante”.<sup>1062</sup>

Es evidente que Soto Mackenney no había asumido todos los planteamientos de estudiantes, académicos y funcionarios; de hecho, en las movilizaciones de 1985 y 1986, los estudiantes exigían su renuncia por permitir la destrucción de la UCH. Sin embargo, es cierto que durante su período, el Rector Soto permitió que los estamentos se organizaran. Aunque no la reconoció legalmente, sí toleró la reconstitución de la FECH en 1984 y terminó asumiéndola como interlocutor válido; lo mismo ocurrió con la Asociación de Académicos (AAUCH), formada en 1983 y con la Asociación de Funcionarios (AFUCH), creada en 1985. Además, Soto introdujo algunas fórmulas de representación en la elección de los decanos. Así, en ciertas facultades éstos eran elegidos por los académicos, lo que les permitió – tanto a decanos como a profesores – involucrarse más en la gestión de la Universidad.

Por eso, la renuncia de Soto permitió a los distintos estamentos de la UCH abrigar la esperanza de poder incidir en el nombramiento del nuevo Rector. De hecho, once de los trece miembros que conformaban el Consejo de Decanos de la Universidad enviaron una carta al Rector subrogante, Marino Pizarro, recordando el procedimiento de nombramiento de la máxima autoridad, establecido en los estatutos de la Universidad

---

<sup>1061</sup> Carolina ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 90. Germán Quintana también señala, en entrevista con R. Brodsky, que la firma del Rector delegado Soto en el documento solicitando un aporte extraordinario de mil millones de pesos fue lo que causó su salida, aunque esto nunca ha sido confirmado. R. BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 182.

<sup>1062</sup> C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 89.



de Chile. La Junta Directiva tenía la facultad de proponer una terna al Presidente de la República, para que de allí saliera el futuro Rector. Continuaba la carta señalando que

“el Consejo estima que la Junta Directiva debería considerar la instancia de consulta a un claustro de académicos de la más alta jerarquía para la generación de esta terna. Todos quienes suscriben, piensan que a propósito de la designación del rector que reemplace a don Roberto Soto, debiera ponerse en marcha un mecanismo que sea la lógica culminación del proceso realizado en el último tiempo, y que ha tendido a perfeccionar la participación jerarquizada de los académicos en la proposición de sus autoridades”.<sup>1063</sup> Sin embargo, el Ministro respondió rápidamente que para la elección del nuevo Rector se utilizarían los mecanismos “más adecuados, y no necesariamente los procedimientos democráticos”.<sup>1064</sup>

Por su parte, la FECH coincidía con los académicos en la necesidad de poner fin a los Rectores delegados, y llamó a realizar una consulta entre los docentes para que el nombramiento se realizara a través de su proceso transparente para todos los estamentos de la comunidad universitaria.

Ahora bien, mientras se esperaba el nombramiento, la UCH continuaba movilizada. Los académicos habían iniciado un paro de actividades el 17 de agosto, instancia que contó con una importante adhesión. Por su parte, los estudiantes se preparaban para el paro del 26 de agosto, realizando asambleas y reuniones informativas. Y en este ambiente, la noticia del nombramiento de José Luis Federici cayó como una bomba. Federici se desempeñaba como decano subrogante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCH, y había sido uno de los dos decanos que no había firmado la carta que el Consejo había enviado al Ministro, pidiendo transparencia en la designación del nuevo Rector, y por cierto, tampoco había firmado la carta pidiendo un aporte de mil millones de pesos para la UCH, la cual, le habría costado la salida a Soto Mackenney.<sup>1065</sup>

Además, Federici era considerado un académico mediocre, sin trabajos de investigación, y, cuyo paso por otras empresas del Estado había sido bastante polémico. Por ejemplo, en 1975 había sido designado Director de Ferrocarriles del Estado, donde inició un proceso de reestructuración que culminó con miles de trabajadores despedidos, y con la disminución de las prestaciones de salud para los que se quedaron en la empresa. En la Empresa Nacional de Carbón hizo algo parecido. En 1978 fue nombrado

---

<sup>1063</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 26, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf).

<sup>1064</sup> Ibid.

<sup>1065</sup> C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 96.

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y en 1979, Ministro de Economía. En 1981 pasó a trabajar al mundo privado<sup>1066</sup>, pero continuó desempeñándose como académico de la Universidad de Chile, donde llegó a ser decano subrogante, aunque nunca fue confirmado en su cargo.<sup>1067</sup> Además de sus escasas credenciales académicas, otro de los motivos del gran rechazo que causó la designación de Federici fue la forma en que se hizo, pasando a llevar todas las instancias consultivas de la Universidad, incluida la Junta Directiva.

Según el diario *La Época*, primer periódico de oposición no clandestino, que comenzó a circular en marzo de 1987, el Ministro de Educación, Juan Antonio Guzmán, habría pedido a todos los miembros de la Junta Directiva de la UCH que presentaran una terna, en la cual debía estar incluido Federici. “Algunos reaccionaron de inmediato negativamente. Otros prefirieron esperar una reunión con el ministro para protestar personalmente. Al encuentro, “informal”, fueron ocho de los nueve miembros de la Junta. Se efectuó el 19 de agosto. Allí Guzmán insistió en Federici como rector. Cuatro de los seis representantes del Consejo Universitario se opusieron abiertamente. Si se deseaba elegir a un académico, dijeron, era mejor “escoger a uno de alto nivel”. Los otros dos indicaron que Federici, por su trayectoria, sólo iba a provocar reacciones adversas. En concreto, dijeron que era “lo mismo que ponerles banderines a los académicos y los estudiantes”. La reunión concluyó sin acuerdo y el ministro se limitó a indicar que transmitiría esas opiniones a Pinochet”.<sup>1068</sup>

Dos días después de esta reunión se anunció el nombramiento de José Luis Federici como nuevo Rector designado de la Universidad de Chile. Las reacciones fueron inmediatas. Los decanos que componían el Consejo Universitario declararon su “disconformidad con el procedimiento utilizado”, además de expresar su molestia por el nivel académico del nuevo Rector.

Los académicos fueron un poco más duros, señalando que el procedimiento de la elección había pasado por encima de la comunidad universitaria, que la calidad académica del nuevo Rector designado era indigna del cargo y que temían lo que Federici, “especialista en exoneraciones”, podría hacer en la Universidad. Además, la AAUCH señaló que buscaría todos los mecanismos para impedir que Federici

---

<sup>1066</sup> Donde también tuvo una actuación polémica en COPEC, empresa de la cual salió con una demanda civil en su contra.

<sup>1067</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 27, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf).

<sup>1068</sup> *La Época*, 31 de agosto de 1987, pp. 10-11 citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 99.

permaneciera en su cargo, y procedió a convocar a un paro total de 48 horas para el 24 de agosto, día en que tomaría posesión del Rectorado.<sup>1069</sup>

Finalmente, la Federación de Estudiantes consideró que la designación era una provocación, por lo que llamó a los estudiantes “a planificar y realizar acciones de desobediencia civil, pacífica y organizada, que impidan al rector delegado gobernar la universidad”.<sup>1070</sup> En este sentido, la designación de José Luis Federici como Rector delegado de la Universidad de Chile operó como una oportunidad política para la formación de un movimiento universitario, no sólo estudiantil, que incluía a académicos, funcionarios y estudiantes, en contra de la intervención del régimen en la Universidad. Ciertamente es que ya en años anteriores los estudiantes – en algunos casos acompañados por los académicos, en otros de manera independiente – habían iniciado una lucha contra la intervención. Basta recordar el Paro Nacional Estudiantil Prolongado de 1986, en el cual se exigía el fin de la intervención, el fin de los Rectores delegados y el aumento del aporte fiscal al sistema público de educación superior. Sin embargo, la diferencia fundamental del conflicto contra Federici es que no sólo involucró a los estudiantes sino a toda la comunidad universitaria, generando así una etapa de ingobernabilidad y desobediencia civil al interior de la UCH que no tenía precedentes.

Fue tal el revulsivo que supuso la designación de Federici como nuevo Rector delegado de la Universidad de Chile, que el día que asumía su cargo – 24 de agosto –, algunos decanos, académicos, estudiantes y funcionarios realizaron un acto de desagravio en la Facultad de Arquitectura. Y dos días después, el Consejo Universitario señalaba que “cualquier política que plantee modificaciones o reestructuración del quehacer de esa casa de estudios debe ser discutida y analizada por esa instancia superior”.<sup>1071</sup> De más está decir que Federici no hizo caso de esta exigencia, lo que es vital para entender por qué la comunidad universitaria se sintió tan atropellada con la actuación de este Rector delegado.

El 26 de agosto la FECH publicó el “Manifiesto por la Autonomía Universitaria” en el cual señalaba que: “El despido del Rector Soto ha sido pretexto para afrentar una vez a la comunidad universitaria. Contra lo dispuesto en el propio Estatuto vigente, el

---

<sup>1069</sup> *La Época*, 23 de agosto de 1987, p. 15, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 101.

<sup>1070</sup> Todas las citas de este párrafo son del “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 28, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf).

<sup>1071</sup> *El Mercurio*, 27 de agosto de 1987, C1, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 112.

general Pinochet designa a un académico de escasa calificación como rector, concitando el más abrumador rechazo imaginable de una universidad intervenida”.<sup>1072</sup>

De hecho, puede parecer extraño que la designación de un Rector civil y académico haya causado tal molestia en la Universidad de Chile, si consideramos que desde 1973 en adelante, la UCH había tenido solamente Rectores designados por Pinochet y que todos, hasta ese momento, habían sido militares. El problema de la llegada de Federici tiene que ver con dos cuestiones principales: la forma de su nombramiento y la misión que debía realizar en la Universidad.

Ya hemos explicado brevemente cómo se produjo la designación de Federici<sup>1073</sup>, sin tener en cuenta a ninguno de los organismos consultivos de la UCH y pasando a llevar el deseo de la comunidad universitaria de tener un proceso de nombramiento transparente, produciendo un movimiento de rechazo que iría creciendo con los meses. Nunca un Rector designado había tenido que lidiar con tanta resistencia de parte de estudiantes, académicos y funcionarios. Y es que la Universidad de Chile de 1987 no era la misma de unos años antes, los espacios de autonomía que se habían ido abriendo a lo largo de la década de los 80 no habían sido en vano, eran espacios que sus protagonistas no estaban dispuestos a ceder. Además, las luchas dadas por los estudiantes y por los otros estamentos habían contribuido sobremanera a socializar la idea de que era necesario democratizar la Universidad para que ésta pudiera cumplir con su función social. En este sentido, podríamos decir que la UCH estaba mucho más consciente de su importancia y de sus necesidades de democratización y autonomía en 1987, gracias a todo el proceso de lucha llevado a cabo en años anteriores. Por esto, creemos, la imposición de un nuevo Rector, por muy civil y académico que fuera, causó el conflicto que causó.

Además de lo anterior, Federici fue muy resistido porque el régimen le había asignado como tarea primordial aplicar la segunda parte del Plan de Racionalización para las universidades públicas, y, recordemos, el Rector se había hecho conocido por su polémica actuación en las reestructuraciones de Ferrocarriles del Estado y la Empresa Nacional del Carbón, de las cuales despidió a miles de trabajadores. De hecho, incluso antes del nombramiento de Federici, el Ministro de Educación anunció que el gobierno

---

<sup>1072</sup> Revista *Análisis*, 31 de agosto al 6 de septiembre de 1987, p. 32 citada en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 100.

<sup>1073</sup> Para más detalles al respecto ver C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 94 en adelante.

iniciaría un complejo plan para racionalizar y desarrollar el sistema universitario, que se llamó “Programa de Desarrollo de la Educación Superior” e incluía 4 aspectos:

- 1.- Reordenamiento financiero de todas las universidades públicas del país.
- 2.- Estudio de los recursos financieros hasta el año 1988.
- 3.- Adecuación de los recursos financieros al Plan de Desarrollo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- 4.- Rol de las universidades en la evaluación del Patrimonio Cultural.<sup>1074</sup>

Aunque el anuncio del Ministro no revelaba mucho en torno al Plan de Racionalización, sus declaraciones alarmaron a la comunidad universitaria, ya que se consideró a éste como la segunda etapa de la reforma al sistema universitario iniciada en 1981, y ya se habían visto las consecuencias de la primera etapa: desfinanciamiento, descenso en remuneraciones, traspaso del costo de la educación al estudiante, etc. Con todo, la desinformación respecto del plan de Racionalización fue la tónica, y probablemente, eso hizo que la comunidad universitaria fuera extremadamente reacia a su aplicación, “puesto que tanta desinformación daba pie para pensar que más que racionalizar y modernizar el sistema, dicho programa estaría destinado fundamentalmente a reducir y destruir a las universidades, en la medida de coartarles su autonomía – que ya había sido fuertemente golpeada tras la dictación de la Ley General que Universidades de 1981 –, haciendo de éstas entes respetuosos a la autoridad política y por ende reacios a gestar movimientos disidentes al interior de ellas que pudieran llegar a perjudicar la permanencia de las Fuerzas Armadas en el poder”.<sup>1075</sup>

La prensa tampoco ayudaba a aclarar las cosas, ya que según los periódicos y revistas adeptos al régimen, el plan estaba destinado a “mejorar o corregir el marco de incentivos para lograr comportamientos racionales y fortalecer la descentralización universitaria”,<sup>1076</sup> mientras, revistas de oposición, como *Cauce*, señalaban que “todos lo saben – se entiende achicar la “U”, exonerar masivamente (se habla del despido de 1700 funcionarios, 800 de ellos académicos), eliminar estructuras universitarias (...) para marzo del próximo año el régimen necesita una Universidad de Chile desarticulada”.<sup>1077</sup>

---

<sup>1074</sup> Todas las citas de este párrafo son del “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 26, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf).

<sup>1075</sup> C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 104.

<sup>1076</sup> Revista *Qué Pasa*, 27 de agosto al 2 de septiembre de 1987, p. 10 citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 104.

<sup>1077</sup> *Cauce*, 31 de agosto a 6 de septiembre de 1987, p. 41, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 104.

El mismo Federici, a pocos días de su nombramiento, dio más pistas sobre algunas medidas que el Plan de Racionalización tenía contempladas para la Universidad de Chile. En primer lugar, según el Rector delegado, para terminar con el déficit que afectaba a la institución era necesario reestructurar a los llamados “elefantes blancos”, que consumían la mayor parte del presupuesto: las facultades de Ingeniería, Medicina, el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre y el Canal de Televisión de la UCH. En segundo lugar, la Universidad sería dividida “en cuatro corporaciones, lo que supondría la separación o disolución de algunas unidades que considera factores ajenos y prescindibles”.<sup>1078</sup> De esta manera, la Facultad de Ingeniería se separaría del resto de la UCH y se convertiría en una institución autónoma; las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Veterinarias y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) conformarían la Universidad Sur; Medicina y las carreras asociadas a ella conformarían la Universidad Norte (se excluye de ella al Hospital Clínico); por último, la Universidad de Chile quedaría conformada solamente por las facultades de Filosofía, Ciencias, Derecho, Arquitectura y Economía.<sup>1079</sup>

Las razones para este verdadero desmembramiento de la UCH se encontraban, como hemos señalado, en el déficit económico que afectaba a la Universidad, y en la idea de que sería más fácil administrar unidades más pequeñas. Además, el Plan de Racionalización contemplaba privatizar, en el futuro pero sin explicar cuándo exactamente, instituciones consideradas activos prescindibles, como el INTA, el Hospital Clínico<sup>1080</sup> y el Canal de TV, y vender una serie de terrenos de la Universidad.<sup>1081</sup>

Esto, como era de esperar alertó sobremanera a la comunidad universitaria. El presidente de la AAUCH, Patricio Basso, acusaba que el Plan de Racionalización era un nuevo intento de los neoliberales de profundizar la intervención en la universidad. Lo

---

<sup>1078</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 29, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf).

<sup>1079</sup> Ibid., p. 29-30.

<sup>1080</sup> El Hospital Clínico José Joaquín Aguirre fue el “heredero” del Hospital San Vicente de Paul, fundado en 1872. En 1952 se transformó en un Hospital Clínico con el nombre de José Joaquín Aguirre (antiguo director del Hospital San Vicente y Rector de la Universidad de Chile). En dicho recinto, además de las prácticas de los estudiantes de Medicina de la UCH, se daba (y se continúa dando) cobertura médica a una gran cantidad de personas, de Santiago y de todo Chile. Es una institución emblemática del sistema de salud pública. El problema específico del J.J. Aguirre durante el conflicto de Federici es que consumía, junto con la Facultad de Medicina, el 40% del presupuesto de la Universidad, por lo que el régimen propició la idea de privatizarlo.

<sup>1081</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, agosto de 1987, p. 30, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed\\_19102010\\_1046am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda1198c9ed_19102010_1046am.pdf).

habían comenzado a hacer en 1981, con la Ley General de Universidades, pero en el camino habían fracasado, debido a los espacios de autonomía ganados por estudiantes, académicos y funcionarios al interior de la UCH. “A pesar de la reestructuración implantada en 1981 y del intento de someter a las universidades al modelo económico – autofinanciamiento, competencia entre universidades, crédito fiscal – los académicos seguían sintiendo la Universidad de Chile como una universidad nacional responsable del desarrollo del país, responsable de la cultural. Es en ese cuadro donde viene esta otra arremetida que apunta a la dispersión universitaria”.<sup>1082</sup>

En reacción a la designación de Federici y al Plan que traía bajo el brazo, estudiantes, académicos y funcionarios paralizaron sus actividades. Para el jueves 27 de agosto, la FECH convocó a una toma de facultades (ocupación de las facultades por parte de los estudiantes para impedir cualquier tipo de actividad, ya sea docente o administrativa) y a una paralización total de actividades de manera indefinida, la que se saldó con 8 facultades ocupadas por los estudiantes, desalojos de Carabineros, manifestaciones callejeras y 108 detenidos. Según Germán Quintana, presidente de la FECH, esta movilización estaba “dirigida hacia la renuncia de Federici, pero en ningún caso contra los decanos de nuestra universidad. Por el contrario, ratificamos nuestro apoyo a ellos por su valiente desempeño, por su valiente conducta al defender la tradición histórica de nuestra Universidad de Chile”.<sup>1083</sup>

Es interesante constatar que el nuevo Rector designado tuvo que hacerse cargo de una universidad completamente movilizada, y además, coordinada. Las relaciones entre estudiantes, académicos y funcionarios se estrecharon muchísimo en el fragor de la lucha contra Federici y su Plan de Racionalización, y esta situación se mantuvo así por, al menos, sesenta días.

## **II. Dos meses intensos.**

Las movilizaciones con las que se encontró Federici al tomar el mando de la UCH continuaron durante todo el mes de septiembre. Los estudiantes seguían comprometidos con el paro prolongado, mientras los académicos y funcionarios continuaban con sus reivindicaciones salariales (reajuste del 30%) y presupuestarias para la Universidad; y los tres estamentos se unieron en torno a la exigencia de renuncia

---

<sup>1082</sup> Ibid.

<sup>1083</sup> Ibid., p. 29.

del Rector delegado. Tratando de apagar el fuego con bencina, Federici anunció, a comienzos de septiembre, que si los paros continuaban, muchas escuelas o facultades no podrían cumplir con las normas de asistencia requeridas, lo que se traduciría en la pérdida del semestre académico para muchos estudiantes, a lo que éstos respondieron que preferían “perder un semestre que la universidad”.<sup>1084</sup>

Así, el 2 de septiembre la FECH convocó a una toma pacífica de las facultades de Medicina Norte, Derecho, Ingeniería, Ciencias, Arquitectura y Periodismo, para exigir la salida de Federici. Además, los estudiantes pedían que se aplicaran las medidas propuestas por los decanos en el mes de julio (tendientes a aumentar el financiamiento estatal de la UCH), que se reconocieran las asociaciones de funcionarios, académicos y estudiantes, y, tal como lo venían exigiendo desde 1984, que el IPS y el Pedagógico volvieran a ser parte de la Universidad de Chile.

En este sentido, las peticiones y reivindicaciones de los estudiantes no habían variado: su lucha era contra el Plan de Racionalización, que vendría a profundizar lo que ellos consideraban la destrucción de la UCH, al reducirla, desmembrarla y obligarla a autofinanciarse. Básicamente, los estudiantes se oponían a la aplicación de medidas neoliberales en el ámbito universitario porque consideraban que eso destruiría aún más el sistema de educación superior pública y la función social de la Universidad de Chile en el ámbito nacional.

Siguiendo con la movilización estudiantil, desde varias facultades comenzó a surgir la idea de reconocer ya no al Rector delegado sino al Consejo Universitario como autoridad máxima, en una clara opción por la estrategia de desobediencia civil. Por cierto, la Escuela de Derecho fue particularmente combativa en este aspecto y sus estudiantes vivieron momentos de represión tremendamente violentos. Así, por ejemplo, el 3 de septiembre esa facultad fue desalojada por Carabineros, quien detuvo a 68 personas, incluido el presidente de la FECH, que a las 1.30 AM salía del edificio. Sorpresivamente, el mismo 3 de septiembre, una vez concluido el desalojo, Federici anunció que había pedido la renuncia al Decano de Derecho, Mario Mosquera, uno de los decanos que en los últimos años había sido elegido democráticamente por los académicos de esa facultad, y ordenó el cierre de tres facultades. La destitución de

---

<sup>1084</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, septiembre de 1987, p. 17, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c\\_19102010\\_1053am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c_19102010_1053am.pdf)



Mosquera se justificó diciendo que el decano había sido extremadamente pasivo ante la toma de su facultad, negándose a llamar a Carabineros para desalojarla.

Los demás decanos de la UCH reaccionaron inmediatamente, a través de una declaración pública. Federici, señalaron,

“ha creado un clima de incertidumbre y desconfianza en la comunidad académica. Sus precipitadas actuaciones en el corto período en que ha ejercido su cargo, tales como la exoneración del señor decano de la Facultad de Derecho y el cierre de las Facultades de Filosofía, Humanidades y Educación y Derecho, hacen que su permanencia sea el principal obstáculo para la normalización de las actividades de nuestra casa de estudio”.

Finalizaban la carta diciendo que “su alejamiento permitiría de inmediato un clima propicio para superar el grave conflicto actual”.<sup>1085</sup> De esta manera, el conflicto ya no era sólo entre estudiantes, académicos y funcionarios y el Rector. Los decanos también se pronunciaron y comenzaron, cada vez más, a involucrarse y a ser protagonistas de este difícil momento de la Universidad de Chile.

La FECH también reaccionó ante la arremetida de Federici, y decidió crear el Comité de Defensa de la Universidad de Chile, al que invitó a participar a varias personalidades del mundo intelectual y de la cultura. Lo interesante es que no sólo los estudiantes de oposición se organizaban para resistir al Rector delegado, también lo hicieron algunos estudiantes de derecha. Por ejemplo, el Frente Universitario, agrupación de estudiantes de derecha liberal, apoyó públicamente al Comité de Defensa creado por la FECH y respaldó la declaración de los decanos. También lo hizo la Asociación de Académicos de la UCH, que además declaró que las últimas actuaciones de Federici eran ilegítimas y se sumó al llamado realizado por la FECH para reconocer al Consejo Universitario como autoridad máxima. Y es más. En la propia Junta Directiva comenzó a producirse un quiebre con el Rector, hasta tal punto, que ésta decidió “autoconvocarse”.<sup>1086</sup> De esta manera, se iba configurando un movimiento muy amplio en contra del Rector delegado y el Plan de Racionalización.

Para el 4 de septiembre, la CONFECH había convocado a una movilización de estudiantes de todas las universidades chilenas, la que fue particularmente masiva en Santiago. En el centro de la capital, Carabineros detuvo a más de 200 manifestantes, entre los que se encontraban el presidente y la vicepresidenta de la FECH, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y el de la Federación de

---

<sup>1085</sup> Ibid., p. 18.

<sup>1086</sup> Ibid., p. 19-20.

Estudiantes de la Universidad de Santiago. Es importante recordar que la lucha contra Federici se inicia en la UCH pero traspasa sus muros y consigue la solidaridad de estudiantes y académicos de otras casas de estudio, especialmente porque el Plan de Racionalización no estaba pensado sólo para la Universidad de Chile, sino que se aplicaría a todas las universidades públicas.

En un intento por acabar con el conflicto, o al menos por bajar la tensión, el 6 de septiembre Federici anunció la suspensión preventiva e indefinida de todas las actividades de la Universidad de Chile, argumentando que “a partir de 1986 la U. de Chile y en general todo el sistema de educación superior, ha presentado la reedición de los problemas de agitación estudiantil y de algunos sectores de académicos, sufriendo graves daños para su prestigio y desenvolvimiento”.<sup>1087</sup> Estos grupos – minoritarios según el Rector delegado – “han hecho insistentes llamados al co-gobierno y a la ingobernabilidad de la Universidad de Chile, amparados por agrupaciones de alumnos y académicos que no tienen reconocimiento legal” y que han justificado las jornadas de movilización y los paros ‘con razones de reivindicaciones económicas’”.<sup>1088</sup>

Los decanos rechazaron el cierre y criticaron el que Federici, una vez más, hubiera pasado por sobre sus atribuciones sin consultar al Consejo Universitario. Por su parte, la FECH también rechazó el cierre y su presidente llamó a los estudiantes “a transformar la paralización de actividades en la voluntad de reanudar las actividades en la universidad en forma normal”, por lo que se realizaron marchas, asambleas y reuniones con académicos y decanos. Además, un grupo de estudiantes de Derecho, en su mayoría de Renovación Nacional (partido de derecha liberal), interpuso un recurso de protección en contra del cierre de la UCH, por considerar que se estaba lesionando su garantía constitucional a la enseñanza. Incluso la Vicaría Pastoral Universitaria se involucró en el conflicto, convocando a una “Jornada de ayuno y reflexión por la Autonomía de la Universidad”, realizada en la Parroquia Universitaria.<sup>1089</sup>

A raíz de la postura crítica de los decanos hacia el Rector delegado, el 9 de septiembre Federici decidió exonerar a tres de ellos: Atiliano Lamana, de Ciencias Físicas y Matemáticas, Fernando Valenzuela, de Filosofía y Humanidades y Hernán Montecinos, de Arquitectura. El 17 de septiembre expulsó a 35 académicos, los que en su mayoría pertenecían a la AAUCH, incluido su presidente, Patricio Basso. Como

---

<sup>1087</sup> Ibid., p. 20.

<sup>1088</sup> *La Época*, 7 de septiembre de 1987, p. 11, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 116.

<sup>1089</sup> Ibid., p. 22.

señala Carolina Espinoza en su tesis, es muy probable que la expulsión de estos profesores haya tenido que ver más con diferencias políticas que con motivos económicos. Con todo, los exonerados decidieron desconocer la resolución, ya que emanaba de un poder que ellos consideraban ilegítimo.<sup>1090</sup> Por cierto, estas expulsiones fueron repudiadas por la comunidad universitaria y por la opinión pública en general.

Así, como hemos señalado, dentro de la UCH se fue forjando una alianza estratégica que incluía a decanos, académicos, funcionarios y estudiantes de distintas tendencias políticas, en torno a un objetivo común: sacar a Federici. Para el Decano de Medicina, Alejandro Goic, la situación de la Universidad “es un hecho de extrema gravedad y ante el cual la comunidad ha reaccionado como un todo. Nadie puede confundirse en estos momentos”.<sup>1091</sup> Para la vicepresidenta de la FECH, la UCH había tomado “conciencia colectiva de lo grave que es el problema y que es indispensable actuar así. Evidentemente que Federici es un elemento que cohesiona al conjunto de la comunidad universitaria. Unánimemente lo rechazamos”.<sup>1092</sup> E incluso para los estudiantes de derecha, este objetivo era compartido. Según Carlos Kahler, de Frente Universitario, “este movimiento es distinto a los que tanto criticamos el año pasado. El objetivo es realista, va más allá de izquierdas o derechas: que se vaya Federici. Hemos querido estar presentes para decir que la unidad hay que mantenerla, porque ella nos va a dar la victoria. No podemos pensar en entrar a clases mientras esté Federici”.<sup>1093</sup>

En este contexto de agitación y movilización, el 23 de septiembre Federici decidió reabrir la Universidad de Chile, suponiendo que tanto estudiantes como académicos estarían interesados en salvar el semestre. Se equivocó. Para el 24 de septiembre, la FECH, la AAUCH y la Asociación de Funcionarios habían convocado a un Día de Defensa de la Educación Superior, que consistiría en diversas actividades a realizar en varias ciudades de Chile, para demostrar al régimen la disconformidad con sus políticas universitarias. La marcha que se produjo en Santiago fue violentamente reprimida y se saldó con una estudiante baleada en la cabeza por un carabinero. María Paz Santibáñez, estudiante de Piano, estaba rayando un muro cerca del Teatro Municipal, cuando un carabinero le disparó a la cabeza, por la espalda. La estudiante

---

<sup>1090</sup> C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 117.

<sup>1091</sup> Revista *Cauce*, 31 de agosto a 6 de septiembre de 1987, p. 43, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 119.

<sup>1092</sup> Revista *Análisis*, 19 al 25 de octubre de 1987, pp. 30-32, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 121.

<sup>1093</sup> Revista *Cauce*, 5 al 11 de octubre de 1987, p. 43, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 120-121.

quedó gravemente herida y fue trasladada por sus compañeros al Hospital de Neurocirugía, mientras Orlando Sotomayor, el carabinero que disparó contra la estudiante, se refugiaba en el Teatro Municipal. La joven pianista finalmente sobrevivió al ataque, sin embargo, esta actuación de la policía sólo contribuyó a recrudecer los ánimos de los estudiantes, de la comunidad universitaria y de la opinión pública en general.<sup>1094</sup>

Al día siguiente, hubo nuevas manifestaciones callejeras de estudiantes de las tres principales universidades de Santiago<sup>1095</sup>, y se produjeron enfrentamientos con Carabineros frente a las casas centrales de la Universidad Católica y de Chile. Ante el uso de armas de fuego por parte de la policía, algunos estudiantes se refugiaron en la Catedral, en el momento en que se realizaba un homenaje al Cardenal y ex Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, y hasta allí entraron los carabineros. La jornada se saldó con 56 detenidos, 11 de los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar.<sup>1096</sup> También hubo marchas y paros en la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad de Magallanes (Punta Arenas), la Universidad Austral (Valdivia), la Universidad de La Frontera (Temuco) y la Universidad Católica de Temuco.

De esta manera, el conflicto no sólo escalaba dentro de la UCH sino también en las calles de Santiago y de otras ciudades del país. Cada vez más, la opinión pública y la sociedad civil apoyaba la causa de la comunidad universitaria de la UCH. Así, por ejemplo, varios colegios profesionales, como el de Ingenieros, Arquitectos y Dentistas, se declaran contrarios al Plan de Racionalización y a la gestión de Federici.<sup>1097</sup> También lo hicieron diversas figuras del ámbito artístico e intelectual y algunos sindicatos. Sin embargo, el Rector delegado y el gobierno parecían hacer oídos sordos a las exigencias de la sociedad.

---

<sup>1094</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, septiembre de 1987, p. 24-26, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c\\_19102010\\_1053am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c_19102010_1053am.pdf). La reacción de Carabineros luego del ataque a María Paz Santibañez fue muy poco transparente, primero señaló que el autor del disparo había sido atacado por los estudiantes y que se encontraba grave en el hospital. Esta versión fue desmentida por todos los testigos del hecho y por fotografías de la prensa. Luego se dio otra versión de los hechos, y finalmente Orlando Sotomayor fue solamente condenado a firmar un libro de asistencia durante dos meses.

<sup>1095</sup> Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Santiago.

<sup>1096</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, septiembre de 1987, p. 26, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c\\_19102010\\_1053am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c_19102010_1053am.pdf).

<sup>1097</sup> C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 126.

Como si el conflicto no hubiera escalado suficiente, a fines de septiembre Federici decidió exonerar a 50 académicos más, y reducir la jornada a otros 35, bajo la premisa de que no estarían cumpliendo con sus jornadas laborales. Además, llamó a estudiantes y académicos a volver a clases, y, para intentar convencerlos, prometió no hacer cambios en la propiedad del Hospital Clínico y aumentar las remuneraciones de los profesores, pero fue en vano. Ni la FECH, ni la Asociación de Académicos, ni el Consejo Universitario aceptaron la propuesta.<sup>1098</sup> El conflicto en la Universidad de Chile llevaba ya más de un mes y no tenía visos de solucionarse aún.

Para definir sus posiciones, el 29 de septiembre se realizó en la Universidad de Chile el primer Claustro de Profesores Titulares, al cual asistieron los decanos que componían el Consejo Universitario, 420 académicos, tres vice-decanos y algunos miembros de la Junta Directiva. En esa oportunidad se dio a conocer un documento elaborado por el Consejo, titulado “Normalización de la Universidad de Chile”, en el cual se afirmaba que “las actividades académicas y docentes de una Universidad no se suspenden ni se normalizan por simple decreto. La vida normal de la U. de Chile realmente se recuperará cuando exista confianza en sus autoridades centrales y un clima de respeto hacia la comunidad universitaria. El día que esto se logre nuestra casa de estudios se normalizará espontáneamente”.<sup>1099</sup> Los académicos también exigieron la renuncia de Federici y reiteraron su respaldo al Consejo Universitario como máxima autoridad de la UCH. Y así el conflicto continuó durante todo el mes de octubre.

Pese a que la Universidad de Chile se había vuelto completamente ingobernable, el régimen parecía respaldar a Federici y su política inflexible, aunque internamente ya habían aparecido cuestionamientos al actuar del Rector delegado. Si bien durante septiembre el gobierno había intentado no involucrarse demasiado en el conflicto, para no tener que asumir los costos políticos de éste, en octubre esa estrategia no daba para más. De manera cada vez más recurrente, la comunidad universitaria exigía directamente al régimen que pusiera fin al problema. Por ejemplo, el presidente de la AAUCH, Patricio Basso, señalaba a comienzos de octubre que “ha llegado el momento en que el gobierno asuma la responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en la universidad. Durante mucho tiempo hemos dicho que teníamos la sospecha que el Jefe de Estado no estaba informado de lo que ocurría en la U. de Chile. Después de siete

---

<sup>1098</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, septiembre de 1987, p. 26-27, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c\\_19102010\\_1053am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda2beb5c6c_19102010_1053am.pdf).

<sup>1099</sup> Ibid.

semanas de conflicto ya nadie puede pensar que Pinochet no sepa nada. De esta forma, la responsabilidad recae directamente en el Jefe de Estado”.<sup>1100</sup>

A principios de mes, el Ministro de Educación amenazó con sanciones académicas si los profesores y estudiantes no regresaban a clases. No tuvo éxito. Y paralelamente, las manifestaciones callejeras y marchas estudiantiles continuaban por las calles de Santiago, con la consiguiente sucesión de represión, detenciones y más movilizaciones.

Federici, por su parte, no daba muestras de ablandar su postura, incluso, recrudeció su batalla contra los decanos. Así, exoneró al decano subrogante de la Facultad de Derecho (ya había expulsado al Decano Mosquera a comienzos de septiembre, y aún no se producía el nombramiento oficial del nuevo decano), por lo que esa escuela quedó prácticamente acéfala. Además, el 6 de octubre, Federici asistió a un programa de televisión del Canal de la Universidad de Chile en el cual lanzó declaraciones contra los decanos, señalando que una de las causas de la crisis universitaria se debía a la falta de colaboración de estos para implementar el Plan de Racionalización. Por cierto, el Consejo Universitario reaccionó negativamente, e incluso algunos de los miembros de la Junta Directiva que eran adeptos del régimen, criticaron los dichos del Rector delegado. El doctor René Orozco, miembro de la Junta y conocido simpatizante del gobierno, señaló que para Federici, “los profesores son unos flojos y los estudiantes terroristas, que andan enmascarados. No conozco a nadie que le haya hecho daño a su institución de esta manera. La desprestigió frente a la comunidad nacional y faltó a la verdad en ciertas cosas”.<sup>1101</sup> Así las cosas, el Consejo Universitario y la Junta Directiva desistieron de negociar con Federici e iniciaron conversaciones directamente con el Ministerio de Educación.

Por su parte, los estudiantes respaldaron el accionar de sus decanos y del Consejo Universitario, y continuaron con la estrategia de ingobernabilidad. Junto a la AAUCH convocaron a un paro nacional de actividades universitarias para el 15 de octubre, el cual tuvo una amplia convocatoria. El 17 y 18 de octubre, en una reunión ampliada, la CONFECH decidió realizar dos jornadas de suspensión de actividades universitarias para el 20 y 21 de octubre. La idea era preparar un paro prolongado de todas las universidades del país, que se iniciaría el 9 de noviembre, con el objetivo de

---

<sup>1100</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, octubre de 1987, p. 18, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda56c25797\\_19102010\\_1104am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda56c25797_19102010_1104am.pdf)

<sup>1101</sup> Ibid., p. 20.

presionar al régimen para que buscara una solución al conflicto. Según el presidente de la FECH,

“nosotros creemos que el gobierno tiene tiempo de arribar a una solución del conflicto de la Universidad de Chile antes que éste amenace con estallar en distintos puntos del país. Es un plazo claramente establecido, si tiene la voluntad de solucionarlo: el 9 de noviembre. En caso contrario, se va a encontrar con no solamente la Universidad de Chile paralizada, sino que la gran mayoría de las universidades del país. Creemos que es un conflicto político que involucra directamente al general Pinochet y al Ministro del Interior. Imaginamos que si existe sensatez en las autoridades de gobierno, no estarán dispuestas a asumir los costos que ello puede involucrar, incluso en vidas humanas”.<sup>1102</sup>

Esta estrategia obedecía, según el presidente de la FECH, a que “los últimos acontecimientos demuestran que el gobierno no ha cambiado de actitud y, por tanto, no muestra ningún grado de interés en solucionar el conflicto, de manera que todo indica que necesariamente, muy a nuestro pesar, nos vemos en la obligación de aumentar la presión pacífica”.<sup>1103</sup> La propuesta de la FECH fue seguida por 17 federaciones de universidades de todo Chile, demostrando así que el movimiento estudiantil en contra de Federici y su Plan de Racionalización no se circunscribía a la UCH sino que afectaba a toda la educación superior pública del país, y aunque se hubiera iniciado en la Universidad de Chile, la estrategia de movilización llevada a cabo por los estudiantes había logrado permear incluso en otros sectores de la sociedad, como colegios profesionales, sindicatos, la propia iglesia Católica, etc.

Junto a estos llamados a movilizarse de parte de la FECH y la CONFECH, los estudiantes de la descabezada Facultad de Derecho iniciaron sus propias acciones para impedir que el decano y vice-decano nombrados por Federici tomaran posesión de sus respectivos cargos. En primer lugar, señalaron que no reconocerían más autoridad que al depuesto decano Mosquera. En segundo lugar, el 26 de octubre sacaron al patio todos los muebles y documentos del decanato, impidiendo que las nuevas autoridades pudieran hacer uso de sus despachos. Inmediatamente, el decano y vice-decano de Derecho presentaron su renuncia a Federici, el cual decidió cerrar la Escuela hasta el 6 de noviembre.<sup>1104</sup> El conflicto en la Escuela de Derecho estaba adquiriendo tal grado de

---

<sup>1102</sup> El Mercurio, 19 de octubre de 1987, C4, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 128.

<sup>1103</sup> “Informe mensual Vicaría de la Solidaridad”, octubre de 1987, p. 25, [http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda56c25797\\_19102010\\_1104am.pdf](http://www.archivovicaria.cl/archivos/VS4cbda56c25797_19102010_1104am.pdf)

<sup>1104</sup> Ibid., p. 26.

complejidad que el mismo Pinochet decidió visitarla sorpresivamente el 28 de octubre para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando.

Ese mismo día, en un nuevo intento por solucionar el conflicto, el Consejo Universitario presentó a la comunidad y al gobierno un Plan de Normalización de la Universidad de Chile, cuyo primer punto consistía en poner como rector a un académico de alto nivel y en un conjunto de medidas tendientes a salvar el año académico.<sup>1105</sup> Este punto era esencial, ya que si el conflicto continuaba en noviembre el año estaría irremisiblemente perdido, por lo que los estudiantes tendrían que repetir los cursos, con lo cual no habría cabida para nuevos postulantes. Al día siguiente, el Ministro de Educación anunció la destitución de Federici y la designación del filósofo Juan de Dios Vial Larraín como nuevo Rector.

La designación de Vial Larraín fue recibida con cautela por la comunidad universitaria. En primer lugar, el nuevo Rector no había sido nombrado en conjunto con el Consejo Universitario ni con los académicos, sino que, nuevamente, había sido designado por el régimen, del cual era adepto. Sin embargo, se trataba de un académico de alto nivel, que se desempeñaba como decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica y como académico de la Universidad de Chile. Además, en la ceremonia de toma de posesión del cargo, Vial Larraín hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para trabajar unidas por la UCH. “Quiero pedir la colaboración de toda la comunidad universitaria, pedirle que, desde ya, nos pongamos a trabajar, que reanudemos la vida normal, la actividad normal de la universidad. Yo creo que es lo único que va a hacer posible determinar por dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, cómo perfeccionar la institución, que es lo que a todos nos interesa”.<sup>1106</sup>

Por su parte, la comunidad universitaria respondió a la buena disposición del nuevo Rector delegado. El Consejo Universitario llamó a estudiantes y académicos a reanudar las clases a partir del 2 de noviembre, para salvar el año. Además, los decanos pusieron sus cargos a disposición del nuevo Rector delegado, como gesto de confianza. La AAUCH anunció que todos los académicos, incluso los exonerados, retomarían las clases, asumiendo que Vial Larraín dejarían sin efecto las medidas aplicadas por Federici. Y la FECH declaró que “el traspaso del poder de la rectoría de un economista mediocre a un filósofo brillante es un avance, indudablemente”.<sup>1107</sup>

---

<sup>1105</sup> Ibid.

<sup>1106</sup> Ibid., p. 27.

<sup>1107</sup> Ibid.



Ahora bien, la llegada de Vial Larraín a la Rectoría de la UCH puede considerarse un triunfo del movimiento universitario, incluido el movimiento estudiantil. Sin embargo tampoco fue un triunfo total. Recordemos que este Rector fue nuevamente designado por el régimen sin consultar al Consejo Universitario, y que, con los años, Vial Larraín impulsó algunas de las medidas que estaban contenidas en el Plan de Racionalización.

### **III. Proyección política del conflicto en la Universidad de Chile.**

Ya hemos señalado más arriba que la designación de Federici como Rector delegado de la Universidad de Chile fue una oportunidad política, no sólo para el movimiento estudiantil sino para toda la comunidad universitaria, que tuvo la ocasión de reconstruirse y levantarse en contra de la intervención del régimen en la Universidad. Y lo que consiguió sacar al Rector designado fue justamente la coordinación de esa comunidad universitaria, que, aunque con distintas estrategias se unió en pos de un objetivo común y querido por todos: recuperar la autonomía de la UCH.

Así, el movimiento estudiantil a través de la FECH realizó paros, tomas y jornadas de defensa por la educación superior. Se movilizó por las calles de Santiago y logró involucrar a estudiantes de otras universidades de Chile. Pero también se preocupó de generar lazos con decanos y académicos, para encarar la situación. Para el presidente de la FECH,

“este acercamiento que se produjo entre la FECH y los decanos, a nivel de cúpulas, tuvo como efecto el que éstos se empezaran a interesar por los problemas de los estudiantes y a acercarse un poco a la comunidad estudiantil. Lo importante, en todo caso, es que se produjo un gran acercamiento entre comunidad universitaria, lo que permitió diseñar una estrategia común y establecer relaciones de mutuo respeto entre los distintos actores involucrados. (...) Existió un sentimiento de complicidad, de protección mutua entre decanos, académicos y estudiantes. Hubo una atmósfera, una comunicación de personas que hasta hace poco no se reconocían, que dio una riqueza en lo humano muy amplia y que fue a nuestro juicio lo que permitió mantener en alto este prolongado conflicto”.<sup>1108</sup>

En cuanto a las estrategias de cada estamento, Carolina Tohá, vicepresidenta de la FECH señalaba que “los decanos hacían declaraciones, los académicos paros y

---

<sup>1108</sup> Quintana en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 183-184.

nosotros tomas, intentando que todo fuera coherente y que no nos perturbáramos unos con otros”.<sup>1109</sup>

Otro elemento que colaboró en el éxito de las movilizaciones contra Federici fue el apoyo de una parte importante de la opinión pública y de diversas organizaciones sociales, que asumieron la lucha de la Universidad de Chile como una lucha nacional, que no involucraba solamente a la UCH ni al sistema público de educación superior, sino que a todo el país que anhelaba, desde hacía años, el regreso de la democracia: “En las últimas semanas, el país se ha sensibilizado notoriamente de la importancia enorme que reviste para el futuro de Chile, para la solución de sus problemas más urgentes y fundamentales, la crisis de la universidad y la forma en cómo esta se encare. Cada día es más claro que, mientras persista el régimen dictatorial, el patrimonio nacional continuará siendo entregado a la voracidad de los clanes financieros”.<sup>1110</sup>

El periódico *El Siglo*, del Comité Central del Partido Comunista de Chile, señalaba también que todas las organizaciones sociales debían colaborar en el conflicto de la UCH porque era “asunto de todo el pueblo”. Y además destacaba la compromiso de la comunidad universitaria como un hecho sin precedentes en la lucha contra el régimen:

“Por primera vez en 14 años, se ha conseguido un nivel de concertación tan amplio, un trabajo inmensamente unitario en el que han participado todos los que en cuanto a la universidad tienen algo que decir: los académicos, los funcionarios y los estudiantes. Si a ello sumamos el que por primera vez en la historia de la Dictadura, el Consejo Universitario sacó la voz en pro de un proceso democratizador en las aulas, tenemos un cuadro nada favorable a los interventores”.<sup>1111</sup>

De esta manera, se fue produciendo un paralelismo entre la situación de la Universidad de Chile y la del país. Así, la lucha por la intervención en la UCH podría proyectarse a la lucha por la democracia a nivel nacional: “Pero si aquí está pasando lo mismo que ocurre en el país”, decía uno de los académicos de Medicina.

“Todos, absolutamente todos estamos en un lado pidiendo la salida de Federici y que las decisiones universitarias nos las dejen a los universitarios. Y en el otro lado, el Rector designado, el Ministro de Educación y el gobierno, sordos al clamor general. En el país pasa lo mismo; la inmensa mayoría por un

---

<sup>1109</sup> Entrevista a Carolina Tohá en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 183.

<sup>1110</sup> *Boletín de Prensa*, Editado por el Consejo Editorial de *EL SIGLO*, órgano del Partido Comunista de Chile, N° 203, semana del 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 1987. P. 4. Archivo FLACSO.

<sup>1111</sup> *El Siglo*, órgano del Partido Comunista de Chile, Segunda quincena de septiembre de 1987, p. 8. Archivo FLACSO.

lado pidiendo democracia, y el grupito que tiene las armas y el poder, no escucha, hace lo que quiere y eso sería todo. Esta vez se equivocaron. Si es cuestión de vernos en las asambleas, ahí mismo en el hospital J.J. Aguirre: desde el derechista más recalcitrante hasta el ultraizquierdista más arrebatado, todos defendiendo la “U”.<sup>1112</sup>

En el documento titulado Informe Parcial sobre el Conflicto en la Universidad de Chile, encontrado en el archivo de la FECH, se destaca que la oposición a Federici

“abarca el más amplio espectro ideológico y político jamás visto en la lucha contra la dictadura militar, o contra alguna de sus políticas sectoriales, en los catorce años de su permanencia. Incluye esta oposición a toda la oposición propiamente tal (de Izquierda, de Centro y de Derecha) y a casi todos los sectores que apoyan al gobierno, excluidos los de tendencia gremialista y/o neo-chicago. En el interior de la Universidad de Chile, esto se expresa, por ejemplo, en que la única Facultad que ha continuado con clases durante estos meses ha sido Economía, y también se expresa en el hecho de que la unanimidad del Consejo Universitario (Decanos) y la mayoría de la Junta Directiva de la Universidad de Chile, en ambas instancias muchos de sus elementos han sido nombrados por Pinochet, se han manifestado contrarios a la iniciativa gubernamental en forma tajante y definitiva (incluso llamando a la paralización de actividades).”<sup>1113</sup>

En este sentido, la concertación de voluntades que se produjo al interior de la comunidad universitaria, que no sólo involucró a los tres estamentos, sino como vimos más arriba, a personas de distinto pensamiento ideológico, y que tuvo éxito en sacar al Rector delegado, podría ser la estrategia más adecuada a la hora de luchar contra el régimen, ya no por la vía de la sola movilización social, como se había propuesto años antes, sino también por la vía institucional. Es importante señalar que para 1988 estaba fijado el plebiscito en el cual la ciudadanía tenía que decidir sobre la continuidad o discontinuidad del régimen militar por ocho años más.

En torno a esta instancia, la oposición se mostraba dividida ya que el Partido Comunista no tenía intenciones de participar porque creía que el plebiscito sería un fraude, y no quería aparecer legitimando ese engaño. Por su parte, la Democracia Cristiana y los socialistas renovados pensaban que sería una oportunidad de derrotar al régimen en su propia cancha. Claramente, la tarea era difícil pero el conflicto en la UCH

---

<sup>1112</sup> Revista *Cauce*, 14 al 20 de septiembre de 1987, p. 40, citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 144.

<sup>1113</sup> Informe Parcial sobre el Conflicto en la Universidad de Chile, sin fecha, sin firma, dirigido a Manuel Antonio (¿Garretón?), p. 5. Archivo FECH.

había mostrado una estrategia adecuada – la concertación de voluntades en torno a objetivos comunes – para lograrlo.

“Lo ocurrido en la Universidad de Chile constituye una Clase Magistral para la oposición. La resistencia se ha sostenido en la unidad férrea de todos los sectores, sin discriminación alguna ni discusiones bizantinas entre las diversas posturas o proyectos globales, todos golpeando en una misma dirección, combinando distintas formas de presión y movilización, nadie saliéndose de los marcos y de la estrategia prefijada, con dirigentes que hablan claro y no rehúyen la acción. Una estrategia que logra armonizar desde tomas hasta propuestas y negociaciones que debilitan y dividen a los partidarios del régimen”.<sup>1114</sup>

Ahora bien, la cercanía del plebiscito también tuvo un efecto importante en la actitud del régimen frente al conflicto universitario. Pese a que durante el primer mes el gobierno pareció no involucrarse en la situación de la UCH, a partir de octubre la presión desde dentro del mismo régimen hizo que tanto el Ministro de Educación como Pinochet comenzaran a buscar una solución. El problema era que sacar a Federici del Rectorado era reconocer un error, por lo tanto, dar una señal de debilidad que Pinochet no quería asumir. Por otro lado, la prolongación del conflicto podía hacer perder el año académico a todos los estudiantes de la Universidad de Chile, lo cual también significaría un costo político (además de económico) para el gobierno. La cercanía del plebiscito tampoco ayudaba mucho porque el mismo régimen se consideraba en “campaña” y el conflicto universitario empañaba este proceso. En esta disyuntiva, el gobierno necesitaba una salida negociada que no afectara su imagen, pero la misma actuación del Rector delegado y la reacción de la comunidad universitaria hacían muy difícil esto. Finalmente, Federici presentó su renuncia a finales de octubre, aunque extraoficialmente se señaló que la renuncia había sido pedida por el mismo Pinochet, producto del desgobierno que afectaba a la Universidad de Chile. Sea como fuere, el régimen no salió indemne de este asunto.

Como ya hemos señalado, el conflicto en la UCH sobrepasó el ámbito netamente universitario y logró involucrar a diversos sectores sociales y políticos del país, que unieron fuerzas con la comunidad académica en la lucha contra la intervención. Además, esta pugna que podríamos calificar de sectorial fue rápidamente extrapolada a la situación nacional: así, la batalla por la autonomía de la Universidad de Chile era un eslabón de la batalla por la democratización del país. Y en este contexto, la comunidad

---

<sup>1114</sup> *Unidad y Lucha*, Órgano del Comité Central del Partido Socialista de Chile, Septiembre de 1987, p. 8. Archivo FLACSO.

universitaria había señalado una estrategia: una concertación amplia de todos los sectores políticos y sociales en pos de un objetivo común.

#### **IV. Lecciones para el movimiento estudiantil chileno.**

Si bien el movimiento estudiantil no fue el único protagonista en el conflicto contra Federici, si fue uno de los principales. Es importante recordar que el ME venía rebelándose en contra de la intervención en la Universidad desde principios de los 80, y con la reconstitución de la FECH en 1984, esta lucha tomó más fuerza. Los paros y movilizaciones de 1985 y 1986 generaron un aprendizaje político entre los estudiantes, ensayaron estrategias de movilización (manifestaciones callejeras, tomas de facultades, etc.) y socializaron procesos enmarcadores cuyo contenido decía relación con la exigencia de autonomía universitaria y democratización de la sociedad. Por esto, era lógico que los estudiantes de la Universidad de Chile lideraran el proceso de oposición en contra de Federici.

Con todo, también es importante recordar que después del año decisivo de 1986, el movimiento estudiantil había quedado agotado y dividido por la lucha entre los partidos de oposición. Las estrategias de movilización divergentes que proponían tanto el PC como la DC habían afectado la unidad de los estudiantes, particularmente dentro de la FECH, por lo que a las elecciones de fines de 1986 no se habían presentado ambos partidos unidos, sino en listas separadas. Como señalamos al comienzo de este capítulo, la victoria la obtuvo la DCU junto a los socialistas renovados, con una propuesta de volver a centrarse en los problemas de la universidad. La incorporación del movimiento estudiantil en un movimiento de oposición mayor, como ocurrió en 1986, le había pasado la cuenta. La relación entre los dirigentes y la masa de estudiantes se había desgastado, y finalmente los problemas políticos entre partidos terminaron por dividir al ME. Por eso, en 1987, el esfuerzo se orientó a reconstruir la identidad propiamente estudiantil del movimiento, centrando sus reivindicaciones en el ámbito universitario y reconstruyendo marcos de significado integradores y que tuvieran sentido para la gran masa de estudiantes.

En este contexto, la llegada de Federici al Rectorado de la Universidad de Chile fue una oportunidad política inmejorable para el ME, porque le permitió relanzar las movilizaciones e involucrar a los estudiantes en un conflicto cuyo centro era, justamente, la lucha por la autonomía y el fin de la intervención. El presidente de la

FECH, Germán Quintana, señalaba al respecto: “Nosotros asumimos una crítica muy fuerte al maximalismo; es decir, a aquella concepción que piensa que los estudiantes son el detonante del proceso de cambios a nivel nacional y vanguardia responsable de éste. Nosotros, estando conscientes que la lucha de los estudiantes deber ser orientada hacia las causas de fondo de nuestro país, creemos que debe avanzarse paso a paso, y junto con cada paso, buscamos consolidar lo avanzado. Por ello, se buscó evitar maximalizar los objetivos del conflicto, y que se pierda la perspectiva en relación a qué rol le compete a cada uno de los estudiantes dentro de la crisis”.<sup>1115</sup>

La nueva etapa de movilización que supuso la llegada de Federici a la UCH significó también una nueva estrategia para el ME, que se basaba en la coordinación con los otros estamentos de la comunidad universitaria, particularmente con los académicos y los decanos. En 1986 los estudiantes ya habían realizado acciones conjuntas con algunos académicos, particularmente con la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile. La novedad de 1987 fue la coordinación con los decanos, y esto fue posible porque los decanos comenzaron a ser vistos como autoridades legítimas, producto de que muchos de ellos fueron elegidos por los académicos.

“Si uno observa los primeros días del conflicto, todos nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos a posibilitar la involucración [sic] de los decanos, como de hecho fue sucediendo. Por parte nuestra, esto respondía a la convicción de que la Federación de estudiantes debía incorporar a su estrategia el dato nuevo que los decanos estaban siendo elegidos por parte de los académicos, que ahora eran representativos y que por lo tanto debía responder en mayor medida a la comunidad universitaria”.<sup>1116</sup>

Y esto contrastaba muchísimo con lo ocurrido el año anterior, cuando, durante el Paro Nacional Estudiantil Prolongado, los estudiantes habían rechazado de plano dialogar con los decanos e incluso, hubo casos de decanos “desalojados” de sus propias facultades por los estudiantes más radicales. Esta situación fue, según Germán Quintana, producto de la excesiva intromisión de los partidos políticos en el conflicto estudiantil, lo que habría provocado la subordinación de los objetivos del movimiento a los de los partidos.

“En el año 86 se produjeron situaciones muy desagradables como por ejemplo el que se sacara en andas de las facultades a decanos con los cuales se podía llegar a acuerdos importantes, como lo demostró esta coyuntura. Esas fueron muestras de una concepción irracional acerca de cómo debe combinarse

---

<sup>1115</sup> Quintana en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 186-187.

<sup>1116</sup> Tohá en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 183.

la movilización con la concertación [se refiere a la relación entre partidos y ME]. Ahora, un año después esos mismos estudiantes que sacaron a empujones a los decanos a la calle, los ovacionaban y los aclamaban como a héroes”.<sup>1117</sup>

Esta intromisión de los partidos fue una de las causas del desgaste del movimiento estudiantil a fines de 1986, por eso, los dirigentes de la FECH se preocuparon de mantener la independencia de su organización, obviamente articulando relaciones con los partidos políticos pero no dejándose subordinar por ellos. Así, según la vicepresidenta Tohá,

“los partidos obviamente siguieron trabajando, haciendo sus mesas y las cosas que han hecho siempre, pero respetaron las decisiones de la federación. En ningún acto, de todos los que hicimos, hubo banderas ni consignas de las juventudes políticas. Eso fue una señal de responsabilidad que hay que destacarlo. En fin, todas estas cosas conformaron un cuadro en el movimiento estudiantil que hacía mucho que no se veía; que siempre se ha planteado pero que con motivo de este conflicto se realizó. Se respetó a la federación, a sus instancias y sus decisiones democráticamente adoptadas”.<sup>1118</sup>

Por la misma razón, la FECH fue cautelosa al proyectar el conflicto a nivel nacional. Si bien siempre buscó involucrar a otras federaciones de estudiantes y movilizar a todo el sistema universitario, la ampliación a otros sectores de la sociedad se hizo progresivamente, y sólo una vez que la comunidad universitaria había dado suficientes muestras de coordinación y eficiencia. En este sentido, el ME resentía en parte la pérdida de identidad que supuso para los estudiantes su incorporación en una lucha de oposición de nivel nacional, y buscaron resguardar lo conseguido hasta el momento. En palabras de Germán Quintana:

“sólo después de dos meses en paro, recién en ese minuto, buscamos globalizar la pelea, incorporando a otros sectores a nivel nacional, tales como profesionales, artistas y trabajadores de la cultura en general. Fue el uso consciente y riguroso de estos criterios lo que permitió darle un marco de apoyo a la Universidad de Chile tan amplio como el que tuvo, y fue eso, en definitiva, lo que permitió sacar a Federici. Naturalmente, los que estaban más ansiosos por vincular el conflicto de la Universidad de Chile con la lucha democrática de todo el país, tuvieron que frenar un poco sus impulsos, ya que por ese camino no se garantizaba el que lográramos una victoria – aunque sea parcial – con lo cual tampoco aportábamos nada a la causa de Chile entero”.<sup>1119</sup>

---

<sup>1117</sup> Quintana en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 186.

<sup>1118</sup> Tohá en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 188.

<sup>1119</sup> Quintana en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 187.

Finalmente, a la hora de evaluar el éxito o fracaso obtenido luego de dos meses de intensas movilizaciones, los dirigentes de la FECH de 1987 fueron prudentes. Si bien Quintana consideró que la salida de Federici había sido un claro triunfo de la comunidad universitaria, faltaba que el nuevo Rector delegado revocara las medidas tomadas por su polémico antecesor. Además, señalaba Quintana, “nosotros hubiéramos querido que antes de aceptar una fórmula de solución, se hubiese convocado a los académicos y estudiantes a discutir los pro y los contra de la propuesta. Esta consulta a las mayorías era vital para darle una gobernabilidad a la Universidad. Sería muy negativo que después de este conflicto cada estamento o un grupo determinado se fuera por su lado y creara una situación de desgobierno”.<sup>1120</sup> Para Carolina Tohá, lo fundamental era que a partir del conflicto con Federici, el movimiento estudiantil podía proyectarse a largo plazo, ya que sus reivindicaciones habían sido asumidas por algunas instancias de dirección en la UCH: “Varios Consejos de Facultad, por ejemplo, se han referido al problema de la autonomía universitaria, al rol que debe jugar la Universidad, a la comunidad universitaria. Todos estos son temas que el movimiento estudiantil ha venido planteando desde hace tiempo y que hoy asume toda la comunidad universitaria”.<sup>1121</sup> En este sentido, la lucha por la autonomía universitaria que el movimiento estudiantil había iniciado años antes, había permeado a la comunidad universitaria, y a partir del conflicto con Federici, esta aspiración se había hecho común a académicos, funcionarios y decanos.

Además, no podemos olvidar que la destitución de Federici fue claramente una derrota para el régimen, infligida por toda la comunidad universitaria, y esto también podría considerarse un éxito para el ME. Era la primera vez que Pinochet se veía obligado, producto de la estrategia de desgobierno y movilización, a sacar a un funcionario designado por él. Como recuerda Carolina Tohá en 2005, “la derrota de Federici fue para mi, y creo también para toda la gente de mi generación, la primera ocasión en que logramos doblarle la mano a Pinochet. Pero también fue importante por la manera en que todo esto se hizo. Nuestro movimiento estudiantil logró liderar y generar un entendimiento de toda la comunidad universitaria”.<sup>1122</sup>

---

<sup>1120</sup> Ibid., p. 188.

<sup>1121</sup> Tohá en BRODSKY: *Conversaciones con la FECH*, p. 189.

<sup>1122</sup> Carolina Tohá en Revista *The Clinic*, 1 al 14 de septiembre de 2005, p. 29 citado en C. ESPINOZA: *De las aulas a la calle*, p. 156.



Al año siguiente, toda la oposición lograría doblarle la mano nuevamente a Pinochet en el plebiscito de 1988. Utilizando la estrategia de la concertación de partidos y organizaciones sociales en pos de la democracia, a ejemplo de lo que había sido la estrategia de la comunidad universitaria contra Federici, la oposición al régimen obtuvo el 56% de los votos, derrotando a Pinochet en su propio juego, con lo cual se inició el difícil y a la vez esperanzador camino hacia la democracia.

Debido a lo complejo del “caso Federici”, hemos dejado la comparación para el final, a fin de lograr explicar bien las causas y consecuencias de este conflicto. Ciertamente, en España nunca se produjo nada parecido al conflicto entre la comunidad universitaria y el Rector delegado. Quizá lo más parecido sea el conflicto en la Facultad de Medicina de la UCM producido en 1971-1972 (ver capítulo 4) en donde los estudiantes de esa Facultad lograron generar vínculos con profesores, con agrupaciones profesionales (particularmente con asociaciones de médicos o profesiones afines) y con estudiantes de otras facultades, incluso de otras Universidades españolas.

Sin embargo, y por muy fuertes que fueran las movilizaciones del ME español, nunca lograron generar una concertación tan profunda de toda la comunidad universitaria. Ya hemos señalado antes que el movimiento estudiantil español se vinculaba con los PNN (muchos de los cuales, en su época de estudiantes, habían participado del ME) y con algunos académicos a título personal, pero nunca se produjo una coordinación con los decanos o con los catedráticos como estamento. Probablemente, porque el mecanismo para la elección de los catedráticos estaba controlado por el Ministerio de Educación, y por ende, la gran mayoría de ellos debía su cargo al régimen, por lo que, en general, apoyaban las medidas de éste. Además, el sistema de cátedras hacía muy difícil la renovación de la planta de académicos en las universidades españolas, por lo que la diferencia generacional entre el ME y los catedráticos también es un factor importante a considerar. En Chile no existía el sistema de cátedras, sino diferentes categorías de académicos (titulares eran los más importantes), y aunque el nombramiento de los académicos de mayor jerarquía estaba, en última instancia controlado por el régimen, el sistema permitía mayor movilidad en este estamento. En este sentido, la articulación de una comunidad universitaria unida tras un objetivo común era algo más difícil de conseguir en España, ya que allí el estamento de catedráticos tenía más vínculos políticos con el régimen, de lo que tenían los decanos o profesores titulares en Chile.

Ahora bien, partiendo de la base de que en España nunca se produjo un “caso Federici”, sí podemos encontrar similitudes en las estructuras de movilización del ME en ambos países y en las consecuencias de éstas. Si pensamos en el conflicto en Medicina de la UCM de los años 71-72, los estudiantes de esa Facultad generaron las plataformas de coordinación necesarias para mantener vigente un proceso de movilización que duró más de tres meses. La Coordinadora de Estudiantes de Medicina funcionó como organismo dirigente ya que expresaba las demandas de los estudiantes, informaba a la opinión pública y llevaba adelante la negociación con las autoridades académicas. En este sentido, podríamos hacer un símil entre la actuación de la Coordinadora y la de la FECH durante el conflicto contra Federici. Por otra parte, y para lograr la solidaridad con otras facultades y universidades, la Coordinadora propició la convocatoria a Reuniones Generales de Universidades, en las cuales se discutían temas relativos a la movilización llevada adelante por los estudiantes de Medicina de Madrid y a los problemas que aquejaban a otras universidades. Podemos apreciar esa misma dinámica en la relación entre la FECH y la CONFECH, ya que este último organismo apoyó masivamente la movilización de los estudiantes de la Universidad de Chile, convocó a jornadas de protesta en solidaridad y generó una plataforma amplia de discusión que involucraba a estamentos de otras universidades y de otras ciudades del país.

La gran diferencia que podemos hallar en ambos casos es que, una vez terminado el conflicto, la Coordinadora de Estudiantes de Medicina se disolvió y el ME español volvió a la fragmentación que lo caracterizaba desde fines de los años 60; mientras que en Chile organizaciones como la FECH y la CONFECH permanecieron vigentes (lo son hasta ahora), activas y participando en otras instancias de movilización.

Con respecto a los procesos enmarcadores, podríamos señalar que en términos muy generales, ambos movimientos luchan por lo mismo: cambiar al régimen imperante en el país. En términos más específicos, hay particularidades en cada caso, las cuales están dadas por la época y las circunstancias específicas de los dos países. Así, por ejemplo, si analizamos el lenguaje del ME, en España podemos apreciar que éste es más revolucionario y con mayor contenido ideológico, en el sentido de que para muchas organizaciones estudiantiles la revolución socialista era la meta, luego de derrocar al régimen, y por eso, esos mismos estudiantes se expresaban en un lenguaje más teórico y cercano al marxismo, con muchas referencias a Lenin, Stalin, Mao y otros teóricos marxistas. Con el paso de los años esto fue cambiando en España, dando paso a un

lenguaje más democrático: se sigue aspirando al cambio de régimen político, pero la revolución ya no es el objetivo final, al menos no de la mayoría de los estudiantes militantes. En Chile, este lenguaje revolucionario era el de los estudiantes de los 60 y los 70, pero como nuestra investigación comienza en los años 80, no podemos apreciar tan claramente la transformación. De hecho, en lenguaje usado por la FECH y por las organizaciones estudiantiles siempre apunta a la democracia como objetivo final. Una diferencia fundamental es que en España, la gran mayoría de las organizaciones políticas que participan en el ME se consideran a sí mismas marxistas revolucionarias y la lucha por la hegemonía se produce entre comunistas y grupos de extrema izquierda. En Chile, en cambio, las organizaciones políticas principales que articulan el ME son el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.

Otro aspecto interesante de comparar en relación con los procesos enmarcadores es la articulación entre reivindicaciones académicas y reivindicaciones políticas generales. Este delicado equilibrio es algo que afecta a ambos movimientos, y su integración a plataformas políticas más amplias (como en el Proceso de Burgos en España, o en la Asamblea de la Civilidad en Chile) puede terminar desgastando al ME, haciéndolo perder parte de su identidad propiamente estudiantil. Esto ocurrió en más de una ocasión en el período estudiando para el caso español. Así por ejemplo, si bien la campaña en contra del Proceso de Burgos (1970) ayudó a reactivar la movilización, tanto estudiantil como social en general, finalmente la represión con la cual el régimen franquista respondió a esa movilización, afectó fuertemente al ME. Además, como señala Álvarez Cobelas, luego de la campaña, los partidos comenzaron a reclutar cuadros en la Universidad, con lo cual muchos dirigentes estudiantiles dejaron el ME para involucrarse en política general<sup>1123</sup>, dejando al movimiento en un estado de agotamiento.

Algo similar ocurrió en Chile con la vinculación del ME a la Asamblea de la Civilidad y a las movilizaciones convocadas por los partidos clandestinos y las organizaciones sociales, particularmente en 1986. Cuando los estudiantes se integraban a este tipo de instancias, dejaban de lado las reivindicaciones propiamente académicas para asumir las exigencias propias de la oposición, con lo que la identidad característica del movimiento estudiantil pasaba a segundo plano, lo que, en general, coincidía con un período de desgaste y desmovilización. Es importante constatar que en Chile, el

---

<sup>1123</sup> J. ÁLVAREZ COBELAS: *Envenenados de cuerpo y alma...*, p. 357.

contexto político general desde 1983 es de amplia movilización contra el régimen en una sociedad repolitizada y polarizada entre adversarios y partidarios de la dictadura.

Bajo una dictadura es absolutamente imposible que los movimientos estudiantiles de oposición se centren solamente en demandas académicas, porque como hemos señalado antes, éstas tienen mucha relación con las exigencias de toda la sociedad. Así, por ejemplo, cuando los estudiantes madrileños pedían democratización para la Universidad, también la querían para España; cuando exigían libertad para los estudiantes detenidos, también la solicitaban para los presos políticos. Lo mismo ocurría en Chile, cuando los estudiantes demandaban “normalización” de la universidad, también la requerían para el país. Sin embargo, la articulación entre estos dos niveles de reivindicaciones siempre es complicada. En algunas ocasiones, dependiendo de cómo se presente la oportunidad política, priman las demandas académicas y en otras, priman las políticas generales. Esta “doble militancia” del ME tiene ventajas y peligros. La ventaja es que permite al movimiento estar vinculado, tanto con su base estudiantil como con la sociedad en general, le permite salir de los muros de la universidad y proyectarse a nivel nacional. Pero, como ya hemos señalado, también tiene el peligro de desdibujar o diluir su identidad propiamente estudiantil, y esto puede traer como consecuencia la desmovilización o el alejamiento de los dirigentes de la masa de estudiantes. En suma, como hemos dicho, bajo regímenes dictatoriales, el ME tiene que asumir la dimensión política nacional, pero cuidando que la articulación entre esa esfera y la dimensión universitaria sea equilibrada.

En este mismo sentido, la relación entre partidos políticos y organizaciones estudiantiles también representa un desafío para ambos movimientos. Y aquí igualmente podemos encontrar diferencias. En primer lugar, habría que señalar el rol del Partido Comunista en cada país. Si bien en España el PCE era la principal fuerza de izquierda, no era lo más a la izquierda que existía en el espectro político, de ahí su fortaleza como aglutinador de diversos grupos políticos y sociales en torno a una estrategia común. En este sentido, los estudiantes comunistas apoyaban las políticas de su partido e intentaban ponerlas en práctica en la Universidad. Así por ejemplo, cuando se constituye la Junta Democrática de España (1974), los estudiantes de la organización universitaria del PCE intentaron replicarla a nivel estudiantil, coordinándose con los otros partidos que componían la JDE y que tenían presencia en la universidad. Lo mismo ocurría con el llamado “entrismo”; la estrategia seguida por el PCE a nivel sindical, de participar en

las elecciones oficiales, también fue replicada por los estudiantes en las elecciones oficiales de representantes estudiantiles.

Por su parte, el PC chileno sí estaba bastante a la izquierda del espectro político, y se relacionaba con algunos grupos extremistas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este sentido, era más difícil para el PC chileno establecer alianzas con otros grupos políticos, especialmente con la Democracia Cristiana, que se oponían férreamente al uso de la lucha armada como mecanismo para derribar al régimen. Y ese debate que existía a nivel de política partidista, se reproducía en la Universidad, lo que generó, como hemos visto, un distanciamiento entre las dos fuerzas principales del ME chileno.

Finalmente, ambos movimientos consiguieron victorias parciales en sus jornadas de movilización. El ME chileno, en conjunto con la comunidad universitaria, consiguió sacar a Federici del Rectorado de la Universidad de Chile, aunque no pudo frenar completamente el plan de racionalización que el régimen militar tenía contemplado para la educación superior pública. El Rector Vial Larraín y los que vinieron posteriormente, aún los elegidos por la comunidad universitaria, aplicaron algunas de las medidas contenidas en el plan. Por ejemplo, el Canal de TV de la Universidad de Chile fue vendido en 1993 a capitales venezolanos y el financiamiento estatal directo a las universidades públicas, lejos de aumentar, siguió disminuyendo. Con todo, el ME evitó la imposición completa del plan de racionalización que Federici quería imponer, con lo que evitó la destrucción total de la Universidad de Chile.

Por su parte, el movimiento estudiantil español también consiguió victorias parciales en sus distintas etapas de movilización. Las movilizaciones emprendidas en el curso 71-72, aunque no lograron acabar con la Ley General de Educación, sí consiguieron posponer un par de años la selectividad (de 1973 a 1975); además, forzaron la salida del Subsecretario del Ministerio de Educación, Ricardo Díez Hochleiner, y su equipo, quienes eran sindicados por los estudiantes como los cerebros tras la Ley General de Educación. En cuanto a la modificación del Plan de Estudios de Medicina, finalmente se acordó la supresión de la selectividad de los cuatrimestres, del examen especial de ingreso a la Facultad y la consecución del título de médico antes del internado rotatorio.

Ahora bien, independientemente de las características específicas de cada movimiento estudiantil, de cada conflicto en particular y de lo “ganado o perdido” en cada etapa de movilización, podríamos decir que tanto el ME español como el chileno

compartían un mismo espíritu, ya que ambos se consideraban como una punta de lanza en la lucha en contra del régimen y ambos consiguieron traspasar la barrera de lo puramente académico para situar su movilización y sus reivindicaciones a nivel nacional. En este sentido, ambos movimientos tuvieron éxito porque lograron insertarse dentro de una sociedad que quería y buscaba profundos cambios políticos y económicos, y se convirtieron en un espacio de difusión y de socialización de aquellos cambios. Con todo, el ME chileno tuvo mayores éxitos a corto plazo, ya que contribuyó poderosamente a la derrota de Pinochet en 1988, y así, la transición no tuvo que esperar hasta la muerte del dictador para iniciar su camino.

## **CAPÍTULO 15**

### **EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CHILENO EN LOS AÑOS 90:**

#### **POR UNA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE UNIVERSIDAD Y DE SOCIEDAD**

### **I. Plebiscito 1988 y primeros años 90: la Universidad “amarrada” y la crisis del ME.**

Luego de la amplia convocatoria que tuvo la lucha de la comunidad universitaria en contra del Rector delegado Federici en 1987, las aguas tendieron a calmarse en la Universidad. Se abrió un nuevo panorama político en Chile: para octubre de 1988 se fijó el plebiscito que decidiría la continuidad del régimen militar, con Pinochet a la cabeza, por ocho años más. Después de tantos años de lucha contra la dictadura, de impulsar movilizaciones sociales, de buscar solidaridad internacional, la oposición decidió enfrentarse al régimen por la vía institucional y participar del plebiscito, aún asumiendo el riesgo de que los resultados de éste pudieran ser manipulados o desconocidos por Pinochet.

En esta coyuntura, a comienzos de 1988 las movilizaciones sociales tendieron a descender, mientras diversos grupos de oposición organizaban la Concertación de Partidos por el NO. Este conglomerado agrupaba a la Democracia Cristiana, el MAPU, el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana, el Partido Verde, el Partido Radical, distintas facciones del Partido Socialista (Almeyda y Núñez) y el Partido por la Democracia. En suma, agrupaba a casi todas las organizaciones democráticas de la oposición. La Concertación de Partidos por el NO inició rápidamente una campaña que llamaba a la población a inscribirse en los registros electorales y a votar el 5 de octubre de 1988.<sup>1124</sup> Cerca del 92% de la población concurrió a inscribirse. El Partido Comunista y alguna facción socialista se negaron inicialmente a participar en el plebiscito, aunque finalmente el PC terminó uniéndose al llamado a votar NO. El movimiento estudiantil, al menos en un comienzo los sectores moderados de éste (la DCU y los socialistas con presencia en la universidad), y luego los comunistas, se plegaron al llamado a participar en el plebiscito, por lo que la movilización estudiantil, que había llegado a niveles sin precedentes en 1987, descendió visiblemente en 1988.

---

<sup>1124</sup> Los registros electorales chilenos fueron destruidos después del golpe de estado de 1973, por lo que había que construir nuevos registros. La inscripción de las personas en dichos registros era fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Otros plebiscitos se habían llevado a cabo durante el régimen militar sin la existencia de registros, lo que permitió la manipulación de resultados.

Como señalamos en el capítulo anterior, la opción NO obtuvo el 56% de los votos, mientras la opción SÍ consiguió el 44%. Luego de una tensa espera, en la que se temió que Pinochet desconociera los resultados, el régimen reconoció públicamente su derrota, con lo cual se inició el camino de transición a la democracia. La Constitución impuesta por el régimen en 1980 establecía que, en caso de ganar la opción NO en 1988, se convocaría a elecciones presidenciales y parlamentarias a fines de 1989. Y así ocurrió. De esta manera el régimen de Pinochet perdió ante la mayoría de la población que anhelaba un cambio democrático, y que se había manifestado desde hacía años, primero a través de la movilización social y luego, a través de las urnas. Pinochet y la derecha chilena volvieron a perder un año después, cuando en las elecciones de 1989 el demócrata-cristiano Patricio Aylwin, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia (sucesora de la Concertación de Partidos por el NO) fue elegido presidente, con el 55% de los votos.

Sin embargo, antes de dejar el poder, Pinochet se preocupó de promulgar una serie de leyes (llamadas “de amarre”) que consolidaban el sistema económico neoliberal y hacían más difícil reformar el sistema político. Entre ellas estaban la ley que creaba los senadores designados, la que establecía que Carabineros pasaba a depender del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, otra sobre administración de Justicia, la Ley reservada del cobre (que otorgaba el 10% de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas) y la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada el 10 de marzo de 1990, apenas un día antes del traspaso de mando. De esta manera, el régimen intentaba asegurarse de que la educación – tanto superior como básica y media – siguiera los parámetros fijados en los 17 años de dictadura.

En su artículo 2º, la LOCE señalaba que “La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde, preferentemente, a los padres de familia el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho: y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.<sup>1125</sup> Básicamente, el Estado ya no tenía el deber de proporcionar la enseñanza sino simplemente de proteger ese derecho, traspasando la responsabilidad a los padres y a la comunidad. La LOCE recogía el espíritu del principio de subsidiariedad del Estado con respecto a la educación, y,

---

<sup>1125</sup> Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 10 de marzo de 1990. <http://www.uchile.cl/portal/presentacion/normativa-y-reglamentos/8386/ley-organica-constitucional-de-ensenanza>



aunque se promulgó en último momento, esta Ley rigió los destinos de la educación en Chile hasta 2009, cuando fue derogada por la Ley General de Educación. De esta manera, como señala Fabio Moraga, “la salida de los militares no implicó que se dismantelara la institucionalidad autoritaria y contraria al movimiento estudiantil que había caracterizado al régimen de Pinochet”.<sup>1126</sup>

La LOCE venía a complementar la reforma que el régimen había iniciado en las universidades estatales con la Ley General de Universidades de 1981, que había transformado completamente el sistema de financiamiento de estas y además, había excluido explícitamente a los estudiantes de las instancias de gestión y de la elección de autoridades de las universidades.

En este contexto de desmovilización – producto de la adopción de la vía institucional a la democracia – y de nueva legislación, el movimiento estudiantil chileno entró en una clara fase de reflujo a partir de 1990. Esto se debía fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, a la expectativa generada en la población por el primer gobierno democrático en 17 años y al deseo de los partidos de la Concertación y de sus seguidores de llevar adelante con éxito y en paz la transición a la democracia. Es importante recordar que pese a que Pinochet había salido del gobierno, no había desaparecido de la escena política. Muy por el contrario. Seguía “custodiando su obra” desde la Comandancia en Jefe del Ejército, lo que condicionó fuertemente la capacidad de acción del gobierno de Aylwin. Por otro lado, pese a las movilizaciones llevadas a cabo por los estudiantes desde 1984 en adelante, la institucionalidad y la legislación que regía a las universidades era la misma que había dictado el régimen, por lo tanto, salvo algunos cambios específicos (como la elección del rector por parte de los académicos) y victorias simbólicas (como la salida de Federici), los estudiantes no habían conseguido reformas en cuanto al financiamiento ni en cuanto a su participación en las instancias de decisión.

Durante 1990 y 1991, la FECH siguió en manos de estudiantes de la DCU que actuaban en consonancia con las directrices de su partido, que gobernaba el país en ese momento. A partir de 1990, la FECH comenzó a recibir financiamiento de parte de la UCH, lo que le permitió organizar mejor su labor. Además, el presidente de la

---

<sup>1126</sup> Fabio MORAGA VALLE: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)” en Renate MARSISKE (coordinadora): *Movimientos Estudiantiles en la historia de América Latina*, vol. III. UNAM, México, 2006, p. 185.

federación fue integrado con derecho a voz (no a voto) en las sesiones del Consejo Universitario, de modo que los estudiantes quedaron parcialmente representados en la máxima instancia deliberativa de la Universidad de Chile.<sup>1127</sup> Sin embargo, como ya hemos dicho, en los primeros años 90 el movimiento estudiantil estaba pasando por una etapa de reflujo, por lo que la FECH se dedicó a organizar grandes fiestas y eventos masivos, en lugar de criticar la herencia del régimen que aún regía a las universidades. “Así, el ciclo iniciado por la recuperación de la FECH en 1984, con un nuevo estatuto y una directiva electa a contrapelo de la dictadura, se agotará entre los años 1990 y 1993. Un factor principal de dicho momento está representado por las sucesivas directivas FECH que, en los hechos, no se abocaron temprana ni robustamente a la revisión crítica de las políticas educacionales dejadas por Pinochet, ni al necesario proceso de redemocratización al interior de la universidad”.<sup>1128</sup>

1992 fue una pequeña excepción en esta etapa de reflujo, ya que en ese año varias federaciones de universidades estatales e incluso privadas fueron ganadas por estudiantes socialistas. Ese año se produjo la Primera Jornada Nacional de Movilización por el Financiamiento Universitario, que buscaba presionar al gobierno para que reformara el sistema de créditos universitarios que impedía el acceso o la continuidad de la educación superior a muchos jóvenes. Ahora bien, esta jornada no fue organizada por la FECH (que en ese momento era dirigida por un socialista, del mismo partido que el Ministro de Educación de la época, Ricardo Lagos) sino por estudiantes de izquierda extraparlamentaria, principalmente comunistas<sup>1129</sup>, que encontraron en la universidad un espacio adecuado para desarrollar sus demandas, que casi no tenían cabida en el nuevo sistema político. Los resultados de este mini ciclo de movilización fueron exiguos. El gobierno cambió el sistema de créditos universitarios por el de un Fondo Solidario de Crédito Universitario, que, en teoría, buscaba favorecer a los estudiantes de más bajos recursos, pero que en la práctica permitía que las universidades (que eran quienes otorgaban los créditos), vendieran la “cartera de deudores” a bancos públicos o privados.<sup>1130</sup> Además, el Fondo Solidario otorgaba créditos con un interés del 2% y

---

<sup>1127</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 192.

<sup>1128</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 53-54.

<sup>1129</sup> El Partido Comunista chileno y otros grupos de izquierda no eran parte de la Concertación, por lo que no alcanzaron representación parlamentaria en el marco de un sistema electoral diseñado a fines de la dictadura que concentraba los escaños en las dos primeras mayorías. Por eso se los denomina como izquierda extraparlamentaria. Es una situación parecida a la que vivieron el PTE y ORT en España luego de las primeras elecciones democráticas.

<sup>1130</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 196.

quien recibiera el beneficio debía comenzar a pagar dos años después de haber egresado de la universidad. Después de 12 años, el monto restante de la deuda se anulaba automáticamente.<sup>1131</sup>

Ahora bien, pese a que el Fondo Solidario representaba un pequeño avance con respecto al sistema anterior, no era lo que los estudiantes de izquierda querían, porque el Estado seguía sin hacerse cargo del financiamiento de la educación superior pública, dejando éste en manos de instituciones bancarias públicas o privadas, que manejaban estos créditos como un negocio más. De esta manera, como resultado de la frustración generada por el poco éxito de la movilización, el movimiento estudiantil y las federaciones entraron en una profunda crisis. Esta fue particularmente fuerte en el caso de la FECH, que, durante el segundo semestre de 1993 se autodisolvió.

## **II. La FECH, ¿para qué? Debate en torno a las estructuras de movilización.**

Según Rodrigo Roco, presidente de la FECH en 1996 y 1997, lo que gatilló la crisis de las federaciones en general, y de la FECH en particular, fue el progresivo alejamiento entre la directiva y las bases.<sup>1132</sup> La FECH de los primeros años 90 estuvo dirigida por militantes de partidos de gobierno (tanto de la DCU como el PS), por lo que en este período las demandas estudiantiles estuvieron supeditadas a las estrategias de los partidos políticos en el poder. Como explica Fabio Moraga, esta etapa se caracterizó por “la excesiva instrumentalización de las necesidades y reivindicaciones de los estudiantes que se usaban para hacer política hacia el Estado; esto implicaba la subordinación de las demandas sociales bajo lineamientos políticos y que los representantes estudiantiles, a todo nivel, respondieran más a las directrices de sus partidos que a las necesidades de sus bases sociales”.<sup>1133</sup> En este contexto, los estudiantes ya no votaba en las elecciones de federación y no se sentían representados por sus dirigentes, con lo cual se produjo un doble proceso: por un lado la masa estudiantil vivió un período de profunda despolitización o de descrédito en la política general, incluida la universitaria. Por otro lado, comenzaron a surgir nuevos grupos de estudiantes de izquierda extraparlamentaria, que intentaban hacerse con el liderazgo del movimiento

---

<sup>1131</sup> Ibid.

<sup>1132</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 54.

<sup>1133</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 197-198.

estudiantil.<sup>1134</sup> En el caso puntual de la Universidad de Chile, ante la desaparición de la FECH, los presidentes de los Centros de Alumnos se hicieron cargo del movimiento estudiantil, aunque fue muy poco lo que lograron hacer. Por ejemplo, en este período, el Rectorado de la UCH vendió el Canal de TV, e impuso el cobro de aranceles a través de letras bancarias, sin que los estudiantes hicieran prácticamente nada para impedirlo. Hubo que esperar hasta 1995 para que se iniciara un nuevo ciclo de movilizaciones y una nueva reconstitución de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Después de casi tres años sin directiva, a mediados de 1995 comenzó un proceso bastante complejo de reconstitución de la FECH. Para lograrlo, era urgente reencantar a la masa estudiantil con un proyecto político adecuado a la época que se estaba viviendo. Los estatutos de la federación databan de 1984 y se habían redactado pensando en la lucha contra el régimen, por eso, en 1995 ya no correspondían con la realidad. El principal esfuerzo por refundar la FECH vino de los grupos de estudiantes de la izquierda extraparlamentaria, quienes organizaron un Congreso para discutir nuevos estatutos y nuevas formas de representación. Sorprendentemente, el Congreso concitó el apoyo de bastantes estudiantes, posiblemente porque los grupos de izquierda extraparlamentaria estaban menos desprestigiados que los dirigentes de los partidos de gobierno, a los que se veía como menos independientes y culpables del colapso de la federación.<sup>1135</sup>

La idea central que se discutió en el Congreso fue que la FECH tuviera mayor diversidad política, es decir, que en su interior estuvieran representadas la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles. De esta manera, se podría mantener un diálogo constante entre la directiva y las bases.<sup>1136</sup> Esto se logró a través de un sistema proporcional para elegir a la directiva (ya no estaría integrada sólo por la primera mayoría) y a través de los consejeros, que eran representantes de las diversas facultades, y que se elegían de acuerdo al número de estudiantes de cada una. En este sentido, como señala Rodrigo Roco, la federación se concebía a sí misma como un espacio de todos los estudiantes, por lo que los grupos o partidos políticos tenían que ganar la representación de aquellos pero sin apropiarse del movimiento estudiantil.<sup>1137</sup>

---

<sup>1134</sup> Ibid., p. 198.

<sup>1135</sup> R. ROCO: "La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente", p. 60.

<sup>1136</sup> Ibid., 56-57.

<sup>1137</sup> Ibid., p. 59.

En las elecciones para la federación realizadas en octubre de 1995 salió elegido presidente Rodrigo Roco, militante de las Juventudes Comunistas y líder del colectivo de Estudiantes de Izquierda (EEII) con un 36,8% de los votos. En segundo lugar quedó la Juventud Socialista con un 29,4%; en tercer lugar la DCU con un 20,4% y finalmente, la derecha con un 13,3%. De esta manera y según el nuevo sistema proporcional, la FECH de 1996 quedó conformada por un comunista en la presidencia, un socialista en la vicepresidencia y un demócrata-cristiano en la secretaría general, y dos independientes de izquierda en la secretaría de comunicaciones y en la secretaría de finanzas.<sup>1138</sup>

A comienzos de 1996, la nueva directiva de la FECH comenzó a tomar acciones tendientes a rearticular el movimiento estudiantil y a frenar el proceso de desmantelamiento de la UCH. Así, por ejemplo, ante la noticia de que el Rectorado licitaría la administración de la Radio de la Universidad de Chile a privados, un grupo de estudiantes liderados por la FECH decidió ocupar pacíficamente las oficinas de la radioemisora. Aunque pueda parecer un detalle, la situación de la Radio de la UCH reflejaba bastante bien el panorama de la Universidad de Chile en general. En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y nacional, la FECH señalaba que “el grave deterioro de la Radioemisora y sus dificultades financieras no son más que el resultado de la nefasta política de autofinanciamiento universitario que fue impuesta en nuestro país a principios de la década de los 80. A ello se suma la escasa preocupación de las actuales autoridades por esta área de nuestro quehacer como Casa de Estudios. El silencio que se le impone a la Universidad al despojarla del último de los medios con los que ella se relaciona masivamente con la sociedad, contrasta con la ausencia de democracia y participación a la hora de llevar a cabo estas medidas que involucran su esencia misma”.<sup>1139</sup>

De esta manera, la nueva directiva de la FECH comenzó su estrategia movilizadora a partir de los problemas puntuales de la UCH, para luego abrirse a los problemas que afectaban a todo el sistema público de educación superior. “Ya no queremos ser mudos testigos del desmantelamiento de esta Universidad, la que ha servido y debe seguir al servicio de los intereses superiores del desarrollo social,

---

<sup>1138</sup> Ibid., p. 61.

<sup>1139</sup> “A la comunidad universitaria y nacional”, FECH, Santiago, 11 de marzo de 1996, p. 1. Archivo FECH.

democrático, cultural y económico de nuestro país”.<sup>1140</sup> En este sentido, la nueva FECH llevó adelante dos procesos fundamentales para la reconstitución del movimiento estudiantil: la redacción de nuevos estatutos y el Congreso Constituyente, que se celebró en septiembre de 1996.

Este Congreso fue una instancia esencial en el proceso de reconstitución y de reconducción de la federación, ya que en él se redactó una Declaración de Principios, en la cual se establecieron las prioridades y proyectos a los que se dedicaría la FECH. En primer lugar, la Declaración señalaba que la federación era la máxima instancia de representación de los estudiantes de la Universidad de Chile y en sus estatutos se definía como una organización pluralista y unitaria; democrática y representativa; autónoma; solidaria y comprometida.<sup>1141</sup> Básicamente, la FECH se planteaba como una instancia de los estudiantes, independiente del gobierno y de la autoridad académica, que contenía en su seno a todas las corrientes democráticas que quisieran participar en la federación, y que tenía como misión la lucha por un sistema económico y político “auténticamente democrático, basado en la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la participación, la libertad y la justicia, que garantice a todos los chilenos una vida digna, vivienda, trabajo, educación, salud, recreación, cultura...”.<sup>1142</sup> Así, la FECH de 1996 y de 1997 se dedicó a defender la noción de educación pública y a denunciar la crisis de la educación universitaria en el país, producto tanto de las leyes de amarre heredadas de la dictadura (LOCE) como del sistema económico neoliberal que aplicaba criterios de libre mercado a destajo a la educación.

La crisis por la que atravesaba la educación superior tenía su origen, según la FECH, en la ilegitimidad de la institucionalidad y la legislación impuesta por el régimen militar – particularmente de la LOCE – pero también se culpaba a los gobiernos de la Concertación de no haber hecho nada por cambiar la situación. En 1992, el gobierno de Patricio Aylwin había presentado al Congreso el proyecto de Ley General de Educación Superior, que intentaba modificar la legalidad heredada de la dictadura, reformando los Estatutos de las Universidades Estatales, pero no tocaba la exclusión de los estudiantes de la participación en el gobierno de la universidad ni el sistema de financiamiento. Dicho proyecto no fue aprobado. En 1996, el gobierno de Eduardo Frei envió al

---

<sup>1140</sup> Ibid.

<sup>1141</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 58.

<sup>1142</sup> “Declaración de principios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile”, Santiago, 8 de septiembre de 1996 citado en F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 200.

Congreso un proyecto de Ley Marco, para reformar los Estatutos de las universidades públicas. Sin embargo, según un documento de la FECH, publicado en 1996, dicho proyecto únicamente buscaba “herramientas legales para lograr eficiencia de gestión en las Universidades Estatales; para que éstas puedan competir en pie de igualdad con el creciente número de Universidades Privadas”.<sup>1143</sup> Esto contrastaba con el descenso en el aporte que el Estado entregaba a la educación superior (Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales) el cual, según el presupuesto de 1996, era de un 0,67% del PIB. Además, una parte importante del aporte estatal a las universidades públicas se realizaba a través de fondos concursables o de aportes contra resultados de rentabilidad, lo que, según el presidente de la FECH, “obviamente tiende a desvirtuar la esencia del quehacer universitario”.<sup>1144</sup>

Esta imposición de criterios de mercado estaba afectando a los estudiantes de diversas maneras. La más directa era la que decía relación con la capacidad económica del estudiante o de su familia, ya que la posibilidad de acceder y de mantenerse en la universidad dependía exclusivamente de eso. “Ello se refleja en que la Universidad es pagada, y cada año suben los aranceles, los cuales están en más o menos 2.000 dólares promedio (se le considera un bien de consumo por parte del gobierno), se reducen las posibilidades de acceder a beneficios bajo el eufemismo de “focalizarlos” en los más pobres, los que en las condiciones existentes en la sociedad chilena, “no llegan” a la universidad”.<sup>1145</sup>

Otro ámbito afectado por la introducción del neoliberalismo en la educación superior era la calidad de la enseñanza misma. Al igual que los estudiantes españoles, que se quejaban de que la LGE sólo tendía a la formación de técnicos y profesionales que estarían al servicio de la burguesía o del “gran capital”, los estudiantes chilenos señalaban que la docencia impartida en las universidades era “esquemática, con escasa formación universal y valórica, y con un enfoque descomprometido con la realidad nacional, y en función de las necesidades (técnicas) del modelo neoliberal”.<sup>1146</sup> Lo más grave, según el documento de la FECH, era que esta noción de educación pública atravesada por el modelo neoliberal había generado “una pérdida creciente del sentido nacional, de responsabilidad y aporte al desarrollo nacional, de combate de las

---

<sup>1143</sup> Rodrigo Roco, “A los compañeros de la UNEB”. Santiago, 1996, p. 1. Archivo FECH.

<sup>1144</sup> Ibid.

<sup>1145</sup> Ibid.

<sup>1146</sup> Ibid.

injusticias y de esfuerzos frente a los problemas nacionales (desigualdad creciente, pérdida y destrucción de la identidad nacional y latinoamericana, superación de la pobreza, destrucción del medio ambiente, etc.)”.<sup>1147</sup>

Una vez diagnosticada la crisis de la educación superior chilena, la FECH señalaba las formas de enfrentarla, para lo cual proponía la articulación de un movimiento estudiantil concientizado y comprometido “que permita reforzar el contrato Universidad-Sociedad, y la relación con el Estado, así como modificar y democratizar las estructuras de gobierno universitario (los estudiantes no tenemos ninguna participación) y promover una reforma académica general (...) Se trata de resituar en la propia comunidad universitaria la potestad de decidir su propio destino, y de aportar desde allí a reestructurar todo el edificio universitario nacional y de la educación superior”.<sup>1148</sup>

En suma, la nueva federación tenía dos grandes banderas de lucha: la crisis del sistema público de educación superior, generada por la legalidad e institucionalidad impuesta por el régimen militar y mantenida por los gobiernos de la Concertación (en este ámbito, los principales temas eran el autofinanciamiento y la falta de participación de los estudiantes en los procesos de toma de decisión), y la articulación de un movimiento social que defendiera la noción de educación pública, que estaba siendo destruida por la aplicación de los criterios del libre mercado. Estas dos grandes reivindicaciones se plasmaron en el ciclo de movilizaciones de 1996-1997, el momento de mayor conflictividad estudiantil en lo que iba de la transición a la democracia.

### **1997: “Empresarios, magnates, banqueros**

#### ***Cruje entera la Universidad*”<sup>1149</sup>**

El conflicto de 1997 marca un hito en la movilización estudiantil chilena de los años 90, porque se hace cargo del conjunto de aspiraciones y reivindicaciones de los estudiantes desde los años 80 en adelante. Aunque ya no se luchaba contra la dictadura

---

<sup>1147</sup> Ibid.

<sup>1148</sup> Ibid., p. 2.

<sup>1149</sup> Dos primeros versos del himno reestructurado de la Universidad de Chile compuesto por un académico destacado, citado en R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 66. La versión completa: Empresarios, magnates, banqueros/ Cruje entera la Universidad/ Bajo el peso del negro estandarte/ Que levanta la inercia estatal/ Madre nuestra, es difícil amarte/ Si te vendes al mejor postor/ Si se impone el modelo privado/ Destruyendo tu gran tradición/ En ti canta el mercado su coro/ Todo cuesta cruzando tu umbral/ Juventud, clientela dorada/ Agua fresca pa'l gran capital.



porque se había producido el tránsito hacia la democracia, las demandas del ME continuaban siendo las mismas: cambio en el sistema de financiamiento, participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, recuperación de la relación entre universidad y sociedad, en el entendido de que el país requería de un sistema de educación pública (escolar y superior) que no estuviera dominado por criterios de mercado.

En este sentido, la reconstitución de la FECH en 1995 y el posterior Congreso Constituyente de 1996 funcionaron como una oportunidad política, una instancia impulsora de lo que posteriormente será el conflicto estudiantil más complejo de la década de los 90. A partir de marzo de 1997, la mesa directiva de la FECH comenzó a trabajar en un petitorio que resumía las demandas de los estudiantes de la Universidad de Chile. Este documento fue aprobado en el Pleno de la federación (instancia en la que se reúne la directiva con el Cuerpo de Consejeros y el Consejo de Presidentes de Centros de Alumnos) por una amplia mayoría, y fue presentado al Rector Jaime Lavados el 19 de mayo. Los puntos más importantes del petitorio aprobado por la FECH decían relación con la renuncia del Rector y la realización de un proceso amplio de discusión sobre los Estatutos de la UCH y el Plan de Desarrollo Estratégico.<sup>1150</sup>

Junto a esto, la federación convocó a una jornada nacional de movilización para exigir el cambio en el sistema de financiamiento de la educación superior pública, y para manifestarse en contra de la Ley Marco que, desde 1996, dormía en el Congreso. Así, a través de la combinación de reivindicaciones propias para la Universidad de Chile y otras de nivel nacional, el ME consiguió salir de su letargo e iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones que no sólo cuestionaban al sistema educativo del país sino también, al proceso mismo de transición a la democracia, desde el momento en que éste estaba operando bajo una institucionalidad heredada de la dictadura, y por lo tanto, ilegítima para una parte importante de la población.

Volviendo a la UCH, junto con presentar el petitorio al Rector, las distintas facultades realizaron asambleas para determinar los mecanismos a través de los cuales se llevaría a cabo la movilización. En Geología, el colectivo de Estudiantes de Izquierda lideró la toma de esa facultad, mientras en Filosofía, se elaboraba un comunicado público, en concordancia con el petitorio de la FECH, en el cual se exigía la modificación del Estatuto de la Universidad para incorporar a los estudiantes en la toma

---

<sup>1150</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 67.

de decisiones. Lo más interesante del proceso de la Facultad de Filosofía es que los estudiantes decidieron ampliar la convocatoria a los académicos, a través de la realización de un claustro de Facultad de composición triestamental y ponderada.<sup>1151</sup>

Con el objetivo de atraer el apoyo de la comunidad académica, considerado indispensable para el éxito de la movilización, el 26 de mayo, la FECH publicó una carta abierta a todos los académicos de la UCH, en la cual se los invitaba a participar del proceso de reforma que esperaban realizar los estudiantes. Los estudiantes partían su análisis realizando un diagnóstico crítico de la situación: “En nuestra Universidad existe la más profunda crisis desde el término de la intervención militar. Ella supera, a la vez que abarca, las dificultades y diversos problemas locales por todos conocidos. Se trata de una crisis global, que involucra el sentido, la vida cotidiana y la proyección de nuestra Universidad”<sup>1152</sup>, y culpaban a la falta de democracia interna que impedía “un abordaje adecuado, diverso y propositivo sobre las variadas dificultades que nos apabullan cotidianamente”.<sup>1153</sup> Además, se hacían cargo de la compleja situación que vivían los académicos de la Universidad, los cuales tenían que optar a fondos concursables o a recursos privados para poder realizar sus investigaciones.

En la carta abierta a los académicos, la FECH establecía claramente su propuesta a la comunidad universitaria, la cual partía por la renuncia del Rector y seguía con la convocatoria a un Congreso Universitario, con participación triestamental, “donde los claustros departamentales y de facultad se expresarán sobre los temas gruesos y sustantivos que debemos resolver”.<sup>1154</sup> La carta finalizaba apelando a la misión de la UCH, señalando que “los invitamos a que nos ayuden a defender y a recrear este espacio que es, sobre todo de ustedes. La Universidad que los cobijó y educó, la que en más de alguna oportunidad les ha dado la satisfacción privilegiada de sentirse parte constructora de un país mejor, o ha permitido el simple anhelo de ampliar los horizontes de las preguntas y respuestas”.<sup>1155</sup>

El 28 de mayo, tres mil estudiantes de la Universidad de Chile marcharon por las calles de Santiago exigiendo la renuncia del Rector y una respuesta al petitorio. Ante el silencio de las autoridades, el proceso movilizador continuó y se produjeron paros y

---

<sup>1151</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 202.

<sup>1152</sup> “Carta abierta a los académicos de la Universidad de Chile”, FECH, Santiago, 26 de mayo de 1997, p. 1. Archivo FECH.

<sup>1153</sup> Ibid.

<sup>1154</sup> Ibid., p. 3.

<sup>1155</sup> Ibid., p. 4.

tomas en 13 facultades de la UCH, y además se plegaron al movimiento estudiantes de la Universidad de Santiago (USACH), de la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM) y del ex Pedagógico. Los estudiantes paralizados en Santiago eran 47.000.<sup>1156</sup> La CONFECH, que durante la decadencia de las federaciones estudiantiles casi había desaparecido, volvió a surgir con fuerza y se dedicó a coordinar las movilizaciones, no sólo en Santiago sino en todo el país. Por su parte, los académicos reunidos en el Comité Coordinador de Asociaciones de Académicos también se sumaron al movimiento, exigiendo al gobierno una legislación que modificara sustancialmente el sistema de financiamiento de la educación superior.<sup>1157</sup>

Ahora bien, la relación entre estudiantes y académicos, al menos en la UCH, no resultaría tan “natural” como durante el conflicto de Federici, debido a la exigencia de renuncia del Rector Lavados. Es importante recordar que Jaime Lavados había sido el primer Rector no designado, luego de 17 años de régimen militar, lo habían escogido los académicos en 1990 y lo habían reelegido en 1994. Por esto, la petición de renuncia del Rector aparecía ante los ojos de muchos profesores como un cuestionamiento a su capacidad de decisión, aunque muchos no estaban de acuerdo con la gestión de Lavados.<sup>1158</sup> Es por esto que el Consejo Universitario rechazó completamente la petición de los estudiantes, y por esto también, fue más difícil acercar posiciones entre un estamento y otro. Pese a esto, los estudiantes sabían lo importante que era el apoyo de los académicos a sus demandas, por lo que no insistieron en la petición de renuncia.

En este sentido, el ME había hecho un aprendizaje político importante del conflicto de 1987, cuando toda la comunidad universitaria se unió en torno a un conjunto de reivindicaciones, y logró sacar a Federici del Rectorado. Según Rodrigo Roco, presidente de la FECH en 1997, “pese a las fuertes críticas que la FECH y buena parte de la comunidad albergaba frente a la gestión rectoral, los estudiantes no insistieron en su petición de renuncia al Rector, priorizando la demanda de una discusión universitaria para generar cambios. Ello amplió la base de apoyo del movimiento estudiantil y generó nuevos procesos. En efecto, en cada Facultad en paro o tomada por los estudiantes, se desarrollaron claustros académicos e importantes debates...”<sup>1159</sup>

---

<sup>1156</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 202.

<sup>1157</sup> Ibid., p. 202-203.

<sup>1158</sup> Ibid., p. 203.

<sup>1159</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 67. Nota al pie.

La FECH, junto con las movilizaciones, también realizó propuestas para debatir los puntos principales del petitorio redactado en mayo, es decir, junto a la estrategia movilizadora también tendió puentes para la negociación. El 1 de junio, por ejemplo, propuso al Consejo Universitario la celebración de un congreso que discutiera, frente a la comunidad universitaria, las dos reivindicaciones centrales de los estudiantes: la redacción del Estatuto de la UCH y el proyecto de desarrollo, en donde se delinearían las políticas de financiamiento y gestión de la Universidad.

En paralelo, los académicos de la Facultad de Filosofía emitieron una declaración pública en la que coincidían con el diagnóstico hecho por los estudiantes respecto de la situación de la UCH.

“Reconocemos que el papel histórico de la Universidad de Chile en la sociedad chilena y en la cultura del país se ha visto menoscabado gravemente en los últimos 25 años. Este proceso de deterioro, que debió detenerse y revertirse con el advenimiento de la democracia, continúa hasta hoy. Reconocemos, asimismo, que hay importantes problemas no resueltos al interior de la Universidad, problemas que no han sido abordados adecuadamente por las instancias universitarias que corresponde. Nos referimos al estatuto, a la actualización de un marco de desarrollo consensuado que represente el sentir de la comunidad académica, al rol del Estado frente a la Universidad, al crédito universitario y a la redistribución del presupuesto histórico, entre otros”.<sup>1160</sup>

Además, convocaron a un claustro al cual invitaron a toda la comunidad universitaria. Por su parte, los académicos de la Facultad de Ciencias también contribuyeron a la coordinación entre estudiantes y profesores a través de una declaración pública en la que señalaban que:

“La acción de los alumnos es consecuencia de la realidad que ellos viven diariamente en la Universidad de Chile de hoy y debe ser apreciada como una manifestación responsable de un sector de la comunidad universitaria legítimamente preocupado por el destino de la Institución. La percepción de crisis por parte de los alumnos es compartida por los académicos de esta Facultad. Recogemos por ello el llamado a reflexionar y reconstruir la Universidad de Chile”.<sup>1161</sup>

---

<sup>1160</sup> “A la opinión pública”, Claustro Académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Santiago, 28 de mayo de 1997, p. 1. Archivo FECH.

<sup>1161</sup> “Los académicos de la Facultad de Ciencias a la Opinión Pública”. Santiago, 1997, p. 1 Archivo FECH.

Asimismo, los académicos de la Facultad de Ciencias criticaban a la administración Lavados por su actuar “divorciado de la comunidad universitaria”<sup>1162</sup>, aunque no solicitaban la salida del Rector.

Se iba gestando así la necesaria coordinación entre los estamentos, especialmente entre estudiantes y académicos, en torno a un conjunto de demandas comunes, como por ejemplo, los problemas de financiamiento, la falta de democracia al interior de la UCH y la urgencia de nuevos Estatutos. El Claustro académico de la Facultad de Medicina Norte de la UCH también emitió una declaración pública, con fecha 3 de junio de 1997, en la cual asumía varios de los planteamientos del ME, y con particular fuerza rechazaba la imposición de los criterios de libre mercado en la educación.

“La aplicación de la economía social de mercado al estilo neoliberal monetarista e inmediateista chileno a la educación ha socavado los cimientos de la educación solidaria estatal en Chile. La Universidad de Chile, exponente máximo de esta educación solidaria estatal, es la institución que más ha sufrido por la imposición desde fuera y desde dentro de este modelo económico que, por esta razón, ha visto la destrucción de lo máspreciado que tenía: su pluralismo. (...) Las universidades son consideradas como empresas con fines de lucro y se estima que deben ganar dinero a como de lugar. La Rectoría de la Universidad de Chile suprime los fondos propios para investigación científica. Se introduce la errónea concepción del alumno como cliente. (...) Los Académicos que luchamos por el advenimiento de la democracia, la justicia y la convivencia pacífica y pluralista en Chile, sentimos una profunda decepción por la forma en que las dirigencias políticas, estatales y de gobierno, han manejado la educación en Chile y por su incapacidad de revertir el autoritarismo en la educación”.<sup>1163</sup>

Así, la declaración de los profesores de Medicina, y en general las de todos los claustros académicos, dejan entrever no sólo un diagnóstico crítico con respecto al sistema de educación superior, sino también un desencanto con la clase política y los gobiernos democráticos, que no habían sido capaces o no habían tenido la voluntad política de modificar la institucionalidad heredada de la dictadura y, de hecho, habían profundizado la crisis. El desencanto con la transición es una sensación compartida por varios sectores políticos y sociales, y la podemos encontrar también en España. Creemos que esto tiene que ver con que el fin de los regímenes militares en ambos países abrió un período de grandes expectativas, las cuales no fueron satisfechas, ni por los gobiernos de la Concertación en Chile, ni por los gobiernos de UCD en España. Es

---

<sup>1162</sup> Ibid.

<sup>1163</sup> “A la opinión pública”, Claustro académico de la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile, 3 de junio de 1997, p. 1. Archivo FECH.

importante recordar cómo los partidos de izquierda extraparlamentaria en España (PTE y ORT, entre otros) cuestionaban el oportunismo y la comodidad con la que parecía actuar la antigua oposición al franquismo una vez que había llegado al parlamento. Algo similar ocurrió en Chile, con los cuestionamientos del PC a la Concertación, y su “acomodo” con la institucionalidad heredada.

Volviendo a conflicto universitario, el Ministro de Educación de la época, José Pablo Arellano (militante de la Democracia Cristiana), defendió la labor del gobierno del Presidente Frei señalando que los problemas de la UCH no se debían a la falta de financiamiento y que el gobierno había hecho un esfuerzo especial por defender a la Universidad de Chile. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente desmentidas por autoridades de la misma Universidad, particularmente por Patricio Basso, Vicerrector de Economía y Administración (y ex presidente de la Asociación de Académicos de la UCH, quien había tenido una importante labor durante el conflicto con Federici). Basso, a través de una declaración demoledora, desmintió al Ministro señalado que en los últimos 22 años, los aportes del Estado a la Universidad de Chile habían disminuido drásticamente, y que dicho proceso no se había detenido con la llegada de la democracia. En números, Basso, explicaba que entre 1974 y 1980, la UCH vio descender sus aportes en un 29,4% (26.393 millones de pesos de 1996), por lo que la participación de la Universidad de Chile en el financiamiento fiscal a la educación superior bajó de un 51,6% en 1974 a un 43,1% en 1980. Con la legislación de 1981, el aporte fiscal descendió aún más, y la participación de la UCH en este llegó al 28,8%. Lo más grave, en todo caso, es que esta tendencia no se revirtió con los gobiernos democráticos, y en 1996, la participación de la Universidad de Chile en el financiamiento fiscal del sistema universitario cayó al 22,4%. Por cierto, Basso señalaba también que el gobierno de Patricio Aylwin había intentado paliar en parte del daño hecho a la UCH a través de aportes complementarios, que lograron aumentar la participación en un par de puntos porcentuales, pero dicho aportes decrecieron durante el gobierno de Frei.<sup>1164</sup> Así, desde las altas esferas de la administración de la UCH también se criticaba el actuar del gobierno y la situación en la que estaba la Universidad de Chile.

La idea de comunidad universitaria, que tanto éxito había tenido durante el conflicto contra Federici, volvía a tomar cuerpo en 1997, aunque con diferencias con

---

<sup>1164</sup> Patricio Basso, Vicerrector de Economía y Administración de la Universidad de Chile. “Declaración Pública”, Santiago, 5 de junio de 1997, p. 1-2. Archivo FECH.

respecto a la década anterior. Los estudiantes eran particularmente críticos con la gestión del Rector Lavados (aunque, como ya hemos señalado, desistieron de la petición de renuncia) y algunos académicos también, aunque en general los profesores no estaban por pedir la renuncia de Lavados porque ellos mismos lo habían elegido dos veces. Además, entre los académicos operaban diferencias políticas importantes. Aquellos cercanos a la Democracia Cristiana apoyaban al Rector (militante DC), mientras los profesores de izquierda tendían a ser más críticos. Con todo, el principal interpelado en este conflicto era ciertamente el gobierno.

Así, el 11 de junio de 1997, la FECH publicó una declaración dirigida a la comunidad universitaria, en la que hacía un llamado a académicos, funcionarios y autoridades de la UCH para que se sumaran a la demanda que los estudiantes pretendían presentar ante el gobierno. “El momento que se ha creado es inédito en relación a la situación de postergación en que hemos estado sumidos por más de dos décadas. Por lo mismo, el llamado de la FECH es a jugárnosla ahora por abrir los espacios necesarios a nivel del país y el Estado, sin descuidar la adecuada e impostergable solución que requiere la inmediata y mediata situación de nuestra Universidad”.<sup>1165</sup> Para ello, proponía tres elementos fundamentales: un Congreso Constituyente de la UCH, triestamental, participativo y resolutivo, el fin de las políticas de autofinanciamiento, y la constitución de una Mesa Nacional para la Reforma de la Educación Superior y Universitaria.<sup>1166</sup>

La insistencia de la federación en que el debate y la toma de decisiones incluyera a los estudiantes generó una sensación de temor entre las autoridades universitarias y políticas. El fantasma del co-gobierno volvía a aparecer. Por co-gobierno se entendía la participación porcentual de académicos, estudiantes y funcionarios en la elección de las autoridades universitarias. La Reforma Universitaria de 1967 había conseguido esto, y a partir de 1968, la elección del Rector y los Decanos se hacía a través del claustro pleno (triestamental), pero esta conquista fue eliminada luego del golpe de 1973. La petición de participación de los estudiantes en 1997 fue vista por las autoridades como un intento de regreso al co-gobierno, considerado por los sectores más conservadores como el culpable de la radicalización de las universidades a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Pese a que los mismos estudiantes aclararon que no pretendían el co-gobierno

---

<sup>1165</sup> “A los estudiantes, a las autoridades, a la comunidad universitaria”, FECH, Santiago, 11 de junio de 1997, p.1. Archivo FECH.

<sup>1166</sup> Ibid.

(“en ningún momento ha formado parte de la propuesta el tema del co-gobierno. Es de Perogrullo que para ello resulta imprescindible contar, en primer lugar, con un verdadero gobierno universitario, legitimado, transparente, capaz y creíble”).<sup>1167</sup> sino que simplemente querían participar con voz y voto en algunas discusiones sobre políticas universitarias concretas (“consideramos atinente y oportuno señalar que creemos nuestro deber y derecho participar en todas aquellas reflexiones, cualesquiera sea la instancia en que se den, de políticas universitarias”) <sup>1168</sup>, el Rector y el Ministerio, pusieron el tema del co-gobierno al centro del debate, presumiblemente para alejar a los estudiantes y académicos moderados del conflicto.

En el fondo, los estudiantes no pedían participar en la elección de las autoridades académicas, simplemente querían estar representados y tener derecho a opinar respecto de las políticas universitarias de corto y largo plazo, por ejemplo, respecto de la elaboración de los nuevos estatutos de la UCH, que a la altura de junio de 1997 se estaban discutiendo y redactando a puertas cerradas, de espaldas a la comunidad académica.

En vista de la nula respuesta de las autoridades a las peticiones de la federación y de los académicos, el 12 de junio un grupo de estudiantes se tomó la Torre 15, edificio donde funcionan los servicios administrativos de la Universidad, paralizando así toda actividad, incluso la burocrática. Además, para ese mismo día la CONFECH había convocado a una marcha por la educación, a la que asistieron más de 14 mil personas. El 13 de junio, el Claustro de académicos de la Facultad de Ciencias Sociales emitió una declaración en la cual coincidían con los estudiantes en el diagnóstico crítico de la situación de la Universidad de Chile y emplazaban a las autoridades universitarias a incorporar a la comunidad en la discusión respecto de los Estatutos, el plan de desarrollo y el modelo de financiamiento.

“Exigimos al Consejo Universitario, al Rector y al Decano de nuestra Facultad, dedicar sus esfuerzos a lograr del poder ejecutivo una iniciativa legal sobre educación superior que permita una profunda transformación de nuestra Universidad. Reconocemos la legalidad de nuestras autoridades en razón de haber sido elegidos por la comunidad académica; sin embargo creemos que ellos deben legitimarse representando efectivamente el pensar y sentir de los académicos que los eligieron”.<sup>1169</sup>

---

<sup>1167</sup> “Carta abierta a los académicos de la Universidad de Chile”, FECH, Santiago, 26 de mayo de 1997, p. 3. Archivo FECH.

<sup>1168</sup> Ibid.

<sup>1169</sup> “Declaración del Claustro autoconvocado por los académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile”, Santiago, 13 de junio de 1997, p. 1. Archivo FECH.



Terminaba la declaración llamando a un paro de actividades docentes en la Facultad.

De esta manera, la dilatación de la solución al conflicto, y especialmente la actitud de Lavados, de hacer oídos sordos ante las peticiones de la comunidad universitaria, fueron acercando cada vez más a estudiantes y académicos, por lo que el Rector fue quedando progresivamente aislado en este conflicto. Especial rechazo provocó en diversos claustros académicos – y por supuesto, entre los estudiantes – el ingreso de la fuerza pública a algunas facultades, con el fin de desalojarlas. Esta actitud de la policía violaba flagrantemente la autonomía universitaria, y aumentaba el rechazo hacia el Rector, toda vez que dicho ingreso había sido solicitado por él.

El 17 de junio, el Consejo Universitario dio un paso importante en la solución del conflicto al aprobar la realización de un Congreso triestamental para discutir los problemas de la Universidad, lo cual fue celebrado por los estudiantes pero no depusieron las movilizaciones. Según el presidente de la FECH, Rodrigo Roco, “ahora entramos a otra etapa: redirigimos nuestra presión hacia el Ministerio de Educación en función de las demandas nacionales”<sup>1170</sup>, la idea era mantener la movilización hasta que el gobierno creara una mesa de negociación en torno a las principales demandas del ME, por lo que la CONFECH convocó a un paro nacional.

El 19 de junio, se dio otro paso en la solución al conflicto, con la creación de la Comisión de Proyecto Institucional (CPI), que estaría encargada de generar y organizar la discusión triestamental para los nuevos Estatutos, el plan de desarrollo y el sistema de financiamiento. Con todo, y aunque la Comisión representaba un avance, su creación se hizo, una vez más, a puertas cerradas y sin consultar a la comunidad universitaria, lo que provocó una profunda molestia en el movimiento estudiantil. La desconfianza que existía entre los estudiantes y las autoridades universitarias era uno de los principales impedimentos para lograr una solución. Los estudiantes no creían que las autoridades realmente consultaran a la comunidad las decisiones importantes (no lo habían hecho hasta ahora, y no daban muchas señales de querer hacerlo); por su parte, las autoridades universitarias, especialmente el Rector, condicionaban la participación de los estudiantes en la toma de decisiones a la deposición de las tomas y paros.

Como ya señalamos, la movilización estudiantil no se detuvo. Así, el 19 de junio, estudiantes de las cuatro universidades públicas de Santiago se reunieron frente al

---

<sup>1170</sup> *La Época*, 18 de junio de 1997.

Ministerio de Educación para exigir una solución al conflicto. Al día siguiente, se produjeron incidentes entre estudiantes y Carabineros en Iquique, Valparaíso y Santiago. El 21 de junio, más de seis mil estudiantes se reunieron en el Estadio Chile (actual Víctor Jara), en donde Rodrigo Roco convocó a nuevas movilizaciones para presionar al gobierno, por considerar que “ha sido incapaz de enfrentar la crisis estudiantil”.<sup>1171</sup> En este contexto, el 26 de junio, un grupo de estudiantes intentó tomarse la Casa Central de la UCH, pero el Rector ordenó el desalojo, el cual fue filmado por cámaras de televisión y transmitido a todo el país.<sup>1172</sup> Este grado de violencia en la Universidad no se veía desde los años del régimen militar, y por supuesto, supuso el quiebre de las conversaciones entre la FECH y las autoridades universitarias.

Sin embargo, había un hecho que preocupaba particularmente a estudiantes, académicos y autoridades: de prolongarse el conflicto más allá de julio, el año académico estaría perdido, por lo que todas las partes involucradas decidieron flexibilizar sus posiciones y reanudar el diálogo. Durante el mes de julio se produjeron dos claustros triestamentales, en donde académicos, estudiantes y funcionarios presionaron para que la Comisión de Proyecto Institucional fuera elegida democráticamente y tuviera representación de los tres estamentos.<sup>1173</sup> Esto fue finalmente aprobado por el Consejo Universitario, y el 29 de junio el Pleno de la FECH aceptó deponer las tomas y paros. El conflicto en la UCH había terminado.

#### **IV. ¿Victoria o derrota?: balance del ciclo de movilizaciones de 1997**

Pese al fin del conflicto en la UCH, las movilizaciones continuaban a nivel nacional. El 30 de junio hubo un intento de toma del Ministerio de Educación y el 1 de julio, más de 10 mil estudiantes marcharon hacia el Congreso Nacional en Valparaíso, exigiendo una reforma a la educación superior. Por su parte, el gobierno prometió públicamente aumentar los aportes fiscales a las universidades públicas y el 7 de julio reenvió al Congreso el proyecto de Ley Marco para las Universidades Estatales, con algunas modificaciones.<sup>1174</sup>

---

<sup>1171</sup> *La Tercera*, 21 de junio de 1997.

<sup>1172</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 210.

<sup>1173</sup> Profesores 60%, alumnos 30%, funcionarios 10%. F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 210.

<sup>1174</sup> *Ibid.*

El problema era que la Ley Marco, como señalamos anteriormente, no producía transformaciones sustanciales en el sistema de financiamiento, por lo que no contó con apoyos mayoritarios en el Congreso. Tampoco hubo acuerdo entre los parlamentarios para reformar los estatutos de las universidades estatales, por lo que ante la imposibilidad de hacer reformas sustanciales introducir “los gobiernos de la década de los ’90, optaron por realizar ajustes menores al marco normativo, creando nuevos mecanismos de política a través de las leyes anuales de presupuesto y de la potestad reglamentaria del Presidente de la República”.<sup>1175</sup> Así, la LOCE, heredada de la dictadura recién fue derogada en 2009, cuando el gobierno de la socialista Michelle Bachelet promulgó la Ley General de Educación.

En términos concretos, el conflicto de 1997 terminó con una victoria parcial y una derrota. La victoria parcial fue para los estudiantes de la Universidad de Chile, que consiguieron algunos de los puntos del petitorio presentado al Rector Lavados en mayo de ese año. Por ejemplo, consiguieron que la discusión respecto de los nuevos Estatutos de la UCH incorporara a toda la comunidad universitaria; también lograron – apoyados por los académicos y los funcionarios – que la Comisión de Proyecto Institucional fuera triestamental. Dicha comisión discutió por varios meses temas como el sistema de financiamiento, las formas de gobierno interno, y los mecanismos de gestión de la UCH.<sup>1176</sup> La CPI fue una instancia clave para resolver el conflicto de 1997 y dar salida a algunas de las peticiones de los estudiantes. Según Rodrigo Roco, “dicha comisión, notablemente presidida por el profesor Erwin Haramoto, cumplió a cabalidad su rol como articuladora de un amplio e inédito proceso universitario de discusión. Ella fue sobre todo pionera de la reconstrucción de las confianzas y respetos mutuos que son la base de las nociones de democracia y comunidad universitarias”.<sup>1177</sup>

Probablemente, su aporte más importante fue la creación de un Senado Universitario, organismo triestamental, encargado de discutir las políticas de largo plazo para la UCH. Lo interesante de este Senado, que funcionó de hecho entre 1999 y 2006, es que contradecía a la LOCE, que, heredera de la dictadura, negaba la participación de los estudiantes en cualquier instancia de gobierno o debate en torno a la universidad. Los planteamientos de la CPI fueron aprobados por amplia mayoría en un referéndum

---

<sup>1175</sup> Andrés BERNASCONI y Fernando ROJAS: “Informe sobre la Educación Superior en Chile: 1980-2003”, UNESCO, Agosto de 2003, p. 51. [http://www.cedus.cl/files/infnac\\_cl.pdf](http://www.cedus.cl/files/infnac_cl.pdf).

<sup>1176</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 211-212.

<sup>1177</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 77-78.

universitario realizado en abril de 1998, y un mes después, en mayo, fue elegido un nuevo Rector para la Universidad de Chile. Aunque el proceso eleccionario se realizó según la legislación heredada de la dictadura, el candidato electo, Luis Riveros, parecía tener mucha más sintonía con las reivindicaciones de los estudiantes que su antecesor.

En suma, el conflicto de 1997 supuso un avance para la situación de la UCH, si bien no tanto en cuanto al financiamiento (aunque el gobierno se comprometió a aumentar los aportes a todas las universidades estatales), sí en cuanto a la participación de los estudiantes en las instancias de debate de las políticas universitarias. Así, pudieron participar tanto en la redacción de los Estatutos para la Universidad de Chile<sup>1178</sup> como en el Senado Universitario, instancia que operaba como una suerte de poder normativo, en el cual se discutían (y se discuten) los proyectos de desarrollo institucional. Además, el conflicto de 1997 reforzó la noción de comunidad universitaria, entendida como un cuerpo de deliberación en donde todos sus miembros tienen derechos y deberes. En este sentido, como señala Rodrigo Roco, esta noción “se opone de plano a una concepción en donde los estudiantes se asumen como clientes, los académicos como empleados y las autoridades como gerentes – los que no hacen sino esconder el acaparamiento del poder por parte de grupos particulares –.”<sup>1179</sup>

Ahora bien, aunque la UCH logró sacar ganancias del conflicto de 1997, no ocurrió lo mismo a nivel nacional. En otras universidades los estudiantes no lograron la participación que se había conseguido en la Universidad de Chile, ni tampoco pudieron modificar sustancialmente el sistema de financiamiento. En este sentido, una vez que la FECH depuso las tomas y los paros, a fines de junio de 1998, se produjo un quiebre en la CONFECH, ya que otras federaciones querían continuar la movilización para seguir presionando al gobierno. El problema era que sin la FECH, la CONFECH perdía una parte sustancial de su fuerza. Así, el ME entró en una nueva etapa de reflujo, lo que quedó en evidencia en el Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado en Valparaíso en junio de 1998. En este Congreso, los estudiantes de izquierda, especialmente los comunistas, propusieron discutir la LOCE e iniciar un ciclo de movilizaciones para exigir su reforma. Sin embargo, los estudiantes de la DC se negaron porque no querían tomar acciones contra el gobierno de su propio partido. De esta manera, y pese a que casi todos los años se producían movilizaciones puntuales en torno al financiamiento,

---

<sup>1178</sup> En 2004 se hicieron modificaciones a los Estatutos heredados del régimen militar y en 2006 se aprobaron Estatutos nuevos.

<sup>1179</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 80.

estas no alcanzaron la masividad del ciclo de 1997, y por cierto, no produjeron transformaciones mayores en el sistema de educación superior hasta la derogación de la LOCE en 2009.

Con todo, como hemos señalado en capítulos anteriores, no podemos reducir el éxito o fracaso del movimiento estudiantil solamente a los cambios producidos o a las reivindicaciones conquistadas. Y en este sentido, pese a que a nivel nacional la movilización de 1997 no consiguió todo lo que se proponía, sí creemos que tuvo éxito en un aspecto fundamental, ya que el M. E. se situó a la vanguardia en la exigencia por mayor democratización del sistema político y por transformaciones sustanciales en el sistema económico. De hecho, el conflicto de 1997 marcó un hito en la transición a la democracia, toda vez que supuso un fuerte cuestionamiento a este proceso, que había sido liderado por los partidos políticos, y había dejado olvidada a la sociedad civil. Siguiendo a Fabio Moraga, “cuando en 1997 los jóvenes liderados por la FECH sobrepasaron las demandas económicas y obligaron a la comunidad universitaria a comenzar un proceso democratizador de la institución, iniciaron la recomposición del elemento constitutivo del movimiento estudiantil chileno. Este es, sin exageración, el único fenómeno democratizador iniciado por un sector específico de la “sociedad civil” en un país donde, paradójicamente, la transición a la democracia protagonizada por la clase política, los militares y los empresarios, ha tendido a reforzar los esquemas autoritarios fijados por la Constitución de 1980”.<sup>1180</sup>

En este contexto, el movimiento estudiantil chileno recuperó una faceta que le era propia, incluso desde antes del régimen militar, de crítica al sistema político imperante y de impulsor de cambios sociales. Tal como señala Rodrigo Roco, el conflicto de 1997 dejó en evidencia que el ME criticaba no solamente un aspecto puntual del sistema público de educación superior, sino “un cierto modelo de sociedad que ahoga la noción de *ciudadanía* reemplazándola por la de *consumidor*, y para el cual la *democracia* es ineficiente y molesta, y la *política* no es más que administración”.<sup>1181</sup> Así, los estudiantes salieron a las calles a exigir mayor financiamiento para la educación superior, mayor participación en la gestión universitaria, y cambios en la institucionalidad heredada de la dictadura, es decir, se movilizaron por un modelo social más inclusivo y participativo, en suma, más democrático. No se quedaron únicamente en reivindicaciones sectoriales o académicas, sino que plantearon una crítica al modelo

---

<sup>1180</sup> F. MORAGA: “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)”, p. 249.

<sup>1181</sup> R. ROCO: “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”, p. 82.

impuesto desde el régimen militar, que había transformado a la sociedad civil en una sociedad de consumidores.

Y esta faceta crítica del ME chileno se ha mantenido, con más o menos matices, hasta la actualidad. Si reflexionamos brevemente sobre el último ciclo de movilizaciones estudiantiles en Chile, que comenzó en 2011 y aún sigue en curso, podemos ver que en el fondo del problema está la noción de educación pública. Si bien la legislación heredada del régimen militar se cambió en 2009, y el sistema de financiamiento ha sufrido diversos cambios a lo largo de la primera década del siglo XXI, la concepción que el Estado chileno tiene respecto de la educación pública no ha cambiado sustancialmente. Solamente en lo que respecta a la educación superior, las políticas estatales han tendido a aumentar la cobertura, permitiendo la existencia de 25 universidades públicas y tradicionales<sup>1182</sup>, y 34 universidades privadas, que compiten por el ingreso anual de más de 500 mil postulantes.

Sin embargo, pese a la amplia “oferta de Universidades”, la educación superior en Chile es una de las más caras de los países de la OCDE. Según datos de esta organización, el costo promedio anual de la matrícula universitaria en Chile supera los USD 4.000, mientras el promedio mundial de la OCDE es de USD 3.400.<sup>1183</sup> Si consideramos además que el poder adquisitivo promedio de Chile es muy inferior al de la OCDE, tenemos como resultado una educación superior demasiado costosa para el ingreso promedio del país. Además, la forma de financiamiento de la educación superior sigue siendo un problema, ya que si bien el Estado ha generado un conjunto de becas y ayudas fiscales orientadas hacia los sectores de menos recursos, este sistema de ayudas sólo llega al 13,8% de los estudiantes.<sup>1184</sup> Por esto, la mayoría de los que no pueden optar a becas financian su educación superior con créditos privados o con aval del Estado, que les permiten acceder tanto a las instituciones públicas como privadas. El problema es que los intereses de dichos créditos (entre un 2 y un 5,8%) generan un promedio de deuda cercano a los USD 4.900 por alumno<sup>1185</sup>, con lo cual el universitario que se integra al mundo laboral lo hace con una carga económica enorme.

---

<sup>1182</sup> Se considera como Universidades Tradicionales a aquellas privadas que existían antes de la Ley general de Universidades de 1981. Son básicamente las universidades católicas (9 en distintas regiones del país), la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María.

<sup>1183</sup> “Por qué es tan cara la universidad en Chile”, BBC Mundo, 16 de mayo de 2012. <http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/05/16/porque-es-tan-cara-la-universidad-en-chile/>.

<sup>1184</sup> Ibid.

<sup>1185</sup> Ibid.

El otro gran problema de la educación superior en Chile, tal como ya denunciaban los estudiantes en la década de los 80, es la calidad. En beneficio de la cobertura, el Estado permitió la existencia de diversas instituciones de educación superior (universidades privadas, institutos de formación profesional y técnica) con un sistema bastante precario de control de la calidad de la educación impartida en estos establecimientos. De esta manera, no existe ninguna relación entre las necesidades profesionales del país y las carreras impartidas, ni tampoco hay uniformidad en cuanto a la formación recibida en una misma carrera pero impartida por distintos centros. Y, pese a que la Ley prohíbe que las universidades – públicas y privadas – tengan fines de lucro, la permisividad del sistema permite que, de hecho, muchas instituciones de educación superior repartan ganancias entre sus dueños, y generen “negocios” alternativos.

En suma, y tal como hicieron los estudiantes movilizados en 1997, el ciclo actual de movilizaciones recoge la aspiración de transformar el sistema nacional de educación superior y volver a instalar la noción clásica de educación pública, en donde el Estado no sea un mero garante o suministrador de becas, sino un agente activo de un sistema que asegure cobertura, financiamiento adecuado o gratuidad y calidad para los estudiantes chilenos. Además, el ME actual, al igual que sus antecesores, plantea una dura crítica al sistema político y económico, por considerarlo poco democrático, poco representativo y anclado en elementos heredados de la dictadura. De esta forma, aunque su existencia es, por definición cíclica, el movimiento estudiantil chileno que hemos estudiando a lo largo de estos cuatro capítulos, tiene continuidad en su dimensión crítica del modelo político y económico: si desde 1973 el ME se situó en contra del régimen militar, a partir de 1990, lo hizo en contra del sistema político-social heredado de éste. En este sentido, los estudiantes chilenos se han situado a la vanguardia de la recomposición de una sociedad civil consciente de sus derechos y crítica con respecto al Estado, sociedad que durante muchos años estuvo acallada por el peso de la dictadura y luego olvidada por un proceso de transición a la democracia que no la incluía en la toma de decisiones. Recién ahora, y producto del empuje del ME, esta sociedad civil comienza a reclamar lo que considera que le pertenece.

El conflicto protagonizado por el ME chileno en 1997 significó, como ya hemos señalado, un hito en la transición a la democracia, ya que supuso un cuestionamiento proveniente desde la sociedad civil a este proceso liderado casi exclusivamente por los partidos políticos y los militares. Y también significó una crítica al sistema político y económico instalado en Chile por el régimen militar y mantenido por la Concertación

desde 1990 en adelante. Ahora bien, este mismo cuestionamiento lo podemos ver en el conflicto que los estudiantes españoles protagonizaron en el curso 79-80, en contra de la Ley de Autonomía Universitaria (LAU). Tal como se explica en el capítulo 8, durante los últimos meses de 1979 se inició una oleada de movilizaciones estudiantiles corta pero bastante fuerte, en contra de dicha ley, que los estudiantes y buena parte de la comunidad universitaria consideraban un retroceso, ya que aumentaba la selectividad y las tasas académicas, transfiriendo a los estudiantes el costo de la educación, que hasta ese momento había estado subvencionada en buena parte por el Estado. En este sentido, el conflicto contra la LAU en España y el de 1997 en Chile son quizás los más semejantes, ya que ambos se producen durante la transición a la democracia y comparten una visión crítica respecto de ese proceso y del sistema político que ha surgido luego de la dictadura. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Chile exigían mayor participación en los organismos de decisión y debate de la Universidad, y modificación de los criterios de mercado impuestos a la educación superior desde 1981 en adelante. Por su parte, los estudiantes españoles, aunque habían conseguido mayor participación en el gobierno universitario a partir de 1977, reclamaban también contra el consejo económico que pretendía establecer la LAU, que en teoría tendría primacía por sobre el claustro. Es decir, ambos ME buscaban incorporarse o bien resguardar su participación en los procesos de toma de decisiones de la Universidad, en el entendido de que los estudiantes formaban parte de una comunidad académica, que tenía ciertos derechos y deberes de cara a la sociedad. También se criticaban los criterios económicos que se estaban aplicando al ámbito de la educación. Si en Chile el financiamiento de la educación superior era una de las grandes reivindicaciones del ME, en España lo era el alza de las tasas.

Otra crítica fundamental que compartían los estudiantes chilenos y españoles era que la legislación que normaba la educación universitaria en ambos países se había hecho de espaldas a la comunidad universitaria. Así había ocurrido con la LOCE y con el proyecto de Ley Marco en Chile, y con la LGE y el proyecto de LAU en España. En ninguno de estos casos, los legisladores habían consultado a la comunidad académica, pese a que tanto la redacción de la Ley Marco como la de la LAU, se habían realizado en democracia. En este sentido, en el conflicto contra la Ley de Autonomía Universitaria podemos observar una mayor articulación de la comunidad académica española, que rechazó casi unánimemente el proyecto. Si anteriormente señalamos que una diferencia importante entre el ME español y el chileno era justamente que en el



primero la articulación de la comunidad académica había sido más difícil y menos coordinada que en el segundo, en el conflicto contra la LAU podemos apreciar la gestación de una comunidad académica más sólida, al modo de la que vemos en Chile, durante el conflicto de Federici o el de 1997. La LAU no fue criticada solamente por los estudiantes, sino también por buena parte de los profesores, tanto PNN como catedráticos y adjuntos. De hecho, también desde algunos rectorados se criticó fuertemente el proyecto. Sin ir más lejos, en diciembre de 1979, la Junta de Gobierno de la UAM calificó a la LAU como negativa en su conjunto, porque recortaba los niveles de autonomía de las universidades.<sup>1186</sup>

También podemos ver similitudes en la relación entre estudiantes y partidos políticos, durante las movilizaciones llevadas a cabo en democracia. Hemos señalado en los capítulos dedicados a España que durante los años del tardofranquismo el movimiento estudiantil estuvo liderado por el PCE, pese a la fragmentación y radicalización que vivió en los 70, y pese a la aparición de múltiples grupos que intentaban competir con él (como la Joven Guardia Roja, por ejemplo). Sin embargo, una vez iniciada la transición a la democracia, la influencia del Partido Comunista en la Universidad decayó enormemente, debido a que decidió institucionalizar su actividad política a través el parlamento, dejando de lado al ME. Por esto, la iniciativa del ciclo de movilizaciones de 1979-1980 recayó en partidos que no tenían representación parlamentaria, como el PTE y la ORT, y que buscaban, a través de la movilización social, cuestionar al sistema político que estaba operando sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Estos partidos, a través de sus secciones estudiantiles o juveniles, lograron articular la Coordinadora de las tres universidades madrileñas quien fue el motor de las movilizaciones del ciclo 1979-1980.

Por su parte, en el conflicto de 1997 en Chile, también será la izquierda extraparlamentaria – básicamente el PC – quién tome la iniciativa en las movilizaciones, a través de las federaciones estudiantiles lideradas por jóvenes militantes, como es el caso de Rodrigo Roco en la FECH. Y también desde esta posición extraparlamentaria se lanzó una fuerte crítica al sistema político que, en 7 años de transición a la democracia, parecía haberse acomodado a una institucionalidad (Constitución Política de la República, incluida) heredada del régimen militar. Es interesante constatar cómo el ME en ambos países se transforma en un espacio de crítica al sistema político democrático

---

<sup>1186</sup> ABC, 13 de Diciembre de 1979. BNE.

que ha surgido luego de años de dictadura, y cómo en este espacio es ganado por los partidos políticos que no tienen cabida en el parlamento.

Otro elemento que tiene alguna similitud entre ambos conflictos es el uso de la violencia. Lamentablemente, en las movilizaciones contra la LAU tres jóvenes españoles resultaron muertos, dos de ellos producto de la acción excesiva de la policía y una por la acción terrorista del *Batallón Vasco Español*. Ciertamente, la muerte de estos tres jóvenes contribuyó a radicalizar y a aumentar el nivel de las movilizaciones estudiantiles, especialmente porque este nivel de violencia recordaba a los peores años del franquismo. En el caso chileno, no hubo muertes en el conflicto en 1997<sup>1187</sup>, pero sí situaciones violentas que recordaban también los años de dictadura, como los desalojos por la fuerza de las facultades de la UCH que estaban ocupadas por los estudiantes, o el desalojo de la Casa Central de la Universidad de Chile, que fue filmado por las cámaras de TV y transmitido a todo el país. En ambos casos, tanto la opinión pública como la comunidad académica, rechazaron la violencia con la cual cada gobierno intentaba controlar el conflicto, por considerarla un retroceso en el proceso de democratización de la sociedad y un recuerdo innecesario del doloroso pasado reciente. En este sentido, luego de iniciada la transición a la democracia, tanto la sociedad española como la chilena, no estaban dispuestas a permitir estos niveles de violencia, porque consideraban que no se correspondían con países democráticos, que habían dejado atrás, luego de muchos años y mucho esfuerzo, regímenes militares que justamente se habían caracterizado por la represión brutal de la oposición.

Ahora bien, una diferencia importante que podemos percibir entre el conflicto contra la LAU y el de 1997 en Chile, es que en el primer caso hay una victoria clara para el ME, mientras en el segundo, no podemos decir lo mismo. En el conflicto de 1979-1980 en España la oposición al proyecto de ley fue tan fuerte que finalmente este no se aprobó, y en 1983, con el PSOE ya en el poder, se redactó la Ley de Reforma Universitaria, que consagraba a la educación superior como un servicio público, una reivindicación largamente anhelada por los estudiantes españoles. En el conflicto de 1997 en Chile, en cambio, no sólo no hubo una transformación legislativa acorde con las peticiones de los estudiantes, sino que el sistema siguió (y sigue) operando bajo los criterios de mercado tan cuestionados por el ME. Recién en 2009 se produjo el

---

<sup>1187</sup> En 1997 no hubo muertes que lamentar pero sí en 1999. Ese año, durante una movilización en contra el sistema de financiamiento de la educación superior, Daniel Mencho, estudiante de la Universidad de Tarapacá, fue asesinado por un carabinero, lo que produjo conmoción en la opinión pública y contribuyó a radicalizar el conflicto.

reemplazo de la LOCE por la Ley General de Educación, pero el sistema de financiamiento universitario y los estándares de calidad no mejoraron sustancialmente con la nueva ley. Por eso, a partir de 2011 ha surgido una nueva oleada de movilizaciones, todavía en curso.

Con todo, creemos que el rasgo más interesante de los ME español y el chileno es que ambos comparten una actitud, un ethos, una noción de sí mismos como vanguardia crítica del sistema político y económico. Independientemente de la especificidad de cada país, de las diferencias temporales que existen entre un caso y otro, y de los contenidos particulares de cada oleada de movilización, ambos ME comparten un sustrato común: ambos se plantean como voces de alerta o puntas de lanza en la lucha contra las respectivas dictaduras. Bajo ellas, la universidad se convirtió, como señala Sergio Rodríguez Tejada, en una zona de libertad que permitió la socialización y politización de los estudiantes y su incorporación a los movimientos de oposición. “La represión policial y académica no impidió, sino que más bien alentó, que la politización creciente del estudiantado en los últimos años del régimen, por un lado, y la eclosión de otros movimientos antifranquistas pre y postuniversitarios – el de bachilleres y el de PNN, respectivamente –, por otro, acabaran por consolidar la hegemonía de la disidencia en el espacio público académico (...) Una vez más se confirma que la universidad no sólo reflejó los cambios políticos del período, sino que también contribuyó decisivamente a inducirlos”.<sup>1188</sup>

Y una vez que los respectivos regímenes dieron paso a sistemas democráticos, los movimientos estudiantiles español y chileno mantuvieron esta característica crítica respecto del sistema político y económico que se había instalado con la transición a la democracia. De esta manera, los estudiantes españoles y chilenos contribuyeron a articular una sociedad civil que se recomponía con bastantes dificultades después de largos años acallada por el peso de la dictadura.

---

<sup>1188</sup> S. RODRÍGUEZ TEJADA: *Zonas de libertad*, p. 423.

## CONCLUSIONES

Como señalamos en el marco teórico de nuestra investigación, para analizar los movimientos estudiantiles en España y Chile hemos usado tres aspectos de la teoría de los movimientos sociales, con el fin de obtener una visión lo más completa posible de estos fenómenos. Estos aspectos son: oportunidades políticas, estructuras de movilización y procesos enmarcadores o marcos de significado. Por oportunidades políticas entendemos aquellas coyunturas específicas que permiten el surgimiento de un movimiento social. Por cierto, bajo regímenes dictatoriales, las oportunidades políticas son complejas y el peligro que enfrentan los participantes del movimiento es bastante alto. Basta recordar la represión a la que fueron sometidos los estudiantes, tanto en España como en Chile, durante las respectivas dictaduras.

Por estructuras de movilización entendemos todos aquellos elementos que componen tanto la organización del movimiento como la movilización de recursos, por ejemplo, qué forma organizativa asume un movimiento (si cuenta con plataformas unitarias de coordinación o no) y qué mecanismos impulsa para el desarrollo de acciones colectivas (manifestaciones, marchas, paros, tomas, violencia o no violencia). En suma, las estructuras de movilización son todos aquellos mecanismos que permiten a los movimientos sociales funcionar, es decir, “los canales colectivos – tanto formales como informales – a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse a la acción colectiva”.<sup>1189</sup>

Finalmente, por procesos enmarcadores o marcos de significado, entendemos aquel elemento que media entre la oportunidad política y las estructuras de movilización. Es decir, aquellos “significados compartidos y conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación”.<sup>1190</sup> Para asumir el riesgo que implica desafiar a un régimen dictatorial, que tiene el monopolio del uso de la fuerza y que ha demostrado que está dispuesto a usarlo hasta las últimas consecuencias, es imprescindible que las personas definan su situación como injusta, y que compartan un conjunto de conceptos, ideas y valores, por los cuales están dispuestos a luchar, y muchas veces, a arriesgar la propia vida. Son justamente los marcos de significado los que dan sentido y cohesión al movimiento y lo proyectan en su dimensión política y social. A lo largo de nuestro estudio, hemos podido verificar que algunos aspectos de

---

<sup>1189</sup> D. MC ADAM, J. MC CARTHY y M. ZALD: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, p. 24

<sup>1190</sup> Ibid., p. 26

los marcos de significado varían dentro del mismo movimiento, pero hay elementos que permanecen casi inalterables, por ejemplo, la lucha contra la dictadura.

Con el objeto de presentar las conclusiones de manera ordenada, hemos decidido abordar cada uno de los ámbitos anteriormente descritos de manera independiente, de modo de establecer también la comparación de nuestros dos casos de estudio.

## **I. Oportunidades políticas**

Respecto de las oportunidades políticas (OP), es importante señalar que éstas varían, dependiendo de si el movimiento surge en un contexto de dictadura o de democracia. Como nuestra investigación busca analizar justamente el tránsito del movimiento estudiantil entre dictadura y democracia, tenemos que tener en cuenta esta diferencia.

Tanto en el caso español como en el chileno, las oportunidades políticas bajo regímenes dictatoriales representan siempre un desafío al gobierno, y como ya señalamos, muchas veces entrañan bastante peligro para los desafiantes. Sin embargo, se produce una paradoja. Aunque podríamos pensar que en este contexto las OP son escasas, luego de analizar el recorrido de los movimientos estudiantiles podemos ver que no lo son tanto. Hay muchos elementos que, bajo un régimen dictatorial, pueden funcionar como oportunidad política: sin ir más lejos, la misma represión.

Es importante señalar que por lo general, los movimientos estudiantiles bajo regímenes dictatoriales funcionan de manera reactiva, es decir, surgen ante algunas medidas de la autoridades que son consideradas como injustas. Así, por ejemplo, luego del ciclo de movilizaciones de 1968-1969, el ME español – y en especial el madrileño – surgió con fuerza para oponerse a la Ley General de Educación (promulgada en 1970) por considerar que introducía elementos tecnocráticos y elitistas en la educación superior. Desde esta perspectiva podemos comprender lo ocurrido en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 71-72, cuando se intentó cambiar el Plan de Estudios sin consultar a la comunidad académica; o bien las luchas en contra del decreto de Selectividad (1974), que suponían, según los estudiantes, un intento por frenar la masificación de la Universidad. Lo mismo ocurrió en Chile en 1986-1987, cuando los estudiantes se levantaron en contra del Plan de Racionalización que quería implementar el régimen en el sistema público de educación superior, y en particular, en la Universidad de Chile durante el rectorado de José Luis

Federici. Es en este sentido que postulamos que los movimientos estudiantiles bajo dictaduras tienden a ser más reactivos que propositivos, pero eso no quiere decir que funcionen solamente bajo el esquema de acción-reacción. Una vez que los movimientos estudiantiles se han levantado o han emprendido acciones en contra de las medidas tomadas por el régimen, también surgen espacios de proposición. Por ejemplo, ante el modelo de universidad elitista y tecnocrática que, según los estudiantes, postulaba la LGE, el ME español proponía otra de tipo científico y al servicio del pueblo. Lo mismo hicieron los estudiantes chilenos cuando al modelo de autofinanciamiento que estableció la dictadura opusieron el modelo de educación pública financiada por el Estado.

Como señalamos más arriba, la represión es otro elemento que funciona como oportunidad política para los movimientos estudiantiles, no sólo bajo dictadura sino también bajo sistemas democráticos. Así podemos comprender, por ejemplo, el levantamiento de los estudiantes de diversas facultades de Madrid en apoyo a las sanciones que el régimen franquista impuso a los estudiantes de Medicina, producto de la larga huelga mantenida en el curso 71-72, o las movilizaciones estudiantiles en contra del Proceso de Burgos y de la ejecución de Puig Antich. En general, la represión ejercida por los organismos de seguridad del Estado, tanto a estudiantes como a no estudiantes, genera oleadas de movilización, que pueden hacer resurgir a movimientos que pasaban por momentos de reflujo. Es el caso del ME español tras el período 68-69, que resurge con fuerza producto de las campañas contra el proceso de Burgos. Es también el caso del ME chileno durante la época de las protestas (1983-1986), especialmente luego de la reconstrucción de la FECH en 1984 y durante el año decisivo de 1986. Ahora bien, como hemos señalado, las oportunidades políticas bajo regímenes dictatoriales son complejas y por lo general, combinan la reacción en contra de políticas específicas con el rechazo a la represión. Por eso, en la Universidad de Madrid era habitual que los estudiantes exigieran el fin de la LGE, la salida de la policía de las facultades y la amnistía para los presos políticos.

En suma, podemos señalar que bajo regímenes dictatoriales las oportunidades políticas están dadas generalmente por acciones que vienen desde el mismo régimen (ya sean políticas universitarias o represivas) y que los movimientos estudiantiles aprovechan con el objeto de relanzar sus movilizaciones. Sin embargo esta actitud reactiva va acompañada de una propuesta, especialmente en el ámbito de las políticas

educativas, que está en sintonía con los procesos enmarcadores que dotan de sentido a los movimientos estudiantiles, y a los cuales nos referiremos más adelante.

Con todo, una diferencia importante que podemos encontrar en el caso del movimiento estudiantil español y el chileno, respecto de las OP, tiene que ver con la articulación del movimiento con el escenario nacional. Durante el período estudiado para el caso español, el ME ejerció algunas acciones en coordinación con otros movimientos sociales (Proceso de Burgos, caso Puig Antich), especialmente con el movimiento obrero, pero nunca se produjo en España una oleada de movilización social generalizada que funcionara como oportunidad política, salvo quizás después de la muerte de Franco, durante las campañas por la amnistía de los presos políticos. En este sentido, las OP que impulsaban al ME español provenían generalmente de decisiones del régimen franquista, con lo que se acentúa el carácter reactivo de éste.

En Chile, en cambio, entre 1983 y 1986 se produjo una oleada de movilización generalizada, que incluyó no solamente a los movimientos sociales más potentes, como el obrero y el estudiantil, sino también a grupos profesionales y de clase media. Es la época que se conoce como “las protestas”. Sin duda, este ciclo largo de movilizaciones favoreció, en primer lugar, la reconstrucción del motor del ME chileno, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en 1984, y posteriormente, la inserción del ME en la lucha contra la dictadura. Las protestas comenzaron en 1983 como una respuesta de la población ante la dura crisis económica que afectaba al país desde el año anterior, que había hecho aumentar drásticamente el paro y que había sumido a muchas familias de clase media y baja en la precariedad. En este sentido, la coyuntura específica que impulsó las primeras protestas era netamente económica, pero a poco andar se fue sumando el descontento de la población contra el régimen de Pinochet, por lo que el factor económico quedó prontamente eclipsado por el político. Y esta situación operó como una oportunidad política inmejorable para el ME, que prontamente se incorporó a la movilización social general que puso en jaque a la dictadura entre 1983 y 1986.

Bajo sistemas democráticos o durante procesos de transición a la democracia se abren nuevas oportunidades políticas para los movimientos estudiantiles, las movilizaciones ya no están prohibidas, la prensa no está bajo censura, existe pluralismo político, etc. En este sentido, uno podría pensar que hay más OP, pero en realidad, esto es discutible. Si pensamos en la represión como oportunidad política, ésta deja de ser un factor de primera línea, como lo era bajo dictadura, aunque no está del todo ausente: basta recordar la muerte de los dos jóvenes madrileños en las protestas en contra de la

LAU en 1979-1980 o el violento desalojo de la UCH en 1997. Pero si analizamos la coyuntura en la que se desarrollan estos dos conflictos, veremos que es similar a la que existía bajo dictadura.

El conflicto contra la LAU sigue la tónica de reacción que había marcado al movimiento estudiantil español en los años del tardofranquismo. El ME se activa a partir de la discusión en el Congreso de la Ley de Autonomía Universitaria, que era rechazada por los estudiantes por diversas razones, entre ellas, porque aumentaba drásticamente las tasas de matrícula, porque no incorporaba la gestión democrática de los centros y porque se había redactado de espaldas a la comunidad. En este sentido, el ME reacciona frente a una propuesta de política universitaria de parte del gobierno que le parece negativa, en el contexto de un gobierno de centro derecha (UCD) que estaba en crisis, pero también creemos que reacciona ante una forma de hacer política con la cual los estudiantes no estaban de acuerdo. El ME español que surge durante el conflicto contra la LAU difiere del anterior porque su principal bandera de lucha ya no es el fin del régimen franquista, pero aún mantiene un marcado carácter crítico del sistema político que se ha inaugurado con la transición a la democracia. En este sentido, la lucha contra la LAU es una oportunidad política de relanzamiento del movimiento estudiantil pero no se queda en este aspecto puramente universitario, sino que trasciende a lo político a través de la crítica que se hace, no sólo a los partidos de gobierno, sino también – y quizás más fuertemente – a los de oposición, que no han querido o no han sabido llevar al parlamento los planteamientos de la ciudadanía.

Por su parte, el conflicto que surge en 1997 en torno a la Universidad de Chile, a diferencia del caso español, no es una reacción a un cambio o propuesta por parte del gobierno, sino justamente a la permanencia de una institucionalidad y normativa heredada de la dictadura. En este sentido, hay una diferencia importante entre un caso y otro, ya que el ME chileno de 1997 fue más propositivo que el español de 1979-1980, aunque finalmente no tuvo mucho éxito. Independientemente de esto, ambos ME comparten una visión crítica de los respectivos procesos de transición, que, en una coyuntura determinada, es capaz de provocar una oleada de movilización estudiantil, con manifestaciones callejeras, marchas y paros, tal como se hacía durante la dictadura, pero con un peligro mucho menor. En este sentido, una diferencia radical entre las OP que se dan en dictadura y en democracia tiene que ver con el peligro que entraña el desafío lanzado. Los estudiantes que se movilizaban en contra del régimen de Franco o de Pinochet, sabían que estaban poniendo en juego desde su continuidad en la



Universidad hasta su propia vida. Ambos regímenes habían demostrado fehacientemente que estaban dispuestos a sancionar, expulsar, detener e incluso asesinar a estudiantes. En democracia, este peligro desaparece o se minimiza. Salvo momentos puntuales de represión por parte de la policía, los estudiantes que se manifiestan en contra de la LAU y en el conflicto de 1997, saben que corren menos riesgos que sus antecesores. Paradójicamente, esto no hace que más estudiantes se incorporen al ME, por lo que podríamos concluir que el temor no fue un factor fundamental para frenar las oportunidades políticas.

## **II. Estructuras de movilización**

Es en el ámbito de las estructuras de movilización en donde podemos encontrar mayores diferencias entre los casos de estudio de nuestra investigación. Y esas diferencias tienen que ver básicamente con la existencia o falta de un organismo de coordinación permanente o con cierta continuidad. En el movimiento estudiantil español, durante los años analizados, hubo varios intentos de crear organismos o estructuras de coordinación que permitieran a los diversos grupos políticos que componían el ME generar acciones conjuntas. Sin embargo, todos esos intentos resultaron fallidos. Así, desde la disolución del SDEUM en 1969, el ME nunca contó con una organización permanente y amplia, que permitiera proyectar su lucha a lo largo del tiempo, acentuando así la discontinuidad propia que caracteriza a los movimientos estudiantiles. Esto también permitió que la competencia entre grupos políticos generara divisiones y fragmentaciones que terminaron por afectar al ME. En este sentido, algunos grupos más radicales, por muy pequeños que fueran, se atrincheraban en sus propias organizaciones (como por ejemplo, la FUDE-FRAP) y boicoteaban las propuestas de otros grupos políticos menos radicalizados. O en el caso de grupos más numerosos, el mismo PCE no mostraba interés en iniciativas que no eran lideradas por él. Ese fue el caso del intento de resurrección del SDEUM en 1976, impulsado por el PTE, que fue boicoteado por los otros grupos políticos, especialmente por el PCE, hasta que se hizo inútil mantenerlo.

Ahora bien, pese a esta falta de organismos de coordinación permanentes, podemos ver que en determinados momentos, el ME madrileño sí es capaz de organizarse en torno a una causa común para lo cual generaba los mecanismos necesarios. Así se aprecia en el conflicto de Medicina, cuando los estudiantes en huelga

crean la Coordinadora de Estudiantes de Medicina, que actúa como una suerte de motor del ME, contribuyendo a mantener la movilización y buscando la solidaridad de otros estudiantes y de otros sectores profesionales, en apoyo a sus demandas. Así también lo vemos en el conflicto contra la LAU, con la creación de la Coordinadora de las tres universidades de Madrid, que opera como una plataforma de coordinación que dirige la movilización del período 1979-1980.

En este sentido, nos preguntamos cuánto podría haber cambiado la trayectoria del ME madrileño de haber contado con un organismo unitario de coordinación permanente. Para intentar responder a esta pregunta podríamos tomar el ejemplo de las Reuniones Generales de Universidades, que se convocaban a nivel nacional en momentos de flujo del ME español. En teoría, de las RGU salían los grandes lineamientos a seguir por el movimiento estudiantil, en cuanto a las reivindicaciones y a las formas de acción. Sin embargo, estas instancias también estuvieron marcadas por la fragmentación entre los grupos políticos, siendo generalmente dominadas por el PCE. De este modo, para el ME español de los años 70 era muy difícil superar la fragmentación política que se había generado desde fines de los 60, lo que hizo prácticamente imposible constituir un organismo coordinador común, y esto, creemos, incidió en la discontinuidad de la lucha de los estudiantes. Sin embargo, aunque el ME no fue capaz de generar este tipo de estructura permanente, consideramos que eso no es del todo negativo, ya que demostró mucha flexibilidad a la hora de articular los conflictos estudiantiles, generando para cada uno de ellos, las formas de acción y de organización que mejor se adecuaban a la situación del momento. Además, pese a la competencia y rivalidad entre los grupos políticos, y a los diferentes repertorios de acción que postulaba cada uno, existía una suerte de acuerdo tácito de cooperación en los momentos de conflictividad. Cada uno desde su orilla y con su propio discurso, incluso criticándose mutuamente, ponían sus estrategias al servicio de la movilización.

En el caso chileno, el ME sí contó, a partir de 1984, con un organismo coordinador permanente que hacía las veces de motor del movimiento, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Ya hemos señalado que la FECH representaba solamente a los estudiantes de la UCH, pero este modelo de federación se reprodujo en muchas otras universidades (incluso en algunas privadas), y siendo la FECH la más antigua y prestigiosa de estas federaciones, asumió el liderazgo del ME. Esto no quiere decir que no haya habido roces ni peleas entre la FECH y otras federaciones, pero si revisamos los conflictos estudiantiles durante los años 80 y 90, incluso hasta la

actualidad, todos ellos han sido impulsados desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y de ahí han “contagiado” al resto de las federaciones, lo que ha permitido una cierta continuidad, no tanto temporal pero sí de contenido, en las luchas del movimiento estudiantil chileno. Además, al interior de las federaciones se resolvía (o al menos se intentaba resolver) la inevitable competencia entre los partidos políticos que participaban del ME. Así por ejemplo, la FECH del período 1984-1986 logró articular una alianza bastante exitosa entre comunistas y demócrata-cristianos, alianza que a nivel nacional era inviable. Por cierto que los conflictos entre partidos afectaron a la federación, basta recordar lo sucedido durante el año decisivo y el quiebre que supuso entre los dos partidos más importantes de la oposición, el PC y la DC. Sin embargo, los mismos estudiantes, teniendo en cuenta el panorama político nacional, reaccionaron generando nuevas alianzas, como la que obtuvo la victoria de la FECH a fines de 1986, compuesta por demócrata-cristianos y socialistas.

En este sentido, el ME chileno tenía una estructura de movilización más definida que el español, ya que contaba, no sólo con las federaciones de cada universidad, sino también con la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) a nivel nacional. Además, la existencia de estos organismos resolvía otro problema que aquejaba al ME español: la representatividad. Al no tener una federación, un sindicato u otro tipo de organismo de coordinación, el siempre complejo asunto de la representación de los estudiantes era tema de discusión permanente dentro del movimiento estudiantil español. Así, por ejemplo, en las asambleas muchas veces se votaba por ir a huelga o salir en manifestación, pero ¿cuán representativas eran esas asambleas? Lo mismo ocurría con las elecciones a delegado de curso, o luego, a partir del decreto de participación de 1974, con la elección de representantes estudiantiles, ¿cuántos participaban de estas elecciones? ¿a cuántos estudiantes realmente representaban los delegados? Esta discusión era permanente dentro del ME español, y muchos culpaban a estos problemas de representatividad el progresivo alejamiento de los líderes o vanguardia del movimiento con respecto a la masa estudiantil. El PCE, por ejemplo, intentaba mantener ciertas formas de representatividad que permitieran que las decisiones tomadas en asambleas fueran, al menos, socializadas entre el universo de los estudiantes, por eso apoyó las elecciones a delegados de 1974, pero los grupos más radicales tendían a actuar de motu proprio, muchas veces apartados de las bases, generando entonces más división dentro del ME.

En el caso chileno, las elecciones de las federaciones estudiantiles, con todos los problemas que podían tener, suponían un mecanismo claro de representación de los estudiantes. Antes de las elecciones, los grupos políticos hacían campaña, dando a conocer sus programas y sus reivindicaciones, y aunque hubo momentos en que la participación en dichas elecciones fue francamente baja (con lo que se ponía en cuestión la representatividad de las federaciones), en las instancias de conflicto, los estudiantes sí concurrían a votar, legitimando así a aquellos organismos que lideraban la lucha estudiantil.

Otro elemento que marca una diferencia importante entre ambos movimientos estudiantiles tiene relación con los repertorios de acción colectiva. Ahora bien, es importante señalar que la diferencia está dada no solamente por las condiciones propias de cada país sino especialmente por la diferencia temporal que existe los casos que abarca nuestra investigación. En este sentido, los repertorios de acción colectiva del ME español de comienzos de los 70 están mucho más influidos por los movimientos de fines de los 60, especialmente por el mayo francés de 1968. Así, los juicios críticos a los profesores, las asambleas, incluso los llamados saltos o comandos, son formas de acción que hunden sus raíces en los años 60. Desde mediados de los 70 en adelante, los repertorios de acción colectiva de los estudiantes españoles van a ir variando, se utilizará más la huelga y las manifestaciones callejeras, combinadas con los mecanismos heredados de los años 60.

En Chile, en la década de los 60, también se dieron formas de acción como los juicios críticos, especialmente en la época de la Reforma Universitaria (1967-1968). Pero ya en los años 80 los repertorios habían cambiado mucho, y los mecanismos más utilizado por los estudiantes chilenos eran el paro de actividades (lo que en España equivaldría a una huelga) y la toma de facultades, es decir, la ocupación física de los espacios donde se desarrollan las actividades docentes, de investigación, e incluso de administración, con el objetivo de paralizar la universidad. Este tipo de repertorios de acción colectiva siguen vigentes hasta la actualidad.

Un elemento común a ambos movimientos estudiantiles es el uso los espacios públicos, básicamente las calles, para manifestarse. En España se les llama manifestaciones, en Chile marchas, pero son básicamente lo mismo: cientos o, en el mejor de los casos, miles de estudiantes desfilan por alguna avenida importante de la ciudad, buscando dar a conocer sus reivindicaciones. Algunas de estas manifestaciones eran programadas y tenían una dirección definida (por ejemplo, el Ministerio de

Educación), mientras otras eran más espontáneas y buscaban generar algún tipo de desorden público, como cortes de tránsito. La ocupación de las calles tiene un sentido fundamental para el ME ya que le permite salir del “reducto universitario” y proyectar sus luchas y reivindicaciones a nivel general, le permite también instalarse entre los ciudadanos de a pie y hacerse parte de una ciudadanía que a veces no tenía mayor conocimiento de los problemas que enfrentaban los estudiantes. Las manifestaciones en las calles también dicen relación con la recuperación de un espacio público, que durante regímenes dictatoriales, ha quedado secuestrado por la policía, y que se usa solamente como lugar de tránsito entre espacios privados (la casa y el trabajo). En este sentido, los estudiantes – y no sólo ellos sino en general todos los movimientos sociales que se manifiestan en las calles – buscan rescatar la ciudad para los ciudadanos, y validar en aquel espacio como de uso público, superando la censura y el control policial.

Otro elemento que vemos que diferencia a ambos movimientos y que tiene que ver con las estructuras de movilización es la conformación de relaciones y redes con otros estamentos universitarios, es decir, la creación de una comunidad académica. En España, este proceso fue más complejo debido a la forma en que se ordenaban los estamentos, especialmente el de catedráticos. Sin embargo, sí hubo una creciente confluencia de acciones entre los estudiantes y los profesores no numerarios (PNN), especialmente a partir del curso 1973-1974. Es importante recordar que muchos de los PNN habían sido parte del movimiento estudiantil antes de integrarse como docentes en la Universidad española, por lo que la relación con el ME fue mucho más fluida. Además, la diferencia generacional entre estos profesores y los estudiantes era bastante menor: los PNN de los 70 habían sido estudiantes en los 60 y habían vivido la gran oleada de movilizaciones del ciclo 1967-1969, por lo que también podían aportar con su experiencia al ME.

En términos de contenido, los PNN comenzaron exigiendo mejoras en su situación laboral, contrato indefinido y alzas en los sueldos, pero rápidamente combinaron ese tipo de demandas con otras de carácter político (como amnistía, libertad de los presos políticos y fin del régimen franquista) del mismo modo que los estudiantes combinaban reivindicaciones académicas con demandas políticas.

Ahora bien, la coordinación con los catedráticos fue mucho más compleja, y de hecho, nunca se dio de manera estamental sino solamente con algunos de ellos, que apoyaban ciertas causas del ME a título personal. Como señalamos en el capítulo 12, creemos que esta dificultad se debió a que la elección de los catedráticos estaba muy

politizada, por lo que en su gran mayoría, los candidatos que ganaban las cátedras eran adeptos al régimen franquista, y por esto, su indiferencia o franca oposición al movimiento estudiantil.

Ya durante la transición a la democracia y especialmente durante el conflicto contra la LAU podemos apreciar la articulación de una comunidad universitaria, que se levanta en contra de un proyecto de ley que consideran perjudicial para la educación superior. Así, desde los rectores hasta los estudiantes critican este proyecto, redactado de espaldas a la comunidad universitaria, y que parece privilegiar a las instituciones privadas en lugar de a las públicas.

En Chile, en cambio, a partir de la reconstrucción de la FECH en 1984, se produjo una creciente coordinación entre estudiantes, académicos y funcionarios en la lucha contra el régimen de Pinochet. Así, algunos profesores permitían que sus clases se convirtieran en asambleas o debates políticos, y defendían a los estudiantes contra la represión policial a la que eran sometidos cuando se producía algún conflicto, además de participar ellos mismos de la movilización social que surgió a partir de 1983. Incluso, la misma existencia de la FECH, ilegal según la Ley General de Universidades, fue reconocida por académicos y decanos, ya que veían en la federación a un interlocutor legítimo de los estudiantes. La comunidad universitaria de la UCH llegó a su punto de máxima coordinación durante el conflicto contra el Rector delegado Federici en 1987. En este caso, si bien cada estamento tenía demandas específicas, existía un conjunto de reivindicaciones comunes que decían relación con la defensa del sistema público de educación superior y con el fin de la intervención en la Universidad. Y quizá lo más interesante en la gestación de esta comunidad universitaria es que incluso académicos y funcionarios adeptos al régimen de Pinochet se cuadraron con los otros estamentos para la defensa de la Universidad de Chile. Ya durante la transición, en el conflicto de 1997, también hubo bastante coordinación entre la comunidad universitaria para enfrentar los problemas de financiamiento y de gestión que aquejaban a la UCH.

### **III. Marcos de significado o procesos enmarcadores**

Ya hemos revisado cuáles eran las oportunidades políticas de los movimientos estudiantiles estudiados en esta investigación, así como las diferencias y similitudes existentes entre sus estructuras de movilización. Ahora corresponde analizar y comparar

aquel conjunto de visiones, valores y conceptos que motivaron a los estudiantes, tanto españoles como chilenos, a movilizarse, incluso sabiendo que ponían en riesgo su vida. Estos son los procesos enmarcadores o marcos de significado, que, como hemos señalado al comienzo de este capítulo, otorgan sentido a los movimientos sociales.

Lo primero que cabe decir al respecto es que estamos comparando dos movimientos sociales que se dan no sólo en distintos espacios geográficos sino también en distinto tiempo. Mientras nuestra mirada está puesta en el ME español de los años 70, para el caso chileno estudiamos al ME desde mediados de los 80 y hasta mediados de los 90. Esta diferencia espacio-temporal tiene consecuencias fundamentales a la hora de hablar de los marcos de significado. Por ejemplo, para el ME español Europa es su referente más cercano, así como los acontecimientos mundiales que ocurren entre los años 60 y 70. De este modo, los estudiantes españoles tienen en su horizonte cultural a los movimientos de Mayo de 1968 y a la Guerra de Vietnam, por ejemplo. Por cierto, también mencionan a América Latina (la figura del Che Guevara es la que más llama la atención) e incluso a Chile, manifestando, primero su admiración por el presidente Allende y luego su solidaridad con el pueblo chileno tras el golpe de Estado de 1973. Sin embargo, el lenguaje en el que se expresan los estudiantes españoles de la década de los 70 es mucho más dogmático y teórico que el que usan los estudiantes chilenos de la década de los 80. Como señalamos en el capítulo 10, para muchos estudiantes españoles de comienzos de los 70, la meta era la revolución socialista, aunque ya a partir de 1975 aproximadamente, este lenguaje revolucionario da paso a un lenguaje más democrático entre los estudiantes.

Creemos que esto tiene relación con el proceso de radicalización que vivió el ME español a partir de 1969, y con el surgimiento de numerosos grupos maoístas y trotskistas, que aportaron al discurso estudiantil un lenguaje más teórico y radical, que el que hasta ese momento venían utilizando los estudiantes. Sin embargo, cuando hacia 1974-1975 comienza la discusión sobre el tipo de sociedad que se quería para España una vez terminado el régimen, el lenguaje democrático se hace más fuerte en el discurso estudiantil, y aunque la idea de la revolución no es completamente abandonada, se deja en un segundo plano, en el entendido que la primera tarea de la sociedad española es conquistar la democracia.

En el caso chileno, no apreciamos la misma transformación del lenguaje, posiblemente por la diferencia cronológica que existe entre un caso de estudio y otro. En este sentido, el lenguaje de los estudiantes chilenos de la década de los 80 es menos

revolucionario y más democrático, ni siquiera los estudiantes del PC chileno planteaban la revolución socialista como meta. La democracia era el principal objetivo, aunque la diferencia entre los grupos políticos estaba en cómo conseguirla. Además del asunto del lenguaje, el ME chileno tenía como referente permanente a América Latina. Con todo, si observamos a ambos movimientos estudiantiles hacia el final de cada régimen, podremos ver que en ambos casos el lenguaje democrático ha triunfado, ayudando a socializar ciertas ideas y conceptos que los mismos regímenes se habían encargado de silenciar.

En este sentido, bajo regímenes dictatoriales, las universidades funcionaban como pequeñas zonas de libertad, ya que la actividad intelectual que se ejercía en ellas permitía una cierta apertura hacia temas o debates que estaban ausentes en otros ámbitos de la sociedad. De esta manera, y pese a los intentos de ambos regímenes por encuadrar a la juventud en una ideología (caso de España) o por despolitizarla completamente (caso de Chile), los estudiantes tenían acceso a prensa clandestina, a libros prohibidos, a debates con profesores que iban ampliando su conocimiento y su pensamiento político. Por eso, creemos, la universidad funcionó también como un espacio de socialización de ideas democráticas, y fue inevitable entonces que los miles de jóvenes que pasaron por sus aulas durante los años estudiados las aprehendieran o, al menos, tuvieran conocimiento de ellas. Es por eso que postulamos que en ambos casos, las universidades y los movimientos estudiantiles funcionaron como “escuelas políticas” y socializaron un lenguaje democrático que sería fundamental durante los procesos de transición.

Ahora bien, ¿qué motivaba a los estudiantes a movilizarse? Como lo hemos señalado a lo largo de diversos capítulos, ambos ME postulaban un conjunto de reivindicaciones de tipo académico y de tipo político. Aunque muchas veces las oleadas de movilización se iniciaban por motivos académicos (huelga en Medicina en 1971-1972, contra la Selectividad en 1974; contra el decreto de permanencia en 1975; contra Federici en 1987...), rápidamente sobrepasaban este marco y se proyectaban en una lucha general contra el régimen. Creemos que esta es una característica fundamental de ambos movimientos, que permitió que, independientemente de los problemas específicos de cada país y de cada caso analizado, los estudiantes salieran de las aulas y se incorporaran a una lucha mayor, que tenía por objetivo derrotar o, al menos transformar al régimen y transitar hacia una sociedad democrática.

En este contexto, y pese a la discontinuidad propia del ME, si hay un hilo conductor en el período estudiado es justamente esta capacidad que demuestran los



estudiantes de trascender lo estrictamente académico y proyectarse en lo político, entendiendo que no basta con transformar la Universidad sino que también es necesario transformar la sociedad. Y por esta misma razón, muchos dirigentes estudiantiles, tanto en España como en Chile, una vez terminados sus estudios, optaron por hacer carrera política. El ME les había dado la experiencia y el bagaje necesario para ello.

Con todo, esta articulación entre el escenario universitario y el escenario nacional muestra bastantes diferencias entre un caso y otro. Para el caso español, ya hemos señalado que la coordinación del ME con otros movimientos sociales fue más compleja y se dio solamente en términos puntuales. Para el caso chileno, esta articulación se produjo de manera más expedita gracias a la movilización social del período 1983-1986. Es importante señalar que en España nunca se produjo un ciclo de movilizaciones tan largo y potente como la época de las protestas en Chile, por lo que el ME español muchas veces tenía que iniciar su movilización en solitario, sin encontrar eco en otros sectores de la sociedad. En Chile en cambio, la movilización social de 1983-1986 logró articular un movimiento de oposición a la dictadura bastante poderoso, que si bien no logró derribar a Pinochet, sí mantuvo en jaque al régimen durante más de tres años, al no poder éste acabar con la crisis política y social. Y a este movimiento de oposición se integran los estudiantes chilenos, muchas veces como protagonistas o impulsores, y otras veces como acompañantes. En este sentido, los marcos de significado del ME chileno eran compartidos por un conjunto amplio de sectores sociales, que incluían a los sindicatos, pero también a las clases bajas y medias, a sectores profesionales, etc. Basta recordar la gran variedad de organismos sociales y políticos que compusieron la Asamblea de la Civilidad. En el caso del ME español, si bien sus vínculos eran fuertes con algunos partidos políticos (PCE, PTE y ORT, los más importantes), su articulación con otros movimientos sociales fue más precaria.

Un elemento común a ambos movimientos estudiantiles es la defensa de la educación superior como un servicio público. Los estudiantes españoles hablaban de una “Universidad para el pueblo”, y los estudiantes chilenos reclamaban un sistema de educación público y de calidad. Básicamente se refieren a lo mismo, a una educación universitaria que tuviera en cuenta las necesidades del país, que permitiera el acceso igualitario a todas las clases sociales (por eso ambos movimientos se oponen a las alzas en las tasas de matrícula, por ejemplo, por considerar que era un paso atrás en el acceso igualitario), y que estuviera, si no completamente financiada, al menos subvencionada de forma importante por el Estado. Por eso la negativa del ME español ante la Ley

General de Educación (1971), especialmente en cuanto a la imposición de la selectividad, y luego al proyecto de Ley de Autonomía Universitaria (1980), que aumentaba las tasas de matrícula y privilegiaba a las instituciones privadas. Y por eso también la oposición de los estudiantes chilenos a la Ley General de Universidades (1981), que recortaba drásticamente los aportes estatales a las universidades públicas, buscando así el autofinanciamiento. Independientemente de los conflictos específicos de cada etapa de los movimientos estudiantiles analizados, podemos ver que hay un rechazo explícito a la aplicación de criterios que ellos consideraban tecnocráticos o de mercado en la educación superior, y en ese sentido, este tipo de reivindicaciones rápidamente conectaban con demandas políticas respecto de la sociedad que se quería construir, una vez acabada la dictadura.

Por eso, la defensa de la universidad como servicio público fue una bandera de lucha tan importante en los conflictos de la etapa transicional que hemos analizado (1979-1980 para España; 1997 para Chile). Una vez muerto Franco y vencido Pinochet, era necesario sentar las bases de la nueva sociedad democrática que surgía después de años de dictadura. Y en este contexto, los movimientos estudiantiles fueron voces de alerta respecto, no solamente de asuntos estrictamente académicos, sino también generales. Así, cobra sentido el que el ME español de finales de los 70 reclamara contra una institucionalidad y una normativa heredada del franquismo (la LGE) y se opusiera a las transformaciones que postulaba el gobierno de UCD, porque profundizaban justamente aquellos elementos tecnocráticos a los que los estudiantes venían oponiéndose desde hacía años. En el conflicto de 1979-1980, los estudiantes también aspiraban a participar más activamente en la gestión de la universidad, y finalmente lo consiguieron, cuando en 1981 pudieron votar para elegir al Rector, y posteriormente, en 1983, cuando la Ley de Reforma Universitaria consagra la educación superior como servicio público y la autonomía universitaria como principio rector de ésta.

En Chile en cambio, aunque se mantuvo con mucha fuerza la defensa de la educación superior como servicio público, tal como queda demostrado en el conflicto de 1997, el ME no fue tan exitoso como el español, ya que no consiguió transformar la institucionalidad heredada del régimen de Pinochet. Y esto nos lleva a una reflexión sobre el tipo de transición que se vivió en ambos países, lo cual, consideramos, es fundamental para entender el papel de los movimientos sociales en este proceso. En el marco teórico de esta investigación, hacemos una comparación entre las transiciones española y chilena, y allí señalamos las principales diferencias entre ambos procesos. La

transición española, si bien se gestó entre las élites políticas del régimen y de la oposición democrática, sí contó con una participación importante de los movimientos sociales (especialmente del movimiento obrero), mientras que la transición chilena estuvo más bien caracterizada por la desmovilización de la sociedad civil, que había llevado a cabo una movilización social a nivel nacional desde 1983 que, como hemos señalado, había puesto en jaque al régimen de Pinochet. Sin embargo, cuando la oposición al régimen – que había fomentado y liderado la época de las protestas – decide participar en el plebiscito de 1988 para derrotar al régimen en su propio juego, pide moderación a los movimientos sociales. En este sentido, la transición chilena sí podría ser considerada, según la terminología de Juan Linz, una transición por transacción, toda vez que se gesta entre cúpulas políticas dejando de lado a la sociedad civil. Creemos, como señalamos en el Marco Teórico, que la transición española se aleja del modelo transaccional producto de la participación de los movimientos sociales en ella.

Ahora bien, independientemente del modelo de transición que se haya producido en cada país, hay un elemento fundamental que establece una diferencia entre España y Chile y que tiene consecuencias importantes para el movimiento estudiantil: la institucionalidad del nuevo sistema político. En España, una vez muerto Franco, se fueron dando los pasos necesarios para generar un sistema político democrático, con reglas acordadas por todos los actores políticos. Así, entre 1976 y 1977 se disuelven las Cortes franquistas, se legalizan los partidos políticos, se convoca a elecciones para una Asamblea Constituyente, y en 1978 se aprueba una nueva Constitución, en cuya discusión y redacción han participado todos los partidos que obtienen representación parlamentaria. De esta manera, una vez desaparecido el dictador, se crea una nueva institucionalidad para la nueva etapa que vivía España, lo cual resolvió varias de las aspiraciones o demandas del movimiento estudiantil, especialmente aquellas que tenían relación con transformaciones al sistema político. Con todo, el ME de la transición española no cedió en su lucha por transformar la universidad franquista en una universidad democrática, lo cual fue logrando, paso a paso, a través de distintas reformas.

En Chile, por el contrario, nada de esto sucedió. Pese a que en 1988 el régimen de Pinochet fue derrotado en el plebiscito y en 1989 la oposición ganó las elecciones, no hubo un cambio de institucionalidad que amparara la nueva etapa que el país comenzó en 1990. Es decir, los gobiernos democráticos de la Concertación tuvieron que operar

bajo la Constitución de 1980, redactada por un grupo de adeptos al régimen y pensando en que éste continuaría hasta 1996. Además, antes de dejar el poder, Pinochet se preocupó de promulgar una serie de leyes de amarre, que dificultaban sobremanera la modificación de la Constitución de 1980 y dejaban realmente “atado y bien atado” el legado del régimen.

Esta es la principal razón por la cual el ME chileno de los años 90 se rebela contra la herencia de la dictadura, que permanece casi inalterada después de varios años de transición a la democracia. En este sentido, el conflicto de 1997 marca un hito, no sólo para el ME sino para el proceso de transición, ya que fueron los estudiantes los primeros en salir a las calles a denunciar la pervivencia, no solo de la institucionalidad heredada, sino también de un cierto modelo de sociedad (compuesta por consumidores en lugar de ciudadanos), que se había gestado a partir de las reformas económicas y del neoliberalismo impuesto por el régimen de Pinochet. Como ya hemos dicho, no tuvieron demasiado éxito en esta lucha y hasta la actualidad, el ME chileno sigue combatiendo la noción de la educación como un bien de consumo, que se originó con la Ley de Reforma Universitaria en 1981 y que, con algunas transformaciones, pervive hasta hoy.

El objetivo de nuestra investigación era analizar la recuperación del espacio público durante el tardofranquismo y en los últimos años de la dictadura de Pinochet, a través del estudio de un movimiento social en particular, el movimiento estudiantil, para posteriormente establecer una relación entre esa recuperación y la conformación de la sociedad civil durante la transición a la democracia. Y en este sentido, creemos que el estudio de los movimientos estudiantiles es un eje fundamental, ya que son elementos activos tanto en la lucha contra los respectivos regímenes como durante la transición a la democracia. Hemos enumerado una serie de diferencias y similitudes que podemos encontrar entre el ME español y el ME chileno, muchas de las cuales se deben a la diferencia geográfico-temporal de nuestros casos de estudio. Además, están las particularidades propias de cada país, de cada régimen y de cada transición.

Sin embargo, creemos que ambos movimientos comparten un rasgo esencial, que los convierte en un pilar fundamental de la sociedad civil. Ambos movimientos se consideran a sí mismos como agentes de cambio político y social, y mantienen su capacidad crítica durante todo el período estudiado. Independientemente de que las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los marcos de significado

vayan variando con el paso del tiempo, los ME de España y Chile contribuyeron sobremanera a la reconstrucción de una sociedad civil aplastada bajo el peso de la dictadura. En primer lugar, funcionaron como “escuelas políticas” para la juventud universitaria y socializaron un lenguaje democrático, en momentos en que las dictaduras buscaban, o bien adoctrinar o bien despolitizar a los jóvenes. Además, proporcionaron a muchos de sus miembros, una experiencia política, a través de asambleas, debates, elecciones, etc., que de otra forma es hubiera sido imposible adquirir. Y finalmente, generaron y mantuvieron una actitud crítica, de voz de alerta o punta de lanza, tanto en la lucha contra la dictadura como durante la transición a la democracia. Una vez finalizados ambos regímenes, los ME apuntaron sus críticas al sistema político y económico surgido en transición.

Lógicamente, la movilización estudiantil sufrió un cambio importante en la transición a la democracia, los momentos de flujo se acortaron, mientras que los de reflujo tendieron a ser más largos. Esto provocó que varios autores criticaran al ME de la transición, comparándolo negativamente con el que se desarrolló bajo dictadura, por considerar que había perdido su fuerza y su capacidad de movilización. Creemos que esto es un error. En un sistema democrático, los movimientos sociales – y en esto el estudiantil no es una excepción – tienen mecanismos de diálogo y negociación que no existen bajo sistemas dictatoriales, por lo que no todos los conflictos se resuelven a través de la movilización. Por lo demás, tanto los estudiantes españoles como los chilenos han demostrado, en los últimos años, que están dispuestos a ocupar las calles para exigir nuevas reivindicaciones. Así lo hicieron los estudiantes españoles en el curso 1986-1987, cuando se movilizaron por una educación pública de calidad, y en el curso 1993-1994, en contra del alza en las tasas académicas. Posteriormente, en el curso 2001-2002 se manifestarán contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en 2003 participarán de las masivas manifestaciones que se produjeron en diversas ciudades en contra de la Guerra de Irak, a partir del 2007, lo harán esporádicamente contra proyecto de Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia), y en 2011-2012 se han integrado a la movilización de los indignados y a las masivas protestas en contra de los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, manteniendo esa característica propia de los ME, de combinar reivindicaciones académicas con otras políticas generales.

Por su parte, los estudiantes chilenos continuaron con manifestaciones esporádicas en 1998 y 1999, intentando reformar el sistema de financiamiento, sin éxito. Luego de un período largo de reflujo, las movilizaciones resurgieron en 2006,

encabezadas por los escolares, que salieron a las calles a denunciar la mala calidad de la educación pública del país. Finalmente, en 2011 comenzó un amplio y masivo ciclo de movilización estudiantil, que continúa hasta la actualidad (octubre de 2012), y que cristaliza todo el aprendizaje político realizado por el ME, en su historia reciente. Además de manifestaciones callejeras y repertorios de acción colectiva tradicionales, como paros y tomas, los estudiantes han ideado una serie de repertorios originales (que incluyen bailes masivos, maratones por la educación y un sinnúmero de actividades culturales). Además, han buscado aliarse con otros movimientos sociales, como por ejemplo, agrupaciones de académicos, colegios profesionales (particularmente el Colegio de Profesores), movimientos regionales y, por cierto, el movimiento obrero, liderando de esta manera un ciclo de movilización social amplio, que no sólo debate temas estrictamente académicos sino que se plantea como una crítica desde la sociedad civil hacia el sistema político, que desde 1990 ha operado bajo las reglas impuestas por la dictadura, y que hoy vive una crisis de legitimidad que aún no tiene solución.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **Archivos España**

Archivo General de la Administración (AGA)

Archivo Central del Ministerio de Educación (ACME)

Archivo Central de la Universidad Complutense de Madrid (ACUCM)

Archivo Central de la Universidad Autónoma de Madrid (ACUAM)

Archivo del Partido Comunista de España (Archivo PCE)

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (F. Pablo Iglesias)

Archivo de la Fundación 1º de Mayo (F. 1º de Mayo)

Archivo digital del PTE - Joven Guardia Roja: <http://www.ptejgre.com/archivo/archivo.htm> (Archivo PTE)

Biblioteca Nacional de España (BNE)

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: <http://prensahistorica.mcu.es/> (BVPH)

Boletín Oficial del Estado: <http://www.boe.es/> (BOE)

### **Archivos Chile**

Archivo Central de la Administración (ACA)

Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile (AC Bello)

Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Archivo FECH)

Archivo de la Vicaría de la Solidaridad: <http://www.archivovicaria.cl/inicio.htm>  
(Archivo Vicaría de la Solidaridad)

Biblioteca Nacional de Chile (BNC)

Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

Fondo Documental Eugenio Ruiz-Tagle de Flaco (F. Documental Eugenio Ruiz-Tagle)

## Bibliografía secundaria

ÁLVAREZ COBELAS, José. *Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970)*. Siglo XXI, Madrid, 2004.

AGUILAR, Paloma. *Memoria y olvido de la Guerra civil española*. Alianza, 1996.

ARÓSTEGUI, Julio. *La Historia vivida. Sobre la Historia del Presente*. Alianza Editorial, Madrid, 2004.

ARGULLOL, Rafael. “Reflexión” sobre los años radicales (movimiento estudiantil 1968-1971)”. *Revista Materiales. Crítica de la cultura*, nº 2, marzo-abril, Barcelona, 1977.

BERNASCONI, Andrés y ROJAS, Fernando. *Informe sobre la Educación Superior en Chile: 1980-2003*, UNESCO, Agosto de 2003. [http://www.cedus.cl/files/infnac\\_cl.pdf](http://www.cedus.cl/files/infnac_cl.pdf).

BRODSKY, Ricardo. *Conversaciones con la FECH*, CESOC, Santiago de Chile, 1988.

BRUNNER, José Joaquín. *Informe sobre desarrollo y el estado actual del sistema universitario en Chile*. Documento de Trabajo FLACSO, Núm. 227, Diciembre de 1984.

CAMARERO GONZÁLEZ, Arturo. “Características generales, objetivos y adversarios del Movimiento Estudiantil madrileño bajo el franquismo”. *Revista Internacional de Sociología*. Núm. 40, Madrid, 1981.

CARRILLO-LINARES, Alberto. *Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977)*. Fundación Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2008.

CASANOVA, José. “Las enseñanzas de la transición democrática en España”. *Revista Ayer*, nº 15, Madrid, 1994.

CAVALLO, Ascanio, SALAZAR, Manuel y SEPÚLVEDA, Óscar. *La Historia Oculta del Régimen Militar*. Mondadori, Santiago, 1997.

CLARET MIRANDA, Jaume. “Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo”. *Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea*. Núm. 6 (2006) <http://hispanianova.rediris.es>.

COLOMER I CALSINA, Joseph M. *Els estudiants de Barcelona sota el franquisme*. Curial, Barcelona, 1978.

CORREA, Sofía, JOCELYN-HOLT, Alfredo, ROLLE, Claudio et al. *Historia del siglo XX chileno*. Sudamericana, Santiago, 2000.

CHARTIER, Roger. *Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII*. Gedisa Editorial, Barcelona, 1995.

EQUIPO LÍMITE. *La agonía de la Universidad Franquista*. Laia, Barcelona, 1976.



ESPINOZA BECERRA, Carolina. *De las aulas a la calle : la lucha por el fin de la intervención en la Universidad de Chile: crisis universitaria, proyección nacional y politización del conflicto en 1987*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile. Inédita, Santiago, 2005.

FERNANDEZ BUEY, Francisco. “Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo”. Revista *Materiales*, extraordinaria nº 1, Barcelona, 1977.

FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina. *La resistencia interior en la España de Franco*. Itsmo, Madrid, 1981.

FORMENTOR, Davira. “Universidad: crónica de siete años de lucha”. Revista *Horizonte Español*. Ruedo Ibérico, Barcelona, 1972.

GARCÉS, Mario. “Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas”. Revista *Política*, nº 43, Universidad de Chile, 2004.

GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio: *Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.

GARCÍA, Diego, ISLA, José y TORO, Pablo. *Los muchachos de antes. Historias de la FECH, 1973-1988*. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2006.

GARRETÓN, Manuel Antonio. “Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico”. Revista *Excerpta* nº 2, abril 1996. [http://www.archivochile.com/Mov\\_sociales/Doc\\_gen/MSdocgen0010.pdf](http://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf)

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España Contemporánea. 1865-2008*. Alianza Editorial, Madrid, 2009.

GUILLAUDAT, Patrick y MOUTERDE, Pierre. *Los movimientos sociales en Chile 1973-1993*. LOM, Santiago, 1998.

HABERMAS, Jurgen. *Historia y crítica de la opinión pública*. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

HERNÁNDEZ Sandoica, Elena, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel y BALDÓ, Marc. *Estudiantes contra Franco (1939-1975) Oposición política y movilización juvenil*. La esfera de los libros, Madrid 2007.

HUNEEUS, Carlos. *El Régimen de Pinochet*. Editorial Sudamericana, Santiago, 2000.

JULIÁ, Santos. “En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados”, en *La Transición, treinta años después*. Carme Molinero (editora), Península, Barcelona, 2006.

LEÓN, Sergio. “Notas sobre el movimiento estudiantil en España”. Revista *Horizonte Español*. Ruedo Ibérico, Barcelona, 1972.

LINZ, Juan José. “Transiciones a la democracia”. *Revista de Investigaciones Sociológicas* nº 51, año 90.

MARAVALL, José María. *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*. Alfaguara, Madrid, 1978.

MARAVALL, José María. *La política de la transición, 1975-1980*. Taurus, España, 1982.

MARTÍNEZ, Jorge. “Las reformas en el gobierno de las universidades públicas españolas. Autonomía y rendición de cuentas”. *La Cuestión Universitaria*, Boletín electrónico de la cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, Universidad Politécnica de Madrid, [http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/articulo.php?id\\_articulo=22](http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/articulo.php?id_articulo=22).

MCADAM, Doug, MCCARTHY, John, ZALD, Mayer. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Istmo, Madrid, 1999.

MILLER, David (director), *Enciclopedia del pensamiento político*. Alianza, 1987.

MOLINERO, Carme (editora). *La Transición, treinta años después*. Península, Barcelona, 2006.

MOLINERO, Carme y YSAS, Pére. *Anatomía del Franquismo*. Ed. Crítica, Barcelona, 2008.

MORAGA VALLE, Fabio. “Crisis y recomposición del movimiento estudiantil chileno (1990-2000)” en *Movimientos Estudiantiles en la historia de América Latina*, vol. III. Renate Marsiske (coordinadora), UNAM, México, 2006.

MUÑOZ TAMAYO, Víctor. *ACU. Rescatando el asombro*. Libros La Calabaza del Diablo, Santiago, 2006.

NICOLÁS, Encarna. *La libertad encadenada*. Alianza, Madrid, 2005.

NICOLÁS, Encarna y ALTED, Alicia. *Disidencias en el franquismo (1939-1975)*. Diego Martín Editor, Murcia, 1999.

O'DONNELL, Guillermo, SCHMITTER, Philippe y WHITEHEAD, Laurence. *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. IV. Ediciones Paidós, España, 1988.

OTANO, Rafael. *Nueva crónica de la transición*. LOM, Santiago, 2006.

OTERO CARVAJAL, Enrique. *La destrucción de la Ciencia en España: la depuración de la Universidad franquista*. Editorial Complutense, Madrid, 2006. P. 82.

PALAZUELOS, Enrique. *Movimiento estudiantil y democratización de la Universidad*. Manifiesto Editorial, Madrid, 1978, p. 71.

PÉREZ LEDESMA, Manuel. “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición”, en *La Transición, treinta años después*. Carme Molinero (editora), Península, Barcelona, 2006.

PÉREZ, Alejandro. “La reconstrucción fallida: el movimiento estudiantil de 1971 a 1976”. Revista *Materiales. Crítica de la cultura*, nº 2, marzo-abril, Barcelona, 1977.

PIZARRO CRISTI, Jorge. *La Movilización Social en la Lucha Democrática: El Caso de La Asamblea de la Civilidad en el Año Decisivo*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile. Inédita, Santiago, 2003.

POWELL, Charles. *España en democracia, 1975-2000*. Plaza y Janés, España, 2001.

REDERO, Manuel. *Transición a la democracia y poder político en la España postfranquista (1975-1978)*. Librería Cervantes – Salamanca, 1993.

RIQUELME SEGOVIA, Alfredo. *Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia*. Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago, 2009.

RODRÍGUEZ TEJADA, Sergio. *Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1939-1975)*. Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2009.

ROCO FOSSA, Rodrigo. “La FECH de fines de los 90: relatos de una Historia Presente”. *Anales de la Universidad de Chile*, Sexta serie, núm 17, Santiago, 2005.

RUIZ CARNICER, Miguel Ángel. *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1933-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*. Siglo XXI, Madrid, 1996.

SARTORIUS, Nicolás y SABIO, Alberto. *El final de la dictadura*. Temas de Hoy, Madrid, 2007.

SOTO, Álvaro. *Transición y cambio en España, 1975-1996*. Alianza, Madrid, 2006.

TARROW, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza, Madrid, 2004.

TUSELL, Javier. “La transición a la democracia en España como fenómeno de Historia política”. Revista *Ayer* nº 15, 1994.

TUSELL, Javier. *Historia de España en el siglo XX*, Vol. III. Taurus, España, 2007.

VALDIVIA, Verónica; ÁLVAREZ, Rolando, PINTO, Julio: *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y Derechas en el Chile de Pinochet. 1973-1981*. Vol I. LOM Ediciones, Santiago, 2006.

VVAA, *La Democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. PNUD, Colombia, 2004.

VV.AA. *La Universidad Española bajo el régimen de Franco*. Actas del Congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991.

VV.AA: *Nunca más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*. LOM ediciones, Santiago, 1999.

VALDELVIRA, Gregorio. *La oposición estudiantil al franquismo*. Editorial Síntesis, Madrid, 2006.

VAQUERO, Carlos. “El movimiento estudiantil universitario. De la Ley de Autonomía Universitaria (1979) a la Ley Orgánica de Universidades (2001). Revista *Mientras Tanto*. Nº 91-92, Barcelona, 2004.

YSÀS, Pere. “La crisis de la dictadura franquista” en *La Transición, treinta años después*. Carme Molinero (editora). Península, Barcelona, 2006.

YSÀS, Pere. *Disidencia y subversión*. Crítica, Barcelona, 2004.